

SECUNDINO SERRANO

MAQUIS

HISTORIA DE LA GUERRILLA ANTRIFRANQUISTA



Lectulandia

El 21 de febrero de 1946 el maquis Cristino García Granda era fusilado en la cárcel de Carabanchel. Había combatido en la Guerra Civil contra los militares sublevados, en la Resistencia francesa contra los nazis y en el Madrid de la posguerra contra el franquismo. Para la justicia española se trataba de un vulgar delincuente. En Francia fue considerado un héroe y se le dedicó una calle en Saint-Denis.

La trayectoria de García Granda simboliza —con sus luces, sus sombras y sus contradictorias interpretaciones—, la de todo un movimiento, el maquis, tan importante como «desconocido». A pesar de que constituyó «la oposición más seria al régimen de Franco», como ha escrito el prestigioso hispanista Paul Preston, en los estamentos universitarios españoles aún no se ha abordado su estudio.

Durante el franquismo, el Estado tejió una red de silencios en torno a la guerrilla. Ante la imposibilidad de hablar libremente de «los años del maquis», los habitantes de pueblos y aldeas aprendieron las historias de los hombres del monte para legarlas a sus descendientes, construyendo los espacios de una memoria colectiva y clandestina en la que la realidad no tardó en fundirse con la leyenda.

Apoyándose en una documentación exhaustiva, Secundino Serrano, ha roto definitivamente ese velo de silencio —o ignorancia— con esta obra, estremecedora y veraz, en la que analiza un capítulo crucial de la historia reciente de España, al tiempo que traza el vigoroso retrato de un puñado de hombres y mujeres cuyo motor fue la desesperada defensa de la libertad.

Lectulandia

Secundino Serrano

Maquis

Historia de la guerrilla antifranquista

ePub r1.0

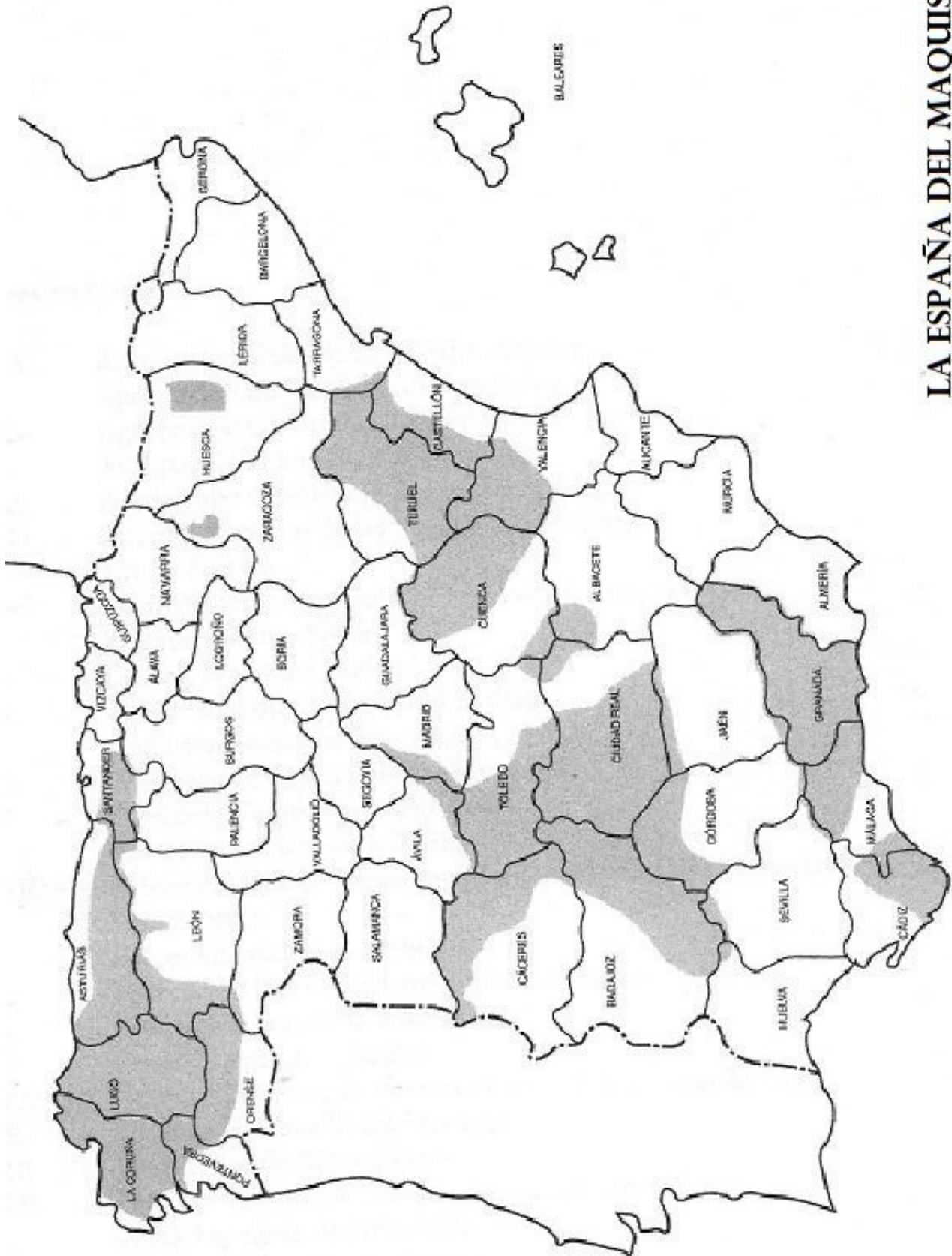
ugesan64 06.12.13

Título original: *Maquis*
Secundino Serrano, 2001
Retoque de portada: ugesan64

Editor digital: ugesan64
ePub base r1.0

más libros en lectulandia.com

LA ESPAÑA DEL MAQUIS



Abreviaturas

AGAA	Agrupación Guerrillera del Alto Aragón
AGE	Agrupación de Guerrilleros Españoles
AGFG	Agrupación Guerrillera Fermín Galán
AGL	Agrupación Guerrillera de Levante
AGLA	Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón
ANFD	Alianza Nacional de las Fuerzas Democráticas
AS	Armée Secrète
CEFM	Confederación Española de Fuerzas Monárquicas
BP-S	Brigada Político-Social
CNS	Central Nacional Sindical
CNT	Confederación Nacional del Trabajo
CSA	Comisión Socialista Asturiana
CTE	Compagnies de Travailleurs Étranger
DGS	Dirección General de Seguridad
FAI	Federación Anarquista Ibérica
FET-JONS	Falange Española Tradicionalista-Juntas Ofensivas Nacional-Sindicalistas
FFI	Forces Françaises de l'Intérieur
FIJL	Federación Ibérica de Juventudes Libertarias
FSA	Federación Socialista Asturiana
FTP	Franc-Tieurs et Partisans
GFSEGC	Grupo de Fuerzas del Servicio Especial de la Guardia Civil
GTE	Groups de Travailleurs Etrangers
GMR	Garde Mobile Républicaine
JARE	Junta de Asistencia a los Republicanos Españoles
JEL	Junta Española de Liberación
JSU	Juventudes Socialistas Unificadas
JSUN	Junta Suprema de Unión Nacional
MAOC	Milicias Antifascistas de Obreros y Campesinos
MLE	Movimiento Libertario Español
MOI	Main d'Oeuvre Inmigrée
MUR	Movimientos Unidos de la Resistencia
OS	Organisation Spéciale

OSS	Office of Strategic Services
OWI	Office War Information
PCE	Partido Comunista de España
PCF	Parti Communiste Français
PNV	Partido Nacionalista Vasco
POUM	Partido Obrero de Unificación Marxista
PSOE	Partido Socialista Obrero Español
PSUC	Partit Socialista Unificat de Catalunya
SERE	Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles
SIEP	Servicio de Información Especial Periférico
SIGG	Servicio de Información de la Guardia Civil
SIR	Servicio de Información REpublicano
SOMA	Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias
STO	Service de Travail Obligatoire
UGT	Unión General de Trabajadores
UNE	Unión Nacional Española

La memoria clandestina

Ignorad a los que sostienen que el historiador está obligado por su profesión a convertirse en un eunuco moral para el que la libertad es tan indiferente como la tiranía y es incapaz de emitir juicios cualitativos.

LAWRENCE STONE

Cristino García Granda es un héroe en Francia y un bandolero en España. En Madrid fue fusilado y en Saint-Denis le dedicaron una calle. Lo paradójico es que la doble condición oficial, héroe y bandido, tiene su genealogía en el mismo episodio: la batalla contra el fascismo durante los turbulentos años treinta y cuarenta. Ejecutado el 21 de febrero de 1946, García Granda había combatido en la guerra civil española contra los militares sublevados, en la Resistencia francesa contra los nazis y en el Madrid de la posguerra contra el franquismo. «Aún es muy largo el camino que tenemos que recorrer hasta ver a nuestra patria libre de fascistas... Cuando se ve cómo tiemblan ante lo que les espera tenemos que dar mucho más, la vida y mil vidas que tuviéramos pues todo hay que darlo por bien empleado por la libertad y el triunfo del pueblo y la democracia», escribió antes de entrar en capilla. El guerrillero asturiano, que había dedicado toda una vida a luchar por la causa de la libertad, fue tratado por la justicia franquista como un vulgar delincuente, y concluyó su aventura ideológica y vital frente a un pelotón de fusilamiento en la prisión de Carabanchel.

La trayectoria de García Granda escenifica, más allá de las dimensiones simbólicas, la complejidad de abordar con rigor y desapasionadamente la historia de los guerrilleros antifranquistas. La dificultad de fijar el umbral entre la violencia revolucionaria y la brutalidad terrorista, de separar los motivos directamente políticos y las cuestiones económicas, convierten a la guerrilla en un paradigma de la «lucha borrosa». El maquis español no constituyó una singularidad, y la propia denominación está transitada por perversiones y desacuerdos semánticos: huidos, guerrilleros, maquis, bandoleros, forajidos, etcétera. Conforme a su ideología, los autores que se acercaban al tema «contaminaban» los conceptos. Pero más significativo que las ambigüedades conceptuales o la falta de precisión terminológica

es que nos encontramos ante unos hechos que durante largo tiempo fueron silenciados o tergiversados, tanto por quienes impulsaron la resistencia armada como por aquellos que la combatieron. Una historia que continúa proscrita en la historiografía académica sobre la dictadura franquista y que, por lo tanto, permanece como un recuerdo clandestino en el acervo oficial de los españoles. Alinearse en el bando de los derrotados constituye siempre un desacierto político y también un error de cara a la memoria de esa lucha. Sabido es que la historia la escriben los vencedores, y que pasar de héroes a bandidos depende en muchos casos de la longitud de tiro de los cañones.

Forma parte de la lógica política que el régimen franquista tejiera una red de silencios en torno a la guerrilla y estableciera un programa minucioso para hacerla invisible. Pese a que el mismo Franco, terminada la contienda, reconocía en un viaje por Andalucía la existencia de dificultades —«Alerta, falangistas, que la guerra no ha terminado»—, el régimen decidió que la guerra había acabado oficialmente el 1 de abril de 1939. A partir de esa fecha, el «frente de las sierras», como lo llamaba otro general sublevado, Queipo de Llano, había dejado de existir. Para hacer posible esa cancelación por decreto de la realidad se utilizó el férreo control que el nuevo Estado ejercía sobre los medios de comunicación. Era una táctica obligada. Ningún régimen político cuestionado por las armas —ni siquiera aquellos que asumen su falta de legitimidad— reconoce a los guerrilleros como tales, y uno de los procedimientos tradicionales de combatir la insurgencia es declararla inexistente. «La muerte no nos preocupa. Lo que hoy, igual que ayer y siempre, domina nuestro pensamiento, es la lucha, el combate por nosotros y por todo el pueblo», escribieron Antonio Seoane Ramos y José Gómez Gayoso, dirigentes comunistas de Galicia, pocos días antes de ser ejecutados en la cárcel de La Coruña. Mensajes de esta naturaleza no alcanzaban, empero, a la mayoría de los ciudadanos. Para el Estado franquista, que disponía del monopolio legal de los códigos de información y del ejercicio de la violencia, la resistencia armada era un problema de orden público, y los guerrilleros, delincuentes comunes.

No obstante, cuando la guerrilla fue erradicada, el régimen franquista autorizó y estimuló una literatura de cruzada contra el movimiento armado de posguerra: una literatura que parecía fruto de un síndrome de abstinencia. El nuevo discurso, extremadamente sectario y maniqueo, contradecía al anterior, ya que no sólo levantaba acta de la existencia del maquis sino que incluso multiplicaba su relevancia. Reconvertidos en historiadores de guardia, un puñado de guardias civiles y policías se aplicaron a la tarea de codificar los estereotipos oficiales que se emplearon a partir de entonces para desacreditar la resistencia armada. El objetivo no era, evidentemente, devolver la lucha de los hombres del monte a la historia sino exaltar a las fuerzas represivas que combatieron el movimiento guerrillero,

alimentando de paso un doble linchamiento, moral y político, del mismo. Para ello se sirvieron de todos los recursos posibles, desde un lenguaje eminentemente cuartelero hasta la mistificación de la realidad por el procedimiento de no diferenciar entre los hechos comprobados y las hipótesis policiales. Negado el contexto represivo que obligó a los republicanos a echarse al monte, orillada la violencia estructural que impedía su reinserción en el nuevo régimen y despojados de toda ideología, huidos y guerrilleros aparecían como la última secuencia del bandolerismo decimonónico. Obviamente, hechos como la aplicación sistemática de la «ley de fugas» o los desmanes de la maquinaria represiva del franquismo no formaban parte del paisaje histórico. La furia exterminadora de finales de los años cuarenta, que Francisco Moreno Gómez ha llamado el «trienio del terror» (1947–1949), para los hagiógrafos del franquismo constituía simplemente una prueba de la eficacia policial del régimen. Literatura y cine delinearon a partir de entonces una iconografía de los maquis que resumía, conforme a los criterios morales y políticos de la dictadura, el inventario de la perfidia humana.

Menos comprensible resultó el empeño del Partido Comunista imponiendo también la condición de invisible al movimiento guerrillero, sobre todo si tenemos en cuenta que la resistencia armada se configuró como la expresión más acabada de su política durante los años cuarenta. Aparte de impulsar algunas narraciones ideológicas, más próximas a la teología que a la historia, el PCE expulsó al maquis de su pasado. En su historia oficial, deviene en un acontecimiento marginal, casi anecdótico, y lo mismo ocurre con las memorias de algunos de sus principales impulsores: Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri o Enrique Lister. El Partido Comunista, que eligió la vía armada para acabar con el franquismo, se desembarazó de la guerrilla no sólo como opción estratégica —lo que parecía obligado dada la evolución política— sino también como fragmento de su historia y de la historia de España. En lugar de promover su conocimiento, la resistencia armada fue desplazada del discurso histórico para hacer creíbles nuevas estrategias, entre ellas la conocida como «política de reconciliación nacional». En ese contexto, la guerrilla —que siempre provoca conductas excesivas— aparecía como una rémora. Remitía a prácticas estalinistas que habían tenido su traducción en sórdidos episodios: eliminación física de rivales políticos, delaciones a la policía de compañeros que defendían planteamientos heterodoxos y maquis ejecutados con el pretexto de una ambigua normativa guerrillera.

Los años de la transición no corrigieron las condiciones objetivas, porque había que adecuar las biografías de algunos líderes comunistas a los perfiles políticamente correctos de la época, y para entonces el paradigma revolucionario suscitaba rechazo, incluso como construcción teórica o recuerdo del pasado inmediato. El régimen franquista, desde el comienzo de la guerra civil, había señalado dos bandos entre los

vencidos: la línea imaginaria que los separaba se situaba en aquellos que tenían «las manos manchadas de sangre». La realidad evidenció que era una soflama destinada a favorecer la entrega y posterior eliminación de los elementos republicanos. Pero esa especie de metonimia castrense fue interiorizada por los antifranquistas hasta tal punto, que aceptaron como irreversible, política e históricamente, la imposibilidad de «normalizar» la cuestión de la guerrilla en el ámbito del consenso logrado en el posfranquismo. «A los partidos políticos, por lo visto, no les interesa reconstruir nuestra más inmediata y dolorosa historia. ¡No sé por qué! ¡No me lo explico!», se lamentaba Enriqueta Otero, maestra y guerrillera, herida gravemente en un enfrentamiento armado con las fuerzas de represión. La desmemoria subsiguiente produjo la paradoja de que quienes huyeron al monte para salvar la vida se convirtieron en compañeros de viaje indeseables para los dirigentes del PCE, mientras que, por el contrario, quienes habían participado en los rituales y las prácticas de la dictadura se transformaron en referencia privilegiada para el modelo democrático que se avecinaba. No sólo se les aceptaba en una sociedad a la que habían amordazado y perseguido, sino que otorgaban legitimidades democráticas. La actitud de socialistas y cenetistas, que discurrió en paralelo, resultaba más coherente. Unos y otros se habían desvinculado de la resistencia armada desde el principio, abandonando esa opción —y en muchos casos, a sus propios militantes— en la inmediata posguerra. Los socialistas creyeron en una democracia regalada por los británicos, y los anarquistas se dedicaron básicamente a dirimir sus múltiples querellas internas, tanto estratégicas como ideológicas y personales.

Un análisis instrumental de la situación política durante el franquismo puede llevarnos a evaluar como lógicas las repuestas del régimen y de los comunistas: en determinados contextos, la historia se subordina a las necesidades de la política cotidiana. Pero lo que resulta verdaderamente incomprensible y sorprendente es la actitud del mundo académico con respecto a los maquis. Cuestiones en principio tan atractivas como la peripecia de los españoles en los campos de concentración franceses y alemanes, la aportación de los exiliados republicanos a la Resistencia francesa o la guerrilla misma, incluidas las invasiones pirenaicas, han estado marginadas de las pautas de investigación del estamento universitario español, acantonado en los temas y metodologías tradicionales. Mientras tanto, «juegos de oposición» —el «rechazo» del franquismo por parte de los monárquicos y las algaradas estudiantiles, por ejemplo— aparecen canonizados como hitos fundacionales del antifranquismo. Puede aducirse que en los establecimientos académicos se practica el culto al «legajo con sello», lo que favorece el rechazo de unos hechos atravesados de documentos problemáticos, testimonios difíciles de contrastar y obstáculos para acceder a los archivos (hasta hace unos años, la documentación de los represores —auditorías militares, archivos de la Guardia Civil,

gobiernos civiles, cárceles, etcétera— estaba literalmente prohibida a los investigadores). Pero quedarse en la intendencia soslaya una hipótesis inquietante: la existencia de aduanas ideológicas.

Como los protagonistas de *Fahrenheit 451*, los habitantes de pueblos y aldeas, ante la imposibilidad de exponer libremente los relatos de «los años del maquis», aprendieron las historias de los hombres de la sierra para legarlas a sus descendientes y así mantener activos los recuerdos de la colectividad: construían espacios de memoria. Cuando el tardofranquismo y la primera transición permitieron en teoría depurar y codificar esas narraciones —y separar la épica de la realidad—, la burocracia universitaria rechazó la guerrilla como objeto de investigación. El correlato de la inhibición académica atrajo hacia el estudio del maquis a un tropel de aficionados: eruditos a la violeta, periodistas de talentos variados e incluso deportistas. Las memorias de los testigos de esos años de silencio, cuyos textos adolecen tanto de valor factual como de capacidad de autocrítica, tampoco aportaron informaciones relevantes o análisis sustantivos: en un ejercicio de sinécdoque continuada, confunden su historia particular con el conjunto de la historia. Y aunque ahora no está de moda entre la tribu de los historiadores locales destacar la aportación capital de los hispanistas al estudio del franquismo, nos vemos obligados a subrayar que el primer texto verdaderamente riguroso sobre la guerrilla de posguerra es obra del alemán Hartmut Heine, quien publicó en 1980 un trabajo ejemplar, casi canónico, sobre la resistencia en Galicia.

La consolidación democrática introdujo un evidente dinamismo en el tema y a mediados de la década de los ochenta —coincidiendo con el aniversario de la guerra civil— se publicaron importantes monografías. Centradas en ámbitos regionales o provinciales, dignificaron el tratamiento de la resistencia armada y significaron un paréntesis provisional en la acumulación de morralla bibliográfica. La aportación básica se debió a profesores de enseñanzas medias, situados en los límites del sistema y, por lo tanto, con libertad para la elección de temas y enfoque. Historiadores técnica y metodológicamente solventes, su marginación frente a los establecimientos que controlan el saber oficial —y, sobre todo, los recursos para la investigación—, retrasó la planificación de unos estudios regionales que hubieran permitido completar la cartografía del maquis. De todos modos, hoy podemos ensayar una síntesis de la guerrilla a escala nacional —un «estado de la cuestión»— gracias a la edición de esas monografías. Publicaciones recientes confirman que el camino de renovación iniciado en los ochenta tiene continuadores altamente cualificados.

El origen de los problemas historiográficos sobre la guerrilla se sitúa posiblemente en la transición, un periodo histórico que, si hacemos caso de las tesis dominantes («ficción edulcorada», las denomina el maestro Josep Fontana), parece más un milagro de los dioses que una obra de los hombres: conforme pasa el tiempo,

comprobamos cómo la transición es a la democracia actual lo que el brazo de santa Teresa a la dictadura. Hasta tal punto, que habitualmente dejamos de lado que sólo fue posible gracias a la muerte de Franco y que los resortes del poder pasaron a manos de sus albaceas, mientras que los demócratas se limitaron a jugar el papel de testaferros. A diferencia de lo ocurrido en Alemania, Italia o Francia después de la guerra mundial, el modelo de cambio español no permitió efectuar una depuración democrática de los elementos colaboracionistas más destacados con el pasado fascista y autoritario. El contrato de la transición se construyó sobre una reescritura fragmentaria del pasado, utilizando simultáneamente el miedo como hilo conductor de una memoria que se limitaba a convertir el consenso en un signo de verdad. Ello permitió a los franquistas legitimar el botín material y, sobre todo, simbólico conquistado durante la dictadura. Y aunque, como escribe el profesor Marc Carrillo, «el hecho de que la amnistía exonerase de responsabilidades contraídas en el pasado no suponía extender a la vez el borrón y cuenta nueva a la historia y su memoria», lo cierto es que la historia no fue ajena a todo este proceso de igualar responsabilidades mediante la «teoría del cincuenta por ciento»: todos fuimos responsables de lo ocurrido en el pasado y en la misma medida. La falacia igualitaria se elaboró a partir de un sofisma: la historia no debía manejarse como arma política. Como si hubiera que relegar a lo más recóndito de la memoria —ahora convertida en material de derribo— las enseñanzas del pasado, y alimentar de paso un barullo interesado entre la manipulación de la historia y su utilidad como factor cardinal para la construcción del presente. El correlato es bien conocido: la democracia se estableció en torno a dos variables, amnesia e impunidad, que se confundieron deliberadamente con olvido y perdón. Así, mientras notables franquistas, ahora parteros de la democracia, siguieron instalados en el poder y determinaban las reglas del juego político —y de la narración del pasado—, todavía hoy las asociaciones de antiguos guerrilleros mendigan por los diferentes parlamentos la consideración de «combatientes contra el franquismo» y la supresión de las referencias oficiales que los presentan como «bandoleros, malhechores y terroristas». Con el pretexto de esta reivindicación, Francisco Umbral se consideró intelectualmente autorizado para emitir un juicio inapelable: definió a los maquis como «pastores carlistas de izquierdas».

En el pueblo de Cañedo, en la provincia de León, todavía en febrero de 1998 se exhumaron los cadáveres de seis guerrilleros abatidos en 1941 y que yacían bajo el asfalto de una de sus calles. En la aldea de Vidangoz, en el Roncal navarro, seis maquis participantes de las invasiones pirenaicas fueron enterrados en el camposanto pero, como medida de *higiene moral*, levantaron un muro para separarlos de los otros muertos, además de no inscribirlos en el registro de defunciones. Ejemplos parecidos se pueden encontrar por toda España. Los antifranquistas armados fueron en muchos casos inventariados de manera anónima en los registros civiles —cuando no vetados

—, rechazados sus cadáveres en los cementerios y, finalmente, expulsados de la historia académica (y, por tanto, de los libros en los que se conforma la conciencia histórica de los ciudadanos de un país). Y la guerrilla, sin embargo, tiene la suficiente entidad —unos 5000–6000 hombres en armas y más de 20000 enlaces detenidos— para no ser confinada a los márgenes de la historia oficial. Es cierto que jamás se perfiló como un medio de acabar por sí mismo con el régimen, pero devino como la única resistencia que preocupó verdaderamente a Franco y su cohorte de secuaces e intereses. Como ha escrito Paul Preston, fue «la oposición más seria al régimen de Franco».

Estudiada con una lógica utilitaria y con la perspectiva que proporciona el tiempo transcurrido, la aventura del maquis puede parecer una gigantesca equivocación. Tal vez la clandestinidad deformó el sentido de la realidad a los políticos y dirigentes guerrilleros tanto del exilio como del interior, huérfanos de una teoría y una estrategia de la lucha armada. Es posible que los guerrilleros fueran sacrificados a las ambiciones políticas de los dirigentes comunistas en el exilio y a la «diplomacia egoísta» de las cancillerías occidentales. Pero los análisis retrospectivos no pueden orillar otra explicación evidente en aquel tiempo: la resistencia armada era para muchos hombres y mujeres la única respuesta posible. «Mi padre me dijo que antes de morir con las manos amarradas, moriríamos defendiéndonos. Estas fueron las palabras de un pastor, y reconozco que acertó, a pesar de todo lo que ha pasado», ha contado José Murillo, un viejo guerrillero. En la España de la posguerra, el único horizonte para muchos republicanos era la muerte —incluso una muerte con efectos retroactivos: se perseguía especialmente a los participantes en la revolución del 34—, y el dilema consistía en la forma de enfrentarla: aceptándola resignadamente o rebelándose contra ella y dejando testimonio de esa rebeldía. Los que optaron por la segunda opción articularon un mensaje que era simultáneamente una amenaza (para el franquismo) y una llamada de auxilio (para los demócratas). Convertidos en héroes morales contra su voluntad, pretendían que su ejemplo sirviera de factor de movilización del antifranquismo. Pero ese mensaje apenas tuvo eco más allá del ámbito rural.

Cuando los españoles empezaron a conocer la historia del maquis, aquellos que habían aceptado la dictadura como un mal inevitable vivieron como una afrenta personal el heroísmo sin objeto de los hombres del monte. La consigna era olvidarlos, ya que su recuerdo multiplicaba los espejos en los que contemplar la cobardía de la mayor parte de quienes, muerto el tirano, se proclamaban luchadores por las libertades. De quienes se inventaron una expresión —«exilio interior»— para acomodarse a la dictadura y eludir el compromiso activo con la democracia. Tampoco la rebelión del maquis, que era una sublevación de las víctimas políticas pero también sociales —el «pueblo en alpargatas»: campesinos, jornaleros, mineros...—, agradó a

las élites políticas e intelectuales del exilio, abochornadas por la lección de ética impartida por unos ciudadanos irreductibles que habían expuesto sus vidas —y perdido en la mayoría de los casos— por unos ideales. Mientras ellos, que por preparación y autoridad moral deberían haber dirigido la oposición contra el dictador, se habían dedicado en un exilio acomodaticio a repartirse cuotas inexistentes de poder. Todos estos factores coadyuvaron a hacer de los guerrilleros los seres invisibles de la historia española y a perpetuar el monocultivo de la desmemoria.

Finalizada la guerra mundial, parecía que el futuro de España pasaba inevitablemente por la democracia. La derrota militar de los fascismos motivó que las miradas de los europeos se fijaran en España, país donde gobernaban los aliados de Hitler y Mussolini. La historia de la Europa occidental caminaba en dirección a la libertad, y las primeras resoluciones de la ONU invitaban al optimismo. Pero el tratado de Yalta ya había marcado las fronteras de Europa, y en ese mapa España pasaba a ser tutelada por británicos y americanos. Quebrando las expectativas de los demócratas españoles, en un corto espacio de tiempo las potencias occidentales asociaron los destinos de Franco y España, y solamente los guerrilleros, que habían captado las señales de la historia pero en su optimismo se habían olvidado de la geografía, quedaron a merced de los aparatos coactivos de la dictadura. La mayor parte de ellos perdieron la vida luchando en los montes o fusilados después de un simulacro de juicio. La historia oficial se encargaría de darles el tiro de gracia.

Los guerrilleros fueron víctimas de la represión franquista y, en cierto modo, de la estrategia del PCE. También de las inhibiciones de los partidos republicanos y del abandono de las potencias democráticas. Pero no existen razones para que se conviertan en víctimas de la historia. «Hay una manera de evocar el pasado que potencia la libertad, y otra, que la colapsa. Es la diferencia entre el victimismo y el recuerdo de las víctimas. Aquél llora a los suyos para actualizar el duelo y éste recuerda el dolor pasado para que no se repita», escribe Reyes Mate. No se trata de «rehabilitar» a la guerrilla y «redimir» a los guerrilleros por el procedimiento de reescribir un pasado ucrónico, teológico y angelical, sino de aproximarnos a su historia, que es un fragmento medular de la historia última de este país. Parece un tópico, pero resulta extraordinariamente difícil construir el futuro de un país a costa de olvidar selectivamente el pasado.

De hacerlo así, los efectos devastadores del olvido terminarán pasándonos una factura insoportable: la de cohabitar con la impostura.

La resistencia armada durante la guerra civil (1936–1939)

Un grupo de huidos ocupó el 6 de agosto de 1937 la barriada de San Telmo, en el pueblo onubense de Cortegada, y ejecutó a nueve personas. Casi dos años después, el 14 de abril de 1939, octavo aniversario de la proclamación de la República, una partida de huidos de la banda occidental de León tomó el pueblo de Lago de Carucedo, cerca de Ponferrada, y mató a ocho vecinos. Entre los asesinados de Lago había dos mujeres, cuatro en Cortegada^[1]. Ciertamente, era un tiempo de violencia. Pero ante sarracinas de esa naturaleza, la pregunta, aunque retórica, resulta igualmente obligada: ¿Cómo fue posible que ciudadanos respetados, en muchos casos militantes de organizaciones para las que el respeto a la vida era el centro de su actividad, cometieran tan bárbaras acciones? Las respuestas que recogen los testimonios coinciden siempre: la lucha por la vida. La sublevación de los militares no sólo había eliminado de su horizonte personal el modelo social y económico que representaba la República, sino que además eran perseguidos a muerte por la defensa de ese modelo. Acosados por las autoridades franquistas y estigmatizados como malhechores en los boletines oficiales de las provincias respectivas, su respuesta consistió en practicar una «violencia ejemplar» contra quienes ponían en peligro inmediato su propia existencia: los representantes locales del poder y los vecinos que, por motivos diversos, se convirtieron en confidentes de las autoridades franquistas. Condenados a muerte sin haber cometido delito alguno, elaboraron una «ética a la carta» y contestaron con la muerte para defenderse. Era la dialéctica que, como resultado de la guerra y los métodos empleados por los vencedores en la misma, se había instalado en algunas zonas rurales del país.

El exterminio como programa político

La guerrilla antifranquista hunde sus raíces en la guerra civil y, más concretamente, en la durísima represión que con efectos retroactivos efectuaron las fuerzas levantadas en armas contra la legalidad republicana. De hecho, resulta prácticamente imposible entender la resistencia contra el franquismo sin explorar, siquiera

brevemente, la represión que llevaron a cabo los sublevados. Estaríamos ante un estudio descontextualizado que impediría establecer el origen y la naturaleza del maquis español. El fallido pronunciamiento militar y la subsiguiente confrontación bélica motivaron una dinámica represiva en los dos bandos que provocó la muerte de multitud de personas ajenas al devenir militar de la contienda. Era «la guerra de las retaguardias». Al «terror rojo» se respondía con el «terror blanco», y en esa espiral de violencia las vidas de los españoles dejaron de tener valor de uso para convertirse en mercancías en el zoco de la muerte.

Aunque no vamos a detenernos en el análisis específico de la represión republicana, es preciso constatar que la guerra civil desató una verdadera saña exterminadora en los bandos en conflicto. Un conflicto apoyado en antagonismos político-ideológicos y elementos propios de la lucha de clases, pero también atravesado por ajustes personales, querellas religiosas y otros factores más propios de la psicología que de la historia y, por lo tanto, difíciles de inventariar con rigor. «Yo le metí dos tiros en el culo por maricón», contaba por Granada Juan Luis Trescastro, uno de los ejecutores de Federico García Lorca^[2]. «Los santos encima de las santas», era la consigna de los milicianos mientras en su arrebatado iconoclasta quemaban las imágenes sagradas de las iglesias. Y no sólo destruían imágenes. Aproximadamente, 7000 eclesiásticos fueron aniquilados durante la guerra. A cambio, la Iglesia no dudó en elevar a categoría de Cruzada lo que no era sino una guerra civil con intereses de clase.

En los dos bandos, por consiguiente, se llevó a cabo una política de terror, pero reviste cierta urgencia acabar con los mitos alimentados por la dictadura. Pasado el monopolio franquista de la información y de la historia, el asunto de las víctimas de la guerra civil continúa ajustándose cada vez con mayor precisión y la propaganda cede el protagonismo al conocimiento puntual de los hechos. La publicidad franquista se encargó de airear en 1940 el «terror rojo» mediante el inventario realizado por el Ministerio de Justicia «de la criminalidad bajo el dominio marxista», conocido posteriormente como la *Causa General*, y todavía en los atrios de las iglesias aparecen lápidas recordando a los «caídos por Dios y por España». Se silenció, por contra, el «terror blanco», más trágico que el anterior, ya que fue planificado y dirigido por los responsables de la sublevación durante la guerra pero también posteriormente, cuando la existencia del peligro republicano en la retaguardia ya no servía como justificación. No sucedió lo mismo con la represión republicana, que nunca fue apoyada por el Gobierno, aunque fueron militantes de formaciones izquierdistas quienes la ejecutaron. Diríamos que la represión republicana fue coyuntural y la franquista, estructural.

Si ningún fenómeno histórico puede considerarse lineal, el problema de las ejecuciones de posguerra no resulta una excepción. Existieron, no obstante,

diferencias cualitativas entre las dos facciones en lucha, diferencias que no implican justificación alguna (el asesinato por cuestiones ideológicas siempre es injustificable). Así, mientras en la zona republicana una parte importante de esas muertes fueron incontroladas —fruto de una respuesta explosiva, irracional y arbitraria de los republicanos amenazados por la acción de los golpistas—, en la zona «nacional» el terror estuvo siempre bajo el control de la autoridades. La República, como consecuencia del levantamiento y de la fractura política subsiguiente, se vio privada de los aparatos coactivos propios de un Estado de derecho —policías y jueces—, y ese vacío de poder fue aprovechado por individuos descontrolados que se tomaron la justicia por su mano. También por elementos de las organizaciones izquierdistas que trataron, aprovechando la confusión, de llevar a la práctica parte de sus utopías revolucionarias, y entre esas entelequias se encontraba la eliminación de los enemigos de clase. La República puso en marcha los mecanismos jurídicos y policiales que impidieran esos asesinatos en cuanto le fue posible: incluso se persiguió y condenó a algunos de los victimarios. Parece lógico, por otra parte, que un Gobierno que era depositario de la legitimidad derivada de unas elecciones democráticas utilizara medios coercitivos para defenderse de una agresión ilegal y armada.

No ocurrió lo mismo en el bando franquista. Obligado a dejar pacificada la retaguardia —algunas zonas conquistadas eran declaradamente hostiles a los rebeldes— y no disponiendo de fuerzas para ello, utilizó la represión —una represión de clase, generalmente— como parte de la estrategia militar. La oleada de terror en las retaguardias que sacudió a las provincias en las que triunfó en un primer momento el alzamiento seguía esa programación bélica: impedir la reacción de los vencidos. Era un castigo calculado, destinado a atemorizar y controlar a la población republicana. Muchos de los militares y civiles que se destacaron en el asesinato de republicanos eran conocidos a nivel popular, con sus nombres y apellidos. Algunos se hicieron célebres, como el «conde Rossi», italiano, en la isla de Mallorca, o Bruno Ibáñez Gálvez «Don Bruno» en Córdoba, Gregorio Haro Lumbreras en Huelva, así como los capitanes Manuel Rojas Feijespán o Manuel Díaz Criado, que sembraron la muerte por Granada y Sevilla. Sin olvidar al comandante Lisardo Doval, cuyo recuerdo en la represión de 1934 estremecía a los asturianos de izquierdas o simplemente demócratas^[3]. Nadie les pidió responsabilidades, ni durante ni después de la guerra. Pero esas diferencias cualitativas entre ambos bandos no fueron producto de la espontaneidad o el azar, sino que eran secuelas directas de las respectivas ideologías y programas de los gobernantes.

Desde el 18 de julio de 1936, una de las pautas de actuación que homogeneizó a los sublevados fue el proyecto de aniquilar a los vencidos. Por el Bando del 28 de julio de 1936, la Junta de Defensa Nacional, máximo órgano político-militar de los

rebeldes, que presidía el general Miguel Cabanellas, declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional^[4]. Esa proclama permitió a los sublevados determinar el ritmo de la represión e imponer la justicia castrense frente a la ordinaria, así como tutelar a quienes llevaban a cabo los «paseos». La República, por el contrario, no formalizó el estado de guerra hasta el 9 de enero de 1939, cuando los insurrectos ya habían roto las líneas republicanas que protegían Cataluña. Hasta esa fecha funcionaba el estado de alarma, que estaba operativo desde el 12 de febrero de 1936. Igualmente las intervenciones públicas de tres de los militares insurgentes más destacados nos proporcionan elementos de juicio para comprender la ideología de terror que trataban de implantar. El representante máximo del ideario rebelde de los primeros tiempos, el general Emilio Mola «El Director», en la «Instrucción Reservada núm. 1», escribía que «la acción debe ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo», aplicando «castigos ejemplares a todos los directivos de partidos y sindicatos desafectos al Movimiento»^[5]. Queipo de Llano expuso el 23 de julio de 1936 en La Unión su programa para el futuro: «Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, ¡id preparando sepulturas!»^[6]. Franco señalaba que el balance de la guerra «no debe hacerse a la manera liberal, con amnistías monstruosas y funestas que más bien son engaño que gesto de perdón»^[7]. Para Franco, la guerra era un factor de legitimación.

Las manifestaciones anteriores no eran bravatas castrenses ni retórica extremista de militares reconvertidos en políticos. En Navarra, la patria de Mola, el Colectivo Afán testimonió la existencia de más de 3000 asesinados. En Sevilla, capital del «virreinato andaluz» de Queipo de Llano, la noche del 11 de agosto de 1936, para «celebrar» el aniversario del golpe de Sanjurjo, asesinaron a una serie de destacados dirigentes andaluces, entre ellos, José González Fernández, diputado y alcalde republicano de la capital; Manuel Barrios, parlamentario socialista; Fermín de Zayas, secretario de la masonería en Andalucía, y Blas Infante, prohombre del andalucismo^[8]. Por su parte, quien iba a convertirse en el máximo responsable de la sublevación, el general Franco, dejó claro a un periodista americano que la suya era una guerra de exterminio: «¿No hay posibilidad de tregua, ni de compromiso?». «No. No, decididamente, no. Nosotros luchamos por España. Ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio». «Tendrá que matar a media España», le insinuó el periodista. Entonces Franco remató el argumento: «He dicho que al precio que sea»^[9]. Los ejemplos de crueldad planificada abundaron. Los días 27 y 28 de septiembre de 1936 tropas marroquíes —a las que se habían prometido mujeres blancas cuando ocuparan Madrid— asesinaron a los heridos del Hospital Republicano de Toledo.

Francisco Franco —que a partir del 1 de octubre de 1936 acumuló los cargos de jefe del Estado del Gobierno español y jefe de los Ejércitos, además de proclamarse

Caudillo— se negó desde un principio y de manera tajante a cualquier solución de la guerra que no pasara por la rendición incondicional de los republicanos. Los diversos intentos de negociar por parte de la República se estrellaron contra la determinación del militar golpista. La prolongación del conflicto no sólo le servía para consolidar su poder personal sino también para edificar una «España nueva», dominada por la cruz y la espada. El camino lo había señalado el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, con su teoría de «las dos ciudades». El correlato resultaba evidente: no sólo era una guerra civil, sino también de exterminio. A los vencidos más destacados se les negaba la posibilidad de incorporarse al nuevo Estado y su horizonte se reducía a la muerte, el exilio o los campos de concentración. A los republicanos anónimos les esperaban, en el mejor de los casos, la sumisión y el silencio. Contra esos planteamientos genocidas, significados dirigentes republicanos manejaban ideas diferentes y denunciaron el error de edificar el país sobre la aniquilación de los adversarios. Manuel Azaña, presidente de la República, en un mensaje radiado dijo que «en estos momentos de violencia, cuando se ha desencadenado contra el poder legítimo de la República una agresión, yo no diré una palabra más de violencia»^[10]. Por su parte, el líder socialista Indalecio Prieto, escribía que «ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante la sevicia ajena, vuestra clemencia; ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa»^[11].

Los métodos empleados por los sublevados para efectuar esa represión programada pueden resumirse en los consejos de guerra y los «paseos». Unos y otros apenas diferían más allá de los aspectos formales. En efecto, los consejos de guerra tenían bastante de surrealismo judicial, lo que Ramón Serrano Súñer, uno de los franquistas más caracterizados de los primeros tiempos, definió posteriormente como «justicia al revés»^[12]. No era para menos. En primer lugar, porque se juzgaba por el delito de rebelión a quienes permanecieron fieles a la legalidad y porque eran sus jueces, paradójicamente, los rebeldes. En segundo término, porque se aplicaban leyes de guerra a «delitos» políticos y no a cuestiones militares; y, finalmente, porque no existían las mínimas garantías procesales: se podía juzgar en la misma vista a uno, cinco o veinticinco acusados, y el abogado defensor, en el mejor de los casos, se limitaba a pedir clemencia. Los «nacionales» no se molestaron siquiera en cambiar las leyes: aplicaron las existentes, contra las que se habían alzado. Las penas establecidas eran las siguientes: auxilio a la rebelión, de 6 años y un día a 12 años; rebelión militar, de 12 años y un día a 20 años; adhesión a la rebelión militar, de 20 años y un día a 30 años o pena de muerte. La tipificación de los delitos no seguía unos criterios reconocibles. El mismo hecho podía ser considerado auxilio o adhesión a la rebelión militar. Todo dependía del ponente y del fiscal, dos de los siete miembros que integraban los tribunales militares.

La modalidad más dramática de la represión llevada a cabo por los «nacionales»

la constituyeron, no obstante, los «paseos». Elementos civiles partidarios del nuevo régimen llegaban a pueblos y cárceles, «cargaban» sus camiones de «mercancía republicana» y la liquidaban en cualquier descampado o carretera con total impunidad. Pero no era una represión espontánea: formaba parte de la táctica de atemorizar a la población en los primeros meses de la contienda. Entre el 50 y el 70 por ciento de los asesinados en la guerra y posguerra lo fueron entre julio y septiembre de 1936. Más del 90 por ciento de los asesinatos en Navarra y el 80 por ciento de los 7000 ejecutados en Zaragoza se realizaron en 1936^[13]. Muchos de ellos en los «paseos», que se popularizaron como un sistema de matar más pedagógico, rápido y barato que el basado en procedimientos judiciales.

Falangistas, requetés, elementos de Acción Popular o asalariados que trataban de hacer méritos ante los señoritos fueron los encargados de esas ejecuciones irregulares. Las llevaron a cabo inducidos por las autoridades, tolerados por los militares y guardias civiles, y financiados por terratenientes y burgueses afines a la sublevación. Los verdugos, salvo excepciones, pertenecían a las clases medias y, sobre todo, bajas, incluso había numerosos elementos socialmente marginales. «Los falangistas realizamos el trabajo sucio: fusilar», ha reconocido uno de los jefes históricos, Raimundo Fernández-Cuesta^[14]. Había bandas ambulantes de falangistas que recorrían las provincias matando republicanos, como fue el caso de «Los Caballeros de la Muerte», una cuadrilla integrada por vallisoletanos, salmantinos y gallegos que causaron verdaderos dramas en las provincias de Asturias y León: algunos de estos «caballeros» serían posteriormente represaliados por los guerrilleros. Stanley Payne, estudioso del fascismo español, ha tratado de ajustar las responsabilidades de Falange y del régimen: «Durante los primeros tiempos de la guerra civil, los falangistas participaron despreocupadamente en la represión derechista. El Ejército, principal responsable de la iniciativa y de la ejecución de esta política de asesinatos en masa, prefirió, en lo posible, utilizar a falangistas para estos menesteres. La complicidad de la Falange en la horrenda matanza es, pues, enorme»^[15].

La represión antirrepublicana —en sus dos versiones: la oficial y la irregular— combinó desde el principio dos líneas de actuación: la selectiva y la masificada. La primera procuró la eliminación de militares fieles a la legalidad, de las autoridades republicanas y de los militantes cualificados de los partidos y sindicatos de izquierda, pero igualmente los segmentos burgueses que habían apostado por la República como vía para modernizar el país. La segunda, indiscriminada, ambicionaba doblegar y silenciar —siempre el silencio dominándolo todo— a la población izquierdista del país. Las dos tenían una meta última: desterrar la utopía republicana y hacer inviable un modelo alternativo al de la «España eterna». En el caso de los militares, Mola ya lo había advertido: «En este trance de la guerra yo ya he decidido la guerra sin

cuartel. A los militares que no se han sumado a nuestro Movimiento, echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra nosotros, contra el Ejército, fusilarlos»^[16]. Uno de los ejes vertebradores de la represión consistió en la eliminación sistemática de todos los oficiales que habían permanecido fieles a la República, tanto del Ejército como de la Guardia Civil o de Asalto. La lista resulta extensa. Entre los generales ejecutados destacaron Domingo Batet, Enrique Salcedo Molinuevo, Miguel Campíns, Núñez de Prado, Manuel Romerales y Rogelio Caridad Pita. Especialmente perseguidos, y sancionados con furia, fueron los jefes de la Guardia Civil fieles a la legalidad. El bloque de poder tradicional vivió como una traición la fidelidad de la Benemérita a la República.

Las autoridades republicanas constituyeron otro de los objetivos de la represión. Los alcaldes de Vitoria (Teodoro González de Zárate), Palma de Mallorca (Emilio Darder), Salamanca (Casto Prieto Carrasco), León (Miguel Castaño Quiñones), Zaragoza (Ángel Vera Coronel), Sevilla (Horacio Hermoso Araujo) o Santiago de Compostela (Ángel Casal), entre otros, fueron neutralizados por medio de los sistemas habituales: juicios sumarísimos, mediante los consabidos «paseos» o la aplicación de la tradicional y siniestra «ley de fugas». Presidentes de Diputación y gobernadores civiles también pagaron su cuota en el mercado de la muerte durante la guerra y la posguerra, al igual que los parlamentarios demócratas. En 1938, cuando todavía las ciudades de significación republicana estaban bajo control gubernamental, la Secretaría del Congreso de los Diputados consignaba la desaparición o encarcelamiento de 12 diputados y confirmaba la muerte de 40 de ellos. Pero no sólo atacaron con inquina a las élites políticas, sino igualmente a las intelectuales. Se trataba de acallar las voces de aquellos ciudadanos destacados que habían fomentado y apoyado el proyecto republicano que prometía un cambio radical en la historia de España. Los libros testimonian casos como el asesinato de García Lorca, la prisión de Miguel Hernández o la destitución de Miguel de Unamuno el 22 de octubre de 1936, días después del incidente en la Universidad de Salamanca con Millán Astray. El grito de este último —«¡Muera la inteligencia!»— no había sido una astracana del excéntrico jefe legionario: reproducía la idea generalizada entre los sublevados de que «la enseñanza era responsable de los males que aquejaban a la Patria». La depuración de los docentes evidenció la hostilidad de los rebeldes a la democratización de la enseñanza y a la alfabetización de las clases bajas. Si además de tener una profesión vinculada a la cultura republicana un ciudadano era masón o nacionalista, entonces tenía la muerte garantizada. La masonería y los nacionalismos periféricos se constituyeron como las patologías de Franco y su régimen, hasta convertirse en parte sustantiva de un discurso endémico y paranoico. «Era más peligroso ser masón que socialista», ha escrito Gabriel Jackson^[17]. Fueron exterminadas, entre otras, las logias de Zamora, León, Fluelva, La Coruña, Granada,

Zaragoza o Sevilla. El nacionalismo fue, desde el principio, otra de las obsesiones de los franquistas. Explicar las construcciones teóricas de los ideólogos del totalitarismo españolista —Ernesto Giménez Caballero, Maximiano García Venero o Luis de Galinsoga— y la práctica represiva de ese centralismo desborda el objetivo de este libro. Pero tal vez una «anécdota» explique la cuestión mejor que todo un tratado. Cuando las fuerzas «nacionales» entraron en la ciudad de Lérida fusilaron una lápida porque contenía una poesía en catalán —«Al campanar de Lleida»—, obra de Magí Morera i Galicia^[18]. El franquismo hizo almoneda de la inteligencia española de la época.

La represión generalizada propició resultados no menos estremecedores. El 14 de agosto de 1936, en la conquista de Extremadura, las tropas de Yagüe habían efectuado en la plaza de Badajoz una de las matanzas más horrendas de la guerra, y la explicación del militar no se desvió de la planificación de los dirigentes sublevados: «(...) pues, no iban a dejarse 4000 rojos a sus espaldas teniendo que avanzar su columna a marchas forzadas y arriesgarse así a perder Badajoz de nuevo»^[19]. Otros hechos confirmaron la voluntad de diezmar masivamente a la población de ideología republicana. Aparte del episodio puntual y estremecedor de Guernica, acciones como los bombardeos contra la población civil en Málaga en 1937, Badajoz en 1938 y Tarragona en 1939 confirman la tesis de una política de exterminio que no respetó casi nada: ni siquiera la edad de las víctimas. El único límite para los voluntarios impacientes y los matones políticos lo constituían la condición social y la situación jerárquica, conforme al esquema tradicional de valores. Especialmente penalizados fueron los obreros y jornaleros: una especie de ajuste de cuentas masivo contra los proletarios insumisos. Terratenientes y empresarios encontraban el escenario perfecto para fracturar definitivamente la resistencia de las clases trabajadoras.

La fotografía de la represión mostraba un panorama desolador. Por todo el país —ninguna provincia escapó al castigo de los sublevados— proliferaban asesinos con las manos libres para liquidar impunemente a todo enemigo ideológico, aunque de paso también se podían solventar querellas de economía doméstica, cuentas pendientes con los vecinos o contenciosos afectivos. Los consejos de guerra, convertidos en un espectáculo digno de la Inquisición, minaban sistemáticamente la resistencia de la base republicana. Los cadáveres se multiplicaban por caminos, descampados y en las proximidades de las tapias de los cementerios. Por todas las provincias, pozos naturales, lagos y simas se transformaron en fosas comunes utilizadas para hacer desaparecer a multitud de víctimas. El Pozo Grajero en León, Jinámar en la isla de Gran Canaria o el Lago de Sanabria en Zamora conforman ejemplos puntuales de otros muchos esparcidos por toda España. Prisiones, batallones disciplinarios y campos de concentración —habilitados en conventos, fábricas abandonadas y caserones— tachonaban la geografía española. Nombres como los de Castuera en

Badajoz, Camposancos en Pontevedra, Miranda de Ebro en Burgos, La Grajuela en Córdoba o San Marcos en León ocupan un lugar destacado en la historia de la infamia de este país. A las represiones conocidas, los centros penitenciarios aportaban dos medios de liquidación complementarios: el hacinamiento y el hambre. Se convirtieron además en centros de reeducación a partir de propaganda religiosa y patriótica. En 1939 el número de presos alcanzaba los 750 000. Unos 90 000 republicanos habían sido ejecutados después de juicios sumarísimos o asesinados en los «paseos» al amanecer. Los suicidios se incrementaron un 30 por ciento^[20]. Laboralmente, a los considerados desafectos les esperaba un futuro lleno de dificultades. La miseria formaba parte del paisaje cotidiano de aquellos que no eran adictos al nuevo régimen o tenían el pecado original de haber sido demócratas o de izquierdas.

El triunfo del alzamiento militar significó un cambio radical para los españoles, ya que los vencedores estaban decididos a rentabilizar su victoria. El protagonismo de la vida política y social de España empezaba a estar casi monopolizado por victimarios y víctimas. El país se convirtió entonces en campo abonado para delatores, arribistas y conversos: había nacido el Estado policial con todas sus mezquindades. A la represión contra las personas siguió la confiscación de los bienes. Triunfante la sublevación militar, inmediatamente se adoptaron una serie de impuestos, tanto directos como indirectos. El primero y más conocido fue el de las firmas de adhesión al Caudillo. Las autoridades de pueblos y barrios entregaban a sus vecinos unos pliegos en los que se solicitaba, a cambio de medio real, la firma con la adhesión a Franco. Conforme se presentaba la situación, la mayoría estampaba su firma: en muchos casos era una cuestión de vida o muerte. Las muchachas mayores de quince años estaban obligadas a entregar un jersey para los soldados del frente, y éstos, a través de la prensa, solicitaban «madrinas de guerra». Luego comenzarían las suscripciones, que se generalizaron: para aviones de guerra, para las milicias de Falange, para el Ejército, las regiones devastadas, etcétera. Simultáneamente, funcionaban las exacciones directas, que se concretaban, sobre todo, en las multas políticas. Se penalizaba por casi todo: desde negarse a alojar en casa a miembros del Ejército hasta no dejarse colocar, previo pago, el emblema de Auxilio Social, pasando por no entregar dinero para el plato único. O trabajar los domingos. O no saludar, brazo en alto, en el desfile de las banderas de Falange. O no descubrirse ante el paso de una imagen sagrada. La prensa asimismo se encargaba de señalar con nombres y apellidos a los infractores. Al daño material que se infligía era necesario añadir una sanción simbólica.

En el medio rural —decisivo para la resistencia armada de posguerra— las dificultades se agravaron, dado el grado de conocimiento que los habitantes tenían entre sí. Una parte de los encarcelados lo había sido a causa de las delaciones de los

vecinos adictos al nuevo régimen, así como de los párrocos y de las autoridades locales. En el caso de que fueran liberados, los campesinos se encontraban a su regreso con sus tierras confiscadas, multados constantemente, obligados a emigrar de pueblos y aldeas. Los jornaleros no eran contratados como sanción por su apoyo a la República. Los intereses económicos, entreverados de problemas ideológicos, provocaron una represión sistemática y ominosa en el ámbito rural. La ausencia de cultura y tolerancia añadió grandes dificultades para que los republicanos —o considerados como tales por los nuevos poderes locales— que habían sido represaliados pudieran reintegrarse a la vida cotidiana. Parafraseando a Daniel J. Goldhagen, podemos decir que millones de españoles se convirtieron en «los verdugos voluntarios de Franco».

Pero entre los vencidos también se impuso la condición jerárquica. Los líderes políticos, militares o sindicales —así como los intelectuales— que no fueron capturados en los primeros días de la sublevación, lograron marchar al exilio. Estaban condenados a muerte y, por tanto, parecía lógico que fueran evacuados. Pero no se había previsto que los republicanos sin biografía se transformarían en el elemento medular de la represión. «Aquellos que se creyeron a salvo de las represalias, puesto que no tenían manchadas “las manos de sangre”, formaron, precisamente, el grueso de las víctimas», escribe Josep M. Solé i Sabaté. En efecto, sólo el 10 por ciento de los asesinados lo fueron por delitos de sangre; el resto, por motivos políticos. En ese contexto excluyente para los vencidos, a los ciudadanos anónimos que se habían implicado en la defensa de la República les quedaban pocas opciones. Una de ellas consistió en huir a los montes y convertirse en huidos, primero, y en guerrilleros, después.

Los primeros grupos de huidos

La situación de inseguridad suscitada por la represión de los sublevados favoreció que un número importante de republicanos de los territorios ocupados por los militares rebeldes decidieran no entregarse e iniciaran espontáneamente un fenómeno típico de la guerra y primera posguerra: el de los huidos (conocidos también como fugados, *fluxidos*, emboscados, escapados o los del monte). Como primera reacción para sobrevivir, la mayoría se escondió en sus casas o en las de sus familiares. Otros, los menos, se decidieron desde un principio por el monte. Entre los que se ocultaron predominaban los republicanos vinculados a organizaciones políticas y sindicales de izquierdas pero también ciudadanos escasamente comprometidos, aunque señalados por sus convecinos porque habían votado al Frente Popular o simpatizado con su programa reformista. Unos y otros aguardaban en sus escondites el desenlace del

conflicto: les parecía apresurado entregarse mientras la República todavía libraba una guerra contra los sublevados.

En poco tiempo, se delinearon las posiciones de quienes trataban de escapar a la represión. Una parte de los huidos, ante el acoso de las fuerzas de orden o las promesas de perdón, terminó entregándose. Un segundo grupo decidió «enterrarse en vida», en sus propias casas o cerca de los pueblos de los que eran nativos, iniciando la tipología de los llamados «topos». El tercer núcleo consolidó su posición en montes y sierras como la mejor forma de salvar la vida. A estos primeros huidos — usaremos este término para designar a los grupos que se acantonaron en las montañas y que no consiguieron organizarse política y militarmente durante la guerra y la primera posguerra— se fueron agregando lugareños que no se presentaban a las llamadas de reclutamiento franquista o que, una vez encuadrados en las diferentes unidades, aprovechaban el primer permiso para desertar. Las reiteradas y amplias listas de soldados no presentados a filas que publicaban los boletines provinciales confirman el creciente número de prófugos, sobre todo a partir de 1937. También llegaron al monte los evadidos de las cárceles habilitadas en todas las localidades de cierta importancia (de las que era fácil escaparse) y los campos de concentración que se multiplicaban por todo el país. En algunas zonas, estos perseguidos políticos estaban acompañados por marginados sociales e incluso por elementos próximos a la delincuencia. Nada más producirse el golpe de Estado de julio y el inicio de la guerra, aparecieron los primeros huidos en Galicia, Extremadura, Andalucía, León, Zamora, Asturias y Santander. Escondidos en parajes agrestes, apoyados por familiares, amigos, pastores y carboneros, sólo se consolidaron en aquellos lugares donde confluían un importante número de emboscados y una orografía adecuada para protegerse de las fuerzas de represión. En general, en las proximidades de los territorios de huidos había núcleos mineros —Ponferrada, Fabero, Carballo, Mieres, Almadén, Río Tinto...—, y mineros fueron algunos de los resistentes más destacados durante la década de los cuarenta.

Los huidos constituyeron desde el principio un motivo de inquietud para las autoridades franquistas, incapaces de hacer frente a un problema de orden público que cuestionaba su dominio sobre amplios territorios. El hecho de que estos grupos de emboscados pudieran moverse con relativa libertad se debía, entre otras causas, a que las fuerzas encargadas de su persecución hasta 1942 eran unidades del Ejército integradas por soldados de reemplazo, poco aptas para este tipo de lucha. La llegada a las zonas conflictivas de tropas coloniales —legionarios y regulares— no mejoró la eficacia represiva. Mayor efectividad tuvieron las Columnas de Operaciones — compuestas por falangistas, Tercio, Guardia Civil y policías— y Grupos de Limpieza, que montaron dispositivos represivos en los pasos obligados de montaña. Pero las represalias indiscriminadas de las Columnas de Operaciones y de los regulares

incrementaron las simpatías y la solidaridad de los vecinos hacia los huidos. Aunque, en general, la actitud del grueso de la población fue mantenerse neutral frente a los emboscados y las fuerzas represivas, en la línea de pragmatismo característica del mundo agrario. No generalizaron las delaciones, pero se resistieron a mantener una solidaridad activa con los fugitivos. En el espacio de lo simbólico, se estaban enfrentando el pueblo español (republicanos) contra la nación española (militares). Pero una mayoría de los españoles parecía ajena al conflicto.

El mayor apoyo para los huidos les vino dado por las familias y amigos, que alimentaron redes de solidaridad vitales para la supervivencia de los hombres del monte. Pero los escapados y sus familiares terminaron convirtiéndose en el eslabón débil de la cadena represiva. Partidas de «camisas nuevas» metamorfoseadas al falangismo más tosco y violento recorrían los pueblos y ciudades a la búsqueda y captura de republicanos desafectos que se habían echado al monte, a los que se ejecutaba al margen de toda legalidad, incluida la franquista. Lo mismo ocurría con sus familias, acosadas mediante malos tratos, visitas periódicas a cuarteles de la Guardia Civil y multas reiteradas y onerosas en un tiempo de penuria. Posteriormente, se deportó a los familiares a otras provincias, con las secuelas económicas y emocionales subsiguientes. Miembros de la familia del huido César Terrón Abad fueron confinados en Amorebieta (Vizcaya) y algunos de David Fuentes Álvarez «Velasco», conducidos a Figueras de Castropol (Asturias). La mujer de Benigno Andrade García «Foucellas» fue confinada en Valladolid, y estaba en la ciudad castellana cuando le comunicaron la falsa muerte de su marido. Enfermó, muriendo poco tiempo después. Isidoro Cicero describe cómo en Santander murieron dos muchachas al estar sus padres en la cárcel, lo que no fue un caso excepcional. A la madre y ocho hermanas del toledano «Rubio de Navahermosa» las deportaron a Valencia y a su mujer, Paula Sánchez Miguel, y a un hijo de tres años —a los otros dos los internaron en el hospicio de la capital—, a Valencia^[21]. Entre los vecinos adictos al régimen aumentaron los confidentes y delatores, auténtica casta promovida por las autoridades franquistas para efectuar una operación quirúrgica destinada a extirpar del cuerpo social a las familias consideradas desafectas al régimen. No es extraño, por tanto, que entre los huidos o guerrilleros abundasen familias al completo.

Un ejemplo lo constituyó la familia Rodríguez López. Naturales de Soulecín (Orense), Domingo fue uno de los primeros en esconderse en los montes de Casayo. Un hermano, Rogelio, que se había escondido en el domicilio paterno al producirse la sublevación militar, convenció a su hermano Sebastián, soldado del Ejército franquista, para que desertara durante un permiso, cosa que hizo, huyendo los dos al monte con Domingo. A raíz del hecho, fuerzas de represión y falangistas empezaron a hostigar a la familia, por lo que otro hermano, Alfonso, decidió seguir la misma trayectoria. Como represalia, una cuadrilla de falangistas asesinó a los padres de los

huidos, quienes recogieron a sus dos hermanas, Antonia y Consuelo, y las escondieron en casas de enlaces. Resulta casi un pleonasma relatar el destino de esta familia como resultado de su desafío a la dictadura. Pero los ejemplos abundaron a lo largo de la historia del maquis. Otro caso estremecedor fue el de los hermanos Jurado Martín, naturales de la localidad malagueña de Torrox y conocidos como «Los Frailes». Los tres hermanos (Manuel «Clemente», Rafael «Nico» y Antonio «Felipe») murieron en la guerrilla, a su cuñado Andrés le aplicaron la «ley de fugas» y la hermana, Nieves, enfermó y murió como secuela de las sucesivas tragedias familiares. Los padres de los hermanos Jurado Martín completaron un panorama de infortunio. Después de hacerse cargo de los nietos huérfanos y marchar a Barcelona, los recuerdos los persiguieron: el padre se suicidó arrojándose al tren y la madre acabó sumida en la locura. Hay que reseñar también a los cinco hermanos Martínez Benítez, de la localidad cordobesa de Villaviciosa, que se incorporaron al monte en 1946. O a los hermanos Diego, Francisco y Julián Moreno Barragán, naturales de Cortes de la Frontera (Málaga), que perdieron la vida en las guerrillas gaditanas, al igual que los granadinos hermanos Quero (Antonio, José, Pedro y Francisco Quero Robles). En Cataluña destacaron los hermanos Sabaté Llopart, José, Manuel y Francisco, el famoso «Quico». En Asturias, los hermanos Argüelles (Ursino, Eduardo y Segundo). En este último caso, la madre y la hermana de los huidos fueron asesinadas por las fuerzas de represión como venganza. El censo de guerrilleros de la misma familia resultó amplio y dramático^[22]

En esta coyuntura altamente represiva, los huidos respondieron con idénticos métodos, produciéndose una dialéctica represión–contrarrepresión que perdurará hasta que surjan las primeras organizaciones guerrilleras. Acosados por falangistas, espontáneos y la fuerza pública; desasistidos por los partidos y el Gobierno republicanos, estos hombres, más partidarios de la acción que teóricos, pelearon sin objetivos políticos concretos, basando su lucha por la vida en responder a la violencia con la violencia, en algunos casos indiscriminada. Las acciones de penalización y autodefensa se fijaron en las cabezas visibles del poder franquista: autoridades y «elementos de orden» más significados, falangistas, confidentes y sacerdotes. «Realizan un trabajo de liquidación de los elementos más destacados del fascismo por todas las comarcas de Galicia y León», escribió en su *Informe* Ramiro Losada^[23], combatiente y huido en las montañas gallegas. Uno de los ejemplos que permiten radiografiar esta violencia, que también poseía un carácter preventivo y pedagógico, lo aportó la muerte de varios párrocos de la diócesis de Astorga; un dato sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta el reducido número de curas abatido por la resistencia armada. Aunque en el territorio episcopal maragato (integrado por varios partidos judiciales de las provincias de León, Orense y Zamora) no existían contenciosos especiales entre el clero y los huidos, se produjo la reacción más

violenta contra los eclesiásticos en toda España. Los sacerdotes ejecutados por huidos y guerrilleros galaico-leoneses y zamoranos entre 1937 y 1945 fueron los siguientes: Marcos Otero Álvarez, Benigno González Vega, Eloy Gómez Vidal, Juan Álvarez García, Raimundo Alonso Fernández, Tomás Chimeno, Manuel Fernández Cereijo, Miguel Guerra, Manuel Garrido Fernández, Antonio Almanza Riesco, Tomás Fernández, A. Voces Jolías y Rocsvinto Ruiz Sánchez. Al margen del obispado de Astorga, y atribuido a Serafín Fernández Ramón «Santeiro», también hay que reseñar entre los curas asesinados a Benigno García Méndez^[24]

El clero español, con las excepciones de rigor, se puso inmediatamente y a entera disposición de los sublevados, y una prueba la constituyó esa medieval y estremecedora *Carta colectiva de los obispos españoles a los del mundo con motivo de la guerra de España*, en la que se ratificaban en todos los tópicos de los rebeldes —existencia de un complot internacional contra España— y legitimaban la guerra adjetivándola de «plebiscito armado». La *Carta* supuso la constatación de que la Iglesia española estaba decididamente en contra de toda sociedad plural, civil y democrática. La defensa de un cristianismo litúrgico e intolerante como eje vertebrador de la sociedad española era la petición de las jerarquías católicas.

Además de convertirse en el «factor legitimador» de la rebelión, la guerra y la posterior dictadura, la Iglesia suministró a los alzados contra la República la coartada moral que necesitaban para justificar la represión. Incluso fueron en muchos casos los propios clérigos quienes se opusieron a todo intento de reconciliación y perdón. Por contra, las recomendaciones de religiosos y religiosas constituían el mejor aval para que los republicanos prisioneros no acabaran ante los pelotones de fusilamiento o en algún descampado cercano al recinto penitenciario. Abundan los testimonios sobre el clero trabucaire y la actitud intransigente contra los vencidos: «Otro ejemplo de represalias clericales fue el de la cárcel de Castellón de la Plana. Cierta número de presos políticos hicieron constar su condición de no creyentes y pidieron que no se les obligase a ir a misa. No sólo no se hizo el menor caso de su petición, sino que el cura y los funcionarios les humillaron aún más a causa de lo que consideraban una intolerable insolencia. Un domingo, en misa, cuando se dio la señal de arrodillarse, permanecieron en pie. Les hicieron salir a puñetazos y patadas, y una vez acabada la misa, los fusilaron en el patio de la cárcel delante de los demás preso»^[25]. También hubo curas delatores y algunos fueron confidentes de las autoridades, recurriendo para ello incluso al confesionario.

La mayoría de los sacerdotes abatidos, como las matanzas de civiles —en Lago de Carucedo o en San Telmo de Cortegada—, lo fueron antes de 1945, fecha en la que surgieron por todo el país las primeras agrupaciones guerrilleras. Para la guerrilla organizada, matar a los párrocos y vecinos de las aldeas no era rentable políticamente —salvo en casos de confidencia, delación o persecución notoria contra los

antifranquistas—, por cuanto su vida dependía de la actitud de los habitantes de esos pueblos. En casos puntuales, el giro fue tan radical que la colaboración de los curas devino en algo habitual. Las casas de los sacerdotes se convirtieron en lugares seguros para pernoctar con tranquilidad por motivos obvios: nadie, en los primeros tiempos de colaboración, podía sospechar de esas alianzas. Alida González Arias «Penca», compañera del guerrillero Manuel Girón Bazán, estuvo viviendo durante años en la casa de un cura de la comarca leonesa de la Cabrera, y por toda la geografía española existieron sacerdotes comprometidos con el maquis. El párroco de Torrox (Málaga), Bartolomé Payeras Llinás, envió una carta a Ángel Herrera, obispo de Málaga, en la que «realiza una abierta denuncia de los procedimientos franquistas; parece que colaboró con la guerrilla y finalmente fue trasladado de parroquia», según Azuaga Rico. El párroco de Blimea (Asturias), Félix Pastor Muro, era un enlace activo de la guerrilla asturiana, al igual que el de Mandayo (La Coruña), donjuán, conocido en el maquis como «Coyote». Los curas igualmente hicieron a veces de intermediarios para que se entregaran los del monte. En unos casos de buena fe, y con éxito. En otros con mala intención, y «también» con éxito. En algún caso concreto desconocemos el propósito pero sabemos de los efectos devastadores: en el pueblo onubense de La Zarza se entregaron 18 huidos por mediación del cura, y a los tres meses de estar en el pueblo las fuerzas represivas los arrestaron y fusilaron extra judicialmente^[26].

Al margen de los huidos, destacó igualmente el comportamiento de unos hombres que eligieron hacerse invisibles para eludir la represión, los «topos». Aunque en los primeros momentos de la sublevación y conforme progresaban las conquistas de los «nacionales» un número importante de personas afines a la causa republicana habían optado por esconderse en los lugares más dispares, muchos de ellos acabaron entregándose o fueron detenidos por las fuerzas de orden. Por lo tanto, consideramos «topos» a los hombres ocultos durante varios años después de concluida la contienda civil. Más complejo resulta determinar sus características, de difícil homogeneización. Con ellos no funcionan los análisis políticos o los esquemas convencionales, ya que cada uno representaba una historia diferente, personal. Pero tenían algunas notas comunes: no estaban acusados por las autoridades franquistas de «delitos de sangre»; no tuvieron cargos especialmente comprometidos o relevantes en la República; su militancia política —en el supuesto de tenerla: no era lo habitual— se produjo en partidos republicanos moderados, y, además, solían pertenecer al medio rural, al campesinado, y no eran proclives a tomar posturas radicales, de enfrentamiento. Despreciados por huidos y guerrilleros por su actitud pasiva frente al régimen, intentaron desmarcarse de la guerrilla. Gregorio García Diez «Gorete» ha insistido en las diferencias: «En el monte estuve con Lisardo. Era éste un guerrillero que andaba por allá... (...). *Nunca quise cuentas con las guerrillas. Nunca. Ese*

hombre había cometido delitos. Y yo, al tratarlo, le convencí para que no me dijera dónde se encontraba... no fuera que, en algún encontronazo, se le descubriera y me echara a mí las culpas. Yo no tenía nada que ocultar... Estaba limpio de toda culpa»^[27]. Como ocurre siempre en contextos altamente conflictivos, algunas víctimas mimetizan y asumen las tesis de los verdugos en su afán de apuntar diferencias con otras víctimas.

Ejemplos de «topos» abundaron por toda España. Así, Eufemiano Díaz González, campesino de La Mata de Curueño, en la provincia de León, que permaneció enterrado vivo durante diez años en una cuadra de ovejas, en cuyo suelo excavó una fosa que le servía de escondite contra las periódicas visitas de la Guardia Civil y la vigilancia de sus vecinos falangistas. Sobre la fosa los familiares colocaban unas tablas y encima de ellas, estiércol. Por las noches, salía del hoyo «para estirar las piernas». Eufemiano Díaz, que era apolítico y se había pasado al frente republicano de Asturias porque, según su padre, «había que estar al lado del Gobierno», se entregó en 1947 —llegó a la capital entre una notable expectación— y el consejo de guerra posterior lo dejó en libertad sin cargos. Un caso parecido —el recurso a la cuadra de los animales— fue el de Patricio Sierra Grajo, que había sido Guardia de Asalto y que vivió oculto durante 12 años en el pueblo pacense de Orellana la Vieja. O Protasio Montalvo Martín, militante ugetista, alcalde del pueblo madrileño de Cercedilla durante la República y que estuvo escondido durante 38 años, tres de los cuales los pasó recluido en una conejera y el resto en una vivienda enfrente de su propia casa. Durante esos años no pudo asistir a los entierros de su madre y de cuatro de sus hermanos. Jesús Torbado y Manuel Leguineche han sacado a la luz numerosos testimonios de «topos» que permanecieron ocultos durante más de treinta años. Abundan los casos sorprendentes, desde quien permaneció durante nueve meses escondido en un alcornoque, como Ramón Jiménez, de Arcos (Cádiz), hasta dos hermanos, Juan y Manuel Hidalgo España, que estuvieron ocultos durante 28 años a escasos 20 metros de distancia y no se vieron nunca durante ese tiempo. También el de Teodomira Gallardo, de la Zarza de Tajo (Cuenca), «la única mujer topo de la que tenemos noticia». Los testimonios de los «topos» evalúan con precisión el miedo que recorrió el país desde que el 18 de julio de 1936 una parte de los militares y el bloque de poder tradicional decidieron acabar con la experiencia republicana^[28].

XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero

La consolidación de los grupos de huidos en Galicia, Extremadura, Andalucía, Asturias, Santander y León se convirtió en motivo de alarma para las autoridades franquistas. No sólo les preocupaban los problemas de orden público en sus

respectivas zonas, sino que temían que el Gobierno republicano agrupara a los huidos y prófugos como una guerrilla para actuar en la retaguardia. Según el *Informe* de Ramiro Losada, «entre los montes de Galicia y León, existen organizados unos 20 000 hombres y mujeres, cantidad que se ve aumentada cuando son movilizadas nuevas quintas». En Asturias, algunos testimonios hablan de 9000 hombres errando por las montañas. Obviamente, las cifras parecen exageradas, pero testimonian el importante contingente de huidos que operaban en los límites provinciales de Galicia, Asturias y León. Parece lógico que cuando los franquistas dominaban un territorio — por ejemplo, después de la caída del frente Norte— el número de huidos pudiera alcanzar varios miles. Pero en pocas semanas la «normalización» reducía las cifras significativamente.

La documentación y los testimonios denuncian, de todos modos, que el problema era verdaderamente grave, y las autoridades franquistas combinaron la solución policial y las promesas como método para acabar con los huidos. En la sierra de Huelva, las fuerzas «nacionales» arrojaron durante los primeros meses de la guerra octavillas en las montañas donde se emboscaban los huidos y les prometían el perdón a cambio de la entrega. También en Asturias, en el año 1939, se lanzaron miles de octavillas para que los huidos se entregaran, prometiendo el perdón a quienes no tuvieran delitos de sangre o un entierro en sagrado y con ritual cristiano a los otros^[29]. Pero al mismo tiempo que las promesas, los franquistas mantenían un acoso implacable a los del monte. «El hecho de atravesar la región montañosa o de hallarse en ella sin tener una justificación clara del motivo y del fin perseguido podrá ser considerado como rebelión o ayuda a la rebelión», señalaba el bando del general Queipo de Llano, alarmado por la evolución de lo que había bautizado como el «frente de las sierras». La situación en Huelva llegó a ser tan grave que las autoridades proclamaron el estado de guerra en agosto de 1937. En los territorios de huidos se producían constantes requerimientos de las autoridades provinciales solicitando fuerzas para combatirlos. En junio de 1937, el comandante de las fuerzas franquistas de Orense mandó un telegrama al jefe del Ejército del Norte para solicitarle el regreso de los 180 guardias civiles enviados para el frente de Madrid porque era incapaz de hacer frente a los huidos armados de Orense, Zamora y León^[30].

El régimen franquista, consciente de la situación en las montañas galaico-leonesas, nombró al teniente coronel Pedro Romero Basart, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, como jefe de Operaciones de Limpieza, efectuando con éxito varias arremetidas contra los focos de resistencia. Las autoridades militares también destinaron al noroeste español un elevado número de soldados para combatir a los huidos. Según fuentes oficiales, las tropas destinadas a esa misión fueron 15 tabores de regulares, ocho batallones de Infantería y un grupo de obuses, distribuidas

en seis circunscripciones: Mieres, Infiesto, Grado, Cangas de Narcea, Lugo y Ponferrada^[31]. Lo mismo ocurría en Andalucía y Extremadura. Prueba de la repercusión del fenómeno de los huidos, tanto en el interior de España como en el extranjero, fue el informe del embajador alemán Stohrer del 19 de mayo de 1938 al Ministerio de Asuntos Exteriores de su país: «La España nacionalista carece todavía, en muchos aspectos, de unidad y de solidaridad. Los que conocen bien la situación evalúan en un 40% aproximadamente el número de personas políticamente inestables en la España blanca. Ese hecho queda demostrado por una serie de atentados, por los intentos de destrucción de puentes, por los accidentes que sobrevienen en los polvorines, por los incendios provocados y por una guerrilla que, todavía hoy, azota el sur de España y sobre todo Asturias»^[32].

Pero el Gobierno republicano, abismado en el cantonalismo militar, no quiso o no pudo aprovechar el importante potencial bélico que representaban los emboscados, aunque se realizaron intentos para organizarlos. Fueron los libertarios de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), más dispuestos a la lucha en las barricadas que a combatir en un ejército regular, los primeros que apoyaron la creación de guerrillas vinculadas al Ejército republicano. Dirigentes confederales como Diego Abad de Santillán y Juan García Oliver trataron de conseguir la formación de grupos guerrilleros, aunque no lograron convencer ni a los asesores soviéticos ni al ministro de Defensa, el socialista Indalecio Prieto. Cuando las milicias anarquistas fueron militarizadas —episodio que desagradó tanto a cenetistas como a faístas—, insistieron más decididamente en la necesidad de las guerrillas. Abad de Santillán y otros compañeros redactaron en octubre de 1937 una memoria confidencial para el Comité Peninsular de la FAI en la que defendían la importancia de la guerra irregular para hostigar las comunicaciones y dificultar la intendencia en el bando enemigo. El 20 de agosto de 1938 el Comité Peninsular de la FAI presentaba al Gobierno de la República un informe en el que reiteraba la importancia de ejércitos irregulares y además los justificaba con argumentos tan singulares para militantes internacionalistas como el que «la guerrilla es consustancial con el temperamento español»^[33].

También los comunistas, al menos en teoría, trataron de articular grupos de guerrilleros durante la guerra civil. José Díaz, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), señalaba en su informe al Comité Central, celebrado en Valencia en marzo de 1937, que «hay que impulsar la formación de grupos guerrilleros que ya están actuando a espaldas del enemigo»^[34]. Pedro Checa, por su parte, planificó un proyecto de guerra de guerrillas, aunque los delegados de la Komintern o Internacional Comunista (IC) rechazaron el proyecto tachándolo de «derrotista», una de las acusaciones más graves entre los comunistas. El decisivo papel institucional del PCE durante esos años hacía inviable que, pese a la retórica y

a las resoluciones congresuales, existiera voluntad política de potenciar esa modalidad de lucha. La experiencia de las colectivizaciones y su incidencia en la marcha de la guerra pesaban negativamente. Puede afirmarse rotundamente que existía una manifiesta hostilidad del PCE y una parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hacia la hipotética formación de unidades guerrilleras y, mucho más, a otorgar carta de naturaleza administrativa a esos soldados sin ejército desperdigados por todo el país. Desde un punto de vista exclusivamente militar, el primer intento de organizar a los huidos partió del más brillante de los estrategas republicanos, el general Rojo, quien solicitó a finales de 1936 la formación de unidades guerrilleras en Extremadura vinculadas al Ejército Popular de la República.

Pese a todas las reticencias y dificultades, la realidad de los núcleos de huidos resultaba tan evidente que los diferentes gobiernos llevaron a cabo actividades relacionadas con su organización, pero eran puramente cosméticas. El Gobierno republicano creó en el verano de 1936, con el impulso del libertario Consejo de Aragón, el Servicio de Información Especial Periférico (SIEP), entidad que se dedicó al espionaje en territorio enemigo. Participaron en este organismo destacados políticos, como el enigmático agente de la Komintern Heriberto Quiñones, y futuros guerrilleros como Francisco Corredor Serrano «Pepito el Gafas», Ramón Vila Capdevila «Caraquemada» y José Mir «Cona». Sin embargo, fue Juan Negrín, entonces jefe del Gobierno y ministro de Defensa, quien en septiembre de 1937 alumbró el XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero —que era la denominación del Ejército republicano vasco hasta la caída del frente Norte—, con la misión de dificultar los movimientos enemigos. Conforme al *Diario Oficial* de 1 de octubre la jefatura se le entregó a Domingo Ungría, y fue nombrado comisario político Pelegrín Pérez. También participó en esta unidad Cristino García Granda, uno de los jefes guerrilleros más representativos en España y en Francia. Los jefes de división eran los comandantes comunistas Manuel Cristóbal Errandonea (que provenía de la 2.^a División de Euskadi) y Luis Bárzana Bárzana (jefe de la 57.^a División Asturiana). A este Cuerpo de Ejército se le asignaron cuatro zonas de actuación: Andalucía, Aragón, Centro y Extremadura. Después de una breve campaña de reclutamiento, se les impartió a los alistados un curso de instrucción guerrillera de ocho semanas de duración en las escuelas de Benimamet (Valencia), Pin de Vallés (Barcelona) y Villanueva de Córdoba^[35]. Según Tuñón de Lara, 1938 fue el año más importante en la actuación de las guerrillas y «Franco llega a ordenar personalmente la destrucción de las partidas guerrilleras a su Servicio de Información y Policía Militar, en agosto de 1938»^[36]. A corto plazo, los objetivos del XIV Cuerpo de Ejército consistían en atacar las comunicaciones de los rebeldes, dificultar su avituallamiento o efectuar acciones especiales. A largo plazo, se pensó para esta unidad guerrillera en la posibilidad de encabezar una guerra de guerrillas contra el franquismo en caso de

derrota de los republicanos.

Aunque el XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero efectuó misiones importantes — sobre todo en Andalucía, Extremadura, Aragón y Toledo—, la de mayor repercusión se realizó en el batallón disciplinario de Fuerte Carchuna (Granada), donde se concentraba un número importante de penados políticos asturianos llegados en marzo de 1938. En la mañana del 23 de mayo, los guerrilleros atacaron el fuerte por mar y consiguieron liberar a los 300 prisioneros, que fueron conducidos posteriormente a la zona republicana^[37]. Pero el mayor triunfo de esa agrupación guerrillera, al margen de acciones puntuales, consistió en aglutinar a muchos de los huidos de Extremadura y Andalucía, y los mantuvo vinculados al Ejército de la República. El mayor fracaso, que no conectó con los territorios en donde el número de huidos era más importante: Asturias, Galicia, León y Santander. La escasa perspectiva política del poder republicano dejó sin objetivos a esos hombres, curtidos en las luchas políticas, y ahora abocados a actividades cercanas al bandolerismo.

Juan Negrín, partidario de prolongar la guerra para enlazar con un hipotético conflicto europeo, no impuso su prestigio en el bando republicano para activar unas guerrillas que podían haber sido el pretexto para una intervención aliada en España. Los republicanos no quisieron prepararse para la clandestinidad que sigue a las derrotas en una guerra de exterminio. Lo pagarían con creces a corto plazo.

Los emboscados de León y Galicia

Desde los primeros momentos del alzamiento militar, dos grupos de huidos, liderados por David Fuentes Álvarez «Velasco» y César Terrón Abad, empezaron a ser conocidos en el occidente de la provincia de León. El primero actuaba por los ayuntamientos de Vega de Valcarce y Balboa, en León, y Piedrafita del Cebrero, en Lugo. El segundo, por el ayuntamiento de Fabero, en los límites entre Asturias y León. Por el área de Peranzanes (León) y San Antolín de Ibias (Asturias) operaban otras partidas, la más importante de las cuales estaba dirigida por Serafín Fernández Ramón «Santeiro». En la margen izquierda del río Sil, empezó a destacar un grupo que ya actuaba por la zona desde los inicios de la guerra y que tenía como radio de acción los ayuntamientos de Carucedo y Borrenes. Sus integrantes más conocidos eran Manuel Álvarez Martínez «Gaitero», Gilberto Cuadrado Soto, José Blanco «Palitos» y Abelardo Macías Fernández «Liebre». Por el noroeste de la provincia, en los límites con Asturias y Lugo, abundaban los hombres dispersos, que se unían en pequeños grupos de manera inestable y con el fin de defenderse mejor. Varios colectivos de huidos se asentaron entre los ayuntamientos de Arganza y Cacabelos, destacando la partida de los hermanos Voces Canóniga «Los Pitaciegas», cuyos

integrantes eran los hermanos Salvador, Pedro y Demetrio. Operaban sobre todo por el pueblo de Quilos, y también era de ese pueblo otro de los jefes de la zona, Joaquín Lage Fernández «Xoqui». La mayor parte de los miembros de estas cuadrillas no habían combatido en la guerra civil. Eran prófugos que no se habían presentado a sus respectivas movilizaciones por parte del Ejército sublevado ni habían podido o querido alcanzar el frente republicano de Asturias cuando León fue ocupada por los «nacionales».

Los huidos de León, Zamora y Orense confluían en la zona de los montes de Casayo, en la sierra del Eje, que se eleva entre los límites provinciales de León y Orense y que se convirtió en el «santuario» de la guerrilla del noroeste. La sierras de Segundera (Zamora–Orense) y Cabrera (León–Zamora) completaban las bases geográficas de estos huidos, que se desplazaban en un territorio limitado por núcleos de población como Ponferrada (León), Puebla de Sanabria (Zamora) y Viana del Bollo (Orense). Predominaban los mineros de las comarcas del Bierzo y de Casayo —además de un importante número de mineros asturianos que habían llegado a la zona para trabajar en la línea férrea entre Orense y Zamora—, así como jornaleros y obreros de las tres provincias. Provincias minifundistas por excelencia, los pequeños propietarios rechazaron incorporarse a la resistencia en un territorio en el que empezó a destacar Manuel Álvarez Arias «Bailarín», natural del pueblo de Casayo y sin militancia política conocida. Aunque circularon muchas versiones sobre la razón de su huida al monte (asesinato de una vecina), la más fiable indica que, por su profesión de cartero, hacía de enlace entre los huidos y sus familiares y que, al ser denunciado, optó por ocultarse en la sierra del Eje, que conocía perfectamente. Acompañado al principio por José Vega Seoane «Ánimas», Domingo Rodríguez López «Xirolo» y Alfredo Yáñez Domínguez «Aguirre», «Bailarín» se convirtió en un emboscado muy particular. Entre la oposición al régimen y el bandolerismo, concluirá su periplo traicionando a sus propios compañeros^[38].

De estas partidas de Casayo, aunque no con sus integrantes iniciales, surgió el grupo que aglutinará la resistencia antifranquista y hará posible la primera organización armada de posguerra. De momento, los huidos se dedicaban exclusivamente a una lucha por la propia vida, alejados de cualquier pretensión política. Aunque su toma de posición ideológica era manifiesta, la heterogeneidad de los grupos y la ausencia de una organización política provocaron que el objetivo principal de la mayoría se redujera a la supervivencia, lo que se traducía en una actitud exclusivamente defensiva o en el proyecto de marchar al extranjero. Esta última opción, muy comprometida, sólo era posible a través de Portugal, y Joaquín Pérez «Quinito», encargado de preparar las fugas, tenía en el alcalde de Pinheiro Novo a uno de sus principales enlaces. La red de evasión funcionaba con fluidez, y la tarifa exigida para ser conducido hasta Oporto —desde donde se embarcaban para un

tercer país— era de 1000 pesetas, una cifra importante para la época. Mientras tanto, casi todos los grupos merodeaban en zonas de las que eran nativos, apoyándose en amigos y familiares, debido a la falta de una infraestructura siquiera elemental. Pero esa solución pronto se manifestó como especialmente comprometida, porque, en su intento de acabar con los focos rebeldes a cualquier precio, las fuerzas de orden comenzaron a presionar de manera violenta a los familiares de los huidos. La actitud de las autoridades ocasionó secuelas a corto y largo plazo. A corto plazo, porque algunos familiares se vieron obligados a unirse a los del monte para eludir la coacción reiterada de las fuerzas represivas. A largo plazo, porque consolidará la red de enlaces y coadyuvará al nacimiento de la guerrilla organizada. Entre las dos etapas se desarrolló un periodo dominado por la violencia en ambos bandos.

Poco a poco, Casayo, feudo de «Bailarín», llegó a ser el centro de los huidos gallegos y leoneses. En efecto, una serie de ex combatientes llegados a la zona tras la caída del frente Norte en octubre de 1937 se encaminaron hacia los montes de Casayo. Ahora bien, más que unirse a «Bailarín», simplemente se limitaban a compartir un territorio. Entre los numerosos efectivos que se incorporaron a Casayo se encontraban Manuel Girón Bazán, Eduardo Pérez Vega «Tamarón» y Marcelino de la Parra Casas. En la comarca muy pronto empezó a destacar la figura legendaria de Girón, jornalero, que ya en 1936 era requerido por «coacción y disparo» en el boletín provincial junto con su amigo íntimo José Losada Yáñez, que se unió al grupo de Casayo y que morirá al año siguiente en un enfrentamiento con la fuerza pública. Girón, que tenía un importante ascendiente sobre una parte de los huidos, se convirtió, junto con «Velasco» y «Santeiro», en la «bestia negra» de la resistencia según las autoridades políticas y policiales, para quienes devino en auténtica obsesión y al que atribuyeron una actividad que no siempre tuvo correspondencia con lo ocurrido realmente. Así, historiadores cercanos al franquismo le atribuyen «una decena de crímenes», la prensa franquista «treinta crímenes» y los servicios oficiales de la Guardia Civil, «numerosos crímenes». La trayectoria de Girón ejemplifica cómo se han construido una parte de las historias sobre los maquis.

Lo más característico de Casayo era el constante fluir de huidos procedentes de otras zonas, llegando a cobijar a más de cincuenta personas y convirtiéndose en un escenario seguro para los antifranquistas galaico-leoneses. A los ya conocidos, se incorporaron a partir de 1939 nuevos miembros procedentes del grupo de «Liebre», así como algunos ex combatientes de Asturias que habían estado escondidos cerca de sus pueblos tras la caída del frente. Los recién llegados reforzaron la línea de Girón frente al núcleo primitivo encabezado por «Bailarín», para quien Casayo era su territorio personal: las continuas incorporaciones aumentaban las posibilidades de un ataque de las fuerzas franquistas y además cuestionaban su liderazgo. Álvarez Arias encarnaba el modelo de huido reactivo a cualquier tipo de organización que favoreciera

el enfrentamiento con las fuerzas represivas, y la supervivencia era el principio y el fin de sus actividades en el monte. Pero Casayo sólo era un refugio seguro en el que las fuerzas de represión apenas se atrevían a penetrar, pese al elevado número de huidos y a pesar de la inequívoca militancia antifranquista de la mayoría de ellos. No había planes para organizarse política y militarmente con el fin de hacer frente al nuevo régimen, aunque la concentración en la Sierra del Eje había supuesto un salto cualitativo importante al alejarse de sus pueblos respectivos, con lo que suponía de tranquilidad para los familiares y, simultáneamente, de alumbrar pequeños núcleos armados que tenían que manejarse por su cuenta. Un hecho ajeno a Casayo —la llegada a finales de 1939 de un contingente de huidos asturianos camino de Portugal— imprimió un giro radical a la situación y permitió que grupos desconectados de escapados establecieran la primera organización guerrillera de la España de la posguerra.

Como la mayor parte de León, Galicia había quedado en manos de los sublevados desde el primer momento. Excepto en las zonas costeras, la posibilidad de incorporarse al frente republicano de Asturias requería una operación altamente complicada y que entrañaba importantes riesgos. En consecuencia, desde el mes de julio de 1936 abundaron los huidos, sobre todo en el sudeste de Lugo y la parte oriental de Orense (especialmente en los términos de El Barco de Valdeorras, La Gudiña y Verín), que se refugiaron en las sierras de Cabrera, Queixa, San Mamede y Cabeza de Manzaneda. Pero el centro de gravedad continuó ubicado, como hemos visto, en los montes de Casayo, en la sierra del Eje, donde convergían huidos de estas dos provincias, además de los procedentes de Lugo y Zamora. Una partida gallega formada por Mario Rodríguez Losada «Langulio», Gervasio Cereijo Incógnito, Manuel García «Porco» y Jesús Quiroga Arias «Chucho» se desplazaba por el oriente orensano y trabó relación con el grupo de Girón en Casayo, aunque eran unas relaciones periódicas e inestables. Por el resto de Galicia también se asentaron importantes partidas de huidos, incluidas las comarcas costeras de La Coruña y Lugo, en una línea discontinua que comunica Vigo (Pontevedra) con Vivero (Lugo), pasando por El Ferrol (La Coruña). No obstante, como escribe Hartmut Heine, que ha historiado la guerrilla de la región, entre los hombres del monte gallegos se pensaba en un principio que la represión sería algo pasajero y no alcanzaría las proporciones que adquirió posteriormente^[39]. De hecho, cuenta cómo, pese a las matanzas que ya perfilaban la naturaleza de la represión, los jóvenes de la aldea de Regüela–Cabanas (próxima a El Ferrol) durante el día ayudaban a sus familiares en las faenas del campo, basando su seguridad en un sistema de alertas con el que los vecinos avisaban cuando llegaban los falangistas o los guardias civiles. «Langullo» confirma esa actitud: «De cierto, ó principio criamos que aquilo de andar de fuxidos era andar de carallada»^[40]. La contundencia expresiva del idioma gallego hace innecesaria

cualquier traducción. Pero la cacería desatada en Galicia superó las expectativas más pesimistas, y ocasionó una cifra importante de muertos entre los republicanos, así como entre los huidos. A finales de 1939 apenas permanecían en los montes pequeños grupos, entre los que destacaban lugareños y también antiguos guardias de asalto, ex marineros de los barcos de guerra de El Ferrol, guardias civiles o soldados. No eran cuadrillas activas, empero, ya que se limitaban a la difícil tarea de sobrevivir. Había algunas excepciones, como la partida que actuaba por la cuenca del río Eume, en la comarca de El Ferrol, liderada por José Vázquez Mauriz «Patitas», comunista, y Ramiro Martínez López «Zapatero», ex concejal de Cabanas. En este último caso, el grupo se estaba transformando: de la simple supervivencia a una organización de autodefensa que empezaba a perfilar objetivos políticos.

En la costa de La Coruña destacaban los núcleos de huidos en los ayuntamientos de Cedeira y Ortigueira, al mando de Manuel Freire García «Cagallo». En los términos de Arzúa y Melide y en el otro extremo del límite provincial, en la comarca de Palas del Rey, actuaba desde los comienzos de la guerra otro foco integrado por Ramón Rodríguez Varela «Curuxas», Benedicto Fuentes Díaz y José Vázquez Otero. En el interior de la provincia, sobresalía un grupo que operaba por los montes de Graña, en los términos de Curtis y Mesía, y eran cenetistas el grueso de sus integrantes, entre los que destacaban Emilio Pérez Vilariño «Claudio Beas», Manuel Pena Camino «Flores» y Jesús Lavandeira Pérez, que había sido secretario general de la CNT de Betanzos, además de Benigno Andrade García «Foucellas», el más famoso de los resistentes gallegos.

La partida mejor organizada, no obstante, era conocida como Grupo Neira y actuaba entre las comarcas de El Ferrol y la localidad lucense de Vivero. Dirigida por José Neira Fernández, en 1941 contaba con más de una docena de miembros. Pero su importancia radicó sobre todo en que algunos de sus integrantes desempeñaron un papel relevante en la futura organización guerrillera del noroeste de Galicia, el más conocido de los cuales fue Marcelino Rodríguez Fernández «Marrofer». Maestro nacional y comunista, alcanzó una importancia determinante en la resistencia armada gallega. Mantenía contacto igualmente con el Grupo Neira el emboscado de más renombre en la banda septentrional de Lugo, Luis Trigo Chao «Guardarríos». En la zona de Chantada, al suroeste de Lugo, existió durante la guerra un grupo de huidos y entre sus miembros destacaban Salvador Valcárcel Montenegro «Recaré» o «General Recaré» y Jesús López Suárez «Gazapo»^[41]. Por lo que se refiere a la provincia de Pontevedra, los grupos de huidos se instalaron en torno a núcleos industriales como Vigo. Por las proximidades de esta ciudad actuaba desde 1938 una partida aglutinada en torno a Rogelio García Morales «Maletas» y su hermano José. «Maletas», natural del pueblo de Lavadores, y parte de su grupo murieron antes de 1939. Cerca de Pontearreas se movía el grupo de Manuel González Fresco, y por la comarca de

Gondomar, el de Manuel Pintado «Lolito». Cuantitativa y cualitativamente, Pontevedra fue la provincia gallega menos significativa en la resistencia contra el franquismo.

Por lo que respecta a las bajas en Galicia y León, el grupo que acaparó la atención de las autoridades leonesas fue el de «Velasco», al que se responsabilizaba —en la mayor parte de los casos, sin fundamento alguno— de todas las acciones ocurridas en la zona septentrional de El Bierzo. Según fuentes oficiales, su grupo lo componían seis o siete personas cuando el 6 de febrero de 1939 tendieron una emboscada a una patrulla mixta Guardia Civil–Ejército en la que murió un miembro de la Benemérita y resultaron heridos tres soldados^[42]. El hostigamiento de las fuerzas encargadas de limpiar la zona de focos rebeldes, los registros domiciliarios y las delaciones determinaron reacciones de una extrema violencia (y cuyo ejemplo más aterrador se produjo en Lago de Carucedo). El grupo de César Terrón se internó en Asturias para burlar la presión y en Llanedo liberaron a José Fernández Pérez, al que llevaba detenido una patrulla de falangistas y guardias civiles. En el enfrentamiento murió un guardia civil. El acoso a la partida de Terrón se intensificó a raíz de la muerte del párroco de Fresnedo, el 30 de agosto de 1938, a quien los huidos acusaban de haber inducido a falangistas de Toreno para que asesinaran al maestro de Finolledo, Manuel Pérez Abad, tío de Terrón y «paseado» en 1936. Cerca de Chantada (Lugo), cayó Salvador Valcárcel Montenegro «Recaré» el 11 de abril de 1939 en un enfrentamiento con la Guardia Civil. También murieron en ese tiempo cuatro miembros de la partida de Jesús López Suárez «Gazapo». En el mismo año, el 11 de mayo de 1939, perdían la vida cerca de Eiresalva–Incio, en un choque armado entre las fuerzas de la Guardia Civil y un grupo de huidos, el teniente Manuel Castro Lebón y dos emboscados. El año anterior cayó cerca de Monforte un huido conocido por «Wenceslao», autor de la muerte del guardia civil Francisco González^[43]. Había acabado oficialmente la guerra civil, pero en los montes galaico–leoneses continuaba otra guerra. Oculta y silenciosa, pero guerra al fin y al cabo. Como si en ese tiempo ominoso el único código inteligible fuera el de la violencia.

La caída del frente Norte y los huidos asturianos y santanderinos

En tierras de Asturias los huidos alcanzaron una presencia importante, sobre todo a partir de que en octubre de 1937 cayera en manos de los sublevados la totalidad del frente Norte. La falta de previsión de las autoridades republicanas, el denominado Consejo Soberano de Asturias y León, motivó que la mayor parte de los combatientes no pudieran embarcarse ni en dirección a otros frentes republicanos ni hacia el exilio.

«Muchos jefes de batallones se negaron a aceptar el puesto que se les ofrecía —en el supuesto caso de que pudieran llegar al puerto correspondiente—, porque en la oferta de sus superiores no iban incluidos los hombres a su mando», escribe Juan Antonio Sacaluga. Pero las autoridades políticas y militares huyeron en su mayoría y el caos se apoderó de los vencidos. Los puertos de Gijón y Avilés estaban colapsados. Entre 8000 y 9000 milicianos se quedaron aislados, temerosos de volver a sus pueblos y sin posibilidad de huida. Pronto el número descendió drásticamente, ya que en mayo de 1938 apenas quedaban escondidos unos mil hombres en los montes. Los restantes se entregaron, fueron detenidos o muertos (más de mil en este último apartado)^[44].

La represión en Asturias adquirió caracteres de venganza, y alcanzó desde autoridades políticas (el gobernador civil, Isidro Liarte) e intelectuales (Leopoldo Alas Argüelles, rector de la Universidad de Oviedo) hasta miles de asturianos anónimos. El recuerdo de la revuelta de octubre de 1934, la importancia de los mineros en los movimientos insurreccionales del primer tercio de siglo y la determinación de los asturianos de proseguir la guerra pese a las caídas de los frentes vasco y santanderino motivaron que los verdugos se aprestasen a cobrar un altísimo tributo de sangre. Esa evidencia y el recuerdo de la represión de octubre de 1934 provocaron el intento de huida de un número elevado de asturianos. Otros miles decidieron esconderse en casas, pajares o montes. Pero era tal el número de ellos, que los pueblos asturianos se llenaron de «topos», lo que facilitaba su detección por las autoridades. Las cuencas mineras se convirtieron en la base preferida de los huidos asturianos, sobre todo la localidad de Sama de Langreo.

Pero también estos últimos, una vez comprobado que la guerra estaba perdida para la República, se plantearon como objetivo marchar al extranjero. Al margen de los intentos particulares para escapar al cerco franquista, en enero de 1939 —coincidiendo con el derrumbe del frente catalán— se organizó un proyecto masivo de huida por el puerto de Tazones. Dirigido desde Francia por Indalecio Prieto y Amador Fernández, se puso en marcha el 12 de enero, a las 12 de la noche. El toque de sirena del pozo minero de Vegatodos marcó el inicio de un intento de fuga de centenares de hombres —los diferentes autores sitúan el número entre 300 y 700—, sobre todo mineros de los ayuntamientos de Langreo y Mieres, que se pusieron en camino con destino a Villaviciosa. Los comandantes Dositeo Rodríguez «Fogonazos» y Manuel Fernández Peón «Comandante Flórez» dirigían la marcha, que se llevó a cabo en columnas de cien efectivos —entre los que predominaban ancianos, enfermos y heridos— y tenían como objetivo llegar al *bou* que los recogería en el puerto de Tazones. Detectados en la madrugada del día 14 debido a un episodio accidental —habían desertado tres soldados y al ir a buscarlos, soldados y falangistas se encontraron con la columna de antifranquistas—, los huidos tuvieron 57 bajas en los diversos enfrentamientos antes de regresar a sus bases. El bajo nivel de

preparación de las fuerzas represivas tal vez explica que una columna de medio millar de personas pudiera moverse con libertad por media provincia con pocas bajas relativas. «Comandante Flórez» y José Mata lo intentaron en otras dos ocasiones, aunque con menos hombres. Una vez por mar, desde Caravia, y otra por tierra, buscando la frontera de Francia^[45]. También el grupo de Marcelino Fernández Villanueva «Gafas», en Olloniego, efectuó en 1939 un primer intento de huir por Portugal, la frontera más próxima, aunque no lo logró. Una segunda intentona en mayo de 1940 concluirá en fracaso, aunque tuvo consecuencias decisivas para la guerrilla antifranquista en León y Orense.

Como resultaron fallidos los intentos colectivos de evasión, las montañas asturianas seguían pobladas de huidos. Predominaban desde 1937 aquellos que habían tenido responsabilidades en las organizaciones políticas y sindicales de izquierda, o cargos en el periodo republicano. Familiares, amigos y pastores les facilitaban la información de los movimientos de las fuerzas represivas y les proporcionaban el alimento y enseres indispensables para sobrevivir. Para evitar conflictos y no manejarse en el filo del bandolerismo, pagaban la comida que necesitaban, dinámica que los diferenciaba del resto de los huidos españoles. Apenas llevaban a cabo golpes económicos o expropiaciones (atracos contra personas e intereses de los franquistas) y utilizaban el sistema del «anónimo» —que era una especie de impuesto que conseguían por medio de cartas amenazantes a los partidarios del régimen— para conseguir dinero y no tener que atracar u ocasionar víctimas, algo que trataban de evitar por todos los medios. El grueso de los escapados se concentraba en las cuencas mineras y, sobre todo, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, donde se efectuó una durísima represión (261 muertos identificados y la existencia de indicios que pueden triplicar esa cifra). Pronto empezaron a sobresalir hombres como Marcelino Fernández Villanueva, en la zona de Morcín; Arístides Llana Jove, hijo del fundador del SOMA, que organizó a los socialistas en el término de Mieres; en el Ayuntamiento de Aller, los más destacados eran los hermanos Celestino y Jesús Cepedal Fernández, «los Cepedales», después de que Silvino Morán muriera el 22 de noviembre de 1937; cerca de Peña Mayor, las partidas de José Mata Castro «Tamayo», Manuel Fernández Peón «Comandante Flórez», Rafael Rodríguez «Faelón» y Manuel Fernández Casas «Lele». Desplazándose por las zonas mineras y las sierras asturianas, y sin un territorio estable, merodeaban los grupos de los hermanos Arcadio y César Ríos y los también hermanos Mario y Guillermo Morán García. Todos estos grupos eran de tendencia mayoritariamente socialista, como correspondía al dominio del PSOE y del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA) durante la República en territorio asturiano. Por lo que respecta a los comunistas, destacaba Baldomero Fernández Ladreda «Feria», mayor de milicias durante la guerra y uno de los jefes milicianos

más destacados del Ejército republicano^[46]

Entre los huidos asturianos, no había proyecto político alguno ni llevaban a cabo acciones de tipo guerrillero, y el objetivo consistía en rehuir los enfrentamientos con las fuerzas de represión. Ni siquiera efectuaron sabotajes contra las tropas acantonadas en la provincia de Asturias para evitar que fueran trasladadas a los frentes en los que todavía resistían los republicanos. Los socialistas del monte, ya desde 1937, se habían decidido por una resistencia pasiva. Como escribe Ramón García Piñeiro, muchos huidos socialistas «sólidamente barnizados por la “ética pablista”, estaban incapacitados para interiorizar el lenguaje violento al que se veía impelido todo resistente». De los cinco líderes socialistas más caracterizados entre los huidos que permanecieron en las montañas de Asturias —Mata, Fernández Casas «Lele», Fernández Peón «Comandante Flórez», Llaneza y Fernández Villanueva—, sólo los tres últimos se inclinaban aunque no decididamente por la lucha armada, pero la influencia de Llaneza sobre Fernández Peón le disuadió de dar el paso, según un informe reservado de los comunistas. Fernández Villanueva, el más decidido partidario de la vía armada, había escapado de Asturias camino de Portugal. Era Mata quien se oponía de manera frontal a la idea de organizarse militarmente y enfrentarse a la dictadura^[47].

Una parte significativa de los huidos se había concentrado desde octubre de 1937 en las sierras del Aramo, Peña Mayor y Peña Mea, y el número empezó a adquirir tal magnitud —entre 200 y 500 huidos—, que las autoridades trataron de eliminar militarmente los focos de resistencia republicana. Se prohibió el pastoreo para evitar la presencia de pastores en los montes, quemaron las cabañas y atacaron las cuevas de la zona. En las acciones represivas destacaron especialmente los integrantes de las banderas falangistas de Lugo y Valladolid. En palabras de Fernández Peón, recogidas por Adolfo Fernández Pérez: «El 8 de marzo del 38 nos avisaron nuestros enlaces de que las fuerzas de Franco iban a dar una gran batida; entonces nos trasladamos a otra montaña llamada la Chamoca, a unos 15 kilómetros de distancia de la otra (Peña Mayor) más o menos, desde donde sentimos los tiros y las bombas que tiraban para matarnos. Pero en la Chamoca no había cabañas donde refugiarnos, así que volvimos a Peña Mayor». El fracaso obligó al Gobierno a cambiar la táctica, y el Ejército de reemplazo fue sustituido por tropas regulares y legionarias, que ocuparon las cuencas mineras. Los resultados no se hicieron esperar, y ya en el verano de 1938 se invirtió la tendencia anterior. En junio fueron eliminados los huidos que se escondían en dos cuevas en la Riega del Pendón, situada entre los ayuntamientos de Nava y Piloña. Algunos murieron en el enfrentamiento y otros se suicidaron antes que rendirse. Los que se entregaron fueron ejecutados sumariamente. En julio, en la mina la Bornaina (concejo de San Martín del Rey Aurelio) fueron eliminados ocho socialistas, una mujer entre ellos^[48].

Decantada la guerra del lado franquista, el clima de terror impuesto por los vencedores, las dificultades de supervivencia ante las continuas batidas y la vigilancia de pasos forzaron a un número significativo de los que estaban en el monte a entregarse a las autoridades. También enfatizaron las promesas de gracia. En palabras de Mata: «Los aviones arrojaron sobre los montes octavillas en las que se prometía el perdón a quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre y a los demás una sepultura en tierra sagrada. Yo mismo convencí a muchos para que se presentaran a la Guardia Civil. En el monte sólo nos quedamos los que no teníamos otra alternativa»^[49]. Este proceso hizo que la mitad de los huidos dejaran el monte, y sólo aquellos que habían destacado en las organizaciones sindicales y políticas desde 1931 optaron por no rendirse, ya que conocían de antemano las consecuencias.

En la capitulación de muchos huidos coadyuvó el hecho de que no sólo tenían dificultades ellos, sino que los familiares en las aldeas estaban sometidos a una enorme presión. Marcelino Fernández Villanueva, por ejemplo, que había intervenido en la insurrección de 1934, fue detenido y torturado por su participación en la intentona revolucionaria de octubre. Como resultado de las torturas perdió la visión de un ojo, de ahí el apodo de «Gafas». Indultado primero y amnistiado después, durante la guerra fue capitán de un batallón de milicias y comisario en representación del PSOE. Al desmoronarse el frente Norte, huyó al monte. Pero en una de las periódicas batidas a las que fue sometida la zona de Olloniego, su pueblo natal, Villanueva, que se encontraba escondido en una casa mientras sus familiares habían ido a comprarle unos zapatos, fue detectado. Consiguió abrirse paso a tiros entre el grupo de falangistas, hiriendo a tres de ellos. Las represalias adoptaron perfiles dramáticos. Esa misma noche fueron asesinados quince vecinos y familiares de Olloniego, entre ellos el hermano de «Gafas», Avelino, dos tíos y un padrino. Comprobado el peligro que corrían sus familiares y amigos, decidió marchar al extranjero. En general, los familiares de los hombres del monte eran arrestados de forma sistemática y torturados regularmente. Para acabar con esa vida de sobresaltos, algunos republicanos vinculados por lazos familiares a los del monte optaron por soluciones radicales: el padre de Manuel Fernández Casas «Lele» prefirió suicidarse ante la persistencia de las torturas. Los ejemplos se multiplicaron en los territorios de huidos y guerrillas. José Murillo Alegre, padre del guerrillero José Murillo «Ríos», fue detenido y no pudo soportar los interrogatorios y las torturas. Dispuesto a acabar con su vida, se arrojó desde el punto más alto que encontró en la cárcel de Córdoba aunque no consiguió su propósito. En enero de 1947 tuvo más «suerte»: logró ahorcarse en la celda^[50]. Otras veces, la resolución al dilema correspondió a los represores. Mientras se encontraba en el monte, el gallego Mario Rodríguez Losada «Langullo» se enteró de que su progenitor, denunciado por una maestra de la comarca, había sido linchado el 10 de abril de 1937 al entregarse a las autoridades

franquistas. El padre de los asturianos César y Arcadio Ríos murió en un campo de concentración al tener que marchar al exilio, pero además de los hijos en la guerrilla, otros dos vástagos, Silvino y Manuel, fueron asesinados en abril de 1938 por los franquistas.

Pocos huidos asturianos utilizaron en esta primera fase los Picos de Europa para defenderse de las batidas de las fuerzas represivas, ya que el grueso de los mismos se instaló en las estribaciones montañosas próximas a las cuencas mineras. Sí lo hicieron los santanderinos, que se refugiaron en la banda occidental de la provincia, a los pies de la impresionante mole cantábrica. Una orografía inextricable, con senderos que serpentean entre agrestes montañas y farallones calcáreos erguidos entre las vaguadas, parecía un territorio cuasi perfecto para protegerse del acoso represivo. La Liébana, en la parte más agreste de la Cordillera Cantábrica, se convirtió en la comarca guerrillera por excelencia. Potes, la capital lebaniega, que había sido incendiada el 31 de agosto de 1937 por mineros asturianos que pasaron por la villa en retirada del frente vasco al mando del comandante San Emeterio, devino en capital de la resistencia cántabra, junto con aldeas como Tresviso, Hermida o Bejes.

La primera partida importante data de 1937 y se articuló en torno a Ceferino Roiz «Machado», maestro de Bejes y cuyo apodo tal vez era un homenaje al poeta muerto en el exilio francés. Ugetista nacido en La Hermida, estuvo en América y fue uno de los personajes más cualificados de la resistencia antifranquista. Su cuadrilla empezó a ser la más conocida de la provincia y en el oriente asturiano. Pero anteriores a la partida de «Machado» fueron los grupos encabezados, según Jesús Gutiérrez Flores, por José Lavín Cobo «Cariñoso» (comarcas en torno al río Miera, Liérganes y Vega de Pas), Juan Gil del Amo «Hijo del practicante de Carabeos» (en la comarca de Campoo, desplazándose por el norte de las provincias de Burgos y Palencia) y Mauro Roiz Sánchez «Mauro» (en la parte de Potes). Entre los tres grupos alcanzaban el medio centenar de hombres, y el más renombrado era el de «Cariñoso». Esta partida estaba formada por cenetistas, ex combatientes del frente asturiano, y entre los miembros más destacados figuraban dos hermanos Lavín Cobo, Marcos «Cenizo» y Dolores «Lola» —Pedro Lavín «Melenas» era primo—, además de Nemesio Hazas Arce, Rafael Hazas Arce «Ferroviario», Ramiro Agudo, Raimundo Casar Acebo «Tampa», Domingo Samperio «Rada» y Orestes García, entre otros, según el testimonio de Jesús de Cos Borbolla. Hombres de este grupo constituyeron posteriormente la Brigada Malumbres. También empezó a ser conocido en el oriente santanderino un huido que respondía al alias de «Joselón». En el norte de Palencia, limítrofe con Santander, las primeras partidas integradas por ex soldados de la República estaban fuertemente vinculadas a las comarcas mineras de Guardo y Barruelo de Santullán, de larga tradición revolucionaria. Los huidos palentinos se emboscaban en los montes de Salcedillo y Valverzoso, en las estribaciones de Picos

de Europa. En el futuro, este territorio palentino se convirtió en lugar de paso o de reserva para santanderinos, asturianos y leoneses, y sin actividad guerrillera significativa.

Huidos y guerrilleros extremeños

La especial virulencia de la represión en Extremadura sólo se entiende a partir de un análisis de la realidad socioeconómica de la región durante la época. El elevado número de jornaleros y campesinos arrendatarios convirtió a Cáceres y Badajoz en laboratorios del modelo republicano en su versión más revolucionaria. La fuerte implantación de las organizaciones políticas y sindicales de izquierdas favoreció la alianza entre las clases trabajadoras y los ideales de emancipación. En consecuencia, con el triunfo del bloque de poder oligárquico los segmentos sociales más desfavorecidos fueron sometidos a una cruel represión económica y personal. Según Justo Vila Izquierdo, que cita fuentes oficiales, en 1948 el 70,4 por ciento de los trabajadores del campo extremeños estaban en el paro o subempleados. Durante el curso 1943–1944 más de dos tercios de los niños pacenses no estaban escolarizados y la mortalidad infantil adquirió en algunas comarcas caracteres de pandemia. Más atroz, obviamente, fue la eliminación de los elementos republicanos. La matanza de la plaza de toros de Badajoz se ha convertido en uno de los paradigmas de la represión franquista, en el ejemplo más acabado de lo que Bernanos llamó —aunque refiriéndose a Manacor— «los cementerios bajo la luna». Cáceres, Almendralejo, Mérida o Zafra pagaron su fidelidad a los ideales marxistas o libertarios. Para aquellos izquierdistas que tuvieron el dudoso privilegio de sobrevivir, Extremadura se transformó en una retahíla de campos de concentración, el más famoso y temido de los cuales era el de Castuera (Badajoz), por donde pasaron muchos de los detenidos extremeños, sobre todo de comarcas como La Serena y la Siberia. Este campo de concentración tenía 70 barracones de madera, en cada uno de los cuales fueron apiñados entre 50 y 100 hombres. Incluso disponía de un barracón para incomunicados, en el que sólo había una pequeña ventana que apenas les permitía comunicarse con el exterior. Tres días a la semana los falangistas llevaban a cabo «paseos» al amanecer. El domingo, como ejemplares «soldados de Cristo», descansaban^[51].

Aunque los huidos empezaron a significarse nada más iniciada la guerra, una fecha importante puede fijarse en el mes de agosto de 1936, cuando los militares rebeldes conquistaban la parte occidental de la provincia pacense y, sobre todo, las ciudades de Badajoz y Mérida. La mayor parte de la provincia de Cáceres, incluida la capital, ya formaba parte del territorio rebelde desde el 18 de julio. Las únicas salidas

de los soldados republicanos extremeños pasaban por contactar con el frente gubernamental o marchar al exilio a través de Portugal, la única frontera para una posible huida. Pero el país vecino no era el más adecuado para el refugio de elementos izquierdistas. La dictadura de Oliveira Salazar se mostró desde el principio de la guerra favorable a los militares sublevados, y los republicanos que trataban de exiliarse en Portugal sabían de la posibilidad de perecer abatidos por los *guardinhas* portugueses o de ser devueltos a España. La alternativa entre la represión y una huida casi imposible la solucionaron los extremeños con una tercera opción, tal vez la única posible: esconderse en el monte. Los límites occidentales de Badajoz y Cáceres se convirtieron en el epicentro de los escapados, y Alburquerque y San Vicente de Alcántara derivaron en los núcleos de población estratégicos de ese movimiento. Sierras como las de Alpotreque, San Pedro, Monsalud y Mamede cobijaban a un número importante de republicanos. La conquista de Extremadura —sobre todo a partir de mediados de julio de 1938, cuando cayó el resto de la provincia de Badajoz— amplió la geografía de los huidos: Guadalupe, Montánchez, Chimenea, Azorejo y las fronterizas sierras de Gata y Gredos. Entre las primeras noticias de hechos relevantes en la provincia de Cáceres, está la muerte, cerca del pueblo cacereño de La Garganta, de tres huidos procedentes de la localidad salmantina de Béjar en una escaramuza contra las fuerzas de orden. Pocos días antes de ese episodio, el Ejército republicano había fracasado en el intento de recuperar Madrigal de la Vera, capital de la comarca^[52].

En las zonas controladas por los rebeldes desde el principio de la contienda, se multiplicó el número de huidos, que además se movían con relativa impunidad a causa de la ineficacia de las fuerzas de represión. El hecho empezó a inquietar a las autoridades, hasta el punto de que el comandante militar de Cáceres, Álvarez Díaz, publicó el 20 de agosto de 1936 un bando en el que prometía un salvoconducto a quienes se entregaran en el plazo de 72 horas y no tuvieran delitos de sangre. Prueba de que no remitía la gravedad del problema lo ratificó la petición al gobernador general del Estado el 14 de noviembre de ese mismo año solicitando el regreso de las fuerzas de la Guardia Civil: «Pues como concedora de la provincia será el medio de devolverle su absoluta normalidad»^[53]. Estas medidas no formaban parte, lógicamente, de un programa de reconciliación, sino que evidenciaban el temor de las autoridades a que los huidos se organizaran y terminaran constituyendo un verdadero problema para la retaguardia franquista. Máxime teniendo en cuenta que una parte importante de la región extremeña permanecía bajo el control gubernamental y los huidos podían actuar como quintacolumnistas bajo la tutela de los mandos militares republicanos.

En efecto, la proximidad de estos huidos con el frente republicano permitió que el Gobierno de Valencia se interesara por su situación. El objetivo consistía en

reincorporarlos a la disciplina del Ejército Popular o, en su defecto, organizados. A partir de diciembre de 1936, una vez estabilizados los frentes, el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Madrid, el general Rojo, solicitó oficialmente la formación de grupos de guerrilleros que, vinculados orgánicamente a la XII Brigada Internacional y al 5.º Regimiento, actuaran en la retaguardia enemiga. La primera acción destacada consistió en trasladar a un importante número de huidos, vía Medellín, hasta la Bolsa de la Serena. A los que quedaron desperdigados por los montes, se intentó adiestrarlos en los métodos de la lucha irregular. Estos cambios produjeron frutos inmediatos en una doble dirección. Por una parte, decrecieron los robos en la zona franquista —generalmente, en las dehesas—, mientras que, por la otra, aumentaban los sabotajes de trenes y vías férreas. Atacaban sobre todo depósitos de agua, fábricas harineras y de electricidad, ganado, carreteras, etcétera. En el mes de mayo de 1938, por ejemplo, fueron dinamitadas la sociedad Fosfatos de Logrosán y la electro-harinera de Miajadas. El número de huidos, no obstante, descendía lenta pero irreversiblemente, hasta transformarse en elementos marginales^[54].

En la Extremadura conquistada también actuó el XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero a través de diferentes grupos que penetraron en la región. Uno de los primeros hechos de armas relevantes tuvo lugar a finales de enero de 1937, cuando doce guerrilleros que habían partido de Villanueva de la Serena, en zona gubernamental, llegaron a la localidad cacereña de Jarilla —de donde era natural el capitán que los mandaba, Emilio Granado—, después de efectuar diversos atentados y sabotajes. Pero las secuelas adquirieron caracteres de tragedia, como podemos seguir por el relato de Julián Chaves Palacios, que ha estudiado el maquis en Cáceres. El día 2 de febrero murieron en el enfrentamiento con las fuerzas de Plasencia el citado capitán y un guerrillero. Otros dos ya habían causado baja anteriormente en un tiroteo en El Tormo. El resto de la unidad, hasta ocho, fueron detenidos y el 16 de marzo, después del correspondiente consejo de guerra, fueron fusilados en el campo de tiro de Plasencia. En el otoño de 1937, un grupo de 17 efectivos perteneciente al XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero y procedente de Córdoba se infiltró en la provincia de Cáceres, instalándose en un campamento de la sierra de San Pedro y disponiéndose a atentar contra el ferrocarril Mérida-Cáceres, acción que efectuaron el 6 de octubre. Un día después tuvieron un enfrentamiento con tropas regulares, a las que ocasionaron algunas bajas. Pero 21 de estos hombres —incluidos algunos enlaces de la zona— fueron arrestados posteriormente. Bajo la jurisdicción del Tribunal de Urgencia de Plasencia, fueron sometidos a juicio sumarísimo. Los integrantes del grupo, mandado por el comisario político Vicente Jiménez Martínez y el capitán Antonio Jiménez García, fueron ejecutados el 28 de octubre, un día después de ser condenados por un consejo de guerra celebrado en el Regimiento Argel de Cáceres. Solamente dos se libraron del pelotón de fusilamiento^[55].

También está relacionado con los guerrilleros el caso de Máximo Calvo Cano, activista republicano que se introdujo en la retaguardia franquista con el fin de alimentar una red de información que pudiera facilitar las operaciones guerrilleras de las fuerzas republicanas. La delación involuntaria de un soldado del Centro de Instrucción de Reclutas de Malpartida de Cáceres, el 23 de diciembre de 1937, permitió la detención de numerosos enlaces. La muerte de Calvo a manos de unos guardas jurados cuatro días después complicó todavía más la situación, ya que se le encontró una lista de colaboradores. Dirigida la operación represiva por el gobernador militar de Cáceres, Ricardo Rada Peral, las detenciones fueron masivas y sin garantías judiciales de ningún tipo. Bajo la acusación de complot —se adujo que Calvo trataba de apoderarse de la ciudad de Cáceres—, cientos de cacereños fueron detenidos, juzgados y ejecutados. Entre los fusilados estaban el ex alcalde de la capital, Antonio Canales González, y el ex presidente de la Diputación, Ramón González Cid. El resultado final de la represión fue brutal. Desde el 25 de diciembre de 1937 hasta el 21 de enero de 1938 eliminaron 196 republicanos. Una verdadera matanza. Una consecuencia de estos movimientos de huidos y guerrilleros en la provincia de Cáceres fue el repunte de las ejecuciones regulares durante los años 1937 y 1938, al contrario de lo que ocurría en las provincias sin el problema de los huidos. Así, entre mayo y diciembre de 1937, fueron eliminadas 117 personas y en el año 1938, 171^[56].

Las acciones guerrilleras se espaciaron en el periodo 1938–1939, aunque en algunas de ellas llegaron a las afueras de la capital cacereña. El día 16 de agosto hubo un sabotaje contra la conducción de agua de Trujillo. El día 25 de agosto de 1938 fueron atacados dos automóviles en la carretera Logrosán–Zorita, muriendo en la acción un cartero, Tomás Pulido, y produciéndose varios heridos. En el ataque se utilizaron armas de fuego y bombas de mano^[57]. Pero desde que el 20 de julio de 1938 las tropas franquistas ocuparon la Bolsa de la Serena, la existencia de los huidos empezó a tener un futuro todavía más incierto. Aunque la primera consecuencia de la caída del oeste de Badajoz se tradujo en un aumento de huidos en los límites de Cáceres y Badajoz —la represión era durísima, y en Don Benito fueron ejecutadas 178 personas en menos de un mes—, lo cierto fue que el franquismo se aprestaba a dar la batalla definitiva a los resistentes. Se atacaron las bases guerrilleras, se fomentaron y recompensaron las delaciones de los vecinos y también se efectuó una presión sistemática sobre los enlaces, indispensables para la supervivencia de los emboscados.

La región de Extremadura no puede aislarse de provincias como Toledo (se reparten la sierra de Altamira y la comarca de Las Villuercas), Ciudad Real (comparten los Montes de Toledo), y Córdoba. La Jara, la sierra de San Vicente y los Montes de Toledo eran las comarcas centrales de los emboscados manchegos pero

también de los extremeños. Poco antes de finalizar la guerra civil, por la provincia de Toledo surgió una partida significativa, cuyo núcleo original lo constituyeron, según Benito Díaz Díaz, cuatro vecinos de Menasalbas: Benigno Escobar Gutiérrez «Trascanta», Domingo Mariblanca García-Díaz «Mariblanca», Saturnino Gómez Muñoz «Margallo» y Modesto Sánchez Benítez «Sargento». A estos cuatros huidos se les unieron José Manzanero, Julián Muñoz y «Arricusqui». La partida pareció completarse poco tiempo después con dos incorporados que alcanzarían relevancia entre los huidos toledanos: Eugenio Sánchez-Gabriel Esteban-Manzanares «Rubio de Navahermosa» y Valentín Gil Valiente «Chato de la Puebla». Eran todos comunistas, excepto «Arricusqui» y «Rubio de Navahermosa», de obediencia socialista. Se movían por los Montes de Toledo, tanto en su parte toledana como ciudadrealeña. A partir de 1939, una vez finalizada la contienda, se produjo un incremento geométrico de emboscados. Muy pronto, por las provincias extremeñas, manchegas y andaluzas, empezaron a operar algunos de los jefes de partida más importantes de Extremadura, La Mancha y la parte septentrional de Andalucía: Pedro José Marquino Díaz Monje «Francés» (en adelante, Pedro Díaz Monje), Jesús Gómez Recio «Quincoces», Joaquín Ventas Cita «Chaquetalarga», José Méndez Jaramago «Manco de Agudo», entre otros.

La resistencia en Andalucía

En varias provincias andaluzas —Huelva, Córdoba y Málaga— también se produjo el fenómeno de huidos y guerrilleros. Especialmente en Huelva, los resistentes —que habían quedado aislados entre la frontera portuguesa y las provincias de Sevilla y Badajoz, en manos de los rebeldes— ocasionaron graves conflictos de orden público. El hecho de que los republicanos onubenses no pudieran enlazar con los frentes gubernamentales desde julio de 1936 suscitó la aparición de numerosos huidos, ya que entregarse a las autoridades no era una alternativa recomendable: entre los meses de agosto y septiembre de 1936 los militares insurgentes habían ejecutado cuando menos a 2296 personas. Ante tamaña brutalidad, la única salida pasaba por aplastarse a la tierra en los serrascos y montes, sobre todo para aquellos mineros que militaban en organizaciones sindicales izquierdistas. Posiblemente, en las serranías de Huelva y provincias limítrofes (Aroche, Pata del Caballo, Paterna, Aznalcóllar) se produjo la mayor concentración de huidos durante la guerra civil. Algunas partidas conocidas eran las de Francisco Gómez Moreno «Cerreño» (en la zona de El Almendro y Villanueva de los Castillejos), Sebastián García Márquez (en los alrededores de Cabezas Rubias), la importante partida de «Zorro» (que se movía en torno a Niebla) y la de «Los Malpuro» (dirigida por los hermanos Ignacio y Juan Manuel Silgado

Castilla, de Valverde).

Huelva fue una de las provincias andaluzas en las que coexistieron huidos y guerrilleros. Aunque estaba aislada de las líneas republicanas, la llegada de guerrilleros del XIV Cuerpo de Ejército permitió la multiplicación de acciones de tipo guerrillero combinadas con otras específicas de los huidos. Los milicianos procedentes de Pozoblanco (Córdoba), llegados en junio de 1937, lograron vertebrar, siquiera provisionalmente, a los numerosos emboscados de las sierras onubenses. Aunque la organización parecía rudimentaria y no resulta fácil conceptualizar la condición de sus integrantes, estaríamos ante una especie de híbrido entre huidos y guerrilleros. Pero lo verdaderamente inventariable fue que se multiplicaron los saqueos a los cortijos, la ocupación de pueblos —seguida en muchos casos de la eliminación de vecinos vinculados a los sublevados—, atentados contra las vías férreas, secuestros y, sobre todo, se practicaron numerosas ejecuciones de falangistas. Las acciones durante 1937 y parte de 1938 fueron tan importantes que Francisco Espinosa Maestre, que ha estudiado el tema, habla de una provincia abismada en el pánico. El elevado número de huidos, la desorganización de las fuerzas represivas y el apoyo en los pueblos, donde tuvieron lugar incluso bodas y nacimientos —una cifra importante de los vecinos tenían familiares o amigos en las sierras—, provocaron la sensación de una provincia en guerra civil cuando oficialmente toda Huelva estaba en manos de los militares rebeldes desde septiembre de 1936. Pueblos como Zufre, Aroche, Jabugo, Berrocal o Paterna del Campo se transformaron en los centros de operaciones tanto para los huidos como para sus perseguidores.

La dialéctica represión–contrarrepresión en Huelva funcionó de manera implacable. Mientras los guerrilleros causaban «más víctimas que los días posteriores a la sublevación; las de los vencedores una masacre definitiva que acabaría con cualquier asomo de disensión tanto en la sierra como en los pueblos», según Espinosa Maestre^[58]. Las actuaciones más violentas de los huidos se produjeron los días 6 y 13 de agosto de 1937. El día 6 un grupo de guerrilleros asaltó San Telmo de Cortegada ocasionando nueve muertos, y el día 13 atacó un autobús en Aracena, que motivó seis víctimas. La represión no se hizo esperar. El 6 de agosto, un bando de Queipo de Llano imponía el estado de guerra en la mitad de la provincia de Huelva y parte de las de Sevilla y Badajoz. La segunda mitad de 1937 resultó trágica para los republicanos. Fueron ejecutadas casi 700 personas entre agosto de 1937 y febrero de 1938, y especialmente despiadada fue la represión en pueblos como Valverde, Aroche y Zalamea, con 62, 47 y 37 muertos en pocos días^[59]

Pero el franquismo no sólo eliminó el principal apoyo de los del monte, los enlaces, sino que efectuó una serie de nombramientos y un cambio de métodos que resultaron fundamentales para erradicar el problema de los huidos. En octubre de 1937 fue nombrado gobernador militar de la provincia el coronel de Carabineros

Joaquín Ibáñez Alarcón, que impulsó definitivamente la lucha antiguerrillera. Además de conseguir un importante número de tropas de refuerzo —llegaron mil regulares—, el nuevo responsable ensayó dos innovaciones que harían fortuna a mediados de la década de los cuarenta en otras provincias: los grupos de ex guerrilleros al servicio de la Guardia Civil (embrión de las futuras contrapartidas) y las brigadas móviles de la Benemérita dedicadas exclusivamente a combatir la contrainsurgencia. Los grupos y columnas móviles del capitán José Robles Ales, el teniente coronel Emiliano López Montijano y el capitán Manuel Gómez Cantos (que también era el responsable de la lucha contra los huidos en Extremadura) redujeron sensiblemente y en poco tiempo el número de huidos. Para ello no repararon en medios ni mostraron el menor respeto por las leyes. El 24 de enero de 1938 las fuerzas del capitán Robles, por ejemplo, aplicaron la «ley de fugas» a siete jornaleros de La Uceta. La situación se hizo tan complicada para los del monte que, entre finales de 1937 y principios de 1938, alrededor de 300 resistentes marcharon en pequeños grupos hasta la zona republicana^[60].

Como resultado de la persecución de las autoridades y de la huida masiva de los elementos republicanos, puede afirmarse que a partir de mediados de 1938 guerrilleros y huidos habían dejado de constituir el problema medular de la provincia de Huelva. Además de las periódicas caídas de los últimos guerrilleros y la detención de «topos» y enlaces, se reprodujeron las entregas de los hombres del monte. Fuentes del Gobierno Militar hablan de 300 entregados sólo en el mes de febrero de 1938. Aunque todavía en la segunda mitad de ese año se tuvieron noticias de enfrentamientos, asaltos a cortijos y ataques a coches de línea, la realidad fue que se trataba de hechos aislados, excepcionales, como el sabotaje llevado a cabo en julio de en la línea Zafra–Huelva, efectuado posiblemente por grupos guerrilleros procedentes de las líneas republicanas. El 15 de noviembre de 1939 se levantaba el estado de guerra. La dura represión había vuelto a restaurar la «paz de los cementerios» en Huelva, una provincia en la que el número de víctimas como resultado del enfrentamiento entre huidos y fuerzas de represión resultó elevadísimo. Tal vez el más alto entre las zonas de huidos durante la contienda^[61]. Los guerrilleros onubenses sirvieron a los franquistas para insistir en su política de aniquilamiento.

También en la parte de la provincia de Córdoba que estaba en manos de los rebeldes se produjeron atentados y sabotajes por parte de huidos y guerrilleros, que tenían la posibilidad de repasar los límites entre los dos ejércitos en lucha. Una orografía propicia para la táctica guerrillera, sobre todo en las estribaciones de Sierra Morena, favoreció esta lucha irregular potenciada a través del Cuerpo de Ejército Guerrillero en Andalucía. El grupo más representativo era el conocido como los «Hijos de la Noche» (o «Niños de la Noche»), ya que atacaba siempre después del atardecer. Especialistas en voladuras de puentes atentaron repetidamente contra el

ferrocarril que unía Córdoba con Peñarroya. El 5 de junio de 1937 en la sierra de Lastra, fueron muertos cinco guerrilleros en enfrentamiento con la Guardia Civil. Otro grupo de milicianos de Guadix, integrado en los «Hijos de la Noche», fue eliminado cuando pretendía destruir un puente en El Palomar, cerca de Puente Genil, y a causa de la traición de un enlace. Durante toda la guerra, diversos grupos de guerrilleros procedentes de la zona republicana —primordialmente de los batallones «Villafranca», «Garcés» y «Pedroches»—, efectuaron golpes de mano contra intereses de los partidarios de los sublevados. En arriesgadas operaciones, que en algunos casos llegaron a los arrabales de la ciudad de Córdoba, las partidas requisaban importantes cantidades de ganado. Desde el cuartel general de Queipo de Llano, se conminó a los mandos rebeldes para que protegieran adecuadamente la retaguardia e impidieran las acciones de los guerrilleros en las proximidades de la capital cordobesa^[62].

Enclave destacado en la guerrilla andaluza fue la Axarquía malagueña, sobre todo la localidad de Nerja, ocupada por los «nacionales» en febrero de 1937. A partir de esa fecha, en los alrededores del pueblo se concentró un importante número de guerrilleros y huidos. Dos de ellos, Antonio Cerezo Moreno «Zocato» y José Bobadilla Leal «Caneles» —éste, que no estaba en la sierra, como acto de venganza— fueron abatidos el 12 de agosto de 1937. Pero, al mismo tiempo que los huidos, en Nerja actuaron partidas de guerrilleros adscritas al grupo «Hijos de la Noche» (entre ellos Manuel Martín Rico, ex alcalde frentepopulista de la localidad), que llegaban desde territorio republicano por las montañas o desembarcando en la playa de Calaceite. Atacaron sistemáticamente los puentes de la zona, muy importantes para el paso de la intendencia franquista. Intentaron la voladura de los puentes de Cantarriján, en el límite con Málaga y Granada, y Ana María, así como la destrucción de polvorines, y organizaron asimismo el traslado de huidos hasta la zona gubernamental. El hecho más sobresaliente de esta guerrilla, empero, fue el intento de sublevar una franja de pueblos que se inscriben en la línea que enlaza Málaga y Motril, empresa que estaba coordinada para que actuaran simultáneamente el Ejército republicano, huidos y enlaces de las diferentes localidades. Pero la detención de Julio Ramos Corral, comunista del pueblo de Lagos, impidió que la operación se llevara a cabo. La posterior delación de Miguel Moreno González acabó con la red de enlaces, y sólo en Nerja se produjeron 27 detenciones^[63].

La pérdida de Cataluña, seguida del reconocimiento de Franco por parte de Gran Bretaña y Francia y la dimisión del presidente de la República, Manuel Azaña, confirmaban la derrota de la causa republicana. El 5 de marzo, apoyándose en el creciente anticomunismo de los aliados republicanos, el coronel Casado dio un golpe de Estado contra el Gobierno Negrín. El 1 de abril Franco podía proclamar su victoria. El fin de la contienda suponía el comienzo de una nueva época, y a los

huidos que todavía permanecían en las sierras y montañas, cada vez en menor número, los nuevos tiempos no les ofrecían un porvenir especialmente halagüeño. Porque la victoria de unos implicaba la cárcel, la muerte o el exilio para otros. El XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero, entre cuyos objetivos centrales estaba el de preparar la lucha guerrillera en caso de derrota, desapareció en el vértigo de los últimos meses de la guerra. El golpe del coronel Casado había anulado cualquier remota posibilidad de vertebrar una resistencia armada.

El 1 de abril de 1939 los huidos estaban solos frente al franquismo.

Huidos y guerrilleros en la posguerra (1939–1944)

El puerto de Alicante se convirtió durante los últimos días de la guerra en la imagen más acabada de la derrota republicana. Cerca de 15 000 hombres y mujeres de todas las edades, abandonados por los dirigentes republicanos y acosados por las tropas de Saliquet, aguardaron inútilmente a que los navíos de guerra franceses que estaban a la vista de los republicanos penetraran en los muelles. Un futuro jefe guerrillero, Ramón Vías Fernández, tuvo más suerte y embarcó en el buque británico *Stanbrook* con destino a Orán. La situación se tornó caótica, y algunos se suicidaron ante la desesperanza de una huida imposible. El general Gambaro, jefe de la División Littorio, negoció la rendición, lo que fue un alivio para los vencidos, ya que el general franquista Andrés Saliquet estaba dispuesto a perpetrar la última degollina de la guerra civil. Los republicanos de Alicante empezaron a ser repartidos por diferentes campos de concentración, algunos tan tristemente célebres como el de Albatera, donde más de doce mil presos se hacinaron en un espectáculo de horror y muerte. Responsable solamente ante Dios y la Historia, Franco empezaba su dictadura personal gobernando los destinos de España y de los españoles. Frente al poder omnímodo del Caudillo, la única oposición la constituían unos cientos de huidos sin otro objetivo en su horizonte personal que la supervivencia.

Tiempo para la venganza

El final de la contienda no significó el comienzo de la paz para todos los españoles, y restañar las heridas no formaba parte del programa de los vencedores. El 13 de febrero de 1939 se había promulgado la Ley de Responsabilidades Políticas, un texto cuyos efectos retroactivos alcanzaban de manera significativa hasta el año de 1934. Para todos aquellos que fueran acusados de haberse opuesto al Movimiento o participado en acciones subversivas desde la revolución de Asturias —también represaliaron a los militares que apoyaron en 1930 la sublevación de Jaca—, la nueva legislación resultaba inflexible. Pero solamente era el comienzo de un aluvión normativo que afectó a todos los sectores profesionales del país: trabajadores,

maestros, médicos o periodistas. Una ley de 15 de febrero de 1939 promovió la depuración de los funcionarios públicos. Otra de 24 de mayo de 1939 —completaba una anterior de 22 de abril de 1938— fijó que los medios de comunicación y los periodistas estaban al servicio de la dictadura. El 1 de mayo de 1940 se hizo pública la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que tenía por objetivo combatir dos de las obsesiones particulares de Franco y a los que se responsabilizaba de todos los males de España.

La Ley de Seguridad del Estado del 29 de marzo de 1941 —en la que se menciona hasta 23 veces la pena de muerte— compilaba las leyes represivas anteriores y completaba el círculo jurídico de la represión. La tarea legislativo-represiva se alimentó todavía con la Ley del 2 de marzo de 1943 de Jefatura del Estado sobre Rebelión Militar. El 8 de marzo de 1941 se había creado la Policía Armada para sustituir al republicano cuerpo de Guardias de Asalto y, después de algunas dudas iniciales, Franco mantuvo el cuerpo de la Guardia Civil. Las leyes represivas y los cuerpos encargados de ejecutarlas estaban en la disposición adecuada para retomar la eliminación de los restos del republicanismo. A partir de 1939, la palabra maldita que se generalizó por la España de los vencidos era depuración. Todos los españoles estaban obligados a acreditar, conforme a los códigos de los vencedores, que su pasado no les impedía vivir en la nueva España. «Con este bagaje de despropósitos jurídicos va a comenzar la tarea depuradora en la cual medio país se va a dedicar a juzgar al otro medio. Como se trata de depurar, y no de juzgar, los requisitos legales de idoneidad de los juzgadores van a ser nulos y primará, como es habitual en el “nuevo orden”, la pertenencia al ámbito militar y al partido único sobre los conocimientos jurídicos. En definitiva, es la aplicación de la justicia de los vencedores a los vencidos», ha escrito José Manuel Sabín. Y aunque fueron muchos los colectivos que padecieron esa legislación de la venganza, tal vez las mujeres, los maestros y las clases bajas pueden servir de paradigma de la represión general durante el tiempo ominoso de la posguerra^[64].

Las mujeres fueron víctimas principales de la guerra y de la dictadura subsiguiente. En 1940 había más de 17 000 reclusas consideradas presas políticas: aproximadamente, el 5 por ciento de la población carcelaria^[65]. Las que tenían hijos pequeños se veían obligadas a criarlos en cárceles hacinadas y antihigiénicas, y los hijos mayores les eran arrebatados e internados en centros de beneficencia: 9050 en 1942, según el Ministerio de Justicia. Pero además de esta casuística, el franquismo inauguró una época caracterizada por la eliminación de los derechos de las mujeres, que incluso se traducían en cuestiones tan concretas como las necesidades nutritivas: la ración alimenticia oficial de las mujeres constituía tan sólo el 80 por ciento de la dedicada a los hombres, según María Ángeles Arranz. Al no ser consideradas «elementos productivos», sus necesidades materiales se juzgaban menores. No les fue

mejor en cuestiones de «moral y buenas costumbres». La Iglesia, apoyada por los poderes políticos, impondrá una iconografía de la «buena cristiana» que implicaba un cambio radical para la mujer. Como había ocurrido en la Alemania nazi, para la mujer española la vida se reducía a las tres k: *kinder*, *küche* y *kierche* (niños, cocina e iglesia). La Sección Femenina se encargó de las tareas de encuadramiento y reeducación.

Aunque todo el funcionariado se vio sometido a un proceso de depuración, el aplicado a los maestros alcanzó la máxima intensidad. Castigados como uno de los emblemas de la República, los responsables principales de haber hecho posible entre las gentes del pueblo las ideas de progreso y libertad. De hecho, conforme los sublevados conquistaban nuevos territorios, una de las primeras medidas consistía en suprimir los avances conseguidos en materia de educación. Las Comisiones Depuradoras —cuyo ideólogo fue el escritor y político José María Pemán— fueron creadas por decreto de 11 de noviembre de 1936, y existían 104 modalidades de sanción (desde la suspensión por un mes hasta la separación definitiva). El 80 por ciento de los maestros pasaron por estas comisiones y el 25 por ciento recibió algún tipo de sanción. Trabajar en la Administración se convirtió a partir del final de la guerra en una quimera para los desafectos. La ley de 25 de agosto de 1939 de Jefatura del Estado reservaba el 80 por ciento de las plazas a los caballeros mutilados, oficiales provisionales, ex combatientes, ex cautivos y huérfanos de guerra. El 20 por ciento restante, para los adictos al régimen^[66].

Las clases medias y bajas —sobre todo estas últimas— pagarán la osadía de haber intentado emanciparse de los poderes tradicionales no sólo con la muerte, el exilio o la cárcel en casos señalados, sino que los supervivientes también sufrieron una represión económica generalizada después de la contienda. A los ex combatientes republicanos que habían sido ejecutados o estaban encarcelados y a los ciudadanos considerados desafectos se les requisaban sus bienes —pequeña fincas, comercios, casas...—, que luego subastaban en beneficio de los vencedores. Este mecanismo de redistribución se mantuvo entre 1939 y 1945, año en que fue abolida la Ley de Responsabilidades Políticas, y está en el origen de no pocas fortunas de la España de posguerra. Los intereses económicos, atravesados de ideología política, favorecieron confiscaciones sin precedentes en el campo español. Francisco Moreno Gómez ha descrito un suceso que puede ejemplificar ese sistema de redistribución económica por medio de la muerte y las incautaciones: «El jefe de FET de Villanueva del Rey (Córdoba), Francisco Pino, logró apropiarse de la panadería de Hilario Pizarro. Poco después apareció fusilado el otro panadero del pueblo, Francisco Vizquete, que tenía además una fábrica de harinas. Una curiosa forma de eliminar la competencia»^[67]. Era otra de las facturas que pasaba la derrota.

Los juicios sumarísimos se activaron al final de la contienda y los «paseos»

aumentaron exponencialmente. Los campos de concentración y las cárceles se multiplicaron, así como el número de detenidos. Los tribunales militares, permanentes o ambulantes, continuaron dictando sentencias de muerte por todo el país hasta 1948, año en que se derogó el estado de guerra. Eliminadas las garantías jurídicas (así como los formulismos) y utilizando sistemáticamente la tortura —en la que participaron algunos jueces, como Juan Calero^[68]—, tribunales incompetentes y venales, alimentados por delaciones que no se contrastaban, impusieron nuevamente la actualidad de la muerte. El mecanismo de ejecución era rápido, por cuanto las Auditorías de Guerra se limitaban a confirmarlas (hasta 1940 no hubo posibilidad de revisar las decisiones de los consejos de guerra). El último requisito antes de la ejecución pasaba por Franco. A la hora del café, el Generalísimo anotaba en los expedientes presentados por Lorenzo Martínez Fuset las palabras definitivas: enterado, conmutado o garrote y prensa. Algunas veces, el capellán de Franco, José María Bulart, acompañaba al general y a su ayudante. La imagen de un dictador, un jurídico del Ejército y un eclesiástico decidiendo sobre la vida y la muerte de los españoles constituía una radiografía bastante precisa de la España de posguerra y de la naturaleza del régimen franquista.

Los últimos estudios —todavía incompletos— cifran en 40 000 los republicanos ejecutados en la posguerra, a los que habría que añadir 90 000 más eliminados durante el conflicto. Del total de víctimas, sólo un 10 por ciento podían ser considerados autores de delitos de sangre. Si además tenemos en cuenta que los líderes republicanos habían marchado al exilio, al igual que medio millón más de republicanos españoles, la cifra resulta escalofriante, ya que se supone que quienes se quedaron lo hacían voluntariamente y juzgaban que no tendrían problemas para reinsertarse en el «nuevo orden»^[69]. Las cárceles completaban el macabro espectáculo de la represión. Pero el régimen franquista, apenas preocupado por la suerte material de los reclusos, entretuvo a los capellanes de prisiones —cuerpo restaurado en 1943— elaborando un inventario sobre la situación espiritual de los condenados a muerte. Entre el 60 y el 90 por ciento se arrepentían antes de ser ejecutados, según «esas estadísticas del espíritu». Los más reacios a la confesión eran los murcianos, valencianos y asturianos, por ese orden. Por partidos, los más propensos a la confesión eran los militantes del nacionalismo vasco, seguidos de republicanos, libertarios y comunistas. Los más reacios al arrepentimiento final, los socialistas^[70].

Entre los ejecutados también se encontraban algunos dirigentes destacados, como Lluís Companys, presidente de la Generalitat, y el socialista Julián Zugazagoitia, entregados en 1940 a Franco por el régimen de Vichy y los nazis. Pero el grueso de las víctimas, como durante la guerra, fueron los ciudadanos anónimos republicanos y cuyo único delito consistía en haber defendido ideas democráticas o de izquierdas.

Un episodio atroz conmovió, no obstante, a la opinión pública internacional —en España, la opinión pública era un recuerdo anterior a la guerra— el 5 de agosto de 1939. Ese día, y al margen de cientos de arrestados en Toledo y Madrid, fueron fusiladas en el cementerio de la Almudena de esta ciudad 60 personas, de ellas 13 mujeres (a las que la historia conoce como «las 13 rosas»), pertenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Juzgadas en las Salesas el 3 de agosto, el día 4 entraron en capilla y el día 5 fueron ejecutadas. En 48 horas habían pasado de la sala de juicio a los pelotones de ejecución. Pocos ejemplos evidencian tan palmariamente la instrumentalización de la justicia, ya que las ejecuciones se efectuaron como represalia por la muerte, el 29 de julio de 1939 de Isaac Gabaldón, comandante de la Guardia Civil y encargado de los archivos de la masonería y el comunismo. En la carretera de Extremadura, poco antes de llegar a Talavera de la Reina, su coche había sido tiroteado por tres individuos disfrazados de militares, pereciendo el comandante, su hija y el chófer. Según Benito Díaz, especialista en la resistencia toledana, todos los indicios apuntan a que el asesinato fue obra de los propios servicios de inteligencia del Ejército (a pesar de que se responsabilizó a jóvenes de las JSU). Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque en la comarca no existían noticias de huidos con capacidad para planificar y ejecutar un atentado de esas características y con semejante minuciosidad. Segundo, Gabaldón disponía de información sobre los militares masones que apoyaban a Franco y había expresado públicamente su disposición a hacerlos públicos. Una serie de variables rocambolescas —el ayudante de Gabaldón fue asesinado al día siguiente por su novia; se exhumaron los restos del considerado inductor (Sinesio Cabadas Guisado «Pionero») porque se sospechaba que los responsables de las muertes habían hecho enterrar a otro en su lugar; hubo una reapertura del caso en 1940— han convertido el asesinato de Gabaldón en uno de los enigmas de la posguerra. Un hecho resulta evidente, y fue que sin pruebas de ningún tipo —ni siquiera indicios racionales— 60 personas ajenas al atentado fueron ejecutadas y varios cientos, detenidas.

Pero tal vez el factor de venganza por excelencia de la posguerra hay que situarlo en las prisiones, que se constituyeron como el último círculo de la represión, la metáfora final del exterminio. Miles de españoles abarrotaban los presidios y campos de concentración en 1939, aunque estos últimos, una vez filtrados los republicanos considerados más significativos, empezaron a ser sustituidos por batallones disciplinarios y destacamentos de trabajo forzado. Según fuentes del Ministerio de Justicia, en 1940 había en las prisiones españolas 280 000 reclusos. La Modelo de Barcelona puede servirnos como ejemplo de la superpoblación carcelaria. Construida para albergar setecientos presos, llegó a contar entre ocho y diez mil después de la guerra. Esta aglomeración originaba graves problemas de higiene, a los que había que añadir el hambre. En el campo de concentración de la Lancha, en la Siberia

extremeña, por ejemplo, «no se les proporcionaba ninguna clase de comida ni recibían agua potable. Los presos buscaban bellotas debajo de las encinas y comían toda clase de hierbas», conforme al relato de Vila Izquierdo^[71]. La acumulación de una higiene deficiente, torturas, malos tratos, hambre y hacinamiento produjo una importante mortandad en las prisiones durante la posguerra. Avitaminosis, gastroenteritis, anemia, caquexia, bronquitis, colapso cardíaco... eran algunas de las enfermedades derivadas de esta situación. No resulta fácil, por otra parte, averiguar las causas de esas muertes. En el destacamento penal de Fabero, por ejemplo, a los muertos no se les inscribía en el Registro Civil mediante un certificado médico sino que bastaba la «manifestación verbal del guardián de prisiones».

Los huidos de posguerra

Como resultado de una victoria sin reconciliación, los resistentes continuaron después de la guerra refugiados en las sierras y montes de Extremadura, Andalucía, Galicia, León, Asturias, Santander y Zamora. Pero existía un matiz esencial con respecto a los huidos en el periodo de la guerra, y era que ya no podían contar con el apoyo del Gobierno y Ejército republicanos. Los del monte se encontraron en el peor escenario posible: aislados y a merced de las fuerzas represivas. En el mejor de los casos, en una situación ideal para que un grupo de proscritos políticos evolucionara hacia la delincuencia de origen social. No obstante, un episodio aparentemente ajeno a la política española modificó sustancialmente el contexto: el estallido de la segunda guerra mundial. La contienda entre los países democráticos y quienes defendían planteamientos totalitarios de derechas alentó la supervivencia de los huidos, sobre todo cuando a finales de 1941 las victorias soviéticas invirtieron el signo de la guerra. Los efectos en la España de los huidos pueden considerarse decisivos. La guerra hizo renacer las esperanzas de los resistentes, y un ejemplo lo constituyó la creación de la Federación de Guerrillas de León–Galicia, el primer organismo estrictamente guerrillero de la primera posguerra.

La primera consecuencia se concretó en un cambio en la composición de las partidas. Aquellos que se habían echado al monte por miedo a las represalias, desertado de las unidades franquistas o deducido que la sierra era una alternativa mejor que malvivir en las aldeas con el hambre y los falangistas, fueron entregándose a las autoridades. Por contra, quienes se escaparon al monte a partir de 1939 poseían, por lo general, un alto nivel de ideologización. Eran militantes izquierdistas que huían de los campos de concentración, cárceles habilitadas en cabeceras de comarca, batallones disciplinarios, así como de las brigadas de trabajo que en las zonas devastadas constituían un importante vivero de huidos. Al igual que los enlaces o ex

reclusos sometidos al acoso de los guardias civiles y falangistas. Los ejemplos se multiplicaban por todo el territorio español. Las partidas de Jesús Gómez Recio «Quincoces», Manuel Hidalgo Medina «Bellota» o Hilario Martínez Aranda «Godoy del Pueblo» se constituyeron a partir de antifranquistas evadidos de las cárceles. Francisco Elvira Cuadrado o Amadeo Ramón Valledor escaparon de un destacamento de trabajo, y Juan Fernández Ayala «Juanín» decidió unirse a las partidas santanderinas porque estaba cansado de las palizas de los guardias civiles. A partir de 1942 se produjo un repunte en el número de huidos como correlato del desarrollo de la guerra mundial. No hay que olvidar que, pese a que el llamado «goteo» de guerrilleros se hizo masivo a partir del fracaso de las invasiones de Arán en octubre de 1944, resulta menos conocido que desde 1941–1942 pequeños grupos de guerrilleros entraron en España de manera espontánea, aunque la mayoría lo hicieron como consecuencia de las primeras infiltraciones planificadas por los comunistas.

Pero estos grupos de antifranquistas no consiguieron vertebrar organizaciones que pudieran catalogarse de políticas o militares. Tampoco fueron capaces de dilucidar sus objetivos políticos. La única estrategia reconocible pasaba por la autodefensa mientras esperaban el resultado del conflicto europeo. Esa actitud resulta comprensible si evaluamos los recursos. No tenían apoyos exteriores, y en el interior contaban solamente con el auxilio de familiares, amigos y un menguado número de personas vinculadas a ideologías de izquierdas. Viudas, huérfanos y ancianos cuyos maridos, padres o hijos habían sido víctimas del franquismo, también manifestaban su solidaridad con los del monte. Las redes de solidaridad, basadas en lazos familiares, afectivos y de vecindad, se instituyeron como el factor medular para la supervivencia de los huidos que merodeaban por comarcas y pueblos de los que eran nativos. A esos tejidos de solidaridad, que con el tiempo abastecieron una poderosa red de enlaces, el régimen franquista los trataba todavía con una cierta templanza. Normalmente, eran extrañados o encarcelados pero se les respetaba la vida. Hubo excepciones, sobre todo a partir de 1941. Bonifacia Gallardo, madre de un jefe de partida llamado Valentín Jiménez, fue detenida y emplazada ante un dilema trágico: o denunciaba el paradero del hijo o sería ejecutada. Al negarse a delatarlo, pasó por dos consejos de guerra y fue puesta en libertad a los tres años. Pero una vez libre, el 9 de diciembre de 1943 fue secuestrada por guardias civiles que le aplicaron la «ley de fugas», abandonándola después en el campo «donde fue pasto de las alimañas». Un episodio precursor de la ominosa «ley de fugas» que se aplicará sistemáticamente a partir de 1947. Las periódicas detenciones implicaban además palizas y torturas, pérdidas de cosechas, abandono de los hijos. Simultáneamente, se fomentaban y recompensaban la delación y la eliminación de los huidos. Francisco Moreno Gómez cita el caso de los cordobeses José García Coletto «Perica» y Juan Mateo Gutiérrez Sánchez, jóvenes rechazados por la sociedad franquista y que fueron muertos a

banquetazos por el propietario de un cortijo de Villaviciosa. El hacendado, militante falangista, fue recompensado por el ayuntamiento de esa localidad cordobesa con la cantidad de 50 pesetas. Los huidos, de todos modos, tomaron nota de las delaciones, y algunos confidentes pagaron con la vida sus informaciones a las autoridades. En 1947 fue ahorcado Manuel Villaseca, responsable de la confidencia que desencadenó la matanza en Cerro Coscojo en 1942, y en 1949 fue ejecutado Miguel Moreno, falangista que había denunciado a múltiples huidos y enlaces en Nerja en 1938. El 15 de julio de 1947 una partida armada acabó con la vida de Sebastián Fernández Maroto, el muchacho que había herido a Ramón Vías en el pueblo de Fornes. Vías llevaba dos años muerto^[72].

Desvinculados de los partidos y sin ayuda externa, los guerrilleros vivían de lo que les proporcionaban sus enlaces y, sobre todo, de los atracos efectuados contra personas afines a la dictadura. Mediante los golpes económicos conseguían un doble objetivo: procurarse los recursos necesarios para sobrevivir y represaliar a los franquistas. Generalmente, sólo recurrían a ellos en caso de necesidad, ya que conllevaban riesgos personales y políticos importantes. En primer lugar, porque ponían en peligro la vida de los hombres, y en segundo término, porque esos golpes, si no eran selectivos, enajenaban el apoyo de la población. Conforme a la idiosincrasia y a la situación económica y social de las diferentes zonas de huidos, se privilegiaba uno u otro sistema de recaudación. En La Mancha, Andalucía y Extremadura se practicó con cierta asiduidad el secuestro de personas vinculadas a la dictadura y que disponían de medios económicos. En 1944, por ejemplo, miembros de la partida de Jesús Gómez «Lamido» secuestraron a Adelaida Sánchez Arias en la localidad cacereña de Fresnedoso de Ibor, y la partida de «Francés» raptó en 1944 al párroco de Talavera la Vieja, Julio del Pardo Arroyo, y a su sobrino, Alfredo Reguero Arroyo^[73]. Por su parte, José Méndez Jaramago «Manco de Agudo» secuestró y asesinó en 1941 a Emeterio Rivas Alonso, falangista del pueblo pacense de Fuenlabrada de los Montes^[74]. El sistema habitual era llevar a cabo atracos en pueblos, cortijos o dehesas. Robaban alimentos, vestimenta y dinero. También requisaban las armas, tal vez lo más importante, que estaban en posesión de las fuerzas vivas de los pueblos. Al conseguir un mejor armamento —bastante anticuado: escopetas tercerolas o mosquetones, pero también navajas—, podían efectuar los golpes económicos con mayor seguridad y eficacia. Los asaltos resultaban más sencillos en las provincias extremeñas y andaluzas, por cuanto dehesas y cortijos participaban de un poblamiento disperso, mientras que en las provincias del norte las aldeas, aunque remotas en ocasiones, contaban con más vigilancia. A los huidos de Galicia, León, Asturias y Santander, regiones y provincias con una densa red de pueblos y aldeas, les resultaba más fácil apoyarse en familiares, amigos y simpatizantes para poder sobrevivir.

Pero a pesar de encontrarnos en una fase de huidos, excepto en León–Orense, también se llevaron a cabo acciones de tipo guerrillero, como los sabotajes y la detención y asalto de vehículos de línea, acciones que irritaban especialmente a las autoridades por sus efectos entre la población. Un caso emblemático lo constituyó la partida de «Velasco» en León, que realizaba habitualmente acciones de ese tipo. Importante repercusión tuvieron el ataque a las minas de Casayo, en Orense, donde se destruyeron las instalaciones, y la voladura de la línea férrea entre Orense y Quereño, población en la que se efectuó también un sabotaje contra el polvorín. Los episodios más próximos a la actividad propiamente guerrillera se realizaron mediante la ocupación de pueblos, en los que además de explicarles por qué estaban en el monte, solían llevarse alimentos, dinero y armas, aparte de castigar a las fuerzas vivas. Durante estos cuatro años se ocuparon pueblos en Cáceres (Retamosa y Roturas), León (Torral de los Vados, Torral de Merayo y San Félix de Arce) y Ciudad Real (Valdemanco), entre otras provincias. Pero el problema logístico de mayor relevancia para los emboscados más politizados radicaba en el hecho de que se había interrumpido la comunicación con las formaciones políticas y sindicales del exilio, que parecían desentenderse de lo que ocurría en los montes de España. Únicamente el PCE, en proceso de reconstrucción, trató de contactar con los resistentes de Galicia y León de España que se estaban organizando como grupos guerrilleros. En el sur, los servicios de inteligencia americanos entraron en contacto con grupos de exiliados españoles y a cambio de información sobre lo que sucedía en el interior de España, los americanos suministraban armas y embarcaciones para alcanzar las costas españolas. Algunos de estos informantes contactaron con los huidos de las sierras malagueñas.

La persecución de los emboscados, como durante la contienda, se encomendó durante la primera posguerra principalmente a fuerzas mixtas integradas por regulares, guardias civiles y falangistas. Hubo regulares y legionarios en Villanueva, Belalcázar, Bujalance y Pozoblanco (Córdoba), Sama de Langreo, Pola de Laviana y Mieres (Asturias), Viana do Bollo (Orense), Ponferrada (León), Puertollano (Ciudad Real) y Valderrobres (Teruel). La relación de estas tropas con las diferentes poblaciones se inscribió en la línea de comportamiento propio de un ejército de ocupación: menudearon los saqueos y arreciaron los obituarios. En 1940, los regulares asesinaron en la provincia cordobesa a tres vecinos y en Santa Eufemia, también en Córdoba, las tropas coloniales introdujeron aceite hirviendo en los oídos al padre de Norberto Castillejo Jiménez «Teniente Veneno»^[75]. Pero a partir de 1941 estas fuerzas mixtas empezaron a ser reemplazadas por unidades especiales de la Guardia Civil, las llamadas Compañías Móviles, acantonadas en las poblaciones importantes por donde actuaban los huidos, que se convirtieron después en Sectores Móviles y dependían de los Juzgados Militares Especiales para la Persecución de

Huidos. Una orden de 26 de agosto de 1941 del general Emilio Álvarez-Arenas, director de la Guardia Civil, relativa a la persecución de huidos, revela la importancia que para el régimen tenían los resistentes: «El actual estado de cosas ha de desaparecer en un corto plazo, por lo que no hemos de reparar en los medios para conseguirlo por enérgicos y duros que ellos sean. A los enemigos en el campo, hay que hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr su exterminio, y como la actuación de ellos es facilitada por sus cómplices, encubridores y confidentes, con ellos hay que seguir idéntico sistema con las modificaciones que las circunstancias impongan»^[76]. Los guardias civiles de estas unidades especiales tenían el aliciente añadido de que había recompensas tanto en metálico como en ascensos para quienes causaran bajas significativas a los emboscados. Los ayuntamientos tenían que hacerse cargo del alojamiento y de los gastos de estos destacamentos especiales.

La actitud de los aparatos coactivos del Estado se adaptaba al contexto en el que se movían. Los miembros de las fuerzas de orden desperdigados por destacamentos y cuarteles estaban sometidos a vigilancia y amenazados directamente por los huidos, con los que tenían que convivir, y en esos casos la acometividad se reducía al mínimo, ya que también para ellos era una cuestión de supervivencia. Pero los cuerpos especiales no tenían esos problemas. Instalados en núcleos de población importantes, realizaban operaciones de descubierta en las zonas de huidos durante varios días, viviendo sobre el terreno y en algunos casos haciendo una vida semejante a la guerrilla. En 1942 surgió en la provincia de León una modalidad contrainsurgente, las contrapartidas, y cuyo nombre oficial era el de Grupo de Fuerzas del Servicio Especial de la Guardia Civil (GFSEGC). Carlos Santullano defiende la existencia de contrapartidas en Asturias desde 1936 con el argumento de que surgieron «de un modo espontáneo al ir uniéndose en grupos armados gentes de las zonas que iban siendo ocupadas. Nacen por razones de autoprotección con el fin de defenderse de las posibles agresiones de los huidos». Sobre las contrapartidas existe una literatura doble e irreconciliable. Pero incluso el mismo régimen franquista se vio en ocasiones obligado a detener, e incluso a ejecutar, a algunos miembros de estos grupos «por exceso de celo». En realidad, el *modus operandi* de las contrapartidas siempre fue idéntico y lo que cambiaba era la composición de ese «maquis blanco». En un principio las integraban guardias civiles y falangistas, con predominio de elementos civiles, vestían al modo guerrillero y llevaban una vida semejante a los hombres del monte, presentándose en los pueblos en los que sabían del apoyo a los resistentes con el fin de desarticular las redes de enlaces o contactar y liquidar a los propios guerrilleros, que los confundían con compañeros suyos. A partir de 1945, cuando se generalizaron, las contrapartidas estaban integradas por civiles — de hecho, eran conocidas también como Unidades Civiles—, sobre todo falangistas y somatenistas, pero también ex guerrilleros e incluso delincuentes comunes. Un

miembro de la Benemérita, que dirigía el grupo, era el único acompañante oficial. En algunas provincias, las contrapartidas apenas tuvieron éxito porque la mayor parte de los huidos se conocían y eran conocidos por los enlaces. No sucedió lo mismo en otras zonas del país, en las que las contrapartidas llegaron a ser mortíferas para la resistencia armada, sobre todo en aquellas que recibieron el refuerzo del maquis «francés».

En la provincia de Ciudad Real se crearon en 1942 destacamentos especiales en los pueblos donde no había puestos de la Benemérita, y también se instalaron en cortijos y dehesas. Los integraban un suboficial y media docena de guardias, y se establecieron en los pueblos de Valdemanco del Esteras, Navalpino, Saceruela, Guadalmez, Alamillo, Almadenejos, San Benito, Navas de Estena y Los Cortijos, además de en 14 caseríos repartidos por la zona montañosa. Excepto durante el año 1943, que estuvieron adscritos al Sector de Fuerzas Operantes, dependían de las Compañías en cuyas demarcaciones se hallaban situados^[77]. Algo parecido sucedió en las provincias con problemas de emboscados. En Ponferrada se instaló una Comandancia Especial para «la persecución de huidos y cómplices», al igual que en El Barco de Valdeorras (Orense), Morella (Castellón) o Navalmoral de la Mata (Cáceres). Todos estos grupos especiales coexistían con los cuarteles tradicionales, que no eran efectivos. Marcelino Fernández Villanueva «Gafas» lo explica con nitidez: «En los pueblos había destacamentos de Guardias Civiles, Policía Armada o soldados que eran totalmente inoperantes. Con los destacamentos de los pueblos eran nuestros enlaces quienes mantenían relaciones, especialmente si se trataba de la Policía Armada. La relación, por lo general, era de no agresión y nos vendían municiones en algunas ocasiones. Al oscurecer se metían en sus cuarteles advirtiéndolo previamente a pastores y vecinos que no querían chismes sobre los del monte». No era lo habitual, sin embargo, y paulatinamente, sobre todo a partir de 1945, la dureza de la represión impuso entre los guerrilleros una consigna: era preferible defenderse hasta la última bala o suicidarse que caer en manos de las fuerzas represivas.

Lentamente, en todos los territorios afectados por lo que el régimen denominaba como «problemas derivados del bandolerismo» fue introduciéndose el nuevo cliché represivo. Las normas sancionadoras se generalizaron. Se prohibió la caza, y desplazarse por las zonas montañosas exigía —también a pastores y carboneros— salvoconductos y horarios establecidos. En la franja territorial entre España y Francia se prohibió a los lugareños acercarse a la frontera. El Gobierno Civil de Huesca ordenó a los alcaldes de las localidades próximas a sectores de huidos que procedieran «a la detención de cuantos mendigos circulen por ese pueblo y sus alrededores, ingresándolos en el Depósito municipal»^[78], verdadero detalle de humor negro en una época de miseria generalizada. En las batidas efectuadas por los guardias civiles solían llevar a familiares, amigos o ex huidos que se habían

entregado, con el objetivo de señalar los escondites y, de paso, servir de blanco para los fugitivos en el caso de que se desencadenara un tiroteo. Los del monte se encontraban entonces con el dilema de entregarse o disparar contra sus familiares o amigos. No se respetó ni a las mujeres embarazadas: Josefa Garrido, esposa de Eugenio Collado Rodríguez «Capitán Corruco», abatido en Cerro Coscojo, murió a consecuencia de las torturas infligidas por la Guardia Civil en Santa Olalla (Toledo) pese a que esperaba un hijo^[79].

A finales de este periodo, se empezó a producir un fenómeno paralelo, relacionado con lo que estaba ocurriendo en los campos de batalla del mundo: la derrota nazi era un hecho y todo el mundo pensaba que repercutiría en España. Incluso algunos de los más significados represores de primera hora, siguiendo su política personal de medraje, empezaban a enviar mensajes de ayuda al monte. Ese apoyo también se lo suministraron una amplia capa de profesionales —médicos, abogados, etcétera— y pequeños industriales. La redefinición afectó asimismo a las fuerzas de represión, y a partir de entonces funcionó en la práctica un pacto de no agresión en todos los sectores de huidos que, aunque no estaba escrito, todos respetaban. Los carnés de Falange ya no eran tan apreciados; al contrario, se rompían en muchos casos, y tener amigos en el monte empezó a considerarse un buen aval. Durante 1944 todo el mundo era consciente de estar viviendo una calma tensa, una especie de paréntesis más allá del cual se desconocía el rumbo que podían tomar los acontecimientos con respecto a España.

Extremadura, La Mancha y Andalucía

En estas regiones habían permanecido en el monte bolsas de huidos del periodo de la guerra, a los que se agregaron posteriormente soldados del derrotado Ejército republicano y, sobre todo, evadidos de los destacamentos penales de Toledo (Burguillos, la Presa del Alberche de Talavera de la Reina o Puerto del Rey) y de las prisiones nuevas de Córdoba y Badajoz, además de los que se escapaban de las numerosas cárceles habilitadas en los pueblos que eran cabeceras de comarca. Libertos de las excarcelaciones de 1940 y 1943 incrementaron también los núcleos de emboscados, que se distribuían principalmente por el sudeste de Cáceres, oriente de Badajoz, Montes de Toledo, norte de Córdoba y Ciudad Real. Los trasvases de las partidas entre las diversas provincias se convirtieron en algo habitual, hasta hacer comprometida la delimitación de los grupos en función de cada provincia. También existían noticias de huidos en Jaén por el sur, en la sierra de Gredos por el norte, además de las rocambolescas relaciones entre el espionaje americano en el Magreb y los comunistas españoles, que lograron contactar con los huidos de la Axarquía

malagueña. Desde el punto de vista ideológico, se evidenció desde el primer momento que socialistas, republicanos y anarquistas —éstos, en menor medida— aceptaban pasivamente el estado de cosas existente. El grupo más activo era el comunista, algo habitual en toda España.

Debido a la propia situación de los huidos y a la ausencia de una organización siquiera rudimentaria, resulta arriesgado inventariar con rigor a los diferentes grupos. Por Extremadura y las provincias manchegas de Ciudad Real y Toledo se movía una de las partidas más importantes de este periodo, la encabezada por el bracero comunista Joaquín Ventas Cita «Chaquetalarga», natural de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). El grueso de sus componentes —en torno a una docena— se había evadido de la cárcel del pueblo pacense de Herrera del Duque el 12 de marzo de 1940 y eran naturales de Fuenlabrada de los Montes, Villarta de los Montes y Navalvillar de Pela. El ascendiente sobre sus hombres no impidió, sin embargo, que dos de los integrantes de la partida, naturales además de su pueblo, se entregaran a las autoridades y se hicieran confidentes, iniciando una tipología que abundará en la región. Según Vila Izquierdo, debido a las incorporaciones —el grupo alcanzó la treintena de hombres—, «Chaquetalarga» impulsó la creación de otra cuadrilla, encabezada por Diego Hórrete y Valentín Jiménez Gallardo, que instaló su base de operaciones en una cueva de difícil acceso sobre el río Guadiana. En el contexto de los primeros años cuarenta, era primordial que los grupos no superaran la docena de hombres. La ausencia de organización y de líderes que centralizaran el ejercicio del poder condicionaba el número de hombres por partida.

A mediados de julio de 1940, «Chaquetalarga» —que en ocasiones se hizo llamar «Carrillo»— efectuó un golpe económico en Valdemanco, pueblo de Ciudad Real que además ocupó durante horas, y siguió impulsando una sorprendente movilidad a la partida, que se desplazaba por los límites de las provincias de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Toledo. El nomadismo planificado de este grupo permitió que apenas tuvieran enfrentamientos con unas fuerzas de represión todavía bisoñas en los métodos de la guerra irregular. Más problemas encontró la partida liderada por Horrete y Jiménez Gallardo. En el invierno de 1941, cuando merodeaban por la comarca cacereña de las Villuercas fueron cercados en el valle de las Roperas por 150 guardias civiles, falangistas y guardas de los cortijos, y en el combate murió Manuel Pachón. En esta fase fue importante la traición en el otoño de 1943 de Joaquín «Petenero», que siguió el procedimiento establecido en estos casos: entrega a la fuerza pública, información sobre la cuadrilla de Jiménez Gallardo y, finalmente, integración como guía en los destacamentos policiales. Como fruto de esa delación, se produjo un ataque a la partida en el pueblo de Talarrubias, en la Siberia extremeña (tierra de huidos y paraje pizarroso que había sido desde tiempos remotos lugar de extrañamiento). En el enfrentamiento fueron detenidos cinco huidos —fusilados días

después en la plaza de Castuera—, y otros tres, al quedarse sin munición, utilizaron la última bala para suicidarse. «Petenero» también denunció los puntos de apoyo, y dos enlaces fueron ejecutados, otros torturados y varios más detenidos. La partida fue desarticulada, ya que sólo sobrevivieron cuatro miembros^[80].

Otra partida relevante durante los primeros meses de 1940 era la de Jesús Gómez Recio «Quincoces», natural de Aldeanueva de San Bartolomé —pueblo en el que había sido concejal del PSOE—, fugado en el verano de 1940 del depósito municipal de su pueblo, al igual que la docena de hombres que lo acompañaba. Tres de ellos perdieron la vida entre 1941 y 1943. A partir de septiembre se les detectó por tierras de Toledo (Oropesa, Aldeanueva de Barbarroja), donde efectuaron diversos golpes económicos. Durante este año, la partida de Gómez Recio se desplazó asimismo por las provincias de Toledo, Cáceres y Ciudad Real. También aparecía como relevante la cuadrilla de Eugenio Sánchez «Rubio de Navahermosa», natural de esa localidad toledana, y que aglutinaba entre 25 y 30 hombres. El elevado número les aconsejaba dividirse, y los nuevos grupos fueron encabezados por Valentín Gil Valiente «Chato de la Puebla» y Antonio Fernández Alonso «Lobo». Se movían por las localidades de Navahermosa, Menasalbas, Navas de Estena, Retuerta del Bullaque y La Puebla de Montalbán. Pero a partir de 1941, el acoso permanente de la Guardia Civil provocó importantes bajas a los del monte, cuyos detalles conocemos por el trabajo de Benito Díaz Díaz. «Chato de la Puebla», que operaba en los Montes de Toledo, entre la localidad toledana de Navahermosa y la ciudadrealeña de Navas de Estena, perdió a varios hombres durante ese año, y él mismo acabó su periplo armado. Después de eliminar, en compañía de dos huidos, a un falangista que trabajaba de guarda en una dehesa en las afueras de La Puebla de Montalbán, la fuerza pública llevó a cabo una persecución minuciosa y sistemática. El 2 de abril ya había sido detenido y cinco días después, fusilado. También en 1941 fue abatido en un tiroteo con soldados otro de los huidos toledanos más representativos, Eugenio Sánchez Esteban «Rubio de Navahermosa». Según fuentes oficiales, dos miembros de la partida, Santiago Rodríguez Morales y Eusebio Gómez Madrid, fueron detenidos, así como otros compañeros. Finalmente, le tocó el turno a «Rubio de Navahermosa», herido el 5 de abril en una de las entradas de su pueblo por un vecino armado que montaba guardia. Pero antes de ser capturado, optó por suicidarse. También su cadáver fue expuesto en el pueblo, para escarmiento de los convecinos. El tercer jefe de huidos, Antonio Fernández Alonso «Lobo», aunque fue cercado en abril en un molino de las cercanías de Menasalbas, consiguió huir después de abatir a dos guardias civiles y herir a un cabo. Traicionado por el propietario y jornaleros de una finca de Hormigos, fue detenido en ese pueblo: la Guardia Civil lo eliminó mediante la «ley de fugas». Unos meses antes, en el mes de febrero, también había sido eliminado por los soldados otro de los huidos toledanos más conocidos, Saturnino Gómez Muñoz «Margallo», del

grupo de Menasalbas. Hostigados continuamente —se aplicaron la «ley de fugas» y las ejecuciones judiciales con una periodicidad estremecedora—, los restos de estos grupos se unieron posteriormente a «Chaquetalarga» o trataron de alcanzar la frontera portuguesa^[81]

Entre Ciudad Real y Badajoz, en las sierras de Siruela, los Aneares, los Canalizos y la Solana, se movían varias partidas, aunque la más conocida desde un principio la conducía José Méndez Jaramago «Manco de Agudo», que se había echado al monte el 4 de noviembre de 1940. Tres miembros de su familia —su padre, su hermano Manuel y su hermana Asunción— estaban con él en la sierra. Los pueblos centrales de esta cuadrilla eran las localidades ciudadreales de Agudo, Porzuna, Navalpino, Navas de Estena, Saceruela y las pacenses de Tamurejo y Baterno. Partida de gran movilidad y un importante activismo, en agosto de 1940 el grupo ejecutó a Pedro Cabanillas, falangista de Agudo. Poco tiempo después, el padre y la hermana de «Manco de Agudo» murieron tiroteados en extrañas circunstancias en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), aunque posiblemente existió una vinculación directa con la ejecución del citado falangista. Como era habitual en la época, inmediatamente se desató una contrarréplica violenta. El 21 de abril de 1941 Méndez Jaramago atacó en las proximidades de Agudo a una pareja de guardias civiles —los números Manuel Gutiérrez Abogacía y Pascual Vivas San Clemente—, que fallecieron en la refriega. En 1944 se le atribuyó a su partida el asesinato de una muchacha en abril y de un vecino de Fuenlabrada de los Montes el 26 de julio. También entre Cáceres y Ciudad Real deambularon otras partidas de menor repercusión popular y policial, integradas esencialmente por hombres huidos de las penitenciarías de Castuera y Don Benito. El centro de gravedad de estas partidas se situaba en Cañamero, Logrosán y Guadalupe. Una de las más destacadas era la de Honorio Molina Merino «Comandante Honorio», que comenzó en 1940 con veinte hombres evadidos de centros penitenciarios, especialmente de Herrera del Duque, y se desplazaba habitualmente entre Extremadura y Ciudad Real aunque tenía sus bases en Los Yébenes toledanos. En 1942, varios hombres de la partida asaltaron una casa del alcalde de Las Ventas con Peña Aguilera, también farmacéutico, al que degollaron, y luego arrojaron su cadáver sin pantalones en los alrededores de la casa. Benito Díaz cuenta que el alcalde tenía relaciones con la mujer de un trabajador de su finca y, según las versiones populares, también mantenía relaciones con el jefe de los huidos. También se le atribuyó la muerte de Aurelio Fernández, alcalde de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), a la partida de «Comandante Honorio», que pierde a varios hombres en 1943^[82].

Pedro Díaz Monje «Francés», natural de la población cordobesa de Hinojosa del Duque (Córdoba), se había fugado de la cárcel de su pueblo el 19 de septiembre de 1940: estaba condenado a muerte. La importancia de Díaz Monje, militante comunista de arraigadas convicciones, se basó en la tutela —ejercida sin apenas

intendencia ni apoyo político—, sobre una de las partidas más numerosas en el periodo de los huidos, además de constituirse como el primer resistente de estos territorios que alimentó la creación de una red de enlaces integrada por elementos ajenos a los medios familiares. Antes de la fundación de las agrupaciones guerrilleras, «Francés» realizó acciones que pueden considerarse de tipo guerrillero. La partida que dirigía alcanzó el medio centenar de miembros, evadidos en la mayor parte de los casos de los presidios de Castuera, Don Benito e Hinojosa. En 1943 tuvo veinte incorporaciones, entre ellas cuatro mujeres. Merodeaba por las sierras de Guadalupe y Altamira, márgenes del río Ibor, y núcleos de población como Guadalupe, Alía, Navatrasierra, Carrascalejo (Cáceres) y otras localidades de la comarca de los Ibores. Las altas de 1942 y 1943 provocaron que «Francés» impulsara la creación de tres nuevas partidas, encabezadas por Pedro Sebastián Jiménez «Madroño» (sierras de Altamira y Guadalupe), Eugenio Morán «Durruti» (sierra de Miravete) y «Carbonero» (sierra de Montánchez). Al sur de Badajoz, en los límites con Sevilla y Córdoba, operaba el grupo de Juan Manuel García Martínez «Chato de Malcocinado», por ser natural de ese pueblo de Badajoz. Evadido en 1941 de la cárcel de Azuaga junto con otros quince presos, articuló una cuadrilla que actuaba entre los pueblos pacenses de Azuaga y Fuente de León, el sevillano de Constantina y el cordobés de Hornachuelos. El 16 de agosto de 1944 en el pueblo de Hornachuelos se produjeron tres bajas en el grupo de «Chato de Malcocinado» —Lorenzo García Romera, Emilio Suárez Galván y Jesús Suárez Romera—, que ya había perdido a dos miembros el 25 de abril de ese mismo año en Fuenteobejuna^[83].

En el oriente de Ciudad Real, sierra de Alhambra y términos de Daimiel, La Solana, Membrilla y Alhambra, se movía la partida de Pedro Parra García «Chucha». La integraban «Beate», Higinio Gómez Montejano «Chucho», además de «Curilla», «Cañadas», «Borguetas» y los hermanos Piñones. Al tener que marchar de la sierra de Alhambra por la persecución de las fuerzas de orden, se emplazaron en la comarca de Tomelloso. A finales de 1941, la partida estaba desarticulada y sus jefes, muertos. Una cuadrilla significativa, la de José Jiménez Nieto «Mera», fue eliminada el 7 de mayo de 1944 entre Piedrabuena y Porzuna, muriendo el jefe y dos de sus hombres. Otras partidas significativas eran las de José Mendoza Jiménez «Rojillo», Ángel Jiménez Santos «Lastras», Francisco Corchado Silveira «Lazarete», Víctor Cerezo Romero «Víctor», Francisco Osuna Galiot «Vidrio», Francisco Olmedo Pérez «Hinchao» y Luis Delgado Grande «Sartenilla». En total, unas 24 partidas que tenían cada una entre doce y catorce hombres habitualmente. Actuaban por los límites de diversas provincias, y algunas de ellas alcanzaron importancia en la ulterior guerrilla organizada^[84].

Finalmente, pese a la existencia de algunos huidos en núcleos jiennenses como Moralejo y Bailén, Córdoba se situaba como la provincia andaluza más activa, sobre

todo en su banda septentrional. En ella actuaban una serie de grupos influyentes, como uno anarquista que se movía por la zona de Villaviciosa, entre Hornachuelos y Fuenteobejuna. Partidas importantes eran también la de Julián Caballero Vacas «Caballero de Vacas», que se desplazaba por Villanueva de Córdoba —su pueblo natal, del que había sido alcalde en la época republicana—, Pozoblanco, Cardeña, Adamuz (Córdoba) y Fuencaliente (Ciudad Real), y la dirigida por el socialista Claudio Romera, asentado en Adamuz. Pero uno de los episodios decisivos en la configuración de la resistencia cordobesa lo constituyó la huida masiva de la cárcel de Hinojosa el 1 de septiembre de 1940, que se unió al goteo de evadidos de las cárceles de Azuaga y Peñarroya, así como de los múltiples destacamentos penitenciarios y de trabajo de la zona. Entre las partidas más destacadas se encontraban las de Hilario Martínez Aranda «Godoy del Pueblo», de Hinojosa, Manuel Hidalgo Medina «Bellota», Francisco Vigara Mesa «León» y Dionisio Gallego Cáceres «Pintado» de Belalcázar. Merodeaban entre las provincias de Córdoba, Ciudad Real y Badajoz. Todos estos grupos, básicamente los dos primeros, se refugiaban habitualmente en las sierras pacenses que rodean los pueblos de Zarza, Almorchón y Cabeza de Buey cuando eran acosados en sus espacios originarios^[85].

La partida más popular en tierras cordobesas fue la de «Los Jubiles», integrada, entre otros, por los hermanos Rodríguez Muñoz (Francisco, Juan y Sebastián), anarquistas que habían combatido en la guerra civil, y que se desplazaba por las comarcas de Montoro y Bujalance. El 8 de julio de 1940 en un encuentro con terratenientes y falangistas que estaban de cacería en el término de Obejo, mataron a un propietario (Antonio Padilla Olivares) y a tres falangistas (Edmundo Cano Juárez, Pedro González Herruzo y Juan Herrera Herruzo). Los huidos, por su parte, tuvieron una baja, a la que hubo que añadir otras dos el 4 de mayo de 1941 en Bujalance, las de Manuel Alcalá Rodríguez y Francisco Cobo Benítez. Antes de su trágico fin el 6 de enero de 1944, las fuerzas represivas habían eliminado a trece miembros de la partida, y el 12 de diciembre de 1943 murió en el asalto a un cortijo Juan Rodríguez Muñoz, uno de los hermanos. Los otros dos cayeron rápidamente. Como secuela de las informaciones de Sebastián Caravaca «Niño del Dinero», sobrino de los Rodríguez, que había subido al monte por cuestiones ajenas a la política —dejó embarazada a una muchacha del pueblo—, y de la delación de un compañero de la cuadrilla, Juan García Olmo «Abisinio», el 6 de enero de 1944 en el cortijo «Mojapiés», término de Montoro, se produjo el enfrentamiento definitivo. Murieron los dos hermanos Rodríguez que quedaban (Francisco y Sebastián), además de Tomás Martínez Luque, Antonio Castilla Ramírez «Bigotín», Miguel Morales Huertos y Manuel Jiménez Fernández^[86].

Al margen de los grupos principales, entre 1940 y 1944 se produjeron una serie de episodios en la resistencia armada de Córdoba que pasamos a inventariar en sus

aspectos más destacados. El 31 de mayo de 1940 los huidos abatieron al guardia civil Antonio Guerrero y al soldado Gonzalo Vázquez en un encuentro armado. El 21 de junio de 1941, el grupo de Villanueva de Córdoba sufrió cuatro detenciones en el término de Pozoblanco —entre ellos a Bartolomé Torralbo Chuán «Ratón»— y tres muertos, José Delgado Curiel «Serranillo», Martín Viveros Celestino «Tío del Pito» y José Sánchez Gómez «Carnes», un histórico del socialismo andaluz. En 1944, además de las importantes bajas de «Los Jubiles» y «Chato de Malcocinado», también quedó diezmada la partida de «Los Parrilleros» en Fuencaliente (Ciudad Real). Muerto el jefe, Miguel López Cabezas, en febrero de 1944 como resultado de una delación, el resto de los miembros de la partida fue detenido el 20 de diciembre de 1944, excepto un cuarto miembro que desapareció. Pero el suceso más dramático se desarrolló en el término de Los Blázquez, en el Cerro Coscojo, el día 11 de mayo de 1942. En un combate entre 4 guardias civiles y unos veinte resistentes, la mayoría de ellos escapados de la cárcel de Hinojosa, murieron seis huidos y tres guardias civiles, mientras que el cuarto miembro de la Benemérita logró huir. El 19 de enero habían sido abatidos tres huidos en el término de Fueteobejuna. Según Francisco Moreno Gómez, el resultado de la represión contra los huidos en Córdoba entre 1939 y 1944 alcanzó los 70 huidos muertos (tres de ellos enlaces) y 21 franquistas^[87].

Finalmente, entre el Magreb y las costas de Málaga se produjo un hecho singular a raíz del desembarco y control de las costas norteafricanas por parte de los aliados en el mes de mayo de 1942. Los americanos, ante la posibilidad de invadir España («Operación Torch»), iniciaron una campaña de espionaje que condujo a la creación de escuelas de preparación guerrillera entre los exiliados españoles, básicamente comunistas y anarquistas, tanto en Marruecos como en Argelia. Las escuelas estaban controladas por los servicios secretos americanos a través de la Office of Strategic Services (OSS) y la Office War Information (OWI). Los españoles seleccionados desembarcaban en las playas de Cantarriján y La Caleta con el objetivo de recoger información para los americanos, y éstos, a cambio, favorecían el contacto entre los republicanos y los grupos de huidos de la costa andaluza, además de introducir armas en España. Personaje importante en esos desembarcos fue Joaquín Centurión Centurión, antiguo «Hijo de la Noche» que logró contactar con antifranquistas como Francisco Alaminos Torres, Antonio Urbano Muñoz «Duende», José Jiménez Martín «Requena» o Miguel Arrabal Castro «Montañés». Este movimiento acabó brusca y momentáneamente en febrero de 1944 como resultado de una importante caída de comunistas en Málaga que se extendió por toda España. Un confidente de la policía o los propios americanos pusieron aquélla sobre la pista. El PCE, como era su costumbre, criticó posteriormente estas actividades, que se cortaron radicalmente con la llegada de Santiago Carrillo («Hipólito López de Asís») al norte de África en octubre de 1944^[88].

En la serranía de Ronda, entre Málaga y Cádiz, merodeaban pequeños grupos de huidos, entre los que empezaban a destacar el de Pablo Pérez Hidalgo «Manolo el Rubio» y el de Bernabé López Calle. Comunista el primero y anarquista el segundo, llegaron a ser los personajes de referencia del futuro maquis gaditano. Pérez Hidalgo, apoyándose en los refuerzos que el partido enviaba desde Argelia y Marruecos, consiguió levantar en 1943 una organización pionera de la resistencia, la Agrupación Stalingrado, que gobernaba básicamente a los guerrilleros de obediencia comunista. Pero más que una guerrilla organizada, en sentido estricto, era una partida amplia con inquietudes políticas. Otras cuadrillas significativas fueron la de Juan Francisco Domínguez Gómez «Pedro el de Alcalá» y la de «Los Morenos de Cortes», capitaneada por los hermanos Francisco, Diego y Julián Moreno Barragán. Emboscados populares entre la población fueron Juan Núñez Pérez «Cuchillitas» y Alfonso Sánchez Gómez «Potaje». Durante este cuatrienio se produjeron numerosos golpes económicos y secuestros en el área de actuación de estas partidas, que operaban sobre todo en las localidades de Algar, Jimena de la Frontera, Grazalema, Jerez y Ubrique en Cádiz, y Cortes, Benaolán, Montejaque y Gaucín en Málaga. Un episodio importante se produjo en Alcalá de los Gazules, cuando el 9 de junio de 1941 una partida mató en el cortijo «Arnao» a tres personas, un guarda jurado, su hija y el hijo del colono^[89].

También en 1943 empezó a formarse un grupo armado en la localidad abulense de Piedralaves, en las estribaciones de la Sierra de Gredos, adonde habían llegado Adolfo–Lucas Reguilón García, militante comunista excarcelado ese mismo año, y su esposa, Isabel Villalba Herrada. Apoyados por los hermanos Mariano y Manuel Gómez Sánchez «Tabanques» y media docena más de hombres de la comarca, crearon en una reunión en el Alto del Mirlo —ahora conocido como Zona M— las «guerrillas carpetanas» bajo las directrices emanadas de la UNE. Los valles del Alberche y el Tiétar se constituyeron en teatro de operaciones de sus actividades. Reguilón García, que se hacía llamar «Severo Eubel de la Paz», era un personaje verdaderamente atípico. Mezcla de pintoresquismo y vanidad, pacifista y un poco extravagante, su actuación podría catalogarse de cómica si la época y el contexto hubieran dejado un resquicio para la risa. Reguilón García, que en lugar de hacer la guerra jugaba a los soldados (aunque arriesgando la vida «de verdad»), inventó zonas, flancos, posiciones, cabeceras de sector, elaboró programas («el guerrillero será aseado en su persona, moral en sus acciones y comedido en sus vicios») y firmó decretos como un general en conquista. Maestro y grafómano, el documento que escribió para la toma de Piedralaves produce hilaridad.

Aunque no existe excesiva información sobre los responsables policiales en la lucha contra el maquis, algunos de ellos han pasado a la historia de la represión en España, como veremos más adelante. Pero en esta fase de la resistencia adquirió

notoriedad Manuel Gómez Cantos, teniente coronel de la Benemérita y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. Había iniciado su carrera pública cuando el 18 de julio de 1936 se sublevó contra la legalidad republicana en Villanueva de la Serena (Badajoz), aunque el ataque de los milicianos le obligó a huir. Después de un breve destino en Marbella, estuvo desde 1937 al frente de una Brigada Móvil luchando contra los huidos en las provincias de Badajoz, Sevilla, Córdoba y Huelva. El 12 de febrero de 1942 fue nombrado responsable de la persecución de huidos en el 2.º Sector (Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Toledo) y terminó pasando a la historia local como «El Exterminador» o «El carnicero de Extremadura». Desde que fue nombrado máximo responsable en las zonas guerrilleras extremeñas, llevó a cabo una durísima política de aniquilación contra los republicanos. En Las Mesas y Castañar de Ibor, por ejemplo, eran detenidos periódicamente vecinos de esos pueblos y conducidos al Puente de Almaraz —53 metros de altura—, desde donde los arrojaban al río Tajo. Cuando trataban de alcanzar la orilla, eran tiroteados por pistoleros falangistas. Este sistema de eliminación fue conocido como «mareo».

El 8 de diciembre de 1940, basándose en informes apenas contrastados, detuvo a 12 vecinos de Cañamero ya 16 en Logrosán, todos ellos republicanos y antiguos presos de la comarca de Las Villuercas. Reunidos en Logrosán, los subieron en un automóvil de la Guardia Civil y los fusilaron en la finca «Dehesilla Mira el Río». En 1942, una cuadrilla de huidos ocupó La Calera (Cáceres), donde robaron todo tipo de enseres, comida y dinero, además de maltratar a diversas personas que juzgaban simpatizantes del régimen. Como consecuencia de estos hechos, Gómez Cantos, para prevenir la repetición de esas actividades, mandó detener al azar a 24 vecinos de Alía y La Calera. Las denuncias de los confidentes y las sospechas de un pasado republicano bastaron para apresarlos. Prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento más o menos legal, todos ellos fueron fusilados en las tapias del cementerio de Alía el 26 de agosto de 1942, pese a las peticiones de clemencia por parte de algunos vecinos. En dos operaciones represivas, el teniente coronel Manuel Gómez Cantos había mandado ejecutar a 52 personas al margen de toda legalidad, incluida la franquista^[90].

La Federación de Guerrillas de León–Galicia

En el occidente de la provincia de León y el oriente de Lugo y Orense, en la sierra del Eje, se produjo el episodio más decisivo de la resistencia durante este periodo: la fundación de la primera organización guerrillera de posguerra, la Federación de Guerrillas de León–Galicia, que los comunistas utilizaron como ejemplo para las

futuras agrupaciones guerrilleras. Aunque a la altura de 1939 los grupos que continuaban protagonizando una mayor actividad eran los de David Fuentes Álvarez «Velasco» y César Terrón Abad. Al primero se le atribuyeron varios atracos en los pueblos de Casteló de Frades y Cereijedo, del Ayuntamiento de Nogales–Becerreá (Lugo). El 4 de mayo de 1940 fue cuando el grupo de «Velasco» efectuó su acción más mortífera. Como represalia por la muerte de su amigo Francisco Quiroga a manos de unos falangistas, David Fuentes y su grupo ejecutaron a tres pedáneos del Ayuntamiento de Balboa y a un familiar de los mismos.

El jefe de la otra partida inicial, César Terrón, fue localizado con su grupo en los montes de Villar de Otero por una patrulla mixta. Se entabló un tiroteo, y Terrón recibió un tiro en la cabeza que le ocasionó la muerte: era el 21 de julio de 1940. Los demás compañeros consiguieron huir. El mando del grupo pasó entonces a Florentino Picó «Maestro», pero la situación comenzaba a hacerse irreversible para estos hombres acosados. En un pinar de Cañedo, el 18 de febrero de 1941 tuvo lugar una escaramuza en la que murieron el nuevo jefe y cinco de sus compañeros, así como el guardia civil Nicasio González Arias. Dos meses después del combate de Cañedo, el 14 de abril de 1941, encontró la muerte «Velasco», eliminado junto con su amigo Manuel Mauriz Álvarez en el pueblo de Valverde de Balboa. En el noroeste de El Bierzo, moviéndose por el valle de Fornela y desplazándose por las comarcas asturianas de Ibias y Narcea, seguía operativa la partida de Serafín Fernández Ramón «Santeiro». Pero en la provincia de León, el grupo más significativo seguía instalado en los límites con Orense, en los montes de Casayo, que durante estos primeros años de posguerra realizó importantes acciones de represalia. Así, durante la noche del 19 y la madrugada del 20 de abril de 1940, un nutrido grupo de huidos llegó al pueblo de Puente de Sanabria (Zamora) con el objetivo de efectuar un golpe económico, ya que era día de mercado. En el pueblo asaltaron varios comercios y dieron muerte al sacerdote de la localidad, Raimundo Alonso Fernández, a una joven, Josefa Prada Fernández, y al médico, Heliodoro Iglesias. Cuando huían hacia la sierra de Segundera, al pasar por Galende, también asesinaron al párroco, Tomás Rodríguez Chimeno, y al secretario del Ayuntamiento, Gregorio Cobreros. La razón aducida para justificar esas muertes fue su condición de partidarios del régimen franquista.

Lo más importante para la guerrilla galaico–leonesa, y también para la resistencia a escala nacional, se gestaba en los montes asturianos. El día 16 de mayo de 1940, 16 huidos asturianos comenzaron un segundo intento de huida a Portugal, adonde llegaron dos meses y medio después. Destacaban entre ellos Marcelino Fernández Villanueva «Gafas», los hermanos César y Arcadio Ríos y los también hermanos Mario y Guillermo Morán. Los asturianos se dirigieron primero a la sierra del Eje, donde conocían a algunos de los huidos. El 27 de julio, acompañados por los principales miembros de la resistencia galaico–leonesa, salieron hacia Portugal,

aunque los más significativos de estos últimos regresaron a Casayo antes de alcanzar la frontera. Después de incontables calamidades, los supervivientes del viaje a Portugal decidieron volver a Casayo, punto de partida. En el país vecino, acosados por las fuerzas salazaristas —*guardinhas*, la guardia republicana y la temida PIDE, la policía política— y un invierno durísimo, seis huidos encontraron la muerte: Alfredo Blanco, José Blanco, Tomás Fernández «Capitán Fantasma», Gilberto Cuadrado Soto, Valentín García y Claudio Pousa «Joven» (que era el guía). Los dos primeros, que eran hermanos, murieron como resultado de una impresionante nevada el mismo día, 13 de febrero de 1941, aunque en lugares diferentes. Cuatro fueron detenidos y extraditados a España. El fracaso de la aventura portuguesa provocó en la primavera de 1941 un giro radical entre los huidos del occidente leonés y la banda oriental de Orense. Cuando regresaron los participantes del periplo portugués, el número de moradores de Casayo había aumentado de modo considerable, aunque la incorporación de mayor trascendencia fue la del leonés Abel Ares Pérez, teniente en el frente asturiano y que alcanzó fama como el mejor práctico de la zona.

Orillada la alternativa portuguesa, se reanudaron las conversaciones para encuadrar políticamente a los numerosos huidos de Casayo y a otros de cuya existencia se tenían noticias, sobre todo de la zona de El Bierzo y el oriente gallego. Comprendiendo que la huida resultaba comprometida, los asturianos, con una mayor formación política, coligieron la necesidad de vertebrar una organización guerrillera que pusiera fin a la provisionalidad. Marcelino Fernández Villanueva se erigió pronto como el líder de la resistencia armada. Su capacidad y dotes para el mando, así como una trayectoria política intensa y la mayor graduación republicana entre los huidos en la época de la guerra civil, le permitieron situarse como el dirigente indiscutido. El mismo Villanueva explicó los orígenes de la guerrilla: «La presencia de los asturianos, con los nuevos incorporados, creaba dificultades a los que ya estaban en el monte desde el principio, resolviéndose distribuirlos entre los diferentes grupos que ya operaban en la zona. Los celos venían dados porque la fantasía popular creaba héroes de los huidos de su pueblo o ayuntamiento, y éstos, a su vez, eran los jefes celosos de la sombra que podían hacerles los recién llegados. De ahí que se aconsejara habilidad, prudencia y valor personal cuando las circunstancias lo pedían. Logramos con esta táctica ir encuadrando a los huidos que actuaban aisladamente y formaban partidas ocasionales para disolverse una vez cumplido el objetivo. Se ganó el respeto y la confianza de la población cuando se le expuso el sentido de nuestra lucha». En efecto, la tarea de organizar a esos hombres no resultó fácil, dada la heterogeneidad de los diferentes grupos, en los que convivían desde militantes persuadidos de la necesidad de la lucha armada hasta quienes juzgaban una vida más cómoda vivir con las armas en la mano que trabajando en el campo. Además, muchos emboscados no querían perder la independencia mediante una integración que les

exigía deberes hasta entonces inexistentes. La ausencia de un partido que impusiera un modelo organizativo dificultó enormemente la tarea. Pero en su afán por conseguir una organización, los asturianos tuvieron suerte. Los leoneses con mayor ascendiente sobre los hombres del monte —sobre todo, Girón, Ares, Marcelino de la Parra y Abelardo Macías— eran partidarios de la lucha armada contra el régimen franquista y quienes tenían una mejor preparación política para entender lo que estaba ocurriendo en el país.

A principios de verano se aprobaron los primeros reglamentos que ponían fin a la interinidad existente hasta entonces. Uno de los puntos básicos obligaba a cada colectivo a presentar cuentas de los gastos efectuados durante la semana con objeto de evitar dispendios y poder hacer frente a las necesidades básicas. A partir del verano de 1941, todo compañero herido o inútil recibía una ayuda mensual de la organización, en el caso de que estuviera adherido a la misma. Otro de los fines de esa medida fiscalizadora era reducir los golpes económicos. Para hacer operativo lo anterior, se creó una Dirección Ambulante, compuesta por Fernández Villanueva y Girón, que se habían convertido en los líderes de asturianos y leoneses, respectivamente. La Dirección tenía como misiones principales coordinar la rudimentaria organización guerrillera y poner en contacto a los huidos aislados con los diferentes grupos que actuaban por El Bierzo, la Cabrera y el oriente orensano, así como por la parte meridional de Asturias. Al mismo tiempo, se le encomendó organizar la incipiente red de enlaces, cuya misión era infiltrarse en las fuerzas franquistas para obtener información sobre movimientos e intenciones, estableciendo contactos con la población carcelaria de la zona —sobre todo, la de los destacamentos penales—, así como con la población antifranquista. De la red de enlaces se encargó desde el principio Gonzalo López Voces «Policía de Acero», uno de los responsables del apoyo popular al maquis en la comarca de El Bierzo.

Las conversaciones y primeras medidas llevadas a cabo a partir de la primavera de 1941 cuajaron al año siguiente, cuando en la primavera de 1942 se oficializó la Federación de Guerrillas de León–Galicia. La tarea organizativa de la Dirección Ambulante y la actividad de los diferentes grupos empezaban a producir resultados. Los montes leoneses testimoniaban el nacimiento de la primera guerrilla española de posguerra. El marco político nacional e internacional se volvía contra Franco durante ese año, y a pesar de que la operación encerraba numerosas dificultades, en el mes de abril se reunían en los montes de Ferradillo, pueblo próximo a Ponferrada, 24 huidos leoneses, asturianos y gallegos que representaban todas las tendencias del antifranquismo. Eran los siguientes: José Vega Seoane «Ánimas», Pedro Voces Canóniga «Pitaciega», Antolín Murias, Eduardo Pérez Vega «Tamarón», Abel Ares Pérez, Marcelino de la Parra Casas, Marcelino Fernández Villanueva «Gafas», Victorino Nieto Rodríguez, Abelardo Macías Fernández «Liebre», Enrique Oviedo

Blanco «Chapa», Abelardo Gutiérrez Alba, Antonio Fernández Crespo «Fuenteoliva», Manuel Gutiérrez Abella, Dalmiro Alonso García, Manuel Girón Bazán, Cuñeira, los hermanos Lamas Cerezales (Pedro y Gerardo), los hermanos Morán García (Mario y Guillermo) y los también hermanos Ríos Rodríguez (Arcadio y César), Amador Pérez Poncelas e Hilario Álvarez Méndez. La militancia política de los 24 fundadores de la Federación era la siguiente: 5 socialistas, 4 cenetistas, 6 ugetistas, 4 comunistas y 5 sin militancia definida. Por lo que se refiere a su extracción social, aparte de un mecánico y un herrero, todos los demás eran mineros, jornaleros y labradores. Los estatutos fueron aprobados por unanimidad y se eligió un Comité Director, presidido por «Gafas», socialista, siendo nombrados ayudantes Mario Morán y César Ríos, también socialistas, y Marcelino de la Parra Casas, cenetista. El reparto de poder reflejaba la composición ideológica, y el puesto de mando estaba en un ático del bar de Santalla, una pequeña localidad cercana a Ponferrada.

En el Congreso fundacional se aprobaron también las líneas maestras de la guerrilla. La finalidad prioritaria de la nueva organización era aportar una nueva dirección a la lucha, encauzándola política y militarmente para aprovechar la coyuntura existente y reforzar el antifranquismo. Aunque no se conservan los estatutos fundacionales, por testimonios, entrevistas y correspondencia, se pueden adelantar las directrices básicas que configuraban los mismos y cuyos puntos principales eran los siguientes: actuar como si, efectivamente, se estuviera dentro de la ley; prohibir el proselitismo en la organización, que era expresamente pluralista; prohibir, salvo necesidades de fuerza mayor, la permanencia de mujeres en los campamentos; respeto mutuo entre los combatientes basado en la democracia interior, obediencia a los superiores y la búsqueda incansable del apoyo de la población, a la que era necesario explicar cuál era el sentido de la lucha. Es éste el punto que testimonios y supervivientes resaltan como medular. Pero se impone una pregunta con respecto a esta organización: ¿Cómo fue posible que naciera en León la primera entidad guerrillera, que además era unitaria? Los guerrilleros galaico-leoneses, aunque con militancia definida muchos de ellos, estaban totalmente desconectados de sus respectivos partidos y sindicatos, tanto del exilio como del interior. El hecho motivó que se pudiera confirmar una organización pluralista y unitaria, favorecida por la decidida voluntad organizativa de los cenetistas, y la ausencia de un Partido Comunista que hegemonizará la lucha de los resistentes. El hecho de que en la zona no tuvieran presencia los partidos políticos, hizo posible que los mismos guerrilleros se constituyeran como partido y guerrilla. Hasta 1944 no existieron contactos estables con el Partido Comunista, y esas relaciones posteriores produjeron paradójicamente las primeras fisuras en la Federación. Tampoco los socialistas tenían confianza en la guerrilla, y el mismo Villanueva recuerda que el primer contacto que tuvo con los

socialistas fue con un delegado de la ejecutiva regional de Silleda (Pontevedra), que «lo primero que hizo fue preguntarme qué tal me iba con la nueva chaqueta», pensando que había cambiado de partido: los mismos socialistas negaban capacidad a sus correligionarios para organizar la resistencia. Cuando, por fin, contactó con la ejecutiva del exilio para preguntarle cuál era la posición del partido, le respondieron: «compañero Marcelino: socialistas como tú no necesitan andaderas». Pero esta organización, modélica en tantos aspectos y luego imitada en las agrupaciones guerrilleras de toda España (aunque no en el pluralismo, que era lo esencial), no insistía en el problema más importante: el objetivo final de la guerrilla. De las respuestas de sus dirigentes, así como de otros testimonios, y, sobre todo, de la trayectoria de la resistencia galaico-leonesa, se pueden inferir una serie de claves que conformaban los objetivos y la realidad política y militar de la Federación: 1.º el objetivo inmediato era facilitar la supervivencia mediante la organización; 2.º nadie de la Federación creyó que la guerrilla sería capaz de derribar, mediante la lucha armada, el franquismo; 3.º nunca existió una decidida voluntad de ampliar la Federación más allá de los límites geográficos del noroeste de España; 4.º toda la estrategia de la organización guerrillera galaico-leonesa pasaba por la intervención aliada en España.

Sin duda alguna, el factor clave de la nueva guerrilla era el referido a los puntos de apoyo y los enlaces, esto es, la Organización del Llano, apoyado desde el primer momento por el Comité Director. Aunque las Milicias Pasivas no adquirieron carácter «administrativo» hasta el año siguiente, en 1942 se organizaron pequeñas compañías, conocidas como Servicio de Información Republicano (SIR). La infiltración de los enlaces de la Federación en el tejido represivo alcanzó un nivel significativo, lo que permitía a los guerrilleros libertad de movimientos y prever las operaciones de castigo y las batidas de la fuerza pública. La red de enlaces llegó a tener una notable complejidad en El Bierzo y la Cabrera, como resultado del indudable apoyo de la población. Las promesas de mejores tiempos en algún caso, el miedo a las represalias en otros y también la desinteresada ayuda de unas zonas duramente castigadas por la represión (El Bierzo) o abandonadas a su suerte por todos los regímenes (la Cabrera), y el hecho de que estaban acostumbrados a pactar con el poder más próximo —en aquella coyuntura histórica era la guerrilla—, propiciaron esa ayuda. En el medio rural de pequeños propietarios, la tradición era «estar con el que mandaba». Y en algunas aldeas aisladas en una orografía abrupta, el poder lo detentaban los maquis.

La primera medida externa de la Federación fue entablar relaciones con los huidos asturianos, muchos de ellos socialistas, como primer paso de la proyectada Federación de Guerrillas del Noroeste de España. La operación fracasó, pero el revés pudo ser compensado en la misma provincia porque la Federación contactó con sir Alexander Easton, que llevaba los consulados británicos de Vigo y La Coruña, y que

posiblemente pertenecía al servicio de espionaje inglés. Easton, conocido en la resistencia como «Inglés», poseía una granja entre las localidades bercianas de Carracedo y Carracedelo y terminó convirtiéndose en elemento decisivo en el devenir de la Federación y de la guerrilla española posterior. Una de las tareas que se le encomendó fue relacionarse con los partidos políticos en sus frecuentes viajes a Madrid, entre ellos el PCE. A cambio, «Inglés» solicitó a los leoneses que colaboraran con los servicios secretos ingleses en las redes de evasión del espionaje aliado y cuyo objetivo prioritario consistía en evacuar aviadores aliados derribados en Francia. Los españoles en territorio francés, especialmente los anarquistas, ya participaban en esas redes, la más destacada de las cuales era la «Réseau Pat O’Leary» (fundada por Albert Guérisset), uno de cuyos miembros más sobresalientes fue el anarquista Francisco Ponzán —quemado por los nazis el 17 de agosto de 1944 en Buzet, dos días antes de la liberación de Toulouse—, conocido en la Resistencia como «François Vidal» y jefe de pasadores del grupo Ponzán. Unas 7000 personas, entre las que había también judíos y jefes de la Resistencia, se beneficiaron de las redes de *passeurs o mugalaris*. Aunque la experiencia con los leoneses no tuvo éxito, Easton siguió su estrecha colaboración con los guerrilleros, y una de las primeras medidas fue habilitar una buhardilla en su casa que pronto se convirtió en un refugio seguro para enfermos y heridos. Además, Easton les suministraba propaganda aliada y les facilitó una radio —con la que seguían las noticias tanto nacionales como internacionales— y una máquina de escribir, con la que empezaron a tirar las primeras hojas sueltas con información y propaganda guerrillera.

El salto cualitativo en la organización no modificó la realidad circundante, y en 1942 también se produjeron bajas por ambos bandos. La primera caída importante de guerrilleros tuvo lugar el 6 de agosto cuando cerca de El Barco de Valdeorras perdían la vida en un enfrentamiento con la fuerza pública Ovidio González Pollón, Monteserín, «Polainas» —los tres asturianos—, Cuñeira y Arturo (de Correjanos–Orense), logrando los demás retirarse a sus refugios habituales. A finales de año también falleció Sebastián Rodríguez López, en un encuentro con la Guardia Civil en las proximidades de Trives. Por contra, doce guerrilleros interceptaban el 4 de septiembre un coche de línea de la empresa Fernández que hacía el recorrido Truchas–La Bañeza, porque en él viajaba el recaudador de impuestos. Los servicios de información habían fallado, por una vez, ya que en el mismo autobús viajaba una pareja de la Benemérita. El coche fue detenido, y después de la sorpresa inicial por ambos bandos, se inició un tiroteo en el que murieron los dos guardias civiles, Isidro Fuente Tejerina y Francisco Caballero Dávila, el párroco de La Cuesta, Antonio Almanza Riesco, y dos agricultores, Benito Madrigal Méndez y Francisco Carrando Fernández. También hubo tres heridos graves y uno leve.

La situación internacional repercutió de forma significativa en 1943 El 1 de abril

de ese año salía el primer número de *El Guerrillero*, gracias a una multicopista que les había conseguido Easton, y que componían y tiraban en el ático del bar de Santalla, aprovechando las horas en las que la concurrencia ahogaba los ruidos de aquella o los domingos a la hora del baile. Para su composición, el mayor problema radicaba en conseguir papel y tinta sin levantar sospechas, ya que eran productos controlados. Las ediciones de *El Guerrillero* alcanzaron una tirada media de trescientos ejemplares. En el plano organizativo, el año 1943 protagonizó una notable actividad. En el mes de junio los guerrilleros se reunieron en los montes de Ferradillo para celebrar el Segundo Congreso de la Federación, al que asistieron los resistentes que operaban en El Bierzo y los jefes de guerrilla del oriente orensano y de la banda nororiental de Lugo. En el Congreso se establecieron una serie de cambios en los estatutos. Así, el Comité Director se transformó en Estado Mayor, fortaleciendo la idea militar de la guerrilla, y fueron reafirmados en sus cargos Fernández Villanueva, Mario Morán García y Marcelino de la Parra Casas. Entre los cambios más sobresalientes de este Congreso hay que señalar la transformación del Comité de Disciplina en Tribunal de Guerrillas, imprescindible para reforzar el poder coercitivo del Estado Mayor y mantener la disciplina entre los resistentes. Los jefes guerrilleros sabían que preservar el orden en la resistencia armada resultaba complicado, debido a la propia naturaleza de la lucha y a la heterogeneidad de los hombres de la sierra. Las sanciones ejemplares —generalmente, la pena de muerte— se centraban en aquellos aspectos que podían constituir el talón de Aquiles de la resistencia: la deserción, la delación, hacer uso de las armas contra compañeros o enlaces, asaltar a gente favorable a la Federación, etcétera. La acción considerada como más grave era, no obstante, la violación, castigada con la pena de muerte (desde los medios policiales se acusó repetidamente, sobre todo a las partidas de «Manco de Agudo» y «Chaquetalarga», de Ciudad Real y Extremadura, respectivamente, de practicar violaciones de manera reiterada).

También durante el mes de junio de 1943 tuvo lugar otro hecho decisivo y que, por lo demás, resultaba inevitable a corto o medio plazo: la irrupción de los comunistas. En efecto, en el mes de junio llegó a los montes de Ferradillo —lugar habitual de reunión— José María Urquiola Iglesias, conocido como «Pepe» o «Chema», encargado por el PCE de la misión de reconstruir el partido en Asturias y ponerse en contacto con los guerrilleros y huidos del noroeste. Según Heine, «Chema» apareció en Ferradillo por mediación de Easton; sin embargo, «Gafas» sostiene que la llegada se debió a que Urquiola Iglesias conocía a sus familiares de Asturias, los cuales le indicaron el lugar donde él y sus compañeros llevaban a cabo la lucha armada. Sea como fuere, lo cierto fue que Urquiola se presentó en Ferradillo y a partir de ese momento comenzó una dinámica nueva en la Federación, en la que los comunistas actuaron como elemento perturbador. En Ferradillo, Urquiola se

reunió con los jefes de la Federación y les comunicó la existencia de la UNE que, según él, era una organización unitaria de todos los partidos y sindicatos del exilio. Seguidamente, les invitó a adherirse a la misma, pero los guerrilleros no aceptaron. Le convocaron a otra reunión para que les presentara pruebas más sólidas y pulsar, mientras tanto, la opinión de todos los compañeros. En el mes de septiembre, también en las peñas de Ferradillo, se celebró el Tercer Congreso de la Federación con el objetivo prioritario de solventar la adhesión a la UNE. Urquiola Iglesias presentó en el Congreso las pruebas solicitadas, esto es, que en la UNE participaban PSOE, UGT y CNT, lo que era una verdad a medias que luego traería secuelas negativas para el desarrollo de la lucha armada en el noroeste de España. Los guerrilleros firmaron la adhesión y seguidamente el enviado de la UNE les propuso sustituir el nombre por el de Federación Nacional de Guerrillas, puesto que era el primer núcleo guerrillero organizado y debía constituirse en ejemplo para la resistencia española, que estaba en fase de organización por toda España, según Urquiola. Pero la realidad era diferente. Salvo en León y Orense, tan sólo existía en España otra organización guerrillera: el Comité de Milicias Antifascistas de Asturias, creado un mes antes del Tercer Congreso de la Federación.

Para la Federación, 1943 no sólo fue un tiempo de buenas noticias internacionales, de congresos y discusiones políticas. La violencia y la muerte seguían jalonando la existencia de la organización, y ese año —en contra de lo que ocurría en el resto de España— fue especialmente trágico. El 7 de mayo, después de una delación, una partida fue cercada por fuerzas de la Guardia Civil, Policía Armada y Tercio, entablándose un combate que resultó mortífero para la Federación, ya que cayeron abatidos cuatro hombres: Gerardo Lamas Cerezales, Sinfiriano Alba Abella «Tato», Hilario González Quiroga y Armando Pérez Arias. Por su parte, la fuerza pública tuvo la baja del policía armada Faustino Pardo Hernández. En el mes de octubre se desarrolló otro combate en Sobrado, al ser rodeada en una casa de ese pueblo la guerrilla dirigida por Dalmiro Alonso García y Manuel Gutiérrez Abella. Pero los guerrilleros lograron salir de la casa sin bajas, no así la fuerza pública, que sufrió las de un sargento y un cabo de la Guardia Civil. La dueña de la casa en la que estaban los guerrilleros, Elpidia Morán Alonso, huyó con ellos para eludir una muerte segura, y la casa fue incendiada posteriormente. En el combate murió accidentalmente una mujer del pueblo, Dorinda Ríos García. El 24 de noviembre se desarrolló otro incidente similar, pero con repercusiones más graves. El episodio tuvo lugar en el pueblo de Rioferreiros, en la casa de la familia Calvo. Cuando el Estado Mayor se enteró de que un enlace había pasado a ser confidente de las fuerzas de represión, ordenó que nadie visitara la casa de los Calvo, que estaba sometida a vigilancia. Un guerrillero desobedeció la orden y fue muerto a tiros. La Guardia Civil asesinó seguidamente a la dueña de la casa, Josefa Calvo Reguera, y a sus hijos,

Consolación y Leónidas Calvo Calvo, cuyos cadáveres fueron encontrados por unos labradores al día siguiente arrojados en la carretera. No acabarían ahí, sin embargo, las muertes.

Por lo que respecta a la marcha de la Federación, 1944 se reveló como el año decisivo, por cuanto aparecieron los comunistas como fuerza organizada. En 1943 había llegado a Asturias Antonio García Buendía «Madriles» para organizar el PCE asturiano, que después de una febril actividad consiguió poner en pie, y en abril de 1944 estableció los primeros comités locales de León y Ponferrada, agrupándolos en el Comité Regional de Asturias, León y Santander. La guerrilla galaico-leonesa había estado hasta entonces controlada por los socialistas, pese a su condición unitaria y pluralista. Fue una época sin conflictos internos graves, y todos tenían claro que los guerrilleros eran una especie de vanguardia de las tropas democráticas que luchaban en los frentes europeos. Pero los comunistas introdujeron una dinámica nueva, con pretensiones ofensivas, que colisionó frontalmente con los veteranos. Ya fuera por indicación de las células comunistas de Ponferrada, ya por el Comité Regional del PCE —lo más probable—, lo cierto fue que a partir de 1944 en la guerrilla leonesa aumentó de forma sensible el número de comunistas evadidos de los destacamentos penales de Gargantas del Monte y Casayo, de donde escapó en mayo Francisco Elvira, que se convirtió en el líder de la fracción comunista de la Federación. Por otra parte, el jefe de Estado Mayor de la Federación, Fernández Villanueva, acompañado por Abel Ares, César Ríos y el lucense Abelardo Gutiérrez Alba, se trasladó a Lugo y La Coruña, donde entró en contacto con guerrilleros de Becerreá, Vivero y Betanzos, sentando las bases para las futuras agrupaciones de la Federación en esas provincias. Pero el viaje no rindió fruto alguno, ya que pocos años después tanto la provincia de La Coruña como las zonas occidentales de Orense y Lugo quedaron bajo el control de los comunistas a través del llamado Ejército Guerrillero^[91].

Un personaje importante en la reconstrucción del Partido Comunista y la organización guerrillera gallega fue el ya citado Urquiola Iglesias, que extendió por toda Galicia la estructura y los reglamentos de la Federación. A partir de 1943 dieron los primeros pasos para encuadrar las partidas de La Coruña y el norte de Lugo. La reunión de los grupos de huidos tuvo lugar en la comarca de Betanzos, entre las provincias de Lugo y La Coruña, y la futura entidad surgió a partir del grupo más significativo y mejor organizado de las provincias de La Coruña y norte de Lugo, que capitaneaba el anarcosindicalista José Neira Fernández, mecánico de Cuiña. Heine señala que entre sus enlaces no sólo había obreros y labradores —como era lo habitual en las otras regiones españolas— sino que también se relacionaron con eclesiásticos, miembros de las fuerzas armadas y profesionales de todo tipo, especialmente médicos. Sólo así puede explicarse que en 1942 el huido catalán Ángel Franco «Evaristo» fuera operado de apéndice en una clínica particular de La Coruña

y estuviera internado varios días. El grupo de Neira aportará además algunos de los más destacados guerrilleros gallegos: José Antonio Franco Basanta «Caudillo», Jesús Iglesias Escourido «Tizón», Francisco Gómez Núñez «Trotsky», Vicente Lage Fernández «Chicharro», Plácido Rivera Couciña, Jesús Iglesias Vázquez «Muros», Leonardo Gómez Pérez «Trancas», los hermanos Teodoro, Alberto y Remigio Franco Lamela. Pero hasta 1945, la actividad en el norte de la provincia de Lugo y La Coruña no resultó especialmente significativa. Además de abastecerse de alimentos y vestimenta, los huidos de estos territorios atacaban a representantes falangistas y religiosos sobre todo. El 17 de febrero de 1943 fueron detectados en una casa de El Ferrol dos hombres del grupo Neira, Leonardo Gómez «Trancas» y el catalán Antonio Molíns «Noi», y aunque lograron escapar, permitió el arresto de un enlace, Eugenio Bernal, lo que provocó la detención de 21 personas. El 3 de septiembre de 1939 ejecutaron a Andrés Ares Díaz, párroco de Valle de Gestoso–Monfero, y en 1942 a José Mosquera Carro, en Narón–Xubia, y a José Fortúnez Beceiro en Sedes–Xubia. Sus autores pertenecían al llamado Grupo Neira, que era el único que tenía unos objetivos aparentemente políticos y mostraba una cierta beligerancia. Pero el huido más sobresaliente de los que colaboraron con José Neira Fernández fue Marcelino Rodríguez Fernández «Marrofer», que se instaló en Viveiro y entró en contacto con los grupos izquierdistas a través de «Chicharro», teniendo que echarse al monte como resultado de sus actividades antifranquistas y la vinculación con los huidos que se movían por las costas cantábricas de Lugo y La Coruña, entre Viveiro y Betanzos. A pesar de que durante todo el verano de 1942 se mantuvo escondido en un domicilio ferrolano para curarse de las heridas sufridas en el monte, «Marrofer» catalizó la resistencia de esta área gallega desplazando a Neira del mando del grupo (incluso existen sospechas de que Neira, anarquista, pudo ser eliminado por indicación suya). Comunista convencido y ortodoxo, «Marrofer» controló a partir de 1943 los movimientos de los huidos en las costas coruñesa y lucense, y constituyó el embrión del futuro movimiento guerrillero en Galicia a partir de una reunión en Bergondo en la que se pusieron las bases de la 4.^a Agrupación^[92].

Uno de los huidos que rechazó integrarse tanto en el Grupo Neira como después en las partidas de «Marrofer», e incluso en el Ejército Guerrillero de Galicia, fue Luis Trigo Chao «Guardarríos». Natural de la comarca de Viveiro, había trabajado de guardarríos en la entonces levítica ciudad de Mondoñedo y participado en la actividad política a través de la organización socialista local. Individualista irreductible, Trigo Chao siempre actuaba en solitario y sólo excepcionalmente se hacía acompañar de algún huido de la zona, como Vicente Seoane, o posteriormente de resistentes autónomos como Roberto Alonso Díaz «Barbas» y Perfecto Requeijo Rouco «Tarrello». Antiguo emigrante a América y de familia campesina, desconfiaba de todos y el pragmatismo era su única referencia en la situación excepcional de la

posguerra. Se movía por las comarcas de Lourenzá, Abadín, Vivero y Mondoñedo, y se refugiaba habitualmente en la sierra de Meira. Según algunas versiones —otros autores lo niegan—, en el verano de 1940 ejecutó al jefe de Falange de Lugo, José Viador Traseira, cerca de Mondoñedo. También se le relacionó con la muerte del falangista Eladio Teijeiro, que con su hermano, médico de profesión, había destacado en la represión de la comarca de Foz durante la contienda civil. En el suroeste de Lugo había grupos sueltos que terminaron integrándose primero en la Federación y posteriormente en el Ejército Guerrillero de Galicia. Fue importante la subida al monte de José Castro Veiga «Piloto», carpintero que durante la guerra había sido cabo de Aviación y que había llegado a Galicia en 1945, convirtiéndose en un personaje relevante de la organización armada lucense. Militante comunista, «Piloto» contactó con destacados antifranquistas como Emilio Golás y Julio Nieto, además de Elías López Armesto y José Arias Fernández «Dapena» o «Cristo» —futuros compañeros de resistencia—, y también acompañó durante un tiempo a Ramón Rodríguez Varela «Curuxas»^[93].

Entre León, Orense y Zamora, en la parte gallega, por la zona de Verín y La Gudiña, en la frontera con Portugal, actuaba desde el final de la guerra la cuadrilla dirigida por Antonio Dosantos Ferreira «Cuco» e integrada por portugueses: Manuel, hermano del jefe, Manuel «O Liro», Antonio Dosantos Vega, Silveiro Vega y José Gómez Juniol. Asimismo, se movía por la zona Alfredo Yáñez Domínguez «Aguirre», que se había separado del grupo de «Gafas» y Girón al crear éstos la Federación. También se había negado a integrarse en la Federación Mario Rodríguez Losada «Langullo», natural de Langullo–Cesures–Manzaneda, que se movía por las sierras de Mamede y de la Queixa, comarcas de Manzaneda, Castro–Caldelas y Puebla de Trives, con un grupo reducido de huidos, entre los que destacaban Manuel García «Porco» y Jesús Quiroga Arias «Chucho». En el oriente de Lugo, en la zona de Bande y también repasando la frontera portuguesa, se había instalado una partida liderada por Albino Gómez Rodríguez. En las márgenes del Miño, a la altura de la capital, destacaba el grupo de Manuel Álvarez Silva. Posteriormente, por esta zona surgió otra cuadrilla encabezada por Demetrio García Álvarez, de la que formaba parte Jesús Girón^[94].

Por lo general, en Galicia hubo pocas bajas en el periodo 1940–1944. Entre los episodios más relevantes, subrayar los que le costaron la vida al guardia civil A. Larroso Pardo en 1943 y al sargento Ramón Varela Lorenzo en 1944. También fueron ejecutados el jefe de Falange de Cenlle–Barbantes, Augusto Pérez Piñeiro, en 1941, y Antonio Aguirre Padrón «Churro», jefe de Falange de Vilaza–Verín, en 1945, además del párroco de Maizará, José Rojo Vázquez. En cuanto a los guerrilleros, destacaron dos acontecimientos negativos. Una infiltración en uno de los grupos que se guarecía en las márgenes del Eume, que costó la vida a dos de sus miembros, Álvaro Antón y

Eduardo de Monfero, eliminados por el propio confidente, y otros dos en el campamento, muertos por la Guardia Civil. El otro episodio lo constituyó la sarracina de Gándara (Lugo), que tuvo lugar el 21 de octubre de 1942 y en la que fueron muertas cinco personas, dos muchachas de 19 y 16 años entre ellas. Según testimonio propio, el autor fue «Langullo», que iba acompañado de «Porco» y de un muchacho de nombre desconocido, aunque estos últimos no participaron en la operación. El suceso de Gándara ilustra sobre las contingencias de muchas muertes en el maquis y radiografía también las dificultades de los golpes económicos. Un huido que asalta una vivienda en la que se encuentra de golpe con dos hombres dispuestos a hacerle frente, mujeres que gritan, los compañeros que no suben para ayudarle a controlar la situación, y la muerte indiscriminada. «Langullo» confiesa que: «Algún días estou sen pensar en nada e de repente vénseme á cabeza a historia da aldea aquela. Non se me irá na vida da memoria o que tiven que facer alí, aquela porcada...»^[95].

Aunque no consiguieron vertebrarse como resistencia organizada ni entrar en contacto con los guerrilleros del oeste leonés ni con los asturianos —geográficamente más próximos—, también existió en el nordeste de León, entre las cuencas de los ríos Bernesga, Torio y Esla, y desplazándose desde las proximidades de la capital leonesa hasta los límites con Asturias, una importante bolsa de huidos como resultado de la caída del frente asturiano en octubre de 1937. Tres fueron los grupos principales, estructurados ya en este cuatrienio. El de Ramiro de Cabo Arenas «Ramirón», con base en Sabero; el de los hermanos Casimiro y Amable Fernández Arias, en torno a La Vecilla, y el grupo de Orzonaga encabezado por Fermín San Pedro Casado. Las características comunes de los tres grupos eran que sus integrantes habían combatido en el frente asturiano, que eran mayoritariamente libertarios y que habían trabajado en las minas de la zona. Poco después de constituirse las partidas, «Ramirón», partidario de una actitud próxima a la de los «topos», se retiró y fue sustituido en la jefatura de la partida por Calixto López Abad «Zara». Aislados de los demás núcleos armados, sólo mantuvieron contactos esporádicos con algunos guerrilleros asturianos que «bajaban» a León para distraer la atención de los represores asturianos. Eran los casos de Lisardo García García y Etelvino Fernández Méndez.

Un aspecto controvertido en Galicia, lo mismo que en León y que en otras provincias, era el continuo descarrilamiento de los trenes. Lucha antifranquista o simplemente envejecimiento de las vías y máquinas, lo cierto fue que, según Heine, el 14 de octubre de 1941 se ejecutó al obrero ferroviario Manuel Pérez Goyanes por un sabotaje en la vía férrea cerca de Monforte de Lemos y el 27 de octubre de ese año fusilaron a Edmundo Seoane Barral por otro sabotaje en Aranga (La Coruña). Sin embargo, existe la suficiente documentación para asegurar que los guerrilleros galaico-leoneses nunca sabotearon trenes de viajeros. Todos los testimonios resultan coincidentes: matar indiscriminadamente mediante la colocación de petardos en las

vías no entraba en los planes de los hombres del monte por una cuestión evidente: no era una medida inteligente para ganarse el apoyo de la población. El aparato propagandístico del franquismo acusó también a los guerrilleros del accidente ferroviario en la línea Barcelona–Madrid el 12 de febrero de 1949 y en el que, según información de Ferran Sánchez Agustí, fallecieron 27 personas y otras 70 resultaron heridas. El descarrilamiento del tren se produjo a la altura de la localidad tarraconense de Els Guiaments, y pese a que los periódicos catalanes hablaron de «crimen monstruoso del vandalismo bolchevique», no existen ni siquiera indicios de que partidas de maquis se desplazaran por esas comarcas para atacar contra un tren de viajeros. Desde luego, nada tuvieron que ver los guerrilleros leoneses con el accidente ocurrido el 3 de enero de 1944 en Torre del Bierzo (León), en el que se produjo un doble choque de trenes que costó la vida según algunos testimonios a más de 500 personas (aunque en la actualidad el número de muertos se rebaja en torno a 100). La censura franquista, que no estaba dispuesta a que los españoles conocieran el lamentable estado de los materiales ferroviarios, impidió la publicidad de unos hechos de fácil explicación, y contribuyó de paso a propagar rumores interesados en un tiempo en el que los guerrilleros mantenían una importante presencia en la comarca de El Bierzo.

Los huidos asturianos y santanderinos

Una de las primeras decisiones de la Federación, como hemos visto, fue establecer contactos con los huidos asturianos. Los interlocutores fueron José Mata Castro, Arístides Llana Jove y Manuel Fernández Peón. Con los asturianos, aparte de compañeros en las luchas sindicales y de ideología socialista, tenían relaciones fluidas, y «Gafas», aunque en territorio leonés, era miembro del Comité Ejecutivo del PSOE de Asturias en el monte. En 1942 los asturianos no habían conseguido organizarse y, tras las primeras conversaciones, alumbraron la Federación de Guerrillas de León, Galicia y Asturias, con el firme propósito de hacerla extensiva a Santander. Pero la vida de la organización fue puramente nominal y efímera. El punto de fricción entre leoneses y asturianos era el lugar en el que estaría instalado el Estado Mayor guerrillero. Los asturianos querían que estuviera en su provincia, mientras que los galaico–leoneses insistían en que, dado su nivel de organización, permaneciera en el ático de Santalla, donde existía ya una infraestructura. Sin embargo, esas cuestiones formales servían de pretexto a los asturianos para enmascarar diferencias mucho más profundas que la localización geográfica del Estado Mayor, aspecto obviamente secundario. La realidad era que leoneses y asturianos tenían dos formas distintas de abordar la resistencia antifranquista.

Mientras los galaico-leoneses defendían una estrategia hasta cierto punto ofensiva y militar, los socialistas asturianos eran partidarios de una posición pasiva y fundamentalmente política. Por otra parte, mientras que la Federación era unitaria y pluralista, los socialistas asturianos (que se consideraban la aristocracia del monte) tenían el proyecto de formar grupos exclusivamente de su ideología, como se demostró con el inmediato fracaso del Comité de Milicias Antifascistas de Asturias, creado junto con los comunistas en 1943 y disuelto poco después. En todo caso, era necesario constatar que no existía unanimidad entre los asturianos. Mientras una corriente defendía una actividad exclusivamente política, otra era partidaria de la lucha armada, como la que se llevaba a cabo en León. Representaban esta última tendencia Llaneza y Manuel Fernández Peón —verdaderos «sindicalistas armados»—, mientras que Mata y Fernández Casas eran partidarios de la primera.

Ni los socialistas asturianos ni la dirección del PSOE en el exilio eran partidarios de la lucha armada: habían optado por una actitud pusilánime y claudicante. Dada por supuesto la intervención extranjera, estaban convencidos de que la violencia en el monte era contraproducente para acabar con el régimen franquista. Incluso la dirección en el exilio, cuando le era posible, enviaba dinero a los huidos para que no tuvieran que efectuar golpes económicos. Cuando no tuvieron más remedio que llevarlos a cabo, evitaron en lo posible los atracos que pudieran ocasionar víctimas. La razón era que los golpes económicos y, más todavía, los atentados sólo servían para que los enlaces fueran represaliados por las fuerzas franquistas. Utilizaban el sistema ya conocido del *anónimo*, y lo justificaban políticamente como una expropiación por la rapiña practicada por los franquistas contra los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales. El procedimiento se debió a una idea de Rufino Montes, enlace de Hueria de Carrocera. Se trataba —según el informe presentado por José Mata y compañeros de la dirección de la FSA ante la Comisión Ejecutiva de la UGT en Toulouse después de la evacuación en 1948— de «enviar cartas a elementos fascistas o adinerados, fijándoles nosotros mismos la cantidad a entregar y lugar donde debieran depositar las sumas indicadas, siendo atendidos casi siempre. Si alguno, de primera intención, no correspondía a la petición se le aumentaba la cuota y se le acortaba el plazo para la entrega, y entonces enviaban el dinero»^[96]. Pero lo cierto fue que el envío de cartas produjo resultados gracias a la acometividad de los comunistas. Los socialistas, instalados en una especie de «parasitismo financiero», aprovecharon el recurso a la acción de los militantes del Partido Comunista para recaudar fondos entre los franquistas.

Descartada la resistencia armada, los socialistas se dedicaron a reconstruir las organizaciones políticas y sindicales en las zonas mineras, su feudo tradicional gracias al SOMA. En 1943 se llevó a cabo un pleno provincial socialista en las comarcas mineras en el que se eligió una Comisión Ejecutiva formada por

Bernardino Díaz, Silvino García y Wenceslao Fernández, bajo la presidencia de Florentino Zapico. Pero la situación resultaba cuando menos contradictoria para los socialistas, ya que estaban en el monte armados pero no se implicaban en el movimiento revolucionario contra el franquismo. Los argumentos para la pasividad parecían consistentes pero, al mismo tiempo, producían disputas internas sobre el método a seguir. Esta actitud de los miembros del PSOE era observada por las autoridades franquistas que actuaban en consecuencia. Como apunta García Piñeiro: «El propio régimen subraya esta dualidad táctica al observar un tratamiento diferencial con socialistas y comunistas. Mientras que a los primeros los castigaban con condenas que oscilaban entre uno y seis años, con éstos el rigor se extremaba hasta, en no pocos casos, la pena de muerte». Pero el hecho de beneficiarse de un trato preferente no hacía sino aumentar la incomodidad de los socialistas, ya que proyectaban una imagen pactista ante la población altamente politizada de los valles mineros. Para justificar esa actitud poco combativa, los socialistas —Mata, sobre todo— diseñaron una teoría según la cual el partido estaba en el monte y no en el llano. De hecho, el llamado Comité del Monte (Agrupación de Socialistas del Monte), creado a principios de 1943 —integrado por Mata, Llaneza, Fernández Peón y Manuel Fernández Casas «Lele»—, funcionaba como otra agrupación socialista, la más importante, porque la actividad política partidaria tenía la misión de controlar las guerrillas y defender a las agrupaciones y militantes del llano de las agresiones de los franquistas^[97].

A partir de 1939, los grupos en los montes asturianos habían comenzado a estabilizarse toda vez que durante 1938 se entregaron, fueron detenidos o muertos los miles de milicianos que no habían podido escapar de la derrota. Concluida la contienda, las autoridades asturianas impulsaron una dinámica represiva tendente a eliminar de una vez por todas el «peligro rojo», ya que Asturias era una de las provincias con un movimiento obrero más histórico y radical. La presión alcanzó tales proporciones, que muchos huidos se entregaron y seguidamente se vieron obligados a colaborar con las fuerzas de represión (la redención no era gratis). También existen evidencias de que algunos huidos fueron denunciados por sus propias familias, ya que la brutalidad de la represión en Asturias, especialmente cruenta, fomentó el darwinismo más primario. Pero la situación era tan complicada, que el gobernador militar emitió un nuevo bando en el que exigía, bajo la admonición de fuertes multas y penas de cárcel, que se pusieran en conocimiento de las autoridades «cuantas cuevas, refugios, bodegas, minas abandonadas o sitios de ocultación análogos, existan en sus propiedades, sirvan o puedan servir para la ocultación de maleantes y malhechores, tengan o no conocimiento de las mismas las autoridades»^[98].

El resultado de todo ese movimiento de castigo provocó que hacia 1940 se

perfilaran con nitidez los grupos armados comunistas de Asturias. Las partidas se formaron a partir de conocidos para evitar traiciones y también de personas con una trayectoria revolucionaria conocida. Pero lo anterior no impidió la disminución de las partidas, y en 1943 el número de huidos bajo control comunista era muy reducido. La mayor parte de los emboscados se residenciaban, como en la fase previa, en las cuencas mineras de los municipios de Moreda, Aller, Mieres, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio, y sobre todo en aquellos espacios situados en una orografía apta para la guerrilla como la sierra del Cuera, Picos de Europa y los alrededores de Cangas de Onís. Por lo que se refiere a las partidas, en el concejo de Aller se movían «Los Cepedales» (Celestino, Celso y Jesús Cepedal); entre Cangas de Onís e Infiesto, los «Caxigales» (Manuel y Aurelio Díaz González), Joaquín Álvarez Alonso «Manco» y Lisardo García, grupo que en ocasiones se desplazaba a la zona de Picos de Europa y entraba en contacto con los huidos santanderinos y leoneses; en el concejo de Villaviciosa, en el cordal de Peón, se encuadraba el grupo de «Los Castiellos» (Corsino, Octavio y Eduardo Castiello Carriles); por las zonas de Oviedo, Langreo y Mieres actuaban los grupos de Baldomero Fernández Ladreda «Feria», Constantino Zapico González «Boger» (llamado también «Constante de la Pallega»), Sabino Suárez Cangas «Rendueles» y José García Suárez; por el concejo de San Martín del Rey Aurelio se establecieron Onofre García Ulibelarrea y Aladino Suárez. Un salto cualitativo importante se produjo cuando estos guerrilleros comunistas crearon en 1944 un Comité Político–Militar integrado por «Boger», Corsino Castiello y Manolo «Caxigal». «Feria» asumía la representación del comité, uno de los primeros intentos en España de organizar una resistencia comunista. Dos de los hermanos «Cepedales», Celestino y Celso, no alcanzaron a ver la guerrilla organizada, ya que fueron eliminados en 1939 y 1941, respectivamente^[99].

Ante la inactividad socialista, la hegemonía de la resistencia asturiana había pasado a los comunistas. Una serie de dirigentes llegados a Asturias a partir de 1942 por mediación de Easton potenciaron las organizaciones del PCE a través del programa de la Unión Nacional. Entre los emisarios más destacados se encontraba el omnipresente José María Urquiola Iglesias, que tenía como objetivo vertebrar la lucha política y guerrillera en Asturias. Ante la división entre socialistas y comunistas, se desplazó a León, como ya se ha visto, con el fin de contactar con la Federación. Después llegaron a territorio asturiano Josep Cerbero —enviado por Monzón a Asturias— y Antonio García Buendía «Madriles». Pero el castigo contra los comunistas, que conforme transcurría el tiempo disponían de más efectivos y medios en el monte, había sido tan importante, que las actividades de la reconstrucción de las organizaciones del llano tenían que ser llevadas por mujeres o jóvenes de las JSU^[100]. La situación internacional, con los aliados desembarcando en Sicilia y los soviéticos resistiendo a los alemanes, y la presión que ejerció Cerbero

obligaron a los socialistas a redefinir su discurso. El 15 de agosto de 1943 se fundó en Soto de la Ribera el Comité de Milicias Antifascistas, organismo unitario de la resistencia asturiana, en cuyo directorio participaban el comunista Baldomero Fernández Ladreda y los dos socialistas partidarios de la vía insurreccional, Arístides Llaneza Jove y Manuel Fernández Peón. Pero el intento de Cerbero y de «Madriles» por integrar al Comité en la JSUN —y participar, por lo tanto, en la política «monzonista» de la insurrección nacional— motivó que los socialistas se retiraran del Comité el 31 de diciembre de 1943 (aunque oficialmente se disolvió en 1945), actitud que se vio confirmada cuando el primer Congreso socialista de Toulouse rechazó el ingreso en la Unión Nacional. A partir de esa decisión, los socialistas renunciaron definitivamente a la acción armada, y se dedicaron a sobrevivir y a aportar ayuda a las organizaciones socialistas. Los socialistas del exilio, pastoreados más que dirigidos por Prieto, no sabían qué hacer con los huidos; en el fondo, a los políticos del PSOE en el exilio les parecían un estorbo.

Los cuadros enviados desde Madrid en nombre de la UNE o la JSUN impulsaron el desarrollo del comunismo en Asturias apoyándose en hombres como Antonio Valero, Venancio del Valle o Manuel Losa Prieto. En 1944 se había creado un Comité Regional que tenía jurisdicción sobre Asturias, Santander y León. A pesar de las caídas masivas en el otoño de 1944, un año después ya puede hablarse de una poderosa organización del PCE en Asturias, dispuesta a reforzar el enfrentamiento contra la dictadura. De todos modos, pese a las discrepancias entre comunistas y socialistas, llevaron a cabo numerosos golpes económicos, represalias contra personas vinculadas al régimen y sabotajes en las empresas mineras. Y pese a los desencuentros y rivalidades, siempre asumieron que el enemigo común era el régimen franquista^[101].

En Santander no se habían producido cambios relevantes, y las partidas de huidos se mantenían aplastadas al terreno a la espera de acontecimientos. Picos de Europa y la comarca de La Liébana seguían albergando a la partida encabezada por Ceferino Roiz, que recogía un mayor número de miembros, entre ellos el dirigente comunista Alejandro Cerro, que llegó en 1944. Pero la incorporación más trascendente fue la de Juan Fernández Ayala «Juanín», combatiente republicano condenado a muerte y cuya pena le había sido conmutada gracias al aval de un hermano, camisa vieja de Falange. Prisionero en la tristemente célebre prisión habilitada de la Tabacalera santanderina, a partir de primeros de 1943 fue trasladado a Potes para trabajar en el Patronato de Regiones Devastadas. Un día a la semana tenía que presentarse en el cuartel, lo que era aprovechado por los guardias civiles, instigados por los caciques y falangistas locales, para torturarlo salvajemente con el pretexto de reclamarle información sobre el Socorro Rojo Internacional (organismo creado en 1921 que tenía como objetivo recaudar fondos para los presos político–sociales). Harto de que los guardias civiles

lo apalizaran con los temidos vergajos, «Juanín» se echó al monte el 21 de julio de 1943. El 20 de agosto siguió su ejemplo Lorenzo Sierra (que escapó a Francia en 1946), y luego lo hicieron Manjón y Pedrín (este último murió el 5 de diciembre de ese año en el puerto de San Glorio), Santiago Rey, Hermenegildo Campo «Gildo» y Rosendo Campos, entre otros. Fueron aceptados en la partida de «Machado», que actuaba por La Liébana pero también por valle de Cabuérniga, Comillas y Cabezón de la Sal^[102].

A pesar de que no se produjeron movimientos significativos entre los huidos santanderinos, algunos de los hombres más destacados del periodo anterior fueron aniquilados en 1941. Según Jesús de Cos Borbolla, el 27 de noviembre cayó abatido en una calle de Santander José Lavín Cobo «Cariñoso». A su compañera, María Solano, la torturaron y golpearon repetidamente en el vientre aunque estaba embarazada. Peor suerte corrieron los progenitores de esta última, ya que la madre fue ejecutada y el padre murió a consecuencia de las torturas. Al día siguiente de la muerte de «Cariñoso», un confidente condujo a la policía al escondite de los hermanos y el primo de José Lavín. Los dos hermanos, Marcos y Dolores, y también el primo, Pedro, fueron ejecutados. Días después, en Orejo, cerca de la capital cántabra fue eliminado otro miembro de la cuadrilla, Santiago Martín Fernández. La popular partida de «Cariñoso» había pasado a la historia. El 2 de julio de 1941, en Ahedo de las Puebas (Burgos), las fuerzas de represión localizaron y mataron a cuatro integrantes de la partida de los «Carabeos», incluido el jefe, Juan Gil del Amo. El quinto miembro se suicidó posteriormente, conforme al relato de Jesús Gutiérrez Flores. También se multiplicaron las detenciones, entre las que destacó la de Mauro Roiz Sánchez, el primer jefe de los huidos de La Liébana, efectuada por la fuerza pública en la capital cántabra en octubre de ese año.

El PCE en el marco político de la posguerra

El golpe del coronel Casado del 5 de marzo de 1939 evidenció la profunda división de los republicanos y también puso de manifiesto la incapacidad de la antigua facción gubernamental para manejarse en la derrota. Pero aparte de añadir muerte a la muerte, el conato de guerra civil entre republicanos desatado por la acción de Casado no parece que incomodara a los comunistas. Evaluando el desarrollo de los hechos — que costaron dos mil muertos—, pudiera colegirse que la consolidación del Consejo Nacional de Defensa casadista fue recibido con alivio por los dirigentes del PCE. Mientras que los jefes militares y comisarios de obediencia comunista reaccionaron contra la insurgencia atacando espontáneamente a los sublevados, la dirección del partido que permanecía en el interior de España no cursó las órdenes oportunas para

proseguir o detener la ofensiva sobre Madrid. Por el contrario, abandonaron a sus militantes: el 5 de marzo los líderes comunistas se habían puesto a salvo en Francia y el norte de África. Esa sospechosa falta de decisión en un partido gobernado desde criterios jerárquicos permitió al coronel Casado hacerse con las riendas del poder. La situación le venía bien al PCE. Por una parte, no pasaba por el trance de firmar una rendición incondicional y aparecer así como uno de los responsables oficiales de la derrota. Por la otra, alimentó el martirologio comunista, ya que destacados políticos y militares que militaban en el partido —Daniel Ortega, Domingo Girón o el coronel Barceló— y numerosos militantes de base detenidos por los casadistas seguían en las prisiones cuando los franquistas entraron en Madrid. El hecho de que posteriormente fueran ejecutados permitió al partido comunista trasladar la responsabilidad a los casadistas.

La fractura declarada por los republicanos a raíz del golpe de Estado casadista prosiguió con caracteres esperpénticos en el exilio. Políticos que habían tutelado una revolución basada en ideas como el bien común se transformaron en depredadores cuyo único objetivo consistía en administrar los despojos de la República. La reunión en París de la Diputación Permanente de las Cortes, que encarnaba la legitimidad republicana, testimonió la desorientación de los dirigentes: la legitimidad o ilegitimidad del Gobierno Negrín se convirtió en el centro del debate. El 27 de julio de 1939 se aprobaba la disolución del Gobierno republicano. A partir de esa decisión, el exilio español dibujará un espectáculo deplorable (nos referimos, naturalmente, a los líderes políticos y sindicales: el «pueblo doliente» seguía en su particular calvario cotidiano). Ni siquiera fueron capaces de acordar la condena del golpe de Casado. Los políticos más maniobreros se impusieron en los partidos, y en vez de unidad contra Franco los dirigentes españoles sólo ofrecían banderías y desesperanza a los cientos de miles de expatriados. Especialmente tenaz y desalentadora fue la pugna en el seno del Partido Socialista entre prietistas y negrinistas. Pero las demás formaciones tampoco demostraron mayor sentido de la responsabilidad histórica.

En la lucha por el poder entre los exiliados, el doctor Negrín creó en abril de 1939 el Servicio de Emigración de los Refugiados Españoles (SERE), utilizando para ello el dinero que el Gobierno republicano había depositado en el extranjero. Presidido por el ex embajador en Londres Pablo de Azcárate, la mayoría de los partidos participaban en su dirección aunque el control real lo detentaban los negrinistas, apoyados por el PCE. Tres meses después le surgirá una organización rival, la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles (JARE). Controlada en este caso por Indalecio Prieto, el nuevo organismo se apoyó en los fondos del *Vita*, un yate cargado de riquezas fabulosas enviado por Negrín a México y que, gracias a la intervención del presidente mexicano, terminó en manos del político bilbaíno. Tanto la JARE —de la que no formaban parte PCE y PNV— como la SERE tenían como objetivo

administrar los bienes de la República en beneficio de los exiliados, pero reprodujeron la escisión y el sectarismo partidistas en un proceso imparable de envilecimiento. Tanto una organización como otra se desacreditaron al conceder las ayudas en función de la ideología y sin atender a las necesidades más perentorias de los expatriados. Pero lo decisivo para el PCE era que la creación de la JARE, unida al pacto germano-soviético del 23 de agosto de 1939, condujo a la marginación de los comunistas en el entramado de intereses republicanos.

La situación se modificó el 22 de junio de 1941, fecha en la que los alemanes invadieron la Unión Soviética, rompiendo automáticamente un pacto entre bolcheviques y nazis que había desorientado a los comunistas en general y a los españoles en particular. Durante ese mes de agosto, el PCE llevó a cabo un primer llamamiento desde Francia para la constitución de un bloque antifranquista con el objetivo de derrocar a Franco, y que estará en el origen de la Unión Nacional Española (UNE). Pero fue en el verano de 1942 cuando se efectuó la fundación de la UNE en el llamado «Congreso de Grenoble» (aunque la reunión tuvo lugar, en realidad, cerca de Montauban). La propaganda comunista difundió la existencia de la nueva organización al mismo tiempo que defendía la presencia en la misma de todos los organismos del exilio, lo que era una verdad a medias. En efecto, entre los once asistentes a la reunión fundacional de la UNE había miembros de las formaciones políticas y sindicales más representativas, pero no era menos cierto que, con la excepción del PCE y el PSUC, no podían considerarse personajes relevantes en sus propias formaciones y además asistían a título individual. Pese a todo, la UNE fue capaz de levantar en un periodo de tiempo reducido una formidable organización guerrillera en Francia y luego en España. También permitió a los exiliados en Francia agruparse para combatir el fascismo y recuperar, de paso, una autoestima militar y revolucionaria perdida durante la guerra y la experiencia de los campos de concentración franceses. Mientras los comunistas actuaban, los demás partidos — especialmente el sector prietista del PSOE— se dedicaban a cuestionar a la UNE y a practicar una pasividad que se convertirá en característica esencial de la oposición no comunista durante el franquismo. Desde un punto de vista programático, la UNE se situaba al margen de algunos «principios sagrados» tradicionales de los republicanos. Así, con el fin de atraerse a los diferentes grupos monárquicos y conservadores descontentos con el sesgo fascista de Franco y de Falange en los primeros años de la guerra mundial, defendieron el «accidentalismo constitucional», con lo cual la forma de Estado republicano ya no era una condición insalvable en la constitución de una plataforma amplia contra el franquismo^[103].

Cuando en septiembre de 1943 el Partido Comunista se reafirmó en su política de Unión Nacional, comenzó una especie de carrera desenfrenada entre los dos bandos en que se había dividido la oposición en el exilio para alimentar organizaciones que

se arrogaban el monopolio de los expatriados. El reforzamiento de la política de UNE fue contestado por el grueso de la oposición antifranquista con la creación, primero en América —México, noviembre de 1943— y posteriormente en Francia —Toulouse, agosto de 1944—, de la Junta Española de Liberación (JEL). La réplica comunista tuvo lugar mediante la puesta en funcionamiento de la Junta Suprema de Unión Nacional (JSUN), que se hizo pública en septiembre de 1943. Aunque algunos autores niegan la existencia de la JSUN (también Carrillo), la mayor parte de los especialistas en el tema aceptan que fue una realidad aunque reconocen que los participantes en la reunión fundacional —celebrada en Madrid— eran políticos secundarios, excepto los comunistas españoles y catalanes, y lo hacían a título particular. Participó en la dirección de su junta el democristiano Manuel Giménez Fernández^[104]. Completó el espectáculo desolador de fundaciones y contrafundaciones, la aparición en octubre de 1944 —aunque la firma del acuerdo se había efectuado ya en el mes de junio— de la Alianza Nacional de las Fuerzas Democráticas (ANFD), vehiculada en torno al Partido Socialista de Indalecio Prieto aunque se adhirieron a ella la mayoría de las organizaciones republicanas en el exilio. Incluso el Partido Comunista, una vez fracasadas las invasiones pirenaicas de octubre de 1944, también optó por disolver la UNE y aceptar su inclusión en la ANFD. Corría el riesgo de quedarse completamente aislado de la oposición republicana en unos años decisivos.

La maraña de siglas surgidas del exilio, que abruman por su cantidad e ineficacia, y las múltiples disputas personales, algunas atravesadas de componentes casi patológicos, revelaban que las divisiones de la guerra no sólo permanecían sino que habían adquirido un mayor radicalismo. Mientras los fascismos estaban siendo derrotados en los campos de batalla y Europa se disponía a una reconstrucción sobre bases democráticas, los políticos españoles seguían enzarzados en discusiones políticas que en realidad escondían una abyecta lucha por el poder. Así, había unanimidad en la mayor parte de los partidos y organizaciones republicanas en su rechazo a los comunistas, pero los socialistas mantenían una despiadada guerra civil entre los partidarios de Prieto y Negrín, y el primero mantenía una relación de hostilidad con Martínez Barrio, el representante más cualificado de los republicanos moderados. Los libertarios seguían en sus «paraísos teóricos», pasando de defender la revolución a cantar las excelencias de la monarquía en cuestión de días, además de proseguir con sus desencuentros tácticos. Mientras Juan García Oliver era partidario de mantener a la CNT en las organizaciones unitarias del antifranquismo, Federica Montseny y sus seguidores se mostraban decididos a aislarse de la lucha política y devolver al sindicato a sus raíces ideológicas. Incluso los comunistas mantenían una relación ciclotímica con su único aliado tradicional, el doctor Negrín, al que apoyaban o rechazaban en función de los virajes teóricos y estratégicos de la

Komintern. Un análisis esquemático puede revelarnos que los comunistas tenían en contra la geopolítica —incluidos los intereses de la Unión Soviética—, pero actuaban mediante las guerrillas, mientras que el resto contaban con la ventaja de esa geopolítica pero optaron por la resignación. Esperaban que las potencias democráticas, especialmente Gran Bretaña, expulsaran a Franco del poder e impusieran un régimen democrático. El resultado final estuvo a la altura de los métodos empleados. En tiempos de desaparición de los fascismos, el Caudillo de España jamás vio peligrar su poder.

Enfrascados en sus disputas personales, los dirigentes de la oposición en el exilio no habían sido capaces de interpretar los acontecimientos que se produjeron en los intersticios del franquismo en septiembre de 1942, a raíz de los sucesos de Begoña, cuando Gómez Jordana desplazó a Serrano en la dirección de la diplomacia española y comenzó a perfilarse el paso de la no beligerancia a la neutralidad. Ni evaluaron la importancia de la creación de una junta de generales (Aranda, Kindelán, Varela...) favorable a la restauración monárquica, aunque esos conmlitones demostrarían más oportunismo que determinación y su rebeldía terminara como una «ópera bufa»^[105]. Tampoco habían valorado la importancia de la declaración de Edén del 4 de septiembre de 1942 cuando afirmó que Gran Bretaña no «tiene la menor intención de intervenir en los asuntos de España», ni el discurso de Winston Churchill el 24 de mayo de 1944 en la Cámara de los Comunes en el que, entre otras cosas, señaló que «en cuanto a los problemas políticos internos de España, eso es cosa de los propios españoles. A nosotros, como Gobierno, no nos compete intervenir en tales asuntos»^[106]. El contexto internacional estaba modificándose de manera sutil, algo que no entendieron los republicanos del exilio. El anticomunismo de Franco empezaba a ganar adeptos entre las potencias democráticas y también se perfilaba claramente que para la Unión Soviética España quedaba fuera de su área de influencia. Especial responsabilidad recae en Indalecio Prieto, un político intrigante que tuvo en sus manos la posibilidad de articular una oposición homogénea y poderosa frente a la dictadura. A mediados de la década de los cuarenta consiguió controlar el PSOE, ser reconocido por los republicanos burgueses como jefe en la práctica de la oposición y también aceptado como interlocutor por los monárquicos. Pese a todo, por momentos parecía que el líder socialista estaba más interesado en desactivar al doctor Negrín —que terminó siendo expulsado del partido— que en acabar con el franquismo. Incurrió además en un error de bulto: fundamentar las esperanzas de restauración democrática en España apoyándose en Gran Bretaña y en los monárquicos, con el pretendiente Juan de Borbón a la cabeza. En su fervor británico, Prieto no consiguió interpretar el mensaje nada cifrado que la diplomacia inglesa envió a Franco desde el inicio de la guerra mundial y que en síntesis venía a significar que confiaban más en el régimen franquista que en hipotéticos

experimentos republicanos. Las relaciones entre Prieto y los monárquicos de Juan de Borbón, por otra parte, recuerdan más a los tratados de psicología que al análisis histórico. Aunque no era fácil negociar con unos políticos que estaban con el «pretendiente» pero no querían malquistarse con Franco y también un «heredero» más afín a los postulados de la dictadura que a los principios elementales de las democracias.

Por lo que respecta al interior de España, el Partido Comunista fue el primero que tuvo una presencia destacada. Pese a que vivió el final de la guerra como un verdadero cataclismo, habida cuenta de que se había transformado en un partido institucional, logró superar lentamente las secuelas producidas por la derrota. Recuperando la memoria de la clandestinidad, con cuadros medios y militantes de contrastada fidelidad, el PCE consiguió reconstruirse en las cárceles españolas. La tarea de los comunistas no estaba exenta de mérito, sobre todo si tenemos en cuenta que no habían planificado alternativas a la derrota, tal vez porque, como sostiene Heine, «nadie quería correr el riesgo de verse acusado de derrotismo y de ser expulsado del partido»^[107]. El estalinismo vigente impedía nombrar incluso lo evidente. A pesar de la huida de los miembros del Buró Político, primero de España y luego de Francia, y de quedarse sin directrices políticas, los propios cuadros intermedios efectuaron tímidos intentos de relanzar la organización. El primer dirigente significativo del comunismo en el interior fue Heriberto Quiñones, un personaje peculiar y del que todavía hoy se desconoce su verdadera identidad. Nacido posiblemente en la Besarabia moldava, había llegado a España en 1930 como delegado de la Komintern y, aunque expulsado, se instaló en Mallorca a finales de 1931. Revolucionario profesional y políglota, recorrió España —tuvo una importante participación en Mallorca y Asturias— predicando la buena nueva de la revolución. Agitador eficaz y de personalidad despótica, el 5 de enero de 1937 los golpistas habían asesinado en el cementerio mallorquín de Porreres a su compañera, Aurora Picornell Femenías (también asesinaron a los padres y a dos hermanos de ésta). Aunque con el tiempo se convirtió en uno de los personajes más vilipendiados y desacreditados por el PCE (en el marco del «antititismo» y sin pruebas: injustamente), Quiñones levantó la primera organización comunista a partir de abril de 1941, cuando el comité interior del PCE contactó con él en Valencia —había salido del campo de concentración de Albaterra— para que catalizara la organización comunista en Madrid. Redactó en 1941, junto con Luis Sendín, un manifiesto —«Anticipo de orientación política»—, que no llegó a ser conocido por los militantes por falta de tiempo. Aunque reproducía los «trece puntos» formulados por Negrín en 1938 y avalados entonces por el Buró Político del PCE, también significaba una superación de esa tesis y constituía el comienzo de la futura política de Unión Nacional. Este planteamiento, que respetaba las orientaciones oficiales del Partido

Comunista, tenía como objetivo atraer no sólo a los trabajadores sino ampliar la base a elementos conservadores contrarios a la perpetuación de la dictadura.

Pero lo que posiblemente desconocía Quiñones era que, como resultado del pacto de no agresión germano-soviético (23 de agosto de 1939), el PCE en el exilio, siguiendo las instrucciones de la Komintern, había pasado de la política del Frente Popular a la del Frente Único (conocido también por frente popular por la base) y que José Díaz —secretario general del PCE que, mortalmente enfermo, se suicidó arrojándose por un balcón el 19 de marzo de 1942 en la ciudad soviética de Tbilisi— y Pasionaria habían firmado un manifiesto en el otoño de 1939 en ese sentido: con críticas destempladas a los partidos de izquierda y centrando los objetivos exclusivamente en la clase trabajadora. Términos como socialfascismo volvieron a cobrar actualidad, aunque se reforzó el arsenal de los insultos habilitando conceptos como socialcasadistas. Otros autores defienden que conocía esa postura oficial pero estaba en contra de la misma. Por otra parte, Quiñones cometió un error de cara al futuro: cambió el nombre de Comisión Central Organizadora del PCE por el de Buró Político Central que «sustituye interiormente a la dirección efectiva que se encuentra en el exterior» y además critica a los dirigentes del exilio^[108]. En los partidos comunistas, estas ambigüedades semánticas tenían generalmente repercusiones negativas, incluso trágicas. Reemplazar, aunque fuera por ausencia, a los órganos jerárquicos del partido no formaba parte de la cultura del poder vertical de los comunistas. Parece claro que, en principio, Quiñones no buscaba el poder partidista sino que ocupó el hueco dejado por los dirigentes que salieron huyendo de España.

A la altura de 1941 la situación en España y en Europa no estaba para discusiones lingüísticas, ya que el objetivo prioritario era no pasar por la cárcel y acabar delante de un pelotón de fusilamiento. Quiñones, desplegando una frenética actividad, consiguió situar en el mapa político al Partido Comunista, incluso incorporó a su causa a la importante organización comunista vasca liderada por Realino Fernández López, haciéndoles comprender que no se podía tutelar el partido del interior desde el exilio. Pero a finales de 1941 la jerarquía comunista establecida en México —encabezada por Vicente Uribe— decidió intervenir y controlar el partido del interior. La operación estaba dirigida por Isidoro Diéguez y Jesús Larrañaga, miembros del Buró Político, quienes desde Lisboa intentaron el control de las actividades de Quiñones. La detención primero del «grupo de Lisboa» y su entrega a la policía franquista (Diéguez, Larrañaga, Asarta, Gago, Girabau y Eladio Barreiro) y el posterior arresto de Quiñones el 30 de diciembre acabaron por la vía de los hechos con esa lucha por el poder. La sucesión de arrestos terminó convirtiéndose en un cataclismo para el PCE, y en pocos meses fueron ejecutados los más importantes dirigentes del comunismo vasco —la organización más sólida del PCE—, los del llamado «grupo de Lisboa» y miembros del Buró Político Central como Manuel

Prades, Antonio Elvira y Josef Wajsblum. Quiñones, que había sido detenido el 30 de diciembre de 1941, fue fusilado el 2 de octubre de 1942 en compañía de Sendín y Ángel Fermín Cardín. Como fruto de las torturas a las que estuvo sometido durante su reclusión («Físicamente me han destruido ustedes. Moralmente, soy invulnerable», parece que dijo a los policías), Quiñones había quedado parálítico. Llevado por dos soldados (otros autores sostienen que por Sendín y Cardín) ante el pelotón de fusilamiento en el cementerio del Este, hubo de ser sentado para consumir la ejecución conforme al ritual del arte de matar. Murió dando vivas a la Internacional Comunista: una actitud coherente en un profesional de la revolución al servicio de la Komintern. A esta muerte, los dirigentes comunistas añadieron a partir de 1945 el ataque sistemático a su memoria, mancillada con todos los epítetos insoportables para un comunista: agente del fascismo, provocador, confidente de la policía franquista y de los servicios de inteligencia británicos, delator, trotskista, y responsable de la caída del «grupo de Lisboa». Entre los acusadores destacaron Calixto Pérez Doñoro, Carreras y, sobre todo, Fernando Claudín y Santiago Carrillo. Joan Estruch ha escrito que «el “quiñonismo” no constituyó en ningún momento una divergencia política o ideológica, fue un intento de rebelión organizativa que el grupo dirigente no podía tolerar». En su biografía de Quiñones, David Ginard i Féron ilumina los claroscuros ideológico–personales del revolucionario y señala que «la herejía quiñonista superó las simples diferencias organizativas, y que el político moldavo planteó *avant la lettre* la política de Unión Nacional»^[109]. En junio de 1942 llegó a España Jesús Carreras Olascoaga, que traía la misión de ocupar el puesto de Quiñones. Pero la debilidad del PCE se manifestaba en las repetidas caídas de sus dirigentes. La sucesión de detenciones a finales de 1941 y principios de 1942 se unió a los arrestos masivos de marzo y abril de 1943.

En el horizonte del Partido Comunista, empezaba a perfilarse la figura de un personaje singular y decisivo, Jesús Monzón Reparaz.

El exilio francés y las invasiones pirenaicas (1944)

Los meses de enero y febrero de 1939 mostraron al mundo la iconografía de la barbarie producida por una guerra civil a la que no siguió una reconciliación. La caída de Cataluña llevó hasta la frontera francesa a medio millón de españoles (entre 450 000 y 470 000), y la mitad de esa comitiva de sombras que se acumulaban entre La Jonquera y Le Perthus (aproximadamente, 200 000) eran mujeres y niños. Otros 15 000 republicanos embarcados en los últimos días de la guerra en el Levante español, repartidos entre el país vecino y el norte de África, completaron el éxodo de exiliados españoles. En Francia les esperaba el destino de los vencidos: las vejaciones de los reaccionarios y los campos de concentración. La extrema derecha de Maurras y Daudet, a través de su periódico *L'action française*, se aplicó en humillar a los republicanos españoles utilizando el arsenal escatológico del idioma francés. Entre los epítetos: canalla roja (*racaille rouge*), hordas rojas, chusma, indeseables... Los españoles de la derrota fueron catalogados como «las heces de la anarquía mundial» y los territorios destinados a acogerlos, comparados a pocilgas y vertederos^[110]. En febrero de 1939 el Gobierno de Edouard Daladier, que había reemplazado al socialista Léon Blum, reconoció a la España franquista. La Unión Soviética, por contra, nunca reconoció al Gobierno republicano en el exilio.

Espanoles en la Resistencia francesa

Después de arduas negociaciones, una parte de la población civil recibió techo y comida pero los milicianos fueron conducidos a improvisados campos de internamiento en el suroeste francés. La dramática realidad del exilio y las coacciones de las autoridades francesas —combinaron amenazas y engaños— motivaron que en pocos meses la mitad de los exiliados regresaran a España (70 000 antes de finales de marzo). Aquellos que decidieron asumir hasta las últimas consecuencias su condición de expatriados, conocieron de inmediato los campos de concentración, que eran gigantescas viviendas colectivas y translúcidas donde la promiscuidad obligada y unas condiciones higiénicas lamentables serán recordadas con aprensión por los

españoles de la diáspora. Argelés-sur-Mer (el primero) y Saint-Cyprien, Barcarés, Septfonds, Bram, Vernet-les-Bains, Rieucros (mujeres) o Prats de Molió se convirtieron en nombres tristemente familiares para los españoles. Por algunos de esos campos pasaron republicanos que alcanzaron la celebridad y la muerte en el maquis de posguerra: José Gómez Gayoso, por ejemplo, estuvo detenido en Saint-Cyprien. Peor suerte tuvieron los españoles trasladados a los campos argelinos de Djelfa («campo de la muerte»), Hadjerat-M'Guil o Meridja, adonde también enviaron a los dirigentes políticos y sindicales considerados rebeldes o conflictivos. En el Magreb, además, se explotó a los exiliados como mano de obra barata para las infraestructuras coloniales francesas. El comportamiento de Francia, no obstante, resultó ejemplar con los exiliados españoles, sobre todo si lo comparamos con el que exhibieron Gran Bretaña, que se negó a recibir a los derrotados de la guerra civil, o la URSS, patria de la revolución y el comunismo, que apenas aceptó a unos 2000 expatriados después de una exhaustiva (y sectaria) selección.

El campo más emblemático, Argelés-sur-Mer, estaba instalado en una playa, protegido solamente por alambradas con espinos y en él llegaron a convivir 80 000 republicanos, vigilados (y humillados) por la Garde Mobile Républicaine (GMR) y tropas coloniales como los tiradores senegaleses y los spahis marroquíes. Hasta que consiguieron levantar las primeras barracas, los expatriados españoles preparaban sus refugios abriendo pozos en la arena para introducirse en ellos y protegerse de las inclemencias del invierno y la tramontana. Hambre, epidemias y muerte. Suciedad, piojos, disentería. Ni agua para beber ni letrinas para la intimidad. Pero a las calamidades físicas había que encadenar el abatimiento de la derrota y la fractura emocional que significaba la separación de sus mujeres e hijos. Las protestas de quienes pensaban que la dignidad humana era un derecho inalienable fueron contestadas por las autoridades francesas con la creación de campos de castigo para «rebeldes y peligrosos». Los más famosos fueron los de Rieucros, Vernet-d'Ariège (donde estuvo internado Francisco Sabaté Llopart) y Fort-Collioure. Con el tiempo, fue corrigiéndose ligeramente la situación. Prestigiosos intelectuales como André Malraux o Georges Bernanos y organizaciones religiosas, como los cuáqueros americanos, empezaron a interesarse por la suerte de las víctimas de la guerra. Se construyeron barracas, lo que mitigó la atmósfera fantasmal de los campos, y se habilitaron centros de acogida específicos para mujeres y niños menores de 12 años. Los propios internos, olvidándose de las tropas coloniales que trataban de robarles sus míseras pertenencias, alimentaban la esperanza impulsando la alfabetización o favoreciendo el debate ideológico para mantener vivo el recuerdo de la República. Pero las querellas partidistas de la guerra viajaron a Francia, y los republicanos de los campos de concentración abandonaron los proyectos unitarios y se transformaron de nuevo en comunistas, socialistas o libertarios. Como sucedió durante todo el

franquismo, fueron los comunistas los primeros en organizarse. En agosto de 1940 ya existía en el campo de Argeles un comité del PCE integrado por Sixto Agudo «Blanco» y Antonio Rosel, que empezaron a coordinarse con otros campos de refugiados.

Las autoridades francesas, dispuestas a quitarse de encima el problema de los españoles, les presentaron una triple alternativa: la Legión Extranjera o los Batallones de Marcha, el regreso a la España franquista o el enrolamiento en las Compagnies de Travailleurs Étrangers (CTE), creadas el 12 de abril de 1939 y militarizadas a partir del 13 de enero de 1940, cuando la guerra mundial ya estaba en marcha. Como la única posibilidad de salir de los campos de concentración pasaba por conseguir trabajo, y las otras opciones eran menos atractivas, muchos hombres se alistaron en las CTE. Mandadas por oficiales franceses y suboficiales españoles, un porcentaje de los republicanos reclutados terminaron reforzando las defensas francesas, básicamente la conocida como Línea Maginot. El avance de los alemanes sorprendió a estos republicanos españoles, los primeros que recibieron el impacto de la Wehrmacht cuando las defensas francesas fueron desbordadas en Sedan el 14 de mayo de 1940. La desgracia parecía fijar sus preferencias en esos hombres, ya que, por su condición de obreros, no contaban con el estatuto de prisioneros de guerra. Muchos de los españoles detenidos terminaron en los campos de concentración nazis, incluidos los de Dachau, Buchenwald o Mauthausen. De los 7288 españoles que fueron llevados a Mauthausen 4613 murieron y se calcula que ascendió a 7000 el número de muertos en los diferentes campos de exterminio. Para rematar la tragedia, de la hecatombe no se libraron ni siquiera los niños, 16 de los cuales fueron asesinados en Ravensbrück. También la muerte alcanzó a los «niños de la guerra» españoles en los frentes de Moscú y Stalingrado^[111].

Los españoles que consiguieron eludir la presencia alemana o que estaban en zonas alejadas de las fronteras septentrionales, fueron internados nuevamente en los campos de refugiados del mediodía francés. El armisticio de Campiége (27 de junio de 1940) dividió a Francia en dos. Al norte de París los alemanes administraban directamente su botín de guerra y al sur establecieron un gobierno títere encabezado por el mariscal Pétain. Parecía una renovada fatalidad, ya que los republicanos habían escapado al terror de un régimen totalitario y se encontraban en Francia entre dos totalitarismos, el nazi y el pétainista. La primera consecuencia fue que los exiliados españoles se convirtieron en mano de obra barata para franceses y alemanes. El régimen parafascista de Vichy, la nueva capital de la «Francia libre», puso en marcha en septiembre de 1940 una nueva versión de los CTE, los Groups de Travailleurs Etrangers (GTE) y, desde, 1943, el Service de Travail Obligatoire (STO), que en este caso explotaba mano de obra barata entre los trabajadores franceses, tanto en su propio país como en Alemania. Los alemanes, por su parte, pusieron en

funcionamiento la Organización Todt (creada por el ingeniero alemán Fritz Todt y que tenía como objetivo reforzar el Muro Atlántico para evitar el ataque de los aliados). Pese a que el grueso de los españoles se encontraba en el mediodía, en la demarcación de Vichy, los colaboracionistas franceses no vacilaban en mandar a territorio alemán a los españoles —y extranjeros en general, ya que Francia se había convertido en patria de acogida para los exiliados de los fascismos— que solicitaban las autoridades alemanas. Cuando a finales de 1942, los nazis ocuparon toda Francia, se encargaron directamente de administrar la mano de obra. Pero, a partir de esa fecha, se produjo un cambio cualitativo importante para muchos franceses y exiliados españoles: comenzó la Resistencia, tutelada desde Londres por el general Charles de Gaulle y apoyada por los países aliados. «Todavía teníamos las manos calientes de los fusiles españoles cuando tuvimos que coger las armas de la resistencia contra los alemanes», ha explicado Luis Bermejo, jefe de la 2.^a División de los guerrilleros españoles que liberó Toulouse^[112]. Muchos republicanos, aprovechando la circunstancia de la guerra, escaparon de los campos de concentración, aunque los detenidos eran enviados al campo de castigo de Vernet y desde allí, en algunos casos, al norte de África. En territorio africano, un porcentaje importante fue explotado en la industria colonial francesa pero otros huyeron y se encuadraron en la División Leclerc que, partiendo del norte de África, alcanzó el continente para liberar París el 24 de agosto de 1944.

Para que los españoles en la clandestinidad no acabaran en un campo de castigo necesitaban bases seguras y en ese contexto surgieron los *chantiers*, explotaciones forestales destinadas a la fabricación de carbón vegetal, obras hidroeléctricas o empresas mineras que, con el tiempo, se convirtieron en foco de operaciones de los guerrilleros españoles en Francia, tanto contra los nazis como en futuras acciones en territorio español. Personajes decisivos en la constitución de los *chantiers*, fueron Luis Fernández y, sobre todo, José Antonio Valledor, quienes crearon la empresa *Entreprise Forestière du Sud-Ouest*, primero en el Departamento de l’Aude y luego en l’Ariège, que extendió por los Pirineos las escuelas político-militares de los exiliados españoles, especialmente los comunistas. En los *chantiers*, que eran conocidos con el nombre de maquis, entrenaban a los guerrilleros, falsificaban salvoconductos —obligatorios hasta 1948 para moverse por el país— para que pudieran moverse por territorio francés o español y almacenaban las armas robadas a los alemanes y las que parachutaban los ingleses con destino a la Resistencia.

A pesar de que los líderes más importantes huyeron de Francia una vez estalló la guerra, los partidos y sindicatos españoles consiguieron levantar una extraordinaria organización en el sur del país. Nuevos cuadros políticos se aplicaron a la tarea de organizar la vida en los campos de concentración, primero, y a preparar la guerra contra los nazis, después. A nadie se le escapaba que el combate contra Hitler podía

ser el prólogo de la lucha contra Franco, y los españoles estaban convencidos de que no sólo combatían por Francia sino también por la libertad de España. Fueron los comunistas, una vez más, la vanguardia de las actividades españolas en Francia. Militantes disciplinados y laboriosos extendieron la organización por los campos de refugiados y luego por el sur de Francia, y manejaron con destreza la aportación española a la Resistencia francesa. Maniatados por el pacto germano-soviético, que los había dejado en una situación comprometida, la ruptura de dicha alianza el 22 de junio de 1941 —a raíz del ataque de Hitler a la URSS— permitió a los comunistas convertirse en la avanzada de la resistencia de los españoles en Francia. A finales de ese año, ya estaban organizados los primeros grupos guerrilleros en l’Aude y l’Ariège. La determinación de los resistentes españoles también sirvió para espolear a muchos franceses que hasta entonces se resignaban a la presencia alemana.

En abril de 1942, se había creado el XIV Cuerpo de Ejército de los Guerrilleros Españoles —homenaje al cuerpo de ejército que actuó durante la guerra civil—, que estaba integrado en los Franc-Tireurs et Partisans (FTP), fundados en marzo de 1942 por el Parti Communiste Français (PCF) y formados a su vez por miembros de dos organizaciones bajo control comunista, la Organisation Spéciale (OS), que databa de 1940, y la Main d’Oeuvre Inmigrée (MOI). Estaba formado por siete divisiones y 31 batallones, que ocupaban otras tantas regiones y departamentos en el mediodía. Jesús Ríos García fue nombrado primer jefe del XIV Cuerpo y, al ser detenido en 1943, lo sustituyó Saturnino Gómez «Margallo». En mayo de 1944 el XIV Cuerpo, ante el crecimiento exponencial del número de miembros, se convirtió en la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE). También en la cúpula se produjeron cambios, y al frente estaba Luis Fernández «General Luis», Juan Blázquez Arroyo «General César» era el jefe político y José García Acevedo «Coronel Acevedo» fue nombrado responsable de Estado Mayor. Dos guerrilleros que cobrarán una importancia capital en la resistencia antifranquista, los comandantes Francisco Bas Aguado «Pedro» y Ángel Fuertes Vidosa «Antonio», formaban parte de la cúpula militar. La Agrupación de Guerrilleros, aunque dependía teóricamente de las Fuerzas Francesas del Interior (FFI-MOI), constituidas en diciembre de 1943, disponía de una total autonomía y sus vínculos se reducían a la ayuda mutua. Un batallón de *gudaris* adscrito a las FFI también combatió heroicamente en la expulsión de los alemanes de suelo francés. Al margen de las FFI, otros grupos de españoles hostiles a los comunistas —básicamente, socialistas y libertarios— participaron en la resistencia encuadrados en diferentes organizaciones de la Resistencia, como la gaullista Armée Secrète (AS). Todos ellos fueron obligados a licenciarse por el decreto de 25 de agosto de 1944, excepto quienes militaban en la AGE, que se quedó con el monopolio de las armas entre los españoles del exilio. Antes de la desmovilización, las divisiones de guerrilleros españoles habían liberado sin apoyo aliado algunos departamentos del sur

de Francia (Hautes Pyrénées, Basses Pyrénées, Pyrénées Orientales y l'Ariège). Batallas como la Madeleine o guerrilleros como Cristino García Granda —que liberó también la ciudad de Foix— pasaron con todos los honores a la historia militar francesa. Un periódico, *Reconquista de España*, y una emisora, Radio España Independiente, la popular Pirenaica, se habían convertido desde finales de 1941 en los mensajeros de los combatientes españoles. El 6 de junio de 1944 se produjo el desembarco aliado en Normandía.

Más allá de la inevitable controversia sobre las cifras, está fuera de toda duda la importancia relativa de los exiliados españoles en la liberación de Francia. Incluso ejercieron una relevancia simbólica e iconográfica. Cuando la liberación de París, el primer soldado que saludó a Georges Bidault, presidente del Consejo Nacional de la Resistencia, fue el teniente Amado Granell. Al rendirse, el general Von Choltitz, comandante del Gran París, entregó su pistola a un soldado español llamado Antonio González. Más visibles fueron, en la liberación de la capital francesa, los tanques que llevaban pintados los nombres de las batallas más evocadoras de la guerra civil: Guadalajara, Teruel, Belchite, Ebro o Guernica, y otros también eran de inconfundible resonancia española aunque con grafía francesa en algún caso: Dulcinea o Don Quichotte. Pero tampoco la historiografía francesa, tan chovinista, ha hecho excesiva justicia a la aportación de unos republicanos españoles que aparecen permanentemente expulsados de la historia. En lo relativo a las cifras, todavía están por depurar. Alberto Fernández, un exiliado socialista, cifró en 60 000 las hojas de desmovilización de otros tantos guerrilleros, y, por su parte, el comandante Gastón Laroche rebajó el número de españoles en Francia hasta los 10 000 guerrilleros. Tuñón de Lara sostuvo la presencia de 21 000 españoles en la lucha antinazi, distribuidos del siguiente modo: 12 000 en la AGE, 5000 en otras organizaciones, y 4000 en la liberación de París. Alistados en la Legión Extranjera, los españoles también combatieron en los fiordos noruegos de Norvik y en los desiertos africanos. En la actualidad, los especialistas mantienen que el número de españoles que lucharon activamente en la Resistencia alcanzó los 10 000, guarismo en el que no se contabilizan los guerrilleros «de los últimos días», resistentes de aluvión que se apuntaron a los desfiles victoriosos al final de la contienda^[113].

Las invasiones pirenaicas

Pasado el verano de 1944, las tropas alemanas habían desalojado el Midi francés. Miles de guerrilleros españoles, que durante años combatieron con «los ojos vueltos hacia España» (*Reconquista*, junio de 1944), creyeron llegada la ocasión de intervenir en el destino de la patria. Desde el final de la guerra civil, una parte significativa de

los españoles había arrojado las penalidades del exilio y los campos de concentración sostenidos por el mito del regreso a la *Ítaca* republicana. La invasión alemana de Francia reforzó esa esperanza, y ahora, con los nazis en retirada, parecía llegado el momento de realizar el sueño aplazado de «regresar a casa». Desde que se había iniciado la Resistencia, habían acumulado una parte de las armas en los *chantiers* a la espera de utilizarlas en España. Conocían además que grupos de huidos resistían en el interior el acoso de las fuerzas de represión franquistas y no dudaban de que ingleses y franceses, vencidos Hitler y Mussolini, intervendrían a favor de los republicanos. La euforia y la ausencia de análisis solventes constituían los factores dominantes entre los españoles en el verano francés de 1944. Por encima de cualquier consideración política o estratégica, se impuso la nostalgia de la frontera: los Pirineos representaban el último obstáculo para acabar con los despojos del totalitarismo. Pero también los responsables políticos y militares estaban dominados por la moral de victoria. La prensa comunista española y la francesa —*L'Humanité* o *Franc-Tireurs*— manejaron la situación como una posibilidad real de éxito. Un grupo selecto de guerrilleros había penetrado en España a las órdenes de Silvestre Gómez, antiguo jefe guerrillero, para estudiar sobre el terreno las posibilidades de iniciar la reconquista de España. Nada menos.

Las delegaciones del Comité Central del PCE en Toulouse (Carmen de Pedro «María Luisa», Manuel Gimeno y Manuel Azcárate) y en Madrid (Gabriel León Trilla, Apolinario Poveda y Josep Serradell, entre otros) también participaban de la euforia. Pero lo verdaderamente decisivo fue que compartía ese estado de ánimo el hombre fuerte del comunismo en España y en Francia, Jesús Monzón Reparaz, que se encontraba en el interior del país desde noviembre de 1943. Alejados de Francia y desperdigados por la Unión Soviética y América, los miembros del Buró Político acumulaban el poder suficiente para transformar un proyecto de gabinete en una realidad. Este dirigente navarro, gobernador de Alicante y Cuenca durante la guerra civil, principal impulsor de la política de la UNE —que preconizaba una alianza amplia entre las fuerzas políticas tanto del exilio como del interior, con la única exclusión de la Falange—, mantenía la tesis de que la estrategia correcta pasaba por promover una insurrección a partir de la invasión de España y la ocupación de una franja del territorio en el que se instalaría el Gobierno republicano. No deja de sorprender, empero, que un líder de la experiencia de Monzón pudiera colegir que a la altura de 1944 se producían las condiciones objetivas —en el lenguaje del partido— para desencadenar un levantamiento popular que coadyuvara a la caída del régimen franquista. Probablemente, era el tiempo señalado para hacer algo, pero deducir, desde el interior de España, que estaba garantizado el apoyo de la población suena a desatino. Como sostiene Hartmut Heine, Monzón y su equipo (especialmente Gabriel León Trilla, uno de los fundadores del PCE y expulsado del partido en 1932)

eran especialistas en producir mitos que al final terminaban asumiendo como realidades inobjtables^[114].

En agosto de 1944, Jesús Monzón —partidario de que los pueblos se emanciparan por sí mismos— remitió una carta a los responsables comunistas en Francia en la que ordenaba la intervención militar en España. La invasión desencadenaría una insurrección contra Franco y obligaría a los aliados a comprometerse con la lucha de los españoles. La decisión fue acatada sin reservas por los responsables políticos en Francia, y la misma actitud mostraron los mandos militares. El centralismo democrático era un método infalible para convencer a los posibles disidentes. Sólo algunos responsables militares expusieron reservas, que se disiparon cuando se rumoreó la posibilidad de un Gobierno republicano encabezado por Negrín y con el general Riquelme como responsable militar. Los dirigentes comunistas franceses Jacques Ducloux y André Marty fueron informados por Azcárate y no recibieron la noticia con especial entusiasmo^[115]. El resultado final fue que por convicción o acatamiento a la disciplina del partido, miles de republicanos españoles se dispusieron a entrar libremente y con las armas en España (y no obligados, como propagaron posteriormente y de manera interesada protagonistas de los hechos). De nada sirvieron los informes de los grupos de jalonamiento que habían penetrado entre junio y agosto en España, que revelaron que ni el país estaba al borde de la insurrección ni el pueblo esperaba a los soldados de la Unión Nacional entre ellos, los 200 maquis que se habían adentrado por Port Vell. Para facilitar los contactos entre los jefes militares y los guerrilleros el cuartel general de la operación se trasladó de Toulouse a Montréjeau, a 30 kilómetros de la frontera española. Unos 7000 guerrilleros españoles aguardaban la orden de invasión.

Decidida la acción por unanimidad, la única incógnita por despejar era la posición elegida para introducirse en suelo español y establecer la cabeza de puente. Los responsables de bosquejar la operación fueron los mandos de la AGE. La elección recayó en el valle de Arán, un escenario en el que podía crearse un «territorio libre», ya que estaba mejor comunicado con Francia que con España y en invierno quedaba prácticamente aislado. Controlando el puerto de la Bonaigua y el túnel de Viella, podría incluso instalarse durante algún tiempo un Gobierno republicano en suelo español. El hecho de que Blázquez fuera de Bossòst, aldea del valle aranés, facilitó un perfecto diseño de una operación que además desactivaba el mayor temor de los guerrilleros: que el Ejército franquista les cortara la retirada y los envolviera en el valle^[116]. El 21 de septiembre el Estado Mayor de la AGE había ultimado los preparativos militares. Para efectuar la invasión, se creó la División 204.^a y se nombró a Vicente López Tovar responsable militar de la misma. Componían la división 12 brigadas: 3, 21, 468, 402, 7, 9, 11, 15, 410, 471, 526 y 551. El jefe de Estado Mayor era Ángel Carrero «Álvaro» y la responsabilidad política recayó en

Ángel Yúfera, hombre de confianza de Monzón. Ramiro López «Mariano» asumió la responsabilidad de mantener la comunicación entre los jefes de la AGE y los mandos guerrilleros en Arán. La campaña guerrillera fue bautizada como «Operación Reconquista de España»: todo un programa.

Para facilitar la penetración por el valle de Arán y confundir al enemigo, durante los meses de septiembre y parte de octubre se efectuaron operaciones secundarias por otras zonas pirenaicas. Tenían como objetivo comprobar la situación del país y contactar con los grupos de huidos del interior. Todo el Pirineo, desde Gerona a Guipúzcoa, se transformó en una gigantesca frontera de entrada a España. Los valles de Roncal y Roncesvalles, en Navarra; Canfranc y Hecho, en Aragón; Arán y Andorra, en Lérida, y Cerdeña, en Gerona, conformaron los puntos más importantes de las «invasiones auxiliares». Aunque cerca de los Pirineos había unos 10 000–12 000 guerrilleros de la AGE, para la invasión se utilizaron aproximadamente la mitad. Especial cuidado pusieron los mandos políticos y militares para que entre los invasores no hubiera extranjeros. Los dirigentes comunistas no querían que Franco enarbolará la propaganda de guerrilleros extranjeros invadiendo España.

El Comité de la UNE en Pau ordenó los días 3 y 7 de septiembre iniciar la penetración en España por los valles de Roncesvalles (153.^a Brigada) y Roncal (54.^a Brigada). El número de guerrilleros ascendía a 800, aunque el «Batallón Vasco», dirigido por Pedro Ordoki, que estaba acantonado en la misma zona y controlado por los nacionalistas, se negó a combatir bajo la bandera de la UNE. Partiendo de Esterencuby, el primer grupo se adentró por la selva de Irati. Desde Sainte Engrace, otra brigada se infiltró por el Roncal y a través de los valles de Salazar y Zuriza se marcó como objetivo alcanzar el valle aragonés de Hecho. Las autoridades franquistas respondieron con el envío de fuerzas militares a la frontera y armando a los requetés y ex combatientes, mientras que los alcaldes de los valles pirenaicos navarros prometían recompensar con 250 pesetas por cada información que terminara con la muerte o detención de un maquis. Inmediatamente se produjeron los primeros enfrentamientos con la Guardia Civil y la Policía Armada. A excepción de unos pocos guerrilleros que se mantuvieron aplastados al terreno en la sierra de Aralar y de otro pequeño grupo que ganó territorio aragonés, los demás repasaron la frontera o fueron abatidos. La población navarra, mayoritariamente carlista, no era la más adecuada para auxiliar a un movimiento subversivo. El saldo de la operación no pudo ser más devastador para los antifranquistas: apenas habían conseguido introducir guerrilleros en los Pirineos occidentales^[117]. Al mismo tiempo que se producían las invasiones en los valles navarros, entraban tres brigadas por los Pirineos aragoneses. La Brigada 21.^a consiguió permanecer durante un mes en territorio español, y conquistó trece pueblos en el valle de La Fueva, incluida la capital, Tierrantona. Logró el principal objetivo, que era distraer fuerzas franquistas, pero el fracaso de las

otras dos brigadas les obligó a repasar la frontera. Un puñado de maquis de las diferentes unidades logró eludir las fuerzas de represión y llegar a Madrid o Levante, además de diversas comarcas de Aragón. También en el Pirineo leridano, gerundense y andorrano, además de la zona del Bidasoa, se llevaron a cabo maniobras de distracción.

La operación central, como estaba previsto, se efectuó en los Pirineos orientales, concretamente en el valle de Aran. El 16 de octubre, el mismo día en que Franco reconocía al Gobierno de De Gaulle, López Tovar firmó la orden de invasión^[118]. El 19 de octubre a las 6 de la mañana la División 204.^a inició la «Operación Reconquista de España». Mientras cuatro brigadas atacaban por los flancos, otras cinco penetraron directamente por el valle de Arán. La división expedicionaria contaba con 3000 hombres —aunque el primer día entraron por el valle central unos 1500— equipados con armas automáticas, básicamente metralletas Thomson o Stern. También disponían de algunos cañones y morteros, amén de vehículos. La operación tuvo éxito inicialmente, ya que tomaron la importante localidad de Bossòst, donde instalaron el Estado Mayor. Entre los días 19 y 23 conquistaron, en un verdadero paseo militar, una serie de pequeñas aldeas como Bausén, Caneján, Porcingles, Pradell, Lés, el Portillón, la citada Bossòst, Arrós, La Bordeta, Vilamòs, Benòs, Bòrdes, Aubert, Betlán, Vilach, Mont, Montcorbau, Vila y Besos. *Reconquista de España* había publicado el día 15 de octubre el primer parte de guerra del Ejército del Pirineo^[119].

La población aranesa reaccionó con recelo, y los maquis constataron que la UNE era totalmente desconocida. Incluso tuvieron que contemplar el desolador espectáculo de cómo los presos políticos de un destacamento de trabajo huyeron cuando los guerrilleros llegaban a «liberarlos»^[120]. Cumpliendo las consignas, los *maquisards* explicaban en las aldeas el programa de la UNE y trataban de evitar los enfrentamientos, sobre todo con los soldados de reemplazo: sólo las fuerzas de represión profesionales constituían objetivo prioritario. Además, tampoco las guerrillas locales hicieron acto de presencia, ya que no existían en la zona de penetración. Aparte de algunos soldados detenidos que se pasaron a los guerrilleros, los escasos habitantes de las aldeas descartaron incorporarse a las fuerzas invasoras, y, pasado el factor sorpresa, el avance guerrillero se detuvo a las puertas de Viella (donde se encontraba accidentalmente el general Moscardó), que sería el final de la aventura. La capital del valle aranés, que no alcanzaba los mil habitantes, estaba protegida con morteros, ametralladoras y cañones. Los guerrilleros, aunque disponían de artillería, empezaron a titubear ante el único núcleo de población importante: les faltó verdadera voluntad de conquistarla.

Por otra parte, al Estado Mayor llegaban malas noticias de los flancos. Las brigadas que habían entrado por el derecho, encargadas de conquistar la parte norte

del túnel de Viella, no habían conseguido su objetivo y tampoco fueron capaces de dominar el puerto de la Bonaigua. Peores resultados obtuvieron las brigadas que atacaron por el costado izquierdo y que tenían como meta una de las operaciones más importantes: cortar la carretera entre Esterri d’Aneu y Viella, lo que impediría la llegada de refuerzos para apoyar al Ejército franquista. La Brigada 471.^a, mandada por Emilio Álvarez Canosa «Pinocho», que estaba apoyada por la 15.^a y la 526.^a, regresó prácticamente completa a Francia, sin conseguir sus propósitos y apenas sin combatir. Los mandos de la 11.^a Brigada fueron destituidos, y pasó a constituir una unidad de reserva. La falta de empuje de algunos jefes guerrilleros propinó el golpe de gracia a una operación en la que muy pocos creían, si hacemos caso de los testimonios retrospectivos, y que debía estar basada en la sorpresa, la rapidez y la audacia. Daniel Arasa, especialista en las invasiones pirenaicas, ha señalado que «no siempre los jefes de las brigadas o batallones que debían ejecutarla respondieron adecuadamente». No deja de extrañar que hombres que habían combatido tanto en la guerra civil como en la Resistencia francesa flaquearan cuando parecía llegada la hora de la verdad. La explicación tal vez estriba en que los objetivos de la operación nunca estuvieron claros, o que algunos se creyeron literalmente que llevando arbolada la bandera de la UNE en los fusiles y entonando canciones guerrilleras acabarían con la dictadura^[121].

Repuestas de la relativa sorpresa, las autoridades franquistas respondieron multiplicando los refuerzos militares. A las fuerzas de orden público y militares instaladas en la zona, se les unieron en pocos días unos 40 000 soldados al mando de los tenientes generales Monasterio (5.^a Región Militar), Yagüe (6.^a Región Militar) y Moscardó (4.^a Región Militar), aunque el verdadero artífice de la operación contrainsurgente fue el teniente general Rafael García Valiño, jefe del Estado Mayor Central. El Ejército franquista, superior en hombres y medios, estaba en disposición de aplastar a un ejército guerrillero sumido en el desconcierto y que estaba más pendiente de la frontera francesa que del interior de España, temeroso de que le cortaran la retirada^[122]. En ese contexto de confusión, y procedente del norte de África, llegó Santiago Carrillo a Toulouse, donde los responsables comunistas en Francia le informaron de lo que estaba sucediendo. Según Azcárate, Carrillo «sentenció que aquello era una locura» y que se «imponía una retirada urgente». Los guerrilleros, que esperaban angustiosamente la orden de partida, agradecieron la decisión. El 27 de octubre las fuerzas invasoras iniciaron la retirada, culminada el 28 sin apenas incidencias. La invasión había durado apenas diez días.

Por lo que respecta a las cifras, en el conjunto de las invasiones habían participado entre 6000 y 7000 hombres. A los 3000 que entraron en España en las operaciones adicionales —por las zonas gerundense, guipuzcoana, aragonesa o navarra— hay que añadir los 3000 o 4000 que lo hicieron por el valle de Arán,

considerada el área de invasión propiamente dicha. En la cuestión siempre comprometida de las bajas, las fuentes oficiales registran 32 muertos y 216 heridos entre los franquistas. Por parte de los maquis, las cifras resultantes fueron 129 muertos, 241 heridos y 218 prisioneros. Daniel Arasa distingue entre la operación central del valle y las operaciones secundarias. En la central, señala que las bajas de los franquistas alcanzaron los 36 muertos y los guerrilleros, apenas 25. Pero uniendo las bajas de la operación principal y de las operaciones en los diferentes pasos pirenaicos, los muertos del maquis se acercaban a los 200 y casi 800 los prisioneros, muchos de los cuales fueron ejecutados. No estudia las bajas franquistas al margen de la operación de Arán. Ferran Sánchez Agustí, por otra parte, ha cifrado en 271 muertos el coste de las operaciones pirenaicas, distribuidos de este modo: 194 maquis muertos en combate o fusilados en fechas posteriores, 68 miembros de las fuerzas de orden público y 9 vecinos de las comarcas invadidas^[123].

Apenas dos centenares de guerrilleros no repasaron la frontera, eludieron las persecuciones de las fuerzas franquistas y lograron contactar con los grupos de huidos desperdigados por los montes de España.

La polémica de las responsabilidades

Pocos episodios históricos de la oposición al franquismo han suscitado tanta controversia entre protagonistas e historiadores como las responsabilidades de las invasiones pirenaicas. En torno a ellas se ha producido una literatura de resentimiento y justificación que no facilita el conocimiento pormenorizado y preciso de los hechos. Todavía en la actualidad se debate sobre varias cuestiones medulares: quién ordenó la operación y por qué; cuáles eran los objetivos reales de la misma; quién decidió detener la aventura pirenaica, y cuáles fueron sus consecuencias.

Debate atravesado por connotaciones políticas, el fracaso de Arán fue instrumentalizado en un principio por el Buró Político —principalmente, por Santiago Carrillo— para desalojar del poder a Monzón, quien lo detentaba por delegación. Posteriormente, una tropa de historiadores revisionistas —en el sentido duro del término— lo utilizaron para atacar a Pasionaria y Carrillo. En la actualidad, las preguntas comienzan a tener respuestas aceptadas mayoritariamente aunque existen aspectos secundarios a la espera de puntualizaciones. Conocemos, por ejemplo, quién decidió la invasión. Las memorias de Manuel Azcárate, publicadas en 1994, aportaron la suficiente información y contundencia para no seguir alimentando una polémica maniquea. La orden de invadir España partió de Jesús Monzón Reparaz, máximo responsable en la práctica del PCE en España y Francia, y fue apoyada por las delegaciones del Comité Central en ambos países. Miembro de la

dirección en Francia, Azcárate fue testigo de los hechos y certifica que la decisión partió de Monzón y además ilumina las claves de la operación. Tres fueron las razones esenciales de una decisión que, como hemos visto, casi nadie cuestionó en España o Francia. Explica, en primer lugar, que la visión sobre la España franquista que llegaba desde el interior no se correspondía en absoluto con la realidad. Creyeron en la situación prerrevolucionaria del país y, por tanto, en que una invasión precipitaría la insurrección popular. En segundo lugar, los guerrilleros españoles acababan de vivir una experiencia entre ejemplar y épica, testigos de la rendición de las poderosas unidades alemanas. El hecho suscitó comparaciones y espejismos: si eran capaces de doblegar a las irresistibles fuerzas armadas nazis, acabar con la dictadura parecía una tarea más asequible. En tercer lugar, y lo más importante, que en toda la comunidad española en Francia latía un deseo compartido: «había que hacer algo». No se podía desperdiciar el capital de miles de hombres armados y victoriosos en su lucha contra el fascismo^[124]. En el otoño de 1944, Monzón creyó que se daban las condiciones óptimas para llevar a cabo ese plan: el pueblo español estaba al borde de la rebelión y Franco perdía apoyo rápidamente dentro del país^[125]. A fecha de hoy, no existe ningún documento que demuestre que el Buró Político en Moscú o México participase en la elaboración de las invasiones. Aunque fue posible que la dirección comunista tuviera noticias del hecho, conocemos de manera fehaciente que las invasiones pirenaicas fueron decididas sin presiones externas. Sostener que Carrillo fue enviado por el Buró para controlar la operación, resulta una acusación infundada. En marzo de 1944, Tomás Tortajada había sido expulsado del partido por oponerse a esta visión triunfalista^[126].

La segunda cuestión —quién ordenó la retirada— también parece cerrada. Aunque todavía en 1999 López Tovar insistía en que «no es cierto que Carrillo diera la orden. Carrillo no intervino para nada. Vino cuando ya nos íbamos a marchar», no parece probable que en un partido de corte estalinista los subalternos adoptaran resoluciones de esa naturaleza. La decisión política de la retirada, como afirma Azcárate, la tomó personalmente Santiago Carrillo, que además se adentró en el valle de Arán para hacerla efectiva. El hecho de que les dijera a los jefes guerrilleros que había observado movimientos de gendarmes franceses camino de la frontera, posiblemente vino de su temor a una reacción negativa de aquéllos. Victorio Vicuña «Julio Oriá», alto cargo de la AGE, ha señalado que «Carrillo nos confesó que había venido con miedo de que lo liquidásemos acusándole de derrotista e infiltrado»^[127]. Manuel Gimeno, miembro de la dirección del PCE en Francia y expulsado del partido como resultado de estos acontecimientos, ha confirmado reiteradamente todas las tesis de Azcárate.

Finalmente, otro aspecto ampliamente debatido se concreta en la evaluación de las invasiones tanto desde el punto de vista militar como político. Azcárate habla de

«acción criminal», y la valoración de los anarquistas —acantonados en sus «fumaderos de opio teóricos»— se reducía a que los comunistas utilizaron Arán para eliminar a los antifranquistas menos dóciles a los planteamientos del PCE. Federica Montseny, ocupada durante el largo exilio en cuestiones más teológicas que políticas, tuvo tiempo, empero, de acusar al PCE de «haber sacrificado estérilmente a lo mejor de las fuerzas antifascistas»^[128]. En general, la valoración sobre las invasiones pirenaicas puede resumirse en epítetos como descabellada, surrealista, improvisada, disparatada, absurda o insensata. Una voz discordante es la de Joan Estruch, para quien «la invasión aparece, pues, no como un acto irreflexivo y al margen de la dirección del PCE, sino como el último y más audaz intento de conseguir logros reales que apuntalaran la hasta entonces estéril política de la Unión Nacional. Podrá calificarse la operación de descabellada o precipitada, en la medida que no tuvo en cuenta la situación real del interior del país, pero no cabe duda de que en aquella coyuntura específica no carecía ni de lógica política ni de oportunismo táctico». Examinar la operación de Arán no resulta fácil porque carecemos de información para conocer con exactitud los entresijos de la aventura. La hipótesis más razonable no conduce, efectivamente, hacia una acción irreflexiva. A la altura de octubre de 1944, con los alemanes retrocediendo en todos los frentes bélicos de Europa y un presidente americano decididamente antifascista, conquistar una franja de territorio y constituir un Gobierno provisional en el país donde gobernaba un autócrata aliado de Hitler y Mussolini hubiera podido producir reacciones imprevisibles. También las razones partidistas y personales pudieron influir en la decisión final. Partidistas, porque el Partido Comunista estaba siendo rechazado por las organizaciones unitarias del exilio español, y la invasión podía proporcionarle una cuota de poder sustantiva. Personales, porque la situación de Monzón Reparaz parecía especialmente delicada a corto plazo. En el mundo simbólico de los comunistas, Monzón era un «usurpador», ya que estaba usufructuando un poder por delegación que correspondía legítimamente al Buró Político, al que ni siquiera pertenecía. La única posibilidad de mantenerse en el poder pasaba por una maniobra tan audaz como las invasiones pirenaicas. El éxito le habría dado el poder y el fracaso lo único que confirmaba era el desplazamiento de ese poder a sus «legítimos» dueños, los miembros del Buró Político. El testafarro quiso adueñarse del partido.

Desde una perspectiva actual, parece evidente que el año de 1944 era el momento apropiado para haber intentado la remoción del régimen franquista. Antes era una apuesta improbable y luego se demostró imposible. Ahora bien, si Monzón pensaba que una acción del tipo de la de Arán (o Andorra, que era su preferencia) «obligaría» al pueblo español a levantarse contra Franco o a los aliados a intervenir en España — la tesis más probable—, estaríamos hablando de un político con un discurso tan ambicioso como limitado. Las invasiones pirenaicas tenían más que ver con el

voluntarismo revolucionario que con una planificación destinada a conseguir unos objetivos. Ni existían organizaciones de masas que apoyaran la invasión militar, ni los países democráticos iban a obligarse a intervenir por la presión de los exiliados. La sociedad española de 1944, inventariando los exiliados, los muertos y los prisioneros, no estaba en las condiciones ideales para sublevarse. La hipótesis de otra guerra civil tampoco resultaba atractiva para el grueso de la población.

La elección de Arán como escenario de la penetración ha sido considerada unánimemente por los expertos como la mejor alternativa, y quizá las invasiones pirenaicas hubieran hecho posible que un mundo convulsionado por los totalitarismos desviara la atención hacia España si la operación militar —que no pasará a la historia por la factura de su ejecución— hubiera dispuesto de jefes temerarios, audaces, tal vez suicidas. Un ataque masivo y por sorpresa hasta sus últimas consecuencias podía haber forzado a intervenir —incluso con el pretexto humanitario— a las potencias democráticas. Por el contrario, los encargados de llevarla a cabo se revelaron como excesivamente reservados y calculadores. El responsable militar, López Tovar, ha escrito que «Yo redacté la Orden General de Operaciones y la hice cumplir, pero estaba seguro de que no conseguiríamos nada. Por eso al mismo tiempo que tomé las medidas para atacar y ocupar los pueblos preparé la retirada». Arasa sostiene que «Los altos mandos guerrilleros demostraron pocos conocimientos del Arte Militar» y apunta: «Algunos jefes de la operación, como el propio López Tovar y “Pinocho”, que se dieron pronto cuenta de que las perspectivas eran malas, programaron más el repliegue que el avance. Esto es positivo para salvar el pellejo y muchos guerrilleros lo agradecen, pero es evidente que asegura el fracaso de la operación». Un guerrillero participante, Juan Cánovas, resulta más explícito cuando responde que «la invasión había fracasado y, sobre todo los que en ella participaban, se habían acobardado». López Tovar, después de repartir responsabilidades en todas las direcciones y excluirse de las mismas, concluye con un argumento definitivo: «prefiero ser un *bon vivant* que un héroe muerto». Algunos comandantes de la AGE tenían una opinión parecida del máximo responsable de la operación^[129].

El fracaso de Arán fortaleció simultáneamente al régimen franquista y a Charles de Gaulle. Franco, después de las invasiones de Arán, reforzó severamente la frontera pirenaica. Apostó 13 divisiones, unos 100 000 hombres, además de las fuerzas de orden público y el cuarto tabor de las Fuerzas de Regulares «Ceuta núm. 3». Por su parte, De Gaulle, con el pretexto de la invasión, consiguió desarmar y desmovilizar a los guerrilleros españoles, que habían convertido el suroeste de Francia en un verdadero feudo. Un feudo español y comunista.

Las secuelas de Arán

Las invasiones pirenaicas repercutieron de forma destacada en la cúpula de poder comunista y también en el desarrollo y evolución de la guerrilla antifranquista. Como resultado del fracaso de Arán, unos perdieron el poder (Monzón) y otros la vida (Trilla). Santiago Carrillo, en cambio, ascendió notablemente en el escalafón del Partido Comunista y empezó la operación de control del PCE entre finales de 1944 y principios de 1945. Aliándose con los enemigos de Monzón y apoyándose en cuadros jóvenes procedentes de la URSS y Latinoamérica, asumió las riendas del poder en nombre del Buró Político y envió a España a dos militantes leales, Sebastián Zapirain y Santiago Álvarez, a principios de 1945 para controlar el partido en el interior. Los partidarios de Monzón se alejaron voluntariamente de los aledaños del poder o fueron depurados.

Cuando los miembros del Buró Político regresaron a Francia, y Toulouse se había convertido en la capital del comunismo español, Carrillo ya era el personaje decisivo después de Pasionaria. Para conseguirlo, llevó a cabo una implacable campaña de afianzamiento personal y desprestigio de sus adversarios. En primer lugar, alimentó la imagen del líder responsable que había salvado a los militantes de una muerte segura frente a la irresponsabilidad de Monzón y sus seguidores. En el punto de mira de Carrillo estaba sobre todo Monzón, al que acusó primero de aventurerismo para pasar a insinuar adjetivos más gruesos y peligrosos para un comunista de la época: provocador, agente infiltrado y traidor. Calificativos que en algunos casos equivalían a una condena a muerte en una época caracterizada por los métodos expeditivos. El editorial de *Nuestra Bandera* (enero de 1945) proporcionaba las claves para solucionar los problemas de intendencia doméstica: «Pasemos resueltamente a la liquidación física de los agentes de provocación. Cada delator debe pagar con la vida su traición. Y en esta tarea los guerrilleros deben jugar el papel fundamental»^[130]. Pero juzgaríamos equivocadamente las relaciones políticas en el universo comunista si no hiciéramos referencia al «veneno totalitario» que transitaba por toda la organización, donde la eliminación física del adversario entraba en la lógica del discurso político. Acallar la disidencia y desacreditar a los heterodoxos era parte sustantiva de la cultura política de esos «años de plomo». No estaban los tiempos para repulgos.

Monzón Reparaz, que había sido uno de los pocos dirigentes que continuó en España cuando los demás huyeron a ponerse a salvo, fue relevado de su cargo en el partido y se le comunicó además que debía regresar a Francia para justificar sus actuaciones. Sabedor de los métodos usados en el partido con los que caían en desgracia, intentó retrasar ese viaje indeseado, hasta que fue detenido casualmente en Barcelona durante una operación de la policía contra la *Juventut Combatent*. Juzgado en 1948, la importancia de sus apoyos en la *nomenklatura* del régimen —el relevante político franquista Tomás Garicano Goñi; José Solchaga, capitán general de

Barcelona, y Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, además de su amistad con el carlista Antonio Lizarza— impidió que el máximo dirigente del comunismo español durante varios años acabase delante de un pelotón de fusilamiento. Condenado a 30 años, cumplirá 10 de cárcel, de donde saldrá en libertad en enero de 1959: lo celebró comiendo «ajoarriero navarro y angulas». En 1967 se convirtió en «maestro de empresarios» a través del Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial (IPADE) de México, propiedad del Opus Dei. León Gabriel, León Trilla, Alberto Pérez de Ayala, Pere Canals o Llibert Estartús, militante del PSUC, tuvieron menos suerte^[131]. A la hora de morir, también había clases sociales.

A partir de 1948, y con Monzón en la cárcel, Carrillo prosiguió una incendiaria campaña contra su figura. En los partidos comunistas, la pérdida del poder siempre iba seguida de un linchamiento simbólico: infamia y olvido, por ese orden, eran castigos adicionales a la pérdida del poder o de la vida. Con Carrillo de fiscal acusador, los comunistas no encontraron mayores problemas para acusarlo injustamente de preparar la invasión de Arán con la colaboración de los servicios secretos franquistas y también de estar al servicio del espionaje americano. De ahí se pasó a la descalificación personal. El origen aristocrático y la tendencia a la buena vida del dirigente comunista aportaban «cierta credibilidad» a estas acusaciones. A Monzón se le apartó oficialmente del partido en 1948, y en 1950 fueron marginados o expulsados del Partido Comunista todos aquellos personajes importantes que habían colaborado con el dirigente navarro: Manuel Gimeno, Carmen de Pedro, Luis Fernández y Juan Blázquez.

Pero la persecución a la que fue sometido Monzón no debería llevar a un correlato en el que evolucione de comunista invisible a comunista immaculado y ejemplar. Monzón Reparaz era un aventajado estalinista, al igual que Pasionaria, Carrillo y la mayor parte de los dirigentes comunistas de entonces: era la marca de la época. La diferencia sustancial entre Monzón y Carrillo, más allá de las anécdotas, residía en que Monzón perdió la batalla por el poder. Una batalla entre estalinistas. Presentar a Monzón como el contrapunto de Carrillo resulta una operación mistificadora, una burda manipulación. Carrillo y Monzón resultan en lo esencial figuras simétricas, vidas paralelas. El dirigente navarro utilizó reiteradamente las depuraciones contra sus enemigos, los seguidores del «quiñonismo» y los enviados por el Buró Político, como Casto García Roza (procedente de Buenos Aires y encargado por el Buró Político de hacerse cargo del PCE en España en 1943), Ramón Ormazábal o disidentes como Tomás Tortajada. Dos cualificados e históricos dirigentes del PCE que se habían evadido de la cárcel de Carabanchel el 14 de marzo de 1944, Ramón Guerreiro Gómez y Jesús Bayón González, fueron enviados a organizar a los huidos en Extremadura y Ciudad Real para que no incomodaran a la dirección encabezada por Monzón Reparaz. Como apunta Gregorio Morán, Monzón

y Trilla echaron en 1944 a Demetrio Rodríguez «Centenera» por «diluir el partido en la Unión Nacional», y con idéntica argumentación Carrillo los expulsará a ellos al año siguiente. También están documentadas las matanzas que integrantes de la UNE «monzonista» efectuaron en el sur de Francia contra elementos anarquistas y socialistas que trataban de impedir la hegemonía y uniformización de los grupos guerrilleros en el Midi francés por parte del PCE^[132]. Por otra parte, si Carrillo resulta criticable por su obsesión de situar al partido como «vanguardia del proletariado», señalar a Monzón como adelantado del eurocomunismo parece impreciso y exagerado^[133]. Dialogar con juanistas, requetés, cristianos de diferentes pelajes, militares y demás segmentos sociales del franquismo mientras se rechazaba el diálogo con socialistas y libertarios (o terminaban con ellos en las fosas comunes en Francia) no conducía precisamente a la línea italiana del «compromiso histórico». Resulta comprensible la tentación de convertir en héroes a los perdedores, pero una operación de ese tipo nada tiene que ver con la historia.

Pese a todo, Arán significó el mayor peligro para el régimen franquista en su larga (y confortable) trayectoria. Lo más importante desde la perspectiva de nuestro estudio fue que el fracaso no implicó un cambio en la vía insurreccional sino simplemente una modificación de los métodos para llevarla a cabo. Grupos escogidos de guerrilleros fueron entrando en España antes y, sobre todo, después de las invasiones pirenaicas, para organizar a los grupos de huidos o crear nuevos focos insurgentes. El objetivo, empero, seguía siendo el mismo: favorecer la pulsión guerrillera que impulsaría un proyecto revolucionario. La dirección comunista buscaba fomentar en España un paradigma insurreccional que había funcionado en Francia y en Yugoslavia, y que parecía consolidarse en Grecia.

La vía armada como alternativa

Mientras partidos y sindicatos del exilio se habían abonado a la esperanza de que las potencias democráticas acabaran con el régimen franquista, los comunistas manejaron desde el principio varias alternativas, aunque quizás la línea más coherente durante estos años se concretó en la lucha armada. Primero con las invasiones pirenaicas y luego con la táctica del «goteo» —llamada también «política de pasos»—, la opción armada estuvo presente en las diferentes estrategias del PCE desde 1944 hasta finales de la década. «Nuestra perspectiva —la del partido— era provocar un levantamiento nacional. Se podía llegar, en pequeños grupos, a todas las demás regiones y crear las condiciones para un auténtico levantamiento nacional», explicó Santiago Carrillo a Gallo y Debray. Pese al fracaso del valle de Arán, existía el convencimiento de que el final de Franco se acercaba y de que la resistencia

armada podía ser un factor decisivo para ayudar al rápido desmantelamiento de la dictadura o para tener presencia en un reparto de poder después de una hipotética intervención extranjera.

El objetivo de los estrategas y teóricos comunistas pasaba por combinar la resistencia armada con los movimientos de masas, con la pretensión de que el movimiento guerrillero se convirtiera en la mecha de la insurrección popular. Aprovechando que en varias regiones ya existían importantes grupos de huidos, partidas de *maquisards* se fueron infiltrando desde el verano de 1944 en territorio español a través de las rutas fronterizas entre Francia y España. También se produjeron desembarcos en las costas andaluzas con el mismo objetivo. Estas incursiones se multiplicaron después del fracaso de las invasiones pirenaicas. Los *chantiers* de José Antonio Valledor, en el Midi francés, seguían nutriendo el grueso de los grupos de maquis, integrados por comisarios políticos y expertos en la guerra de guerrillas capacitados en la Escuela Guerrillera de Toulouse. Además de organizar los territorios de huidos, también se crearon agrupaciones guerrilleras en áreas sin apenas emboscados, y el ejemplo más relevante se manifestó en el maquis levantino.

El Pleno del CC del PCE celebrado en Toulouse en 1945 ratificó la vía armada. «Una ola de huelgas, manifestaciones y acciones guerrilleras, combinadas con sublevaciones militares, debe inundar todo el país de punta a cabo», proclamó Pasionaria. Víctimas de una información sesgada y de un voluntarismo impropio de teóricos que se proclamaban marxistas, los dirigentes del Partido Comunista no repararon en que, en el interior del país, no existían organizaciones políticas o cívicas capaces de hacer posible la armonización entre los hombres de armas y el pueblo. También parecían desconocer que la brutal represión del franquismo había provocado la interiorización del miedo por parte de los republicanos. Incluso orillaban en sus análisis y planteamientos que la dictadura estaba ampliando su base social. O se dieron cuenta y continuaron porque, pese a los costes humanos y políticos, la guerrilla era el único instrumento capaz de acabar con la pasividad, y de acceder a una cuota de poder en el supuesto de que se produjera un cambio de régimen. Pero en el haber del Partido Comunista está el hecho indudable de que permitió a los huidos convertirse en guerrilleros. Arropados por un partido, con objetivos políticos claramente delineados, devolvió la dignidad a unos hombres acosados, abandonados y al borde del bandolerismo. Y lo hizo organizando a republicanos de todas las ideologías, el único ejemplo de unidad en la oposición antifranquista. Incluso se dio la paradoja de que hubo guerrilleros anarquistas al frente de un proyecto nítidamente comunista (como Bernabé López Calle, responsable de la gaditana Agrupación Fermín Galán).

Las organizaciones políticas y sindicales más representativas del exilio — socialistas, anarquistas y republicanos— no secundaron el planteamiento armado.

Además de no estar de acuerdo con la táctica insurreccional, libertarios y socialistas sospechaban de las tentaciones hegemónicas del PCE. Para los dirigentes republicanos, la guerrilla superaba incluso su capacidad de comprensión. Uno de ellos, Félix Gordón Ordás, lo expresó gráficamente: «Su heroísmo nadie lo niega, pero su lealtad a una república democrática la niegan muchísimos, yo entre ellos, de una manera rotunda»^[134]. Incluso remitieron una carta a la Embajada americana para dejar claro que no compartían los métodos del PCE. Lo mismo ocurría con los socialistas de Indalecio Prieto, convertido al parlamentarismo a ultranza después de la experiencia revolucionaria de octubre de 1934. Los dirigentes del PSOE de México y Francia, que se encontraron sin pretenderlo con dos importantes núcleos guerrilleros en Asturias y León, sólo tuvieron como objetivo que no llevaran a cabo acciones armadas, primero, y la forma de sacarlos de España, después. El pleno socialista de septiembre de 1945 «desautorizó la organización de “revueltas e incidentes” que pudieran legitimar en el plano internacional la existencia de un gobierno de facto en España». Los anarquistas también estaban frontalmente contra la resistencia armada, y los guerrilleros de filiación libertaria que operaron en Cataluña desde los años cuarenta a los sesenta —José Luis Facerías, Ramón Vila o Francisco Sabaté— lo hicieron con el recelo o contra la opinión de la organización confederal. Lo mismo puede decirse de los numerosos libertarios que combatieron en las guerrillas hegemónicas por el PCE. La CNT defendía que la transición debía realizarse «sin violencia, sin dar pretextos a la política reaccionaria internacional que intenta demostrar que nuestra patria no tiene otro dilema que Franco o el caos». Republicanos, libertarios y socialistas estaban convencidos de que las instituciones multinacionales eran la solución a los problemas de España^[135]. Pero los socialistas y anarquistas que no estaban de acuerdo con sus organizaciones, lucharon codo con codo con los comunistas. Fue el caso de socialistas como Manuel Girón Bazán y Manuel Ponte Pedreira, anarquistas como Marcelino de la Parra Casas y el citado Bernabé López Calle.

Pese a todo, el PCE siguió adelante con su proyecto. La resistencia armada comunista tenía como base organizativa las llamadas agrupaciones guerrilleras que, según el coronel Eulogio Limia Pérez, eran las nueve siguientes:

- 1.^a Agrupación o Agrupación Centro–Extremadura (Cáceres, Toledo, sur de Ávila, suroeste de Madrid y zonas norte de Badajoz y Ciudad Real).
- 2.^a Agrupación (Ciudad Real y zonas limítrofes).
- 3.^a Agrupación (Córdoba, sur de Badajoz y otros límites provinciales).
- 4.^a Agrupación (Galicia).
- 5.^a Agrupación (zona este de Ciudad Real, sur de Cuenca y oeste de Albacete).
- 6.^a Agrupación Guerrillera Granada–Málaga (y límites con Almería).
- 7.^a Agrupación «Fermín Galán» (serranía de Ronda).

8.^a Agrupación Guerrillera de Levante–Aragón (Teruel, Valencia, Castellón, Cuenca y limítrofes).

9.^a Agrupación Guerrillera de Asturias–Santander–León–Palencia.

Pero la división anterior resulta puramente descriptiva e incluso retórica, y suele ser habitual que en el tema de la guerrilla se recurra por ambos bandos a nombres rimbombantes, vacíos de contenido. La realidad era más prosaica, y el propio Partido Comunista, que patrocinaba la resistencia, reducía a seis las agrupaciones guerrilleras: Galicia–León, Asturias–Santander, Zona Centro, Extremadura, Andalucía y Levante–Aragón. Tampoco esta división implicaba una mayor objetividad, y era más fruto de la localización geográfica que de una realidad operativa. No parece muy riguroso, por ejemplo, hablar de Agrupación de Asturias–Santander cuando nunca existió una organización guerrillera que coordinara la resistencia entre esas provincias. Los maquis del oriente de Asturias y del occidente de Santander coincidieron ocasionalmente en los límites provinciales pero fue de forma espontánea, al margen de cualquier planificación. La Agrupación Guerrillera de Levante (AGL) se extendió por la región aragonesa y empezó a ser conocida en algunos documentos como Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), aunque simultáneamente funcionó una Agrupación Guerrillera del Alto Aragón (AGAA) que no citan ni los historiadores policiales ni los vinculados al PCE. Tampoco parece serio hablar de Agrupación de Galicia–León. Cuando se produjo la unidad entre gallegos y leoneses, la organización que la hizo posible, la Federación de Guerrillas de León–Galicia, no dependía de los comunistas y cuando éstos crearon un Ejército Guerrillero lo ubicaron exclusivamente en Galicia. El mejor ejemplo para comprender la poca importancia que tenían estas «divisiones cartográficas» lo aportó la provincia de Córdoba. Por vínculos organizativos y conexiones geográficas, la provincia andaluza estaba ligada al Ejército de la Zona Centro. No obstante, en 1946 su dirigente más destacado, «Mario de Rosa», decidió segregarla del Centro e incorporarla a Andalucía. ¿Qué cambió esa decisión a nivel táctico, logístico o del día a día? Absolutamente nada. Por lo que respecta a la terminología, cada territorio guerrillero impuso nombres específicos. Lo que en Levante era una agrupación guerrillera, en Galicia se conoció como ejército guerrillero; agrupaciones gallegas en Levante recibían la denominación de sectores. Bajando de nivel, el barullo conceptual resultaba completo: brigadas, batallones, destacamentos, etcétera. Con el añadido de que, por ejemplo, batallón tenía un significado diferente en Cáceres y en Santander.

Más allá de los papeles, no existió un mando guerrillero operativo y único para todo el territorio nacional, y cada agrupación, incluso cada partida, hizo lo que pudo y como pudo. Los organigramas que recogen los documentos eran fuegos de artificio. El PCE creó en Francia una Comisión encargada de las guerrillas, al frente de la cual estaban Enrique Lister y Juan Modesto, auxiliados por Antonio Cerdán y Luis

Fernández «General Luis», antiguo jefe de la AGE. Pero esta Comisión no tuvo incidencia alguna en la práctica cotidiana de la guerrilla. Gregorio Morán apunta que Líster y Modesto, en relación con la guerrilla, actuaron como «generales por correspondencia». Como tampoco tuvo repercusión el intento de alumbrar en agosto de 1946 del Consejo Central de la Resistencia en el interior de España, diseñado por Carrillo, interlocutor de las guerrillas y uno de los hombres fuertes del PCE, miembro desde 1946 de un Buró Político integrado además por Pasionaria, Uribe, Mije y Antón^[136]. En marzo de 1945 existía un Mando Guerrillero de las Federaciones de Centro, Andalucía, Levante, Aragón y Santander, que se puso en contacto con la Federación de Guerrillas de León–Galicia mediante una comunicación que no tuvo respuesta. Sabemos que ese mando no fue operativo, y los guerrilleros santanderinos jamás tuvieron la mínima planificación con los andaluces, valga el ejemplo. El dirigente federacionista Marcelino Fernández Villanueva «Gafas» se lo explicó al periodista francés Serge Groussard: «Escucha: yo mando a los guerrilleros de tres provincias, divididos en pequeños grupos de 10 a 15 hombres cada uno. Vivimos en montañas, en los bosques de difícil acceso; nos desplazamos siempre. Hay grupos de los que no tengo noticias durante semanas. En estas condiciones comprenderás que es muy difícil tener un Estado Mayor General para toda España».

Los maquis que venían de Francia traían órdenes precisas del Partido Comunista, pero tenían que adaptarse a la realidad de una guerrilla incomunicada, que sobrevivía en condiciones extremas y que dependía en parte de guerrilleros locales reacios a cualquier tipo de disciplina. Estos guerrilleros autóctonos, populares en sus demarcaciones y auténticos «señores de la guerra» impusieron las condiciones a los comisionados del maquis mientras la correlación de fuerzas les fue favorable. Todo ello producía una imagen cercana al «feudalismo armado». «Hemos organizado la Agrupación, pero esto sólo desde un punto de vista formal; prácticamente costará mucho ponerla en marcha y, sobre todo, pensar en acciones ofensivas (...). Son escépticos, creen que no se puede hacer mucho más de lo que ya han hecho, no tienen confianza en la eficacia de la organización y militarización, consecuencia de su bajo nivel político, puesto que son hombres de los pueblos limítrofes, muchos no pertenecen a ningún partido político y los demás ingresaron durante la guerra... Nuestra primera tarea estriba en ganarnos la confianza, tarea muy difícil dado su estado de desconfianza frente a todo», escribía el 15 de noviembre de 1944 Jesús Bayón González «Carlos», encargado de organizar las guerrillas en Extremadura, a José Isasa Olaizola «Fermín», responsable del Ejército guerrillero de la Zona Centro^[137]. Pero las dificultades no arredraron ni al Partido Comunista ni, sobre todo, a los huidos que empezaban su periplo de guerrilleros frente al franquismo. El trienio 1945–1947 señaló la pulsión y el apogeo de la resistencia armada en España.

Para abordar el análisis regional del maquis —pero sólo por una cuestión

didáctica— distribuimos la guerrilla en cinco áreas geográficas (territorios–maquis) que coincidieron con ejércitos guerrilleros más o menos estables: Galicia–León, Asturias–Santander (aunque aquí no existió, como hemos visto, una coordinación significativa), Extremadura–Centro, Andalucía y Levante–Aragón. A estas cinco áreas geográficas añadiremos posteriormente Cataluña, escenario a finales de los cuarenta y principios de los sesenta de una destacada guerrilla urbana.

Los años decisivos (1945–1947)

El fracaso de las invasiones pirenaicas no modificó de manera sustantiva la moral de victoria de los republicanos españoles en el exilio. Eran tiempos en los que parecía imposible que los aliados, vencedores de los fascismos, no intervinieran en España. Para quienes habían combatido en la Resistencia contra los alemanes, las potencias democráticas —especialmente Francia y Gran Bretaña— tenían la obligación moral de erradicar del occidente europeo un vestigio autoritario como el franquismo. La sustitución del dictador era vista como el corolario lógico de la guerra mundial, así como habían considerado la contienda civil española como el prólogo de la guerra contra los totalitarismos de derecha. Pero la política mundial entró de inmediato en un tobogán de intereses geoestratégicos que enterrarían los sueños republicanos en el panteón de las causas perdidas.

La consolidación del franquismo

El trienio 1945–1947 marcó el punto de inflexión de las turbulentas y paradójicas relaciones diplomáticas entre el franquismo y las potencias occidentales. Desde ese punto de vista, 1945 y 1946 se constituyeron como los años aparentemente más comprometidos para el régimen. Así lo percibieron tanto los sectores que configuraban el entramado socio-político de la dictadura como los republicanos del exilio, y la sucesión de episodios contrarios para los intereses de Franco parecían confirmarlo. La derrota definitiva de las naciones totalitarias situaba al último aliado de los países del Eje en una delicada posición, y tanto las naciones vencedoras como la nueva institución surgida de la paz, Naciones Unidas, hacían frente común contra la dictadura española, convertida en un anacronismo. «Es una desgracia que se prolongue el control de España por los fascistas a pesar de la derrota de Alemania y del Japón. Está bien claro que mientras dure el régimen de Franco, España será una causa constante de desconfianza y desacuerdo entre los fundadores de las Naciones Unidas», declaraba el 17 de octubre de 1946 Trygve Lie, secretario general de la ONU^[138]. Pero si algo puso de manifiesto el «problema español» durante la

posguerra fue que en el ámbito de la diplomacia las palabras y los hechos no recorren necesariamente trayectorias paralelas.

Las conferencias de Yalta y Postdam (celebradas en 1945 con un intervalo de siete meses) representaron un primer aviso que la oposición antifranquista no quiso o no pudo evaluar correctamente: la eliminación de la dictadura no era una tarea prioritaria para los nuevos países hegemónicos. El reparto de áreas de influencia a nivel mundial —sancionado en las citadas asambleas— imponía su lógica de poder en detrimento de las grandilocuentes declaraciones de principios, y el elemento decisivo de este sesgo político lo aportó la URSS, el único país que había sido atacado por tropas franquistas (la División Azul) y que tenía, por tanto, motivos suficientes para exigir a los aliados una intervención militar en España. Pero Stalin utilizó el «problema español» para sus propios intereses, y a cambio de tener las manos libres en Polonia trasladó a Gran Bretaña y Estados Unidos la tutela de España. La decisión soviética resultó determinante. A partir de aquí, comenzó lo que podemos denominar la «tragicomedia española». Por una parte, una oposición en el exilio que vivía en la resignación más absoluta a la espera de que las potencias democráticas decidieran el destino de España. Por la otra, y con los británicos señalando el rumbo, los aliados desentendiéndose desde el principio de cualquier posibilidad de entrar militarmente en España. Unos y otros representaban un sainete que, empero, tenía efectos secundarios importantes: millones de españoles seguían bajo el poder omnímodo y arbitrario de un tirano. Cientos de miles, se adaptaban como podían a las penalidades de la expatriación.

Pero los análisis retrospectivos no pueden alimentar la tesis de que todo estaba decidido al finalizar la guerra mundial. El año 1945 había sido un año difícil para Franco, a quien se le acumulaban las malas noticias. El 8 de mayo se había producido la capitulación general de los ejércitos nazis y el 7 de julio los laboristas de Clement Attlee llegaban al poder en Gran Bretaña. En la Conferencia de San Francisco (abril–mayo de 1945), que significó la constitución de las Naciones Unidas a partir de la representación de 55 países, primero se le negó a España el derecho de admisión y el 19 de julio aprobó una condena contra el régimen franquista. Incluso el pretendiente, Juan de Borbón y Battenberg, personaje políticamente más cercano a la ideología franquista que a los ideales democráticos y de perfil claramente reaccionario, hacía público un comunicado —el llamado Manifiesto de Lausana— en el que parecía apostar por una salida democrática. El año 1946 trajo para el franquismo peores expectativas. El 9 de febrero la Asamblea General de la ONU reprobaba otra vez al régimen franquista, y Francia cerraba la frontera con España como respuesta a la ejecución de García Grandá y sus compañeros. Los partidarios del dictador temieron durante la mayor parte de 1946 una invasión avalada por los países democráticos. Ante los cambios en el escenario internacional, entre los franquistas se delinearon dos

bandos: los fieles, que llamaron a la *unión sacrée* contra la «conjura judeo–masónica internacional», y aquellos que, aceptando a Franco, veían peligrar el régimen y buscaban una alternativa moderada. Destacaban en esta última corriente los monárquicos, y la oposición antifranquista pactaría ingenuamente con ellos una salida a la sustitución del Caudillo. Por su parte, el régimen empezó la operación de «limpiar la fachada». Alberto Martín Artajo, un hombre de Acción Católica, fue encargado de llevar las relaciones exteriores a partir de 1945; dejó de ser obligatorio el saludo fascista del brazo en alto y el 9 de octubre se concedió el primer indulto. Se pasaba del nacional–sindicalismo al nacional–catolicismo, un planteamiento más digerible para las democracias europeas. Y el nacional–catolicismo había empezado con buen pie: el 12 de abril fallecía el presidente Roosevelt, el más decidido adversario de la dictadura.

Pero el momento más crítico del régimen se había producido el 5 de marzo de 1946, que se convirtió al mismo tiempo, y paradójicamente, en una fecha maldita en la agenda de los demócratas españoles del interior y del exilio. Las potencias occidentales encargadas de gobernar la «cuestión española» —Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia— hacían pública la célebre Nota Tripartita, en la que se condenaba sin paliativos a la dictadura española. La repulsa contra Franco y el franquismo incluía, sin embargo, una puntualización cardinal, ya que «no entra en las intenciones de los tres Gobiernos el intervenir en los asuntos de España». La lectura profunda del comunicado, que invitaba a una superación pacífica de la dictadura, tenía en realidad un significado inapelable: el régimen franquista se había salvado. Cuando el 12 de diciembre, la Asamblea Plenaria de la ONU, además de catalogar como fascista al régimen español, recomendó la retirada de embajadores y el bloqueo económico, la oposición más consciente asumía que era simplemente «diplomacia de salón». Al reiterar el deseo de no intervención, liquidaba de manera definitiva un discurso antifranquista cuya estrategia pasaba casi exclusivamente por esa injerencia.

La modificación de ese escenario sólo habría sido posible con una oposición fuerte, tanto en el interior de España como en el exilio. En el primer caso, presionando mediante manifestaciones, y en el segundo, conformando un frente unido y una voz única ante los países e instituciones internacionales. Pero la realidad era diferente. En el interior del país, las organizaciones de masas apenas existían, y los militantes de partidos y sindicatos republicanos estaban muertos, en la cárcel o en el exilio. Para la mayoría silenciosa afín a las ideas republicanas y democráticas, el objetivo primordial consistía en sobrevivir. Mientras tanto, los dirigentes republicanos en el exilio continuaban con sus querellas personales y sus posiciones partidistas. Convencidos de que la caída de Franco era poco menos que un proceso fatal e irreversible, se aplicaron más a repartirse un poder que no tenían que a transformar las condiciones que hicieran factible ese cambio. Pese a todo, entre

finales de 1945 y principios de 1946 pareció imponerse la cordura en la deplorable representación del exilio español. Así, el PCE decidió disolver en junio de 1945 la UNE para ingresar en febrero del año siguiente en la ANFD. Simultáneamente, a partir del 10 de julio de 1945 había comenzado el proceso de recomposición de las instituciones republicanas. Las Cortes, reunidas en México, eligieron presidente de la República a Diego Martínez Barrio, quien encargó la formación de Gobierno a José Giral, un Ejecutivo llamado «de la esperanza» cuando a partir de 1946 se convirtió en Gobierno de amplio espectro y encuadró a todos los partidos representativos del exilio. Pero este Ejecutivo del exilio era una falsa ilusión, y además llegaba tarde. La política de los demócratas españoles, tal vez influenciados por la diplomacia occidental, se había convertido en un juego de representaciones e intereses desconectados de la realidad. Hasta tal punto se tomaban en serio los formalismos políticos, que Manuel Azcárate habla de «cretinismo parlamentario». La falta de decisión y una tendencia evidente a la melancolía por parte de algunos líderes del exilio, motivaron la creación, primero en México y luego en Toulouse, de una República arbórea. La entrada de los comunistas en el Ejecutivo republicano en 1946 alimentó la esperanza de que por fin la unidad se había impuesto entre los diferentes sectores del exilio: otra ilusión pasajera.

La guerra fría, correlato lógico del reparto de áreas de influencia y de los sistemas políticos y económicos dominantes, consolidó definitivamente al franquismo. Perfilada en 1946 con la guerra civil en Grecia, explotó al año siguiente con la negativa a que el Plan Marshall alcanzara a los países europeos en la órbita soviética. La «cortina de hierro», un concepto acuñado por Churchill, había caído entre oriente y occidente. En los gobiernos de concentración europeos, empezaban a ser desalojados los representantes comunistas: este y oeste dejaban de ser exclusivamente puntos cardinales para convertirse en conceptos políticos. Hartmut Heine introduce una tesis paralela y sugestiva para explicar el éxito de Franco. Defiende que el elemento decisivo para la permanencia de la dictadura se debió a Gran Bretaña, cuya diplomacia defendió siempre —incluso durante el desarrollo de la guerra civil española— la utilidad de Franco al frente de los destinos de España. Argumento que sirvió igualmente para los conservadores de Churchill como para los laboristas de Clement Attlee y Ernest Bevin. Cuando los ingleses lograron convencer a los americanos de que la presencia del dictador al frente de España era conveniente, la situación devino irreversible. La guerra fría simplemente certificó algo que había sido decidido previamente por los rectores de las potencias democráticas: Franco era útil y además resultaba barato. A cambio de poner el país a disposición de los intereses occidentales, sólo pedía que no interfirieran en la política interior de España^[138].

Galicia–León: declive federacionista y apogeo de los comunistas

En 1945 se produjo un cambio importante en el discurso guerrillero del oeste de León y el oriente gallego: la Federación de Guerrillas de León–Galicia disfrutó de un periodo de éxito pero también comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de su decadencia. Para los federacionistas, cuya estrategia pasaba por la intervención extranjera, la convicción de que los países democráticos habían abandonado a los antifranquistas causó un profundo malestar y desánimo. Marcelino Fernández Villanueva «Gafas», jefe de EM, lo explicaba al periodista Groussard: «Hemos sido los primeros del mundo en combatir el fascismo y somos los últimos del mundo en sufrir la tiranía del cómplice de Hitler y Mussolini. Los aliados ayudan a ese cómplice, traicionando a sus muertos del 39 al 45. ¡Esto es el mundo!». Para dificultar aún más la posición de los guerrilleros, en los montes galaico–leoneses se acentuaron las diferencias tácticas y administrativas de socialistas y anarquistas con los comunistas.

La Federación había sido la organización pionera de la resistencia antifranquista, y los comunistas copiaron tanto su estructura como incluso sus manuales básicos de supervivencia y comportamiento. Cuando el PCE decidió introducir en España guerrilleros que habían combatido en la Resistencia francesa, apenas tuvo problemas para hacerse con el control de la mayor parte de las áreas de huidos: era la única fuerza organizada que apoyaba a la guerrilla. Pero en León y Galicia la situación era diferente por cuanto existía un grupo establecido, y el enfrentamiento entre la Federación y el recién creado Ejército Guerrillero de Galicia, dominado por los comunistas, parecía inevitable. El primer escenario de esa pugna se concretó en las tensiones escisionistas de la Federación, ya que los militantes comunistas, toda vez que no consiguieron absorber a los federacionistas, parecían decantarse por la escisión. En el Quinto Congreso, celebrado en marzo de 1945, se evitó la fractura por el procedimiento de incorporar al líder de los comunistas, Francisco Elvira Cuadrado, en el Estado Mayor. Concedores por Juan García Durán de la creación de la ANFD, los guerrilleros decidieron desvincularse de la UNE y mantener relaciones cordiales con las dos organizaciones antifranquistas. «No escatimaremos esfuerzos por conseguir la fusión de ambos bloques, pero mientras otra cosa no se decida, recobramos nuestra independencia política», se puede leer en la «Orden circular núm. 20» del Congreso. Socialistas y anarquistas tenían que apoyarse en los apartidarios para no verse desbordados por la creciente influencia del PCE, que se estaba reforzando con evasiones de los destacamentos penitenciarios de la zona.

Pese a todos los problemas, los federacionistas mantuvieron una política de expansión hacia Galicia. Crearon la 2.^a Agrupación, con sede en Orense, que estaba mandada por el socialista Mario Morán. Desplegó sus efectivos por los montes de Casayo y, en general, la sierra del Eje, y la Tierra del Bollo hasta Gudiña y Verín, además de las comarcas de Valdeorras y Puebla de Trives. Pero en esta agrupación federacionista también se integraron los dos guerrilleros del PCE más decididamente partidarios de abandonar la Federación y vertebrar organizaciones específicamente comunistas, Guillermo Morán —hermano de Mario— y Evaristo González Pérez «Rocesvinto». Así que el proceso de escisión resultó imparable. A finales de 1945, se solapaban en Lugo una 3.^a Agrupación de la Federación (mandada por Manuel Castro Tellado) y otra del Ejército. Cuando en agosto del año siguiente, los comunistas enviados para negociar con los federacionistas de la 2.^a Agrupación de Orense crearon otra del mismo nombre, aunque de obediencia comunista, el cisma podía estimarse como definitivo. A estas decisiones de los comunistas no eran ajenos José Gómez Gayoso y Antonio Seoane Ramos, enviados por el partido a finales de 1945 para imprimir un nuevo rumbo a la organización gallega.

Pese a todos los reveses, la Federación seguía en la brecha en 1946, e incluso el día 1 de abril editó de nuevo *El Guerrillero*. Socialistas y libertarios intentaron recomponer una vez más la unidad de acción con los comunistas, y en esa búsqueda no sólo se aplicaron los partidarios de una tercera vía —encabezados por Girón—, sino también dos de los más prestigiosos comunistas de la Federación: Elvira Cuadrado, ayudante de EM, y Arcadio Ríos, responsable de guerrilla en la 2.^a Agrupación. Para llevar a cabo un arreglo definitivo, los jefes guerrilleros decidieron celebrar un nuevo congreso en los montes de Casayo, al que llamaron Congreso de Reunificación. En efecto, a mediados de julio de 1946 se reunían en la sierra del Eje, delegados de las diferentes corrientes políticas y guerrilleros de los destacamentos que operaban en la zona. La concentración se llevó a cabo en el valle de la Bruña. El testimonio de «Gafas» evidencia los tensos inicios del Congreso: «El último Congreso se llamó de reunificación y se celebró en los montes de Casayo. Yo presido este Congreso. Al principio parecía que nos íbamos a matar los unos a los otros. Sabiendo que yo era el blanco de las armas comunistas, fui el único que no tenía la pistola en la mano. Pero los ánimos se fueron serenando, la razón se impuso y en la votación salgo reelegido jefe, se ratifica la adhesión a la ANFD y se toman otros acuerdos, aunque casi siempre con la oposición de los comunistas». El congreso se vio interrumpido por fuerzas de la Guardia Civil, que por diversas informaciones tenían noticias sobre la concentración guerrillera en la sierra del Eje. Aunque lograron repeler los ataques, durante los días del Congreso se produjeron diversas escaramuzas entre los valles de la Bruña y Mortera, la más importante de las cuales tuvo lugar el día de la clausura del mismo con la llegada de una contrapartida que

había logrado engañar a los pastores que hacían de enlaces. Los enfrentamientos del último día no sólo impidieron finalizar el congreso con normalidad, sino que en uno de ellos murieron Elvira Cuadrado y Arcadio Ríos Rodríguez, «que expiró en brazos de su hermano».

El Congreso de Reunificación había ratificado al Estado Mayor y solventado, sobre el papel, la cuestión de la unidad y el pluralismo de la Federación. Pero en la práctica significó la consumación de la ruptura, ya que la muerte de Elvira y Arcadio Ríos, los dos comunistas partidarios de la unidad, eliminó toda posibilidad de arreglo. Los partidarios de la línea rupturista, encabezada por «Rocesvinto» y Guillermo Morán, se separaron oficialmente de la Federación el día 18 de agosto, y a partir de entonces la mayor parte de los militantes o simpatizantes del PCE abandonaron León para concentrarse en Orense. Las razones de los escisionistas para provocar la ruptura eran falaces, por cuanto aducían que los federacionistas se habían adherido a la ANFD e ignoraban la realidad de la UNE cuando esta última había desaparecido hacía más de un año y los propios comunistas se habían integrado en la ANFD. En parecidas contradicciones incurrió el PCE de Galicia, que en una circular enviada a las unidades guerrilleras, y después de las perífrasis habituales —«no tenemos afanes de predominio o absorción»—, terminaba concluyendo que «las guerrillas que no se han dejado influenciar por las corrientes de pasividad y espera, están y estarán mandadas por comunistas». Era la demostración de que actitudes como la de «Rocesvinto» y Guillermo Morán formaban parte de una corriente generalizada entre los comunistas. Todavía «Gafas» llevó a cabo varios intentos por evitar lo inevitable. Después del Congreso se entrevistó en la provincia de Lugo con Marcelino Rodríguez Fernández «Marrofer», uno de los responsables de las guerrillas gallegas. Las dos poderosas personalidades de la guerrilla del noroeste evidenciaron un desencuentro radical, que se traducía entre la táctica comunista destinada a controlar a todos los guerrilleros y la opción pluralista pero defensiva de los federacionistas. Fernández Villanueva comprobó cómo a raíz de esta entrevista aparecía en *Mundo Obrero* como enemigo de los comunistas e incluso se le acusaba de agente del franquismo. Todavía efectuó un último intento por recomponer la unidad, pero en Meira (Lugo) cayó abatido el 13 de enero de 1947 en un tiroteo con la Guardia Civil su acompañante, Manuel Castro Tellado, resultando detenido el interlocutor designado por los comunistas, Emilio Golás «Villa»^[140]. Aislado y casi ciego, «Gafas» envió cartas a los dirigentes del PSOE en el exilio y consiguió contactar con sus compañeros de la Federación y con los guerrilleros asturianos. Tanto aquéllos como éstos le aconsejaron abandonar la lucha armada y huir al extranjero. Era un final inmerecido para una Federación que había sido ejemplar en tantos aspectos.

Las discusiones políticas transcurrían simultáneamente a la práctica guerrillera. Después del pacto no escrito que había existido entre las fuerzas de represión y los

guerrilleros en los dos años precedentes, 1945 resultó un tiempo especialmente violento. Aparte de los sabotajes y ocupaciones de pueblos, murieron en enfrentamientos siete guardias civiles y fue ejecutado un falangista. Dos enlaces encontraron la muerte mediante torturas (Luis Sorribas) y la aplicación de la «ley de fugas» (Manuel Calvo Calvo). Tres sucesos, empero, sobresalieron en este año decisivo. En primer lugar, la caída del pueblo de Columbrianos, que representó un punto de inflexión en el devenir de la resistencia leonesa. Una muchacha del pueblo cabreirés de Odollo —que mantenía una doble relación sentimental con un guerrillero y un Policía Armada: hecho que se repitió en varias zonas de maquis— denunció el punto de apoyo a las fuerzas represivas y, aunque el Estado Mayor conoció la noticia y se la comunicó a los guerrilleros, tres de ellos desobedecieron la orden porque pensaban que, pese a todo, era un lugar seguro. La joven de Odollo, llamada Evangelina, se presentó a la hora de la cena, detalle que no inquietó a los guerrilleros, ya que desconocían quién era la confidente de la policía. Terminada la cena, salió a comunicar la situación a los guardias de Ponferrada. Pese a que se escondieron en un falso techo, las informaciones recibidas permitieron localizar y eliminar a los tres resistentes —Miguel Cuellas «Artillero», «Andaluz» y Robustiniano Arias Corujo «Felipe»—, y se les aplicó la «ley de fugas» a la dueña de la casa, Catalina Martínez Núñez, y a su sobrino. Había dirigido la operación el capitán de la Guardia Civil Felipe Romero. Pero con ser importante la caída de los maquis, todavía revistió mayor gravedad la desarticulación de la red de enlaces: unas quinientas personas —entre ellas, el jefe de las Milicias, Gonzalo López Voces «Policía de Acero»— fueron detenidas.

En el mes de julio de 1945, miembros de la Federación tuvieron un encuentro con una patrulla de la Guardia Civil en la sierra de Corbaceira (Zamora), y en el enfrentamiento murieron cuatro guardias civiles: Hipólito Marín, Vicente Pascual Chicote, Diosdado Largo y Eustaquio Aguilera. Por parte de los maquis cayó José Vega Seoane «Animas», al que le explotó una granada que iba a lanzar contra la patrulla. El 21 de octubre, Evaristo González Pérez, natural del pueblo de Dragonte y detenido al acabar la guerra a causa de una delación, efectuó en su pueblo un ajuste de cuentas, en compañía de tres guerrilleros, que costó la vida al párroco, Rocsvinto Ruiz Sánchez y a otros cuatro vecinos de su pueblo. González Pérez era conocido en la guerrilla con el nombre del párroco al que mató, «Rocsvinto», del que había sido monaguillo de niño y para el que trabajaba una tía de sirvienta. Una tragedia griega en un pueblo leonés. Lo mató mientras decía misa. En 1946 siguieron las bajas en los territorios de la Federación, encontrando la muerte cinco enlaces, un párroco, dos guardias y un guerrillero. Entre las muertes, sobresalió la del brigada José González Cartón, uno de los responsables de la Brigadilla de Ponferrada, famoso en El Bierzo por la dureza de sus interrogatorios a enlaces y familiares, y también uno de los

guardias civiles que figuraba en la agenda de los guerrilleros desde hacía años como objetivo destacado. Al igual que los guardias civiles Blas Diez Abramo y Manuel López Aizpuru, miembros de las contrapartidas que fueron abatidos en 1947.

Pero el acontecimiento de mayor repercusión en la provincia de León no lo llevaron a cabo los maquis de la Federación sino los huidos del nordeste, que se mantenían al margen de la guerrilla organizada. Un grupo de emboscados efectuaron el secuestro y posterior ejecución de Manuel Zapico Arrióla, un ingeniero agrónomo de la Diputación, director de la Fundación Chicarro–Canseco–Banciella y miembro de una de las familias más acaudaladas de la provincia. Posiblemente, la acción fue preparada por Secundino Rodríguez «Practicante» y participaron en la misma miembros de la partida de Sabero que encabezaba Calixto López Abad. Arrióla fue secuestrado por los huidos en su finca de Santibáñez de Porma el día 29 de septiembre de 1945, y sus raptores solicitaron dos millones de pesetas por el rescate. La madre de Arrióla requirió el dinero a una entidad bancaria, donde denunciaron el hecho a la policía. Las autoridades policiales diseñaron entonces una estratagema para detener a los huidos y rescatar al rehén. Disfrazado de mujer, un capitán de la Guardia Civil, Francisco Martínez Gallo, y dos números, disfrazados a su vez de conductor y ayudante, fueron al encuentro de los hombres del monte el 2 de octubre. A la altura de la finca conocida como El Carrizal, en la carretera León–Boñar, les salieron al paso tres hombres vestidos de guardias civiles. Huidos y guardias se dieron cuenta del engaño mutuo, y se inició un tiroteo en el que cayó muerto Francisco Suárez Salvador «Químico» y un miembro de la Benemérita resultó herido. El resto de los huidos, que observaba la operación desde unos montes próximos, ejecutó a Zapico Arrióla. Un año después, el mismo grupo de huidos atentó contra el capitán Martínez Gallo, que logró escapar con algunas heridas y que continuaría la lucha contra el maquis en Levante a las órdenes del general Manuel Pizarro Cenjor.

Pero la provincia de León y el oriente de Galicia habían comenzado a perder importancia a finales de 1944 y principios de 1945 en beneficio del norte y oeste gallegos, fundamentalmente la provincia de La Coruña y el norte de Lugo. En 1945, un grupo de combatientes, con Marcelino Rodríguez Fernández «Marrofer» a la cabeza, lograron consolidar la 4.^a Agrupación, que desplegó sus partidas por las comarcas de El Ferrol, Puentedeume, las Mariñas, Mesía, Frades y Curtis. Entre los jefes guerrilleros más destacados se encontraban Ramiro Martínez López «Zapatero», José Vázquez Mauriz «Patitas», Manuel Pena Camino «Flores», Benigno Andrade García «Foucellas», Francisco Rey Balbís «Moncho» y Manuel Ramiro Souto. Los dos últimos dirigían el llamado Grupo Volante A, que tenía como centro de operaciones las Mariñas. En 1945 la 4.^a Agrupación tuvo dos altas importantes, Lisardo Freijo «Teniente Freixo» y Manuel Ponte Pedreira, socialista de la aldea de Ordes. A partir de 1946, en esta agrupación se ensayó el proyecto definitivo de la

resistencia gallega, mediante la conversión de las partidas en destacamentos, unidad básica que contaba con un responsable militar, un comisario político y un territorio para llevar a cabo sus acciones. Para empezar, se establecieron cuatro destacamentos: Manuel del Río Botana (dirigido por Ponte), Eduardo Xaneiro («Flores»), Santiago Álvarez («Teniente Freixo») y Enrique Líster (Amador Domínguez Pan «Jaime Pimentel»). En la guerrilla coruñesa, y ante la inhibición de sus respectivas organizaciones, también combatieron socialistas y libertarios^[141].

La 3.^a Agrupación fue la siguiente en el organigrama del Ejército Guerrillero, y tuvo su área de influencia en la provincia de Lugo, especialmente en el norte. Comprendía las comarcas de Vivero, Mondoñedo, Chantada, Orol, Palas de Rey, Monterroso, Monforte de Lemos y Puebla de Brollón, siendo el personaje decisivo en los primeros momentos José Temblás Paz, secretario del PCE de Lugo desde 1944. Otros jefes de partidas importantes fueron Jesús Iglesias «Tizón», Leonardo Gómez Pérez «Trancas» (primer responsable militar de la agrupación), Ramón Rodríguez Varela «Curuxas», José Castro Veiga «Piloto», Elias López Armesto y José Arias Fernández «Dapena». A finales del verano de 1946 se constituyó la 2.^a Agrupación Guerrillera en la provincia de Orense. Los enviados a la zona para solventar las fricciones con la Federación habían decidido establecer una nueva Agrupación. Samuel Mayo Méndez se convirtió en el responsable militar y el armero Benigno Fraga fue elegido comisario político. El grueso de los componentes procedía de las partidas de huidos capitaneadas por Demetrio García Álvarez, Albino Gómez Rodríguez y Manuel Álvarez Silva. Tanto «Rocesvinto» como Guillermo Morán, antiguos federacionistas, llegaron a ser miembros principales de la guerrilla orensana. Se movían por el norte de la provincia, en la frontera con Lugo y se desplazaban entre las cuencas de los ríos Sil y Miño, y las localidades de Verín, Celanova y Castro Caldelas. Finalmente, a finales de 1947 se constituyó en la provincia de Pontevedra, en las comarcas de Silleda y Vigo, la 5.^a Agrupación Guerrillera, creada a partir de elementos procedentes de la 4.^a. El mapa de la resistencia gallega estaba completo^[142]

El episodio más sobresaliente durante este trienio fue la llegada a finales de 1945 de dos personajes decisivos, José Gómez Gayoso y Antonio Seoane Ramos, a quienes acompañaba Manuel Blanco Bueno. Procedían de La Habana, Buenos Aires y Orán, respectivamente. Destacados dirigentes comunistas fueron enviados con la misión de relanzar política y militarmente el maquis gallego. Por sus trayectorias previas, descollaba la figura de Gómez Gayoso, que durante la guerra había sido comisario político y redactor de periódicos comunistas. Antes de instalarse en Galicia y hacerse cargo del Comité Regional del PCE, había formado parte en Madrid de la Delegación del CC del PCE, lo que evidenciaba la lealtad a los postulados carrillistas. Para controlar el poder en Galicia y erradicar a los monzonistas de la región, tuvieron que

neutralizar a los anteriores responsables, Víctor García Estanillo «Brasileño» y Teófilo Fernández, declarados primero bandoleros y posteriormente traidores. Apartados de la dirección del partido y, en la mejor tradición estalinista, asesinados en enero de 1946. Existe además la sospecha de que en la ejecución de Fernández influyó el hecho de que era amante de Josefina González Cudeiro, compañera de Seoane^[143]. Gómez Gayoso y Seoane Ramos impulsaron decisivamente la resistencia en Galicia, perfeccionando y completando el diseño de las agrupaciones y destacamentos, e introduciendo como elemento central la figura de los comisarios en la guerrilla. El número de guerrilleros se incrementó exponencialmente, tanto porque la situación internacional en 1945 era crítica para el franquismo como porque muchos enlaces quemados se veían obligados a echarse al monte. También mejoró el aparato de propaganda. Como experto *agitprop*, Gómez Gayoso sabía que tan importante como efectuar atentados y sabotajes era realizar una tarea proselitista en pueblos y aldeas. De poco servía llevar a cabo una lucha contra el franquismo si no llegaba informativamente a la población. En enero de 1947, aunque con fecha de 25 de diciembre de 1946, inició la publicación de *El Guerrillero* portavoz del Ejército Guerrillero de Galicia.

Entre los objetivos más buscados de los maquis gallegos estaban los falangistas, enemigos por excelencia de la resistencia antifranquista. La 4.^a Agrupación efectuó en 1945 la ejecución de dos conocidos represores de la guerra y la posguerra. El 25 de enero los guerrilleros mataron en el casino de Mugarzos a Esteban Cortizo «Bailarín», jefe local de Falange. Lo mismo hicieron en diciembre con Trobo, falangista y secretario del sindicato vertical de Vivero, que se había destacado como represor en Asturias y que fue eliminado cuando salía de un cine ubicado en la calle principal de la localidad lucense. Pero el suceso más destacado, por lo que supuso de salto cualitativo en el discurso punitivo de la guerrilla, fue el ataque al Cuartel de Infantería de Marina en Carranza, El Ferrol, donde se apoderaron de fusiles y munición. En 1946 los guerrilleros eliminaron al alcalde de Cedeira, al gerente de Conservas Albo (este último en la localidad lucense de Vivero) y al jefe de la Falange de Cambre, Manuel Doval Lemat. La eliminación de este último la efectuaron ocho guerrilleros mandados por «Marrofer», del grupo volante coruñés. También al periodista del *Ideal Gallego* Arcadio Vilela Cárate, afiliado a Falange y miembro del tristemente célebre grupo de «Los caballeros de La Coruña». En 1947 los falangistas siguieron figurando como elementos prioritarios en las acciones guerrilleras, pereciendo el jefe de Falange de Ordes, José Linares Rama, y el hijo del alcalde falangista de Inás–San Pedro de Nos, Francisco Quiroga Cornes. Los dos con una importante trayectoria represiva durante la guerra y la posguerra. El 22 de noviembre de 1947 fue ajusticiado el jefe de Falange y alcalde de Mesía–Ordes, José Candal Veites^[144].

Pero los nuevos métodos también multiplicaron las caídas de resistentes, algunos de ellos fundamentales en la trayectoria de la guerrilla gallega. La lista de guerrilleros muertos la encabezó Ramiro Fornos «Lagoa», abatido el 23 de noviembre de 1945 cerca de Capela–Cabanas. Manuel Bello Parga —el Manolito Bello de los romances de la época— fue detenido, juzgado el 24 de junio de 1945 en consejo de guerra y ejecutado a garrote vil en La Coruña el 11 de julio de 1946. No obstante, la muerte más decisiva fue la de «Marrofer», maquis de intensa trayectoria antifranquista desde 1936 y que había sentado las bases de la guerrilla gallega. El 24 de junio de 1946, el grupo que dirigía fue avistado por una contrapartida en Milreo–Fervenzas–Betanzos. En el combate que se entabló cayeron «Marrofer», jefe de la 4.^a Agrupación, Lisardo Freijo «Teniente Freixo», jefe del destacamento Santiago Álvarez, Ángel Álvarez Regó y un cuarto guerrillero. Manuel Ponte Pedreira, jefe del destacamento Manuel del Río Botana y sucesor de «Marrofer» al frente de la 4.^a, morirá pocos meses después. En la madrugada del 21 abril de 1947 fue localizado en la aldea de Fontao–Abellá–Frades debido a una celada que las fuerzas de represión tendieron a un enlace de confianza de Ponte. Cercado el pueblo por los guardias civiles de los puestos de Ordes, Curtis y Xunceda, en el combate perecieron Manuel Ponte Pedreira, Manuel Díaz Pan y Manuel Rodríguez Suárez «Asturiano». Emilio Pérez Vilariño pudo escapar vestido de campesino, y también disfrazado de labriego huyó Juan Couto Sanjurjo, que se encontraba en otra casa del pueblo, y era una de las razones por las que Ponte y sus compañeros —venían a buscarlo— estaban en Fontao. La muerte del jefe del destacamento Manuel del Río Botana vino acompañada de la detención de una parte de la red de apoyos, ya que se le encontró una lista de enlaces de su pueblo y comarcas vecinas. Tampoco Lugo quedó al margen de las caídas. A partir de octubre de 1946 se inició el desmantelamiento de la partida de Roberto Alonso Díaz «Barbas» en la comarca de Villalba. Como resultado, de las detenciones de enlaces, la partida terminó siendo aniquilada, muriendo el propio «Barbas» y su lugarteniente, Perfecto Requejo Rouco «Tarrelo»^[145].

Pero la desestabilización de la guerrilla gallega no vino por la muerte de los guerrilleros sino por el proceso de militarización de la misma, al principio de manera casi imperceptible y luego de forma radical. Esa militarización, reflejada en aspectos aparentemente superficiales —indumentaria, saludos, grados castrenses—, alimentó el progresivo alejamiento de los enlaces, que eran el filtro principal para restar eficacia a un nuevo método policial en la zona, las infiltraciones. A finales de 1947, por ejemplo, se infiltró en la resistencia gallega Alejo Pablo Mora, ex oficial republicano ahora al servicio de la Guardia Civil, que logró engañar a un antiguo compañero de armas que colaboraba con los hombres de la sierra. Otra consecuencia de una disciplina militar ajena a la tradición de los hombres del monte fue que los veteranos de la resistencia fueron aislándose y se produjeron numerosas deserciones a

partir de entonces. Entre los prófugos de 1946 se encontraban guerrilleros significativos y de larga trayectoria en el monte, como Ramiro Martínez López «Zapatero», Jesús López Ardao y Andrés Toupelo. Este último, después de presentarse a la Guardia Civil, demostró su dignidad negándose a colaborar contra sus compañeros: se le aplicó la «ley de fugas» en diciembre de ese año. En 1948 posiblemente hizo lo propio «Jaime Pimentel», jefe del destacamento Enrique Líster, y el 22 de diciembre de 1946 habían huido por el puerto de Vicedo (Lugo) 22 guerrilleros y enlaces^[146].

A mediados de 1947, el maquis continuaba en una fase expansiva. Las deserciones eran repuestas con facilidad, pero los guerrilleros veteranos empezaban a escasear por los montes gallegos. Los jóvenes que los reemplazaban no fueron capaces de establecer de nuevo una comunicación fluida con una población antifranquista que, ante el peligro que significaba colaborar con la guerrilla, se encontraban ahora con unos guerrilleros que los trataban como un ejército de ocupación. Un error que se revelaría fatal a corto plazo.

Dos visiones de la guerrilla en Asturias

Durante el trienio 1945–1947 se mantuvieron en Asturias las discrepancias tácticas entre socialistas y comunistas. Siguiendo las directrices marcadas por el exilio, los primeros (unos veinte guerrilleros) llevaron a cabo una existencia puramente defensiva y de protección de los cuadros políticos, cuando no se transformaron en responsables políticos provisionales ellos mismos. Los comunistas, por supuesto, aplicaron enérgica y decididamente las instrucciones del partido, y empezaron a segregar una organización poderosa que mezclaba a guerrilleros veteranos con jóvenes que admiraban su empuje y que además eran repudiados por los guerrilleros del PSOE (los socialistas no aceptaban ni siquiera a los enlaces quemados, que trataban de sacar al extranjero). Enterrado el proyecto común del Comité de Milicias Antifascistas, las últimas conversaciones formales entre ambos grupos tuvieron lugar en 1945, año en el que José Mata mantuvo contactos con Baldomero Fernández Ladreda «Feria» —el comunista más receptivo a los planteamientos del PSOE— y con el nuevo hombre fuerte de la resistencia asturiana, Constantino Zapico. Pero ambas posiciones estaban lejos de encontrarse.

La propuesta de los socialistas tenía como objetivo la creación de una entidad guerrillera unitaria y democrática, que estuviera a la defensiva, y que testimoniara la existencia de una oposición en el interior de España. Los dirigentes socialistas, sin embargo, ni creían en la viabilidad de la lucha armada ni estaban dispuestos a pasar a una ofensiva generalizada, pese al indudable apoyo popular que tenían en las cuencas

mineras. El marco internacional favorable a la oposición antifranquista no lo contemplaron como una oportunidad para hostigar al franquismo, sino para actuar políticamente a la espera de la intervención de las potencias democráticas. Frente a la resignación socialista, los comunistas eligieron la vía insurreccional y pusieron en pie una de las organizaciones armadas más activas del país. El discurso socialista para defender la pasividad (además del refrán de que «no hay mal que cien años dure») se fundamentaba en una premisa obvia: la vía insurreccional incrementaba la represión por parte del régimen franquista y simultáneamente favorecía la cohesión de sus partidarios. Pero ese tipo de discurso también era un sofisma que empleaban todos aquellos que no se decidían por la lucha armada. La inhibición favorecía la supervivencia, pero ello no mejoraba las expectativas de los demócratas. Por el contrario, perpetuaba una dictadura que además reprimía por sistema. De hecho, ese rechazo al enfrentamiento no fue óbice para que el aparato represivo franquista cayera en ocasiones contra las organizaciones socialistas. En la comarca de Laviana, por ejemplo, se produjeron detenciones masivas tanto en el mes de abril de 1946 como en mayo de 1947, lo que ocasionó la disolución de una parte significativa de la infraestructura política del socialismo asturiano. Finalmente, las organizaciones políticas asturianas fueron desarticuladas en su totalidad, siendo los guerrilleros los que tuvieron que hacerse cargo de la FSA a partir de un pleno de abril de 1948. Esta situación ocasionó que, cuando los maquis huyeron poco tiempo después, la federación socialista entró en una crisis definitiva^[147].

Para Adolfo Fernández, el fracaso de la unidad entre socialistas y comunistas suscitó dos efectos inmediatos. El primero se tradujo en una franca hostilidad entre los militantes de ambos partidos, y los socialistas tuvieron «no sólo que preservar sus vidas ante el acoso incesante de la represión franquista, sino también de la violencia de los comunistas». Incluso el propio «Feria», militante del PCE, fue acusado de ser confidente de la policía, entre otras cosas por su proximidad táctica a los socialistas. El segundo, el fracaso de la unidad de acción ratificó a los socialistas en su tesis de la vertiente defensiva y política de los guerrilleros. El Comité Nacional del PSOE en Francia aprobó las tesis de los guerrilleros socialistas asturianos, y fue Eduardo Villegas quien se lo comunicó en una reunión que tuvo lugar en La Rebollada–Mieres. Entre las resoluciones y sugerencias, sobresalían las siguientes: que se aplastaran en el monte, que mantuvieran la comunicación entre las agrupaciones políticas y sindicales socialistas, y que no efectuaran acciones que conllevaran riesgos para sus vidas o incentivaran la represión. Se trataba, según Carlos Santullano y José Manuel Pérez, de reconvertir a los «guerrilleros en cuadros políticos clandestinos con el fin de dinamizar las organizaciones políticas y sindicales socialistas». En el pleno de 1946, en La Gargantada–Mieres, recuperaron formalmente el SOMA–UGT, la enseña del sindicalismo socialista en Asturias, y

mediante periódicos como *Avance* y *Valor* mantenían el contacto con la población antifranquista. La cautela socialista incluía que Mata tachara de «criminales» las acciones armadas de los comunistas, exactamente los mismos calificativos que utilizaba el régimen para demonizarlos. Incluso otro socialista, José Graciano «Pepe Llagos», se acercaba más a la semántica franquista: «Todo lo que se relaciona con esos bandidos no lo admite nadie». El hecho de que el PCE disolviera la UNE para adscribirse a la ANFD, controlada por el PSOE, no influyó en el devenir de la guerrilla asturiana^[148]. La lucha soterrada que existía entre José Mata y Manuel Fernández Casas «Lele», seguidores de los planteamientos defensivos, y Arístides Llaneza y Manuel Fernández Peón «Comandante Flórez», partidarios de una mayor implicación subversiva, se había saldado con el triunfo de los primeros. Pero era una situación comprometida y paradójica que entró en crisis en cuanto surgieron las primeras dificultades: se consideraban guerrilleros y vivían como tales pero actuaban como políticos. En una carta al dirigente socialista José Barreiro del 25 de julio de 1946 José Mata exponía claramente la situación: «¿Por qué sacrificar nuestras vidas inútilmente? ¿No sería más conveniente señalarnos un cometido o una solución?».

Por su parte, la agrupación comunista, asentada sobre todo en las comarcas mineras pero con proyección en una parte significativa del territorio asturiano, quedó estructurada, a partir de 1945, en tres brigadas, 10.^a, 11.^a y 12.^a, mandadas respectivamente por Constantino Zapico «Constante de la Pallega», Requejo y Manuel Díaz Caxigal. Desplazado (y perseguido) «Feria», el poder de la guerrilla recayó en la dirección colegiada de estos tres hombres, aunque el máximo responsable era Zapico. Casto García Roza, Benito García y Remigio Blanco, que era el enlace entre los políticos y los guerrilleros, integraban el Comité Regional del PCE de Asturias, Santander y León. Políticos y guerrilleros, apoyándose en los «franceses», se hicieron con el control del poder en la resistencia comunista de Asturias. Desde los *chantiers* de Valledor en el Midi francés había llegado a Asturias en 1945 una primera expedición encabezada por Agustín del Campo e integrada por Eugenio Sierra Redondo, Apolinar Anibarro Rodríguez, Perfecto Lorenzo Calviño, José Terrón Vila, Vicente Gómez Fernández y Macario Ortega Viñas. En febrero de 1946, un segundo grupo de 40 maquis, dirigido por Gabriel Pérez Díaz, terminó protagonizando una verdadera tragedia para el antifranquismo. Partieron de Saint-Jean-Pied-de-Port y atravesaron la frontera por Valcarlos, en el Pirineo navarro. El objetivo de estos hombres, fuertemente armados —metralletas inglesas, granadas y lapiceros explosivos—, era reforzar el maquis de Asturias y Santander. Después de detener dos camiones entoldados, alcanzaron el puerto del Escudo, pero se les acabó el combustible y tuvieron que abandonar los vehículos. Conocedoras las fuerzas represivas de lo que ocurría, iniciaron la persecución. Según Ángel Ruiz Ayúcar y otros autores, 34 de los guerrilleros fueron detenidos, cinco murieron y sólo uno logró

ponerse a salvo. García Piñeiro, en cambio, señala que tres de ellos alcanzaron territorio asturiano y se unieron a la resistencia. Trabajos más recientes, como el de Pedro Álvarez, hablan de cuatro maquis supervivientes incorporados a la guerrilla santanderina. De los detenidos, cinco fueron condenados a muerte y ejecutados en Santander. Con los refuerzos del maquis francés, en se llevó a cabo una importante campaña de sabotajes: vías férreas, líneas eléctricas y telegráficas, empresas mineras. Una idea de la importancia de la campaña de sabotajes se reflejó en el hecho de que Franco, en uno de sus viajes a Asturias, tuviera que esperar durante doce horas en León hasta que se arregló la vía dinamitada por los maquis. A partir de entonces, las operaciones de demolición de infraestructuras fueron reemplazadas por las represalias contra los partidarios del autócrata, los secuestros y los golpes económicos. Una emisora de radio ubicada en Peña Mayor permitía la comunicación entre las diferentes partidas, y un periódico, *La Voz del Combatiente*, mantenía la relación de los guerrilleros con la población antifranquista^[149]. Pese a la rivalidad y los desencuentros tácticos, en ocasiones puntuales los comunistas contaban con la colaboración de los socialistas.

El año de 1946 resultó crítico para la resistencia asturiana, ya que en él fue desarticulado el aparato político con la detención de Casto García Roza, Celestino Uriarte y Remigio Blanco. La muerte del primero a consecuencia de las torturas en la comisaría de Gijón descabezó a la organización asturiana, un golpe del que ya no se repondría. García Roza, junto con Uriarte, había marcado el rumbo de la resistencia asturiana desde 1945, impulsando una relación armónica entre el partido y la guerrilla. Pero su muerte, y la caída de numerosos enlaces, fracturó definitivamente ese equilibrio de poderes, y puede afirmarse que a partir de entonces la guerrilla señalaba también las directrices políticas. El resultado más visible fue que la Agrupación Guerrillera de Asturias (también conocida, lo mismo que en Galicia, como Agrupación Pasionaria) no tuvo un Estado Mayor que centralizara y canalizara el ejercicio del poder armado, lo que resultaba sorprendente en una resistencia tan politizada y activa. Lo mismo que en el caso socialista, pero con intenciones diametralmente opuestas, se produjo una simbiosis entre el partido y la guerrilla. Como señala García Piñeiro, «se inició un proceso de ruralización de la organización comunista al pasar los centros de decisión a estar controlados por los guerrilleros». Pese a todas las caídas, parece que, momentáneamente, el maquis asturiano no se resintió, ya que a finales de 1946 se amplió el Comité Político–Militar con la incorporación de Marcelino Fernández «Marico» (en la zona de Infiesto y Arriondas), Adolfo Quintana (Pola de Lena y Mieres) y José González Fernández «Pastrana» (en Peña Mayor). La guerrilla comunista estaba formada por unos 60 efectivos y las reuniones de los mandos se realizaban generalmente en Peña Mayor. En el comité político, aparte de Avelino Sirgo, participaban dos miembros de la guerrilla, los

hermanos Eduardo y Corsino Castiello. En la madrugada del día 21 de mayo de 1947, la tragedia se abatió sobre la guerrilla asturiana. En el Pico Polio, medio centenar de guardias civiles cercaron a un grupo de maquis en una cueva. En el combate murieron el guardia civil Antonio Roche y cinco guerrilleros: Olegario Llanea Rozada «Gitano», Francisco Muñiz Rodríguez, Constantino Rubio González, Manuel Vizcaíno Beberide y José González Orviz^[150].

Como ocurría en otros territorios de maquis, uno de los mayores problemas en la guerrilla asturiana era el de la financiación. En ocasiones, los guerrilleros tenían que subvenir además a las necesidades de enlaces, víctimas de la represión, y órganos políticos. En consecuencia, los atracos, las multas y los secuestros abundaron en los montes de Asturias. La violencia que se vivió en los montes asturianos en estos años, tanto por parte de los maquis (tal vez por la ausencia de un poder centralizado) como de los represores, evidencia la existencia de un conflicto latente en la sociedad, una profunda fractura política. Pero los guerrilleros eran conscientes de que el exceso de violencia perjudicaba a la guerrilla y se crearon tribunales que tenían como objetivo juzgar a guerrilleros y perseguidores mediante lo que llamaron «ética del monte». Como medida de financiación y sobre todo como golpe de propaganda, los maquis asturianos prepararon el secuestro del célebre torero Manuel Rodríguez Sánchez «Manolete», hospedado en el Hotel Principado, uno de cuyos botones era enlace de la resistencia. El secuestro se descartó porque Manolo Caxigal no logró encontrar alguien de confianza que supiera conducir un automóvil. Hasta tal punto llegaba la precariedad de medios de la oposición armada asturiana que, pese a que figuraba en el Estado Mayor guerrillero del Partido Comunista como parte de la Agrupación Asturias–Santander, apenas contactó, con los maquis cántabros^[151].

Por su parte, la guerrilla santanderina tuvo una serie de altas a finales de 1945. Además de los cuatro miembros de la expedición francesa que supuestamente escaparon al cerco represivo —José García Fernández «Pin el Asturiano», Quintiliano Guerrero «Tuerto», «Madriles» y Joaquín Sánchez «Andaluz»— y entraron en contacto con los hombres de «Machado» en los invernales de Bejes, pequeños grupos de evadidos del Penal de Arroyo y enlaces quemados —Rufino Fernández y Máximo Campillo, vecinos de Sotres— ampliaron significativamente el número de guerrilleros en los montes cántabros. A partir de las sucesivas incorporaciones, se constituyeron tres brigadas: la Brigada Guerrillera de los Picos de Europa (también conocida como Brigada Machado), la Brigada Malumbres (homenaje de los guerrilleros a un periodista cántabro, director de *La Región*, asesinado por un falangista) y la Brigada Cristino. La primera tenía su base en la zona occidental de Cantabria, entre Santander y Asturias, y sus hombres se movían sobre todo por La Liébana y Picos de Europa. Fue la más numerosa y llegó a estar integrada por unos 40 maquis. Aparte del jefe, Ceferino Roiz «Machado», destacaban

resistentes como Hermenegildo Campo «Gildo», Santiago Rey, Juan Fernández Ayala «Juanín», Francisco Llamazares «Pancho», José Marcos Campillo, Felipe Matarranz González, Jesús de Cos Borbolla (que huyó a Francia en 1947) y una mujer, María del Carmen Manrique. La Brigada Malumbres, que tenía su territorio en la parte sudoriental de Santander, en una línea que recorría desde Liérganes a Vega de Pas, y se nutría de los restos del grupo de José Lavín Cobo «Cariñoso», contaba entre sus hombres más destacados con Raimundo Casar Acebo «Tampa» y, posteriormente, Mateo Obra. Entre las comarcas de Reinosa y Torrelavega se desplegaba desde 1946 la Brigada Cristino, llamada así en homenaje al héroe del maquis francés fusilado en Madrid, y entre sus integrantes sobresalían Inocencio Aja Montes «Vasco» —organizador de la UNE en Santander—, Esteban Arce, Anastasio Benito, Manuel Carrera, Eulogio Rodríguez «Sordo» y Martín Santos Marcos «Gitano», responsable de una brigada que durante algún tiempo había llevado su propio apodo. Recogió a los guerrilleros de las partidas de Gil del Amo, y efectuaba incursiones por la banda septentrional de Burgos y Palencia^[152].

Uno de los episodios más decisivos de este trienio, y tal vez de toda la trayectoria de la guerrilla santanderina, lo constituyó la muerte de Ceferino Roiz «Machado», personaje medular de la época de los huidos, carismático militante ugetista que consiguió evitar el deslizamiento hacia el bandolerismo de aquéllos y dirigente indiscutido de la resistencia cántabra. La desaparición de «Machado» resultó devastadora para el maquis, condenado a partir de entonces a la fragmentación en partidas más o menos activas pero carente de una organización superior capaz de unificar esfuerzos y clarificar objetivos. La muerte de Ceferino Roiz sobrevino en el transcurso de una fiesta organizada en sus refugios de Picos de Europa para celebrar la caída de Berlín y a la que también habían invitado a los enlaces de la zona. Delatados por un vecino, los asistentes —que estaban repartidos en varias cabañas— fueron cercados por fuerzas de la Guardia Civil del pueblo de Carreña de Cabrales. En las cabañas se encontraban nueve vecinos —entre ellos tres mujeres y el guarda jurado que los había traicionado— y cinco guerrilleros: «Machado», «Juanín», Alejandro Cerro, Santiago Rey y Manjón. De acuerdo con los guardias civiles, que durante la noche se habían apostado cerca de los chozos de los pastores, el guarda salió de la cabaña e hizo la señal convenida. Inmediatamente, comenzaron el ataque con bombas y descargas de fusilería. El jefe de la brigada, «Machado», intentó romper el cerco para evitar que la prolongación del asedio atrajera hasta la zona más guardias civiles, pero cayó muerto. La matanza pudo haber sido completa de no intervenir en el tiroteo Hermenegildo Campo «Gildo», que se encontraba en la aldea porque estaba enfermo. Al oír los disparos, el guerrillero tresvisano llegó hasta las cabañas y cogió por la espalda a los guardias civiles, dos de los cuales murieron en el tiroteo. Los demás guardias optaron por huir. En los invernales de Pandébano,

municipio de Sotres (Asturias), había caído el 22 de abril de 1945 el hombre decisivo de la resistencia santanderina^[153]

La muerte de Ceferino Roiz significó también una inflexión en la guerrilla organizada de Santander. Los restos de la brigada —rebautizada Brigada Guerrillera de los Valles de Llaneda— se repartieron entre las partidas de «Juanín», «Gildo» y «Tuerto». Aunque en teoría «Juanín», el más temerario y popular de todos los maquis santanderinos, era el máximo responsable, los otros dos jefes se emanciparon de su autoridad. Algunos maquis se pasaron a partidas asturianas, mejor organizadas, y otros emprendieron el camino del exilio. A partir de 1947 la guerrilla santanderina renunció a cualquier planteamiento unitario, y puede decirse que el antifranquismo de los montes a partir de este momento lo encarnarán de manera más simbólica que efectiva «Juanín» y algunos elementos con los que actuaba periódicamente. Las otras dos unidades guerrilleras se encontraban también desactivadas a finales de 1947. La Brigada Malumbres entró en crisis con la eliminación de Mateo Obra (detenido en Lujua en 1946) y Raimundo Casar Acebo «Tampa», que murió en 1947. La Brigada Cristino también resultó diezmada.

Finalmente, una breve referencia a lo que vamos a denominar «caso del País Vasco», territorio que parecía disponer de las condiciones adecuadas para la formación de una resistencia armada rural: territorio próximo a la frontera, orografía idónea para la guerra irregular y un importante segmento de población obrera en Vizcaya. En contra estaba el hecho de que el Partido Comunista apenas había tenido implantación popular entre el proletariado de la región —dominado por los socialistas— y de que la hegemonía ideológica en el medio rural estaba en manos de un nacionalismo moderado que rechazaba el recurso a la violencia. En la zona de los Pirineos vasco-franceses, desde el año 1943 se había formado un batallón nacionalista, dirigido por Pedro Ordoki, que había sido oficial del Ejército vasco. Según Juan Pablo Chueca Intxusta, este pequeño ejército nacionalista rehusó participar en las invasiones pirenaicas llevadas a cabo por el PCE bajo las siglas de la UNE. La prevención del peneuvista Ordoki con respecto a las organizaciones españolas cristalizó en su integración en el Octavo Regimiento Mixto Marroquí Extranjero con el nombre de Batallón Gernika. Había participado en importantes batallas contra los alemanes y, como los demás grupos, se dispusieron a entrar en España con las potencias democráticas. Pero la invasión no llegaba y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), partido que estaba por la vía diplomática y no por la insurgencia, disolvió en 1947 este batallón que podría haberse constituido como el embrión de la guerrilla en el País Vasco.

El encargado de organizar la resistencia comunista en el País Vasco fue Victorio Vicuña «Julio Oriá», comandante en la Resistencia francesa y miembro del inexistente Alto Mando Guerrillero, que atravesó la frontera en noviembre de 1944

para coordinar la guerrilla y el partido en la región. Llevó a cabo dos intentos, en los años 1945 y 1946, y ambos se saldaron con fracasos inapelables y numerosas bajas. Por todo esto, no extrañan las lamentaciones del CC del PC de Euskadi en Francia en enero de 1945: «Todavía en nuestros montes y ciudades no están en la medida necesaria las unidades guerrilleras de patriotas vascos que pongan en jaque a los falangistas. Mientras en Galicia, en Andalucía, en Extremadura y en Toledo y otros puntos de España se extiende la lucha de guerrillas y comienza a manifestarse más activamente la combatividad de las masas, en Euskadi vamos todavía demasiado retrasados». Victorio Vicuña, señala tres razones para justificar el fracaso: «la labor de zapa» del PNV, que les «birló» una brigada cuando estaba preparada para entrar en el País Vasco; las sucesivas caídas de los grupos enviados, que hicieron imposible mantener unas partidas estables, y, más sorprendente, que «la geografía del País Vasco no favorecía las acciones guerrilleras». Lo cierto fue que hombres relevantes de la guerrilla española como José Muñoz Lozano, el célebre «Roberto», o José Luis Merediz Vítores «Tarbes» —que llegó acompañado de cinco guerrilleros— tampoco encontraron la clave para vertebrar la resistencia armada vasca.

Finalmente, en Navarra no existió ningún grupo organizado después de las invasiones pirenaicas aunque se movían algunos guerrilleros aislados o de paso que efectuaban operaciones de castigo contra confidentes y fuerzas de represión. Entre 1945 y 1948 se produjo la ejecución de confidentes y falangistas en Satrústegui, Goñi y Uztarroz, y el 22 de enero de 1947 cayeron abatidos dos guardias civiles en la Estación de Pamplona. También conocemos la muerte de un guerrillero, Roberto Gyarre^[154].

La vida efímera del Ejército Guerrillero de la Zona Centro

Entre las organizaciones guerrilleras adquirió relevancia inmediata el Ejército Guerrillero de Centro o Agrupación Extremadura–Centro, integrado por cinco agrupaciones. Incorporaba la región extremeña, La Mancha, una provincia andaluza, Córdoba (que veremos en el apartado de Andalucía), además de Ávila y de Madrid. El Ejército de la Zona Centro abarcaba, por tanto, desde Gredos hasta Despeñaperros, y desde las cadenas montañosas extremeñas hasta las sierras de Albarracín y Cuenca. El grueso de los componentes de estas guerrillas lo formaban los antiguos grupos de huidos, sobre todo en Cáceres, Toledo, Ciudad Real y Córdoba. Los maquis procedentes de Francia no eran numerosos, y a la mayor parte de ellos los enviaron para alimentar la resistencia urbana en Madrid.

El personaje más influyente en los inicios de la resistencia fue José Isasa Olaizola

«Fermín», dirigente de la JSUN enviado desde Argentina a Madrid en el verano de 1944 y que sobrevivió políticamente a la caída del «monzonismo». Aunque en teoría llegó a ser el líder del Alto Mando Guerrillero o Consejo Central de la Resistencia — la JSUN fue sustituida por los llamados Consejos de Resistencia, que eran organismos locales—, en la práctica esta organización no existió a escala nacional y el poder de «Fermín» se reducía al importante Ejército Guerrillero de la Zona Centro. Auxiliado por José Antonio Llerandi Segura «Julián», otros tres nombres completaron el organigrama: Jesús Bayón González «Carlos», Ramón Guerreiro Gómez «Julio» y Dionisio Tellado Vázquez «Mario de Rosa». Los dos primeros habían pertenecido al secretariado del PCE, el máximo órgano en el interior hasta que fueron detenidos en junio de 1944, y escaparon de la cárcel de Carabanchel el 14 de marzo de 1944 mientras que el tercero, maestro de profesión, había pertenecido al comité provincial del Partido Comunista en Madrid y logró evadirse de Alcalá de Henares en 1943. En una reunión en la Sierra de Gredos el 14 noviembre de 1944 quedaron fijadas las bases de la resistencia y el nombramiento de sus responsables. Al frente del Ejército del Centro se situó «Fermín», que a partir de 1945 tuvo como jefe de Estado Mayor a Pedro Sanz Prades «Paco el Catalán», de quien Gregorio Morán escribe que «era un pistolero frío, sin ningún interés por la política ni por los papeles que no fueran de banco». La llegada en octubre de 1945 de Agustín Zoroa provocó fricciones entre este último y «Fermín», que fue relegado de su posición hegemónica en el comunismo madrileño. A pesar de las vicisitudes administrativas, el Ejército de la Zona Centro llegó a contar con 5 agrupaciones: 1.^a Agrupación (Cáceres–Toledo), 2.^a Agrupación (Ciudad Real), 3.^a Agrupación (Córdoba), 5.^a Agrupación (Albacete) y 4.^a Agrupación de Gredos (Ávila–Madrid). A partir de mediados de 1946, la numeración de las agrupaciones fue sustituida por el nombre de las respectivas provincias. Tenían un periódico llamado *Ataque*.

La 1.^a Agrupación se ubicaba en Extremadura y Toledo. Talavera de la Reina, una encrucijada de caminos, se convirtió en el epicentro de la red de guerrilleros y enlaces no sólo de Extremadura y Toledo sino también de Madrid y Ciudad Real. El primer contacto importante se sitúa, según Benito Díaz, en mayo de 1944, en una reunión en el molino El Santo, en las proximidades de Fresnedoso de Ibor (Cáceres), entre «Carlos», «Mario de Rosa», «Francés» y «Quincoces». La constitución oficial de la llamada Agrupación de Extremadura–Centro se efectuó el 14 de noviembre en la sierra del Puerto de San Vicente, en los límites toledano–cacereños, y a finales de año en el pueblo abulense de Mijares, en la Sierra de Gredos. Jesús Bayón González «Carlos» recibió la jefatura y «Mario de Rosa» se convirtió en jefe de Estado Mayor. El puesto de mando se encontraba en la Sierra del Rostro, en la provincia de Cáceres. Estaba dividida en tres divisiones mandadas por Pedro Díaz Monje «Francés» (12.^a), Joaquín Ventas Cita «Chaquetalarga» (13.^a) y Jesús Gómez Recio «Quincoces» (14.^a).

Según fuentes oficiales, entre las tres partidas contaban con 120 hombres, destacando la 12.^a con 57 guerrilleros. Geográficamente «Francés» tenía su centro de operaciones en la sierra de Gata y Corchuelas, en el norte de la provincia de Cáceres; «Chaquetalarga», en las proximidades de las sierras de Guadalupe y Miravete, alternando con largas temporadas en Toledo, y «Quincoces», por su parte, actuaba entre Toledo, Cáceres, Badajoz y Ciudad Real. Tenía sus bases principales en la sierra del Rostro y en Cerro Ballesteros, territorios próximos limítrofes con la comarca toledana de La Jara. Los Montes de Toledo fueron asimismo escenario principal de estas guerrillas, donde se movían más de medio centenar de guerrilleros dirigidos por José Manzanero Marín y Honorio Molina «Comandante Honorio», que constituyeron inicialmente una Agrupación Guerrillera de Toledo que dejó de existir a finales de 1945. Los desplazamientos entre Toledo, Ciudad Real y Cáceres eran habituales: las guerrillas se movían fundamentalmente en los límites provinciales. También los guerrilleros extremeños llevaron a cabo una importante campaña propagandística durante 1945, con la edición y distribución de *El Guerrillero Extremeño*. La propaganda comunista, además de dar a conocer a la gente la lucha armada, se marcaba un objetivo comprometido: inducir a la rebelión a la tropa y números de la Guardia Civil^[155]

La 2.^a Agrupación comprendía una parte de La Mancha y tenía su centro en Ciudad Real (provincia que se convirtió en encrucijada de partidas por su situación geográfica). Encabezada por Ramón Guerreiro Gómez «Julio», formaba parte de la dirección su hermano Manuel, apodado «Antonio», que era el comisario político y luego enlace con Madrid. El jefe de Estado Mayor era Dionisio Castellanos García «Palomo», y también pertenecía al núcleo dirigente Eusebio Liborio Lombardía «Lavija». La Agrupación ciudadrealeña disponía de tres divisiones, gobernadas por Francisco Expósito Prieto «Gafas» (21.^a), José Méndez Jaramago «Manco de Agudo» (22.^a) y, alternativamente, «Palomo» y Honorio Molina Merino «Comandante Honorio» (23.^a). La 21.^a también se desplazaba por las provincias de Córdoba y Jaén, y la 23.^a estaba en contacto con Cáceres, Badajoz y Toledo. Como sucedía en Extremadura, a los nuevos mandos —aislados en la zona de Malagón— no les era fácil controlar a las partidas, que en la mayor parte de las ocasiones actuaban por libre. De hecho, en la misma provincia de Ciudad Real operaban una serie de jefes de guerrillas al margen de la organización armada, como eran los casos de Francisco Corchado Silveira «Lazarete» y Luis López Fernández «Lechuga», que se movían por el valle de Alcudia^[156].

Por lo que respecta a Albacete, la llamada 5.^a Agrupación (que se situaba al sur de Cuenca, oeste de Albacete y este de Ciudad Real) también se organizó en torno a las partidas de huidos existentes. Aunque la responsabilidad inicial recayó también sobre «Carlos», el líder de esta reducida agrupación fue Cecilio Martín Borja

«Timochenko» (Adelardo Peña, de la 2.^a Agrupación, también usaba ese alias), asistido por Eugenio Palacios Moya «Panizares». La agrupación la integraban las partidas de Alfonso Ortiz Calero «Vicente» (que había ocupado la jefatura hasta la llegada de Martín Borja), Eugenio Sánchez Diéguez «Fernando», Sebastián Moya Moya «Chichango» y José Saluquillo Rueda «Tarzán». También destacaba la partida de Antonio Hidalgo «Atila». Pero las guerrillas albaceteñas tuvieron un recorrido breve. En 1947 se produjeron numerosas bajas, e incluso los dos jefes, «Timochenko» y «Panizares», huyeron de la zona.

Para encuadrar a los grupos de huidos de la Sierra de Gredos, se creó la 11.^a División, mandada por Fernando Gómez López «Petroski» (también llamado «Colinas»), y Gerardo Donato Campillo «Tito» de comisario político. En esa zona también se movía una partida capitaneada desde 1943 por Adolfo–Lucas Reguilón García. Este rocambolesco guerrillero «inventó» la Agrupación Guadarrama, desplazándose seguidamente desde el pueblo abulense de Piedralaves hasta los madrileños de Villa del Prado, Guadalix de la Sierra, Galapagar o El Escorial. Reguilón García tenía un especial cuidado de no realizar hechos violentos, y su actividad se limitaba a controles de carreteras, pequeños golpes económicos y gestos, muchos gestos: la suya era una guerrilla de metáforas. El 26 de agosto de 1946, por ejemplo, entró en el pueblo de Alameda del Valle y después de ocupar el Ayuntamiento y de colocar una bandera republicana en el balcón, exigió al secretario que anotase en el libro de actas la liberación del pueblo. Publicó un periódico, *El guerrillero carpetano*, llamado anteriormente *¡Unios!* También editó unos «bonos de la resistencia» con la intención de financiarse sin tener que recurrir a los secuestros y a los atracos. Conforme pasaba el tiempo, Reguilón y sus compañeros alimentaron la existencia de una partida anacrónica. Pero incluso en estas circunstancias, la resistencia armada tenía un precio. En 1945 murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil Manuel Gómez Sánchez y otro hermano «Tabanque», Mariano, fue detenido. Lógicamente, las relaciones de Reguilón García con el Partido Comunista sufrieron importantes altibajos, debido a la diferente concepción de la lucha armada (y pese a que Reguilón era del partido). Pero esta resistencia abulense–madrileña, denominada posteriormente Agrupación de Gredos, apenas tuvo tiempo de consolidarse ya que sus jefes —«Petroski», «Tito» y Manuel Tabernero Antona «Robert»— serían detenidos con sorprendente rapidez. Solamente Fernando Bueno «José» o «Cuáter», superviviente de la caída de Talavera, consiguió estabilizarla durante un corto periodo de tiempo y activar tres partidas. En el verano de 1947 la Agrupación de Gredos había desaparecido y su último jefe, «José», detenido en Madrid. Por su parte, la partida de Reguilón García abandonaba la sierra en 1947. La desaparición de la Agrupación de Gredos en 1947 fue seguida por las demás Agrupaciones de la Zona Centro, donde se produjo un fenómeno único: la

desarticulación casi definitiva a finales de 1947. De hecho, a partir de ese año sólo se mantuvieron algunas partidas aisladas. Al contrario de lo que ocurrió en Galicia, Levante, Asturias o Málaga–Granada, con un importante movimiento guerrillero también en el periodo siguiente, la Zona Centro, donde proliferaron de manera asombrosa los delatores y confidentes, recibió en 1947 un castigo severo, casi definitivo. A los problemas convencionales, en este territorio se añadió en ocasiones la rivalidad entre los jefes. Las fricciones entre Zorúa y «Fermín» se completaron con el enfrentamiento del último con «Carlos», responsable de Extremadura, que generó otro foco de desestabilización y acentuó la autonomía de las partidas extremeñas. Los intentos de «Fermín» para hacerse con el control de Extremadura pasaron en un primer momento por enlaces de su confianza, como Eulogio de la Torre Salazar «Andrés» y Pedro Rodríguez González «Gorki», que desde Plasencia trataron de dominar el maquis de Cáceres y Badajoz en beneficio de «Fermín». Pero en Zarza de Granadilla, donde había convocado una reunión con «Carlos» y «Francés», «Andrés» resultó muerto y «Gorki» detenido en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 20 de abril de 1946^[157]. El segundo intento para destituir a «Carlos», una reunión en Talavera de la Reina, terminaría en catástrofe.

No les fue mejor a los legendarios mandos de las divisiones extremeñas. «Quincoces», que estaba auxiliado como segundo jefe por su hermano Saturio «Quijote» y Faustino Navas Navas «Viruta» como jefe de Estado Mayor, se desvinculó de la Agrupación de Extremadura por orden del partido y recibió el encargo de reorganizar la guerrilla toledana, pero ya eran tiempos difíciles pese a las importantes incorporaciones de jóvenes durante los meses de abril y mayo de 1945. La crisis de la 14.^a División empezó de inmediato con la muerte de tres compañeros, entre ellos Timoteo Rodríguez Moreno «Jabato», y la detención de otros cinco, entre los que destacaba Pedro Sebastián Jiménez «Madroño», el 31 de diciembre de 1945. Según Benito Díaz, consiguieron escapar los hermanos Barroso Escudero, Alejandro «Mejicano» y Daniela, ahora conocida como «Madroña» por su condición de compañera sentimental de «Madroño», que se convirtió en confidente de la Guardia Civil. Estas caídas, producidas en Cerro Ballesteros, se debieron a las confidencias de Joaquín Blas Romero «Estraperlista» y Luis Rodríguez López «Sancho», detenidos tres días antes. Después de fracasar en su intento de activar el maquis en Toledo, «Quincoces» regresó a mediados de 1946 a Extremadura y se instaló en la sierra de Altamira. La multiplicación de los confidentes hacía estragos en la Agrupación, donde proliferaban las muertes y las deserciones, más de 18 en pocos meses. «Quincoces», después de analizar la situación, decidió huir al extranjero, vía Portugal, a principios de 1946 con varios de sus familiares, entre ellos su hermano y su hijo Eugenio, además de «Lenin». Pero no consiguieron embarcar con destino a América y regresaron de nuevo a sus bases. Pero la 1.^a Agrupación estaba en la

práctica desmantelada. La detención de Eugenio Gómez Román «Motorista» y Crescencio Sánchez Carrasco «Valle» condujo a Eduardo Blas Romero «Manco», enlace de «Quincoces» y de su hermano Francisco «Lenin», con quienes tenía una cita próximamente. No obstante, y pese a las torturas, «Manco» no aportó información alguna. Fue «Valle», que se convirtió en un delator entusiasta, quien comunicó a la Guardia Civil el lugar y día de la reunión. Con las informaciones del confidente, la Guardia Civil pudo eliminar a «Quincoces» y a «Lenin», el mismo día 27 de octubre de 1946, en la sierra de Altamira, cerca de Valdelacasa. Horas después aplicaron la «ley de fugas» a «Manco». «Quincoces» y su compañero fueron asesinados por la espalda cuando, según los indicios, iban desarmados. La familia Gómez Recio fue una de las que más miembros aportaron a la resistencia y con un saldo trágico. Entre marzo y octubre de 1946 «Quincoces» había perdido a un hijo, Juan «Salamanca», y a un hermano, Saturio «Quijote» —eliminado el 8 de junio de 1946—, además de la detención de otro vástago, Eugenio «Motorista», fusilado el 27 de julio de 1947 en la Prisión Provincial de Madrid. También murió en la guerrilla Fernando Gómez López «Petroski», hijo de Saturio y sobrino de «Quincoces», en un asalto en Calzada de Oropesa el 8 de mayo de 1945^[158].

El maquis más respetado y carismático de Extremadura, el cordobés Pedro Díaz Monje «Francés», jefe de la 12.^a División, había encontrado la muerte el 30 de julio de 1946 en la Umbría de Peña Falcón, en Serradilla, y posteriormente serán detenidos sus dos acompañantes, Amancio Nieto Caleros «Abuelo» y Fausto Navas Navas «Viruta». Este último se convirtió en confidente policial, lo que coadyuvó al rápido deterioro de la división, que se vio sacudida por una sucesión de guerrilleros que, detenidos o entregados, se dedicaron a suministrar información que hizo posible la eliminación de la red de enlaces y de la propia división a partir de ese mes de julio. En agosto murieron tres guerrilleros en Torremenga, y en ese mes fue exterminada en la sierra de Gata la partida de Celestino Martín Pérez «Compadre», integrada por seis hombres. Otros jefes de partida abatidos fueron Emilio Fernández Nieto «Nebro» y Avelino Barroso Escudero «Recaredo». Desde la muerte en 1945 de José Sierra Vera «Galifa» en Sierra Valero, arreciaron las bajas de manera imparable, y entre ellas destacó la de Jerónimo Curiel Gómez «Gacho», jefe de brigada y uno de los hombres de confianza de Díaz Monje. El golpe definitivo se produjo con la traición de José González Parras «Ríos», que permitió el aniquilamiento a finales de 1946 de la 12.^a División. Mejor suerte tuvo su compañero «Chaquetalarga», responsable de la 13.^a División, quien, junto con Víctor Roque Sánchez «Miguelete», se aplastó al terreno después de la muerte en 1946 de dos compañeros en Mesas de Ibor y finalmente se desplazaron a Ciudad Real, provincia desde la que consiguieron marchar al extranjero a finales de 1947^[159].

A partir de mediados de 1946 el maquis en Extremadura y Toledo iniciaba el final

del trayecto, ya que estaban inactivos o muertos los dirigentes y guerrilleros más conocidos y respetados. No obstante, la guerrilla extremeña todavía dispuso de un breve renacimiento con la incorporación de Julio Navas Alonso «Fabián», que imprimió un sesgo de violencia en la agrupación. Con los restos desperdigados de la resistencia —Antonio León Villa «Calandrio», Gerardo Antón Garrido «Pinto» o Eusebio Moreno Marcos «Durruti»— llevó a cabo una incesante actividad a partir de sus bases situadas en las proximidades de Plasencia. Entre octubre de 1946 y marzo de 1947 realizaron acciones espectaculares, como la ocupación de Joarilla, donde efectuaron una confiscación de propiedades y ejecutaron a tres vecinos. La detención de Victoriano Jiménez Gómez «Tinaja», que luego se convirtió en confidente de la Guardia Civil, permitió el lento desmantelamiento de los restos del maquis extremeño. El remate definitivo se produjo cuando en el 10 de junio de 1947 fue detenido «Fabián» en Madrid, y en Extremadura solamente permanecían las pequeñas partidas dirigidas por «Calandrio» y «Durruti». En 1947 la guerrilla extremeña había desaparecido. Por lo que se refiere a la 2.^a Agrupación de Ciudad Real, las partidas funcionaban con bastante autonomía y ni «Julio» ni «Antonio» ni «Palomo» eran capaces de controlar la situación. A partir de 1947, se produjo un intercambio de papeles, pasando «Palomo» a dirigir la organización, «Julio» se convirtió en comisario político y «Antonio» fue nombrado enlace entre Ciudad Real y Madrid. El 28 de septiembre de 1947 fue localizada la partida de «Pedro el Cruel», muriendo todos sus integrantes —a excepción del jefe— y también el responsable de la contrapartida, el sargento José Ruano Pascual. Finalmente, señalar que con respecto a Jaén, sólo una cuadrilla se integró en la 2.^a Agrupación, la de Ciudad Real, que estuvo mandada por «Gafas», «Portugués», «Asturiano» y «Vidrio», que se alternaron en el mando. La razón de este aislamiento radicó en que los enviados desde el norte de África para organizados fueron detenidos en 1945 en la sierra de Cazorla (Jaén), lo mismo que Alfonso Nevado «Nevado», que había llegado desde Francia en los comienzos de 1946 y fue abatido junto con cuatro compañeros en la sierra cordobesa el 25 de abril de 1947^[160].

La caída más importante para el Ejército Guerrillero de la Zona Centro se produjo en septiembre de 1946, en la Huerta Machuca, propiedad del médico José Machuca pero arrendado a Juan Aznar García, conocido como Tío Matapulgas. A partir de las informaciones suministradas por miembros de la resistencia urbana detenidos en la ciudad de Madrid, los servicios de la Brigada de Investigación Criminal dieron con el domicilio de José Antonio Llerandi «Julián» y posteriormente localizaron a su madre en Ávila. Entre la documentación incautada descubrieron que el centro de las guerrillas de la Zona Centro estaba en la Huerta Machuca, a dos kilómetros de Talavera de la Reina. Policías madrileños detuvieron a la familia Aznar García, que mediante torturas terminó confesando el lugar donde se escondía «Julián», pero en

realidad encontraron a cuatro maquis que habían llegado recientemente al lugar y que lograron huir a un maizal próximo. Reforzados por los guardias civiles y policías talaveranos, se inició una escaramuza entre los guerrilleros y las fuerzas de represión. El resultado, según la investigación de Benito Díaz, se concretó en la detención de «Julián», el suicidio de Jesús Bayón González «Carlos», antiguo jefe de la 1.^a Agrupación, y Manuel Tabernero Antona «Robert» (también conocido como «Lyon»), jefe de la Agrupación de Gredos, consiguiendo escapar Fernando Bueno Sabaro «Cuáter». Fue «Julián» quien descubrió a las fuerzas de represión la importancia de los muertos y también sus informaciones ocasionaron nuevos arrestos, entre los que destacaron el de Agustín Zoroa «Darío», que era el máximo responsable político y guerrillero en la zona Centro, y el de José Isasa Olaizola «Fermín», jefe del Ejército Guerrillero de Extremadura, además de casi un centenar de enlaces. El único cargo importante que consiguió sustraerse momentáneamente a la muerte o a la detención fue «Paco el Catalán», uno de los responsables del desastre.

Además de los sabotajes y las represalias contra los franquistas más descollantes, un factor importante en la vida cotidiana del maquis lo constituía la financiación de las actividades y la supervivencia. Entre los hechos más destacados en este aspecto está el atraco en septiembre de 1946 al banco de Puertollano, en el que los guerrilleros ciudadrealeños lograron un botín de 250 000 pesetas. Ese mismo mes las partidas de «Pedro el Cruel» y «Lavija» asaltaron el tren Madrid–Badajoz. Parece ser que el último se retiró a Madrid y murió en un enfrentamiento en que también cayeron dos guardias civiles. También los maquis albaceteños demostraron una importante capacidad recaudatoria, sobre todo la partida de «Atila». El 7 de octubre de 1946 atracaron a los pagadores del ferrocarril Baza (Granada)–Utiel (Valencia), logrando 64 000 pesetas; el 3 de marzo de 1947 atacaron el pueblo de Cotillas (Albacete) y consiguieron 35 000 pesetas. No obstante, por lo que respecta al Ejército de la Zona Centro, fue en Extremadura, junto con Córdoba, donde se efectuaron más golpes económicos. Según Julián Chaves Palacios, durante 1945 se realizaron en la provincia de Cáceres 19 secuestros, 17 con éxito, y un montante total de 550 530 pesetas. En 1946 llevaron a cabo 11 secuestros, consiguiendo 437 600 pesetas. Por lo general, los familiares pagaban e incluso los propios guardias civiles no interferían en los desembolsos para evitar la muerte de los rehenes, cosa que sucedía cuando los familiares denunciaban el hecho. Así ocurrió en 1945, cuando fueron ejecutados Alejandro Dávila Dávila y Santiago Estrella Trujillo, naturales de las poblaciones cacereñas de Villar del Pedroso y de Fresnedoso de Ibor. O con el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Caminomorisco, Francisco Javier Martín Martín, que, en lugar de hacer frente al precio del rescate, vio cómo su familia avisaba a las fuerzas de represión. En la segunda mitad de 1946, coincidiendo con la toma del mando por parte de «Fabián», se intensificaron los secuestros y ataques a las dehesas.

Destacó el rescate de 100 000 pesetas que pagó el dueño de la finca «Egido Grande», en Navalmoral de la Mata, para que le devolvieran a su hijo, Félix Lisardo Calvo Gil Machón^[161].

Desde el punto de vista del aparato represivo, en Extremadura todavía seguía actuando a sangre y fuego el teniente coronel Manuel Gómez Cantos, que aplicó la Ley de fugas individual o colectivamente y que también impuso el «estado de guerra» a sus propios hombres, como sucedió en la localidad cacereña de Mesas de Ibor, en la sierra de Guadalupe, donde había un destacamento integrado por tres números y un cabo. La noche del 17 de abril de 1945 el pueblo fue asaltado por una treintena de efectivos dirigidos por Jerónimo Curiel «Gacho», natural del lugar. En el ataque al cuartel, donde se encontraban dos guardias, uno de ellos resultó herido de gravedad (murió al día siguiente en el hospital). Ante la superioridad de los maquis, los otros dos guardias, que estaban en la taberna, se rindieron después de un intercambio de disparos. Al mediodía del 18 llegó al pueblo Gómez Cantos, quien acusó a los tres guardias supervivientes del delito de «cobardía ante el enemigo» (artículo 294 de Código de Justicia Militar) y los mandó ejecutar esposados. Antes del ajusticiamiento, les había despojado de su indumentaria oficial (botonaduras, corrajes, tricornio y, finalmente, uniformes). Gómez Cantos también mandó detener al alcalde de la localidad y al secretario y jefe local de Falange. Las ejecuciones de Mesas de Ibor pusieron punto final a la actuación antiguerrillera del llamado «Carnicero de Extremadura». Pero el motivo para sancionarlo no fue la ejecución de los tres guardias civiles —en ese tiempo la muerte tenía un bajo coste, incluida la muerte de guardias civiles— sino el hecho de que no les permitiera recibir los últimos auxilios espirituales antes de fusilarlos. Las protestas de los familiares ante el obispo de Cáceres tuvieron su continuación en el poderoso Pía y Deniel, cardenal primado de Toledo, que intervino para que el jefe de la Guardia Civil terminara ante un consejo de guerra, que lo condenó a un año de cárcel por abuso de autoridad el 7 de diciembre de 1945 —confirmada el 12 de julio de 1946— y lo excluyó del servicio activo durante un año. Terminó su carrera militar en tareas burocráticas, ascendido a coronel. La personalidad de Gómez Cantos, posiblemente más compleja de lo que se podía deducir de sus actividades, se encuadra en el militar tradicional que lleva hasta las últimas consecuencias las órdenes recibidas, y para ello lo mismo fusilaba a un pueblo entero (la intervención del cura de Castilblanco, Ambrosio Eransus, comandante castrense, impidió la muerte de 90 vecinos del pueblo) que a sus propios hombres. Miguel López Corral señala que «su trayectoria había estado salpicada de escándalos y muestras de indisciplina. Traicionado por su carácter arrogante, en su currículum no faltan las correcciones de sus superiores por estafas, malos tratos, insubordinación, turbios negocios y, sobre todo, deudas injustificadas. En todo caso, siempre un denominador común: una inusual carencia de principios éticos». Aunque

también Gómez Cantos fue uno de los pocos jefes de la Benemérita que mantuvo su palabra de respetar la vida a los hombres del monte que se entregaron con la condición de no convertirse en confidentes, pese a las presiones de los franquistas locales. En sus correrías represivas por Extremadura y Andalucía, Gómez Cantos contó con la asistencia reiterada del capitán de la Guardia Civil Emiliano Planchuelo Cortijo, natural del pueblo cacereño de Montánchez, que encabezó los fusilamientos de Alía y de Mesas de Ibor. Gómez Cantos fue sustituido al frente de la Guardia Civil en Cáceres por Arturo Puga Noguero^[162].

Las agrupaciones andaluzas: Córdoba, Granada–Málaga y Cádiz

La guerrilla en Andalucía se desarrolló sobre todo en Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz, con ligeras incursiones en Sevilla, Jaén y Almería. No había, sin embargo, características que homogeneizaran la resistencia de esta región. Mientras Córdoba miraba al norte y estuvo vinculada orgánicamente al Ejército de Centro, el importante foco guerrillero de Granada–Málaga se comportaba como un feudo ajeno al norte de Andalucía e incluso desvinculado del maquis gaditano, geográficamente más próximo. También con respecto a los hombres se evidenciaban diferencias entre la alta y la baja Andalucía. En Córdoba la mayor parte de los maquis estaban huidos desde los tiempos de la guerra mientras que en el caso de Granada–Málaga una parte de los dirigentes se incorporaron desde el norte de África, en un plan diseñado por el aparato comunista.

Por lo que respecta a la provincia de Córdoba, epicentro de la resistencia en Andalucía norte —que también irradiaba su influencia a Jaén y Sevilla y mantenía importantes relaciones con Badajoz y Ciudad Real—, podemos afirmar que no sólo estaba unida teóricamente al Ejército Guerrillero de la Zona Centro (era la 3.^a Agrupación del mismo) sino que en la práctica se relacionó más con Ciudad Real y Badajoz que con las provincias andaluzas, incluso cuando se fundó el llamado Ejército de Andalucía, otro nombre sin contenido. El grueso de la agrupación lo constituyeron los grupos de fugitivos de posguerra instalados en sierra Morena y, en general, en el norte y centro de la provincia. Apenas ejercieron influencia los maquis de procedencia francesa, que fueron detenidos por las fuerzas de represión. Según Moreno Gómez, «Feo» y «Sastre» fueron arrestados en Sevilla y «Antonio» y «Valladares» en Madrid durante la primavera de 1946. Sólo elementos puntuales procedían de fuera de la zona, como Dionisio Tellado Vázquez «Mario de Rosa», que había iniciado su trayectoria guerrillera como jefe de Estado Mayor de «Carlos» en Extremadura y alcanzó la jefatura de la guerrilla cordobesa. Julián Caballero Vacas,

que había sido alcalde de Villanueva de Córdoba, Manuel Hidalgo Medina «Bellota» y Claudio Romera Bernal completaron el cuadro de los personajes más representativos de la resistencia cordobesa.

Después de algunos intentos fallidos por formar una agrupación interprovincial, iniciados hacia el verano de 1945, finalmente optaron por llevar adelante la llamada 3.^a Agrupación del Ejército de la Zona Centro, constituida hacia el mes de mayo de 1946 en el cortijo «Las Dalias», en la sierra de los Santos —término de Villaviciosa—, y que durante años albergó el Estado Mayor de la resistencia cordobesa. «Mario de Rosa» encabezaba la agrupación, Julián Caballero Vacas recibió el nombramiento de comisario político y Librado Pérez Díaz «Jorge Clavijo», la jefatura de Estado Mayor. Destacaba entre los mandos la presencia como ayudante del cuartel general de María Josefa López Garrido «Mojea», destacada feminista durante la República y la guerra. El organigrama se remató con el nombramiento de los jefes de división: «Bellota» (31.^a) y Romera (32.^a). Este último era socialista y no tuvo inconveniente en unirse a los comunistas, aunque lo hizo manteniendo una cierta autonomía: era una unión más administrativa que práctica. La 31.^a División —que tenía su área de influencia en el norte y oeste de la provincia, y se desplazaba hacia Badajoz y Sevilla— estaba integrada por tres batallones, 149 (Córdoba), 150 (Córdoba–Sevilla) y 151 (Córdoba–Badajoz), mandados respectivamente por Claudio Granados Aranda «Redimido», Hilario Martínez Aranda «Godoy del Pueblo» y Bernabé Caballero Calvo «Cojo de la Porrada» (que tenía dos hermanos en el monte, llamados Cornelio «Moisés» y Domingo «Serpiente»). El único batallón de la 32.^a División —en el este de la provincia: Adamuz, Montoro y Villanueva—, el 160, estaba dirigido por «Álvarez». Otras partidas cordobesas que merodeaban entre Badajoz, Ciudad Real y Jaén tampoco se integraron en la organización comunista, como las ya conocidas del ciudadrealeño «Lazarete», las cordobesas de Francisco Vigara Mesa «León» y Diego Gallego Cáceres «Pintao» (de Belalcázar), y Noberto Castillejo Jiménez «Teniente Veneno» (Santa Eufemia). Moreno Gómez calcula que en 1946, en el principio de la agrupación, el maquis contaba con un centenar de hombres, con lo que otros cien al menos permanecían al margen del organismo comunista^[163].

En la guerrilla cordobesa, 1945 resultó un año de redefinición de actitudes, paréntesis entre dos fases violentas, y el ejemplo está en que solamente perdió a dos de sus miembros en enfrentamientos con las fuerzas de represión: el 27 de febrero de 1945 cayó abatido Demetrio Morales Aranda «Cuate» en Arroyo de las Viñas, y el 21 de septiembre murió en Dos Torres, de donde era natural, José Madueño Peralvo «Hocica». Entre las acciones de represalia destacó el secuestro que tuvo como protagonista a Manuel Salinas González, niño de doce años e hijo del presidente de la Cámara Agrícola. Al final los guerrilleros, después de tener secuestrado al muchacho durante un mes y soportar el acoso de los somatenes y de la Guardia Civil, lograron

75 000 pesetas por el rescate. En otro aspecto, las dificultades por las que pasaba el franquismo, favorecieron la tarea de proselitismo entre los cordobeses y permitieron la incorporación de nuevos guerrilleros en la agrupación. En ese aspecto destacó la actividad propagandística, en el término de Pozoblanco, de Juan Ruiz Castilla «Carrete», un maquis venido de Francia. Entre los nuevos guerrilleros alcanzará también caracteres de leyenda Ricardo García Rodríguez «Caraquemá»^[164].

La calma tensa de 1945 se rompió al año siguiente, una fecha crucial para toda la guerrilla española, y, especialmente, para la de Córdoba. En primer lugar, porque fue el año de la fundación oficial de la 3.^a Agrupación y, en segundo término, porque se produjo el choque violento entre fuerzas de represión y los maquis. El saldo resultó demoledor: durante 1946 perecieron 21 guerrilleros y 15 personas afines al régimen. Entre los muertos se encontraban algunos de los más notorios maquis de la provincia: «Carrete», Bartolomé Caballero Vacas (comisario de la 31.^a División), Eduardo Bejarano García «Portugués» o Adriano Granados Aranda «Tigre». Dos guerrilleros jiennenses, Miguel Alcalá Molina y Francisco Muriel López, cayeron en Fuente Tójar cuando llevaban a cabo un secuestro; junto a ellos murieron tres enlaces y una mujer ajena a los hechos. Prosiguieron los golpes económicos, los secuestros y los intentos por ampliar la red de apoyos tanto en Córdoba como en el sureste de Badajoz, adonde se desplazaron bastantes de los miembros de la 31.^a División. En esta tarea de buscar nuevos escenarios para descargar la presión de la fuerza pública destacaron los guerrilleros «Bellota» y José Murillo «Ríos». La localidad pacense de Granja de Torrehermosa terminó convirtiéndose en un valioso punto de apoyo de los maquis cordobeses, y Bernabé Caballero Calvo «Cojo de la Porrada» encontró su punto de apoyo más importante en un prostíbulo de Fregenal de la Sierra. Pero la ejecución del guardia civil Ponciano Barrado, en Granja de Torrehermosa, propició el desmantelamiento de la red de enlaces de Llano de Granja (Badajoz), una de las más importantes de la 3.^a Agrupación. La situación era extremadamente tensa. Un suceso ocurrido en agosto de 1946 puede proporcionarnos una idea del clima existente en los límites entre Córdoba y Badajoz. Una pareja de la Benemérita del cuartel de Helechal, que había escapado a un tiroteo en el que perdió la vida un compañero, se encontró con dos pescadores de Belalcázar (Córdoba) por el camino y, sin motivos aparentes, los guardias civiles los ejecutaron. Poco después, el cabo Juan José Rastrojo Rangel y el guardia que presuntamente había matado a aquéllos fueron expulsados del cuerpo. Tuvieron mala suerte. Sólo un año después, cuando se inició la bacanal de la represión franquista, habrían sido condecorados, felicitados y posiblemente ascendidos. Además de recibir la pertinente recompensa económica^[165].

El año 1947 significó el principio del fin de la guerrilla cordobesa, que no resistió el ataque decidido de las fuerzas de represión. Murieron 13 partidarios del régimen y

42 guerrilleros. En muchos casos, debido a confidencias y delaciones, sobre todo a partir del verano. En el mes de febrero, y como fruto de las confidencias del enlace José Martínez «Chunga», fueron abatidos los guerrilleros Basilio Villarreal Expósito «Panza» y Juan Rodríguez Fabios «Tuerto». El 21 de abril fue liquidado un jefe de partida que se había negado a integrarse en la agrupación, Norberto Castillejo Jiménez «Teniente Veneno», junto con Manuel Martínez de la Mata «Mera», en las proximidades de la población ciudadrealeña de Almadén. El desmantelamiento definitivo de la 3.^a Agrupación se produjo poco tiempo después, en el trágico otoño de 1947. Pero mientras la Agrupación de Córdoba iniciaba un proceso de liquidación, en la baja Andalucía se estaban poniendo las bases de una poderosa organización guerrillera, la Agrupación Granada–Málaga, que fue el resultado de una triple confluencia: los grupos de fugitivos de posguerra, la llegada de maquis procedentes tanto de Francia como, sobre todo, del norte de África y la personalidad carismática de José Muñoz Lozano «Roberto». Este último, un político al que las circunstancias transformaron en jefe de guerrillas, impulsó la unidad administrativa de la resistencia granadino–malagueña, e incluso intentó extender su influencia a la provincia de Almería^[166].

Durante la segunda guerra mundial, la colaboración de los servicios secretos americanos y de los comunistas exiliados en el norte de África había propiciado la llegada a las costas malagueñas de antifranquistas que contactaron con las bolsas de huidos de la zona. Aunque las detenciones de febrero de 1944 y la llegada de Carrillo al norte de África a principios de octubre de ese año habían interrumpido esa cooperación, seguían utilizando el método de los desembarcos para fomentar la guerrilla granadino–malagueña. Las playas andaluzas de Cantarriján, La Caleta, Cerro Gordo o La Herradura permitían el desembarco de los faluchos pertrechados de hombres y armas para la resistencia andaluza. Además, algunos de los que se echaron al monte a raíz de la redada de febrero —Antonio Urbano Muñoz «Duende», Miguel Arrabal Castro «Montañés», Antonio Sánchez Martín «Tejero» y Francisco Cecilia Cecilia— seguían aglutinando a los huidos de las sierras malagueñas. El primer hombre decisivo de la resistencia malagueña fue Ramón Vías Fernández quien, según el estudio de José Aurelio Romero Navas, arribó con nueve compañeros a la playa granadina de La Herradura. Entre los resistentes que acompañaban a Vías destacaban Joaquín Centurión Centurión «Juanito», de Nerja, que hacía de práctico, y Alfonso Armenta, que había sido suboficial antes de la guerra civil. Ayudado por algunos guerrilleros autóctonos fieles al PCE, Vías Fernández creó el 6.º Batallón y editó el boletín *Por la República*. Pero apenas pudo iniciar la tarea de reconstrucción de la guerrilla, ya que fue arrestado el 15 de noviembre de 1945. Provisionalmente, lo reemplazó «Juanito» al frente del maquis, aunque el dirigente más relevante, desde el punto de vista administrativo, era Alfredo Cabello Gómez–Acebo, que había llegado

a la capital el 7 de septiembre, dos meses antes de la detención de Vías, para hacerse cargo del aparato político del PCE^[167].

En Granada existían bolsas de huidos desde 1937. Finalizada la guerra civil, las partidas más representativas eran las dirigidas por Juan Francisco Medina García «Yatero», «Salcedo» y «Los Quero». Comunistas los dos primeros y anarquistas los segundos, trataron sobre todo de evitar que los huidos derivaran hacia posiciones próximas al bandolerismo y se mantuvieran en los esquemas de una lucha política. A principios de 1946 se despejó la provisionalidad y comenzó a funcionar la guerrilla organizada, y entre los dirigentes más representativos de esta primera fase se encuentran Ramiro Fuente Ochoa —dedicado más a las actividades políticas que a las armadas—, Francisco Rodríguez «Sevilla» como comisario político y, sobre todo, José Luis Merediz Vítores «Tarbes», jefe del Estado Mayor y hombre fuerte de la resistencia granadina. La llegada de este último, procedente de la Resistencia francesa, señaló la fecha inicial de la Agrupación de Granada. Las directrices políticas las recibían de Rafael Armada Ruz, responsable del aparato político en Granada, y de Ricardo Beneyto Sapena «Ramiro», responsable regional del partido y residente en Sevilla. En un principio, funcionaron con dos compañías. La primera estaba integrada por las partidas de «Yatero» y Rafael Castillo «Clares», y la segunda, por la de Francisco López Pérez «Polopero» y Juan Rodríguez López «Rabaneo». La Agrupación de Granada, además de tardía, tuvo siempre un carácter provisional, y desapareció a principios de 1947^[168].

Mientras tanto, en Málaga había ocurrido un episodio de consecuencias trascendentales de cara al porvenir de la resistencia: la evasión de Vías Fernández el 1 de mayo de 1946 de la Prisión Provincial de Málaga en compañía de otros 25 detenidos. Excavaron un túnel de medio metro de diámetro y salieron a unos 35 metros de una de las garitas. Por el número de evadidos y también por la dificultad de burlar una vigilancia tan rígida, algunos testimonios sostienen la hipótesis de que se trataba de un intento de aplicar la «ley de fugas» a un guerrillero tan importante e incómodo como Vías. Pero lo cierto es que lograron escapar de la prisión e internarse en la ciudad de Málaga. Ramón Vías permaneció escondido durante un mes y sus compañeros se mostraron incapaces de sacarlo de la ciudad y conducirlo a la sierra, pese a las órdenes del Partido Comunista. Esta negligencia por parte de los encargados de llevar a cabo la operación, básicamente Alfredo Cabello Gómez-Acebo y José Muñoz Lozano «Roberto», responsables del partido en la provincia, permitió que el 25 de mayo, y después de la correspondiente confidencia, cayera abatido por las balas policiales. Según el informe oficial, tras el tiroteo «fueron recogidos y con la premura posible, trasladados al hospital donde, después de ingresados, fueron reconocidos por el médico de guardia que diagnosticó el fallecimiento de los cuatro individuos». En realidad, todo induce a pensar que una

aplicación encubierta de la «ley de fugas». Los muertos fueron Vías, los guerrilleros Antonio Daza López y Antonio Gutiérrez Rojas, además del dueño de la casa, Salvador Bermúdez Luque. «Roberto» fue responsabilizado por el partido de esa caída y castigado por ello a integrarse en la resistencia armada malagueña, pese a que adujo una cojera para eludir ese mandato. Las secuelas también se ampliaron a la red de enlaces. La detención de Alfredo Cabello Gómez–Acebo, que había pertenecido al órgano nacional de dirección de las JSU y era, al menos nominalmente, jefe del Estado Mayor de la guerrilla malagueña, provocó el arresto de 69 personas, debido a la importante documentación incautada cuando fue arrestado. Alfredo Cabello, proveniente de una familia de clase acomodada y que decía tener las carreras de Periodismo y Derecho, fue condenado a muerte junto con Juan Aparicio Jiménez y Francisco Moreno Morillas. A pesar de los recursos, la confirmación de la condena por parte del capitán general y el enterado siguieron su curso. Los tres fueron fusilados el 5 de marzo de 1946 en el cementerio de San Rafael de la capital malagueña^[169]

Cuando el 17 de enero de 1947 fueron detenidos Ramiro Fuente Ochoa y Rafael Armada Ruz, tanto Granada como Málaga eran dos provincias sin dirigentes de relieve para gobernar la resistencia. En Granada, «Sevilla», que se había quedado al frente de la organización, decidió abandonar la lucha. «Tarbes», el jefe guerrillero, que había sido detenido el 13 de enero de ese año en la Estación de Fiñana cuando regresaba de inspeccionar en Almería la posibilidad de ampliar las guerrillas a esa provincia, se había convertido en confidente de la policía. Regresó a la sierra con la intención de traicionar a sus compañeros, pero éstos no creyeron su versión de la huida, y finalmente lo ejecutaron, por orden de «Sevilla», posiblemente en mayo de 1947. Su cadáver fue descubierto por la fuerza pública el 20 de octubre de ese año en una calera de Órgiva (Granada). El vacío de poder en las dos provincias andaluzas terminará cuando se ponga al frente del maquis de Granada–Málaga José Muñoz Lozano «Roberto» quien, pese a que llegó al puesto como sanción y no por su preparación militar, se reveló como el más formidable jefe de las guerrillas españolas de posguerra. Natural de Ciudad Real y dependiente de profesión, había combatido en la guerra civil y en la Resistencia francesa. Enviado por el PCE en 1944 para incorporarse al movimiento antifranquista, antes de hacerse cargo de la resistencia armada de la baja Andalucía había estado en Vizcaya, Santander y Madrid. Pero fue en Granada–Málaga donde puso de manifiesto su enorme capacidad de proselitismo y un carisma indiscutible, haciendo factible que un territorio que apenas contaba con 25 hombres alcanzara en unos meses más de 100 guerrilleros (y que además pudiera cubrir las bajas sin problema). Con el mérito adicional de que «Roberto» llevó a su apogeo a la Agrupación de Granada–Málaga cuando más dura era la represión, cuando habían desaparecido o estaban agonizantes la mayor parte de las agrupaciones

y cuando el régimen franquista estaba plenamente consolidado^[170].

Con la llegada de «Roberto» se efectuaron cambios en la organización andaluza. Al 6.º Batallón, que existía hasta entonces, se le añadió uno nuevo, el 7.º. El primero (mandado por Antonio Jurado Martín «Felipe») tenía sus bases en la parte oriental de Málaga y la occidental de Granada, con irradiaciones en el sudoeste de Jaén y el sur de Córdoba. Las bases centrales estaban situadas en las sierras de Tejeda y Almijara, y las localidades malagueñas de Nerja y Vélez–Málaga y las granadinas de Arenas del Rey, Alhama de Granada y Loja constituían los núcleos de poblaciones más importantes. El segundo (encabezado por Manuel Lozano Laguna) se movía en las sierras de Guájaras, Lújar y Las Alpujarras, en el entorno de Sierra Nevada, con centros destacados en los términos de Albuñuelas, Motril y Órgiva, afectando asimismo a las sierras almerienses de Gádor y los Filabres. En la cúpula también había un Estado Mayor (Manuel Jurado Martín «Clemente»), el grupo de enlace (José Martín García «Andrés») y un responsable de información (Francisco Sánchez Girón «Paquillo»), generalmente ubicados en la Axarquía malagueña. Por encima de todos, el jefe, «Roberto», que no modificó la estructura de los batallones, que estaban divididos en compañías y grupos, pero introdujo una disciplina militar que llevó incluso a las graduaciones: comandantes, capitanes, tenientes, sargentos y guerrilleros. El nombre cambió con los años. Llevó los nombres de 9.ª Brigada, Agrupación de Granada–Málaga y, a partir de 1948, Agrupación de Granada. Pero era conocida por la gente como «Agrupación Roberto», en homenaje a su jefe. Una importante red de enlaces y la utilización de las tácticas guerrilleras en un territorio idóneo permitieron que Málaga y Granada se situaran en el centro de las preocupaciones policiales del régimen. Por lo que respecta a la financiación de la guerrilla, «Roberto» disminuyó los atracos y potenció los secuestros, que eran más rentables y menos peligrosos. Obtuvo recompensas de hasta medio millón de pesetas. Aunque se acusó a «Roberto» de comprar el apoyo de la gente con dinero, lo cierto era que se movía en un territorio de tradición izquierdista y a sus habitantes supo transmitirles la esperanza de un cambio político. La empatía de Muñoz Lozano con sus hombres resulta indiscutible. En Málaga editaron el periódico *Unidad*^[171].

Entre el oeste de Málaga y el este de Cádiz merodeaban diversas partidas desde el final de la guerra civil. Dos líderes seguían aglutinando una parte significativa de estos hombres: Bernabé López Calle, anarquista, y Pablo Pérez Hidalgo «Manolo el Rubio», comunista. Un episodio importante lo constituyó la creación de la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur el 17 de agosto de 1945, que fue el primer intento de organizar a los guerrilleros de las diferentes ideologías, incluidos los republicanos. En una posterior reunión en agosto de 1946, los guerrilleros del Sector Sur se adhirieron a la ANFD y confirmaban a Bernabé López Calle «Fernando Abril» como jefe del maquis gaditano–malagueño. Pero las partidas de López Calle y

«Manolo el Rubio» en realidad se habían repartido el territorio (el primero en el oriente de Cádiz y el segundo entre Cádiz y Málaga) y aceptaron colaborar en caso necesario. La opinión de «Manolo el Rubio» sobre López Calle no era especialmente elogiosa: «ese hombre era débil pero muy egoísta. Si no se le nombraba jefe lo único que iba a poner serían chinitas en el camino». López Calle consiguió vertebrar una amplia red de colaboradores anarquistas en Jerez y contó con el apoyo de la CNT de Sevilla, pero las caídas masivas de abril de 1947 le obligaron a desplazarse hacia la zona de Ronda. Como ocurrió en toda Andalucía, las cuadrillas gaditanas del Campo de Gibraltar realizaron secuestros con cierta asiduidad, en el caso de López Calle con notable éxito. Por su parte, «Manolo el Rubio», que recibía órdenes del Comité Regional de Sevilla, tuvo un grave contratiempo, por cuanto uno de sus hombres, José Martínez Chicón, que había sido guardia civil durante la República, desertó y se entregó a las fuerzas de represión, convirtiéndose en confidente^[172].

La Agrupación de Levante y Aragón

En tierras levantinas y aragonesas se constituyó la agrupación más destacada del maquis, que además contaba con la particularidad de que sus integrantes procedían en su mayor parte de la Resistencia francesa. La Agrupación Guerrillera de Levante (AGL) fue, por tanto, una creación directa de los responsables comunistas en Francia y estuvo bajo el control directo de la dirección del PCE (en concreto, de Santiago Carrillo). Termómetro de las intenciones subversivas del partido en el interior, para evaluar la importancia medular de la resistencia levantino–aragonesa bastaría con inventariar algunas cifras publicadas por Fernanda Romeu Alfaro. El órgano de expresión y propaganda, *El Guerrillero*, que se editó entre 1946–1949, llegó a tirar 5000 ejemplares. Cientos de hombres aceptaron la disciplina de la organización, y en el año 1947 había 210 guerrilleros activos en la zona. Fue la única agrupación que contó con una escuela de guerrilleros, situada primero en Aguaviva y desde agosto de 1948 en los Montes Universales, y, finalmente, el territorio de su actuación, se convirtió, a partir de 1947, en «zona de guerra». Y no era una expresión retórica, lo mismo que no lo fue en las demás comarcas de resistencia frente al franquismo.

En la genealogía del maquis levantino, más allá de personajes polémicos y cuya importancia resulta de difícil valoración (Demetrio Rodríguez Cepero «Centenera», por ejemplo), aparecen dos nombres especialmente significativos: Juan Ramón Delicado González «Delicado» y Ángel Fuertes Vidoso «Antonio», conocido también como «el maestro de Agüero», ya que era maestro y natural de esa población oscense. El primero, comandante de las FFI, había sido enviado desde Francia en octubre de 1944 y, pese a la pérdida de algunos efectivos, consiguió instalarse en Mosqueruela,

en la provincia de Teruel, donde contactó con las partidas de Atanasio Serrano Rodríguez «Capitán», «Valencia» y José Borrás «Cinctorrá». El nuevo grupo se desplazaba principalmente por el Maestrazgo —Mosqueruela, Pitarque, Aguaviva (Teruel) y Morella (Castellón)—, y, a partir de octubre, además de la partida de «Zapatero», se le unieron maquis procedentes de las invasiones pirenaicas y que andaban desperdigados por esas comarcas. El notable incremento del número de maquis aconsejó dividir la partida. Daniel Ortín Ayora «Serrano», que se hizo cargo de una parte del grupo, siguió en Mosqueruela mientras que «Delicado» decidió establecerse en Pitarque, donde posiblemente entró en contacto con el grupo de José Ramiá «Petrol», que se movía en torno a Aguaviva. Por el oriente de Cuenca merodeaban Basilio Serrano Valero «Manco de la Pesquera» y Atilano Quintero Morales «Tomás». Según fuentes oficiales, los grupos podían alcanzar el número de 90 guerrilleros, la mayor parte maquis procedentes de Francia^[173].

Por su parte, «Antonio», que había sido miembro del Estado Mayor de la AGE en Francia y que entró en España en junio de 1944 en tareas de jalonamiento, había intentado reorganizar el Partido Comunista en Zaragoza, ayudado por José Ruiz Cuadrado «Ramón». Por orden del partido, se trasladó posteriormente a Valencia, desde donde sentará las bases de la resistencia levantino-aragonesa. Para esa tarea contaba con el apoyo en la zona de Teruel de Doroteo Ibáñez, que había sido enviado por el Buró Político en septiembre de 1945 en el llamado «Grupo de Guerrilleros I de Aragón». Cuando «Antonio» y «Delicado» consiguieron enlazar en marzo de 1946, empezó a perfilarse la nueva agrupación, que recibió un nuevo impulso con la llegada al mes siguiente de Valentín Galarza Santana «Andrés». Aunque procedía de Madrid, había combatido también en la Resistencia y fue enviado a Levante con un mandato para dirigir el maquis. En las conferencias del Molino del Marqués (Valencia) y de las Cuevas del Regajo (Camarena de la Sierra, Teruel) se oficializó el nacimiento de la AGL. Redactados los estatutos, estructuradas las diferentes partidas y distribuido el territorio, se eligió al jefe de la agrupación, cargo que recayó en «Andrés», que situó su puesto de mando en la ciudad de Valencia. Importante fue también la incorporación a la nueva Agrupación de Francisco Corredor Serrano «Pepito el Gafas» y de Florián García Velasco «Grande», que formaban parte de un grupo de acción en la ciudad de Valencia y que estaban llamados a representar un papel importante en la nueva organización. Lo más destacado fue la división del territorio en tres sectores, 5.º, 11.º y 17.º, bajo la responsabilidad de un jefe y la adjudicación del espacio de actuación. Los sectores se dividieron en batallones, compañías y secciones. Según Mercedes Yusta, historiadora del maquis en Aragón, en el asalto a un tren en el apeadero de la localidad turolense de Caparrates, efectuado en agosto de 1946, los guerrilleros dejaron una octavilla en la que por vez primera reivindicaban la acción en nombre de la Agrupación Guerrillera de Levante, hasta entonces ignorada

por los servicios de información franquistas^[174].

El Sector 5.º comprendía el norte de Cuenca y partes de las provincias de Guadalajara y Valencia, en concreto las comarcas de Requena y Utiel. El primer jefe fue Manuel Torres «Rodolfo», a quien sustituyó Antonio Gil «Medina». Lo integraban unos 24 hombres. El Sector 11.º ocupaba un segmento de la provincia de Valencia (Chiva, Requena y Liria), parte de la provincia de Teruel (sierra de Albarracín hasta Mora de Rubielos), y de la de Castellón (desde el límite de Teruel hasta el Segorbe), extendiéndose a la provincia de Cuenca (desde Teruel hasta Cañete y desde Valencia hasta Mottilla del Palancar) en sus límites con Valencia y Teruel, y también el Rincón de Ademuz. Estaba mandado por «Grande» y contaba con unos setenta hombres. El Sector 17.º comprendía el resto de la provincia de Teruel, la provincia de Castellón (entre Morella y la costa) y se internaba en los límites de Tarragona. La comarca guerrillera por excelencia era el Maestrazgo: naturaleza abrupta tachonada de masías y con las minas de Utrillas delineando un paisaje social potencialmente subversivo. El jefe del Sector era «Pepito el Gafas», estudiante de ingeniería antes de la guerra y que había estado preso después de ésta en Portacoeli (donde coincidió con «Grande»). También ocupaba la jefatura del Estado Mayor de la Agrupación, era responsable de la Escuela de Guerrilleros —desde enero de 1947— y artífice, junto con Luciano Mamilo Muñoz «Deseado», de *El Guerrillero*. A partir de 1947 dividieron el Sector 17.º y surgió otro nuevo, el 23.º, capitaneado por Jesús Caellas Aymerich «Carlos», y al mismo tiempo la AGL pasó a conocerse como AGLA (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón)^[175].

El elevado número de guerrilleros, que en algunas épocas superó los 250, introducía un escenario conflictivo para las fuerzas de represión. Según Tomás Cossías, miembro de la BP-S y hagiógrafo adelantado de la lucha contra el maquis, «llegó a producirse una verdadera psicosis de terror». A la formación de una guerrilla ofensiva y poderosa contribuyó el hecho de que una parte importante de los guerrilleros levantinos fueran combatientes experimentados en la guerra civil y la Resistencia francesa, además de su probada fidelidad al Partido Comunista. A diferencia de regiones como Andalucía o Extremadura, donde proliferaron los delatores, en Levante fueron un factor marginal a causa de esos militantes comunistas «franceses» que venían a jugarse la vida por el partido. Aunque poco a poco, los autóctonos llegaron a ser mayoría e incluso algunos de los más representativos resistentes no habían estado en Francia, como era el caso de «Grande» y «Pepito el Gafas». Pero la ortodoxia táctica e ideológica se mantuvo inalterable, y la composición plural de las guerrillas levantinas no impidió que los comunistas tuvieran claro desde el principio quiénes tenían la autoridad y el poder. Todo ello ocasionó importantes depuraciones, siguiendo los habituales procedimientos estalinistas. Los destinatarios de la mayor parte de las acusaciones de desviacionismo

eran los anarquistas, algunos de cuyos miembros no observaban una conducta ciertamente ejemplar. Había imputaciones graves, y el guerrillero «Ibáñez» señala en un informe que la CNT «trabajaba para la policía franquista». Los comunistas de esta agrupación, un símbolo en muchos aspectos, estaban interesados en que su lucha contra el régimen presentara unos perfiles claramente políticos, y de ahí la dureza contra los infiltrados o contra quienes derivaron hacia prácticas próximas a la delincuencia. También buscaron limitar los golpes económicos —el Buró Político enviaba de cuando en cuando dinero— y las represalias contra los franquistas, salvo en casos puntuales. Privilegiaron, por contra, los aspectos propagandísticos en sus modalidades elementales: edición de periódicos y octavillas, toma de pueblos y sabotajes en las infraestructuras de la región. La importante y numerosa resistencia levantina disponía, lógicamente, de una tupida red de enlaces y solidaridades. «Los campesinos en la guerrilla veían el brazo armado de ellos, ven al amigo, ven al que les va a ayudar a resolver sus problemas, de ahí que el campesinado se lance abiertamente al apoyo de las guerrillas», testimonia uno de los guerrilleros levantinos. La escuela guerrillera también influyó para modelar una guerrilla profesional, que representó un salto cualitativo y cuantitativo en el conjunto de la resistencia española. Pero estuvo sola en esa trinchera ofensiva, y el responsable de esa soledad fue el Partido Comunista^[176].

La práctica armada en Levante resulta difícil de inventariar, incluso de seleccionar, por el elevado número de sus acciones. Aunque a principios de 1945 las actuaciones todavía tenían un sesgo económico, entre los veranos de 1945 y 1947 se produjo un crecimiento exponencial de las mismas y se empezaron a combinar operaciones económicas con otras consideradas estrictamente guerrilleras. Proliferaron los sabotajes en líneas férreas estratégicas (Valencia–Barcelona y Valencia–Madrid), depósitos de locomotoras, arsenales militares (Godella, Valencia), puestos de la Guardia Civil (Carolinas —Alicante— o Puerto Escandón —Teruel—), centrales eléctricas (Puertomingalvo, Ladruñán, Pitarque —Teruel—) y tendidos eléctricos. Menudearon los ataques a feriantes, propietarios de masías, autoridades franquistas y, sobre todo, a recaudadores de tasas y falangistas. También efectuaban controles de carretera, mediante la detención y atraco de coches, autobuses o camiones, y realizaron numerosos asaltos a bancos. Todavía se producirá un incremento de las acciones durante 1947, el año decisivo, y en el que se potenciaron las ocupaciones de pueblos, incluso durante varios días. Los Olmos, Las Parras de Castellote, Sarrión, Palomar de Arroyos, Ladruñán y Cirugeda (Teruel), Losa del Obispo y Loriguilla (Valencia), Torás (Castellón), Canet lo Roig (Castellón) o Algarra (Cuenca) fueron algunas de las localidades tomadas. El testimonio de «Grande», recogido por Romeu Alfaro, señala que «nosotros planeábamos entrar en los máximos pueblos posibles, llegábamos al Ayuntamiento del pueblo y decíamos:

“Somos los guerrilleros de la AGL”, los pueblos en que entrábamos eran pequeños, la mayoría no tenía Guardia Civil. Dejábamos guardias en las afueras y nos concentrábamos donde vivía el alcalde. Allí dábamos los mítines y no dejábamos salir a nadie, repartíamos propaganda y gritábamos ¡Viva la República!, y luego nos marchábamos»^[177].

Al margen de la casuística derivada de la ofensiva guerrillera, una serie de episodios marcaron este trienio. En primer lugar, dos acciones de sabotaje, en julio de 1946, que tuvieron como objetivo los ferrocarriles. El día 7, un grupo de guerrilleros asaltó el tren pagador cuando estaba detenido en la estación de Caudé (Teruel), apoderándose de 750 000 pesetas, dinero que se utilizó para sentar las bases de la AGL. El 18 de julio, aniversario del golpe militar, los maquis atacaron un tren de mercancías en la Estación de Torás (Castellón), que destrozaron mediante cargas explosivas. El 26 de enero tuvo lugar la acción más mortífera y polémica en Levante. La tarde-noche de esa jornada, una numerosa partida del Sector 11.º atacó la casa-cuartel de la Guardia Civil y el café de la localidad de Losa del Obispo (Valencia). El resultado fue la muerte de la mujer y de un hijo del sargento del puesto, que resultó a su vez herido, y la muerte también de un guardia civil después de un intenso tiroteo. En el café perdieron la vida seis clientes y una docena de ellos resultaron heridos, y la sarracina se originó por un malentendido según varios testimonios coincidentes. Al entrar los guerrilleros en la cantina, los jugadores temieron que fuera la pareja de la Guardia Civil e hicieron ademán de guardar el dinero de la mesa, acción que los guerrilleros interpretaron como un intento de sacar las armas, y a partir de ahí se desencadenó la tragedia. Pero también los guerrilleros aportaron su cuota de muerte. En un combate el 13 de enero de 1947, en el asalto a un campamento guerrillero de «Fuente Olmedilla», cerca de La Pesquera (Cuenca), fueron abatidos nueve guerrilleros, y el 26 de marzo cayeron en Benagéber (Valencia) otros seis. Valentín Galarza Santana «Andrés», el jefe de la agrupación, fue detenido en Valencia en marzo de 1947, «y presumiblemente ejecutado por las fuerzas represivas»^[178].

Por lo que respecta a Aragón, era una región dividida. Mientras que Teruel formaba parte importante de la AGLA, Zaragoza (excepto la comarca de Caspe, vinculada al Sector 23.º) y, sobre todo, Huesca permanecieron al margen del proyecto guerrillero potenciado desde Toulouse por el PCE, pese a la existencia de una orografía apropiada para la resistencia y a su proximidad de la frontera francesa. Conforme a las tesis dominantes, la razón vendría dada porque Zaragoza y Huesca se consideraban simplemente como territorios de paso para avituallar al maquis levantino. Según esa interpretación, la estrategia que manejaba el Partido Comunista parecía razonable. El incremento de las guerrillas en Huesca habría multiplicado las fuerzas de represión en la zona, con el riesgo de interrumpir las comunicaciones entre Levante y Toulouse. Mantener abiertas las rutas franco-levantinas parecía más

productivo que alimentar otra agrupación cuando lo que se pretendía era utilizar la AGLA como ariete contra la dictadura. Sin embargo, Mercedes Yusta Rodrigo ha puesto de manifiesto que no es defendible la tesis de que el PCE sostuviera una guerrilla de perfil bajo por miedo a un bloqueo de las comunicaciones entre Levante y Francia, ya que las entradas de hombres y material con destino a la AGLA se hacían por Hecho, un territorio desligado de las zonas aragonesas de huidos.

Pero las provincias aragonesas ajenas a la AGLA también tuvieron su organización guerrillera. Lugar de paso cuando las invasiones pirenaicas, posteriormente surgieron en ellos grupos armados más o menos estables. Las sierras de Carbonera, Agüero, Alcubierre, Santo Domingo y Luna se constituyeron como las bases de las primeras partidas. Pero ni «Antonio» ni Doroteo Ibáñez Alconchel consiguieron aglutinar una resistencia con visos de proyectar un amplio movimiento armado. Solamente Félix Lacuei «Sos» y Mariano Navarro «Tuerto de Fuencalderas» mantuvieron una partida importante por la sierra de Luna, actuando entre las localidades zaragozanas de Sádaba, Sos del Rey Católico y Ejea de los Caballeros. Mejor suerte le cupo a Huesca, cuyo territorio albergó una pequeña resistencia que fue el corolario de las invasiones pirenaicas. El nombre más representativo de los primeros tiempos fue Joaquín Arasanz «Villacampa», dirigente de la Brigada 21.^a que había entrado en España en 1944 y a quien el partido envió de nuevo en abril de 1946 para organizar la guerrilla oscense. Llegó acompañado de Manuel Tosán, José Moreno, Manuel Cosculluela y Narciso Villellas. Entraron por Hecho y se dirigieron a la sierra de Lascuarre, donde contactaron con la partida de Valeriano González «Drole» y «Tanque». Estos dos grupos están en el nacimiento de la Agrupación Guerrillera del Alto Aragón (AGAA), creada oficialmente tras la fusión de dos pequeñas partidas en Las Almunias. Debido al insuficiente número de hombres, la agrupación se reducía al Estado Mayor («Villacampa», Cosculluela y Villellas) y a una serie de pequeñas partidas —siempre de menos de 20 hombres— que se distribuían el territorio. La AGAA, una organización de «naturaleza un tanto fantasmal», llevó a cabo algunas operaciones reseñables en las comarcas de Litera, Ribargorza y Sobrarbe, como las ejecuciones de los alcaldes de Salinas de Hoz y Arcusa, además de un transportista de Graus acusado de ser confidente de las autoridades. Lo más significativo de la guerrilla oscense, empero, fue su tendencia a privilegiar la tarea política en detrimento de las acciones armadas. Mantenía contacto con los comités comunistas de Monzón (dirigido por Joaquín Saludas) y Barbastro (Ángel Bellostas), así como en Benabarre y Boltaña. Las detenciones masivas de enlaces a partir de 1946 y el arresto de «Villacampa» en enero de 1947 situaron a la AGAA al borde de la desaparición. Una nueva dirección, encabezada por Ángel Bellostas y Emilio Vistué, enviado desde Francia, trató de activar una agrupación que se movía en los límites de la supervivencia. Sólo el empeño de militantes como

Antonio Rosel y Josefina Buil, importantes enlaces entre el partido y los hombres del monte, y la tenacidad de los escasos guerrilleros conservaron viva la presencia armada y pequeños comités políticos en la provincia de Huesca. En Aragón se publicaba *La República y Aragón Libre*^[179].

Por su parte, el PSUC intentó estructurar una resistencia rural en el suroeste de Tarragona, en las proximidades del Montsant, con el objetivo de enlazar con la AGLA. Entre sus acciones más conocidas estuvieron las ejecuciones de los responsables locales de Falange en las poblaciones de Cornudella y Reus. En poco tiempo fue desmantelada, y tres de sus miembros —Francisco Serrat Pujolar, Juan Arévalo y Segría— murieron fusilados el 25 de febrero de 1946. Otro intento de guerrilla rural bajo auspicios del PSUC se produjo a partir de enero de 1947 en la sierra de Musara, en la banda septentrional de Reus (Tarragona). Pero este foco fue eliminado por la policía como consecuencia de las caídas de marzo y abril de 1947 en Barcelona. El contacto que los reusenses tenían con la capital catalana permitió su desmantelamiento rápido^[180].

La vida cotidiana en el maquis

En contra de la mitología más divulgada y desmintiendo el rigor de una de las expresiones por las que eran conocidos —«los del monte»—, en algunos territorios los maquis pasaban la mayor parte del tiempo —sobre todo durante el invierno— en los pueblos y aldeas, repartidos individualmente o por parejas en las distintas viviendas de confianza y cambiando por precaución cada semana de domicilio. Cuando no salían de marcha, dedicaban el tiempo a charlas políticas y a enseñar a leer y escribir a los guerrilleros analfabetos y, lo más habitual, «a calentarse las uñas al brasero», en expresión de Marcelino Fernández Villanueva «Gafas». La vida en las aldeas, que era obviamente más tolerable que la del monte, encerraba, por contra, mayores peligros, tanto para los guerrilleros como para las personas que los alojaban. Cualquier delación convertía las viviendas en auténticas ratoneras, y un número importante de bajas se produjo al ser localizados los maquis en domicilios particulares. En periodos de congresos o asambleas, o cuando se intensificaban las batidas por parte de las fuerzas de represión, hacían vida en el monte.

Esta manera de enfrentar la vida cotidiana era propia de aquellas regiones o provincias con un reducido número de guerrilleros, un apoyo importante por parte de la población y, sobre todo, unas condiciones climáticas particularmente severas. Fue la forma de vida en Galicia, Asturias, León y Santander. Parece factible dormir debajo de un árbol durante la mayor parte del año en Andalucía, Extremadura o Levante e incluso pernoctar en tiendas de hule durante el invierno. Hacerlo en León

resulta impracticable. La vida en los pueblos, además, favorecía la instrucción política y el proselitismo entre los ciudadanos. El contacto con los vecinos permitía a los guerrilleros formar parte de la colectividad y no aparecer como elementos diferenciados, sobre todo para aquellos resistentes que no eran naturales de los territorios en los que se movían. Por lo general, los maquis pagaban su estancia en las aldeas, ya que la pobreza más extrema condicionaba el apoyo desinteresado por parte de los campesinos. Pero residir en los pueblos no era lo habitual, y los maquis cumplían fielmente su condición de hombres del monte.

La vida en la sierra era más incómoda, estaba atravesada de privaciones y requería servicios de guardia permanentes, además de una serie de obligaciones imprescindibles. A cambio, la montaña ofrecía una mayor seguridad porque modelaba un territorio conocido y abierto, donde no era fácil que penetraran las fuerzas de represión (que en ocasiones quemaron montes enteros para evitar que los guerrilleros pudieran esconderse). Las excelentes relaciones que mantenían con los pastores —por mutuo interés— les facilitaban tanto alimentos como información. Eran los enlaces de más confianza quienes se encargaban de conseguir la comida y subirla al monte, mediante el sistema de comprarla en distintos pueblos y diferentes abacerías para no levantar sospechas. En algunas provincias, la caza jugaba un papel importante en la alimentación de los guerrilleros, ya que hubo verdaderas plagas de liebres y conejos a causa de las dificultades que existían para moverse por las zonas montañosas. No era fácil conseguir licencia de armas ni salvoconductos para desplazarse por las sierras en busca de caza, que estaba prohibida en muchas comarcas, y los franquistas tampoco eran partidarios de subir al monte sabiendo que estaban allí los guerrilleros. Pero no era recomendable abatir animales utilizando las armas de fuego, porque las detonaciones podían atraer la atención de las brigadillas y contrapartidas. En general, se alimentaban mal, lo mismo que los campesinos con los que vivían. En Levante, algún guerrillero ha contado que se pasó años comiendo casi exclusivamente gachas de maíz y de almorta. En las marchas la alimentación era a base de comida enlatada: las latas de sardinas, verdadero icono de un tiempo de hambre, también se convirtieron en la dieta básica de los guerrilleros en los desplazamientos.

Los campamentos guerrilleros —que eran conjuntos de tiendas levantadas con toldos o mantas, con un palo en el centro— solían estar en lugares abruptos y de difícil acceso —sierra del Eje entre León y Orense, el Maestrazgo, estribaciones de Sierra Morena, Sierra Nevada, etcétera— y además alejados de carreteras o vías férreas, ya que resultaba esencial impedir la rápida movilización de las fuerzas de orden. Las brañas contiguas a las cumbres o los canchales próximos a los desfiladeros eran los parajes adecuados. En algunas zonas utilizaron las cuevas entre las rocas que, si bien tenían el lado positivo de evitarles tareas incómodas y defenderles contra las

condiciones climáticas —el gran enemigo de los guerrilleros—, se transformaban, como las viviendas de las aldeas, en verdaderas trampas si eran descubiertas. Pero al mismo tiempo, las bases guerrilleras no podían estar muy alejadas de masías, dehesas, caseríos o pequeñas aldeas, porque los maquis necesitaban puntos de apoyo para llevar a cabo tareas de información y avituallamiento. Un elemento primordial en la ubicación de los campamentos guerrilleros era el agua, indispensable para la higiene personal, el consumo y el lavado de la ropa. Tenía que haber arroyos, fuentes o ríos cerca. La tarea de ir a buscar agua era una de las más peligrosas, al igual que la de conseguir la leña, que tenía que estar muy seca (de lo contrario el humo delataba su presencia). Los paisajes desnudos de vegetación, salvo que fueran de acceso extremadamente difícil —Picos de Europa, por ejemplo—, no servían como refugio habitual. Los bosques podían ser de alta montaña o de vegetación mediterránea, pero debían permitir una operación básica entre los resistentes: ocultarse. Dormían también en chozos de carboneros, majadas de pastores, tenadas, dehesas o masías aisladas. En el monte todo resultaba complicado: «Para lavar hacíamos a veces un hoyo en el suelo, poníamos una piel de oveja y lo llenábamos de agua», según testimonio de «Rosita» a Fernanda Romeu. Aparte de que estuvieran aislados, los guerrilleros situaban los campamentos en territorios de tradición política izquierdista o donde se había desatado durante la guerra civil una fuerte represión. Resulta, a este respecto, un dato repetido que los núcleos de maquis se encontraran próximos a poblaciones mineras, de un elevado nivel de politización. Así Casayo y Ponferrada, en la zona de León–Orense; Mieres, en Asturias; Utrillas, en Teruel; Almadén, en Ciudad Real, y Peñarroya–Pueblonuevo, en Córdoba.

Los campamentos, por la propia naturaleza de la guerrilla, tenían siempre la condición de provisionales, y sólo en algunas comarcas de Levante se mantuvieron durante algún tiempo —principalmente hasta 1947, año en que se incrementó la represión— como campamentos estables. Las agrupaciones mejor organizadas también tenían habilitados campamentos de reserva, verdaderas bases de retirada para situaciones de emergencia, como después de una persecución o cuando eran descubiertos y atacados los campamentos activos. El Estado Mayor podía vivir en un campamento aparte si el grupo era muy numeroso. Las agrupaciones importantes, como eran los casos de Levante y Granada–Málaga, disponían asimismo de campamentos de paso, que utilizaban para permanecer cortos periodos de tiempo en las rutas que los guerrilleros efectuaban. Al margen de los servicios de centinela e imaginaria, la vida cotidiana en los campamentos, dominada básicamente por la monotonía, consistía en leer y discutir textos de autores comunistas, reflexionar sobre cuestiones políticas, capacitación técnica para la lucha armada y preparación de operaciones guerrilleras, que solían multiplicarse en primavera y verano. Los viejos, heridos y enfermos realizaban tareas de intendencia —cocina, lavado— mientras que

los demás desempeñaban funciones diversas. Las más importantes: guardias, conseguir comida, acarrear agua, salir a operaciones de castigo o realizar golpes económicos. Obviamente, las guardias se efectuaban tanto si los guerrilleros permanecían en el campamento como si el grueso salía para efectuar alguna operación o marcha. Las de madrugada eran especialmente importantes, porque era el momento en el que solía atacar la Guardia Civil cuando había descubierto y cercado un campamento. Los guerrilleros no debían hacer senderos hasta el campamento, que se convertían en pistas para las fuerzas de represión, y para ello era conveniente abrir varias rutas y no pisar en aquellas zonas del suelo que podían dejar huella. Abandonar un campamento sin vigilancia era una de las operaciones más peligrosas que se podían realizar, y varios muertos certificaron que era una negligencia grave. Tampoco era conveniente que hubiera perros en los campamentos (aunque algunas partidas dispusieron de sabuesos amaestrados), ya que los ladridos podían delatar la ubicación. A los perros de las fuerzas de represión, los guerrilleros los despistaban utilizando bolsas de pimienta.

Una situación intermedia se producía cuando los guerrilleros realizaban operaciones como golpes económicos o sabotajes, compra de armas, ocupación de aldeas, etcétera. En esos casos se combinaba la vida en la sierra y el llano, según el lugar en el que tuvieran que pernoctar. Las marchas, que podían durar incluso meses, tenían unas normas claramente tipificadas. Los trayectos se hacían siempre a pie, ya que los demás medios de transporte se consideraban peligrosos. La noche era el momento de la guerrilla, el periodo de actividad, pues durante ella se efectuaban las marchas y también se preparaba la comida. Durante el día, los guerrilleros debían aplastarse al terreno. Atravesar puentes era una operación peligrosa —las contrapartidas tenían servicios de apostadero— y se aconsejaba vadear arroyos y ríos. Con la nieve había que seleccionar y limitar las marchas, ya que dejaban excesivas huellas, y si era imprescindible caminaban de espaldas. Si el grupo era amplio, uno o dos guerrilleros abrían la marcha —de avanzadilla— para evitar que pudiera ser emboscada toda la partida. Estaba prohibido caminar juntos, las conversaciones entre los miembros de la partida y fumar, todos ellos aspectos que denunciaban su presencia. Utilizaban calzado de la zona, para evitar que los guardias los detectaran por las huellas. Lavarse era aconsejable, aunque no lo hacían habitualmente, y estaba prohibido utilizar jabón porque la espuma era un indicio infalible. Tampoco las colonias o perfumes, además de inhabituales, eran recomendables, y el mejor olor para la supervivencia era el que confundía a los guerrilleros con el del monte. Evitaban los caminos e incluso los senderos más conocidos y transitados. No había que abandonar restos de comida, que se enterraban para no dejar pistas. Como naturales de la zona en muchos casos, conocían perfectamente el terreno por el que se movían y además podían hacerlo durante la noche sin problemas de orientación. Pero

cuando salían de su territorio para conseguir armas o para reuniones de la agrupación, llevaban a un práctico o guía para que los condujera. Perderse en el monte para los guerrilleros tenía casi siempre resultados trágicos. Cuando en las marchas se topaban con una persona accidentalmente, la retenían hasta la noche, para poder poner tierra de por medio en caso de denuncia.

Uno de los problemas cardinales se centraba en la salud. El tipo de vida que llevaban ocasionaba que en numerosas ocasiones se produjeran heridos graves y leves entre los guerrilleros. En caso de gravedad, si las condiciones eran favorables, se recurría a algún médico de confianza para llevar al herido hasta el consultorio o para que el médico se desplazara hasta un punto de apoyo seguro. O también se amenazaba de muerte al galeno para que atendiera al herido. El 18 de julio de 1944 la partida de «Quincoces» obligó al practicante de Navalmoreajo (Toledo) a ir con el grupo para que auxiliara a uno de sus hombres que estaba herido. Hubo guerrilleros que fueron operados y permanecieron durante días o meses en sanatorios privados. En 1942 Ángel Franco «Evaristo» fue intervenido de apendicitis —una dolencia mortal para los guerrilleros que no podían ser operados— en una clínica particular de La Coruña, en la que permaneció durante veinte días. El más popular de los guerrilleros gallegos, «Foucellas», herido en una pierna como fruto de un disparo fortuito, fue intervenido en el Sanatorio Santa Lucía de La Coruña por varios traumatólogos y permaneció internado en el centro médico durante casi cinco meses. Algunos médicos colaboraron voluntariamente con la guerrilla, como el doctor Cuevas, de Torrelavega, o el asturiano Dimas Martínez. Unos fueron detenidos, otros perdieron la vida por su apoyo a la guerrilla, como el doctor Lodario Gabela Yáñez, a quien se le aplicó la «ley de fugas» en la comarca de El Bierzo en 1947. O como el doctor José Bartrina, que murió en la cárcel de Alcalá de Henares víctima de los malos tratos de la policía. En Extremadura fueron arrestados los médicos de Aldeanueva y Losar de la Vera, Emilio Durán Mediavilla y Pedro Olmos Garrido, respectivamente, por acceder a las peticiones de auxilio de los guerrilleros. Pero los consultorios médicos también se convirtieron en una trampa mortal. El 2 de diciembre de 1941 la Guardia Civil de Membrilla (Ciudad Real) mató a Pedro Parra García «Chucha», jefe de una de las partidas más importantes de la región manchega, y a uno de los hermanos Piñones —«Piñón Chico»— en la consulta del médico del pueblo, Vicente Ruiz Bellón, quien al mismo tiempo que los curaba y les daba confianza, les preparaba una celada en connivencia con la Guardia Civil. Torbado y Leguineche cuentan cómo después de ser eliminados la fuerza obligó a «viudas con maridos que habían sido fusilados de parecida manera para que limpiaran la sangre del consultorio del doctor». Parra García había participado, junto con Gómez Montejano y «Beate», en la matanza de los frailes pasionistas de Daimiel (Ciudad Real) cuando la guerra civil^[181].

Las enfermedades más habituales entre los guerrilleros eran las gripes, catarros, bronquitis y la disentería. Tanto en los campamentos como en las marchas disponían de botiquines de urgencia, compuestos básicamente de vendas, yodo y sulfamidas. Cossías escribe que «se descubrió que el uso de apósitos con resina fresca de los pinos no sólo evitaba las infecciones, sino que aceleraba el proceso de cicatrización». No obstante, un guerrillero superviviente, Francisco Rey Balbís «Moncho», nos proporciona una versión optimista de los asuntos sanitarios: «No teníamos mayores problemas de salud. Eramos jóvenes, nuestra alimentación era sana. Catarros, gripes, era lo que más había. Comprobamos que la vida en el monte, caminando, yendo de un lado a otro, en contacto siempre con la naturaleza, era muy sana». La realidad no era tan bucólica. Conforme al testimonio de José Murillo «Ríos», el guerrillero «Alegría», de Santa Eufemia, murió de congestión por vadear el río Guadalmez con el agua helada, y «Pelliquero», de Belalcázar, murió a causa de una apendicitis en la sierra de Puerto Mochuelo. Los heridos o enfermos de gravedad, si lo solicitaban, eran rematados por los propios guerrilleros para evitarles el sufrimiento o caer en manos de la Benemérita. Un médico era la petición más reiterada de «Carlos», jefe de la Agrupación de Extremadura, a los responsables comunistas instalados en Madrid^[182].

Cuestión prioritaria para los maquis era el apartado económico. Salvo en el caso de los socialistas asturianos —a quienes de cuando en cuando el partido en el exilio les facilitaba dinero—, la financiación consumía una parte sustantiva del tiempo y de las energías de sus miembros. También los exponía a peligros importantes, incluido el desprestigio de que hombres en armas tuvieran que recurrir a métodos de delincuencia común. Fue un problema que el Partido Comunista no resolvió, e incluso en ocasiones eran las propias guerrillas quienes se veían en la obligación de financiar a los aparatos políticos de las ciudades. Dependiendo de la zona, los golpes económicos se efectuaban contra bancos —en las ciudades—, establecimientos o en viviendas aisladas, como cortijos, dehesas y masías. También en ferias y mercados. Otros métodos habituales de financiación eran los secuestros y la multas que se imponían a los vecinos considerados franquistas. El secuestro como medio de conseguir recursos se utilizó asiduamente en Andalucía y Extremadura —según fuentes de la Guardia Civil, en Granada, Málaga y Cáceres se efectuaron 188, 141 y 54, respectivamente—, mientras que apenas se recurrió a él en Levante, Galicia y León. Las víctimas de asaltos y de secuestros eran personas vinculadas al franquismo o aquellos que, como los estraperlistas, aprovecharon la coyuntura para enriquecerse. En todas las zonas de maquis fueron especialmente sancionados los cobradores de arbitrios e impuestos, especialmente los pertenecientes a la Fiscalía de Tasas. Los atracos a los recaudadores estaban considerados «recuperaciones» y eran bien vistos por la población, que los detestaba.

Al margen de las necesidades diarias, las inversiones más sustantivas venían dadas por la compra de armamento, encarecido por ser de contrabando, y que procedía de Francia, Portugal y el norte de África. También lo adquirían por otros procedimientos: desarmando falangistas y somatenistas, recogiendo las armas después de los combates si se saldaban con bajas por parte de la fuerza pública, etcétera. La munición era más fácil de conseguir, ya que se la vendían los soldados (y oficiales) que estaban de permiso e incluso algún que otro miembro de las fuerzas de represión. El mayor problema residía en que muchas de las armas eran americanas o inglesas, en general de calibre diferente a las españolas, por lo que había que municionarlas adecuadamente también mediante el contrabando. Asimismo utilizaban el dinero para compensar a las familias que los alojaban, a quienes pagaban precios ligeramente superiores a los existentes en el mercado, y en algunos territorios insurgentes los guerrilleros se hacían cargo económicamente de las familias de los maquis muertos o de antifranquistas represaliados. También de sus propias familias, ya que muchos hombres del monte tenían mujer e hijos en las aldeas. Había enlaces que cobraban por la ayuda y la información, aunque no era lo habitual.

Dependiendo de las zonas, las guerrillas impusieron diferentes sistemas para administrar los recursos derivados de los golpes económicos y los secuestros. Por lo general, en las agrupaciones relevantes tenían a una persona encargada de la contabilidad, que se reflejaba en un libro. En Granada-Málaga los guerrilleros recibían una paga mensual de 500 pesetas (que era el salario de un jornalero andaluz), en el caso de que hubiera fondos. Según otro informe de las guerrillas malagueñas, que recoge Romero Navas, las recaudaciones íntegras de una partida las recibía la dirección, que efectuaba el siguiente reparto: «el 30 por ciento para el Estado Mayor, el 20 por ciento para el fondo de la compañía, gastos generales, y el 50 por ciento para repartir entre todos los componentes de la guerrilla en partes iguales». Fuentes de la Guardia Civil sostienen que en Extremadura los maquis se rebelaron porque no querían entregar a los jefes una parte de la recaudación. «Francés» distribuía el 15 por ciento entre sus hombres y «Chaquetalarga», el 1 por ciento. Este último prometió repartir 300 pesetas a cada guerrillero por cada golpe económico que reportara cantidades superiores a las 30 000 pesetas. En el Campo de Gibraltar cada guerrillero contribuía con 200 pesetas mensuales a los gastos de organización, y el resto lo administraban particularmente. En la provincia de León y el oriente gallego las direcciones guerrilleras exigían el 30 por ciento de las recaudaciones. Aunque, en general, en cuestiones de dinero las disposiciones oficiales y la realidad apenas tenían que ver, ya que el objetivo era la supervivencia y casi nadie estaba en el monte para hacer fortuna. De hecho, pese a los rumores y difamaciones interesados, nadie ha aportado siquiera indicios de guerrilleros que se enriquecieran en la resistencia antifranquista. La austeridad era uno de los rasgos característicos de los hombres de

la sierra^[183].

Los golpes económicos siempre se efectuaban al atardecer, en las horas del crepúsculo, y de ese modo disponer de la noche para huir y regresar a las bases. Pese a las numerosas bajas que se produjeron en la realización de estos golpes, los preparaban minuciosamente. Los enlaces se encargaban de suministrar la información de los vecinos a quienes había que atracar, tanto por su ideología como por su capacidad económica, y se alertaba de sus movimientos, posibles armas que tenían en su poder, número de miembros de la unidad familiar, etcétera. El armamento utilizado en los golpes económicos —y en el resto de las actividades guerrilleras— lo componían básicamente una pistola, un fusil y, excepcionalmente, bombas de mano fabricadas por ellos con dinamita robada en canteras y minas o alguna granada. La modalidad de lucha y la forma de conseguir las armas favorecieron la existencia de un arsenal variado: metralletas Stern o Thomson, carabinas, escopetas, rifles, naranjeros, mosquetones, tercerolas, fusiles máuser y pistolas de todo tipo, sobre todo Astra y Lúger (la favorita de Francisco Sabaté Llopart). El fusil ametrallador constituía un signo de «opulencia armada», y sólo las partidas más importantes contaban con uno. El armamento más moderno y sofisticado lo llevaban los guerrilleros levantinos. Además de las compras a contrabandistas, el grueso de las armas procedía de la guerra civil y de la Resistencia francesa. Los enlaces quemados solían echarse al monte y sólo llevaban armas blancas —como ocurrió en Extremadura— o escopetas, hasta que lograban dotarse de armamento de mejor calidad y operatividad, cosa nada fácil. Según el teniente coronel Eduardo Munilla Pérez, que utiliza fuentes oficiales, las fuerzas de orden capturaron 24 ametralladoras y fusiles ametralladores y 516 metralletas. Casi todos los guerrilleros portaban granadas de mano y explosivos, fundamentales para abrirse paso cuando eran cercados, lo que sucedía con cierta frecuencia. Pocas partidas, e incluso agrupaciones, disponían de una emisora de radio, e incluso carecían de complementos tan elementales como unos prismáticos.

La información y los códigos de comunicación resultaban vitales para la supervivencia. En general, se enteraban de lo que ocurría en el mundo y España a través de las informaciones de Radio Pirenaica, que además impartía consignas a los guerrilleros (aunque el partido enviaba a las agrupaciones emisarios para informar de las directrices correspondientes o establecer modificaciones tácticas, así como para hacerse cargo de las guerrillas). En todas las agrupaciones se editó prensa guerrillera, que en general llevaba el nombre de *El Guerrillero*. Otras cabeceras repetidas en los periódicos del maquis fueron *Al ataque*, *Combate*, *Unidad*, *Lucha* o *El Combatiente*, y en las guerrillas importantes también se recibía *Mundo Obrero*. Imprentas clandestinas y máquinas de escribir servían para componer periódicos y octavillas tirados por los métodos del ciclostil y la multicopia. Lógicamente, la propaganda

dominaba sobre la información o la reflexión, y toda la prensa guerrillera puede considerarse como literatura panfletaria, de agitación política. Pasando de lo general a lo concreto, también los guerrilleros disponían de su propio código de signos en la lucha por la supervivencia cotidiana. Para reconocerse en la noche o cuando atravesaban algún paso obligado peligroso —un puente, por ejemplo—, los guerrilleros imitaban el sonido del búho o del cárabo, lo mismo que cuando se acercaban a un campamento. Cuando no pertenecían a una base y desconocían la contraseña, golpeaban dos piedras para mostrar que no llevaban las armas en la mano y en disposición de ser usadas. Lógicamente, también las fuerzas de represión conocían estos códigos y los empleaban a veces para eliminar a los maquis.

En cuanto a la propaganda directa, tarea prioritaria, las operaciones más repetidas y características consistían en la ocupación de pueblos, que normalmente era de unas horas pero podía durar hasta dos días en casos excepcionales. La metodología se repetía en todos los territorios de maquis. Una vez contrastada la información de los enlaces, los resistentes llegaban a un pueblo y reunían a los vecinos en la plaza, donde se pronunciaba un mitin en el que formulaban sus objetivos políticos, repartían propaganda y daban los vivas de rigor a la República y los muera a Franco y a su régimen. Una parte de los guerrilleros cubrían las entradas al pueblo y se impedía la salida de los vecinos, para evitar que denunciaran lo que sucedía en el cuartel de la Guardia Civil más próximo. También requisaban las armas que hubiera en la aldea, generalmente en manos del alcalde, el cura —los párrocos solían disponer de pistola en la mayoría de los pueblos—, falangistas y miembros del somatén local. Pero las relaciones con los pueblos no siempre guardaban semejantes formalismos. Las diferentes agrupaciones tenían aldeas de confianza, en las que contaban con el apoyo de todo el vecindario y realizaban congresos o reuniones. Aguaviva (Teruel) era conocido como «la pequeña Rusia», Lavadores (Pontevedra) como la «Rusia chiquita» y a Ferradillo (León) lo bautizaron como el «pequeño Moscú». En esos núcleos de población que consideraban de confianza, los maquis se relacionaban y ayudaban a los vecinos, y celebraban con ellos los días señalados, como Navidades, fiestas locales, bodas o fechas simbólicas como el 14 de abril. Precisamente, en este tipo de episodios cotidianos perdieron la vida guerrilleros importantes. Como vimos anteriormente, «Machado», uno de los jefes más importantes del maquis santanderino, cayó abatido en un tiroteo cuando festejaba con unos vecinos la caída de Berlín. El guerrillero asturiano Adolfo Quintana Castañón, apasionado de las verbenas y bailes populares, murió en un enfrentamiento armado después de haber estado toda la noche bailando en las fiestas de Santullano. En ocasiones, los guerrilleros marchaban de los pueblos ocupados cantando el *Himno guerrillero*, una de cuyas estrofas decía: «Por llanuras y montañas, / guerrilleros libres van, / los mejores luchadores / del campo y de la ciudad».

En el horizonte de la vida cotidiana, la muerte era una idea omnipresente. Las enfermedades, los enfrentamientos con las fuerzas de represión y la peligrosidad de los golpes económicos situaban su vida en un escenario altamente conflictivo. En los guerrilleros se entremezclaban la audacia, la valentía y el fatalismo. Victorio Vicuña dice, refiriéndose a «Machado»: «Recuerdo que decía que era valiente porque sabía que iban a matarle y lo mismo le daba hoy que mañana». Desde luego, el monte no era el lugar más apropiado para los cobardes. En todos los testimonios de los maquis supervivientes se refleja que tenían mayor aprensión a ser heridos o arrestados que a la muerte misma. Las detenciones eran especialmente temidas, ya que al no reconocerles la condición de soldados su vida dependía exclusivamente de sus captores. Sobre todo a partir de 1947 sabían que ser detenidos equivalía a torturas de todo tipo y una muerte casi segura, además de verse abocados a denunciar a compañeros y enlaces. En consecuencia, numerosos guerrilleros prefirieron suicidarse antes de ser capturados por la Guardia Civil o llevaron a cabo combates suicidas porque sabían que el fin sería el mismo. El 23 de enero de 1941 un huido llamado Santiago Rodríguez Morales, de San Martín de Montalbán (Toledo), se ahorcó en la cárcel de Navahermosa. En 1943, tres emboscados eligieron suicidarse en Taladrid (Badajoz) antes que convertirse en prisioneros de las fuerzas que los atacaban. Algunos de los grupos de acción que actuaron en la resistencia urbana de Barcelona llevaban cianuro para suicidarse ante la posibilidad de ser detenidos por la policía. En una carta, recogida por Téllez Solá, el libertario Facerías protestaba porque Jorge Oset y Pedro González se habían dejado apresar por los policías después de un duro combate: «En honor a la verdad y aún con el criterio de que el último cartucho tenían que haberlo para sí mismos, no puedo por menos que aceptar y reconocer su valentía». La misma actitud manifestaban los guerrilleros cuando una enfermedad o herida grave los dejaba inútiles para el monte. En 1942 el leonés José Dablanca Expósito se hirió gravemente al caer desde un farallón y él mismo pidió a sus compañeros que lo remataran. Según el «Código de disciplina del guerrillero» del Ejército de Centro, «ningún guerrillero puede caer prisionero en manos del enemigo, los guerrilleros se esforzarán por todos los medios a su alcance para que esto no suceda».

Los guerrilleros no llevaban una indumentaria específica aunque en determinadas épocas y zonas (Galicia y Málaga–Granada, en los últimos años) estuvieron uniformados o barajaron proyectos de usar una vestimenta de acuerdo con criterios estéticos tradicionales de los ejércitos. En Málaga, por ejemplo, vestían cazadora, camisa caqui, boina azul, pantalón de pana marrón, botas o abarcas, además de un brazalete tricolor y las siglas ENG (Ejército Nacional Guerrillero). También en Andalucía, y según Azuaga Rico, no se dejaban patillas para evitar que los relacionaran con los bandoleros decimonónicos, y cuando tomaban los pueblos

trataban de ponerse las mejores ropas y presentarse aseados. En Levante llevaban brazaletes con los colores de la bandera republicana y las iniciales AGL (Agrupación Guerrillera de Levante) en la parte superior y AN (Alianza Nacional) en la inferior. El pantalón de pana, la camisa caqui y la boina eran complementos habituales de la indumentaria guerrillera; los más afortunados disponían de chaquetones de cuero. En general, los del monte vestían igual que las personas de las comarcas en las que actuaban, ya que el objetivo prioritario consistía en no llamar la atención. Tampoco en la guerrilla, salvo en las épocas «militaristas» o en zonas concretas, existieron grados y empleos a imitación de los ejércitos regulares, sustituidos por las jefaturas de agrupación, batallón, compañía o la denominación correspondiente a cada territorio guerrillero. Los jefes de agrupación eran elegidos democráticamente por sus compañeros o designados por los dirigentes de Toulouse, como ocurría en la AGLA. Por lo general, en la decisión se entremezclaba el ascendiente sobre los compañeros y la confianza de los jefes del exilio francés. Los carnés guerrilleros tampoco eran habituales, por el peligro que conllevaban. A José Castro Veiga «Piloto», el último maquis abatido por las fuerzas de represión, le encontraron entre sus pertenencias una cédula de guerrillero en la que figuraba como «General Jefe de Estado Mayor» y llevaba una firma apócrifa de Enrique Lister^[184].

La extracción social y la condición laboral de los guerrilleros correspondían, salvo excepciones, a los estratos más populares de la sociedad. Dos estudios, aunque de dudosa fiabilidad científica, pueden aproximarnos a una sociología del maquis: uno de Ruiz Ayúcar sobre el Ejército Guerrillero de la Zona Centro y otro del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) que conocemos a través del estudio de Fernanda Romeu sobre Levante. Según el primero, de un total de 120 guerrilleros había 73 jornaleros, 14 artesanos, 10 pastores, 13 de profesión desconocida, 6 sus labores, 3 titulados de grado medio (dos maestros y un practicante), 1 estudiante y ningún universitario. Los tres titulados de grado medio —«Mario de Rosa», «Robert» y Agustín Fraile Ballesteros «Santiago», al igual que el estudiante «René»— alcanzaron puestos de responsabilidad. Por edades, predominaban los comprendidos entre los 22 y los 40 años, el 80 por ciento del total. Flubo dos menores de 22 años, que no habían participado en la guerra: Feliciano Muñoz Basilio «Aviso» (de Garganta de la Olla, Cáceres), de 17 años, de la partida de «Francés», que se entregó a la muerte de éste, y Emilio Barroso Escudero (Bohonal de Ibor), de 17 años, que se presentó a la Guardia Civil en enero de 1946. En edades provecas, destacaron Eugenio Álvarez Blázquez «Jopo», de 60 años, de Navatasierra (Cáceres); Valentín García Real «Gasolina», 57 años, de Serradilla (Cáceres); «Quijote», 56 años, de Aldeanueva de San Bartolomé, hermano de «Quincoces»; Amancio Nieto «Abuelo», 53 años, cocinero en la partida de «Francés», que acabó detenido. Abundaban los miembros de una misma familia y

también del mismo pueblo. Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo) aportó 22 guerrilleros, de los que 13 estaban con «Quincoces», natural del pueblo. De Bohonal de Ibor (Cáceres) había 7. Por lo que se refiere a la AGL, las profesiones dominantes eran las siguientes: 67 labradores, 62 jornaleros, 20 mineros, 6 albañiles, 6 pastores y 5 carpinteros, que conforman el 67,74 por ciento del total de la agrupación. En cuanto a edades, el 37,5 por ciento tenía entre 16 y 25 años, y el 29,3 por ciento tenía entre 26 y 35 años. El grupo de edad dominante contaba entre 21 y 25 años. También conocemos la composición profesional de 356 guerrilleros gallegos, elaborada por Bernardo Máiz. Como corresponde a la estructura económica de Galicia, predominaban los labradores (106), obreros (61), artesanos (60) y pescadores–marineros (43). Llama la atención el importante número de estudiantes (14).

Los apodos eran obligatorios en la resistencia por cuestiones de seguridad. El nombre estaba relacionado con el que tenían en sus pueblos (en el medio rural era habitual que todas las familias fueran conocidas con algún sobrenombre). Cuando los maquis procedían de otras provincias, recibían como apodo el gentilicio correspondiente. También los atributos o defectos físicos, los oficios no habituales y la edad marcaban el nombre de los maquis, y proliferaban los «abuelos», «chavales», «practicantes», «zapateros», «rubios» y «mancos». En el norte, algunos maquis formaron su alias con las sílabas iniciales de sus nombres y apellidos, como «Marrofer» (Marcelino Rodríguez Fernández) y «Feria» (Baldomero Fernández Ladreda). Un guerrillero tan pagado de sí mismo como José Mata se autotituló «Tamayo» (Yo MaTa, al revés). También se utilizaron alias de héroes caídos en la lucha contra Franco (Cristino, Vías, Vitini) o apellidos de líderes representativos (Durruti, Lenin, Carrillo). En una guerrilla dominada por los comunistas, el nombre del personaje de la época republicana más utilizado fue el de Durruti, homenaje al legendario anarquista muerto en el frente de Madrid. Incluso Teresa Pía, conocida también como «Teresona» y el «maquis hermafrodita», reivindicó el nombre del libertario leonés. Pero si existió un alias repetido fue el de «Asturiano» y «Asturias». No hubo ningún territorio de maquis que no tuviera uno o varios asturianos. Revolucionarios solitarios durante la revuelta de octubre de 1934, y buscados con especial ahínco por los represores a partir de 1936, los asturianos — fundamentalmente los mineros— evidenciaron que el mito de su cultura insurreccional no era una creación literaria.

El mundo afectivo de los maquis, al margen de las dificultades derivadas de un contexto excepcional, se desarrollaba siguiendo los esquemas habituales de las comarcas en las que vivían, sobre todo por parte de los guerrilleros autóctonos que habían sido previamente fugitivos y no procedían del maquis francés. Para quienes pasaban una parte importante del tiempo en las aldeas, la vida amorosa se diferenciaba poco de la del resto de los vecinos. Tenían relaciones estables con sus

mujeres o compañeras y asistían a los bailes y fiestas de los pueblos (abundan los testimonios de fiestas patronales en las que los guardias comían en una habitación de la casa y los guerrilleros en la otra). Pero lo habitual era la vida en el monte, sobre todo cuando se desencadenó la represión a partir de 1947, y entonces todo se complicó extraordinariamente. Pese al puritanismo verbal, la mojigatería incluso, de los supervivientes —el sexo está considerado como un tabú en memorias y testimonios—, la sexualidad era un factor principal en la vida cotidiana de hombres en plenitud física. Máxime teniendo en cuenta que las relaciones sexuales con las enlaces, incluidas las que estaban en el monte, estaban terminantemente prohibidas en algunas agrupaciones. Como lo estaba tener relaciones con las hijas —menos aún con las esposas— de los puntos de apoyo. El cordobés Juan Castro «Boy» fue ejecutado en 1943 por «Los Jubiles» porque mantenía relaciones sexuales con la mujer del casero cuya vivienda utilizaban como punto de apoyo. No les parecía lógico pagar de esa manera a una persona que arriesgaba su vida para protegerlos. En el universo mental de la época, acostarse con la mujer de quien dependía tu vida resultaba excesivo hasta para unos hombres que llevaban una existencia parecida a la de las alimañas. «Te diré que una de las cosas más duras de la guerrilla, era el problema sexual, porque en los seis años que estábamos en guerrillas, en general no hicimos acto sexual en ningún momento. Por casualidad alguna vez, pero en general no era así. Fíjate si la cosa estaba rígida en esto, que perdimos en una buena ocasión un buen punto de apoyo, porque la hija de éste se enamoró de un guerrillero y como el guerrillero, las órdenes que tenía y que había en los estatutos prohibía tener relaciones con mujeres, aquella mujer por despecho se echó de novio a un guardia civil y así perdimos el punto de apoyo. Yo planteé en una reunión que esto era absurdo y que si una mujer se enamora de un guerrillero, podía tener relaciones con aquél», ha explicado el guerrillero Florián García «Grande»^[185].

«Moncho» defendía que «nuestra vida sexual, aparte de las muy largas abstinencias, era con pareja conocida, de confianza en todos los sentidos». Los testimonios de varios guerrilleros avalan la afirmación. El conquense Basilio Serrano Valero «Manco de la Pesquera», que se movía cerca de su pueblo, se reunía periódicamente con su mujer, con la que tuvo dos hijos mientras permaneció en el monte. En Aguaviva, José Ramiá «Petrol» bajaba de manera regular a pasar las noches con su esposa en la casa familiar, al igual que José Mir «Cona». Un número importante de guerrilleros, sobre todo aquéllos con un cierto poder en las partidas, tuvieron una compañera estable e incluso la subieron con ellos al monte: «Chaquetalarga», «Miguelete», Girón, etcétera. Timoteo Rodríguez Moreno «Jabato» no sólo tuvo pareja estable en la sierra, Casimira Álvarez Felipe «Jopa», sino que tuvieron un hijo y su esposa, no huida, estaba al tanto de la relación. Otros guerrilleros tenían pareja en el llano, como Aladino Suárez, que tuvo un hijo con su

compañera sentimental, Argentina Ordiz, y al que los responsables del juzgado de Sotrondio, según el relato de Nicanor Rozada, se negaron a inscribir en el registro. Enterado el guerrillero de lo sucedido, bajó una noche al juzgado, registró a su hijo, firmó y dejó escrita la siguiente leyenda: «¡Ay de aquél que no respete este legal asiento de mi hijo!». También los guerrilleros que actuaban en solitario o se escondieron después de estar en el monte buscaron compañeras estables. Fue el caso de «Piloto» y Ramona Curto Candal «Mirelle», Luis Trigo Chao «Guardarríos» y Antonia Díaz Pérez o Pablo Pérez Hidalgo y Ana Trujillo Herrera «Oveja». Bernabé Caballero «Cojo de la Porrada», importante jefe de guerrilla, y Antonio Guijo Redondo «Terrones» murieron en un enfrentamiento con una patrulla de la Guardia Civil en un prostíbulo de Fregenal de la Sierra (Badajoz), regentado por Luisa Ramos «Cortada», donde el maquis tenía un importante punto de apoyo. La resistencia de estos dos guerrilleros permitió a los demás salir por una claraboya. Es posible que fijar el apoyo en una casa de citas no fuera para solventar la «sexualidad de urgencia», sino por motivos de seguridad. El 20 de octubre de 1948 la Guardia Civil aplicó la «ley de fugas» a José García Ruiz «Patagallina» cuando salía de un cabaré de Algeciras, mientras que su compañero Francisco Guerrero Ruiz «Contreras» salvó la vida de momento porque se comprometió a convertirse en confidente. Pero como las revelaciones que hizo no convencieron a los guardias civiles, también le aplicaron la «ley de fugas»^[186].

Si las relaciones heterosexuales parecían orilladas —al menos, en teoría— de la vida de los maquis, las prácticas homosexuales, derivación que parecería lógica en el marco de una resistencia integrada exclusivamente por hombres, entran directamente en el ámbito de los tabúes. Los partidos comunistas, con una moral muy estricta en lo tocante a las relaciones sexuales, fueron tradicionalmente reticentes con los sodomitas y consideraban la homosexualidad como una desviación, agravada en el caso de la resistencia porque rompía con la imagen heroica y varonil de los guerrilleros. «Moncho» dice que «en seis meses de guerrilla no supe de prácticas homosexuales». En Málaga, existe la constatación de un guerrillero «homosexual que fue censurado cuando se supo que quiso relacionarse con otro guerrillero», según Azuaga Rico. Al igual que la sociedad de la que formaban parte, los maquis aceptaban la homofobia como algo normal. También es posible que la sexualidad no estuviera tan encorsetada como conocemos a través de testimonios y ordenanzas. Pese al ascetismo sexual, una de las condenas más unánimes de los historiadores franquistas (y el de algún epígono actual) se concreta y fija en los aspectos relativos al sexo. Sus textos sobre el maquis están atravesados de barraganas, cornudos y violadores compulsivos. Pero tampoco los comunistas se quedaban a la zaga. Un informe del PCE se dedica a calificar de «inmoral» a Isidro Serrano, señalando que se ha acostado con la mujer de su hijo, el guerrillero Francisco Serrano. Existen indicios

de que fue asesinado por los maquis ortodoxos, que utilizaron su «inmoralidad» como pretexto en la campaña de depuraciones en los últimos años de la resistencia levantina^[187].

Los enlaces: los otros guerrilleros

Si los guerrilleros antifranquistas se convirtieron en los olvidados de nuestra memoria civil a partir de reiterados análisis antihistóricos, los enlaces que coadyuvaron a esa resistencia se transformaron directamente en los seres invisibles de esa historia. Los maquis, que expusieron sus vidas en una lucha desigual, podían defenderse con las armas en la mano: frente a la brutalidad legalizada de la dictadura oponían la violencia revolucionaria de una legitimidad heredada de la República. Los enlaces, guerrilleros del llano, el eslabón último de la cadena represiva, se encontraban indefensos ante las embestidas de los aparatos coactivos del franquismo. Unos 20 000 enlaces fueron detenidos, sufrieron cárcel o murieron en la lucha contra la dictadura. Un número cuatro o cinco veces mayor participó en las redes de apoyo a la insurgencia.

La Organización del Llano era el elemento cardinal para la supervivencia de los maquis. Cuando este apoyo flaqueaba o desaparecía, los guerrilleros eran automáticamente aniquilados. Lo comprendieron tanto los huidos, que se apoyaban en amigos y familiares, como los guerrilleros, que alimentaron vigorosas redes de enlaces que recibieron, conforme al territorio de actuación, diferentes nombres: Comité del Llano, Milicias Pasivas o Servicio de Información Republicano (SIR). Operaban en las ciudades y, sobre todo, en pueblos y aldeas. Los enlaces, que eran los ojos y los oídos de los guerrilleros, informaban de los movimientos de las fuerzas represivas y los puntos en los que situaban los apostaderos (puentes, encrucijadas de caminos, un cortijo); transmitían a los de la sierra las directrices de las organizaciones políticas residenciadas en las ciudades; investigaban la ubicación y la naturaleza de los objetivos de los sabotajes guerrilleros: polvorines, cuarteles de la Benemérita, líneas telefónicas, horario de trenes...; conseguían la filiación de alcaldes, falangistas, somatenes y represores destacados; eran los elementos indispensables para la realización de los golpes económicos. Además, se encargaban de comprar comida, medicinas, vestidos y, en ocasiones, armamento.

En un principio, durante la fase de los huidos, la función de enlace correspondía principalmente a familiares, amigos y vecinos. Aunque eran represaliados sistemáticamente, las formas de castigo podían considerarse tolerables en el marco del ambiente represivo de la época. Detenidos periódicamente y apalizados en los cuartelillos, cuando el huido al que supuesta o realmente apoyaban adquiría renombre

los familiares —tanto hombres como mujeres— terminaban siendo desterrados con el fin de interrumpir esa ayuda. Los ejemplos de los familiares David Fuentes Álvarez «Velasco» y Benigno Andrade García «Foucellas» fueron algunos de los más representativos. Una variante particularmente sádica se producía cuando las fuerzas de represión localizaban a un huído en una cueva o casa. Requerían entonces la presencia de un familiar, que era obligado a abrir la marcha. Al huído se le presentaban entonces dos opciones extremas: defenderse, con el riesgo de matar a un pariente, o entregarse. La esposa de Jesús Pérez González, enlace de Plasencia, cercado en una casa y tiroteado, fue obligada a entrar la primera en la vivienda para comprobar si el cónyuge seguía vivo o había muerto, «encontrándose el cadáver de su marido en la cuadra en posición decúbito supino», según Chaves Palacios. Esta primera represión contra los enlaces no ocasionó muchas víctimas, pero motivó que un número importante de familiares, para evitar las continuas visitas y citaciones de la Guardia Civil, huyeran también al monte. Razón por la cual en el maquis coincidieron a menudo miembros de una misma familia y hasta familias enteras, incluidas las mujeres.

Cuando los fugitivos fueron organizándose, desplazaron el apoyo desde la familia a una red organizada de enlaces, entre la que se delineó un verdadero universo ideológico, profesional y social. Hemos visto cómo algunos curas y médicos colaboraron con la resistencia antifranquista. Incluso también lo hizo algún terrateniente. En Extremadura, Manuel Naranjo Moreno, importante propietario de Granja de Torrehermosa, proporcionó dinero, alimentos, armas y municiones a la partida de «Bellota» a través de un teniente de la Guardia Civil de Azuaga. También elementos pertenecientes a las fuerzas de represión, sobre todo soldados (que habitualmente vendían munición a los del monte y en ocasiones desertaban para incorporarse al maquis). El guerrillero José Murillo, por ejemplo, recuerda a un comandante y a un teniente como colaboradores, y un número importante de los supervivientes identifican a miembros de las fuerzas de orden que les apoyaron en mayor o menor grado. En 1937, los huidos de La Zarza y Perrunal eran avisados con antelación de las batidas en la sierra por un cabo de la Benemérita local, finalmente detenido. Todavía en 1950, fue arrestado y expulsado del instituto armado el número Agustín Muñoz Jiménez, que se había unido a una de las partidas que se movía en torno a Medina–Sidonia (Cádiz). En 1949 fueron detenidos dos jueces de paz, el de Escairón (Lugo) y el de Mosqueruela (Teruel). El primero, por no haber dado parte de que había sido atacado por los maquis y el segundo, por sus relaciones con los hombres del monte. También fue arrestado el alcalde de Calanda, Julián Borraz, porque había esperado las 24 horas exigidas por los guerrilleros para comunicar a las fuerzas de orden que el pueblo había sido atacado. «Teníamos muchos enlaces que, a veces, para no despertar sospechas, eran niños que iban a la escuela, algún clérigo y

hasta recuerdo un guardia civil que estaba identificado con nuestra lucha», manifiesta «Moncho». Eran, empero, una excepción. El grueso de los apoyos más fieles lo integraba gente de extracción humilde y fuertemente vinculada a las ideologías antifranquistas, sobre todo en las comarcas mineras o de irradiación de las mismas. También se produjo el caso de personas que, por su condición social, parecían destinadas a participar como auxiliares de los maquis —pastores, jornaleros, criados— y que, sin embargo, siguieron como fieles aliados y confidentes de sus amos y de las fuerzas de represión. Como miembros de una sociedad tradicional y prepolítica, optaron —como señala Yusta Rodrigo— por las «lealtades primordiales» en detrimento de la fidelidad de clase. De todos modos, teniendo en cuenta las tasas de analfabetismo de la época aparece como excepcional el nivel de penetración ideológica logrado por los guerrilleros en los núcleos rurales. Aunque fuera gracias a una «ideología de carbonero»^[188].

Algunos ciudadanos participaron como enlaces a causa de las arbitrariedades cometidas contra ellos por las autoridades franquistas, los simpatizantes del régimen y los falangistas. Las brutalidades de estos últimos «inciden en favor del guerrillero que con frecuencia actúa no sólo como hipotético restaurador de la legalidad republicana, sino también como auténtico mantenedor de la justicia popular», según Valentina Fernández Vargas. En efecto, para los habitantes de pueblos y aldeas el guerrillero era quien recomponía, ideologías al margen, el equilibrio en el mundo campesino y quien ponía fin al monopolio franquista de la violencia. Los guerrilleros encarnaban la sed de justicia, pero también el deseo de venganza. Parafraseando a Barthes, podemos decir que el maquis «escenifica para la gente un concepto puramente moral: la justicia». Las muertes irregulares de vecinos por el único delito de unas ideas diferentes y la requisita de bienes de las personas ejecutadas rompían los esquemas tradicionales de una sociedad cerrada, casi inmóvil. En ese contexto, los represaliados se pasaban automáticamente al bando de los guerrilleros si conseguían dominar el miedo. Pero también lo hacían en algunos casos quienes habían sido solamente testigos de los atropellos y no estaban dispuestos a dejarse administrar por normas ajenas a la comunidad. Los familiares de las víctimas de la represión constituyeron otro importante segmento de la red de apoyos: padres y madres cuyos hijos habían sido ejecutados, viudas de republicanos, familiares de los presos políticos. Las redes familiares y vecinales, que venían funcionando en el medio rural desde hacía siglos, se activaron con los hombres de la sierra. Incluso no fue excepcional el caso de franquistas que ayudaron a los del monte a causa de esa solidaridad derivada de las tradiciones. No todos se decidieron por el paso adelante. Era muy difícil superar un miedo interiorizado, y hubo muchos republicanos y gentes de izquierda que concentraron sus esfuerzos en olvidar y en aferrarse a la vida con dignidad.

Por encima de las ideologías, la familia o los lazos de vecindad, en los pueblos también funcionó el factor humano. Muchos enlaces explican que no entendían la lucha de los hombres del monte, pero que les producían lástima y los apoyaban proporcionándoles comida y no denunciando su presencia. La expresión «vivían como animales» formula perfectamente la relación, más personal que política, que se establecía entre algunos ciudadanos sensibles y los perseguidos del franquismo. También hubo un número importante de apoyos que pueden ser catalogados como «enlaces por obligación». En las pequeñas aldeas situadas en parajes abruptos y alejadas de los núcleos de población importantes, donde los maquis camparon a sus anchas durante años, formar parte de las redes de enlaces resultaba forzoso: la autoridad la detentaban los guerrilleros, al igual que los medios de coacción. Y fue en estos territorios de beligerancia obligada donde se vivió como un drama personal y familiar el dilema entre apoyar a los maquis o denunciarlos a la Guardia Civil. En ocasiones, las autoridades franquistas penalizaban a todos los vecinos de los pueblos atacados por el maquis. La tensión derivada de esa disyuntiva provocó que muchos campesinos abandonaron sus tierras o aparcerías. Hombres pragmáticos que no entendían de teorizaciones eran incapaces de adoptar una decisión que les parecía ajena pero que reportaba frecuentemente secuelas dramáticas. Para quienes eran militantes de izquierda o asumían la lucha contra el franquismo, el precio a pagar era terrible e inevitable. Para aquellos que pretendían exclusivamente sobrevivir, el coste de estar entre dos fuegos les resultó insoportable. Porque ser enlaces no era gratis. Las palizas en los puestos de la Guardia Civil, las detenciones arbitrarias y endémicas o la muerte eran moneda corriente. El comportamiento despótico de muchos guardias civiles y miembros de las contrapartidas favoreció el apoyo al maquis y documentos oficiales, incluso de la propia Guardia Civil, confirman que en los pueblos los vecinos temían más a las fuerzas de orden que a los huidos. También se dio el caso de enlaces que colaboraron con la resistencia para efectuar ajustes de cuentas personales, que nada tenían que ver con el antifranquismo. Denunciar a un vecino con el que se tenía algún contencioso como chivato o confidente de la Guardia Civil podía acarrearle la muerte a manos de los guerrilleros.

Los «puntos de apoyo» y las «estafetas de tierra» o «buzones» eran los procedimientos más habituales mediante los cuales los enlaces auxiliaban a la guerrilla. Los primeros eran casas de confianza que estaban a disposición de los guerrilleros, y en muchos casos habilitadas al efecto con dobles techos o paredes falsas, pozos y otros escondites que permitían eludir los periódicos registros de las fuerzas de represión. Muchos de estos puntos de apoyo fueron descubiertos, y entonces la muerte de los inquilinos, incluidos los propietarios, era lo habitual. Las «estafetas», por su parte, eran lugares señalados previamente —una hendidura en las rocas, un hueco en los árboles, una piedra— que guerrilleros y enlaces utilizaban para

intercambiar mensajes que solían dejar metidos en botellas, latas u otros recipientes para evitar su deterioro. Estas estafetas de seguridad estaban aproximadamente a media hora de camino de las bases guerrilleras, y era obligatorio que los maquis que regresaban al campamento revisaran los avisos ya que el campamento podía haber sido asaltado. Los mensajes estaban escritos a veces en tinta simpática. También en las estafetas se dejaban armas, municiones. Por razones de seguridad se cambiaba periódicamente la ubicación de las mismas. Al lado de los campamentos importantes se disponían «depósitos de aprovisionamiento», donde se almacenaban armas, municiones, propaganda o comida.

Cuando a partir de 1947 el franquismo inició una represión sistemática contra la guerrilla, los enlaces se convirtieron en las piezas favoritas de las fuerzas de represión. No sólo se incrementó exponencialmente el número de detenidos y torturados, sino que la aplicación generalizada de la «ley de fugas» llenó de cadáveres el paisaje rural de España. El resultado de los nuevos métodos se tradujo en un aumento notable de las delaciones y confidencias, ya que en muchas ocasiones era la única manera de salvar la propia vida. Para interrumpir esta comunicación forzada entre los apoyos y las fuerzas de represión, los maquis aplicaron también códigos de violencia contra la población, que se vio de nuevo inmersa entre dos fuegos. Pero el sentido práctico y de supervivencia del campesinado entendió a la perfección que los guerrilleros habían perdido la guerra, y la balanza se desequilibró de manera definitiva. Los chivatos proliferaron, y los maquis supieron, más allá de las tácticas de Toulouse, que estaban desnudos ante el enemigo: se habían convertido en blancos fáciles para la Guardia Civil.

Una de las peores noticias para los enlaces era la detención de los guerrilleros a quienes ayudaban. Las torturas facilitaban que en determinadas circunstancias los maquis acabaran denunciando a sus enlaces, e incluso se dio el caso de guerrilleros que, en su intento de salvar la vida, acusaban a más apoyos de los que solicitaba la policía. Muchos guerrilleros cayeron en la abyección moral de acusar a sus enlaces, y entre ellos algunos tan célebres como José Muñoz Lozano «Roberto» o Benigno Andrade García «Foucellas». En un marco extremo como el que atravesaba el discurso armado, tal vez la mayor infamia se llevó a cabo en este tipo de confidencias. Produce asombro la lectura de las denuncias que los guerrilleros hacían a policías y jueces contra aquellas personas que habían arriesgado su vida durante años por ellos de manera desinteresada.

Las mujeres en la resistencia antifranquista

Miles de españolas mugrientas y desesperadas atravesaron en los primeros meses de

1939 la frontera francesa. Llevaban semanas huyendo de las tropas franquistas, arrastrando sus miserables enseres y llorando por su tierra y por sus muertos. Silvia Mistral era una de ellas. Los franceses, ante esa visión espectral, se preguntaban: «¿Qué es lo que tienen estas españolas?». Y Mistral respondió tal vez en nombre de todas: «Tenemos mucho dolor, un gran dolor, pero también una rabia inmensa»^[189]. La respuesta era definitiva y expresaba, sobre todo, la pérdida de una esperanza: al desgarrar de abandonar el propio país, las exiliadas unían la certeza de que había terminado el sueño de igualdad para las mujeres españolas. El régimen republicano había supuesto un avance cuantitativo y cualitativo para la mujer, que vio reconocido el derecho de sufragio. Pese a la discriminación lógica en un país atávico y proclive a negar a la mujer su condición de persona, los republicanos pusieron especial énfasis en legislar en su favor. La consecuencia principal tuvo su traducción en un incremento notable de la presencia femenina en la sociedad, incluido el territorio de lo público. Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken se convirtieron en referencia para las mujeres que se incorporaban a una lucha dirigida a subvertir los roles tradicionales. Dolores Ibárruri «Pasionaria» y Federica Montseny alcanzaron la cúpula de organizaciones de masas, e incluso en el exilio francés la responsabilidad del PCE —en este caso más teórica que práctica— estaba en manos de una mujer, Carmen de Pedro. En las invasiones pirenaicas, algunas mujeres (Roser Giménez, Consuelo Carriedo, Pilar Vázquez...) entraron en España participando de la quimera de los exiliados: derribar la dictadura.

La dictadura se encargó de acabar con la «primavera de los derechos de la mujer», que comprobó cómo perdía su personalidad jurídica y recuperaba oficialmente un lugar subordinado en la sociedad. La Iglesia y la Sección Femenina se encargaron de redefinir, conforme a los dogmas religiosos y a la tradición más reaccionaria, el nuevo papel de la mujer española. Para aquellas que estaban vinculadas a la causa republicana, el futuro pasaba por las depuraciones y la represión. Muchas de ellas fueron ejecutadas, aunque en proporción muy inferior a los hombres (en ninguna provincia alcanzaron el 10 por ciento de las víctimas), y a las que escaparon a la cárcel y a la muerte les esperaba un inventario de humillaciones. Las mujeres republicanas comprobaron incrédulas cómo se les impedía llevar luto por los maridos ejecutados; les raparon la cabeza para estigmatizarlas como «rojas», y muchas soportaron todo tipo de vejaciones sexuales sabiendo de antemano que cualquier denuncia sólo servía para agravar su situación. Fueron estas mujeres, viudas o huérfanas de la represión franquista, quienes se situaron definitivamente en los márgenes del sistema al participar como enlaces en la resistencia armada contra la dictadura. Algunas de ellas tuvieron que ejercer la prostitución, sobre todo en la primera posguerra, para alimentar a los presos de la familia o a los hijos que crecían en el hogar. Excarcelados sus maridos, bastantes de

estas mujeres al desprecio social tuvieron que añadir el rechazo de sus parejas en libertad.

Aunque hubo mujeres en el monte, y algunas empuñaron las armas, la mayoría intervino en el maquis como enlaces. No lo tuvieron fácil, sin embargo, e incluso podemos afirmar que soportaron la incompreensión de muchos de sus compañeros de lucha. Para el régimen, la situación no tenía matices. El género descalificaba a las mujeres como elementos activos de la vida política, y en el monte les correspondía, en el mejor de los casos, la función de concubinas. Como escribe Mercedes Yusta Rodrigo: «La mujer, que se presenta en el imaginario utilizado por el franquismo como un ser absolutamente determinado por su condición sexual, ha de serlo también en este caso. Por tanto la participación en la resistencia de las mujeres es presentada, en todos los casos, como una desviación de tipo sexual». Las mujeres eran simplemente las queridas de los maquis, barraganas del monte. En efecto, el teniente coronel Aguado Sánchez ha escrito que es «interesante resaltar que el comunismo, procuró en las situaciones críticas facilitar el desahogo sexual de sus militantes con compañeras, aunque un poco en comunidad». Pero esas posturas no fueron patrimonio exclusivo del franquismo, y otras voces, desde posiciones antagónicas, coincidieron en lo esencial. Algunos guerrilleros alimentaron el mito de la dependencia sexual para explicar el apoyo a los hombres del monte por parte de las mujeres. «En los medios sociales en que se movían los guerrilleros su figura resultaba especialmente atractiva y, sabedores de ello, alguno nos confesó haber usado su prestigio para conseguir una verdadera red de colaboradoras cuya fidelidad se fundamentaba en el principio, muy machista por cierto, de la sumisión sexual, lo que sin embargo entrañaba unos peligros que no necesitamos comentar», escribe Adolfo Fernández Pérez, biógrafo de José Mata. A la condición de sujeto limitado por la sexualidad, la mujer sufrió las secuelas de la perpetuación de los clichés tradicionales de género. María Dolores González Escalona, detenida en las redadas masivas de Málaga con motivo de la caída de Alfredo Cabello Gómez–Acebo, expuso en su declaración a la policía que «no le daban ningún trabajo dentro del Partido por ser mujer ya que tenían la opinión de que la mujer tiene poco de discreta»^[190]. Pese a tener al frente de la organización a una mujer, Pasionaria, los dirigentes comunistas no eran muy benévoloos con la condición femenina. Para justificar en 1952 el fracaso de la guerrilla, a Carrillo no se le ocurrió otra cosa que escribir: «Aparecieron también elementos de corrupción: mujeres, bebida, derroche de dinero, particularmente en el periodo en que menudeaban los golpes económicos». Por su parte, el implacable revolucionario profesional que fue Heriberto Quiñones (padre de una niña llamada Octubrina Roja) mandó en 1941 una carta al Buró Político de México para criticar el envío de militantes a los que juzgaba incompetentes. Refiriéndose concretamente a María del Carmen García Company «Perpetua Rejas»,

le dedicaba calificativos y expresiones como: «cotorra», «ha cantado la muy puta como un loro» o «cómo hacéis esfuerzos y gastos para enviarnos basura de esta clase».

Los guerrilleros asignaron a la mujer un papel secundario en la resistencia, ya que su objetivo se centraba en acabar con el franquismo y no en modificar las costumbres de la época. «¡Ayudad a los heroicos guerrilleros!», exclamó Pasionaria dirigiéndose a las mujeres del exilio. Una de las preocupaciones de los maquis se tradujo en la firme decisión de que la mujer permaneciera en labores asistenciales y que se evitara por todos los medios su presencia en el monte. Algo lógico en aquellos momentos si tenemos en cuenta que todavía hoy, cincuenta años después y con una aceleración histórica extraordinaria en materia de costumbres, la mujer continúa figurando como elemento subordinado en los movimientos insurgentes. En consecuencia, los estatutos de todas las agrupaciones prohibían expresamente que las mujeres permanecieran en el monte, salvo en caso de peligro de muerte y, llegado el caso, se buscaban los cauces para sacarlas del país. También fueron prohibidas expresa y terminantemente las relaciones sexuales en el monte. «No hay nada que socave más la solidaridad del grupo que la rivalidad sexual», ha escrito Eric J. Hobsbawm, y los guerrilleros eran conscientes de ese problema. De hecho, actuaron con un rigor extremo en materia de delitos sexuales, conocedores de que en las sociedades campesinas, de las que formaban parte, infracciones de esa naturaleza enajenaban el apoyo de la población. En la Federación de Guerrillas de León–Galicia, un huído ajeno a la organización pero que en ocasiones actuaba con guerrilleros de la misma, Antonio López Fernández «Corchas», intentó abusar sexualmente de dos niñas que estaban en compañía de su hermano en los montes de Gestoso. El muchacho, un pastor de quince años, consiguió desarmar al huído y darle muerte, aunque en el incidente también falleció una de las niñas. El muchacho pensó que los guerrilleros le matarían y optó por esconderse. Enterado el Estado Mayor de la Federación de lo ocurrido, felicitó al muchacho y le entregaron una pequeña cantidad de dinero como regalo, además de garantizarle la seguridad.

Pese a todo, algunas mujeres practicaron una resistencia activa contra el franquismo. Fue el caso de Enriqueta Otero «María Dolores», maestra nacional y dirigente del PCE de Lugo, herida de gravedad y arrestada después de enfrentarse a tiros con los policías que fueron a detenerla. Creadora de «escuelas de campaña» con el objetivo de alfabetizar a los guerrilleros, el 18 de julio de 1946 fue condenada a muerte, que le fue conmutada. Menos suerte tuvo el compañero detenido con ella, José Vicente Rodríguez, que murió al día siguiente en la Comisaría de Lugo como resultado de las torturas. «María Dolores» había salvado la vida porque era mujer. Para el franquismo, la discriminación de género alcanzaba hasta el patíbulo. Lo confirma el episodio ocurrido en Zas–Negreira en 1949 cuando Carmen Temprano

Salorio cayó abatida cuando intentaba romper, en compañía de otros guerrilleros, el cerco de la Guardia Civil. Los medios próximos al régimen tranquilizaron la hipotética mala conciencia de haber matado a una mujer señalando, según Heine, que «vestía de home e merecía, polo tanto, o mesmo trato ca calquera bandoleiro». Pero el mito femenino del maquis fue Manuela Sánchez, a la que cantó Rafael Alberti: «¡Sangre de Agustín Zoroa! / ¡Mar de sangre derramada! / ¡Sangre de Manuela Sánchez! / ¡Sangre preciosa de España!». También el escritor Jesús Izcaray le dedicó en *Mundo Obrero* un artículo famoso: «Manuela Sánchez, la heroína de Carres». Aunque posiblemente el suceso se ha mitificado, está constatado que el 4 de marzo de 1948 fueron cercadas por la Guardia Civil dos casas de la aldea de San Vicente de Carres–Cesuras, pertenecientes a la familia conocida como los Chintos. En el combate murió un maquis, Antonio Nouche Costa, y la familia que ocupaba las casas fue ejecutada una vez finalizado el enfrentamiento: el padre, Jacinto López Sánchez y sus dos hijas, María y Manuela, además del marido de ésta, Manuel Mosquera. Posiblemente María López (que no Sánchez) apoyó a Nouche para proteger la huida del guerrillero que logró escapar de la casa, José Blanco «Ferreirín», y de otro que estaba escondido en casa del cura, Juan Couto. Otra mujer gallega, Josefa Escourido, resistió en una choza junto con José Pedreira de la Iglesia en el lugar de Silán, hasta que las fuerzas de la Benemérita incendiaron el refugio y la quemaron dentro junto con su compañero. También en la partida de Pablo Pérez Hidalgo «Manolo el Rubio» hubo una mujer que combatió contra las fuerzas de represión, Juana Chacón, y cuyo esposo formaba parte de la guerrilla. Sergia Flores Sanz, esposa del guerrillero ciudadrealeño «Lazarete», perdió la vida junto con su marido el 5 de marzo de 1948 en la sierra de los Mochuelos en un combate con la Guardia Civil. Un caso excepcional lo representó María Josefa López Garrido «Mojea», feminista cordobesa que fue nombrada ayudante del cuartel general de la Agrupación de Córdoba^[191].

La discriminación de género impuesta por las ordenanzas guerrilleras no impidió que una serie de mujeres hicieran vida en la sierra. En la mayor parte de los casos habían subido al monte porque su vida corría peligro al ser identificadas como enlaces. Si la presencia en la sierra se prolongaba indefinidamente, se debía a que eran compañeras estables de algún guerrillero. Manuela Díaz Cabezas, por ejemplo, formó parte de la partida de «Los Parrilleros», a la cabeza de la cual estaba Manuel López Cabezas, su compañero, y cuando aquél murió siguió en la lucha hasta ser detenida en Fuencaliente (Ciudad Real). Manuela dio a luz en la sierra. En León, la primera mujer que se echó al monte fue Adoración Campo Cañedo, esposa del huido Edelmiro Alonso, y lo hizo en 1940. Años más tarde siguieron su camino Alida González Arias, las hermanas Antonia y Consuelo Rodríguez López, Alberta Viñales Martínez, Elpidia Morán Alonso y Asunción Macías Fernández. Las dos últimas encontrarían la muerte en la resistencia. La primera, en un combate en 1949 en el

pueblo de Villasinde. La segunda se suicidó, junto con su compañero, Enrique Oviedo Blanco «Chapa», al ser cercados en el pueblo de Paradela de Muces en 1950. Las demás consiguieron alcanzar territorio francés. Otras mujeres de España también perdieron la vida en la sierra. En Asturias, Olivia Zafa Suárez, esposa del alcalde de Infiesto, se echó al monte y fue asesinada el 28 de julio de 1938 junto con siete antifranquistas en la mina de La Bornaina. Previamente, los falangistas habían represaliado a su marido^[192].

En los años de los huidos, Extremadura y Huelva se convirtieron en los territorios donde había más mujeres en el monte (y en el caso de Extremadura, donde más importante fue la represión de género). En la provincia andaluza el número de fugitivas era tan elevado y estable durante los años de la guerra civil, que se llevaron a cabo incluso matrimonios en la sierra y se produjo al menos un parto, según Espinosa Maestre. En Extremadura, una vez se organizó el maquis, el número de mujeres huidas descendió drásticamente, pero tenemos noticias de algunas que permanecieron en el monte durante años. Fue el caso de María Rodríguez Juárez «Goyerías», compañera de «Chaquetalarga», y de su hermana, llamada Paula y pareja de Víctor Roque Sánchez «Miguelete», que subieron a la sierra en 1943 donde ya estaba su hermano, Aurelio Rodríguez Juárez «Viriato». En la división mandada por «Quincoces» había dos mujeres, Casimira Álvarez Felipe «Jopa» y Daniela Barroso Escudero «Daniela». Esta tuvo otros cuatro hermanos en el monte. En la de «Francés», «Vivillo» y «Rosa». Salvo esta última, asesinada según Ruiz Ayúcar por los comunistas en Madrid, todas las demás fueron detenidas. En Extremadura también se produjeron alumbramientos en el monte. En 1945 nacieron un niño en Peraleda de San Román y tres en Castañares de Ibor, que fueron dados a los pastores para que los entregaran a las autoridades, conforme al relato de Chaves Palacios. Pero en esta región también se desarrolló un episodio que evidencia la posición subsidiaria de las mujeres, incluso en términos afectivos. Cuando «Chaquetalarga» y «Miguelete» consiguieron huir a Francia, lo hicieron solos y a sus compañeras, las hermanas Rodríguez Juárez, sólo les quedó como alternativa entregarse a las autoridades aunque siguieron defendiendo la memoria de los compañeros en el exilio.

En la agrupación guerrillera más numerosa y mejor organizada, la de Levante, tenemos noticia de cuatro mujeres que estuvieron en la guerrilla: las hermanas Esperanza, Angelita y Amada Martínez García —conocidas como «Solé», «Blanca» y «Rosita», respectivamente—, y una vecina, Remedios Montero Martínez «Celia», que se echaron al monte en la provincia de Cuenca en 1950 después de que su padre, un enlace quemado, se incorporara a la resistencia. El testimonio de estas mujeres, que conocemos por los trabajos de Fernanda Romeu Alfaro, aportan algunas de las claves de la relación siempre problemática entre la mujer y el maquis. Según «Rosita»: «Nosotras no es que les laváramos la ropa, ni mucho menos, pero si podías

hacer algo a alguno de los camaradas, lo hacías». Y continúa: «Llevábamos pantalones y cazadoras que nos habían dado los camaradas. Las marchas las hacíamos con los macutos, igual que los demás. Teníamos pistola y nos enseñaron a manejarla y limpiarla». Por su parte, «Celia» señala que «vivíamos como ellos: dormíamos debajo de una tienda, si había que coger el macuto al hombro para salir, lo hacíamos. Nos trataban normalmente. Ahora, nosotras no hemos salido a ir a por suministros, ni tampoco hemos hecho guardias. Si las reuniones no eran cosa estrictamente de la Dirección para tomar ellos acuerdos, participábamos igual que todos. Si había una discusión política, nos daban nuestro guión y participábamos en la reunión con ellos». Las cuatro adoptaron el comunismo una vez en el monte. Las declaraciones de algunas de estas enlaces evidencian la complejidad de asumir roles igualitarios en un tiempo de marcadas diferencias de género y prueban que, ante la ausencia de pautas establecidas, las relaciones se codificaban a partir de la convivencia. Para los franquistas no existían dudas conceptuales ni fórmulas nuevas de participación, y Tomás Cossías, policía e historiador, sanciona que las cuatro muchachas «vinieron a ser las concubinas de algunos jefes».

La resistencia activa e incluso la permanencia en el monte de mujeres revistió, por tanto, un carácter excepcional, ya que su aportación primordial se concretó en hacer de enlaces. Entre el 20 y el 40 por ciento de las personas que integraban las redes de apoyos eran mujeres, y en ello coinciden los estudios de los historiadores y las informaciones de los protagonistas de la resistencia armada. El hecho resulta extraordinariamente significativo, por cuanto hablamos de mujeres campesinas, explotadas en su condición de trabajadoras del campo y amas de casa, amén de madres en una época de familias numerosas. Alejadas de lo público y víctimas principales del analfabetismo en el medio rural, la intervención en la guerrilla está más relacionada con la solidaridad familiar y vecinal que con una actitud ideológica consciente. Sin embargo, «para muchas de ellas, esto significó la adopción de unas responsabilidades que les eran desconocidas, e incluso una toma de conciencia política, aunque hay que señalar que, en ocasiones, ésta ya existía de antemano», como apunta Yusta Rodrigo. En efecto, durante la República las mujeres empezaron a intervenir en los espacios de lo público, pero no era una posición mayoritaria y en el medio rural se convertía en extraordinaria. Por lo tanto, se revela como importante que un número significativo de mujeres pasara de una conciencia prepolítica a aceptar responsabilidades como consecuencia de la represión. El recuerdo de los familiares muertos motivó que algunas eligieran el compromiso contra el franquismo.

Pero tal vez el espacio en el que se fraguó una parte de la militancia de las mujeres del mundo rural fueron las cárceles franquistas. Arrestados sus maridos y/o hijos, conocieron a otras mujeres en las mismas condiciones, aceptaron una función de mediación con el Partido Comunista y terminaron participando activamente en las

redes de apoyo. La cárcel, metáfora de una izquierda vencida y aniquilada, se constituyó en foco de concienciación para estas mujeres. La muerte obligaba a tomar decisiones radicales, bien a comprometerse en la lucha, bien a iniciar la dura tarea de convivir con la amnesia y el silencio. El corolario se concretó en su participación como enlaces, una actividad especialmente peligrosa a partir de 1947. Víctimas de una persecución implacable, las enlaces padecieron castigos ejemplares, incluida la «ley de fugas». Pero las mujeres no sólo visitaron las cárceles como esposas o madres, sino también como presas. Leriñia Díaz, que fue enlace de la resistencia asturiana desde los diez años, explica que: «A mi madre la pegaron y la colgaron, lo hizo un vecino de Laviana, que ahora lo estamos viendo todos los días por ahí. Mi madre entonces estaba embarazada de ocho meses y querían que cantara dónde estaba mi tía escondida, pero no cantó (...). Aquellos tiempos de niña, yo los recuerdo con miedo. La historia nuestra es la de ver sólo en casa sangre y palos. Y de llorar todos, mi abuela, mi abuelo, todos». Las mujeres que estaban en el monte corrían el peligro de que les aplicaran la ley de fugas, aunque sobrevivir tampoco mitigaba el dolor y la humillación: «Me detuvieron y me llevaron a Arrancapinos, y allí me tuvieron cerca de 15 días dándome hostias sin parar, la cara la tenía desfigurada, pero esto no se podía comparar con lo que hicieron con Esperanza y Reme. A mi hermana la metían astillas entre las uñas y las ponían a las dos en el suelo en una tabla con sal gorda, arroz y garbanzos, las arrodillaban y con las manos esposadas atrás, les pegaban con un vergajo. Cuando se caían les decían: “levántate so puta”», testimonia «Rosita»^[193].

El caso de Carmen Jerez Rodríguez, de Fervenza (Orense), muestra hasta dónde llegó el castigo contra las mujeres que no aceptaron el encuadramiento de género practicado por el régimen franquista. Novia del guerrillero Abelardo Macías Fernández «Liebre», fue detenida el 25 de julio de 1946 por la Brigadilla de Servicios Especiales en su pueblo y delante de un vecino, José López. Disfrazados con monos azules, los guardias pretendían pasar por guerrilleros y así obtener la información necesaria para detener a «Liebre». Como no lo consiguieron, fue arrestada y estuvo durante dos meses en el cuartel de la Guardia Civil de la Rúa–Petín. Llevada posteriormente a Ponferrada, donde se concentraban las fuerzas especiales contra el maquis del oeste de León y el oriente gallego, otro vecino había sido testigo de su traslado a la ciudad berciana. Nueve meses después de ser detenida, el 3 de mayo de 1947, Carmen Jerez apareció muerta en Montearenas, en las proximidades de Ponferrada y lugar donde fueron ejecutados numerosos antifranquistas leoneses. A instancias de la Benemérita, su fotografía fue expuesta en los escaparates de Ponferrada con el objetivo aparente de conocer su identidad y localizar a los familiares: era una argucia de los guardias civiles para eludir la responsabilidad de lo sucedido. Cuando fue inhumada, sus familiares descubrieron que estaba en avanzado

estado de gestación después de nueve meses detenida en el cuartel de la Guardia Civil de Rúa–Petín y Ponferrada. Como símbolo, la vida y la muerte de Carmen Jerez representa las actitudes del franquismo contra toda mujer que no cumplía los cánones impuestos.

Con todas las cautelas propias de una excepción, en la guerrilla levantina se produjo un caso singular en la persona de Teresa Pía Meseguer, pastora de Vallibona (Castellón) que participó activamente en la resistencia, practicó un elevado grado de violencia en sus acciones (fue acusada de 28 crímenes) en compañía de Francisco Serrano Iranzo «Francisco», y además consiguió sobrevivir en el monte hasta el final de la resistencia y luego «desaparecer» durante varios años. Para las gentes de los pueblos y también para las fuerzas de represión, Pía Meseguer modificaba de manera sustantiva las convenciones sobre la mujer y la violencia armada. Conocida como «Pastora» por su oficio, ella se autobautizó «Durruti» y desde el régimen la llamaron «Teresona». Aguado Sánchez, con su habitual beligerancia verbal (lo mismo llama «verrugas» a Azaña que «grasiento y orondo» a Prieto), escribe que era «una mujer lesbiana de instintos violentos». Posteriormente, el mismo autor dice que cuando fue detenida «su identificación presentó al principio algunas dudas. Vestía de hombre y por su contextura viriloide y el tiempo transcurrido había experimentado un gran cambio en su fisonomía». Apresada en la tardía fecha del 5 de marzo de 1960 en Seo de Urgel, finalmente le fue conmutada la pena de muerte a pesar de una biografía verdaderamente activa y violenta. Conocida también como el «maquis hermafrodita», posteriormente adoptó una identidad masculina con el nombre de Florencio^[194].

El «trienio negro» de la resistencia (1947–1949)

Descartada la intervención aliada, el verano de 1947 aportó las claves definitivas de lo que se anunciaba como un periodo comprometido para los maquis. Dos episodios legislativos que el Partido Comunista fue incapaz de interpretar —el referéndum de 6 de julio acerca de la Ley de Sucesión en la Jefatura de Estado y, tres meses antes, el decreto-ley para la Represión del Bandidaje y el Terrorismo de 18 de abril de 1947— trazaron la raya de la victoria para unos y de la derrota para los otros. El plebiscito introdujo la «democracia orgánica», que se inscribía en la política de «limpieza de fachada» que los países democráticos le exigían al franquismo, permitió al régimen exhibir una cierta «legitimación» en el interior apoyada en el monopolio informativo. El decreto sobre bandidaje, verdadero desafuero jurídico que impugnaba radicalmente las premisas anteriores, aportó los instrumentos jurídicos para desencadenar una guerra total contra los hombres del monte: rotuló de sangre la toponimia española. Si a ello añadimos la explosión de la guerra fría y la lenta pero sostenida penetración social del régimen —sectores populares participaban del «apoliticismo» impuesto desde el poder—, podemos inferir que Franco tenía las manos libres para dedicar su atención a las partidas armadas. Y se aplicó a la tarea con la tenacidad característica del llamado «Centinela de Occidente».

El fracaso de la política

El agitado verano de 1947 proclamó la victoria de Indalecio Prieto sobre Rodolfo Llopió —entonces jefe del Gobierno republicano— en el Partido Socialista y también en la oposición en el exilio. Convencido de que la solución al problema español pasaba por la vía diplomática, Prieto se posicionó frontalmente contra la lucha armada, y toda su obsesión al respecto se reducía a retirar de España a los socialistas asturianos que estaban en la resistencia. Pero el ascendiente del político bilbaíno, que se articuló en torno del accidentalismo en la forma de Estado y contra el republicanismo tradicional de los socialistas, finalizaría con una dolorosa derrota, de efectos devastadores. Prieto no fue ajeno a la quiebra como símbolo del Gobierno

republicano y a la disolución de la ANFD.

La bancarrota de entidades y símbolos republicanos la asumió Prieto con el pretexto de alimentar un proyecto cuasi infalible para erradicar el franquismo, la Junta de Solidaridad, que canalizaba la alianza del exilio y los monárquicos del interior, con el beneplácito de la ONU. Pero la realidad cada vez se distanciaba más de los planes de Prieto, aunque no exclusivamente por su política. En el interior, la represión seguía un ritmo creciente que impedía la formación y consolidación de los organismos antifranquistas. En el exterior, las potencias occidentales habían traicionado las promesas y abandonado a su suerte a los republicanos. También la Unión Soviética, la esperanza de muchos republicanos, dejó explicitado que España no entraba en su área de influencia. Dentro y fuera del país, los monárquicos seguían practicando un doble juego. Y en el exilio francés continuaban las rivalidades políticas, convertidas en un endemismo, entre las diferentes facciones: básicamente, unos socialistas desconectados de la realidad y engañados por la diplomacia occidental y un Partido Comunista que, en plena guerra fría, empezó a seguir las consignas del Kominform (Oficina de Información). Los comunistas retomaron la semántica de los tiempos aislacionistas, y los socialistas empezaron a ser catalogados con epítetos como «socialfascistas» o «socialtraidores».

En este contexto no parecía extraño que mientras Prieto y los monárquicos Gil Robles y Sáinz Rodríguez negociaban una alternativa a Franco, éste y Juan de Borbón se reunían en el yate *Azor*. Tampoco que el 28 de agosto de 1948, tres días después de la entrevista del *Azor*, Prieto y otro nuevo mensajero realista, el conde de los Andes, representante de* la Confederación Española de Fuerzas Monárquicas (CEFM), suscribieran el «Acuerdo de San Juan de Luz». Patrocinado por Ernest Bevin, ministro británico de Exteriores, el pacto de ocho puntos podía resumirse en tres: referéndum sobre la forma de Estado, amnistía para todos y una restauración sin venganzas contra los elementos más significados del franquismo. Este juego de despropósitos de la «alta política» se convirtió en una metáfora liquidacionista para el dirigente del PSOE, que comprendió tarde que había embarcado a su partido y a la oposición política a la dictadura en un camino sin retorno ni esperanza. Las adhesiones que las ejecutivas socialista y ugetista hicieron llegar a Prieto y el hecho de que la «resucitada» ANFD ratificara su confianza en el político bilbaíno confirmaban, por paradójico que parezca, el fracaso de la coalición monárquico-socialista: no existía alternativa a la «política del precipicio» y se imponía proseguir la representación de una unidad atravesada de «elementos de farsa» y la «pusilanimidad de los monárquicos»^[195]. El año de 1948 no pasó a la historia como el de la reconciliación entre republicanos y monárquicos, sino como el del descalabro definitivo de los primeros. La España republicana siguió en el exilio y los monárquicos, al lado de Franco: el príncipe Juan Carlos vino a estudiar en España. La

política pactista y subalterna de Prieto no había conseguido fracturar el bloque de poder hegemónico.

Fracasada la política, en España proseguía la resistencia armada impulsada por los comunistas. Pero también en ese escenario las noticias eran pesimistas. El PCE introdujo una política de ambigüedad: si por una parte desmovilizaba teóricamente a una guerrilla que seguía en el monte, por la otra solicitaba el «entrismo» en las organizaciones franquistas sin haber efectuado discusión alguna sobre el nuevo discurso. Pero el factor definitivo contra la pervivencia de los maquis fue la decidida voluntad de Franco de acabar con ellos.

Los verdugos de la guerrilla

La persona encargada de dirigir desde Madrid el exterminio de los focos de resistencia armada fue el general Camilo Alonso Vega, amigo de Franco y director de la Guardia Civil desde 1943 hasta 1955. El decreto-ley sobre Bandidaje y Terrorismo, que derogaba la ley de Seguridad del Estado de 1941, y el incremento exponencial de los recursos destinados a la Guardia Civil le proporcionaron los medios «legales» y económicos necesarios para llevar a cabo la función encomendada. Pero el cambio esencial radicó en la militarización de todo lo relacionado con la resistencia, ya que fue la jurisdicción castrense, ocho años después de finalizada la guerra civil, la que se encargó de los procesos contra los guerrilleros y enlaces. De la naturaleza y objetivos de la ley dejó testimonio José Ibáñez Martín, ministro de Educación, al declarar que «la ley presentada por el ministro de Justicia sobre represión del bandolerismo y bandidaje, y teniendo en cuenta la gravedad de la situación actual, todas las circunstancias atenuantes deben desaparecer y las penas más severas serán aplicadas dentro del cuadro de medidas excepcionales, tomadas para castigar estos crímenes contra la nación». Por su parte, el ministro de Hacienda, Joaquín Benjumea Burín, apuntó la importancia del incremento de mil millones para gastos militares. En efecto, «Don Camilo», como era conocido por la camarilla del régimen Alonso Vega, contará con un aumento sustancial del presupuesto de la Benemérita, que se tradujo en una mejora de las dotaciones de hombres y armas en los denominados «sectores de huidos». En la provincia de Cáceres, por ejemplo, el número de guardias civiles pasó de 342 a 579, además de otros 200 de los grupos volantes y de las fuerzas interprovinciales que participaban en la persecución de los guerrilleros. En Toledo, entre 1942–1943 se crearon 28 nuevos destacamentos^[196].

Para hacer frente a la resistencia armada, se utilizaron desde la guerra civil, como hemos visto, diferentes fuerzas represivas: unidades del Ejército (incluidos los soldados de reemplazo), regulares y legionarios, columnas de operaciones... También

participó en la lucha contra el maquis en Asturias y Levante la Guardia de Franco, un cuerpo paramilitar creado en julio de 1944. En las ciudades, la lucha estaba en manos del Cuerpo General de Policía y de la Policía Armada. Pero el peso de la lucha contra el maquis, una guerrilla rural, recayó en la fuerza de orden específicamente rural, la Guardia Civil. Empezando por las fuerzas territoriales —los tradicionales puestos de la Guardia Civil—, que en las zonas de huidos tenían que hacer frente a cualquier contingencia relacionada con los del monte y que, por lo general, habían sido reforzadas desde el final de la guerra. También se crearon puestos eventuales en los pueblos más significados de las áreas de maquis. Pero las secciones más importantes en la persecución de los fugitivos eran las brigadillas especiales o móviles (integradas exclusivamente por guardias civiles), que se constituyeron como las unidades centrales para combatir la insurgencia, y que eran conocidas en cada tercio de la Guardia Civil de manera diferente: cuerpos móviles, brigadillas especiales, etcétera. Tenían como misión patrullar y efectuar batidas por los montes, especialmente en operaciones de apostadero o de acoso a los enlaces. Los guardias civiles fueron auxiliados en esa lucha por el somatén, que oficializó la participación de los civiles en la lucha contra el maquis y que era una institución específicamente catalana conocida desde el siglo XI. El somatén, un cuerpo de voluntarios civiles movilizados temporalmente para combatir la delincuencia, había sido abolido por la República en 1931. No obstante, el franquismo lo había restaurado en Cataluña en 1939 y a partir del 9 de octubre de 1945 aprobó su funcionamiento en el resto de España. Afectaba solamente a los pueblos de menos de 10 000 habitantes. Como consecuencia de esta medida, unos 100 000 paisanos (sobre todo falangistas) se vieron investidos de autoridad y armas. En Badajoz, según Justo Vila Izquierdo, se nombraron 1231 somatenes sólo durante 1946. El somatén participó en la lucha contra la guerrilla, en primer lugar, como organización de civiles armados que apoyaban a los guardias cuando se producía una acometida de los guerrilleros y, en segundo lugar, como miembros de las contrapartidas, un método importante en la erradicación del maquis ya analizado en capítulos anteriores. Todo ello bajo el control de la Guardia Civil.

La Benemérita, como eslabón más débil del aparato represivo, también pagó una importante cuota de muerte en la contrainsurgencia. Con sueldos miserables y una existencia arriesgada, los guardias civiles vocacionales escaseaban y la mayoría llegaba al cuerpo a causa de las condiciones miserables del país. Además, algunos de los guardias, tanto oficiales como tropa, que engrosaron los grupos especiales antiguerrilleros destacaban más por el empuje y la tosquedad que por la inteligencia, y vieron en la resistencia armada una oportunidad única para ascender. Entre 1942 y 1945, cuando existían dudas sobre el futuro del franquismo, se extendió por toda España una especie de pacto no escrito en el que guardias y maquis evitaban los enfrentamientos. Pero a partir de 1947, las autoridades franquistas forzaron a la

Guardia Civil a emplearse con contundencia, ya mediante la expulsión del cuerpo y detención de aquellos que no respondieran a las expectativas de los mandos más duros (o ejecutándolos, como en Mesas de Ibor), ya premiando a los guardias más eficaces en la lucha. Para quienes no conseguían los resultados previstos, les esperaba el castigo. Se multiplicaron las expulsiones del cuerpo, y también las sanciones por «falta de celo en el cumplimiento del deber», «baja moral» o «negligencia en el servicio». Varios oficiales y suboficiales de la Guardia Civil destinados en Levante y Aragón fueron juzgados por consejos de guerra durante el año 1948 por «incumplimiento de misiones encomendadas en la lucha contra los guerrilleros», entre ellos los capitanes Vela Blasco, Isabelino Hernández González y Serapio Marchante Olivares, así como el cabo Bernardo Meneses. Eulogio Limia Pérez disolvió el 4 de marzo de 1948 las seis contrapartidas existentes en Ciudad Real porque sus jefes «carecen del espíritu, entusiasmo y sacrificio que son necesarios para el difícil cumplimiento de la misión que se les había confiado, por lo cual los Grupos de Fuerzas a sus órdenes no dan el rendimiento que cabía esperar». Los guardias tenían un bajísimo nivel cultural —la redacción de los partes representa una prueba inapelable—, el nivel de vida era casi semejante a la población a la que combatían y, en general, no eran bien vistos por los vecinos de los pueblos, incluidos los partidarios del régimen^[197].

Según confesó a Fernanda Romeu Alfaro el teniente general Ángel Martín Díaz–Quijada, teniente cuando luchaba contra el maquis, «el director general de la Guardia Civil, era el teniente general Alonso Vega, y éste impuso un sistema represor dentro de la Guardia Civil, especialmente duro, que hacía que los castillos militares estuviesen prácticamente llenos de jefes y oficiales de la Guardia Civil». Y continúa: «Pero lo más importante que tenía el arresto era el que imposibilitaba en muchos casos el ascenso, sobre todo a los guardias para cabos y también expulsiones que eran muy numerosas a nivel de guardias. Se expulsaba hasta por las más mínimas equivocaciones. Entonces, como ahora, en la que existían muy pocas posibilidades de trabajo, la expulsión significaba regresar a una situación de parado, y de ahí, yo creo que los guardias civiles tenían tanto miedo a sus jefes como a los maquis». El objetivo era obligar a los números a un comportamiento agresivo contra la guerrilla. Tampoco los jefes se libraron de esa política de mano dura. El teniente coronel Manuel González Ortiz, jefe de la 136 Comandancia de Granada, fue acusado de tibieza y sustituido por Limia Pérez. Como resultado de un combate en la sierra de la Almijara, que las autoridades franquistas consideraron mal planteado por las fuerzas represivas, fueron destituidos el teniente coronel Antonio Gutiérrez Martínez, jefe de la Guardia Civil de Málaga, y Florencio Alcalá Martínez, jefe del Sector Interprovincial Málaga–Granada. El capitán Ismael Quilis fue detenido y encarcelado^[198].

La política de sanciones tenía su envés en el apartado de los premios, tanto en ascensos como en metálico, lo que motivó el ingreso y promoción de guardias en el límite de la ética y la legalidad, dados a confundir la ley con el comercio. Según fuentes oficiales, 126 guardias civiles fueron ascendidos a cabos y se concedieron 908 cruces al mérito militar en la lucha contra la resistencia antifranquista. Además de una paga extra de 10 pesetas diarias (14 pesetas al día era el sueldo de un guardia civil), la detención o eliminación de un maquis estaba premiada, aunque la recompensa difería según las zonas. En Levante, por ejemplo, el premio por cada guerrillero muerto era de 1000 pesetas y un mes de permiso. Según *El Socialista*, a cada miembro de las contrapartidas se les asignaba un sueldo de 50 pesetas y una prima de 50 000 pesetas —cifra exagerada, sin duda— al grupo que detuviera o eliminara a un guerrillero. Los números y cabos de la Guardia Civil que mataron a los guerrilleros Aladino Suárez y Osorio fueron gratificados con 5000 y 6000 pesetas, respectivamente. En general, y salvo casos excepcionales, resultaba más rentable eliminar a un resistente que detenerlo, lo que provocó que muchos guerrilleros fueran ejecutados. También una parte sustantiva de las ejecuciones de enlaces estaba relacionada con el pequeño negocio que se había montado en torno al maquis (matar a un enlace y adjudicarle la condición de guerrillero) y que nadie estaba por la tarea de investigar, siempre que el muerto fuera un «rojo». Para las recompensas se aplicaba la Ley de 31 de diciembre de 1945. Incluso había un fondo de «Confidencias y Reservados» para aquellos que daban información^[199]. Algunos guardias civiles aprovecharon la lucha contra el maquis para participar de otro de los negocios de la época, el estraperlo.

Hasta 1947, la eficacia de las fuerzas represivas fue relativa y las pérdidas del maquis podían catalogarse de normales. Pero a partir de ese año se produjo un cambio cualitativo, ya que se sustituyó el enfrentamiento directo, que no reportaba resultados positivos, por la mejora de los sistemas de espionaje a través del SIGC y de las contrapartidas. Con una buena información, el siguiente paso era penetrar la red de enlaces y premiar a confidentes y delatores. Los nuevos métodos reportaron de inmediato resultados espectaculares. También influyó en esta inflexión de 1947 la multiplicación de los «asesinatos legales» a través de la universalización de la «ley de fugas». En 1946, la Dirección General de la Guardia Civil había enviado un informe reservado a las fuerzas represivas en los sectores de huidos en el que se exigía máxima dureza «a todo detenido con las armas en la mano o convicto por actos de esa naturaleza. No habrá, pues, prisioneros a menos que haya testigos sospechosos o se produzcan circunstancias que puedan dar lugar a una publicidad que aprovechen nuestros enemigos». El 23 de enero de 1947 se reunieron en Madrid los mandos más representativos de la Benemérita, cónclave en el que acordaron «luchar eficazmente contra los elementos incontrolados y disparar sin previo aviso contra los que huyan»,

es decir, la aplicación sistemática de la «ley de fugas». De las batidas en las montañas buscando el enfrentamiento se pasó al sistema indirecto: «no salir en busca del guerrillero, sino esperarlo. No atacarlo a él directamente, sino a sus enlaces y a sus puntos de apoyo, poniendo en funcionamiento, además, una inteligente captación de delatores o “chivatos”, reclutados, de manera más o menos coactiva, entre los propios enlaces y personas de izquierdas. Sin esta ayuda de confidentes y delatores, la Guardia Civil difícilmente hubiera acabado con la guerrilla», apunta Francisco Moreno Gómez. Los confidentes y la subsiguiente pérdida de los puntos de apoyo fueron los dos elementos en los que se apoyó la aniquilación de la resistencia. Como la lucha contra la guerrilla estaba bajo jurisdicción militar, los estados de guerra, alarma y excepción se impusieron en las áreas de maquis con el fin de facilitar las operaciones^[200].

El nombramiento de jefes de la Guardia Civil duros y competentes completó el cambio de escenario. Destacaron los del general Manuel Pizarro Cenjor y los tenientes coroneles Eulogio Limia Pérez y Ángel Fernández Montes de Oca. El primero, que había combatido al maquis en Granada y León como jefe de las respectivas comandancias, fue destinado a combatir a la agrupación guerrillera más importante, la AGLA. Para facilitarle la tarea, las autoridades franquistas le nombraron gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Teruel, además de jefe de la 5.ª Región de la Guardia Civil. El objetivo era controlar todos los territorios en los que operaba la AGLA. El segundo representó el más acabado ejemplo de «cazamaquis», ya que fue el responsable directo de la aniquilación de las guerrillas de Toledo, Ciudad Real y Granada. Uno y otro dejaron una estela de brutalidad y eficacia en las zonas de maquis. De Limia, el guardia civil Vicente Velando testimonia que «era duro, muy duro». Otro jefe de la Guardia Civil que utilizó métodos de dureza extrema contra los guerrilleros fue el teniente coronel Ángel Fernández Montes de Oca, primero en la provincia de Córdoba y posteriormente en la de Málaga. En las dos provincias estuvo acompañado por el capitán Joaquín Fernández Muñoz y el teniente Francisco Giménez Reyna (éste como jefe de Línea en Nerja). Los tres habían destacado en la represión de Córdoba y trasladaron los expeditivos métodos a Málaga. Coordinaba la fuerzas de Jaén y Córdoba un destacado represor durante la guerra civil, el coronel Santiago Garrigós Bernabeu. Otros jefes de la Guardia Civil que sobresalieron contra la guerrilla fueron los siguientes: tenientes coroneles Roger Oliete Navarro (Cádiz), Luis Marzal (Jaén) y Blanco Novo (Asturias); también el comandante Miguel Arricivita Vidondo (Ponferrada). El general de la Guardia Civil Manuel Prieto López, teniente cuando combatió al maquis en Málaga, confiesa ahora, refiriéndose a algunos altos mandos de la Guardia Civil: «También ha habido gente que... Tenientes Coroneles, aquí en Málaga había uno que era un obseso y un capitán que era un loco, y en Granada había

uno, no es el tema, que el día que no mataba a alguien estaba malo, y nos recriminaba a todos»^[201].

También hubo oficiales, suboficiales y números que alcanzaron fama en la lucha contra el maquis por su eficacia y métodos heterodoxos. Por ejemplo, el capitán Germán Sánchez Montoya (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) y el brigada González Cartón en Ponferráda. El comandante Felipe Martínez Machado y los capitanes Aznar, Laureano Izquierdo, Antonio Cañero y Tamayo en Córdoba. En Asturias alcanzaron notoriedad los tenientes Jaime de Pinies y Alfonso Padilla Ortega, el sargento Fernández y el cabo Artemio. En Galicia destacaron el teniente José Santiso Torres, el capitán Correas, de la Brigadilla de Lugo, y el guardia civil Valdés. O el sargento José Ruano Pascual en Toledo. Un caso excepcional fue el del comisario Eduardo Quíntela Bóveda, jefe de la Brigada Político–Social de Barcelona, que se dedicó de manera contumaz, casi patológica, a perseguir a los anarquistas catalanes de la guerrilla urbana y que llegó a convertir la captura de Francisco Sabaté Llopart «Quico» en una verdadera obsesión personal. Hasta tal punto que, cuando «Quico» fue cercado y herido, el antiguo comisario, jubilado en Galicia, se desplazó a Barcelona con su perro «Bloodhound» para asistir al desenlace. Era como rematar una tarea que consideraba personal. Otra historia singular se refiere a la familia López de Ochoa. El cabeza de familia, el general Eduardo López de Ochoa, que había reprimido con dureza la insurrección asturiana de 1934, fue asesinado en los inicios de la guerra civil en el Hospital de Carabanchel, donde se encontraba internado, por una turbamulta de milicianos que, además, lo decapitaron y pasearon su cabeza por Madrid. Un hijo, de igual nombre que el general, era inspector de policía y dirigió los interrogatorios al dirigente guerrillero Ramón Vías, que fue bárbaramente torturado y lo relató en una carta desde la prisión^[202].

El modelo de represión se produjo en Levante, donde chocaron la agrupación más relevante, la AGLA, y el más formidable aparato represivo de posguerra dirigido por el general Pizarro Cenjor, cuya primera medida fue aplicar la condición de «zona de guerra» a las comarcas guerrilleras a mediados de 1947. A partir de esa fecha, en Levante y Aragón —sobre todo en el Maestrazgo— actuaron conjuntamente guardias civiles, Policía Armada, tropas del Ejército y miembros de la BP–S, además de todos aquellos que podían ser militarizados, como guardias jurados, forestales y somatenes. Se produjo la ocupación militar del territorio donde operaba la AGLA, y el toque de queda prohibía terminantemente la circulación de personas a partir de las ocho de la noche. En caso de enfermedad, los vecinos se veían obligados a llevar un farol como elemento de identificación. Según el testimonio del guardia civil Ángel Hernández a Romeu Alfaro, «también se dio la orden de no hacer detenidos y dar el alto a una persona y, si no contestaba, disparar». Pero lo más excepcional fue el traslado de masoveros, carboneros y pastores con el fin de cortar las bases de aprovisionamiento

del maquis, algo parecido a lo que había llevado a cabo Weyler en Cuba. A los masoveros y medieros que permanecían en sus casas y en pequeños núcleos de población aislados, se les obligó desde agosto de 1947 a evacuar sus masías al atardecer y a entregar las llaves en los puestos de la Guardia Civil. Muchos de ellos emigraron definitivamente de sus comarcas de origen para eludir la conflictividad de la zona. Como ha escrito Mercedes Yusta Rodrigo: «Se trata, para ellos, de un auténtico acto de usurpación. Podemos considerar esta medida, más allá de sus secuelas en el plano económico o político, como una usurpación simbólica llevada a cabo por las fuerzas represivas contra los campesinos, y que así fue percibida por parte de muchos de ellos». Pero no estaba el régimen para reparar en aspectos simbólicos. Había declarado la guerra sin cuartel contra el maquis, y las medidas de Pizarro Cenjor demostraron una eficacia aterradora. Todo estaba permitido con tal de que tuviera éxito, y Pizarro no se andaba con repulgos. El 9 de agosto de 1947 guardias civiles y un batallón de infantería atacaron el campamento de Aguaviva (Teruel), «prendiendo fuego al bosque con bombas incendiarias, quemando 700 hectáreas»^[203].

Huelga decir que ninguno de esos represores, grados y empleos al margen, pasó por un consejo de guerra para depurar posibles excesos y desmanes. Ni siquiera se conocieron castigos internos en la Benemérita. Todo estaba permitido en la España rural entre 1947 y 1949. Pero el régimen franquista, al mismo tiempo que efectuaba esas operaciones extra judiciales y que conculcaba su propia legislación, ponía énfasis en que las noticias sobre la misma no traspasaran el ámbito local. Tan importante como combatir la guerrilla era que los españoles no supieran de su existencia.

Catálogo de víctimas

A partir de 1947 empezaron a perfilarse los métodos y las siluetas de los verdugos. Poco a poco, también se dibujaron los rostros de las víctimas. Los estrategas de la represión comprendieron que la clave del exterminio del maquis pasaba por cortar el cordón umbilical que vinculaba a guerrilleros y enlaces. De inmediato, la red de apoyos se convirtió en su objetivo. Una orden de la Comandancia de León lo explicitaba claramente: «si algún auxiliar es sorprendido en hecho flagrante de auxilio a las partidas se procederá como si fuese un componente de éstas, en acto de resistencia a la fuerza y se actuará con el máximo de dureza, por ser necesarios actos ejemplares que infundan respeto». Las directrices que llegaban a todas las comandancias eran idénticas. Los enlaces empezaron a comprobar que ya no solamente eran detenidos y torturados, sino que la muerte se convertía en una

realidad próxima. A muchos de ellos les presentaron la disyuntiva entre la colaboración o la muerte en un descampado. A partir del verano de 1947, retornaron a la España rural y precapitalista los «paseos», ahora conocidos bajo la denominación no menos expresiva de «ley de fugas».

El primer paso para diezmar la resistencia consistía en castigar con dureza al núcleo familiar de los guerrilleros, y familias al completo resultaron diezmadas o aniquiladas por las fuerzas de represión y elementos auxiliares como falangistas y somatenes. El 11 de marzo de 1950 se aplicó la «ley de fugas» a cuatro paisanos de Nerja por el delito de ser familiares de guerrilleros: José Centurión Centurión, Ramón Centurión González y los hermanos Francisco y Miguel García González «Los Niguas». Tras la caída de «Rubio de Navahermosa», en 1941, fueron fusilados en su pueblo cinco enlaces: Paulino y Matea Sánchez–Elez López, Isidra Fernández Pinilla y el hijo y sobrino de ésta, Pedro Sánchez Fernández y Felipe Fernández López. El 14 de octubre de 1941 fueron detenidos en el pueblo toledano de Los Navalucillos cinco labradores y los ejecutaron con el pretexto de que eran apoyos de los del monte. En Córdoba, la furia represora de las autoridades franquistas llegó a tales extremos que, como señala Moreno Gómez, se aproximaban más a vulgares «ajustes de cuentas» que a represalias por parte de un Estado, aunque fuera dictatorial. Por cada víctima que ocasionaban los guerrilleros Ricardo García Rodríguez «Caraquemá» y Felipe Moya Tejada «Castaño», la Guardia Civil ejecutaba el doble de personas escogidas entre familiares y enlaces. Para completar el acoso a los familiares de los dos jóvenes maquis de Pozoblanco, el 10 de septiembre de 1948 fueron asesinadas en la mina La Romana las madres de «Caraquemá» y «Castaño» (Amelia Rodríguez e Isabel Tejada, respectivamente) y la hermana del primero (Amelia García Rodríguez). También fue eliminado Antonio Cabanillas, un enlace. Pero lo verdaderamente trágico era que ni las madres ni la hermana de los jóvenes guerrilleros tenían que ver con la resistencia, y por lo tanto fueron masacradas exclusivamente por su condición de familiares. En el pueblo jiennense de Alcaudete fueron asesinados el 31 de diciembre de 1936 seis vecinos del pueblo —una mujer entre ellos— a los que se acusaba de estar al servicio de los guerrilleros. Miguel y Jaime Güito, tíos del guerrillero libertario Marcelino Massana, serían ejecutados el 16 de noviembre de 1949 cerca de Balsareny, únicamente por el hecho de ser familiares de «Pancho». Cuando los ametrallaron estaban esposados el uno con el otro. Añadir el detalle espeluznante de que uno de los hermanos murió en el acto y el otro, en su intento de huir, lo llevó arrastrando hasta que una bala compasiva terminó con su vida. Mayor infamia revistió el caso de Manuel Sabaté, un joven cuya biografía no incluía hechos de armas ni muertes y que aprovechó la ausencia de sus hermanos mayores para «jugar a guerrillero». Capturado poco después de pasar la frontera francesa, un consejo de guerra lo condenó a la última pena por el «crimen» de ser hermano del

famoso «Quico» Sabaté. Fue fusilado en el Campo de la Bota el 24 de febrero de 1950. Un crimen sin paliativos y con repercusiones simbólicas que radiografía las aristas de la lucha armada. Como consecuencia de las torturas y de su inexperiencia en la clandestinidad, el pequeño de los Sabaté había facilitado información a la policía, actitud que le valió el desprecio y el olvido de su hermano, un hombre inflexible hasta la falta de humanidad. No está de más señalar en este punto que los guerrilleros, más allá de muertes accidentales en combate, jamás represaliaron directamente a las mujeres e hijos de los guardias civiles. Al menos, no disponemos de información solvente que demuestre que los familiares de los miembros de la Benemérita se convirtieran en objetivos de los guerrilleros. Una diferencia significativa^[204].

Si pasamos de los parientes a los enlaces, la represión apenas guardaba sentido de la medida. Se fusilaba sin trámites judiciales por casi todo: ser punto de apoyo o parecerlo, tener antecedentes izquierdistas o simplemente que alguien les adjudicara esos antecedentes. O por negocio. O Por ganas de matar. En una carta que el entonces teniente Manuel Prieto López envió al director de la Guardia Civil, recogida por Romero Navas, consignaba lo siguiente: «Consta que han matado a tantos y eso es mentira, esos no eran bandoleros, sino gente que estaban en un cortijo tranquilamente; y para sembrar el pánico, que no conduce prácticamente a nada, le han puesto una escopeta, le han metido cuatro tiros y lo han enterrado diciendo que se trataba de un bandolero». Incluso se podía fusilar por no calibrar los efectos de una broma. El día 4 de agosto, en la mina La Romana (Pozoblanco) se les aplicó la «ley de fugas», después de haberlos torturado durante la noche, a los jóvenes Juan Andrés Fuentes y Juan Moyano. La razón de su muerte arbitraria parece más una cuestión de sadismo que una causa política o de orden público. Los jóvenes habían estado en un prostíbulo de Pozoblanco llamado El Ciento y se habían negado a pagar la consumición diciendo: «Esto, que lo pague “Caraquemá”». Enterada la Guardia Civil, fueron detenidos y asesinados. En Villanueva de Córdoba, las ejecuciones extrajudiciales costaron la vida a una veintena de campesinos del pueblo. La situación alcanzó tal grado de irracionalidad, que algunos vecinos de derechas con un punto de sensatez y humanidad se dirigieron al Ayuntamiento y al cuartel de la Guardia Civil para detener aquella carnicería sin sentido. Según Moreno Gómez, como en Villanueva no había pretexto para perpetrar ajustes de cuentas, los guardias locales y civiles colocaron un petardo y una bandera republicana en un poste de la conducción de electricidad y arrojaron octavillas para culpar a los republicanos e iniciar la represión. Todas estas decisiones se tomaron en el llamado Casino de los Ricos, donde oficiales de la Benemérita y terratenientes de la comarca decidían sobre la vida y la muerte de las personas de izquierda. La comisión de crímenes amparados desde el estamento oficial no se detenía ante ningún obstáculo^[205].

El inventario de enlaces ejecutados resultaría prolijo (además de difícil cuantificación). Valgan como ejemplo, no obstante, algunos casos. En 1945 fue asesinado el maestro de Cortiguera (León), por su condición de enlace, y en 1947 eliminaron sin mediar trámites judiciales a Jaime Pérez en el pueblo leonés de Paradas. En el mes de enero de 1948, después de la matanza llevada a cabo con los guerrilleros asturianos, fueron detenidos cientos de enlaces. A uno de ellos, Emilio Rubiera, vecino del pueblo de Quintes, próximo a Villaviciosa, las fuerzas de represión lo quemaron en su propia casa junto con sus dos hijas. El 20 de enero de 1949 en los pueblos pacenses de Castuera, Malpartida, Cabeza del Buey, Helechal y Esparragosa de la Serena fueron detenidos cientos de campesinos, la mayoría de ellos sin relación alguna con la guerrilla extremeña, inexistente por estas fechas. La explicación para esa redada masiva estaba en la muerte por ahorcamiento en el término de Monterrubio de la Serena de un matrimonio formado por Consuelo Tomás y Francisco Benítez, acusados de ser confidentes de la Guardia Civil. Según relata Vila Izquierdo, la situación de los campesinos arrestados se tornó dramática: «Durante doce días fueron mantenidos con los ojos tapados, las manos atadas a las espaldas, siempre de pie, de día y de noche, recibiendo salvajes palizas». Después de ser torturados, fueron liberados 22 de ellos. El resto fueron llevados ante el juez de Castuera Enrique Eymar Fernández. Cuatro de ellos —Antonio Iglesias, Manuel Merino, Sinesio Calderón y Antonio Cortés— presentaban un estado tan penoso después de las torturas que resultaba delicado presentarlos ante el juez en tales condiciones. Decidieron sacarlos de la cárcel y aplicarles la «ley de fugas» en un monte de Helechal. Era la solución más económica y menos comprometida, que se generalizó por toda la geografía del maquis. En el territorio de la AGLA conocemos, gracias al trabajo de Fernanda Romeu, más de 40 casos en los que se aplicaron «soluciones extrajudiciales». Según Moreno Gómez: «En Córdoba, 121 campesinos fueron paseados por supuestos contactos con las guerrillas o por ser familiares. A mediados de 1948, habían caído así 588 en toda España, y pronto sobrepasaron el millar». Azuaga Rico y Romero Navas han constatado cómo se aplicó masiva y sistemáticamente la «ley de fugas» en Los Tablones de Motril en agosto de 1947, Almuñécar en octubre de ese año, en Algarinejo en septiembre de 1949, en Torrox en enero de 1950, en Salar y Loja en agosto de 1951.

El aliento exterminador de la dictadura a finales de los años cuarenta tuvo su paradigma en la matanza de socialistas asturianos en abril de 1948. Un guardia civil consiguió infiltrarse en las desarboladas organizaciones socialistas y contactar, según Juan Antonio Sacaluga, con tres militantes destacados —Jesús García, Enrique Suárez y Ramón Rodríguez, que también serían eliminados—, lo que permitió a las fuerzas de represión conocer la identidad de antiguos enlaces de los guerrilleros y también de los comités políticos del PSOE. Según el informe oficial elaborado por las

organizaciones socialistas, enviado a varios consulados británicos en España y al PSOE en el exilio, las brigadillas de la Guardia Civil detuvieron y mataron a 22 militantes socialistas de San Martín, Infiesto y Laviana. Según ese mismo relato, los antifranquistas, después de ser torturados, fueron arrojados a un pozo natural situado en Peña Mayor, el célebre Pozo Funeres. Testimonios de primera mano afirmaron que «los más venturosos murieron al chocar sus cuerpos contra el fondo; los más desdichados, para aumento de su sufrimiento, aún conservaron vida algunos días. Del pozo salían lamentos de agonía, que, unidos a un insoportable hedor, sirvieron para denunciar la tragedia. Los verdugos pusieron término a ésta haciendo estallar, entre los moribundos y cadáveres, cartuchos de dinamita y arrojando gasolina que las explosiones se encargaron de incendiar». Una versión más reciente, que debemos al ex boxeador José Ramón Gómez Fouz, sostiene que la matanza de Pozo Funeres fue organizada por el cabo Artemio y somatenes de Tuilla empleados en las minas de Duro Felguera, y que tenía como objetivo acabar con los restos de las partidas socialistas. Los guardias civiles y somatenes detenían de madrugada a un enlace y lo llevaban al borde del pozo. Allí lo interrogaban sobre el paradero de los guerrilleros socialistas y si no informaba, recibía un tiro y seguidamente era arrojado a la sima. Así, hasta ocho, que es el número que proporciona esta versión, que también asevera que ninguno de los enlaces pidió clemencia ni suministró información alguna. Para impedir la investigación del consulado británico de Gijón, que fue informado del episodio, la brigadilla arrojó bombas, llenaron el pozo de leña y prendieron fuego, ya muertos los enlaces. Según Santullano y Pérez, un pastor llamado Ramón Blanco pudo escuchar los quejidos y lo comunicó en el pueblo, muriendo a los pocos días de la impresión. Durante una semana se oyeron los lamentos, y varios vecinos de los pueblos subieron para intentar ayudarles, por lo que la Guardia Civil prohibió la subida al monte. Finalmente, se decidieron a utilizar la dinamita para acallar aquella agonía. Señalan estos autores que había algún comunista entre los asesinados.

La «ley de fugas», aplicada ya en los episodios coloniales de Cuba y Filipinas, y que había tenido su época de «apogeo legal» en los años 1920–1922 y durante la guerra y primeros tiempos de la posguerra, alcanzó en el «trienio del terror» (1947–1949) otra época de «gloria». Incluso superó las expectativas de quienes la habían impulsado. El general Martínez Anido había tenido un aplicado discípulo en Camilo Alonso Vega, director de la Guardia Civil.

La respuesta de los maquis

A partir de 1947, la dialéctica de las armas alcanzó su tiempo de apogeo. Las represalias efectuadas por las fuerzas de represión fueron respondidas por los maquis

con acciones de extrema dureza, que recordaban las sarracinas de las primeras fases de los huidos. La brutalidad de algunos episodios no solamente constituía una reacción a la política de exterminio del franquismo, sino que representaba la constatación de que la guerrilla se encontraba en un proceso de desintegración y no existía un control político de la misma. En el caso de León, la desaparición de la Federación de Guerrillas de León–Galicia motivó que los elementos políticamente menos conscientes se dedicaran, antes de marchar al extranjero, a zanjar asuntos personales y al margen de todo objetivo político. Eso fue, por ejemplo, lo que sucedió en el pueblo de Campelo, donde un elemento no identificado se presentó el 2 de febrero de 1948 y asesinó a Estefanía Díaz Abascal, Elena Ponce Díaz, hija de la anterior, y Constantina Santalla Santalla. La violencia y la desesperación alcanzaron tales niveles, que a la muerte se unieron rituales atávicos que sólo resultan comprensibles en un contexto de pánico. Así, el 12 de julio de 1949, en el término de Loma del Membrillar (Córdoba) tres guerrilleros ahorcaron a José Molina Díaz, un campesino de Villanueva que en dos ocasiones no sólo se había negado a socorrerles sino que además había avisado a la Guardia Civil. Conforme al código de la «justicia guerrillera», ello significaba la condena a muerte. Pero no se conformaron con matarlo, ya que además le seccionaron las orejas y los genitales. A la altura de 1949, y con un puñado de guerrilleros desperdigados, la acción ya no era ejemplarizante, sino fruto de la venganza y de la desesperación. Una anécdota narrada por Francisco Moreno Gómez, y ocurrida en la guerrilla cordobesa, explica la situación anímica de muchos guerrilleros después de la ofensiva de los franquistas. En las Navidades de 1948, guerrilleros como «Ratón» y «Los Lindos» participaron en un baile de aceituneros, y al finalizar el mismo se despidieron de los presentes advirtiéndoles de que les restaba poco tiempo de vida^[206].

La violencia de los guerrilleros se vertebró en torno a dos vectores esenciales: los ajustes de cuentas y el acoso a falangistas, confidentes y otros colaboradores policiales, verdaderas obsesiones de los maquis desde 1945. El primer procedimiento representó una excepción, pero el acoso implacable de confidentes y delatores constituyó la regla de oro de la resistencia. No era para menos, ya que la mayor parte de las bajas de los maquis se produjeron a partir de delaciones. La supervivencia de los hombres del monte estaba directamente relacionada con su capacidad para convencer o intimidar a los vecinos de los pueblos y evitar de ese modo las confidencias. Cuando las fuerzas de represión penetraron la red de enlaces y se multiplicaron los confidentes, tanto en la guerrilla como en el llano, la resistencia estaba herida de muerte. Por lo tanto, puede deducirse la relevancia que los maquis daban a cortar de raíz toda generalización de los chivatos, especie letal para los del monte. La política de venganza de los guerrilleros también se tradujo en ajustes de cuentas relacionados con asuntos familiares. Así, entre las personas represaliadas por

los guardias civiles estaban las mujeres de los guerrilleros, y la ejecución irregular de las esposas de dos de ellos provocó las acciones más mortíferas de la guerrilla levantino–aragonesa. Para las fuerzas de represión, eliminar a la mujer de un guerrillero conllevaba una realidad física y otra metafórica, como era privarlos de su «propiedad» más valiosa —conforme a los esquemas ideológicos de la época—, y los del monte respondieron de acuerdo con esa «tasación». Felisa Montoliu, esposa de Florencio Guillén García «Viejo» y madre de Florencio Guillén Montoliu «Frasquito», naturales de la localidad de Gúdar, fue detenida por la Guardia Civil y apareció muerta pocos días después en Mora de Rubielos. Aunque las autoridades hablaron de suicidio, su marido testimonió que había sido «asesinada a palos por parte de la Guardia Civil». El 28 de septiembre de 1947, y después de un «juicio popular», los guerrilleros llevaron a cabo una durísima venganza en la citada localidad, ejecutando a ocho personas de la misma familia, incluidos tres niños. No participaron en la acción ni «Viejo» ni «Frasquito». Otro suceso que conmocionó al Maestrazgo se produjo el 16 de junio de 1947 en la carretera de Alcañiz a Cantavieja, cerca de Mas de las Matas, donde los guerrilleros propiciaron la muerte de un cabo de la Guardia Civil, Sebastián Rodríguez Hernández, y de un médico, además de resultar heridos dos números, el juez y el secretario. Previamente los guerrilleros habían ahorcado a un masovero de Monroyo acusado de delación, Emilio Andreu, y colocado debajo de su cuerpo una bomba que explotó cuando las autoridades policiales y civiles se acercaron a levantar el cadáver. El atentado fue realizado posiblemente por la partida de José Mir «Cona», cuya mujer había desaparecido de la cárcel de Alcañiz junto con varios vecinos a los que les habían aplicado la «ley de fugas». El 22 de abril de 1942, la partida de Honorio Molina «Comandante Honorio» asaltó una finca de Las Ventas con Peña Aguilera, en Toledo, y ejecutaron a su dueño, José Moreno Litón, que además era alcalde del municipio y farmacéutico. De la información aportada por Benito Díaz, se deduce que fue decapitado y además lo arrojaron fuera de la casa y lo despojaron de los pantalones. Según las versiones orales de la zona, el alcalde pretendió mantener relaciones con la mujer de un bracero, mujer de la que se sospechaba que era al mismo tiempo amante del jefe de la partida. La cabeza la abandonaron en una carretera de la zona^[207].

El objetivo central eran, no obstante, los confidentes. Según la publicación *Por la República*, el día 12 de marzo de 1947 los guerrilleros dieron muerte a Cristóbal Pros Pérez, de Nerja, al que acusaban de chivato y de que «por diez pesetas que le pagaba la guardia civil, se dedicaba a buscar nuestras unidades y denunciar a patriotas». En este caso, se produjo la circunstancia de que el muerto había estado en la cárcel de Vélez–Málaga tras haber sido asociado a los «Niños de la Noche», según Azuaga Rico. El caso de Pros Pérez no fue infrecuente en los años de la posguerra. Ciudadanos perseguidos por los franquistas que, una vez en libertad, aceptaban

colaborar con las autoridades. En la mayor parte de los casos, estas actividades se efectuaban por miedo a ser detenidos de nuevo o para congraciarse con los nuevos dueños del poder. Solamente en la comarca de Nerja los guerrilleros mataron entre 1947 y 1950, acusándolos de represores y confidentes, a Miguel Muelas Callejón, Paulino Fernández Ortega (éste fue secuestrado y lo mataron al no cobrar el rescate), Miguel Moreno González, Manuel García Franco y Manuel Gómez Sánchez. En los bolsillos de estos dos últimos se encontró una hoja en la que se podía leer: «Ésta es la justicia guerrillera para todo el que sirva de práctico, delate el lugar o paso de nuestras unidades: asimismo para todo el que se haya ensañado con nuestro pueblo». Para los maquis era muy importante consignar el motivo de estas ejecuciones, como prueba de que no era algo arbitrario y también como metáfora de poder. Al lado del cadáver de un masovero ejecutado, dejaron la siguiente nota: «Ajusticiado Ricardo Villanueva por delator de las guerrillas y como ejemplo». En la zona levantino–aragonesa, los guerrilleros también castigaron a los colaboradores de la Guardia Civil quemándoles las masías. En 1948 fueron pasto del fuego las masías «Chulilla», «Mas del Navarro», «Fortuño», «Casa Ricardo» y «Cutanda». También fueron ejecutados los masoveros en los tres primeros casos. La AGLA llevó a cabo numerosas ejecuciones de delatores. Reales o supuestos, porque no siempre podían contrastar las informaciones de los enlaces. El 23 de junio de 1947 un grupo de guerrilleros ejecutó al masovero de la «Ermita de San Bartolomé», en Vistabella (Castellón), calificado como confidente de la Guardia Civil. En enero de 1947 fue ejecutado el alcalde de Salinas de Hoz, que había participado en una celada contra un grupo guerrillero de la agrupación altoaragonesa. El 13 de febrero de 1948 ejecutaron al alcalde de El Cuervo (Teruel) y a su mujer, acusados también de confidentes^[208].

Una de las provincias donde se produjeron más represalias —llamadas en algún documento guerrillero «trabajos de ajusticiamiento»— contra los confidentes y delatores fue Córdoba, y tenemos noticias de ellas gracias al exhaustivo trabajo de Moreno Gómez. Como en las demás áreas, estas muertes preventivas se incrementaron a partir de 1947 y casi siempre en la habitual dinámica represión–contrarrepresión. En la guerrilla cordobesa, en 1947 fueron ejecutados por confidentes y delatores 13 personas y 17 más en 1948. Pero también se efectuaban eliminaciones con carácter retroactivo. El 18 de marzo de 1947 fue ahorcado Manuel Villaseca Arellano, responsable de la información que había conducido en 1942 a la matanza de Cerro Cascojo, donde habían perdido la vida seis huidos. El 28 de enero de 1948 llevaron a cabo en Villanueva del Rey la ejecución de otra «muerte aplazada» en la persona de Emiliano Espada Mahedero, tiroteado a la puerta de casa, y que había denunciado a la Guardia Civil la presencia en un chozo de su propiedad de tres guerrilleros, uno de los cuales murió en el combate que se entabló como consecuencia de la delación. Durante 1947 fueron ahorcados los ferroviarios Paulino

Cuenda y José María Oñoro (Fuenteovejuna), y los guardas Francisco Rayo Carmona (Valsequillo), Nicolás Alonso (término de Hornachuelos) y Pablo Martínez (Villaviciosa). El 28 de agosto fue pasado a cuchillo Gabriel Amat Flores en el término de Hinojosa. A todos ellos se les acusó de confidentes de la Guardia Civil. A finales de año, en el mes de diciembre, los jóvenes maquis «Caraquemá» y «Castaño» ahorcaban en el término de Pedroche a los hermanos Alfonso y Antonio Pozuelo Guijo, así como también a los hermanos Rodesindo y Antonio Marta Martín. El sistema de matar mediante la horca estaba muy extendido por todas las áreas guerrilleras, y la razón de utilizar este procedimiento tenía una explicación material y otra psicológica. La material era obvia: utilizar la horca era un método económico y silencioso. Pero existía otra explicación profunda: en las sociedades tradicionales morir ahorcado conllevaba simultáneamente la pérdida de la vida y el ultraje de la memoria.

En las guerrillas de la banda septentrional —Galicia, León, Asturias y Santander— las represalias contra los colaboradores policiales no fueron tan representativas, ya que también se produjeron menos delaciones. En parte, porque muchos guerrilleros vivían en los pueblos, en contacto con los vecinos y los familiares, y en las sociedades rurales denunciar a uno de los suyos significaba violentar el derecho de costumbres y los lazos de vecindad. En estas zonas apenas existió el confidente espontáneo, salvo los falangistas y los somatenes que se habían especializado en la delación. Por otra parte, los jefes de las comandancias recurrieron a la infiltración de elementos policiales en las partidas más que al acoso de los enlaces. Pese a todo, también se realizaron algunos ajustes de cuentas y ejecuciones de confidentes. En 1947, en La Coruña, una partida de guerrilleros ejecutó en las proximidades de El Ferrol a un notorio colaborador de las fuerzas represivas, Cayetano «Sutách», y lo hizo respetando las normas guerrilleras y las costumbres locales. Antes de matarlo, tuvo un «juicio popular» y, una vez condenado, los maquis requirieron la presencia de un cura para que pudiera confesarse. En el mes de marzo de 1948, un grupo de guerrilleros llegaron al pueblo asturiano de La Rehollada, donde vivía un confidente del guardia civil Díaz, del puesto de Pola de Laviana y uno de los perseguidores más cualificados de los guerrilleros. Una delación había ocasionado tres días antes la muerte de un enlace sexagenario del maquis. Como consecuencia de la represalia fueron ejecutados dos matrimonios, Eugenio Fernández Álvarez (el presunto confidente) y Honorina Noriega Alonso y los tíos de Honorina, Justo Noriega Alonso y Mercedes Criado Castaño. Las mujeres fueron fusiladas y los maridos, muertos a palos. El 17 de julio de 1948, los maquis secuestraron a José Suárez García pero, una vez pagado el rescate, lo sometieron a juicio y condenaron a muerte por cuatro votos contra tres. La sentencia se cumplió en el pueblo de Blimea. El 20 de febrero de 1949, en el pueblo de Peñueles (Asturias), Quintana y «Rubio» liquidaron a un

conocido somatenista llamado Adelino Suárez Suárez «Macho». El 24 de abril y el 3 de julio de 1951 los guerrilleros efectuaron dos devastadoras operaciones de represalia contra familias que los del monte consideraban vinculadas a las fuerzas de represión. En el primer caso, mataron a un matrimonio y sus cuatro hijos en Soto de Lorio, y en la segunda fecha, a cuatro miembros de una familia y al alcalde de Sevares. Esta última matanza fue una venganza llevada a cabo, posiblemente, por uno de «Los Maricos», Manuel Fernández «Peque», porque un miembro de esa familia atacada, que no se encontraba en el pueblo y salvó la vida, había denunciado a los guerrilleros y provocado la muerte de otro hermano «Marico», Marcelino. Los estatutos de la Federación de Guerrillas de León–Galicia condenaban a muerte a traidores y confidentes, y esos estatutos fueron aplicados con la muchacha de Odollo que había denunciado la presencia de los guerrilleros en una casa del pueblo leonés de Columbianos. En el verano de 1947, dos años después del suceso, los agentes del llano informaron a los guerrilleros de que Evangelina se desplazaba a su pueblo, que estaba en fiestas, acompañada por dos miembros de la Benemérita de Ponferrada. Una vez que la escolta la dejó en la casa familiar, dos guerrilleros llamaron a la puerta y allí mismo la ejecutaron^[209].

Expropiadores y bandidos

Desde el rigor conceptual, y orillando controversias antihistóricas, no existen razones técnicas para negar la condición de guerrilleros a los hombres y mujeres que se levantaron en armas contra la dictadura franquista a mediados de los años cuarenta. Tampoco parece legítimo cuestionar su condición de herederos (anacrónicos) de la República de 1931: eran los últimos soldados republicanos. Los calificativos popularizados por el régimen —bandoleros, forajidos, delincuentes, etcétera— estaban basados en consideraciones de utilitarismo político e ideológico, al margen de cualquier categoría científica (como observa Espinosa Maestre, resulta paradójico llamar bandidos a quienes se condena en consejos de guerra fundamentados en bandos de guerra). Incluso los mismos franquistas se vieron en la necesidad de utilizar el contrasentido para desinformar sobre la resistencia armada. La expresión «bandoleros rojos» era en sí misma una contradicción del discurso anatematizador. No obstante, desde el principio se fue imponiendo entre los ciudadanos el término maquis. Prohibida por orden de la Dirección General de Seguridad la palabra guerrillero —e incluso incomprensible para muchos—, maquis era un concepto neutral, una especie de artefacto semántico destinado a expresar unas afinidades ideológicas que estaban prohibidas por los códigos de la dictadura. Derivado del curso *machia* (que se refiere a un tipo de formación vegetal mediterránea compuesta

por matorral y monte bajo), maquis eran las bases ubicadas en las montañas que utilizaban los combatientes españoles en la Resistencia francesa contra los alemanes. Quienes actuaban desde los maquis recibieron el nombre de *maquisards*. Sin embargo, una metonimia popular permitió modificar en España el significado y maquis ya no eran las bases de los guerrilleros sino los guerrilleros mismos (y también la guerrilla). A partir de entonces, los propios resistentes y los enlaces que los apoyaban aceptaron y extendieron el término maquis (y el singular maqui o maquí), al igual que hicieron con otras palabras como paracutista o radista. No debería existir dificultad alguna para que consideremos maquis y guerrillero —pese a la rotundidad de esta palabra, una de las pocas aportaciones del castellano al acervo lingüístico universal— en igualdad de condiciones para denominar a los combatientes contra la dictadura. Pero en la guerrilla de posguerra también existieron, aunque en número reducido, otras tipologías, como fueron los expropiadores sociales y, excepcionalmente, los bandidos.

Serafín Fernández Ramón «Santeiro» era natural de la aldea leonesa de Guímara, y fue un huido al que puede atribuírsele el calificativo de expropiador social. Abominado por las autoridades y representantes locales del poder franquista, que le adjudicaron prácticamente todas las muertes y atracos ocurridos entre los términos bercianos de Fornela y Candín y el asturiano de Ibias, jamás se integró en la Federación de Guerrillas de León–Galicia. César Ríos, jefe guerrillero, escribe que «era un anarquista que huía de toda disciplina, pero que había puesto al servicio de la Federación la mayoría de los puntos de apoyo que tenía por los valles de Fornela y Aneares, donde era muy conocido. Mantenía buenas relaciones con nosotros y se había comprometido a no cometer actos condenados por la Federación (...). Hay que tener en cuenta que ciertos actos salvajes que nos atribuyeron eran cometidos por individuos anónimos que se aprovecharon de las circunstancias actuando en nuestro nombre, cuando no eran aviesamente preparados por las fuerzas represivas a fin de desprestigiarnos. Yo, como jefe de la 1.^a Agrupación, nunca tuve informes de los actos que le atribuyeron a “Santeiro”». Las autoridades franquistas, en su obsesión por identificar la lucha armada con el bandolerismo, siempre inculpaban de los hechos subversivos a los hombres del monte menos identificados con la organización comunista y más conocidos entre la gente. Individualizando a los autores del movimiento insurreccional, resolvían el problema de la propaganda: eran bandoleros individuales y no miembros de una organización política quienes alteraban el orden público. Ocurrió lo mismo en Galicia con «Foucellas», en Asturias con «Bernabé» o en Cuenca con «Manco de la Pesquera».

La actitud de «Santeiro» ante la lucha armada resulta, pese a todo, difícil de delimitar con precisión. Incluso en estudios rigurosos se le ha denominado como bandolero. Pero esa definición tan drástica no correspondía a la realidad. Serafín

Fernández Ramón, jornalero, minero y cenetista, luchó en el frente asturiano hasta su caída en 1937, regresando a continuación al valle de Fornela e iniciando una postura de rebeldía contra el régimen que tuvo su principio en la negativa a incorporarse al Ejército sublevado y el final con su muerte en 1947. Natural de una comarca económicamente deprimida —de una miseria que espantaba incluso en el contexto de la época—, el libertario de Guímara contó con el apoyo de una parte importante de la población de Fornela, en León, e Ibias, en Asturias. Nadie en aquellos valles astur-leoneses lo habría calificado, más allá del insulto o la querrela ideológica, como bandido. Incluso gozó de la amistad y apoyo de un médico de probada honradez personal y capacidad intelectual, como fue el doctor Lodario Gabela Yáñez. Sobrevivir en un territorio donde ni robar se podía —era difícil atracar a personas pobres de solemnidad—, sólo podía hacerse mediante una importante red de apoyos, y analizando las circunstancias y la actividad de «Santeiro» podemos deducir que, más que bandido en el sentido fuerte de la palabra, el rebelde de Guímara estaba próximo a lo que Eric J. Hobsbawm tipificó como expropiador social, «que podría llamarse cuasibandidismo, es decir, a los revolucionarios que no pertenecen directamente al mando originario de Robin de los bosques pero que, de una manera u otra, adoptan sus métodos y quizás incluso su mito». El historiador inglés aduce razones ideológicas y tácticas para explicarlo. Las primeras estarían referidas al choque que supone la aceptación de ideologías nuevas, sin sedimentar, en parte por una formación inadecuada o deficiente, en parte porque la ideología tradicional pervive en ellos, generándose una realidad contradictoria entre un ideario reformista y otro revolucionario, lo que conduce a una suerte de «ideología flotante». Estas dificultades se verán acentuadas porque en realidad eran hombres de acción y no teóricos. En cuanto a la cuestión táctica, parece evidente que la guerrilla estuvo obligada a utilizar métodos y procedimientos similares a los grupos anti-ley, lo que, en determinados casos, originaba una cierta confusión.

Inmersos en contradicciones, «el término expropiación se fue imponiendo entre ellos», oscilando entre un componente moral arraigado y tradicional, propio del medio en el que se movían, y una praxis cercana a lo que Hobsbawm llama «pistoleros con fundamento ideológico». No eran bandidos, pero tampoco guerrilleros en sentido estricto: aunque los expropiadores militaban generalmente en formaciones sindicales anarquistas, en realidad la expresión de estos hombres era la violencia, fruto de una visión maniquea de la sociedad. Si, por una parte, no estaban capacitados para analizar el devenir histórico, por la otra tampoco se sometían a la ortodoxia de los aparatos ideológicos de las organizaciones a las que pertenecían y pretendían controlarlos. Pero incluso en situaciones extremas buscaron el apoyo y la cobertura de esas organizaciones. Sus esquemas eran voluntaristas, y pensaban que su acción individual obligaría a las clases menos favorecidas a un levantamiento

popular, espontáneo. Aunque también participaban ocasionalmente en acciones colectivas. En 1942, «Santeiro» colaboró en una operación para liberar presos en el Destacamento Penal de Fabero. Al final, estos hombres terminaban siendo marginados por sus propias organizaciones, y aunque prosiguieron con sus acciones individuales, el hecho de verse privados de apoyo ideológico agudizó su moral tradicional: sólo ellos eran capaces de ver la verdad, sólo existía su verdad. El mundo se dividía, entonces, irremediablemente y sin posibilidades de pacto. Entre el heroísmo individual y la irracionalidad política, los expropiadores sociales acabaron en el territorio de la leyenda, pero las leyendas no desencadenan las revoluciones. Al contrario, se configuran como un factor de alienación de las zonas que las segregan: ésa sería la línea política de «Santeiro».

Serafín Fernández Ramón, como los «rebeldes primitivos», se echó al monte después de ejercer en la práctica una justicia también «primitiva». En efecto, su padre, Felipe, era «santeiro» de la Virgen de Trascastro, y con la santa a caballo se ganaba la vida por los valles de Ibias y Fornela. Un día regresó el caballo con la Virgen pero sin el «santeiro»: un molinero de la comarca de Ibias lo había asesinado con una batidera, con intención de robarle, y luego lo arrojó por un puente. Este hecho, que había ocurrido antes de la guerra, tendría repercusiones para el futuro de Fernández Ramón. Caído el frente Norte en 1937, lo primero que hizo el «hijo del santeiro» al volver de la guerra fue ejecutar al asesino de su padre, situándose al margen de la ley doblemente: por un delito común y por otro de naturaleza política, como era el de haber luchado a favor de la República. Pese a su fama —o precisamente debido a ella—, se desconoce una parte importante de la trayectoria de «Santeiro». Las autoridades le atribuyeron las siguientes muertes: un guardia civil y tres soldados en el puerto de Connio, en la carretera de Cangas de Narcea a San Antolín de Ibias, en Asturias (22 de marzo de 1942); al párroco de la aldea de Folgoso de Caurel (Lugo), Benigno García Méndez (23 de octubre de 1942); a un matrimonio de Folguetas de Boiro y a un «meirazo» y a su hijo en Dou (finales de 1945). A estas muertes hay que añadir numerosos atracos y raterías. Pero esos asesinatos, como otros que se refieren a los guerrilleros, son atribuidos, y como tales, en muchos casos difícil de determinar su autoría por el alto índice de delincuencia común en la época. Sobre el tema de los «espontáneos y circunstanciales», el teniente coronel de la Guardia Civil Eduardo Munilla escribe que «la experiencia revela que una gran cantidad de hechos que se producen en zonas de bandoleros no son realizados por éstos, sino por habitantes de la comarca que se aprovechan de ellos. A estos casos nos referimos al hablar de los reflejos del bandolerismo (...). Los bandoleros son una buena pantalla para muchas cosas. Abundan los que se benefician de las incursiones de los bandoleros, para hacer por su cuenta las suyas propias. Al amparo del terror impuesto por las partidas, el simple delincuente pone en práctica

procedimientos similares y comete delitos aparentemente realizados por aquéllos, mientras su autor o autores duermen tranquilamente en sus casas». Los expropiadores no solían hostigar a los guardias civiles, y éstos también intentaban evitarlos. En ocasiones, funcionaba una especie de pacto entre ellos para repartirse unos roles perfectamente codificados y que permitían vivir a ambos sin apenas sobresaltos. Los expropiadores, pragmáticos como los campesinos entre los que se movían y guiados por el sentido común, sabían que ellos tenían sólo una vida y guardias había cientos de miles. Atentar contra los guardias sin una razón de peso entraba en el terreno de la estupidez.

Pero los expropiadores sociales, pese a la invulnerabilidad que les atribuyen las leyendas, terminan encontrándose con su destino, y es un destino de muerte violenta. «Santeiro» no fue una excepción. Aunque durante 1946 y parte de 1947 la partida que comandaba permaneció inactiva para las autoridades, el 27 de noviembre de 1947 asesinó a Concepción Pérez Cadena, y la fuerza pública consiguió seguirle la pista. Pese a que los diferentes autores describen un enfrentamiento seguido de muerte el 5 de diciembre de ese año, lo cierto fue que logró huir con tres compañeros de partida y un enlace, y fueron estos compañeros quienes por error dispararon a «Santeiro». Estaba herido de gravedad, lo que se añadía a una enfermedad contagiosa que la ausencia del doctor Gabela hacía que sobrelleva con dificultad. En una casa de Penedelo, donde se escondía, tomó la decisión de suicidarse. Apareció el 6 de diciembre a dos kilómetros del pueblo, y los vecinos lo encontraron en posición sedente, apoyada la espalda en un árbol que estaba atravesado en un riachuelo. Había nevado, y sus pisadas en la nieve certificaban que no había sido llevado ya cadáver: la masa encefálica desparramada por la nieve y la pistola al alcance de la mano describían la naturaleza de su muerte. Ya cadáver —según el certificado de defunción, su muerte ocurrió a las 16 horas—, un somatenista se permitió la «audacia» de dispararle varios tiros. Llevaba una chaqueta azul, un pantalón de pana negra y boina. También unas hermosas botas que luego paseó, para estupor de los vecinos, un falangista de la comarca. Las autoridades religiosas —siguiendo las normas vigentes en la época— no autorizaron su entierro en el cementerio de Vega de Espinareda. Todavía las gentes de la comarca recuerdan que fue numeroso público al entierro —«a ver muerto al Santeiro»—, y que un hombrecillo era arrastrado hasta las tapias del cementerio con los pantalones caídos (le habían robado hasta el cinto). Había muerto «Santeiro», y empezaba a perfilarse la leyenda^[210].

Utilizamos la figura de «Santeiro» como paradigma de otros expropiadores que existieron en los territorios de maquis. Individuos que, por lo general, profesaban una ideología anarquista (aunque sería más preciso emplear la expresión creencia anarquista), partidarios de la acción e incapaces de reflexionar sobre la naturaleza de sus actividades. Próximos a las teorías milenaristas de salvación social, actuaban en

las zonas de las que eran nativos, con lo que se aseguraban el apoyo de un segmento importante de la población, bien por miedo, bien por amistad, simpatía o lazos familiares. En muchos de los casos, las comarcas por las que se movían los convirtieron en héroes. Una parte de ellos no aceptó incorporarse en las organizaciones comunistas, pero tampoco se enfrentaron a ellas. Otros, por el contrario, sí lo hicieron aunque manteniendo siempre un reducto de libertad con respecto a las agrupaciones, que en ocasiones toleraron estas actuaciones individualistas de los libertarios y otras veces las reprimieron duramente. Algunos anarquistas fueron ejecutados por los tribunales guerrilleros en los montes de España acusados de «desviacionismo» o formulaciones parecidas. Estos expropiadores eran simultáneamente «autónomos» (operaban individualmente o en grupos reducidos) y «autóctonos» (lo hacían en las proximidades de las comarcas de las que eran nativos). También el imaginario popular les asignaba cualidades en grado extremo: audaces y precavidos, temerarios y sagaces, bondadosos y justicieros.

El inventario de expropiadores sociales nos obliga a mencionar a muchos de los más famosos y recordados hombres de la sierra durante la posguerra. Compartirían en mayor o menor grado con «Santeiro» la calificación de expropiadores sociales Benigno Andrade García «Foucellas» en La Coruña, Luis Trigo Chao «Guardarríos» en Lugo, Alfredo Yáñez Domínguez «Aguirre» en Orense, Juan Fernández Ayala «Juanín» en Santander, José Méndez Jaramago «Manco de Agudo» en Ciudad Real, Alfonso Sánchez Gómez «Potaje» en Cádiz, Manuel Ramos Rueda en León, Lisardo García García en Asturias o Basilio Serrano Valero «Manco de la Pesquera» en Cuenca. También los guerrilleros catalanes José Luis Facerías y Francisco Sabaté «Quico», que practicaron la resistencia urbana, pueden ser residenciados en este apartado, y «Quico» además sirvió de ejemplo a Hobsbawm para dibujar la tipología del expropiador social. Algunos de estos guerrilleros —«Manco de Agudo», «Manco de la Pesquera» o «Quico»— practicaron una verdadera incontinencia armada.

La permanencia en el monte a partir de 1950 provocó que combatientes antifranquistas, a los que nadie había negado su condición de guerrilleros, terminaran siendo vistos como expropiadores o bandidos en el lenguaje coloquial. El ejemplo más acabado fue el de Juan Fernández Ayala «Juanín», un maquis comprometido políticamente, miembro del Partido Comunista y personaje decisivo en la Agrupación de Santander, al que su estancia en los montes lebaniegos, hasta su muerte en 1957, convirtió en una suerte de «bandido generoso». El origen de la lucha en el cántabro resultaba nítidamente política, lo mismo que su evolución, pero su prolongada estancia en el monte motivó que en los últimos años de resistencia ninguna formación política le aportara el soporte de legitimidad necesario para proseguir con la violencia revolucionaria. Un combatiente contra un régimen dictatorial que está al margen de las organizaciones emancipadoras se convierte en un «delincuente de origen político»

o, menos técnicamente, en un elemento aislado incapaz de manejar una situación que lo ha superado. Los golpes económicos se convierten entonces en atracos y las represalias políticas, en venganzas personales. Este mismo ejemplo de guerrilleros anacrónicos, fuera del tiempo, lo representaron en Levante Francisco Serrano Iranzo «Francisco» y Teresa Pía Meseguer «Pastora». El primero, simpatizante de Izquierda Republicana, se echó al monte por la misma razón que numerosos huidos y guerrilleros: el hostigamiento al que era sometido por las fuerzas de represión por la única razón de tener un familiar —un hermano en este caso— en el monte. Cansado de presiones, amenazas y palizas, decidió cortocircuitar un modo de vida sin futuro incorporándose a la resistencia. En el caso de la segunda, huyó al monte, conforme la versión popular, cuando unos guardias civiles la violentaron tratando de aclarar su identidad sexual. Aunque en teoría se integraron en la AGLA (en los informes del SIGC, Serrano Iranzo aparece consignado en 1950 como secretario de organización del comité de grupo correspondiente al 23.º Sector), en realidad constituyeron una partida independiente. En el límite entre la lucha política y la rebeldía contra el poder establecido, sus acciones, incluso las venganzas personales y los golpes económicos, estuvieron atravesadas de connotaciones ideológicas. Para el expropiador social, pero también para el combatiente político, restaurar el «orden primitivo» significaba proteger la justicia, y de esa justicia popular no debían quedar excluidos sus familiares. La esposa de Serrano Iranzo estuvo en la cárcel repetidamente, le quemaron la masía y la sometieron, al igual que al resto de la familia, a una vigilancia constante y represiva. Según la versión más repetida, Serrano Iranzo fue asesinado por un amigo. La condición de «bandoleros», conforme al criterio popular, no les vino dada por sus actos sino porque en la época en la que seguían actuando había desaparecido oficialmente la resistencia armada^[211].

También como expropiadores sociales, aunque con unas formas más próximas al bandolerismo, se manifestaron dos elementos de Aguaviva, José Ramiá Ciprés «Petrol» y Fernando Castel «Rabos», cuyas biografías conocemos a través de Mercedes Yusta Rodrigo. Iniciados en la guerrilla por cuestiones políticas, ya que eran anarquistas y estaban condenados a muerte al concluir la guerra civil, se relacionaron con la AGLA pero ocasionalmente, ya que formaron una partida independiente. Los golpes económicos y las represalias de «Petrol» y «Rabos» aparecen como políticos —dirigidos contra las fuerzas de represión y las autoridades franquistas—, pero conforme pasaba el tiempo se deslizaban hacia los límites del bandolerismo, con unas actuaciones cada vez menos ortodoxas. El 6 de mayo de 1946 «Rabos» fue abatido por la Guardia Civil en una masía de la Cerollera (Teruel), en la que estaba escondido. Según la Guardia Civil, la muerte se produjo como resultado de un tiroteo. Pero la versión local apunta a una muerte sin resistencia, incluso se cuenta que tuvieron que rematarlo porque, como consecuencia de las palizas, había

quedado irreconocible. «Petrol» murió en 1946 ejecutado por otro guerrillero, ajusticiado por parte de los comunistas, versión en la que coinciden tanto las fuentes de la Guardia Civil como las del PCE. Según la prensa comunista: «El día 24 de diciembre, Nochebuena, fue ajusticiado por nuestras fuerzas del sector décimo séptimo el bandolero “Petrol”, por tener al pueblo aterrorizado con sus fechorías. Con esta acción demostramos, una vez más, cómo los guerrilleros somos los auténticos defensores del pueblo contra todos sus verdugos y perseguidores». Pero también las versiones del PCE, siempre interesadas, tienen que ser contrastadas, porque en determinadas épocas los comunistas presentaban sistemas de descalificación parecidos a los franquistas. Un ejemplo es la afirmación de José Gros, guía de guerrilleros y comunista ortodoxo, sobre «Manco de la Pesquera»: «No era comunista, ni anarquista, ni republicano. Tenía una mentalidad especial. Creo que más que guerrillero era un asaltacaminos, pero odiaba al régimen franquista. Había perdido la mano izquierda con un cartucho de dinamita. Era indisciplinado, hacía lo que le daba la gana y sin contar con nadie. Había que tener cuidado con él». Depurado de ciertos juicios de valor, era un buen retrato de los expropiadores sociales^[212].

En Asturias se dieron algunos casos intermedios entre el expropiador social y el bandido, como José Fernández «Pin de Dimas» y Florentino Picó. El primero, poco antes de la guerra se había ofrecido a Falange «para cualquier puesto de acción» en su pueblo natal, Cadavedo, y lo hizo porque pasaba hambre y no por cuestiones políticas. Cuando consiguió trabajo en unas obras dirigidas por los socialistas, «Pin de Dimas» se convirtió en ejemplar militante del PSOE porque lo obligado era afiliarse. Con el tiempo perfiló una ideología a la carta, en función de sus necesidades. Pero la nueva posición ideológica le trajo a este militante de ocasión problemas cuando estalló la guerra civil. Los falangistas gallegos —verdugos especializados de asturianos y leoneses— asesinaron a su hermano, y él mismo fue detenido y apaleado repetidamente cuando cayó el frente asturiano. Pero «Pin de Dimas», que se echó al monte después de escapar de un batallón de trabajadores, apenas desarrolla actividades armadas. En su haber tiene la ejecución de un compañero, que era confidente de la policía, y pequeñas raterías en las comarcas por las que había vivido y trabajado antes de convertirse en huido. Sin embargo, todo lo que sucedía en esas zonas le era adjudicado a «Pin de Dimas», tanto por parte de las fuerzas represivas como por los vecinos. Los primeros, con el fin de desprestigiarlo; los segundos, con admiración. Un personaje parecido fue Florencio Picó «Maestro de Villarmeirín», natural de Muñás, que capitaneaba un grupo en Los Oseos y que en ocasiones contactó con «Pin de Dimas». Picó se desplazó posteriormente a El Bierzo leonés, donde dirigió una partida de huidos. Fue eliminado junto con cinco compañeros en el pueblo de Cañedo en 1941^[213].

Aparte de los guerrilleros, la mayoría, y de los expropiadores, una minoría, también existieron, aunque excepcionalmente, bandidos en sentido estricto. Dicho con las cautelas y los matices de rigor ante personas que vivieron situaciones extraordinarias. Y tal vez el ejemplo más perfilado de bandido lo aportó el asturiano José Bernabé Ruenes Santoveña «Bernabé». Desde luego, fue el más popular, sin parangón en el resto de España. Hasta tal punto, que el poeta asturiano Celso Amieva narró a Eduardo Pons Prades que los llaniscos asturianos que residían en México habían visto a «Bernabé» trabajando de vendedor ambulante. Santullano y Pérez, en su trabajo sobre el maquis asturiano, recogieron testimonios en Llanes de personas que lo habían visto y reconocido en los últimos años.

A diferencia de los expropiadores, «Bernabé» no había escapado al monte por cuestiones políticas sino por asuntos personales. Una pelea con un cabo del Regimiento de Villaviciosa le costó una condena de 30 años de cárcel y, ante la situación creada, se convirtió en prófugo en el año 1946. Nunca se integró en las organizaciones guerrilleras, ni socialista ni comunista, y, aunque estuvo algunas temporadas con el santanderino «Juanín» y el asturiano Manolo «Caxigal», jamás entró en sus proyectos participar en la lucha antifranquista. Coincidió en el monte — generalmente, en la sierra del Cuera, en el oriente de Asturias— con los guerrilleros y se aprovechaba de ellos si podía, pero nada más (y sólo contactó con algunos guerrilleros individuales a partir de 1948). Los atracos y muertes que llevó a cabo — manifestó especial predilección por los indianos, a los que suponía una alta posición económica y abundaban en la comarca de Llanes— no tenían componente político alguno. Aunque mató a varios policías y algún somatén, lo hizo al margen de cualquier consideración política: sólo existían razones de defensa o de venganza. Apartidario y ajeno a ideologías de cualquier tipo, merodeaba en solitario o apoyado en un compañero. Y será un compañero, Eduardo Carlos Álvarez («Dientes de oro» o «Boquita de oro»), quien lo matará a golpes en el verano de 1952 con una «parrilla de machacar grava» (Gómez Fouz) o «martillo de picar piedra» (Santullano) en la casa de un enlace de Cardegoda, debido a que «Bernabé», que había sido herido en 1950 por una bala que le penetró la pleura, enfermó gravemente de encefalitis y, en su delirio, pedía a gritos la presencia de un médico. No deja de sorprender y extrañar que el maquis más famoso de Asturias era el único al que podía aplicársele el calificativo de bandolero. Definitivamente, el maquis constituyó «lucha borrosa»^[214].

El final de la Federación y la decadencia del Ejército Guerrillero

Asistimos durante este trienio al final de la resistencia organizada en la provincia de

León. El Congreso de Reunificación entre socialistas y comunistas había resultado un fracaso, y el corolario se tradujo en la desintegración de la Federación de Guerrillas de León–Galicia. En enero de 1947, el jefe de la Federación, Marcelino Fernández Villanueva «Gafas», intentó por última vez solucionar el contencioso con los comunistas aunque fracasó en el empeño y el interés del responsable federacionista y de sus compañeros se desplazó hacia la manera de marchar al extranjero. Sus propuestas, como sabemos, encontraron eco entre los socialistas del exilio y los asturianos del monte. La decisión de huir fechó el final de la Federación, y mientras exploraban las posibilidades de escapar a Francia, los guerrilleros socialistas y comunistas merodeaban por las diferentes zonas de la antigua guerrilla. Todavía a finales de 1948 se produjo la subida al monte de un enlace quemado, Bernardo Álvarez Trabaja «Gasta». Época de redefiniciones y cambios, a finales de 1948 empezó a despejarse el panorama de los antiguos guerrilleros. Mientras los socialistas y libertarios habían escapado o estaban a punto de hacerlo, uno de los federacionistas históricos más prestigiosos, Manuel Girón Bazán, decidió incorporarse con sus hombres al Ejército Guerrillero de Galicia aunque manteniéndose en sus bases de la provincia de León, especialmente en la comarca de la Cabrera. La partida quedó integrada en la 2.ª Agrupación del Ejército Guerrillero, y recibían las consignas del grupo de «Rocesvinto» y Guillermo Morán, que habían pertenecido a la Federación y ahora estaban en Orense, también en la 2.ª Agrupación del Ejército, formando parte del destacamento Santiago Carrillo.

El año 1949 fue especialmente trágico para los veteranos maquis de la Federación. Como resultado de una delación, la noche del 24 de febrero fueron abatidos dos de ellos, Alfonso Rodríguez López y Enrique Orozco. Otra denuncia permitió que, el 17 de marzo de 1949, las fuerzas de represión pudieran sitiar en el pueblo de Villasinde a cuatro guerrilleros y a una enlace que hacía vida en el monte. En el combate murieron Elpidia Morán Alonso, Hilario Álvarez Méndez y Abelardo Macías Fernández «Liebre», que había participado en todas las fases de la resistencia leonesa desde 1936. Consiguieron librarse de la muerte, y escapar posteriormente a Francia, Victorino Nieto y Oliveros Fernández Armada «Negrín». Un mes después de la emboscada de Villasinde era eliminada una parte representativa de los hombres de la Federación que se había pasado a la guerrilla comunista y que significaba, además, el final de la 2.ª Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia. Sorprendidos en dos casas de la aldea lucense de Chavaga, un elevado número de guardias civiles rodeó las viviendas de los guerrilleros y se desencadenó un combate en el que se utilizaron hasta morteros. La resistencia de los maquis duró varias horas, ya que no estaban dispuestos a rendirse. El enfrentamiento se saldó con la muerte de Guillermo Morán, Julián Acebo Alberca «Guardiña» y Gregorio Colmenero cuando intentaban romper el cerco policial, y también cayeron, tal vez suicidados, Evaristo González Pérez

«Rocesvinto», Ramón López Casanova y María López Casanova. Consiguió huir, pese a lo desfavorable de la situación, Fermín Gutiérrez Lada «Segura» y fue detenida la compañera de «Rocesvinto», Luisa López Centeno.

La aniquilación de la 2.^a Agrupación del Ejército se completó el 28 de abril de 1949, ya que el comisario de la misma, Benigno Fraga Pita «Alejandro», murió en la sierra de San Mamede. Tan sólo quedaba como elemento importante Samuel Mayo Méndez, al que algunos enlaces y supervivientes acusaron de ser un infiltrado de la policía y responsable de la matanza de Chavaga. Estas acusaciones nunca pudieron ser comprobadas, y lo único cierto es que el antiguo jefe guerrillero se desplazó a La Coruña, donde se reincorporó a la 4.^a Agrupación, muriendo en una emboscada en Cesuras el 31 de mayo de 1950. Tanto la 2.^a Agrupación de Orense como la 5.^a de Pontevedra se encontraban desarticuladas en 1949. Las únicas que mantenían todavía una actividad significativa eran la 3.^a Agrupación de Lugo, en el sudeste de la provincia, y la 4.^a de La Coruña, la más emblemática e importante de todas, que no sólo era capaz de renovar sin problemas los efectivos guerrilleros sino que seguía contando con un apoyo popular único en España. Con el añadido de que este apoyo del pueblo no puede explicarse por remuneraciones económicas de los enlaces. A diferencia de Andalucía, Extremadura o Levante, los guerrilleros del norte apenas efectuaron golpes económicos con recaudaciones cuantiosas, y en ocasiones no eran capaces ni siquiera de pagar los gastos que ocasionaban en los pueblos donde vivían. Eran «guerrilleros pobres». Pero el apoyo popular no inmunizaba contra la muerte, ni siquiera a aquellos resistentes que estaban al margen de las organizaciones guerrilleras. Fue el caso del más conocido de los «autónomos» gallegos, Luis Trigo Chao «Guardarríos», que se movía por la comarca de Mondoñedo y había rechazado participar en las dos organizaciones guerrilleras, Federación y Ejército. La B P-S consiguió penetrar en la red de apoyos de la zona, y finalmente conoció el paradero de «Guardarríos». Localizado en una vivienda de Lourenzá, el 25 de junio de 1948 fue abatido por fuerzas de la brigadilla de Vivero junto con su compañera, la joven Engracia Díaz. De todos modos, no parecía una tarea complicada localizar a Trigo Chao, quien andaba a plena luz del día por las aldeas y caminos de la zona, según testimonio de «Gafas»^[215].

La 5.^a Agrupación de Pontevedra, que había sido fundada a finales de 1947, apenas tuvo presencia en la provincia, ya que fue una creación artificial a partir de la 4.^a de La Coruña con el objetivo de alimentar un foco armado que aliviara la presión que las fuerzas franquistas ejercían sobre los grupos armados de La Coruña y Lugo. Los jefes de la nueva agrupación procedían de la 4.^a, como era el caso de «Foucellas» o José Ramuñán Barreiro «Ricardito». Pero a diferencia de lo que ocurría en el resto de las áreas gallegas de maquis, en esta zona no había una tradición de huidos y maquis, y la época ya era lo suficientemente avanzada como para que los vecinos se

implicaran en una lucha marcada por la derrota. Los guerrilleros no encontraron, como en La Coruña, solidaridad sino indiferencia e incluso hostilidad. Después de comprobar que apenas mejoraba la implantación de la resistencia y de una serie de reveses, la agrupación parecía llevar aparejada la fecha de caducidad. El día 19 de mayo de 1948, cuatro maquis fueron localizados en la aldea de Loureiro–Luou–Teo (La Coruña), escondidos en un pajar. Dos fueron abatidos al intentar escapar de la casa, y los dos restantes cuando los guardias quemaron ésta y tuvieron que salir para no morir entre las llamas. Los guerrilleros caídos eran Manuel Agrasar Cajaraville «Barbarroja», Vicente López Novo, Florentino Menéndez «Tino el Asturiano» y Ricardo Fernández Caries. En el combate murió también el guardia civil Manuel Gordón Castro. Escaparon «Foucellas» y «Ricardito», los jefes del grupo. «Foucellas» abandonó la zona retirándose a Curtis. A pesar de que se efectuó un intento de reorganizar esta 5.ª Agrupación por parte de Melchor Díaz «Pepito», la primavera de 1949 señaló el final de una trayectoria corta e irregular^[216].

Pero la verdadera tragedia de la guerrilla y el comunismo gallegos estaba por llegar, y fue como consecuencia de otra infiltración (la verdadera pesadilla de la resistencia en Galicia). Alejo Pablo Mora, miembro del SIGC, consiguió introducirse en el Comité Regional del PCE de Galicia y acumular valiosas averiguaciones sobre la estructura y composición de la resistencia. Aunque fue descubierto y ejecutado en octubre de 1947, logró pasar la información que condujo a la catástrofe final del antifranquismo en Galicia. Todo empezó el 10 de julio de 1948 con la detención de Antonio Seoane, el jefe del maquis gallego, y de Josefina González Cudeiro. Los policías conocieron de ese modo que al día siguiente tenían una reunión con José Gómez Gayoso, máxima autoridad del comunismo, y María Blázquez del Pozo, militante comunista y «mujer oficial» del dirigente gallego. Cuando estos dos últimos llegaron a la cita, comprobaron que les abría un desconocido. María Blázquez comprendió al instante lo que ocurría y se abalanzó sobre el inesperado anfitrión para que Gómez Gayoso tuviera la posibilidad de escapar. Cuando bajaba las escaleras, no obstante, una bala le atravesó el ojo izquierdo. Aunque pudo salir de la casa, las heridas eran tan graves que fue detenido en la calle sin dificultad. Le esperaban intensas sesiones de torturas, que una correspondencia clandestina convirtió en manifiesto del antifranquismo. El 18 de octubre de 1948 se celebró el juicio en La Coruña contra Gómez Gayoso, Seoane Ramos, Josefina González Cudeiro, María Blázquez, José Rodríguez Campos, Clementina Gallego Abeledo y otros enlaces (además del médico José Bartrina y Carmen Orozco, que habían sido detenidos en Madrid).

Gómez Gayoso y Seoane Ramos, que habían llegado cuando la resistencia gallega estaba en proceso de consolidación, fueron los dirigentes más relevantes enviados desde el exterior con el fin de explorar las posibilidades de organizar una guerrilla

ofensiva. Aunque su detención no significó el desmantelamiento del partido ni del maquis en Galicia, guerrilleros y militantes fueron conscientes de que trazaba una línea de inflexión: a los desperfectos materiales y humanos se añadían los efectos psicológicos. De otra parte, los nuevos dirigentes, sobre todo Manuel Fernández Soto «Coronel Benito» y Francisco Rey Balbís «Moncho», iniciaron un proceso de «militarización» de las guerrillas que condujo, paradójicamente, a un repliegue de las mismas. La «militarización» hizo más frágiles y menos eficaces a las partidas y, sobre todo, causó estupor y rechazo entre los enlaces, que ahora parecían estar al servicio de maquis que imitaban a un ejército regular en la vestimenta y los saludos, y que se comportaban como si fueran fuerzas de ocupación y no compañeros de lucha, como hasta entonces. Si a ello añadimos que cada vez había menos guerrilleros «históricos» y «autóctonos», a quienes la población conocía y respetaba, se puede inferir que la resistencia gallega perdió a pasos agigantados los puntos de apoyo construidos trabajosamente durante años. Los nuevos maquis, jóvenes que desconocían el abecedario de la supervivencia y que trataban con insolencia a los enlaces, no tuvieron tiempo de comprender que eran las redes de solidaridad del campesinado gallego las que habían hecho posible la existencia misma de la guerrilla. Los carnés de guerrillero, el saludo castrense o el uso de grados y empleos militares eran ajenos a la cultura de la resistencia. El resultado de esta transformación y de la desconfianza de los enlaces, fue la aparición de los métodos estalinistas en tierras gallegas. Tanto Fernández Soto, al frente del Ejército Guerrillero, como Rey Balbís, que encabezaba la 4.^a Agrupación, empezaron a desconfiar de guerrilleros y enlaces, y se aprestaron a denunciar como provocadores y traidores a todos aquellos que disintieran de sus premisas. Según Heine, un enlace llegó a decir que temía más a «Moncho» que a la Guardia Civil. La creación de nuevos destacamentos representaba en realidad una huida hacia adelante^[217].

La 3.^a Agrupación de Lugo también empezó a manifestar una gran fragilidad después de la llegada de «Coronel Benito» al frente de los destinos del Ejército Guerrillero. Un miembro de la Guardia Civil, «Comandante Félix» o «Don Félix», consiguió no sólo infiltrarse en la cúpula de la guerrilla lucense sino entrar también en contacto con «Coronel Benito», a quien asesinó en Pena de Remesar cuatro meses después, el 22 de junio de 1949, matando también a Elías López Armesto y a un tercer guerrillero llamado «Emilio». Con las informaciones acumuladas por el confidente, las fuerzas represivas desmantelaron las redes de enlaces de Monforte, Puebla de Brollón, Bóveda y Chantada, lo que dejó herida de muerte a la 3.^a Agrupación. Dos consecuencias se derivaron de estos hechos. La primera, que «Piloto» (se encontraba en la casa del incidente pero pudo escapar) se desvinculó a partir de entonces de la organización comunista y se convirtió en una especie de «topo». Temía que los mandos comunistas lo responsabilizaran de la muerte de sus

compañeros. La segunda, que Senén Garrido, el enlace responsable involuntario de la infiltración, fue ejecutado en La Coruña. En el mes de junio de 1949, las fuerzas de orden público aniquilaron en Silán–Orol, al norte de Lugo, los restos del destacamento Segundo Vilaboy. Primero dieron muerte a Juan Gallego «Comandante», jefe del destacamento, Celia González Pernas y Juan Pérez Dopico «Xan de Genaro». José Pedreira de la Iglesia «Queimarán» y Josefa Escourido siguieron resistiendo, pero las fuerzas de represión optaron por quemar la choza y con ella a los guerrilleros. La muerte de «Coronel Benito», de quien muchos sospechaban que era un infiltrado —incluso se rumoreó que el Fernández Soto muerto no era el verdadero «Coronel Benito»—, representó el final del sueño guerrillero de Galicia aunque todavía se producirían tímidos intentos de reactivación en los siguientes años^[218].

Entre el 5 de marzo y el 16 de abril de 1949, el destacamento Eive–Carbón perdió a 6 hombres y dos mujeres en dos enfrentamientos en Negreira y Ciedra. La batalla definitiva contra la 4.^a Agrupación se produjo el 29 de octubre de 1949, cuando cerca de Pazos–Monfero fueron eliminados siete guerrilleros, entre ellos el responsable de la partida, Adolfo Allegue Allegue «Riqueche», y el jefe, José Temblás Paz. Como señala Heine, a partir de esta caída la 4.^a Agrupación dejó de ser el eje de la lucha antifranquista aunque continuó existiendo como entidad político–militar del PCE. El mismo día en que morían Temblás y seis compañeros, llegaba José Sevil para hacerse cargo del Comité Regional del PCE y, siguiendo las directrices de Toulouse, trataba de aplicar en Galicia lo que se había intentado en Levante: transformar hombres de armas en activistas políticos. Pero cambiar las denominaciones no alteraba la situación de los guerrilleros, incapaces además de aceptar unas actividades para las que no estaban capacitados. El Partido Comunista repetía una vez más una táctica tradicional: como no podía modificar la realidad, se inventaba una a la medida^[219].

Las matanzas de Monte Coya y Santo Emiliano en Asturias

La lucha en Asturias se caracterizó por una violencia extrema en ambas direcciones. Si, por una parte, los franquistas quisieron ajustar cuentas con los revolucionarios asturianos, por otra, los comunistas no recibieron los embates de la represión con pasividad, a la manera socialista, y respondieron con violencia a la brutalidad de los franquistas. La ausencia de un Estado Mayor que centralizara las decisiones tal vez favoreció el elevado número de represalias. Este trienio en Asturias está caracterizado por tres episodios acaecidos durante 1948: la sarracina de Monte Coya y Santo Emiliano (que provocó el mayor número de guerrilleros muertos de la historia del

maquis español), la matanza del Pozu Funeres, en abril, y la masiva huida de los socialistas en el mes de octubre.

En los montes asturianos prosiguió durante 1947 el conflicto soterrado entre socialistas y comunistas. Los primeros insistían en manejarse en la pasividad armada y, además, continuaban acusando a los comunistas por su actitud violenta con epítetos y argumentos semejantes a los empleados por los franquistas. En un informe a los dirigentes exiliados, recogido por Adolfo Fernández Pérez, José Mata escribía que «los comunistas alientan y practican el régimen de terror, el cual, naturalmente, produce sus víctimas en las filas antifranquistas». Pero en el mismo texto acepta que después de los hechos de Monte Coya y Santo Emiliano «el espíritu de venganza es casi general» y también lamenta que «esta juventud, sin experiencia política, sin educación política, con muchos defectos de importancia para su porvenir, ama los métodos expeditivos y justifica siempre el medio de lograr el fin». Los comunistas, por su parte, una vez que se impusieron los maquis procedentes de Francia, partidarios de impulsar una guerrilla ofensiva, despreciaban a los socialistas por su inhibición frente a los desmanes de la fuerza pública. La muerte de Baldomero Fernández Ladreda «Feria» confirmó la quiebra definitiva de la relación entre las dos ideologías dominantes, aunque a la altura de 1947 el antiguo comandante republicano ya se encontraba relegado del poder en la resistencia comunista. «Feria», pese a las diferencias tácticas, siempre trató de mantener la comunicación con los socialistas asturianos, compañeros en los campos de batalla del frente Norte. Pero el destino le depararía peor suerte al general miliciano que a sus antiguos compañeros socialistas. La confidencia de un militante comunista puso al inspector Claudio Ramos sobre su pista, siendo localizado, junto con Benjamín Fernández Fernández «Tito», en una casa de confianza de Moriera de Palomar. Aunque escondidos en un refugio de la vivienda habilitada expresamente para eludir los controles policiales, fueron detenidos en la madrugada del 15 de septiembre de 1947. Condenado a muerte, Fernández Ladreda fue ejecutado dos meses después, el 15 de noviembre. A «Tito» le fue mejor. Aunque sentenciado a la última pena, al final salvó la vida^[220].

Pero la hecatombe definitiva de la guerrilla comunista se produjo unos meses después de la muerte de «Feria». La policía franquista había detenido en 1946 a un grupo de guerrilleros procedentes de Francia destinados a Asturias, y los servicios de información consiguieron que un capitán de la Guardia Civil, Manuel García Velasco, asumiera la personalidad de uno de los maquis para infiltrarse en la guerrilla asturiana. Otras versiones sostienen que el infiltrado en el maquis fue Francisco Cano Román «Don Carlos», de los servicios de información de Falange, que participaron en la operación junto con los otros servicios de inteligencia del régimen. Según Sacaluga, fue el comunista asturiano Julio del Amo, preso en Madrid, quien contactó con el infiltrado y a su vez relacionó a éste con la guerrilla asturiana, mientras que

para Santullano y Pérez la ligazón con Asturias era el guerrillero José Suárez Álvarez «Pin del Condado». Lo realmente contrastado es que un miembro de los aparatos del espionaje procedente de Madrid y que se hizo pasar por maquis francés —le terminaron llamando «Francesito»— fue aceptado por el maquis comunista asturiano. Pese a las reticencias de guerrilleros como Aladino Suárez y Gustavo Peláez Peláez «Raque» o de jefes de guerrilla como Manolo «Caxigal» —advertido por Eloy Álvarez Alonso «Ruso» desde la cárcel de la naturaleza del recién llegado—, el nuevo «maquis» fue recibido con los brazos abiertos. Tampoco consiguieron romper el «hechizo» las advertencias de los socialistas, quienes comunicaron a sus compañeros del PCE que los informes recibidos de Madrid y Toulouse decían desconocer al citado individuo, del que se sospechaba su condición de confidente. Constantino Zapico González «Boger», el máximo responsable de la resistencia, parecía estar fascinado, y el infiltrado, con el pretexto de conseguirles tres emisoras, también logró poner al frente de las mismas a otros tres agentes infiltrados. Desde las citadas radios —situadas cerca de Cuturraso, Peña Mayor y Quintes—, los infiltrados conocieron durante más de un año la infraestructura de la guerrilla, incluida la red de enlaces, y además les permitieron estar en contacto permanente con los centros policiales.

La estratagema que ocasionó la muerte de 16 guerrilleros y la detención de cientos de enlaces fue la promesa de conseguir armas modernas para los maquis asturianos y santanderinos, incluidos los socialistas. En una reunión en la sierra del Cuera se perfilaron los preparativos de la operación, no sin antes llevar a cabo un último intento de contactar con los socialistas (que éstos rechazaron de nuevo). El plan consistía en recoger las armas en Santander y desde la costa cántabra repartirlas a los diferentes grupos asturianos en puntos previamente pactados. Tres guerrilleros acompañarían al infiltrado a recoger las armas: los hermanos Castiello, Corsino y Eduardo Castiello Carriles, y Alfredo Ordieres Llana «Tarzán». La tragedia se consumó durante la noche del 27 al 28 de enero, y comenzó con la ejecución de «Los Castiellos» y «Tarzán» en la playa de la Franca, camino de Santander, donde se organizó el operativo policial que fue liquidando a los diferentes grupos de resistentes. En tres coches y una furgoneta-ambulancia, los miembros de la brigadilla se dispusieron a cumplir el plan trazado aunque fallaron las dos primeras citas, en la playa de San Antolín, donde debían recoger las armas el santanderino Quintiliano Guerrero, y Soto de Dueñas, y donde no se presentó Manolo «Caxigal», el único jefe guerrillero que desconfiaba del infiltrado y que observó maniobras extrañas en el convoy por lo que decidió no salir a su encuentro. Pero a partir de aquí la brigadilla llevó a cabo una matanza espectacular. En Monte Coya (Pintueles) eliminaron a Onofre García Ulibelarrea «Onofre», Aurelio Díaz González «Caxigal», Luis Ordieres Martínez, Vicente Gómez Fernández «Maqui», Gustavo Peláez Peláez

«Raque», José López Loeto y un enlace, Vicente Reguero Puertas (otra versión sostiene que era un paisano «que pasaba por allí»). Logró escapar, aunque gravemente herido, «Pin del Condado», que consiguió alcanzar la emisora de Peña Mayor con el propósito de avisar al compañero, «Maestro García» o «Maestrín de León», al que encontró muerto, y también él cayó abatido por los policías que estaban escondidos cerca del chozo. La «caravana de la muerte» siguió hasta Santo Emiliano, entre Langreo y Mieres, donde fueron cazados «Boger», David Manuel González González, Manuel García Gutiérrez «Manolé» y José García Rozada «Pollón». Escapó Apolinar Anibarro Rodríguez «Naranja», maquis venido de Francia, que se enfrentó a los guardias civiles y logró que huyeran los guerrilleros y enlaces que no cayeron con las primeras ráfagas. La operación había sido dirigida por el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo, Blanco Novo. A los familiares de «Los Castiellos» les quemaron sus viviendas en el pueblo, Peón, y les obligaron a emigrar. Las operaciones continuaron con la desarticulación de la red de enlaces, que los infiltrados se habían encargado de registrar minuciosamente, por lo que el saldo final, incluidos los centenares de apoyos arrestados, revistió caracteres de tragedia^[221].

La primera represalia que se llevó a cabo contra los partidarios del régimen después de la matanza la efectuaron, paradójicamente, los socialistas. Al día siguiente de las caídas de los comunistas, los socialistas mataron a Prudencio García Alonso «Pantusu», vigilante minero de Duro–Felguera que pateó los cadáveres de «Boger» y sus compañeros en Santo Emiliano en presencia de varios testigos. Además se «le achacaron más de cincuenta asesinatos. Al parecer, tenía la manía de sustraer a sus víctimas los zapatos y coleccionarlos», según Juan Antonio Sacaluga. Medio mes más tarde, el 8 de febrero, Manolo «Caxigal», «Peque» y Manuel Rubio González «Rubio» ejecutaron en el pueblo de Espinaredo al confidente José García Andrade, a su esposa y a su hija. El 9 de mayo, los socialistas asturianos, reacios al empleo de la violencia, efectuaron el segundo atentado importante y, en la lógica del contexto, esa represalia «era obligada» después de la masacre de militantes ugetistas en Pozu Funeres. Tres guerrilleros socialistas de la Hueria de Carrocera se encargaron de ejecutar en un bar a Juan Felechosa «Juanón», conocido después de Funeres como «Soperu». Antiguo militar, Felechosa era militante falangista y capataz en las minas de El Entrego. Pero al margen de estas acciones puntuales, «obligados» conforme al código de valores que manejaban, el verdadero objetivo de los socialistas era marchar a Francia. Desde 1946, los comités del monte tenían la representación política de los socialistas asturianos, dado que en el caso del PSOE los políticos eran detenidos con más facilidad que los guerrilleros. Todavía a la altura de 1948, el pleno del partido en el monte decidió potenciar tres objetivos básicos: mantener en contacto las partidas y los comités socialistas, sostener una relación lo más fluida posible con el exilio

socialista y, lo más importante, potenciar la solidaridad con los presos. Cuando, en octubre de 1947, veintisiete militantes del PSOE embarcaron en el puerto de Luanco, la presencia de socialistas armados desapareció, pero más alarmante para la tradición socialista asturiana fue que tanto el PSOE como el SOMA se convirtieron en organizaciones residuales^[222].

Los comunistas asturianos habían elegido a principios de febrero de 1948 una nueva dirección encabezada por Manolo «Caxigal» y con Marcelino Fernández «Marico», Cándido «Bardiel», Apolinar Anibarro «Naranja», Aladino Suárez y Adolfo Quintana Castañón como responsables de partida. La nueva dirección se encontró con dos docenas de nuevos guerrilleros que habían escapado al monte después de las matanzas del 27 de enero para evitar que los detuvieran. En el mes de mayo de ese año llegó de Francia Luis Montero «Sabugo», que aceptó la dirección política del comunismo asturiano en unos momentos de transición. También recaló en Asturias durante una temporada Amador Martínez, jefe de enlaces en la frontera francesa en relación con la AGLA, para anunciar el cambio de táctica. Pero el intento de reorganización se complicó todavía más cuando el PCE tomó la decisión de clausurar las guerrillas y reconvertir a los guerrilleros en agentes políticos. «Sabugo» viajó a Francia para aclarar las posiciones y recibió un mensaje explícito: la resistencia armada se convertía en agente secundario en beneficio de la organización política, y el centro de decisión se desplazaba desde las sierras a los centros de trabajo, donde resultaba factible practicar el «entrismo». Pero en Asturias, a finales de 1948, la guerrilla, a diferencia de lo que ocurría en otras zonas de España, aún tenía una presencia importante y parte de los maquis se rebelaron contra esas órdenes. La nueva táctica les parecía suicida, y una facción no aceptó las directrices emanadas de Francia. Ni siquiera un hombre respetado por todos y experimentado en la lucha guerrillera como Manolo «Caxigal», que siguió leal a la ortodoxia, fue capaz de alcanzar una transacción aceptada por todos. Tampoco un delegado enviado desde Francia en 1949. La tensión llegó tan lejos, que se manejó la posibilidad de un enfrentamiento armado. Pese a la tregua posterior entre los dos bandos, los guerrilleros comunistas quedaron a partir de entonces en una situación de provisionalidad que tendría efectos demoledores. El descontrol alcanzó tal intensidad, que Manolo «Caxigal» pensó en la posibilidad de desarmar a Mario Llaneza Rozada «Gitano» e Ignacio Alonso Fernández «Raxau», que estaban perpetrando numerosas represalias sin contar con la dirección comunista. Aparte de los desencuentros tácticos, la muerte siguió presente en la resistencia asturiana en 1949. El 13 de enero caía abatido en un enfrentamiento con la Guardia Civil Apolinar Anibarro Rodríguez «Naranja». Días después, el 24 de enero, fueron eliminados Aladino Suárez y un compañero llamado Eduardo Osorio. El 1 de noviembre murió cercado en una casa de El Tejedal Marcelino Fernández «Marico» (también perdieron la vida en la

guerrilla sus hermanos Manuel y Esteban) y fueron heridos gravemente, aunque consiguieron huir, Paulino Alonso «Pachón» y Manuel Rubio González «Rubio». Antes de morir desangrado a causa de las heridas, «Pachón» mató el día 2 a un guardia civil, Carmona, y el día 4 al sargento Santiago Martín Abos, miembro de la brigadilla. «Rubio» tuvo más suerte y, apoyado por un enlace, llegó a Infiesto, donde consiguió recuperarse de las heridas. Pero lo anterior representaba sólo un pequeño censo de la violencia que se vivió en los montes asturianos. En pocas provincias la represión–contrarrepresión alcanzó tales cotas de violencia y eficacia destructiva. Las estadísticas confirman que en Asturias se libró, junto con Granada, la más cruenta de las guerras irregulares durante la posguerra^[223].

Finalmente, por lo que se refiere a Santander, señalar que la guerrilla durante este trienio se convirtió en una serie de hombres dispersos o reunidos en pequeños grupos, al margen de cualquier connotación de resistencia organizada. El 25 de diciembre de 1947, Inocencio Aja «Vasco», uno de los maquis más significados, se suicidó arrojándose a un río ante el riesgo de caer prisionero de la Guardia Civil.

La desaparición del Ejército Guerrillero de la Zona Centro

Las agrupaciones pertenecientes al Ejército Guerrillero de la Zona Centro —del que a partir de 1946 se había desvinculado Córdoba— se encontraban en una situación crítica y la guerrilla, como organización armada, había desaparecido. En su lugar, algunas partidas dispersas se afanaban en una supervivencia comprometida. El salazarismo mantenía la frontera portuguesa como una aventura peligrosa y Francia quedaba lejos. Algunos guerrilleros optaron por otra vía intermedia entre el enfrentamiento y la huida: confundirse con la población en cortijos o dehesas aisladas, esperando que se olvidaran de ellos. No lo consiguieron.

En Extremadura, la muerte en 1946 de los jefes de maquis más representativos, Pedro Díaz Monje «Francés», y Jesús Gómez Recio «Quincoces» y el desmantelamiento de los restos de sus partidas y de las redes de apoyo que las sostenían, favorecieron la desaparición del maquis extremeño como organización visible de la resistencia. La única actividad se remitía a los límites provinciales de las provincias extremeñas con Toledo, Ciudad Real y Córdoba. Todavía a finales de 1946, coincidiendo con el cambio de nombre (Agrupación de Extremadura) y de responsable, Julio Navas Alonso «Fabián», tuvo un repunte fugaz aunque fue más fruto del voluntarismo suicida que de un análisis sosegado de la realidad. A pesar de que efectuó acciones audaces, la guerrilla estaba en sus estertores, y «Fabián» acabó detenido en el otoño de 1947. Un año más tarde, el tercero de los jefes históricos

extremeños, Joaquín Ventas Cita «Chaquetalarga», acompañado de Víctor Roque Sánchez «Miguelete», consiguió alcanzar la frontera francesa. Era el más desconfiado de los tres, el menos dado a aceptar enlaces quemados, y esa actitud le salvó posiblemente la vida. A partir de ese año, en tierras extremeñas permanecían ya sólo los restos de la partida de «Fabián», encabezada por Eusebio Moreno Marcos «Durruti» y Antón Garrido Pinto «Pinto», y otra partida autónoma desde 1946 encabezada por Antonio León Villa «Calandrio», que procedía del maquis francés. Pero una y otra, integradas por menos de seis hombres, lo único que pretendían era la supervivencia. La mayor parte de estos efectivos lograron evadirse, aunque fuentes oficiales no confirmadas sostienen que «Calandrio» fue abatido en la localidad ciudadrealeña de Viso del Marqués (Ciudad Real) en enero de 1949, junto con Manuel Hernández Vilches «Mozos». La mayor parte de los grupos que actuaban en Extremadura procedían de provincias limítrofes que buscaban protegerse en las sierras de Palomera y Altamira. Fue el caso, por ejemplo, del grupo de Francisco Blancas Pino «Veneno», que provenía de Ciudad Real y estaba formado por destacados guerrilleros cacereños como Aurelio Rodríguez «Viriato» y Lorenzo Toribio Sánchez «Parachuta». Parece ser que consiguieron huir a Francia en el año 1955. Menos suerte tuvieron los cordobeses del Batallón 151 que se internaron en Badajoz, encabezados por Bernabé Caballero «Cojo de la Porrada», que, como vimos anteriormente, fueron abatidos el 17 de octubre de 1947 en un prostíbulo de la localidad pacense de Fregenal de la Sierra^[224].

Moviéndose entre las provincias de Badajoz, Ciudad Real y Toledo, se detectó la presencia de una partida creada en 1948 por Eugenio Herrera García «Cuquillo», evadido de la cárcel de Chillón (Ciudad Real). Estaba formada por hombres dispersos de la 2.^a Agrupación, entre los que destacaban Adriano Escribano Calderón «Comandante Donato» (conocido también como «Hocino»), Nicolás García Díaz «Perdiciones» y una mujer, Felisa Paredes Aceituno «Golondrina». En ocasiones actuaban conjuntamente con la partida de «Veneno». Existen noticias de que actuaron en las localidades extremeñas de Talarrubias, Helechosa de los Montes y Casas de San Pedro. El 30 de abril de 1950 fueron eliminados en el asalto que llevó a cabo la Guardia Civil al campamento de La Mina de Santa Quiteria (Toledo). Otra partida que merodeaba por las fronteras provinciales desde 1949 era la de Baldomero Gutiérrez Pérez «Saltacharquitos», un joven comunista natural de Hinojosa del Duque que había abandonado las guerrillas cordobesas. Pero resistirá poco al frente de los maquis, ya que será abatido junto con dos de sus hombres por la Guardia Civil el 15 de noviembre de ese año en la localidad pacense de Guareña^[225].

En Ciudad Real, escenario de la 2.^a Agrupación, las cosas no fueron mejor a partir de 1947, sobre todo cuando en el mes de agosto el teniente coronel Eulogio Limia Pérez —que ya había exterminado a la guerrilla toledana desde que el 7 de febrero de

1945 había sustituido a Luis Medina Montoro al frente de la Benemérita en esa provincia— recibió el encargo de hacer lo propio con la ciudadrealeña desde la 204.^a Comandancia de la Guardia Civil. Apenas dos años necesitó el especialista en contrainsurgencia para terminar con los guerrilleros de la zona, próximos al medio centenar. Utilizando procedimientos semejantes a los de Toledo —acoso a enlaces y familiares, incremento de las contrapartidas y unidades móviles—, puede decirse que cuando en abril de 1949 marchó destinado a Granada la resistencia manchega estaba totalmente erradicada. La sucesión de las caídas adquirió un ritmo vertiginoso a partir de 1947, cuando varios guerrilleros empezaron su colaboración con la Guardia Civil. Entre los confidentes que consiguió Limia Pérez estaban personajes importantes del maquis manchego, como Vicente Rubio Babiano «Pedro el Cruel», jefe de partida de la 23.^a División, y su sucesor al frente de la misma, Honorio Delgado Blanco «René», así como Manuel Guerreiro «Antonio», uno de los jefes de la Agrupación que también se ofreció a colaborar con las fuerzas de represión a raíz de su detención cerca de Ciudad Real. Todos estos confidentes permitieron un rápido desmantelamiento de la guerrilla entre 1948 y 1949. El 8 de mayo de 1948 Ramón Guerreiro «Julio», uno de los jefes de la Agrupación, fue abatido en la Huerta del Buñuelo de Piedrabuena, y el tercer jefe de la guerrilla, Dionisio Castellanos García «Palomo» fue detenido el 5 de junio. En un mes habían sido reducidos los tres jefes de las guerrillas de Ciudad Real. Sólo se habían salvado Miguel Padilla Camello «Michelín», ayudante del Estado Mayor, que abandonó el maquis y desapareció de la zona a mediados de 1948, y Francisco Expósito Prieto «Gafas», que consiguió alcanzar territorio francés. Manuel Durán Carrasco «Sevillano hijo», otro jefe de guerrilla, fue detenido en Viso del Marqués en noviembre de 1949. Ciudad Real fue una de las provincias donde más confidentes y delatores surgieron en la resistencia de posguerra. Como no vamos a hacer reduccionismo sociológico de las idiosincrasias locales, la razón tal vez estribó en que fue un método fomentado especialmente por Limia Pérez^[226]

Pero si los jefes de la agrupación cayeron, el mismo destino les esperaba a los responsables de las partidas y a los guerrilleros de base, así como a las cuadrillas que se habían mantenido al margen del entramado comunista. En 1948 fueron eliminadas las partidas del valle de Alcudia, encabezadas por Francisco Corchado Silveira «Lazarete» y Luis López Fernández «Lechuga». La de este último fue reducida en los primeros días de abril en las estribaciones de Sierra Morena, entregándose todos sus miembros. La primera fue desmantelada el 5 de marzo con la muerte en la sierra de los Mochuelos de «Lazarete» y su esposa, Sergia Flores Sanz, y la detención de Valentín Muñoz Merino «Hijo Larines» y Diego Rodríguez Serrano «Manquillo». El 12 de mayo de 1949, la Guardia Civil consiguió eliminar al más famoso de los guerrilleros ciudadrealeños (aunque no había pertenecido orgánicamente a la

Agrupación), José Méndez Jaramago «Manco de Agudo», y con él cayeron «Comandante Honorio» y Reyes Saucedo Cuadrado «Parrala». Estos guerrilleros, que habían actuado entre Extremadura, Toledo y Ciudad Real, fueron localizados y muertos en unos chozos de carboneros en la Sierra del Carrizal, en las proximidades de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) después de la correspondiente delación. Una contrapartida los estuvo esperando más de medio mes, pero la operación lo merecía por cuanto «Manco de Agudo» era el maquis más buscado de la provincia. Un guardia resultó herido en la escaramuza. Otros jefes de guerrilla, como Manuel Martínez Bueno «Trapichea», acompañado de José Vargas Romero «Herrero», trataron de alcanzar zonas donde la presión policial fuera menos intensa y se desplazaron a Jaén, aunque en 1950 fueron localizados y muertos en las proximidades de La Carolina. En el año 1949 la resistencia de Ciudad Real había desaparecido. Todo el censo guerrillero se reducía a resistentes marginales que tenían como objetivo la difícil asignatura de la supervivencia^[227].

Pero la acción represora de Limia Pérez también afectó gravemente a la 5.^a Agrupación, que se extendía por el este de Ciudad Real, sur de Cuenca y oeste de Albacete, en los límites de las tres provincias. A finales de 1947, la agrupación, que había tenido unos treinta hombres aproximadamente, podía considerarse desmantelada, sobre todo cuando el 28 de octubre Cecilio Martín Borja «Timochenko», máximo responsable de la misma, fue eliminado en Madrid por fuerzas de la Comandancia de Ciudad Real, enfrentamiento en el que también murieron Eugenio Palacios Moya «Panizares» y la compañera del primero. El episodio, resultado de una delación de un camarada detenido, ocurrió en la calle Gravina de la capital. Lastrados por la ausencia de una dirección visible y aislados en las tres provincias manchegas, los maquis de la 5.^a Agrupación, cuya trayectoria ha estudiado Francisco Alía Miranda, se convirtieron en presa fácil para las fuerzas de represión. El mismo día de la caída de «Timochenko» en Madrid, en las localidades ciudadreales de Torre de Juan Abad y Valdepeñas fueron detenidos los siete miembros de la tercera guerrilla albaceteña, entre ellos el jefe de la misma, Eugenio Sánchez Diéguez «Fernando». Ese mismo año, fueron también detenidos otros tres y muertos dos. En 1948 se entregaron tres, fue capturado uno y cuatro lograron huir a Francia. En Albacete fueron eliminados dos jefes de guerrillas, Sebastián Moya Moya «Chichango» y Alfonso Ortiz Calero «Vicente». Proporcionalmente, el número de entregados en esta agrupación también fue muy elevado. El resultado en Ciudad Real había sido de 26 guerrilleros muertos, 31 capturados, 9 entregados y 20 huidos al extranjero o desplazados a otras provincias «más tranquilas». Un trabajo eficaz, pero poco eficiente. Doblemente impecable conforme a los criterios del régimen: cuantos más muertos, mejor^[228]

El apogeo de la «Agrupación Roberto»

La radiografía del maquis en Andalucía mostraba los «reflejos feudales» en los que se movía la resistencia, ya que operaban tres focos guerrilleros consolidados, Córdoba, Granada–Málaga y Cádiz–Málaga, pero no tenían contacto orgánico entre ellos, ni siquiera relaciones esporádicas. Tampoco aprovecharon la existencia de partidas aisladas en otras provincias, caso de Jaén, para ampliar el territorio de maquis y desplazar la presión de las fuerzas de orden. En consecuencia, hablar de Ejército Guerrillero de Andalucía en este trienio resulta un ejercicio de retórica.

En Córdoba, el tiempo decisivo se situó en el verano de 1947, cuando las fuerzas represivas localizaron el campamento central de la 3.^a Agrupación —ahora, Agrupación de Córdoba— en un paraje conocido como la Umbría de la Huesa, posiblemente como fruto de una delación. En las primeras horas del día 11 de junio los guerrilleros fueron sitiados y se produjo un durísimo combate con fuego de fusilería y bombas. Como la fuerza pública había preparado minuciosamente el asalto, los guerrilleros se vieron sorprendidos y murieron todos los habitantes del campamento, a excepción de José Merino Campos «Felipe», que fue detenido. Perdieron la vida Julián Caballero Vacas, Melchor Ranchal Riquez «Curro de Añora», Ángel Moreno Cabrera «Pincho», Librado Pérez Díaz «Practicante» y María Josefa López Garrido «Mojea». Según Moreno Gómez, posiblemente «Mojea» y Caballero Vacas se suicidaron antes de ser detenidos. Especial gravedad revistió la baja de este último, antiguo alcalde comunista de Villanueva de Córdoba y responsable político de la agrupación (un año antes había sido eliminado su hermano Bartolomé). Entre los jefes de la guerrilla, se libró de la matanza de la Umbría Dionisio Tellado Vázquez «Mario de Rosa», máximo dirigente, que no se encontraba en el campamento. El episodio de la Umbría decapitó al maquis cordobés, por lo que las diferentes partidas fueron perdiendo contacto entre ellas y retornaron de nuevo a la condición de huidos. El franquismo tenía expedito el camino para la liquidación de los resistentes armados, y la prueba de la desmoralización y desconfianza de los maquis cordobeses se reflejó en la imposibilidad de «Mario de Rosa» de reconstruir una nueva dirección. El maestro madrileño buscó refugio al finalizar el año en Extremadura pero el maquis de esa región había desaparecido. Incapaz de vertebrar una resistencia armada en Extremadura o Córdoba, el autotitulado «general en jefe de la 3.^a Agrupación del Ejército de Andalucía» se instaló en Valencia mientras que las guerrillas cordobesas se convertían en un blanco fácil para las fuerzas de represión. Los datos eran incontestables, y el número de guerrilleros muertos resultaba impresionante: 42 en 1947, 13 en 1948 y 31 en 1949^[229]

El 5 de abril de 1949, moría en el término de Villaviciosa Manuel Hidalgo Medina «Bellota», uno de los guerrilleros más significativos de la agrupación de

Córdoba. En un chozo de carbonero, en las proximidades de esa misma población, también encontraron la muerte el 5 de mayo de ese año, después de la correspondiente confidencia, cuatro maquis: Francisco Muñoz Álvarez «Luquillas padre», Antonio Muñoz Vega «Luquillas hijo», José Muñoz Castro y otro sin identificar. El 18 de julio cayeron en las proximidades de Hinojosa los guerrilleros José Carracedo Marmolejo y Benito Castillejo Fernández «Teclo». La caída se debió a otra traición, algo habitual por esas fechas. No era para menos, ya que a la percepción por parte de guerrilleros y enlaces de que la lucha estaba perdida se unía la aplicación arbitraria y cotidiana de la «ley de fugas»: en el mes de abril fueron ejecutados cuatro enlaces en el pueblo de Villaviciosa. También a los hombres de la partida de Claudio Romera Bernal les llegó la hora decisiva. Diego Luque Lindo «Lindo», su lugarteniente, fue abatido en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 28 de agosto. Su hermano, Rafael «Lindo», había muerto en compañía de José Luna Cartán «Ratón» el 1 de abril de 1949. A principios de año, el 15 de enero, había encontrado la muerte en Pozoblanco Felipe Moya Tejada «Castaño». Por su parte, Claudio Romera Bernal, que llevaba en el monte desde la guerra civil, fue cazado en un cortijo de Adamuz gracias a las informaciones de enlaces detenidos. La desaparición de Romera el 11 de septiembre de 1949, en «Las Moradillas del Cuadrado», canceló definitivamente no ya la guerrilla, desaparecida como tal mucho antes, sino el último foco potencialmente peligroso para el franquismo en la provincia de Córdoba. El 13 de noviembre de 1949 fueron eliminados en Montoro Cornelio Caballero Calvo «Cornelio» y Juan González Fernández «Álvarez»^[230].

Aunque fuera de Córdoba, también en 1949 y 1950, hallaron la muerte dos de los maquis más representativos de la provincia, Dionisio Tellado Vázquez «Mario de Rosa» y Ricardo García Rodríguez «Caraquemá», el primero como jefe de las guerrillas y el segundo como personaje singular que sintonizó con el imaginario local, que lo convirtió en leyenda. Tellado Vázquez fue abatido por los policías que lo identificaron el 13 de abril de 1950 en una calle de la ciudad de Valencia. También el joven García Rodríguez, que había pertenecido a la partida de Romera, resultó muerto cuando se procedía a su identificación en la Casa de Campo de Madrid y trató de disparar, posiblemente en mayo de 1949. A partir de ese año, en la provincia de Córdoba o desplazándose por los límites provinciales, ya sólo permanecían algunos guerrilleros solitarios que buscaban huir al extranjero o pasar desapercibidos entre la gente. No lograrían ni una cosa ni otra. Tal vez, fue la provincia de Córdoba en la que menos éxito tuvieron los intentos de fuga.

Por lo que se refiere a Granada–Málaga, José Muñoz Lozano «Roberto» seguía instalado como personaje medular de ese territorio guerrillero. El hombre que parecía destinado a labores políticas en la clandestinidad se estaba erigiendo en las sierras andaluzas como un verdadero caudillo de la resistencia armada, con unas dotes para

el mando y la guerra irregular realmente excepcionales. Combinando ingenio militar y experiencia política, Muñoz Lozano consiguió un importante apoyo popular y, además, impregnó sus acciones de contenido político. La red de enlaces malagueño–granadina destacó como una de las mejor organizadas de España. Durante años hizo posible que la agrupación de Granada–Málaga, conocida entre las gentes como «Agrupación Roberto», fuera una de las más influyentes y numerosas —en torno a los 150 hombres—, y que apenas encontrara dificultades para reponer las bajas. El correlato se concretó en numerosas e importantes acciones, tanto golpes económicos para conseguir recursos como ocupación temporal de pueblos para llevar a cabo la propaganda guerrillera. Otro detalle sorprendente de las partidas dirigidas por «Roberto» se refiere a la secuencia cronológica, ya que el apogeo de su agrupación coincidió precisamente con unas agrupaciones seriamente dañadas (Galicia, Asturias), en vías de extinción (Extremadura, La Mancha, Córdoba, Santander, León, Ávila) o desaparecidas (Extremadura, Toledo, Ávila). Solamente las partidas de Levante–Aragón podían compararse, en parte, a las del mediodía andaluz.

Además, las guerrillas de «Roberto» demostraron una pericia inhabitual en campo abierto. En la sierra de la Almijara, en un lugar conocido como Cerro Lucero, el día 6 de diciembre de 1948 el grueso del Estado Mayor de la agrupación fue cercado por un importante número de guardias civiles pero logró romper el cerco y escapar. Un herido entre los guerrilleros y varias bajas entre las fuerzas de orden completaron un éxito importante para los maquis andaluces. El 16 de septiembre de 1949 se repitió en Cerro Verde una operación de parecidas características, aunque en esta ocasión los resistentes tuvieron dos bajas: Miguel Ángel García Platero «Julián» y Rafael Jurado Martín «Nico». Pero también las fuerzas atacantes pagaron su tributo de muerte: el cabo Antonio Toribio Tejada y el número Antonio García Reyes. A finales de 1947 habían perdido la vida en Cerro Viborero el cabo José Rodríguez Caparros y los guardias Orencio González Revilla y Francisco Bernal Bernal, que pertenecían al puesto de Cantarrián. Una baja muy significativa para el maquis fue la muerte, el 10 de julio de 1948, de Joaquín Centurión Centurión «Juanito», jefe del 6.º Batallón, en el término malagueño de Competa^[231].

Pero las guerrillas numerosas y centralizadas, aparte de las dificultades de intendencia inevitables, arrastraban dos problemas importantes. Por una parte, la disciplina de la organización, ya que no todos los hombres del monte podían considerarse convencidos militantes antifranquistas. De otra parte, las deserciones, el mayor problema de los movimientos insurgentes. En 1948, con el maquis en pleno apogeo, ya se produjeron 18 deserciones. Para evitarlo, «Roberto» reforzó los tribunales de guerrillas, que se aplicaron con inusitada dureza y no siempre por motivos transparentes. La ausencia de un control democrático de esas decisiones, a causa de la situación excepcional en la que se desenvolvían, motivó que se utilizaran

estas audiencias del monte para ventilar no sólo las deserciones sino también las rivalidades personales, los desencuentros ideológicos o los movimientos en el escalafón de las partidas. Los métodos estalinistas encontraban terreno abonado en la comprometida coyuntura del monte. Debido a estas depuraciones, perdieron la vida guerrilleros como Miguel Martín López «Mundo», Antonio Sánchez Martín «Tejero» y Francisco Centurión Centurión, según Azuaga Rico.

La aparente impunidad de las guerrillas tuteladas por «Roberto» en fechas tan avanzadas y el problema político que se derivaba de esa situación obligaron a las autoridades franquistas a tomar medidas drásticas: se destituyó a los responsables de las comandancias de Málaga y Granada. Las decisiones pronto se revelaron como acertadas, porque a las dos provincias andaluzas llegaron jefes de la Guardia Civil con una acreditada trayectoria en la lucha contra el maquis, el teniente coronel Ángel Fernández Montes de Oca, que se había forjado una reputación de eficacia y dureza extrema en la guerrilla cordobesa, y el omnipresente Limia Pérez, que, después de Toledo y Ciudad Real, alcanzaba su tercer destino contra los maquis. Estas medidas extraordinarias, además de los fracasos policiales en Cerro Lucero y Cerro Verde, tenían su justificación en las noticias alarmantes que llegaban a las autoridades de Madrid en 1949, tales como el secuestro de Julio Aguado Delgado en Motril —por el que los guerrilleros obtuvieron la entonces fabulosa cifra de medio millón de pesetas— o la ejecución en Archidona del magistrado Francisco García Guerrero, que había destacado en la represión granadina durante la posguerra^[232].

La guerrilla que operaba entre los límites de Cádiz y Málaga fue siempre una organización secundaria en el contexto de la resistencia andaluza. Lo más sobresaliente del maquis gaditano estaba representado por la convivencia, con las fricciones inevitables, de comunistas y anarquistas en los diversos proyectos guerrilleros que sufrieron un importante retroceso con la desarticulación de la red de enlaces en abril de 1947 (sólo en Jerez fueron arrestados 29 antifranquistas). A partir de esa fecha, los dos grupos que dominaban el panorama armado en la zona —dirigidos respectivamente por el libertario Bernabé López Calle «Comandante Abril» y el comunista Pablo Pérez Hidalgo «Manolo el Rubio»— se instalaron en una actitud defensiva con el objeto de resistir con los menores costes posibles la ola represiva que llevaba a cabo desde Medina–Sidonia el teniente coronel Roger Oliete Navarro. Pero en febrero de 1949 se produjo un intento de reforzar la organización, que coincidió con la presencia en la zona de un delegado del Comité Regional del PCE de Sevilla, Manuel Abollado «Orejitas». Las nuevas conversaciones se concretaron en la unión orgánica de las partidas de «Comandante Abril» y «Manolo el Rubio» en la 6.ª Agrupación, también llamada Agrupación Guerrillera Fermín Galán (AGFG), fundada en ese mes de febrero en un paraje conocido como la sierra de las Cabras, en el término de Jerez de la Frontera, y de la que formaban parte 27

resistentes. Fue nombrado responsable militar López Calle (el único anarquista que alcanzó la jefatura de una agrupación en la resistencia antifranquista) y Pablo Pérez Hidalgo «Manolo el Rubio» recibió el cargo de jefe del Estado Mayor. La nueva organización se extendía por el oriente de Cádiz (Alcalá de los Gazules, Jimena de la Frontera, Grazalema, Ubrique, Algar y Jerez, fundamentalmente) y el occidente de Málaga, básicamente en la Serranía de Ronda (localidades de Cortes de la Frontera, Gaucín, Algotocín, Montejaque y Benaolán)^[233]. La fundación de la Fermín Galán puede servirnos como paradigma para entender la falta de coherencia y comunicación de la lucha armada contra Franco. Resultaba verdaderamente anacrónico establecer una nueva agrupación cuando desde octubre del año anterior el PCE había cambiado de táctica y pretendía acabar con la fase guerrillera. Como cabía esperar, la quimera gaditana pronto se vino abajo, y «Orejitas» fue detenido en el mes de julio de 1949. Posteriormente, como ocurría casi siempre, fue cayendo la red de apoyos comunistas de Jerez y Cádiz y, luego, la de los anarquistas. «Manolo el Rubio» disolvió la agrupación a finales de 1949, lo que significaba el final de la guerrilla organizada en la zona. El hecho de que predominaran los hombres de obediencia anarquista tampoco favoreció la consolidación de una resistencia significativa.

Durante este trienio, los guerrilleros gaditanos insistieron en los secuestros como medio de financiación, método que se aplicó con una frecuencia desconocida en otras agrupaciones. Se produjeron tres secuestros en la población serrana de Alcalá de los Gazules y por uno de ellos, realizado por la partida de López Calle y su hijo Miguel López García «Darío», consiguieron la importante cifra de 190 000 pesetas. En Algar se contabilizaron tres secuestros importantes, con un botín superior a las cien mil pesetas, pero también la muerte del niño de catorce años Antonio Sánchez Regordán, asesinado por uno de los guerrilleros a quien el muchacho conocía. Los raptos se multiplicaron por Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Grazalema, tanto por los hombres de López Calle como por los de Pérez Hidalgo. El régimen franquista replicó con la aplicación sistemática de la «ley de fugas» y en Algar siete enlaces fueron ejecutados por ese sistema. También se aplicó reiteradamente en Ubrique y Jimena de la Frontera. Varios guerrilleros resultaron abatidos y otros, como Francisco Ocaña Quintero «Ramoncito», se entregaron a las fuerzas de represión. Otros tuvieron mejor destino, ya que los maquis gaditanos contaban con el recurso de marchar a Tánger o Casablanca: un falucho servía para atravesar el Estrecho. Sólo de la localidad de Jimena de la Frontera lograron evadirse los guerrilleros Claudio Marín Aguilar «Claudio», Francisco Rodríguez Barranco «Conejo», Alfonso Perea García «Paulino», Diego Vera Pajares «Verita», Alfonso Vera Pro «Vera» y el más famoso de los guerrilleros de la zona: Alfonso Sánchez Gómez «Potaje»^[234].

Entre las partidas aisladas que se movían por la provincia de Jaén, constatar que el 7 de julio de 1947 cayeron abatidos en Valdepeñas de Jaén Tomás Villén

«Cencerro» y «Crispín».

Cerro Moreno y el declive de la AGLA

La Agrupación Guerrillera de Levante continuó siendo durante el trienio 1947–1949 la organización de referencia del maquis de posguerra, manifestándose, además, como un reflejo genuino de las tácticas del PCE y de las repuestas del régimen durante esos años. En la AGLA se confrontó con la realidad la teoría de reconvertir a la guerrilla rural en Consejos de Resistencia y también en Levante se ensayaron procedimientos nuevos en el maquis, como la «militarización» o la financiación exterior para disminuir los golpes económicos. Pero el contrapoder que significaba la AGLA reforzó las defensas de la dictadura. Contra la agrupación más poderosa y emblemática, las autoridades franquistas dispusieron un arsenal de hombres y armas; también destinaron al militar de más alto rango en la contrainsurgencia, el general Manuel Pizarro Cenjor. Al frente de la 5.^a Zona de la Guardia Civil, que incluía algunas de las provincias más conflictivas (como Valencia, Cuenca, Teruel, Albacete o Castellón), el régimen experimentó los métodos más expeditivos. A planteamientos generalizados en los territorios de maquis como la aplicación de la «ley de fugas» añadieron operaciones propias de una guerra convencional: utilización, en ocasiones, de armas pesadas, desplazamientos de la población y quema de bosques y masías.

Durante el «trienio negro», los métodos coactivos de las fuerzas de orden diezmaron no solamente las partidas, sino que permitieron también la eliminación sistemática de los responsables militares de la agrupación. Detenido Valentín Galarza «Andrés» en marzo de 1947, la organización levantino–aragonesa eligió como responsable a Ángel Fuertes Vidosa «Antonio», guerrillero que nunca participó en las luchas por el poder e incluso solicitó a Francia un sustituto para Galarza. La llegada de «Antonio» a la jefatura originó una reestructuración del organigrama de la AGLA. «Antonio», que era jefe del Sector 17.º, dejó el puesto a Germán Amorrortu «Manso», mientras que el nuevo sector creado de la división del 17.º, el 23.º, cuyo territorio de actuación se situaba en la parte oriental del Maestrazgo, lo encabezaba Jesús Caellas Aymerich «Carlos», un antiguo anarquista reconvertido en comunista ortodoxo que depuraría sin contemplaciones a los libertarios bajo su mando. El Sector 11.º lo seguía mandando «Grande» y «Medina» hacía lo propio con el 5.º. «Pepito el Gafas», responsable de la escuela guerrillera, fue nombrado jefe del Estado Mayor^[235].

El nuevo responsable trató de imprimir un sesgo político a las guerrillas levantinas con el fin de evitar que, conforme avanzaba la consolidación del franquismo, los maquis derivaran hacia el bandolerismo o la muerte. La acción

política le parecía tan sustantiva que, según fuentes oficiales, se llevó a cabo en los Montes Universales (en la sierra de Albarracín) un curso para mandos de la AGLA, que por entonces tendría unos 200 guerrilleros. También protestó ante los miembros del Buró Político porque se pasaban «las dos terceras partes del tiempo» recaudando dinero para hacer frente a la financiación de la guerrilla. Pero «Antonio» no dispuso del tiempo necesario para fortalecer sus posiciones, ya que el 26 de mayo de 1948 fue eliminado junto con dos compañeros, víctima posiblemente de una emboscada, en la masía Guimerá, en el Portell de Morella (Castellón). Le sustituyó Pelegrín Pérez «Ricardo», responsable del Comité Regional del PCE en Valencia. Antiguo comisario del XIV Cuerpo de Ejército durante la guerra civil, «Ricardo» llegó a la jefatura de la AGLA en un periodo de crisis y cuando la lucha armada en Levante estaba en un proceso involutivo: incluso se había perdido la comunicación entre el Estado Mayor y los sectores 17.º y 23.º, acosados por una feroz represión. El nuevo responsable, un político, insistía en las tesis de «Antonio», privilegiar la acción política sobre las operaciones militares. Pero tampoco logró poner en marcha los planes previstos, ya que murió el 19 de agosto de 1948 en una escaramuza en las proximidades de La Ginebrosa (Teruel), en uno de los episodios más oscuros del maquis de la zona, ya que supuestamente fue abandonado en el combate por sus propios compañeros. La desaparición de «Ricardo» acentuó la crisis interna de la AGLA, que afrontó la crisis mediante la implantación de métodos estalinistas. Las depuraciones afectaron sobre todo a los anarquistas, a quienes los dirigentes comunistas miraron con desconfianza desde el principio de la AGLA, sobre todo cuando una treintena de libertarios procedentes de las minas de Utrillas se incorporaron al Sector 17.º. Las actividades y actitudes puntuales de algunos de ellos —comportamientos próximos al bandolerismo, confidencias a la policía y evasiones a Francia— favorecieron las depuraciones. Pero los problemas internos no detenían el acoso de las fuerzas de represión. Según fuentes oficiales, el Sector 17.º soportó 60 bajas en 1948 y sólo obtuvo 6 altas, empezando el año 1949 con 13 efectivos. La muerte de «Ricardo» inició, además, un tiempo tachonado de vacíos de poder, aunque se responsabilizó provisionalmente de la agrupación Francisco Bas Aguado «Pedro»^[236].

En el mes de marzo de 1949, ante la situación crítica de la agrupación, «Pedro», acompañado de algunos dirigentes —Agapito Esteban Mínguez «Mateo», Doroteo Ibáñez Alconchel «Maño» (o «Ibáñez»), Manuel Gracia Martín «Lorenzo» y Manuel Pérez Cubero «Rubio»—, decidió ir a Francia para exponer directamente a los líderes comunistas la realidad de las guerrillas levantinas y recibir las consignas correspondientes. Aunque en el trayecto cayó abatido «Mateo», los demás lograron llegar a territorio francés sin novedad. Al margen de las consideraciones expuestas por los guerrilleros, el partido estaba decidido a llevar adelante el cambio de táctica, a favorecer el «entrismo» en las organizaciones de masas franquistas en detrimento de

la vía armada. Prohibió la edición de *El Guerrillero*, sustituido por *Mundo Obrero*, y la AGLA pasó a estar dirigida por el Comité Regional de Resistencia de Levante. El grueso del comité estaba formado por doce militantes enviados desde Francia y encabezados por «Andrés». Solamente un guerrillero local, Florián García «Grande», participó en ese comité como secretario de propaganda. Una novedad importante fue que los «franceses» trajeron dinero, y durante un tiempo pudieron prescindir de los golpes económicos. El mensaje era preciso: los guerrilleros debían convertirse en «instructores políticos y organizadores del campesinado»^[237].

Durante los meses siguientes, el nuevo comité realizó una serie de cambios, más teóricos que prácticos, que no cambiaron la vida cotidiana de los guerrilleros, que apenas percibieron la modificación táctica. Además, muchos de ellos disientían frontalmente de la misma, pese a que en Levante se encontraban los militantes más disciplinados y leales a los mandos comunistas. Pero los recién llegados de Francia desconocían la realidad de la AGLA y no entendían las reticencias de los guerrilleros a los nuevos planes. Transformar los maquis en consejos de resistencia formaba parte del catálogo de buenas intenciones, ya que para los guerrilleros era técnicamente inviable la pretensión de pasar del monte a actuar en los núcleos de población, y el intento de que cohabitaran las dos formas de lucha, guerrilla y acción política, llevado a cabo por los mismos hombres, denunciaba un desconocimiento absoluto de la realidad político–policial española. El hecho de que los sectores pasaran a denominarse comités de grupo y la dirección de la AGLA se transformara en Comité Regional del PCE era algo puramente cosmético, que no afectaba a la raíz del problema. Que los dirigentes no se atrevieran a formularlo claramente a Francia, también formaba parte de la cultura comunista: en determinadas circunstancias, advertir de la realidad era altamente comprometido.

Pese a todos los problemas internos y a la represión franquista, las acciones de la AGLA durante el trienio se mantuvieron en un nivel alto. Las operaciones políticas en los pueblos se multiplicaron. En el año 1947, los guerrilleros ocuparon la aldea albaceteña de Albarracín de Monteverde, los pueblos turolenses de Monteagudo del Castillo, Sarrión y Foz de Calanda, las localidades valencianas de Reatillo–Chera y San Benito–Ayora, así como la castellanense de Castell de Cabres. También durante ese año practicaron sabotajes en la vía Utrilla–Zaragoza, se destruyó el puente del ferrocarril Valencia–Barcelona a la altura de Oropesa, y fueron atacadas en varias ocasiones las líneas Caspe–Nonaspe, Vinaroz–Benicarló o Cuenca–Aranjuez. Los sabotajes se extendieron a las redes de conducción eléctrica, como la de Vistabella–Castellón. También prosiguieron las ejecuciones de falangistas, autoridades franquistas y confidentes. El 2 de julio de 1949, «Manco de la Pesquera» mató al alcalde de Santa Cruz de Moya (Cuenca) mientras trabajaba en las viñas. El 13 de febrero de 1948, una partida ejecutó al alcalde de El Cuervo (Teruel) y a su mujer,

considerados confidentes de las fuerzas represivas. Y el 23 de junio de 1947, un grupo de guerrilleros dieron muerte al masovero de la Ermita de San Bartolomé, en Vistabella (Castellón). El 17 de julio de 1947 fue ejecutado el jefe de Falange de Albentosa y el secretario municipal, y días después, Ricardo Villanueva, alcalde de Alcalá de la Selva (Teruel). El control de carreteras era otra de las acciones que repitieron los maquis levantinos. Así, el 16 de septiembre de 1948, veinte guerrilleros efectuaron un control en la carretera de Guadalajara a Priego en el que, además de despojar a los viajeros de los objetos de valor, detuvieron a un teniente y un número de la Guardia Civil; dos recaudadores de impuestos fueron ejecutados^[238].

Pero la llegada de Pizarro Cenjor significó también el comienzo de las caídas masivas por parte de los guerrilleros, incrementadas notablemente a partir de 1948. Según fuentes comunistas de difícil confirmación, desde marzo a septiembre de 1948 se realizó una importante ofensiva antiguerrillera, dirigida por el general Monasterio, y en la que participaron más de 12 000 efectivos. Se utilizaron incluso armas pesadas, además de incendiar los bosques de las zonas en las que se refugiaban los guerrilleros. Las caídas se multiplicaron. En mayo de 1948, en el asalto al campamento de Salinas de Valtablao, las fuerzas de represión eliminaron a todo el Estado Mayor del Sector 5.º, que encabezaba «Medina». Importante resultó también la matanza de la masía Cap i Corp. El 21 de abril de 1948 los servicios de información policiales tuvieron conocimiento de que la partida mandada por Luciano Mamilo Muñoz «Deseado» se encontraba en Morella–Castellón. Debido a las informaciones bajo tortura del enlace Francisco Pera, los guardias conocieron que en la localidad de Torreblanca se encontraba el guerrillero «Nacido», que estaba escondido en casa de «La Cabrera», su compañera. La operación fue dirigida por el comandante José Hernández de los Ríos, jefe del Sector Interprovincial. En el encuentro subsiguiente «Nacido» resultó herido pero consiguió escapar y, en lugar de avisar a sus compañeros, huyó a Tirig. Mientras tanto, su compañera, también mediante torturas, terminó indicando el lugar donde se encontraba el resto del grupo. Un comandante, cinco guardias civiles y dos policías asediaron en la masía Cap i Corp el día 22 a «Deseado», que estaba acompañado por cuatro hombres. Los sitiados trataron de salir disparando, y se entabló incluso una lucha cuerpo a cuerpo entre el comandante y un guerrillero muriendo los dos cuando otro maquis arrojó un bomba sobre el oficial de la Benemérita. En Cap i Corp cayeron «Deseado», otros dos guerrilleros, el masovero y el comandante Hernández de los Ríos, el guardia civil de más alto rango muerto en la lucha contra el maquis, junto con el también comandante Francisco Calleja Buigues, que murió el 29 de abril de 1950 en Alberique (Valencia). El 16 de octubre de 1948, en las proximidades de Villarejo de la Peñuela (Cuenca), tuvo lugar un enfrentamiento en el que los maquis perdieron a cinco hombres, además de resultar detenido otro que se hizo confidente^[239].

En 1949 continuaron las bajas en la AGLA. El 14 de marzo las fuerzas de orden atacaron el campamento–escuela de Aguaviva. En la escaramuza murieron dos guerrilleros y se practicaron numerosas detenciones de enlaces en Aguaviva y otras localidades de la comarca. Además, las fuerzas de orden se apropiaron de importantes materiales, como documentación, explosivos y municiones. Pero la hecatombe «militar» de la AGLA se produjo en uno de los enfrentamientos más dramáticos, definitivos y simbólicos de la guerrilla antifranquista, el que tuvo lugar en Cerro Moreno, un escenario abrupto del pueblo conquense de Santa Cruz de Moya, y del que sólo salió con vida, aunque detenido, un enlace llamado «Pedro». El asalto al campamento se inició a las 7 de la mañana del día 7 de noviembre de 1949, y marcó el final de la resistencia organizada en Levante —orgullo armado del PCE— y, por extensión, en toda España. Después de la sarracina de Cerro Moreno, en las tierras levantino–aragonesas sólo se mantenían grupos menguados de supervivientes, ajenos a cualquier proyecto político y guerrillero, esperando marchar a Francia o en una huida hacia adelante que concluirá en la muerte. El asalto lo realizaron fuerzas de Valencia, Cuenca y Teruel. Unos 500 guardias civiles y 100 somatenistas fueron los encargados de acabar con los habitantes del campamento. En Cerro Moreno murieron 12 guerrilleros, entre ellos varios de los «franceses» que formaban parte del Comité Regional de Resistencia. Sánchez Agustí identifica a los siguientes maquis como fallecidos: Manuel Gracia Martín «Lorenzo», José Cavero de la Cruz «Bartolo», Emilio Argilés Jarque «Vidal», Basilio López Alarte «Ángel», Mateo Sánchez Arazonala «Abuelo», «Ramiro», «Manolo», «Eulogio», «Paquito» y «Andrés». Pero sabemos con seguridad que uno de los citados, Argilés Jarque, sobrevivió muchos años a la matanza de Cerro Moreno. Mercedes Yusta Rodrigo apunta como muertos a «Ramírez», José Cavero de la Cruz, «Eulogio», Constantino Emiliano Ruiz y «Manolo». Las dificultades para identificar a los muertos de Cerro Moreno son varias: algunos de ellos provenían de Francia y sólo eran conocidos por los alias (con los que figuran inscritos en el registro de Santa Cruz de Moya) y, además, después de matarlos, los guerrilleros fueron bajados a rastras del monte, quedando muchos de ellos totalmente desfigurados e incluso alguno terminó decapitado. Entre los mandos importantes de la resistencia, sólo se libraron «Pedro», «Pepito el Gafas» y «Grande». Pero, por encima de otras consideraciones, se impone una pregunta elemental: ¿A qué grado de desintegración había llegado la AGLA para que fuera posible coger indefensos y dormidos a la mayor parte de los nuevos dirigentes guerrilleros? Evidentemente, una parte de la responsabilidad recayó en el Buró Político, que envió a liderar a la resistencia armada a militantes que desconocían totalmente la situación de la España franquista^[240].

Por lo que respecta a la AGLA, después del arresto de Joaquín Arasanz se hicieron cargo de la dirección Emilio Vistué, comisario que fue enviado desde

Francia, y Ángel Bellostas, como responsable militar, detenidos a su vez en la primavera de 1948 y fusilados en la cárcel de Torrero (Zaragoza). Aparte de algunos hechos de armas durante la segunda mitad de 1947 (especialmente asaltos a recaudadores de impuestos y eliminación de tres guardias civiles en las proximidades de Bierge), los aragoneses continuaron privilegiando la propaganda política en núcleos como Barbastro y Monzón en detrimento de las cuestiones estrictamente militares. Pese a todo, funcionaban cuatro guerrillas, integradas por media docena de hombres cada una y dirigidas por Valeriano González «Drole», «Narciso», Manuel Cosculluela y «Americano». El 10 de enero de 1948 se encontró el cadáver de «Tanque», guerrillero histórico de la zona aragonesa, que había sido compañero de «Drole». Aunque oficialmente la muerte se debió a un accidente, un informe policial que indicaba la existencia de una herida de bala y la condición de anarquista del finado desencadenaron las sospechas de una hipotética depuración. No existen pruebas de que fuera asesinado por los compañeros, pero sirvió como factor de desmoralización de las guerrillas. En el otoño de 1948, murió en un encuentro en Binéfar Narciso Villellas, «Narciso», sustituto de Vistué y Bellostas, y se hizo cargo de la agrupación Manuel Cosculluela. Aunque en 1948 todavía efectúan algunas acciones significativas, como el asesinato de la esposa —embarazada de nueve meses— y los suegros del jefe local de Falange de Baldellou, además de dos vecinos del pueblo. El episodio, recogido por Mercedes Yusta Rodrigo, ocurrió en un contexto dominado por la represión en ambas direcciones. Contra toda lógica, los guerrilleros habían entrado en el pueblo a pleno día y fueron tiroteados por varios vecinos, entre ellos el cura. Las consecuencias se tradujeron en cinco muertos, en una acción que, como acepta Manuel Tosán en un informe, «fue mal acogida por la población, la hicimos sin tener información, un poco fuimos a la aventura, nos metimos sin saber qué había en el pueblo». En agosto de 1948 había muerto un guardia en un enfrentamiento con los guerrilleros, que en septiembre ejecutaron al alcalde de Barbuñales^[241].

Los comunistas cambian el paso

En octubre de 1948, el Buró Político del PCE llevó a cabo una importante modificación táctica con respecto a la lucha armada, orillada como elemento medular del antifranquismo a partir de esa fecha. En su lugar, se privilegió el «entrismo» en las instituciones de la dictadura, básicamente en las organizaciones de masas (tesis que ya habían mantenido en 1942 Diéguez y Larrañaga y también el italiano Palmiro Togliatti, delegado de la IC en España, durante la guerra civil). El Partido Comunista, especializado en redefiniciones ideológicas y balanceos tácticos a toque de corneta,

se instaló en una vía de ambigüedad: mientras que proclamó oficialmente el final de la resistencia armada, proseguían las actividades del maquis en los montes españoles. En medio de ese modelo de transición estaban los guerrilleros, que a los problemas con las fuerzas de represión añadían ahora los mensajes contradictorios de los dirigentes de Toulouse. Al mismo tiempo que se les informaba del fin de la guerrilla, los enviados del partido les pedían que continuaran en el monte para proteger a los comités políticos o que ellos mismos se «convirtieran en instructores políticos de los campesinos». Un verdadero galimatías teórico y práctico, ocasionado principalmente porque el cambio de táctica no había surgido de un análisis riguroso de la situación española o de un debate sobre las prioridades de la oposición antifranquista, sino de una sugerencia de Stalin. Pero la influencia de la URSS era tan sustantiva que nada mejor para resumirla que la frase favorita de los comunistas de la época: «Cuando Stalin lo ha hecho, sus razones tendrá».

Disuelta cinco años antes la Komintern y con un Kominform —creado en 1947— para el que el «problema español» resultaba secundario, fue el «padre Stalin» —el mismo que dejó de presionar en favor de España para que los aliados le dejaran las «manos libres» en el este europeo— quien facilitó el cambio de táctica, aprovechando la visita que en septiembre de 1948 realizaron al Kremlin los más significados jefes del Buró Político del PCE: Pasionaria, Antón y Carrillo. Stalin, que estaba acompañado de Molotov y Suslov, les sugirió la necesidad de abandonar paulatinamente la lucha armada y trabajar en los sindicatos y en los movimientos de masas del régimen franquista. Stalin les puso como ejemplo la experiencia de los bolcheviques en el mismo sentido, y les explicó también que después de Yalta resultaba inviable acceder al poder mediante un movimiento subversivo. Según Manuel Azcárate, el dirigente soviético les expuso el anacronismo que significaba el maquis y que «lo recomendable y oportuno, en cambio, era trabajar dentro de las organizaciones legales del enemigo que agruparan a las masas, según la famosa tesis de Lenin, y así extender en ellas las ideas revolucionarias y comunistas». Carrillo puntualizó posteriormente que Stalin «no nos propuso abandonar la guerrilla más que indirectamente». La entrevista, cuestionada por algunos autores, está avalada por varios testimonios. No sólo Pasionaria y Carrillo la confirman en sus memorias sino que también destacados comunistas de la época como Santiago Álvarez y Azcárate la corroboran. Este último escribe que Carrillo reunió a los redactores de *Mundo Obrero* para comunicarles la entrevista y fijar la línea informativa correspondiente con la nueva posición táctica^[242].

Según Azcárate, «aunque el buró político defendía las guerrillas, acabaron convenciéndose de que Stalin tenía razón». En efecto, los máximos líderes tuvieron que emplearse a fondo para que los miembros de la dirección comunista aceptaran unánimemente la resolución. La nueva estrategia se oficializó un mes más tarde en un

artículo de Carrillo publicado en *Nuestra Bandera*, revista teórica del PCE desde que en 1940 empezó a editarse en México. El título era todo un programa: «Nuestra experiencia en los años de lucha». En el texto fijaba la actividad de los comunistas en el apartado político y también evaluaba la posibilidad de mantener algunos grupos armados de élite con el objetivo de custodiar y proteger a los comités políticos. De ese modo, el PCE alimentó una importante y trágica confusión durante casi cuatro años. Las tesis carrillistas, válidas como soporte para una discusión teórica de salón, aplicadas a la realidad de los montes españoles sólo ocasionaron malentendidos, enfrentamientos entre los antifranquistas —se produjeron minúsculas guerras civiles entre los maquis— y muerte. Los hechos certificaron tozudamente que el viraje teórico enunciado a finales de 1948 sólo se tomó en serio cuando las elecciones sindicales de 1950 confirmaron las posibilidades de la nueva estrategia, y todavía a principios de 1952 algunos guerrilleros seguían en los montes apoyados orgánicamente por el Partido Comunista.

Posteriormente, los dirigentes comunistas trataron de ajustar —sin mucha insistencia, es cierto: la memoria no ha sido un bienpreciado en el PCE— el reloj de la historia para justificar una política obscena durante los últimos años de la resistencia. «Continuamos en el movimiento de guerrillas hasta 1949, pero ya dudábamos, yo por los menos. Sentíamos que la desmoralización se adueñaba de las unidades, por falta de una perspectiva clara», expuso Santiago Carrillo a Gallo y Debray. Pero tanto las decisiones que afectaron a las agrupaciones como los artículos de *Nuestra Bandera* manifestaban que los comunistas permanecieron en la ambigüedad hasta bien entrado el año 1950. Una ojeada a la prensa de la resistencia de aquellos años —lo mismo que a la oficial del partido— evidencia que el cambio de táctica no había llegado a las agrupaciones, y los pasquines, octavillas y periódicos guerrilleros seguían cantando las excelencias de la lucha armada y también se hacían eco de los mensajes de apoyo de Pasionaria, Carrillo o Líster.

Resulta inexplicable y estremecedor el análisis que de la situación de la resistencia hacían los dirigentes comunistas de la época, incluso las explicaciones retrospectivas. El hombre fuerte del PCE en relación con la guerrilla, Santiago Carrillo, mantenía en la célebre entrevista de 1974 con Gallo y Debray que «cometimos el error de prolongar demasiado la lucha guerrillera. Hasta 1949, estábamos centrados en la idea de un levantamiento nacional. En 1948 fui incluso a Yugoslavia a ver a Tito para pedirle que organizara lanzamientos de paracaídas sobre Levante. Esto era un mes antes de su ruptura con la Komintern y no sabíamos nada de lo que ocurría». Aparte de confundir el Kominform y la Komintern, sólo el cinismo permite hacer comentarios de ese tipo. A partir de mediados de 1947, la ofensiva franquista estaba literalmente aniquilando a la guerrilla, abandonada por segmentos de la población que simpatizaban con la causa pero que estaban sometidos a un acoso

insostenible por parte de las fuerzas de represión. Solamente una pérdida absoluta de perspectiva a causa de la clandestinidad o un cálculo interesado en el que la vida de los guerrilleros se reducía a un valor de uso justifica pensar que desde finales de 1947 la resistencia armada podía ser el detonante de una sublevación contra el régimen. La mayor parte de las agrupaciones guerrilleras habían desaparecido como tales y sólo pequeños grupos dispersos, desarbolados y perplejos buscaban sobrevivir o marchar al exilio. Eran hechos objetivos, visibles para todo el mundo excepto para los rectores del comunismo español. Las dudas metodológicas o los cálculos de los jefes comunistas los terminará resolviendo radicalmente el régimen. Uno de los mejores especialistas en el antifranquismo, Hartmut Heine, lo formula de manera gráfica: «El cambio de táctica guerrillera no se produjo nunca. La única modificación que hubo fue la desaparición de los protagonistas, los guerrilleros, pero no por obra de ninguna evacuación, sino a manos de las fuerzas represivas»^[243].

En efecto, una serie de variables convirtieron la disolución de la guerrilla en un verdadero desastre. Las dudas del Buró Político provocaron que las noticias del nuevo rumbo llegaran de manera irregular a las agrupaciones, incluso en versiones contradictorias. La decisión no se consultó a los guerrilleros: ni el abandono de la lucha armada ni la pretensión de reconvertirlos en agentes de propaganda política. El método era siempre el mismo. O se enviaba un mensajero desde Francia para impartir las nuevas consignas, como ocurrió en Galicia y Asturias, o se llamaba a los responsables guerrilleros a Francia, como en el caso de Levante. La opinión de los guerrilleros, que mantenían la presencia comunista en España y eran quienes estaban poniendo en juego algo tan valioso como su propia vida, apenas fue tenida en cuenta, cuando no fue abiertamente despreciada. Las reacciones en las distintas regiones de España fueron de distinto signo. Desde el rechazo frontal en Asturias a la aceptación de la AGLA, pasando por el autismo de la «Agrupación Roberto», ajena a las decisiones de Toulouse.

La única solución razonable habría pasado por promover y agilizar una evacuación generalizada de los restos de las agrupaciones. La disolución de la guerrilla, al no llevar aparejado un plan de evasión, dejó a los guerrilleros desguarnecidos, aislados y abandonados a su suerte. Salvo en el caso de Levante, donde se organizó una escapada tardía y con defectos de planificación, los maquis quedaron desamparados. Pese a todo, algunos consiguieron abandonar España por sus propios medios, incluso en pequeños grupos. Todavía en 1988 uno de los dirigentes más representativos del comunismo español, Santiago Álvarez, formuló en un debate sobre el movimiento guerrillero algo verdaderamente estrafalario e increíble con respecto a la valoración de las vidas de los maquis conforme a su condición de jefes o de subalternos. Refiriéndose a la retirada no tuvo problema en exponer que, llegado el caso, «hay que recoger velas, y salvar en la medida de lo posible a los cuadros

fundamentales y, si fuera posible, a toda la guerrilla, para evitar que aquellos luchadores fueran objeto de represalias y perdieran la vida en los pelotones de fusilamiento». Carrillo se jacta de «que teníamos un aparato ilegal muy potente. En la frontera contábamos con decenas de guías que conocían muy bien los Pirineos y los senderos de montaña que llevaban hasta las unidades de guerrilleros». Vanagloriarse de unas redes extraordinarias que no sirvieron para algo tan elemental como permitir la salvación de los guerrilleros suena a ignorancia o a sarcasmo^[244].

El cambio de táctica coincidió con la rebelión de Tito en Yugoslavia. A partir de entonces, los comunistas estuvieron más preocupados en encontrar «titistas» en el partido que en salvar guerrilleros. El PCE se había decidido por la ortodoxia soviética y pagó el precio de un aislamiento cada vez más acentuado.

El final de la resistencia armada (1949–1952)

Cuando, en la primavera de 1952, los dirigentes comunistas del exilio cancelaron definitivamente la resistencia armada, apenas quedaban ya guerrilleros en los montes españoles. El franquismo se había encargado de aclarar las dudas de los estrategas del PCE mediante la eliminación de los restos de un movimiento subversivo derrotado por el abandono de las democracias occidentales, las fracturas de la oposición antifranquista y la creciente solidez de un régimen que, después de imponerse por medio de la guerra y de una brutal represión, empezaba a salir del marasmo económico y ampliaba su base social. Los demócratas menos activos (la mayoría) buscaron la alternativa de confundirse en la masa neutra del país a cambio de sobrevivir, y orillaron la lucha por la libertad para tiempos mejores. Para justificarse, inventaron una expresión que hizo fortuna, el «exilio interior», y que en realidad era un eufemismo para justificar su miedo al compromiso activo. Para los maquis, el paisaje del monte —antes acogedor y ahora amenazante— se confundía desde 1949 con el de la muerte, y sólo un barco, el tren o muchas horas de caminar por los montes les evitaría encontrarse con un destino que parecía escrito de antemano.

La muerte de Manuel Girón Bazán

El 2 de mayo de 1951 era abatido Girón Bazán, un legendario guerrillero leonés que ya había sido dado oficialmente por muerto en los periódicos provinciales y en el Registro Civil el 25 de febrero de 1949. Las fuerzas policiales ocultaron el cadáver durante varios días, ya que está inscrito en el Registro Civil de Ponferrada con fecha de 25 de mayo, aunque «el sujeto estaba muerto desde hacía quince o veinte días». Manuel Girón Bazán, jornalero y militante ugetista, se manifiesta como el paradigma de la resistencia armada, ya que su biografía atravesó todas las fases de la guerrilla y encarnó muchas de sus características, incluso a la hora de la muerte.

Había participado en la guerra civil en Asturias, y en las sierras galaico-leonesas se convirtió en huído a partir de la derrota de 1937. El ascendiente que tenía sobre muchos de los escapados ayudó a que asturianos, gallegos y leoneses alimentaran la

primera guerrilla de posguerra, la Federación de Guerrillas de León–Galicia, una organización que, pese a su relativa importancia en el contexto nacional, aparecía como modélica en otros aspectos: fue la primera guerrilla organizada (modelo para las futuras agrupaciones), y la composición de sus mandos y guerrilleros de base era políticamente plural. Pero cuando la Federación empezó en 1947 el proceso de disolución, Manuel Girón Bazán, al contrario que muchos de los compañeros socialistas y anarquistas, no escogió el camino de la huida sino que también utilizó su prestigio entre los hombres del monte para que aceptaran a la única organización que entonces combatía al franquismo en la zona, el Ejército Guerrillero de Galicia. En su mundo ideológico de referencias elementales, entendía que la unidad resultaba más importante que los credos partidistas, sobre todo si el objetivo era acabar con la dictadura. También optó por permanecer en el monte cuando la guerrilla era ya un ejercicio de heroísmo inútil. Para él no existía el pretexto acomodaticio del «exilio interior». Ni siquiera la alternativa del exilio.

También su muerte ejemplifica otras muertes y radiografía la atmósfera de horror de aquellos tiempos. Elementos comunes como la negativa a exiliarse de su tierra, la obsesión de un guardia civil —el comandante Arricivita— y la felonía de un compañero dibujan un historial común a otros guerrilleros de esos años. También Girón, como los héroes tradicionales que pueblan las leyendas del mundo rural, habría de ser traicionado para acabar con su vida. La versión oficial de su muerte sostiene que falleció en un enfrentamiento armado con miembros de la Guardia Civil. Pero con el cadáver de Girón bajaron otro —un «hombre no identificado», según el registro— que serviría para una segunda versión en el caso de que la primera no fuera creíble: un compañero había matado a Girón y los compañeros de éste degollaron al asesino. Sin embargo, la realidad caminaba por otros derroteros y la versión popular que circula por la comarca de la Cabrera, donde pasó sus últimos años, coincide exactamente con lo sucedido: Girón fue asesinado en la entrada de una cueva de las Puentes del Mal Paso, en las proximidades de Molinaseca, por un enlace de Santa Eulalia de la Cabrera llamado José Rodríguez Cañueto. Aprovechó que los tres compañeros de Girón se hallaban fuera de la comarca, y en el refugio estaban solamente el confidente y la compañera de Girón, Alida González Arias «Penca». Según algunos autores, la muerte estaba pactada con los compañeros de Girón —que oportunamente habían salido de gira— y la compañera, a la que, como era habitual en estos casos y en esta época, no se le aplicó la «ley de fugas» cuando fue arrestada. Otros autores —y todos los supervivientes del episodio— han testimoniado que ese pacto nunca existió, y que sólo afectó al enlace de Santa Eulalia de la Cabrera. Lo cierto es que no existe prueba alguna de una posible connivencia entre sus compañeros y la Guardia Civil. Pero lo que demuestra hasta dónde había penetrado la cultura de la violencia no fueron ni la muerte ni la traición, hechos relativamente

habituales durante estos años, sino el proceso que la hizo posible.

El enlace de Santa Eulalia era convocado periódicamente a los cuartelillos de la Guardia Civil, al igual que otros muchos paisanos cabreireses a los que se suponía relacionados con los maquis, donde se les aplicaban los métodos habituales para conseguir información. A principios del año 1951, Cañueto marchó como temporero a Andalucía, hospedándose a su paso por Madrid en casa de un policía originario de la Cabrera. Después de conocer su situación, el policía le convenció para que se infiltrara en el grupo de Girón y lo entregara a las fuerzas de orden. A cambio, le darían una recompensa económica y, además, le dejarían libre de cargos. El pacto empezó a tomar cuerpo entre Madrid y El Bierzo, y se llevó a cabo tal y como lo había planificado el agente madrileño. La pieza más codiciada para el comandante Arricivita, responsable del sector de huidos en El Bierzo y la Cabrera, estaba en condiciones de ser abatida.

No le iba a resultar fácil al enlace de Santa Eulalia de Cabrera infiltrarse en el grupo del guerrillero leonés, que desconfiaba de las incorporaciones que no presentaban motivos justificados (la desconfianza en el monte era un seguro de vida). Después de varios intentos y una serie de montajes —supuestas palizas—, y al comprobar que Girón no accedía a sus deseos, el enlace tomó la decisión —seguramente la tomaron por él— de convertirse en un proscrito. El día 24 de abril eran asesinados en Santa Eulalia de Cabrera, en casa de un vecino a donde habían sido conducidos, Antonio León Carrera, presidente de la Junta Vecinal, y Carmen Ballesteros Rodríguez. Según un expediente del Ayuntamiento de Encinedo —en el que existe una versión testifical de los hechos por varios vecinos del pueblo y relativos a la dispensa escolar para los hijos menores de los muertos— a León Carrera le cortaron las orejas antes de asesinarlo a tiros y, aunque no consta testificalmente, los testimonios coincidentes de los cabreireses aseguran que a la mujer le amputaron los pechos antes de matarla. Según el mismo informe, los testigos apuntaron como autores del hecho a «tres huidos» de los que sólo reconocieron a Cañueto. A raíz del suceso de Santa Eulalia de Cabrera, y en contra de la opinión de Manuel Girón, el enlace fue aceptado en el grupo. A la primera oportunidad, Rodríguez Cañueto cumplió su parte del pacto y Girón murió a consecuencia de una «parálisis por destrucción cerebral» (un tiro en la cabeza). Pero en la danza macabra de muertos con el objetivo de aniquilar a Girón, todavía quedaba por identificar el cadáver del hombre degollado que habían bajado del monte y cuyo rostro estaba desfigurado. Se llamaba Elías Álvarez y era natural de Castrohinojo. Trabajaba en las minas de wolfram en la localidad de Casayo (Orense) y estaba fichado como colaborador de los maquis. Cuando José Rodríguez Cañueto comunicó a Ponferrada la muerte de Girón, un miembro de la brigadilla se encaminó a las minas de Balborrás, detuvo a Álvarez y lo condujo a donde estaba Girón muerto. Allí le

aplicaron la «ley de fugas» y después le destrozaron el rostro para que, en caso de necesidad, pudieran presentarse las muertes como una refriega entre los fugitivos.

Pero, al margen del sinuoso proceso, la realidad era que esta vez Girón estaba verdaderamente muerto. Enterrado en el cementerio del Carmen tres semanas después de ser asesinado, cuando fue demolido el camposanto, un amigo recuperó sus restos, que tuvo guardados en casa hasta que fueron inhumados definitivamente, el 7 de febrero de 1997, en el cementerio de Montearenas. Los cuatro compañeros de Girón en sus últimos años cabreireses —Francisco Martínez López, Pedro Juan Méndez, Manuel Zapico Terente y Silverio Yebra Granja— alcanzaron la frontera francesa en septiembre de ese mismo año. Quedaba en tierras leonesas otro guerrillero muerto: Enrique Yáñez Álvarez «Chaval», natural de Rocosende–Soutadoiro (Orense). En el Registro Civil de Truchas aparece como fallecido el 26 de mayo de 1951, días después de la muerte de Girón. Sin embargo, esa fecha no corresponde a la muerte sino a la exhumación del cadáver en el monte de Cunas, lugar en el que había sido enterrado por los propios guerrilleros después de que Yáñez —que padecía una tuberculosis irreversible— hubiera optado por suicidarse ante la perspectiva de convertirse en un impedimento para sus compañeros o de caer en manos de las fuerzas de orden público^[245].

Tiempo de traidores

Por todo el territorio español con enclaves de maquis se repitieron, con pequeñas variaciones, muertes parecidas a la de Girón, un jornalero analfabeto al que las circunstancias convirtieron en la figura más perseguida del occidente de León y el oriente de Orense. Como Girón, otros muchos guerrilleros y enlaces cayeron víctimas de una defección. Porque si algo caracterizó esta última fase de la resistencia antifranquista, más allá de cuestiones estrictamente organizativas o tácticas, fue la presencia dominante del factor humano. En un contexto dominado por la idea de la muerte y que exigía adoptar decisiones extremas, algunos guerrilleros y enlaces eligieron la felonía como medio para sobrevivir. Las caídas de maquis a partir de 1947 no se produjeron en campo abierto, algo excepcional, sino a causa de las delaciones. Cuando la situación política internacional apuntaló a Franco y las fuerzas de orden impusieron procedimientos represivos propios de un estadio de barbarie, un número significativo de enlaces, pero también de guerrilleros, se prestaron a colaborar en la represión. Los territorios de maquis se poblaron de delatores y confidentes. Era un síntoma de la lucha por la vida, pero también el reflejo de la cuota de oportunistas que aparecen siempre que se adivina un cambio en las relaciones de poder. En los territorios gallegos ya no se decía que «a pelota ainda

estaba no tellado», sino que la batalla estaba decidida y se imponía obrar en consecuencia.

En el inventario de la infamia, existía para los maquis una jerarquía: la encabezaban los confidentes, la continuaban los delatores y era completada por los desertores que no aceptaban auxiliar a las fuerzas de represión. Entre los guerrilleros, los traidores más habituales eran aquellos que en un momento dado decidían presentarse y colaborar voluntariamente con la Guardia Civil. Un caso paradigmático fue el de Vicente Rubio Bibiano, conocido como «Pedro el Cruel». Era natural de Agudo y había formado parte de la partida de José Méndez Jaramago «Manco de Agudo» después de ser excarcelado en 1940. Se entregó el 12 de abril de 1946 y se ofreció para colaborar con la Guardia Civil. Otros se prestaron a la cooperación con entusiasmo una vez hechos prisioneros. Ejemplo destacado lo constituyó Fausto Navas Navas «Viruta», detenido el 30 de julio de 1946 en el combate que costó la vida a Pedro Díaz Monje «Francés». Navas Navas se trocó en un «traidor ambulante» al servicio del teniente coronel Eulogio Limia Pérez, a quien siguió como miembro de las contrapartidas por Toledo y Ciudad Real. Benito Díaz escribe que «Viruta» se «caracterizó siempre por su falta de escrúpulos a la hora de apretar el gatillo, tanto durante su estancia en la sierra como colaborando luego con la Benemérita».

La memoria de otros guerrilleros está dominada por la sospecha, sin pruebas, de haber colaborado con las autoridades franquistas. Tal vez el caso más relevante fue el de Basilio Serrano «Manco de la Pesquera», al que los testimonios de los supervivientes, guerrilleros y enlaces apuntan como delator aunque se rechaza desde fuentes oficiales con un argumento poco sólido: que fue ejecutado posteriormente (27 de abril de 1952). Al margen de los procedimientos para llegar a la colaboración y de la intensidad de la misma, el propósito de todos era idéntico: salvar la vida a toda costa. Algunos lo consiguieron, como «Viruta» y «Pedro el Cruel». Otros, pese a la infamia de la colaboración, terminaron en el cadalso. También hubo felones con mala suerte. Domingo Sánchez «Vilches», apresado el 20 de marzo de 1949, decidió cooperar con las fuerzas de orden, con tan mala fortuna que murió pocos días después en un encuentro entre guardias civiles y guerrilleros. Otros renegados no tuvieron tiempo de comprobar si las autoridades franquistas les perdonarían la vida a cambio de colaborar. Siempre que pudieron hacerlo, los maquis ejecutaron a los compañeros que se habían pasado al enemigo. En el código de la guerrilla, la traición de un resistente y su transformación en confidente de las fuerzas represivas constituía el delito más grave, penalizado automáticamente con pena de muerte. José Luis Merediz Vítores «Tarbes», uno de los jefes de la resistencia granadina, fue detenido en 1947 en un viaje entre Almería y Granada, en la estación almeriense de Fiñana. Decidido a salvar la vida, se apuntó a la colaboración con la Guardia Civil. Lo dejaron en libertad, con el fin de que se reintegrara en la guerrilla y de ese modo tender una

trampa a los compañeros. La defección de «Tarbes» pudo tener resultados catastróficos para la resistencia pero el montaje fue tan burdo que sus compañeros advirtieron la situación del jefe. Sometido a vigilancia, fue ejecutado en una calera de Órgiva^[246].

En el censo de delatores y confidentes había guerrilleros de a pie, y los delatores extremeños fueron madrugadores. En 1945 se produjo la traición de Enrique Álvarez de Castro «Lobo», un jovencísimo guerrillero cuyas informaciones tuvieron efectos devastadores para las redes de apoyo, ya que más de cincuenta enlaces resultaron detenidos. En 1946 se pasó al bando policial Víctor Merchán Prieto «Acompañado», y ese mismo año la defección de otro guerrillero, Feliciano Muñoz Basilio «Aviso», motivó la caída de docenas de enlaces y de al menos siete guerrilleros. La confidencia originó también que las fuerzas represivas tendieran una emboscada a otros grupos guerrilleros, uno de cuyos componentes, José González Parras «Ríos», fue igualmente detenido y pasó a colaborar con la Guardia Civil, lo que produjo nuevos arrestos. Otros felones destacados fueron José Ballesteros González «Carretero» y Justo García Gil «Americano». Una traición alimentaba otra. Fracturada la unidad del grupo, el efecto dominó incidía sobre todas las partidas extremeñas aunque afectaron especialmente a la 12.^a División, la más importante, que había mandado «Francés». También fue un experimentado y conocido confidente Manuel Martín Vargas «Felipillo», guerrillero que formó parte de una contrapartida en la Axarquía malagueña^[247].

Pero no solamente los guerrilleros de a pie traicionaron. También los jefes se aplicaron a la tarea de salvar la vida a cambio de entregar la de sus antiguos subordinados. El catálogo de dirigentes que colaboraron con las fuerzas de represión resulta extenso numéricamente e intenso simbólicamente. Los ya conocidos «Viruta» y «Pedro el Cruel» habían ocupado los cargos de jefe de Estado Mayor de la 14.^a División extremeña y jefe de una de las tres guerrillas de la 23.^a División ciudadrealeña, respectivamente. Otros felones ilustres fueron Honorio Delgado Blanco «René» y Manuel Guerreiro Gómez «Antonio», miembros del Estado Mayor de la Agrupación de Ciudad Real y el segundo, uno de los hombres fundamentales de la misma. Cuando fueron capturados, colaboraron con Limia Pérez no sólo en la provincia manchega sino que siguieron al jefe de la Guardia Civil en su destino andaluz. También colaboró con Limia desde que fue detenido en enero de 1952 Francisco López Pérez «Poloperero», uno de los jefes más importantes de las guerrillas malagueño–granadinas, aunque meses después fue abatido por los guardias civiles cuando pretendía huir en Sierra Nevada durante un servicio de contrapartida. Pero el título de traidor de traidores en la guerrilla le corresponde a José Muñoz Lozano «Roberto», uno de los dirigentes guerrilleros más destacados de la resistencia antifranquista. La perfidia de «Roberto» constituyó el mayor éxito de las autoridades

franquistas en la represión contra el maquis, tanto material como metafóricamente. Muñoz Lozano, el hombre que hizo posible una de las agrupaciones de referencia, la de Granada–Málaga, después de su detención en septiembre de 1951 en Madrid se prestó a colaborar activamente con Limia Pérez, el jefe de la Guardia Civil que había llenado las sierras granadino–malagueñas de bandos poco respetuosos con él: «No es posible que seáis tan necios para creer que un jefecillo ridículo e ignorante como el tirano que os manda, puede influir para nada en favor del comunismo en España, cuya causa está definitivamente perdida desde la terminación de la guerra»^[248]. Como vimos anteriormente, «Roberto» hizo posible la captura de una parte de los guerrilleros supervivientes y no entregó al resto porque no logró contactar con ellos. Si hubiera tenido suerte en la búsqueda de sus antiguos subordinados, la aniquilación de las guerrillas del mediodía andaluz habría sido completa. Pero «Roberto» era lo suficientemente avisado y pragmático como para comprender que su importancia en el maquis y los crímenes que le imputaban difícilmente le permitirían eludir la muerte. Entonces, el ex dirigente guerrillero efectuó una operación brillante, aunque infame: denunció que Ricardo Beneyto Sapena, que estaba condenado y preso desde 1947, había sido el jefe supremo de todas las guerrillas andaluzas, lo que no era cierto.

Las acusaciones de «Roberto» permitieron reabrir el caso, y Beneyto Sapena, juzgado y condenado de nuevo en julio de 1956, terminó en el cadalso el 15 de noviembre de ese año. Consideraciones éticas al margen, la imputación del jefe guerrillero representaba una posibilidad real de salvarse. Por una parte, responsabilizaba a Beneyto de la jefatura de las guerrillas andaluzas con lo que, teóricamente, desplazaba su propia responsabilidad. Por la otra, ofrecía a las autoridades la oportunidad de abatir una «pieza mayor y de manera inesperada». De poco le sirvió unir la infamia a la felonía. Según fuentes oficiales, Roberto fue juzgado en diciembre de 1952 y se le acusó de las muertes habidas en la zona durante su mandato: «59 asesinatos de personas identificadas; 20 asesinatos de bandoleros de su propia partida; 28 soldados muertos y tres soldados muertos en encuentros o atentados; un número difícil de precisar de atracos y secuestros, habiendo obtenido por el rescate de los secuestrados cerca de cinco millones de pesetas». Lo fusilaron el 22 de enero de 1953 en el cementerio de Granada. Por su parte, su compañero de viaje a Madrid y de traición, Francisco Sánchez Girón «Paquillo», había sido ejecutado el 3 de octubre de 1952. En un informe policial sobre «Roberto», recogido por Azuaga Rico, se decía que fumaba mucho, era un vicioso del café, de risa simpática y atractiva y gran facilidad de palabra. También se afirmaba que sabía conducir y era amante de la zarzuela y la música clásica. Podía tararear y silbar el *Romance de Katiuska* y *Un mercado persa*. Todo un personaje, sin duda^[249].

En el intento de congraciarse con las autoridades policiales, algunos maquis

empezaron su colaboración con las fuerzas represivas matando a sus propios compañeros. Fue el caso del gaditano Manuel Palma Mesa «Bigotes», quien el 17 de noviembre de 1950 asesinó a uno de los guerrilleros con los que compartía el campamento, Miguel López García «Darío», hijo de Bernabé López Calle. «Bigotes» le destrozó la cabeza de un tiro mientras dormía. Luego se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Zahara e inmediatamente regresó al campamento con los guardias, que consiguieron eliminar a otro guerrillero, Juan Martín Menacho «Chinchín». «Bigotes» siguió durante un tiempo al servicio de la Guardia Civil y consiguió la libertad aunque tuvo que soportar el desprecio de muchos de sus vecinos. Trabajó en un cortijo y «cuando aparecía “El Bigotes” en el comedor, todos abandonaban el edificio, negándole incluso el saludo», según Manuel Pérez Regordán. Las informaciones de «Bigotes» permitieron también la captura de Antonio Acevedo Palma «Palomo». El 30 de diciembre de 1949, Francisco Fernández Cornejo «Largo Mayo» se entregó a la fuerza pública y la información posterior que aportó, condujo a la muerte del jefe de las guerrillas gaditanas, López Calle^[250].

El guerrillero «Tarbes» no fue el único ejecutado por sus compañeros. Los traidores se convirtieron en el eje sobre el que pivotó la justicia guerrillera y también la más importante preocupación de los jefes del maquis. Las traiciones, aparte de las consecuencias directas en el desmantelamiento de campamentos, redes de apoyo y muertes de guerrilleros, tenían un aspecto todavía más peligroso: la inseguridad que ocasionaban entre hombres que convivían durante 24 horas al día. «Los artículos de los estatutos decían que los delatores que han causado muerte a los guerrilleros o a los puntos de apoyo, había que ejecutarlos. Entonces cuando se daba algún caso de éstos, se consultaba con el jefe del Estado Mayor de los guerrilleros y él daba las órdenes de si era procedente o no era procedente, y siempre teniendo en cuenta la opinión de los puntos de apoyo que teníamos», testimonia Florián García «Grande»^[251]. Por eso, las normas contra los felones y confidentes eran radicales. Desde la pionera Federación de Guerrillas de 1942 hasta las últimas agrupaciones activas, la felonía siempre estaba sancionada con la pena de muerte: la supervivencia de los guerrilleros pasaba por castigar implacablemente incluso los indicios de defección.

La prevención frente a traidores y confidentes favoreció la aparición de un fenómeno habitual en esos tiempos, las depuraciones, agravado por las características extremas en las que se desenvolvía la actuación de las guerrillas. Resulta comprensible una especial prudencia frente a la deslealtad, pero en muchas ocasiones se utilizó la norma de penalizar la traición como pretexto para solventar diferencias personales o ideológicas. Las purgas políticas, que seguían el método estalinista de liquidar a los enemigos ideológicos, también penetraron con fuerza entre los maquis españoles. Ya vimos cómo las autoridades acusaban a «Roberto» de la eliminación de «20 bandoleros», que estudios rigurosos sitúan entre 14 y 20. En Levante, los

informes policiales elevan hasta 19 los guerrilleros ejecutados por medio de las depuraciones, y uno de los represaliados más notables fue «Delicado» que, después de ser detenido, fue puesto en libertad y mandado ejecutar por «Antonio» el 17 de noviembre de 1946. Victorio Acuña ha confesado que los dirigentes comunistas le encargaron eliminar a los guerrilleros Mateo Obra y Alberto Medrano. Pero las víctimas habituales de las depuraciones eran los libertarios que combatían en las agrupaciones comunistas. La tendencia a disentir de la rígida disciplina de los comunistas y los desencuentros ideológicos y tácticos, además de la medida preventiva de no permitir que el número de confederales sobrepasara determinados porcentajes, condujeron a muchos libertarios a la muerte. También se aplicaron estos métodos estalinistas contra guerrilleros de creencias más o menos anarquistas que se movían en los límites del bandolerismo y se comportaban como individuos o grupos incontrolados en las comarcas de las que eran nativos. Estos guerrilleros «autónomos» fueron eliminados sin contemplaciones, como le ocurrió a «Petrol», ejecutado en las proximidades de Mosqueruela por Lamberto Vicente Zafón «Matalás». Las «depuraciones al revés» tuvieron su correlato en un episodio confuso, según el cual Vicente Seoane «Pasoslargos», guerrillero lucense partidario de unificar a todos los grupos en las organizaciones comunistas, posiblemente fue ejecutado en los primeros días de noviembre de 1948 por fugitivos que se negaban a integrarse en el Ejército Guerrillero de Galicia^[252].

En la clasificación de traidores, también existieron delatores inteligentes y oficiales. Entre los primeros, un caso ejemplar fue el protagonizado por Marcelino de la Parra Casas, uno de los jefes de la guerrilla leonesa. Detenido en 1948 en Tarragona cuando trataba de pasar a Francia, fue trasladado a la capital leonesa y torturado en las dependencias policiales. De la Parra reconstruyó para las autoridades todo el organigrama de la Federación y estableció la identificación de los guerrilleros, aparte de su ubicación geográfica. Muchos de los informes policiales sobre León empiezan con la coletilla: «según testimonio del bandolero Parra»... Sin embargo, no puede decirse que De la Parra facilitara la tarea a las fuerzas de orden puesto que toda la información que suministró a las autoridades era al mismo tiempo verdadera e histórica, ya que nadie de los denunciados se encontraba en la provincia de León, y De la Parra lo sabía. De hecho, los únicos que no figuraban en sus respuestas eran aquellos que permanecían en el monte. En cuanto a los traidores oficiales, eran declarados como tales por el Partido Comunista. Ejemplo de esta categoría fue el dirigente Alfredo Cabello Gómez-Acebo, que cuando fue arrestado en 1946 era jefe del Estado Mayor de la Guerrilla de Málaga. La detención de Cabello provocó el desmantelamiento de una amplísima red de apoyos en el comunismo andaluz y, en consecuencia, fue declarado traidor. No obstante, el motivo de las detenciones masivas en la organización comunista malagueña no se debió a las declaraciones del

preso sino a la documentación intervenida en el momento del arresto. La edición de los expedientes policiales y las resoluciones judiciales, realizada por José Aurelio Romero Navas, demuestra fehacientemente que Cabello se comportó siguiendo el código del «buen comunista». Fue fusilado en el cementerio de San Rafael de Málaga el 5 de marzo de 1948, junto con Juan Aparicio Jiménez y Francisco Moreno Morillas. Pero la hermenéutica comunista no resulta de fácil interpretación, ya que hubo algún episodio de mayor gravedad que, sin embargo, acarreó resultados diferentes. El guerrillero gallego Manuel Bello Parga fue detenido como consecuencia del atentado contra Arcadio Vilela Gárate y ejecutado mediante garrote vil en la cárcel de La Coruña el día 11 de julio de 1946. Manolito Bello, como era conocido en la resistencia y que utilizaba el nombre de «Luis Seijo Freire», fue brutalmente torturado y facilitó documentación importante sobre la guerrilla y los enlaces, según V. Luis Lamela García. Pero no solamente no fue acusado de provocador o traidor, adjetivos habituales en esos casos, sino que se convirtió en un héroe, cantado por los poetas comunistas y admirado por los guerrilleros, incluidos los jefes. Un destacamento guerrillero de Pontevedra llevó su nombre. Un caso semejante fue el de José Antonio Llerandi Segura «Julián», que en la escaramuza de Talavera de la Reina se rindió a las fuerzas de represión mientras sus compañeros «Carlos» y «Robert» se suicidaron porque sabían que les esperaba la muerte con el prólogo de las torturas y tal vez la delación como epílogo. La caída de «Julián» se convirtió en un desastre para la guerrilla y el partido en la Zona Centro y, no obstante haberse rendido, está considerado como un héroe oficial.

En un peldaño menos crítico estaba la desertión, considerada grave pero solamente si conllevaba una delación posterior. Muchos guerrilleros abandonaron las guerrillas para intentar escapar al extranjero o incluso para aplastarse al terreno y convertirse en «topos», y los compañeros que se quedaban en el monte entendían ese deseo de cambiar de vida. Antes de 1947, incluso existía la posibilidad de normalizar la vida entregándose a las autoridades sin la correspondiente colaboración. En la mayor parte de las ocasiones, la cárcel era el final de trayecto. Pero a partir de la ley de bandidaje y terrorismo esta posibilidad quedaba descartada. Los guerrilleros comprendían la desertión como el intento de conservar la vida. El guerrillero «Teo» explicaba que «no todos tenían la moral suficiente para resistir el monte, y si un camarada marchaba, pero no delataba, lo mejor era olvidarse, sin rencor». Los hombres del monte conocían y comprendían mejor que nadie el atractivo de la desertión. Incluso de la felonía. Sin embargo, cuando las guerrillas estaban en pleno apogeo, renegar tampoco era fácil porque los responsables de la resistencia mantenían la tesis de que desmoralizaban a los resistentes. «Valentín», un maquis de la AGLA procedente de Francia, intentó huir con un grupo de guerrilleros y fue eliminado rápidamente por el guerrillero Ibáñez Alconchel. Una de las desertiones

más notables tuvo lugar a finales de 1949, y el protagonista fue Jesús Caellas Aymerich «Carlos», jefe del 23.º Sector^[253].

Un listado por ideologías nos conduce a la conclusión de que una parte sustantiva de los traidores eran de tradición comunista, algo lógico teniendo en cuenta la composición de las guerrillas. Proporcionalmente, sin embargo, predominaron los anarquistas, incómodos como estaban en las organizaciones del PCE (aunque también en una resistencia exclusivamente libertaria, como fue la urbana de Barcelona, se dieron los confidentes policiales). No tenemos noticias de socialistas que traicionaran a sus compañeros. Los guerrilleros del PSOE, que solamente tuvieron una presencia destacada en León y Asturias, dos provincias donde apenas se produjo el fenómeno de la traición. La razón tal vez residió en que marcharon al exilio cuando todavía no se había deteriorado la situación en las guerrillas, lo que añadido a un comportamiento endogámico proporciona algunas de las claves para entenderlo. Por regiones, los guerrilleros confidentes menudearon en Extremadura, Andalucía, La Mancha y en la parte de Cuenca por lo que respecta a la AGLA. Apenas existieron en Galicia, Asturias, Santander y León maquis pasados a la trinchera policial, aunque sí practicaron la delación los enlaces. Lógicamente, ello no se debió a rasgos diferenciales en las distintas regiones sino a las peculiaridades organizativas y a los métodos utilizados por las fuerzas de represión. Mientras que Limia Pérez y otros mandos potenciaron la traición, en el norte la estrategia policial trabajó básicamente con elementos infiltrados en las organizaciones guerrilleras.

Finalmente, reseñar un episodio singular ocurrido en la AGLA. Un maquis llamado Isaías Jiménez Utrillas, y conocido como «Manolo» y «Maqui», colaboraba con las fuerzas de represión. Jugando un día al mus en una masía del pueblo turolense de Nogueruelas, base de la contrapartida en la que estaba integrado, se levantó y mató a tres guardias civiles e hirió gravemente al cabo. Después de asesinar a una hija del masovero, se suicidó^[254]. Evaluar las causas de esta reacción nos llevaría a explorar hipótesis ajenas al análisis histórico pero enormemente sugestivas: el remordimiento, el sentimiento de culpa y la expiación. Resulta fácil entender las inquietudes de los guerrilleros que decidieron convertirse en «bandoleros arrepentidos», conforme a la terminología del régimen. Los arrepentidos se manejaban entre variables comprometidas: desconocían si toda su perfidia les libraría del cadalso, corrían el peligro de ser ejecutados por sus antiguos compañeros y, sobre todo, sentían el desprecio de las comunidades rurales con los renegados.

Inventario de héroes y de leyendas

Los movimientos subversivos producen traidores, pero también segregan leyendas y

regalan biografías de héroes oficiales. La guerrilla antifranquista no fue una excepción, y en su trayectoria registró relatos épicos y un santoral civil. La leyenda indiscutible del maquis de posguerra fue Benigno Andrade García «Foucellas», nacido en Cabrui–Mesía y de profesión jornalero, artesano y lo que se terciara, algo normal en aquellos tiempos de penuria. Su fama alcanzó tales proporciones, que en la Galicia rural los aldeanos llamaban a los del monte «foucellas»: convertirse en sinécdoque del maquis se reveló como un privilegio único en la resistencia antifranquista. La verdadera biografía de «Foucellas», empero, está muy alejada de los perfiles legendarios que le otorgaron, aunque por diferentes motivos, las autoridades franquistas y las gentes de las aldeas. Para las autoridades, privilegiar la importancia de un individuo en detrimento del colectivo armado reforzaba la tesis del bandolerismo, que era posible debido a personajes ubicuos que cometían toda clase de tropelías. Era una estrategia que buscaba alterar la idea de partidas que pretendían subvertir el orden establecido. Para los ciudadanos, «Foucellas» y sus amigos simbolizaban el deseo de justicia y de venganza por parte de unos ciudadanos inermes ante la brutalidad de falangistas y elementos oportunistas: restablecían el equilibrio en los territorios sojuzgados por la dictadura. Las autoridades franquistas le adjudicaron una parte importante de las acciones que se produjeron en las provincias de La Coruña y Pontevedra, versión que aceptaron muchos ciudadanos. También recibió todo tipo de epítetos: audaz y desconfiado, sagaz y cruel, individualista y sujeto de formidable sangre fría, taimado y mujeriego, valeroso y listo. La fama de invulnerabilidad derivada de la manera que tenía de adelantarse a las batidas de la Guardia Civil, la explicó su amiga Isabel Ríos descubriendo que una hermana de «Foucellas» trabajaba en el cuartel de la Benemérita y le informaba de los movimientos de la fuerza. Casado con María Pérez Mellid y padre de dos hijos, tal vez los adjetivos que lo calificaban justamente eran los de astuto, despabilado y pragmático. Por lo demás, la biografía del maquis gallego no resulta extraordinaria por comparación. Aparte de no alcanzar cotas de poder y responsabilidad en la guerrilla gallega, nunca tuvo el carisma de Manuel Ponte Pedreira «Miracielos», la aureola romántica de Manolito Bello, la capacidad de organización de José Gómez Gayoso o el poder de intimidación de Marcelino Rodríguez Fernández «Marrofer». Pero el azar o las autoridades le eligieron para superar en fama a todos ellos.

Un elevado número de acciones contra los detentadores de un poder arbitrario y la lealtad con los compañeros conforman los dos elementos cardinales del héroe en las sociedades tradicionales, y «Foucellas» no destacó en ninguno de los dos aspectos. Pero, como ha evidenciado su biógrafo más riguroso, V. Luis Lamela García, el huido de As Foucellas no sobresalió precisamente por el número de acciones que realizó, tanto de represalia contra los elementos visibles del régimen en el medio rural de Galicia como de confiscación de bienes de los simpatizantes del régimen. Desde que

se echó al monte en 1936 hasta que se incorporó a la guerrilla organizada en 1945, no se le contabilizó ninguna acción significativa, y él mismo relató a los policías que le interrogaron después de su detención que había vivido durante estos años trabajando en el campo y de cestero, además de llevar a cabo pequeñas raterías para poder subsistir. Nueve años de silencio e inactividad. Poco después de participar en la primera represalia conocida, la eliminación el 15 de marzo de 1945 de Manuel López Bello, cabo de la Brigadilla de Información, se hirió accidentalmente con su propia arma en una rodilla y permaneció inactivo durante más de un año: cinco meses en un sanatorio de La Coruña, seis meses en casa de una enlace de Monelos y otra temporada más en Ru-Vilasantar. Teniendo en cuenta que el combate de Loureiro-Luou-Teo, el 21 de mayo de 1948, fue el final de «Foucellas» como guerrillero activo —con alguna excepción posterior—, tenemos que el mítico Andrade García apenas contabilizó tres años de actividad notoria, y sin embargo existía la percepción de que todas las acciones en Galicia pasaban por las armas de un hombre que tampoco destacó como dechado de lealtad. En la biografía citada se describe cómo suministró por carta al teniente de Curtis la información necesaria para que tendiera una emboscada en Filgueiras de Barranca-Cesuras a dos guerrilleros que murieron en el enfrentamiento el 28 de febrero de 1951, «Víctor» y «Cojo de Paradela». Tampoco descarta Lamela García que «Foucellas» delatara en 1946 la casa de la aldea de Fervenza donde había un grupo de guerrilleros, y en la que murieron, entre otros, dos de los personajes centrales del maquis gallego, «Marrofer» y Lisardo Freijo «Teniente Freixo», el primero de los cuales había amenazado con matar a «Foucellas» por su indisciplina. Finalmente, y a diferencia de otros guerrilleros, Andrade García confesó todo lo que sabía sobre la resistencia armada y las redes de apoyo en Galicia cuando fue arrestado el 9 de marzo de 1952. Denunció a muchos apoyos que lo habían ayudado en sus 16 años de vida clandestina en el monte. Entre 80 o 90 enlaces fueron juzgados como fruto de sus delaciones.

¿De dónde procede entonces la fama de Benigno Andrade García? En primer lugar, «Foucellas» era un individualista, y la memoria popular recuerda a las personas y no a las organizaciones, aunque no resulta fácil penetrar en las causas de esa celebridad. Incluso desconocemos su ideología. Heine lo describe como perteneciente a la CNT, lo mismo que Francisco Rey Balbís «Moncho», compañero de guerrillas: «provenía de la CNT, pero puede decirse que murió comunista». No obstante, el único testimonio de primera mano del que disponemos —las memorias de Isabel Ríos— nos informa de que «Foucellas» participó en la creación de una célula comunista en Curtis bajo el patronazgo del médico Manuel Cálvelo, esposo de Isabel. El hecho de que la esposa del guerrillero trabajara en casa del matrimonio citado resta valor a la sinceridad del huido, debido a la ambigüedad ideológica que alimentó durante toda su trayectoria armada. Tampoco su actitud parecía la más adecuada para la resistencia

y tuvo fricciones con los superiores y los compañeros. Indisciplinado pero popular, los responsables comunistas trataron de implicarlo en la guerrilla dándole la dirección del Destacamento Manolito Bello, uno de los dos que constituían la 5.^a Agrupación. Pero Andrade García buscaba sobre todo su propio interés, y se integró en el maquis por miedo a ser ejecutado cuando el Partido Comunista exigió la incorporación de los huidos armados en la organización. El pragmatismo precapitalista de «Foucellas» se puso de manifiesto cuando, nada más ingresar en prisión, solicitó un sacerdote y, días después, un notario. Poner en orden los asuntos espirituales y materiales antes de morir era una pauta de conducta en las sociedades campesinas. Condenado a la última pena, fue ejecutado por el método del garrote vil el 7 de agosto de 1952 en la Prisión Provincial de La Coruña. Como la Audiencia gallega no disponía de verdugo, tuvo que desplazarse uno desde Valladolid. La leyenda siguió imparables, ya que la verdad histórica apenas tiene relevancia en la construcción de mitos: «Foucellas» dejaba mensajes para los guardias civiles después de tomarse un café en un bar, se disfrazaba de guardia para pasar los controles policiales, los niños jugaban a «foucellas» y guardias, etcétera.

Las anécdotas del «mito Foucellas» se repitieron por todos los territorios de maquis. En una España violenta, analfabeta y supersticiosa, atravesada de penuria y estraperlo, las epopeyas hacían más soportable la realidad. Biografías parecidas encontramos en todas las agrupaciones guerrilleras. Fue el caso de Juan Fernández Ayala «Juanín» en Santander, Manuel Girón Bazán en León, Baldomero Fernández Ladreda «Feria» en Asturias, Francisco Sabaté Llopart «Quico» en Cataluña, Bernabé López Calle «Comandante Abril» en Cádiz, Ricardo García Rodríguez «Caraquemá» en Córdoba, José Méndez Jaramago «Manco de Agudo» en Ciudad Real o Pedro Díaz Monje «Francés» en Extremadura. Paradójicamente, la agrupación más importante cualitativa y cuantitativamente, la levantina, apenas produjo maquis de leyenda —excepción hecha de elementos heterodoxos como Basilio Serrano Valero «Manco de la Pesquera»— y, no obstante, resulta lógico. En una guerrilla en sentido estricto, donde lo importante era la organización, no había lugar para individuos sobresalientes y que administraban de manera individual una guerra que parecía privada.

Pero en las guerrillas también existieron héroes oficiales, algo lógico teniendo en cuenta que fueron impulsadas por un partido con tendencia a la hagiografía y al abuso de un lenguaje levítico. Y la jerarquía de los héroes por excelencia está encabezada por Cristino García Granda y José Gómez Gayoso, cuyas muertes —porque los héroes comunistas, como los santos eclesiales, tienen que superar la prueba de la muerte— motivaron importantes manifestaciones de protesta y condena contra el régimen franquista en el extranjero. El segundo de ellos ejemplifica al héroe guerrillero aunque Gómez Gayoso, paradójicamente, no combatió en las guerrillas

dada su condición de dirigente político. Asociado al nombre de Antonio Seoane, la imagen de este último siempre ha tenido un perfil borroso en beneficio del carismático Gómez Gayoso, aunque no dentro de la organización. Rafael Alberti, en una de sus coplas políticas, lo dejó claro: «¿A quién nombraré primero? / Nadie es segundo en mi lengua / cuando es de acero el acero. / Si uno es glorioso / al otro no hay quien lo gane. / Si digo Gómez Gayoso / ya estoy diciendo Seoane».

José Gómez Gayoso, orensano de Maceda, realizó los estudios de Magisterio. Trabajó como administrativo de Singer y de enseñante en Lavadores, al mismo tiempo que llevaba a cabo una intensa actuación política. Estalló la guerra civil cuando hacía un curso de marxismo en la capital de España, y durante la contienda fue ayudante de los dirigentes comunistas Francisco Antón y Luis Delage, comisarios del Ejército del Ebro, alcanzando también el puesto de comisario de batallón. Colaborador de periódicos como *Nueva Galicia*, *Mundo Obrero* y *El Combatiente*, cuando terminó la guerra marchó a Francia y el 30 de noviembre embarcó con destino a América, instalándose en Cuba. Por orden del partido, llegó a España a principios de 1944 y posteriormente en Madrid formó parte de la Delegación del CC del PCE como secretario de agitación y propaganda. En el verano de 1945 fue enviado a Galicia, donde se hizo cargo de la secretaría general del Comité Regional del PCE gallego. Gómez Gayoso y Antonio Seoane Ramos, jefe militar, transformaron a los huidos gallegos en una importante fuerza armada, reconocible a través del Ejército Guerrillero de Galicia, que se extendió por las cuatro provincias gallegas y los límites leoneses y zamoranos. Para conseguirlo, no repararon en medios, incluidas las depuraciones de los «monzonistas» gallegos. Arrestado en La Coruña, junto con Seoane y las compañeras de ambos, se desató una intensa campaña internacional, personalizada en la figura de Gómez Gayoso, para salvarles la vida. Las cartas desde la prisión, más todavía que su relevante actuación en la resistencia, le convirtieron en un mito de la causa antifranquista.

La figura de Gómez Gayoso resulta una importante referencia histórica y sentimental en la historia del comunismo español. Ni las depuraciones que llevó a cabo en Galicia han erosionado la percepción de una figura considerada sin fisuras, compacta, próxima al canon del comunista perfecto, según los testimonios recogidos por Xosé Neira Vilas. El dirigente comunista gallego Santiago Álvarez, para referirse a Gómez Gayoso, habla de temple, entereza y galleguismo. Ángeles Callejo, esposa del dirigente Luis Delage, dice que «Pepe era muy campechano, muy alegre. Brotaba de él, a cada instante, su gran calidad humana. Ah, y era muy gallego (...). Era un hombre con gran preparación administrativa, con gran capacidad de dirección, de organización. Con su buen carácter llegaba a las gentes. Se las ganaba. Poseía gran poder de convicción». Víctor Pina: «Un hombre integral, valeroso. Un comunista de verdad. Un gallego de ley». La guerrillera gallega Enriqueta Otero decía que era «un

home guapo y falangueiro, e ó mesmo tempo era serio». Su corta vida y la intensa dedicación a la política no le impidieron pasar por dos matrimonios civiles y tener una tercera compañera sentimental y de lucha. Esta última, María Blázquez, ha pasado a la historia de la resistencia como una heroína, ya que fue la que se interpuso entre los policías y Gómez Gayoso, permitiéndole escapar de la casa aunque fue detenido rápidamente. Embarazada como estaba, pese a ser herida en el vientre, pudo tener a su hijo en la prisión. La mujer oficial de Gayoso, Concepción Abad Rodríguez, Conchi, forma también parte de la historia del antifranquismo porque fue la destinataria de la mayor parte de las estremecedoras cartas enviadas por el dirigente comunista desde la prisión: «Hoy, después de cinco años, te escribo. Por cierto que en situación poco envidiable. Lo hago con un esfuerzo sobrehumano pues tengo las manos deshechas», empezaba su primera carta a Conchi, del 6 de diciembre de 1948. Y proseguía: «Quisiera callar por tratarse de mí, pero no debo. Lo que conmigo y Seoane han hecho, es difícil de relatar. Sólo te diré que mil muertes son preferibles a lo que con nosotros han hecho. Cuando el primero de setiembre salí del calabozo era un esqueleto. El día de mi detención pesaba 73 kilos y peso 48. Tengo el intestino y estómago destrozados y los pulmones no cesan de vomitar sangre. Las manos, sólo ahora con enormes dificultades puedo coger la pluma». Pero en esta carta también se encuentra la clave por la que Gómez Gayoso ocupa un puesto de referencia en el santoral comunista: «Mi fidelidad a la dirección del P. y a su línea política; mi inquebrantable voluntad de que por encima de todo se mantenga en alto y limpia la bandera del P. Quiero, si mis fuerzas lo permiten, dejar una carta para la camarada Dolores. Ella ha sido no sólo el Jefe querido, la que me educó en la entereza y fidelidad a los principios del marxismo-leninismo. *Ella, Conchi, fue la que me dio fuerzas y ánimo para aguantar las torturas. Muchas veces cuando yo creía volverme loco, me decía para mis adentros: “Dolores dijo que a los comunistas se les puede romper pero no se les puede dobla”. Y no me doblaron.* Como tampoco, por lo menos hasta ahora, han doblado a los demás camaradas que cayeron», escribió en la carta de 6 de septiembre de 1948. Lo canta Alberti: «Me hirieron, me golpearon / y hasta me dieron la muerte... / ¡pero jamás me doblaron!». La fidelidad a los líderes y el valor para soportar todo tipo de penalidades sin convertirse en delator eran las virtudes más importantes para un comunista ejemplar^[255].

A los guerrilleros de la 4.^a Agrupación, antiguos compañeros y subordinados, también les envió, firmado con Seoane, un mensaje de apoyo pocos días antes de su ejecución: «Suponemos el sentimiento que en vosotros producirá nuestra desaparición. ¡Fuera sentimentalismos, camaradas! Somos dos más, dos comunistas, ni mejores ni más valiosos que los que caen incesantemente peleando en todos los rincones de la Patria, por liberarla de la tiranía franquista, del hambre y del vasallaje extranjero (...). Y por último nuestro ruego final. El día que España recobre la

libertad, cuando la bandera tricolor, que en estos años de bárbara tiranía fascista era enarbolada en montes y aldeas por los guerrilleros, ese día, camaradas, os pedimos que sobre nuestras tumbas depositéis la vuestra, la bandera de la gloriosa Agrupación Pasionaria». Pero el hombre político, el duro militante para quien el fin parecía justificar los medios también manifestó sus afectos. El día 6 de noviembre de 1948, poco antes de ser ejecutado mediante garrote vil en la cárcel, escribió tres misivas: a las dos hijas habidas con su primera mujer, que vivían en Vigo, y a Conchi y su hijo, que residían en La Habana: «Querida Conchi: Llegó la hora decisiva. La espero tranquilo y tranquilo moriré. A ti no es preciso decirte cuál es el sentimiento que embarga mi ánimo en estos momentos. He sido fiel a todo lo que ha constituido el objeto de mi vida (...). ¿Para qué más, Conchi? Me quedan dos horas y ellas las dedico a ti, a nuestro Pepe, y a mis hijas y a la tía que tanto ha hecho por nosotros». Olvidó en sus últimos mensajes y recuerdos públicos a María Blázquez, madre de su hijo José, nacido en la cárcel y al que no conocerá. También le deja a Conchi un mensaje para su hijo en La Habana, igualmente llamado José, al que tuvo que abandonar por el partido y la lucha clandestina cuando contaba siete años de edad: «En tus manos queda nuestro hijo. Me voy tranquilo porque estoy seguro de que harás de él un hombre digno». Y también, en fin, escribe al hijo casi desconocido: «Mi deseo y ruego a ti es que estudies y te esfuerces para ser un hombre digno y honrado y digno en la vida, que ames a tu Patria y también a la Patria de tu padre».

Dignidad y patria eran las palabras que más repetía José Gómez Gayoso en las cartas desde la prisión. El otro héroe indiscutible de la resistencia, superior incluso a Gómez Gayoso, fue Cristino García Granda, el minero asturiano que se convirtió en un símbolo de la Resistencia francesa y que lo abandonó todo para venir a España a continuar la resistencia contra Franco, y que también hablaba de dignidad y patria. Un hombre que se enfrentó también a los magistrados que lo juzgaban para proclamar con orgullo su condición de comunista y revolucionario. Cuando el abogado de oficio trató de presentarlos como hombres engañados por el partido, García Granda levantó la voz y señaló: «Es falso lo que dice el abogado, que nosotros somos gente engañada. Somos patriotas antifranquistas convencidos, que no hemos abandonado la lucha contra los verdugos que oprimen a nuestro pueblo. He sido herido cinco veces en la lucha contra los nazis y sus lacayos falangistas. Sé bien lo que me espera, pero declaro con orgullo que mil vidas que tuviera las pondría al servicio de la causa de mi pueblo y de mi patria».

Aparte de Gómez Gayoso y Granda, el censo de héroes comunistas durante los años del maquis —aunque no necesariamente participantes directos en la resistencia antifranquista— resulta amplio. Nada mejor para confirmarlo que los versos de Alberti, poeta oficial del Partido Comunista en esa época: «¡Sangre de Gómez Gayoso, / sangre pura, sangre brava, / sangre de Antonio Seoane, / de Diéguez, de

Larrañaga, / de Roza, Cristino y Vía, / valles de sangre, montañas!». Otros no aparecían en las coplas albertianas, pero también dieron su vida por la causa comunista. Por ejemplo, Eduardo Sánchez Biedma, delegado del CC del PCE detenido en octubre de 1946 a raíz de las caídas de guerrilleros en Talavera de la Reina, quien soportó estoicamente los interrogatorios policiales para evitar la caída de otros compañeros. Una versión cuenta que murió como resultado de las torturas aunque la explicación oficial describe que se arrojó al metro cuando la policía lo llevaba esposado, lo que posiblemente fue una escenificación policial para «justificar» lo sucedido. Su actitud heroica apenas sirvió para algo, ya que su compañero de comité, Antonio Rey, se convirtió en confidente policial. Anverso y reverso se movían velozmente en lucha por el poder y la vida en los márgenes del sistema franquista^[256].

Otro personaje comparable a Gómez Gayoso, anterior en el «martirio» y menos conocido, fue Ramón Vías Fernández, el hombre que dirigió el primer contingente armado con destino al maquis malagueño. Cuchillero de oficio, había combatido en el Ejército Popular y pudo exiliarse tras la derrota republicana en la ciudad argelina de Orán. Después de luchar en la Resistencia contra los alemanes, entró en España la madrugada del 4 de octubre de 1944 en un falucho acompañado de once guerrilleros. Más político que militar, Vías Fernández apenas participó en episodios de violencia y sólo está demostrada su participación, el 23 de abril de 1945, en el asalto a una tienda del pueblo de Fornes. Se llevaron sin pagar doce pares de abarcas para calzar a la partida, y Vías Fernández, hombre pacífico, «toleró» incluso que el hijo de la tendera saliera con una escopeta y lo hiriera en una pierna. Una reacción, la del guerrillero, poco corriente en la época, ya que lo habitual habría conllevado la eliminación del muchacho. Ramón Vías fue arrestado el 15 de noviembre de 1945 en la plaza de la Merced de la capital malagueña, consecuencia de una delación. Interrogado y torturado salvajemente, el testimonio de sus padecimientos fue publicado por la prensa extranjera y del exilio, convirtiéndose en otra leyenda del antifranquismo. «Cuando vieron que daban con toda su fuerza y no me quejaba, creyeron que ya estaba muerto, por lo que pararon y empezaron a echarme agua. Uno decía: “Os lo habéis cargado”. Otros contestaban: “Pues uno menos”. Entonces empezaron a quemarme con los cigarros las manos, los pies y los muslos, y en aquel momento me acordaba de la democracia cristiana que ellos dicen defender. Me levantan y vengía agua. Me toman el pulso y dicen: “Se le ve fatigado, pero le marcha”. Otro añadió: “No creas que no le di bien y con ganas”. Otro dijo: “Este tío como ahora no hable, dejármelo a mí”. Y así continúan, agua va y agua viene. Como abriera los ojos, me dijeron: “vaya, vaya, ya se te pasa, si quieres te daremos un poco de vino”. Me dieron ganas de decirles: Los c..., pero quise ser prudente porque la realidad era que estaban como fieras desbocadas»^[257]. Por documentos oficiales, ahora conocemos su temple

heroico ya que, pese a las torturas, Ramón Vías no delató a ningún compañero.

El ejemplo de los héroes resultaba cardinal para la pervivencia de la religión comunista. Como cantara Alberti: «Mas aunque su voz se muera, / su voz seguirá cantando / a la España guerrillera».

Los últimos guerrilleros asturianos

La sarracina de enero de 1948 dejó una profunda huella entre los guerrilleros comunistas, algunos de los cuales habían perdido en ella a sus familiares, como fue el caso de Manolo «Caxigal». Pese a todo, el medio centenar de comunistas estaba dispuesto a resistir, incluso la mayoría de ellos impugnó los cambios tácticos de octubre de 1948 y también la decisión de trasladar la lucha desde el medio rural, en el que se sentían seguros, a unos núcleos urbanos que percibían como hostiles para la supervivencia. También Luis Montero «Sabugo», que había llegado en mayo de 1948 para dirigir el aparato político del PCE, empezó a mostrarse reticente al encargo de aplicar las tácticas de los dirigentes del exilio. A finales de 1949 el Buró Político envió a otro delegado para que impusiera la autoridad en Asturias. Todo fue inútil. La mayor parte de los guerrilleros se manifestaban contrarios a las directrices de Toulouse y a punto estuvo de llegarse a un enfrentamiento armado entre las distintas facciones. Sólo unos pocos guerrilleros siguieron bajo la disciplina del PCE, entre ellos Manuel Díaz González «Caxigal», Eloy Álvarez Alonso «Ruso», Ángel Díaz Diego «Canario», Manuel Castaño, Leandro «Cantinflas» y «Negrete». Hubo un último intento para solucionar el conflicto el 21 de diciembre de 1949, y a ello se aplicó Manolo «Caxigal», aunque unos y otros fueron incapaces de alcanzar un acuerdo^[258].

Si los comunistas habían tenido que lamentar varias muertes en 1949, el año siguiente no comenzó mejor. De hecho, puede decirse que 1950 trazó la frontera entre la guerrilla organizada y la condición de huidos. El día 7 de febrero se produjo el golpe definitivo contra la organización guerrillera asturiana. En un campamento de El Condado, en el término de Laviana, fueron abatidos los guerrilleros Manolo «Caxigal», Eloy Álvarez «Ruso» («niño de la guerra» que vino a morir en España después de un prolongado exilio en la Unión Soviética), Ángel Menéndez Rodríguez «Ángel de la Campa» (carpintero y enlace que consiguió huir cuando detuvieron a «Sabugo»), Manuel Castaño, «Cantinflas», «Negrete» y «Capataz»^[259]. La muerte de estos siete guerrilleros, que además eran de la facción ortodoxa, dibujó un revés casi definitivo para la resistencia organizada en Asturias. Especial relevancia adquirió la muerte de Manolo «Caxigal», que había reemplazado a «Feria» y «Boger» como responsable del maquis de la zona y que además era un hombre aceptado por todos

los guerrilleros de la provincia. Manolo «Caxigal» también representaba el nexo de unión entre el pasado y el presente de la resistencia, el cordón umbilical entre los antiguos guerrilleros y los jóvenes que habían subido al monte en los últimos años. Llevaba en la resistencia desde el final de la contienda civil, y era uno de los pocos «hombres de la guerra» que permanecía en la trinchera antifranquista.

Como en la mayor parte de las caídas a partir de 1947, el origen fue una infiltración o la confidencia correspondiente. En el caso que nos ocupa las informaciones partieron posiblemente de Luis Montero «Sabugo», detenido previamente. Pero, como sugiere García Piñeiro, en el caso de que esa sospecha fuera cierta, tal vez Montero dedujo que las revelaciones no tendrían incidencia, ya que los maquis conocían de su arresto y tenía la esperanza de que hubieran desalojado el campamento de El Condado. Santullano y Pérez sostienen que fue un guardia civil infiltrado entre los enlaces quien aportó la información que desencadenó la tragedia. Hipótesis una y otra. El aspecto más visible de la muerte de Manolo «Caxigal» y sus compañeros fue la agudización de la lucha por el poder entre ortodoxos y disidentes, ahora que estaban en franca mayoría estos últimos. Pero los dirigentes de Toulouse no estaban dispuestos a tolerar que se consolidara un foco disidente en Asturias, y sus enviados consiguieron situarlos en la práctica fuera del partido: el Comité Provincial que había sido elegido el 5 de marzo de 1950 fue anulado. Las acusaciones, las clásicas en los sistemas estalinistas: sacrificar el partido a la resistencia armada, utilización de métodos violentos al margen de los criterios de la organización y también de «blanquismo», calificativo que servía para todo tipo de censura^[260].

La matanza de El Condado significó el comienzo de un goteo de muertes por ambas partes, que situó a la guerrilla asturiana a la cabeza de las bajas durante este periodo. El 1 de agosto de 1950 eran detenidos en la frontera francesa Luis González «Barranca» y «Canor», ejecutados por el tradicional método del garrote vil en la cárcel de Oviedo el 11 de diciembre. A los pocos días de estar en Asturias, los dos guerrilleros, sometidos a intensas sesiones de tortura, habían aportado la información que condujo a la localización de Adolfo Quintana Castañón «Quintana» y de Ángel Díaz Diego «Canario», que fueron eliminados el 14 de agosto de 1950 en El Pedroso, adonde habían acudido para asistir a la verbena con motivo de la fiesta del pueblo. Quintana, un guerrillero muy popular, era muy aficionado a las fiestas y su bonhomía le había facilitado numerosos enlaces y apoyos, incluso entre partidarios del régimen. Inhumado en el cementerio de Santullano, el guerrillero Andrés Llanceza «Gitano» asistió al entierro y fotografió la ceremonia. El 31 de diciembre de 1950 fue abatido, cuando pasaba la Nochevieja en casa de su compañera sentimental en Sotrondio, Ignacio Alonso Fernández «Raxau», uno de los guerrilleros de trayectoria más violenta en Asturias. «Raxau», víctima de la delación de un vecino, podía ser catalogado como el contrapunto de Quintana, ya que fue uno de los maquis que llevó

a cabo un mayor número de represalias contra los partidarios del régimen, sobre todo en el verano de 1950, año en el que también fue eliminado Mario Llanea Rozada «Gitano». Las fuerzas de represión esparcieron el rumor de que había sido ejecutado por su hermano Andrés. Tal vez la explicación resida en que quedó malherido y su hermano hubiera podido rematarlo para evitarle sufrimientos. Era una regla en el mundo de la guerrilla. El estío de 1950 había sido un periodo sangriento en Asturias, tanto para el maquis como para los confidentes y las fuerzas de represión^[261].

En el mes de agosto de 1951 se celebró en San Martín del Rey Aurelio otra reunión entre los guerrilleros partidarios de seguir en la lucha con los planteamientos tradicionales y los enviados por el Comité Central, que eran favorables a las nuevas directrices. Después de violentas discusiones, los guerrilleros disidentes fueron expulsados de la organización, y a partir de entonces cada grupo irá por su lado e incluso buscará su red de enlaces particular. La división hizo a los escasos maquis asturianos todavía más vulnerables, sobre todo a los disidentes. Huérfanos de una organización que les proporcionara cobertura ideológica y logística, se convirtieron en víctimas fáciles de las fuerzas de represión. En 1951 fueron cayendo los diferentes guerrilleros supervivientes, tanto aquellos que permanecían en la organización como los que habían sido expulsados de la misma. A mediados de agosto murieron en las proximidades de Sotondio Valentín Alonso Fernández «Valentón» y Canales. El 21 de mayo, después de una delación, cayó en una trampa el experimentado guerrillero Lisardo García García, una figura próxima al expropiador social y que se movía por territorios de León, Asturias y Santander al margen de las diferentes agrupaciones. Fue eliminado en la aldea de Soto de Lorio, de donde era natural. El 14 de agosto moría en Soto de Aller–Aller Aurelio Álvarez Gutiérrez. El 12 de diciembre de 1951 cayeron Manuel Fernández Fernández «Peque» y Joaquín González Muñiz «Tranquilo» en Turón. El primero era uno de los tres hermanos «Maricos». Pocos días después morían Serafín Carrión Iglesias «Carrión» en Peña de Mieres y, en La Muezca, Agustín Redondo López «Antonio el Maqui», que había sido enviado por los dirigentes de Toulouse para intentar detener la dialéctica represión–contrarrepresión que se estaba produciendo en Asturias y, al mismo tiempo, planificar la marcha a Francia. Eran los últimos muertos de 1951, pero no los últimos caídos de la resistencia antifranquista en Asturias^[262].

Todavía permanecían en 1952 algunos guerrilleros desperdigados por las montañas. Manuel Rubio González «Rubio», superviviente de las últimas caídas, formó un grupo con dos enlaces que se habían echado recientemente al monte, «Morín» y «Guaje». Pero «Guaje» era confidente de la policía, que estaba detrás de la pista de «Rubio». El 13 de marzo fueron cercados en las proximidades de Mieres y eliminados los tres hombres, incluido el confidente. Existen informaciones que mantienen como hipótesis que fue «Guaje» quien mató a sus compañeros y luego lo

liquidaron por error o desconocimiento de su condición de colaborador de los servicios policiales. Por esas mismas fechas, encontraron la muerte en Sevilla Bartolomé López Medina «Pedro el Andaluz», Maximiliano Cuetos Alonso «Alarido» y la novia de éste, que era hermana del guerrillero Canales. Habían llegado a la capital andaluza tres meses antes, y fueron delatados por un familiar. En el verano de 1951, sólo quedaba en los montes asturianos una partida integrada por Andrés Llanaza Rozada «Gitano», Fernando Álvarez Iglesias «Alcalde» y Ramón González «Ramonón», aunque este último decidió abandonarla y esconderse en las proximidades de La Nueva (Langreo), pueblo del que era natural. En la madrugada del 31 de julio fueron localizados y muertos en una cabaña de las proximidades de Pola de Siero el último de los tres hermanos «Gitano» que permanecía vivo y «Alcalde». Andrés Llanaza, poeta también, cumplió hasta el final uno de sus versos: «Hay que luchar, hay que luchar hasta el morir / para que el pueblo que está afligido / pueda vivir». Ya sólo quedaba «Ramonón», que fue cercado el 14 de octubre en el poblado de La Camocha, donde se había escondido, y que prefirió suicidarse antes que caer en manos de la fuerza pública. Era el último guerrillero asturiano, y su muerte adquirió dimensiones simbólicas. Falleció en La Camocha, escenario del nuevo sindicalismo comunista, y en 1951, año de las primeras huelgas contra el franquismo. «Ramonon» había comprobado que en esas fechas, como apuntan Santullano y Pérez, «ya resultaba un estorbo para todo el mundo»: era un huésped incómodo para familiares, amigos y enlaces. Eduardo Quirós, uno de los enviados por el Buró para reconducir la guerrilla asturiana, pudo huir a Francia^[263].

Por lo que se refiere a Santander, ya no existía guerrilla si no un pequeño grupo de maquis acosados por las fuerzas de represión. En el mes de noviembre de 1949, alcanzó la frontera francesa Martín Santos Marcos «Gitano», responsable de una de las tres brigadas cántabras, y de la citada unidad sólo permanecían en suelo santanderino seis guerrilleros. Dos de ellos, Federico Peña Martínez y Dionisio Bejar, fueron eliminados el 2 de junio de 1950 en Vega de Pas. Pero el contratiempo casi definitivo para los restos de la resistencia se produjo el 22 de octubre de 1952. En un paraje conocido como el Campillo, en las afueras del pueblo de Tama–Cillorigo, tuvo lugar un combate en la casa de un enlace entre tres guerrilleros y fuerzas de la Guardia Civil de Potes. En el enfrentamiento murieron dos maquis, Hermenegildo Campo «Gildo» y José García Fernández «Pin el Asturiano», y un cabo de la Benemérita, José Sanz. Logró escapar Quintiliano Guerrero «Tuerto». Concluida la escaramuza, y como represalia por la muerte de su compañero, los guardias asesinaron al dueño de la casa, Dominador Gómez, a su mujer y a una hija de 16 años. Como era habitual, el cadáver del cabo fue inhumado en Santander con la presencia de las autoridades provinciales y los otros seis muertos recibieron sepultura en una fosa común de Potes. Para completar la venganza, los guardias quemaron la casa de Dominador^[264].

En esta época, el guerrillero más emblemático del maquis santanderino, «Juanín», ya se había desvinculado de una organización en ruinas y hacía vida en el monte acompañado solamente por Bedoya, que se había escapado en febrero de 1952 de un batallón disciplinario de Fuencarral, en Madrid, y se había unido a Fernández Ayala.

El final de la Agrupación Guerrillera de Levante

La resistencia levantina entró en la década de los cincuenta en un ambiente de incertidumbre motivado por la ausencia de una línea ideológica y táctica coherente. El Buró Político del PCE envió a Levante hombres y dinero para hacer posible el cambio de estrategia pergeñado a finales de 1948, pero la caída de Cerro Moreno clausuró cualquier posibilidad de futuro para la guerrilla y también para el Partido Comunista. Las similitudes entre la nueva resistencia reconvertida teóricamente en instrumento político y la poderosa agrupación de mediados de la década resultaban de difícil localización. El Partido Comunista envió a finales de 1950 a José Gros, hombre de confianza de Santiago Carrillo, y a seis compañeros para examinar el estado del maquis levantino. Entre los acompañantes de Gros se encontraba Ibáñez, guerrillero de los primeros tiempos y responsable de mantener activas las comunicaciones con Francia. Encontraron una guerrilla aplastada al terreno, con los cuatro sectores guerrilleros incomunicados y que carecía de una dirección político-militar. No se realizaban labores de proselitismo ni entre los guerrilleros ni mucho menos entre los vecinos de los pueblos por los que se desplazaban. Lo único que contaba era la supervivencia, y empezaban a abundar los antifranquistas que se retiraban hacia sus comarcas de origen en un movimiento reflejo típico de las épocas de los huidos. Un guerrillero se lo explicó gráficamente a Gros: «Ahora, en estos momentos, lo que hacemos es luchar por la comida, por conservar la vida. Para esto no hace falta ser guerrillero. Se vuelve uno a casa y está más tranquilo». El informe, en fin, reveló una situación desesperada, extrema. Pero más allá de recoger documentación, el viaje de estos hombres apenas modificó el escenario de las guerrillas levantinas, y alimentó las sospechas de un PCE rehén de cálculos partidistas y despreocupado por la suerte de los supervivientes. Autista, en definitiva. En una nota interna de diciembre de 1950, Fernando Claudín consideraba a los guerrilleros como algo secundario entre las preocupaciones de los responsables del partido. El desinterés hacia los resistentes puede ser una explicación, porque la hipótesis de una falta de noticias no resulta creíble. A diferencia de otras regiones guerrilleras alejadas de la frontera francesa, los dirigentes de Toulouse disponían de una información precisa de lo que ocurría en Levante y Aragón^[265].

Tanto los dirigentes levantinos que fueron a Francia como los enviados especiales

del PCE a la región habían constatado una realidad que se podía resumir en tres puntos: existencia de unas fuerzas represivas cada vez mejor equipadas y preparadas para combatir la insurgencia; empleo sistemático de la «ley de fugas» contra los enlaces, lo que había permitido a las autoridades franquistas golpear con fuerza a una red de apoyos que se tambaleaba, y, consecuencia de lo anterior, infiltración de las redes de apoyos y una población exhausta, sometida a la violencia simultánea de los del monte y de las fuerzas de represión. El corolario desembocó en una auténtica masacre de guerrilleros, enfrentados además a situaciones extremas en las que afloraba la condición humana en sus aspectos positivos pero también negativos: traiciones entre las diferentes partidas, maquis convertidos en confidentes y ajustes de cuentas más personales que políticos. «Pese a este panorama tan crítico, la retirada definitiva no se dará hasta la primavera de 1951. Y la evacuación de la AGL no se realizó hasta el verano de 1952», escribe Fernanda Romeu. De otra parte, pensar siquiera por un momento que los maquis pudieran abandonar las armas para dedicarse a la actividad política o a proteger a los políticos, entraba en el catálogo de los disparates o en el territorio de los cálculos verdaderamente criminales. Que la AGL pasara a denominarse Comité Regional de Resistencia y que los sectores se llamaran ahora comités de grupo, de acuerdo con la semántica del cambio de táctica, no modificaba la realidad. Enviar dinero con el fin de evitar o espaciar los golpes económicos mejoraba el problema, pero no lo solucionaba^[266].

Después de la caída de Santa Cruz de Moya, los tiempos de esplendor armado pertenecían al pasado. La AGLA estaba en un proceso rápido de desintegración, y la base de su estructura organizativa, los sectores, había desaparecido. Solamente los integrantes del Sector 11.º mantenían la apariencia de una guerrilla semiorganizada. Los demás estaban disueltos como sector, desmoralizados como guerrilleros y diezmados como individuos. El propio Florián García «Grande» confiesa que «a partir del 48, las cosas estaban claras, o sea, que el error fue que estuvimos demasiado tiempo en la montaña, que teníamos que haber evacuado antes». A partir de 1950, la presencia del maquis se hace visible ya sólo a través de los guerrilleros muertos, y en diciembre de ese año caía uno de sus hombres más importantes, el madrileño Francisco Corredor Serrano «Pepito el Gafas», antiguo estudiante y capitán durante la guerra civil, especializado en espionaje y en prisión hasta 1941, jefe de Estado Mayor de la AGLA durante la mayor parte de su trayectoria y director de la Escuela Guerrillera. Un hombre clave para el maquis. En 1950 era secretario de cultura del Comité Regional, el organismo que había sustituido a la AGL. Otros autores sostienen que la muerte de «Pepito el Gafas» y algunos dirigentes históricos de la AGLA se produjo en el contexto de las depuraciones llevadas a cabo por los nuevos mandos enviados desde Toulouse para cumplir el cambio de táctica y que estaban encabezados por «Antonio el Catalán». Según esta versión, antiguos

dirigentes como «Pepito el Gafas» o «Manso» se oponían a seguir las nuevas directrices del Buró Político y eran partidarios de continuar la resistencia armada.

A partir de finales de 1949, cualquier intento de organización estaba condenado al fracaso. Era inútil impartir órdenes porque ya nadie estaba en condiciones de obedecer, y se impuso definitivamente la lucha por la supervivencia. La vinculación directa de la guerrilla con los dirigentes comunistas de Francia, y especialmente con Santiago Carrillo, ha llevado a algunos supervivientes a responsabilizar directamente a éste de la situación dramática de los últimos años. El guerrillero Adelino Pérez Salvat «Teo» defiende que el maquis tuvo sentido hasta 1948, pero que a partir de entonces «ha sido la cosa más garrafal que ha cometido la dirección del Partido, entre ellos Santiago Carrillo y demás». El partido pareció entenderlo finalmente y dispuso la evacuación. Envió al citado «Teo» con 250 000 pesetas para preparar la huida, y también prácticos para efectuarla con ciertas garantías. Pero el cerco represivo resultaba tan asfixiante, que encontraron dificultades para reunir a los maquis dispuestos a marchar a Francia. El 27 de abril de 1952 se produjo un combate entre los términos valencianos de Buñol y Cofrentes, en el que perdió la vida «Emilio», especialista en métodos guerrilleros y enviado por los dirigentes comunistas para dirigir oficialmente la evacuación. Una baja importante para la delicada operación de huida, que se realizó con éxito pese a las circunstancias adversas. A partir de 1952, en el monte ya solamente quedaban algunos maquis aislados, expropiadores sociales más que guerrilleros en sentido estricto, que merodeaban por los pueblos de las comarcas de las que eran naturales. Entre esos «maquis autóctonos» reacios a salir de su tierra estaban los célebres Francisco Serrano Iranzo «Francisco», Teresa Pía Meseguer «Pastora» y José Vicente Zafón «Pepito de Mosqueruela». Este último actuaba en compañía de Manuel Pérez Cubero «Rubio» y Florencio Guillén García «Viejo». En una escaramuza en Alcalá de la Selva, en 1952, fue abatido «Pepito de Mosqueruela» y el servicio de información detectó a sus compañeros en el pueblo turolense de Aliaga al año siguiente. Después, el silencio, aunque «Rubio» alcanzó territorio francés. Como ya conocemos, «Francisco» fue abatido en 1954 y Teresa Plá, capturada en Seo de Urgel en 1964^[267].

La Coruña, el último bastión guerrillero de Galicia

En diciembre de 1949 llegó a Galicia José Sevil «Ricardo», enviado por el Buró Político del PCE para llevar a cabo los cambios tácticos decididos en Toulouse un año antes. Pero la llegada del emisario comunista no tuvo un comienzo promisorio, ya que su presencia en Galicia coincidió con la matanza de Pazos–Monfero, enfrentamiento en el que perdieron la vida siete guerrilleros y marcó el punto de

inflexión de la resistencia gallega. De hecho, cuando Sevil se hizo cargo del Comité Regional del PCE y de la guerrilla gallega la presencia de la misma se reducía a los restos de la 4.^a Agrupación. El censo del maquis gallego apenas alcanzaba la docena de efectivos, y una parte de ellos —los más conocidos, como «Piloto» o «Foucellas»— no estaban decididos a obedecer a «extranjeros» o se mantenían en condiciones más propias de «topos» que de guerrilleros. Las otras agrupaciones formaban parte de la historia reciente de Galicia. La 5.^a Agrupación pontevedresa había desaparecido en 1948 y antes del verano del 1949 lo había hecho la Agrupación de Orense, que era la 2.^a, y la 3.^a, que tenía su territorio de actuación en la provincia de Lugo.

El objetivo de Sevil en Galicia, como el de Luis Montero «Sabugo» en Asturias, consistía en aplicar sobre el terreno consignas del Buró Político del PCE. Para ello, reestructuró el comité, nombrando como secretario de organización a Melchor Díaz «Pepito», secretario de agitación y propaganda a Francisco Rey Balbís «Moncho» y a José Blanco Núñez «Ferreirín» como encargado de prensa. Pero el optimismo e incluso el esfuerzo ímprobo del emisario del PCE para introducir la organización comunista en los centros fabriles coruñeses, con el apoyo de los guerrilleros, no bastaban para arreglar la situación, irreversible desde hacía tiempo^[268]. Las construcciones teóricas elaboradas en Francia apenas tenían algo que ver con la realidad gallega, y más a principios de la década de los cincuenta.

Uno de los aspectos positivos de la llegada de Sevil fue que también traía dinero para que en la empresa de transformar la guerrilla en órganos de protección política no hubiera necesidad de efectuar golpes económicos. Ello sirvió provisionalmente de escudo protector contra la secuencia de caídas que se estaban produciendo hasta entonces. Pero la tranquilidad no podía durar mucho tiempo, y aunque la ausencia de atracos consiguió despistar a las fuerzas de represión, la soledad de los comunistas, tanto política como armada, abocaba a un final rápido y trágico. Las fuerzas de represión no estaban para contemperizar, y seguían hostigando decididamente a los resistentes antifranquistas. La tensión contrainsurgente seguía instalada en Galicia. Cuenta Heine que un autocar del equipo de fútbol del Celta de Vigo fue tiroteado el 11 de octubre de 1949 en Pontecesures. Un guardia civil, que posiblemente dio el alto al chófer, terminó disparando sobre el vehículo e hiriendo al entrenador, al presidente y a varios jugadores. Pese a todo, las caídas se espaciaron significativamente durante 1950, entre otras razones porque los guerrilleros que permanecían en el monte eran escasos. Durante ese año se produjeron las muertes de Andrés Varela Rumbo, el 3 de marzo de 1950 en Leaño–Culleredo, de José Díaz García, el 17 de mayo de 1950 en las cercanías de Xubia–Ferrol y el 5 de diciembre la de Jesús Valeiro Gómez «Calías», pioneros de la resistencia en la comarca de Mariñas. A comienzos de 1951, las fuerzas de represión se infiltraron de nuevo en las redes de apoyo de la remozada

organización, y las muertes se sucedieron apenas sin interrupción. El 5 de enero moría Emilio Pérez Vilariño «Claudio Beas» en las cercanías de Curtis, donde vivía escondido, concretamente en casa de un sacerdote de Mandayo. El 18 de julio los servicios de información descubrieron un campamento subterráneo en las proximidades de San Pedro de Nos, muriendo en la subsiguiente escaramuza José Antonio Cortiña. También descubrieron la cueva de Xabariz–Cabanas, donde el Comité Regional tenía su base más importante. La desconfianza de los guerrilleros permitió que no fueran cazados en esa cueva, localizada posteriormente y en la que se incautaron de importante documentación, la imprenta que utilizaban para editar *El Guerrillero* y de una emisora. Ante el deterioro de la situación, José Sevil marchó a Francia, de donde ya no regresaría, y también se refugió en el país vecino «Pepito». Francisco Rey Balbís «Moncho» ya había escapado a Francia antes de la caída de San Pedro de Nos. La situación era verdaderamente caótica. El secretario general y los secretarios de organización y de propaganda, auténtico núcleo duro de poder en un partido comunista, habían salido del territorio gallego y abandonado a los pocos maquis activos. Al margen de un contexto extraordinariamente comprometido, resulta extraño que la huida de todos los responsables políticos no fuera acompañada de un intento simultáneo de evacuación general^[269].

A mediados de julio de 1951, perecieron quemados en una casa de Tellado–Fene los guerrilleros Manuel Bastida Franco «Chone» y Juan Gabeira Gabeira. El 27 de julio moría el antiguo comisario general de la 4.^a Agrupación, Carlos Allegue Caruncho, en las proximidades de El Ferrol. Antonio Veiga Mejuto «Cacharrón» cayó abatido en Fene. Por su parte, Antonio Castro López «Tucho» y José Freire Barcia «Pepiño» fallecían el 31 de agosto en Puntal, cerca de El Ferrol. Finalmente, también cayó el guerrillero más buscado de Galicia: Benigno Andrade García «Foucellas», que después de la aniquilación del Destacamento Manolito Bello de la 5.^a Agrupación en Loureiro–Luou–Teo se había desvinculado de la guerrilla organizada y vivía con algunos guerrilleros en la zona de Betanzos, en una cueva en Costa–Regueira–Oza dos Ríos. El 9 de marzo de 1952, a causa de una confidencia, fueron localizados «Foucellas» y Manuel Vilar Arnosó «Manolito» en la citada cueva. El teniente de Curtis, Enrique Vázquez Martínez, se encargó del cerco, que concluyó con la muerte de «Manolito» —al que posiblemente se le aplicó la «ley de fugas»— y la detención de «Foucellas», herido gravemente en brazos y piernas pero al que trataron por todos los medios de mantener con vida: era el mito de la resistencia en Galicia. También perdió la vida en el combate el guardia civil Cesáreo Diez Pérez, resultando herido el número Nicanor Álvarez Álvarez, posiblemente por fuego de los propios guardias en la confusión derivada del tiroteo. Igualmente murió en ese mes Melchor Díaz «Pepito» y fue detenido José Blanco Núñez «Ferreirín». Trasladado a la Dirección General de Seguridad, en Madrid, proporcionó la información necesaria para

desmantelar la red de enlaces y retomar el hilo para eliminar los restos de la resistencia antifranquista. Fue ejecutado en Madrid, pese a que le prometieron enviarlo al extranjero como premio a sus informaciones. El primero, que había sido secretario de organización del Comité Regional con Sevil, huyó a Francia pero había regresado para ponerse al frente del citado comité. Eran los últimos muertos de la guerrilla como organización. Todavía en Galicia habría más muertes relacionadas con los guerrilleros, pero eran maquis aislados, aplastados al terreno, que en realidad podían catalogarse de «topos»^[270].

Las guerrillas del mediodía andaluz

Por lo que respecta a Andalucía, el grueso de la resistencia se encontraba en Granada–Málaga. Permanecían focos aislados en el Campo de Gibraltar, en el oriente de Cádiz, y la Serranía de Ronda en el occidente de Málaga. El otro núcleo importante de las guerrillas andaluzas, el cordobés, podía considerarse oficialmente desaparecido. Los últimos guerrilleros cordobeses abatidos fueron José Ramos García «Ramitos» y José Ortega Aguilar. El primero, el 3 de febrero de 1951 en el término de Almodóvar del Río y el segundo, el 27 de octubre de 1951 en Iznájar. Otros dos guerrilleros de la provincia, Francisco Vigara Mesa «León» y Dionisio Gallego Cáceres «Pintao», fueron eliminados en Ciudad Real el 22 de diciembre de 1949. Habían llegado a la capital manchega en su escapada hacia Francia, y se detuvieron para hacerse unas fotos. En realidad, todo era una trampa preparada por las fuerzas de represión con la ayuda de un enlace y primo de uno de los guerrilleros, Cándido Rubio «Culote». El conductor que supuestamente los llevaba a Francia era un guardia civil que condujo el coche hacia una calle sin salida en la ciudad manchega, donde fueron ametrallados por guardias civiles y policías. Otra colaboración de «Culote» permitió liquidar a los restos cordobeses de la resistencia: Carlos Serena «Carlete», José Ciprián «Cagarruta» y a tres enlaces a los que se aplicó la «ley de fugas» en enero de 1950^[271].

El área Granada–Málaga todavía mantenía una actividad significativa, aunque la llegada de Limia Pérez aceleró un proceso de desintegración que ya se vivía como inevitable. De hecho, según fuentes oficiales, la «Agrupación Roberto» tuvo 52 bajas en 1949 aunque fueron reemplazadas sin problema alguno. Llama la atención el hecho de que, a diferencia de otras agrupaciones, el cambio de táctica de 1948 apenas tuvo traducción en el maquis de Granada y Málaga. Los contactos con Francia estaban rotos, y desde luego no se produjo ningún proyecto de evasión tutelado desde Toulouse ni de transformación de los guerrilleros en agentes políticos. Durante este trienio, las fuerzas de represión, siguiendo los procedimientos instaurados por el

nuevo responsable, se centraron especialmente en los enlaces y familiares de los del monte. A diferencia de lo ocurrido en Toledo y Ciudad Real, donde el acoso a los enlaces provocó el desmantelamiento de las guerrillas, en Granada y Málaga la detención de los apoyos ocasionaba que los demás se echaran al monte. El trabajo de Limia Pérez se centró entonces, según Ruiz Ayúcar, en buscar confidentes y hostigar a los familiares y a los guerrilleros que abandonaban la resistencia, para dejar claro que no habría perdón para quienes no colaboraran o cometieran el error de convertirse esporádicamente en maquis. Las detenciones de enlaces que no colaboraban se multiplicaron, y menudearon las redadas masivas. En los pueblos de Salar y Loja las fuerzas de la Guardia Civil detuvieron en una noche a 154 enlaces. El éxito acompañó esta nueva táctica: 49 bajas de guerrilleros en diez meses, de ellos 39 muertos. Pero la brutalidad ejemplarizante siguió practicándose con determinación. En la comarca de Nerja, se aplicó la «ley de fugas» a cinco personas en el año 1950. El 24 de febrero de 1950 los guardias civiles mataron a Jerónimo Oliva Martín, que había conseguido escapar con las esposas puestas. Localizado, en vez de ser detenido de nuevo se le aplicó la última pena en el acto. El 11 de marzo de 1950, fueron asesinadas otras cuatro personas. El 1 de junio de 1951 las fuerzas de represión localizaron el refugio de un guerrillero que se había apartado hacía tiempo de la lucha armada, Francisco Martín Moreno «Santiaguillo», siendo eliminado, y los guardias asesinaron también a Antonio Herrera Montesinos «Chumbo», que le ayudaba en su intento de pasar desapercibido y sobrevivir^[272]

A principios de 1951, la guerrilla del mediodía andaluz, que había tenido su periodo de apogeo en un tiempo en el que declinaban otras agrupaciones, inició un deterioro rápido, radical y absoluto. Aunque todavía contaba, según fuentes oficiales, con 94 hombres, una cifra que, de ser cierta, expresaba la importancia y permanencia de la «Agrupación Roberto». El elemento sustantivo que motivó este hecho estaba relacionado con la multiplicación de las delaciones y las confidencias, que devinieron endémicas y acarrearón el desmantelamiento de la agrupación. En este contexto de extrema debilidad del maquis, el teniente coronel Limia Pérez efectuó llamamientos constantes a los hombres de la sierra para que se entregaran. Les prometía respetarles la vida, pero a cambio estaban obligados a colaborar con los responsables policiales. En los bandos del jefe de la Guardia Civil se incluía un detalle ilustrativo: la lista de muertos desde 1949. Las caídas y las presentaciones de guerrilleros en 1950 se incrementaron a tal ritmo, que durante este año el 7.º Batallón quedó aislado mientras que el 6.º y los dirigentes más significativos, el llamado Grupo de Enlace, decidieron abandonar oficialmente la resistencia armada. Para realizar una salida organizada y con posibilidades de éxito, en el mes de mayo de 1951 se comisionó al jefe de la agrupación, José Muñoz Lozano «Roberto», y al responsable de propaganda, Francisco Sánchez Girón «Paquillo», para que organizaran en Madrid la huida. Al

frente de lo que quedaba de la agrupación en Málaga quedó como jefe Manuel Jurado Martín «Clemente»^[273].

Cuatro meses después de llegar a Madrid, en el mes de septiembre, fueron detenidos «Roberto», «Paquillo» y Ana Gutiérrez Rodríguez «Tangerina», compañera sentimental del primero. Un guerrillero confidente les había preparado el camino a las fuerzas de represión para llegar a «Roberto». Entre sus captores se encontraba el cabo 1.º Salvador Mesa Espadas, que había participado en la eliminación del predecesor de «Roberto» al frente de las guerrillas andaluzas, Ramón Vías. Trasladado a Málaga, se produjo uno de los episodios más extraordinarios de la guerrilla de posguerra: «Roberto» aceptó convertirse en confidente de la Guardia Civil. Ciertamente, muchos guerrilleros se transformaron en confidentes y también otros muchos, a causa de las torturas y alimentando también la esperanza de salvarse, declararon contra compañeros y delataron a los enlaces. Pero José Muñoz Lozano era un jefe guerrillero, posiblemente el más destacado. Había logrado que su agrupación fuera la segunda en importancia de toda España y era conocida popularmente como «Agrupación Roberto», el mejor homenaje para un dirigente revolucionario. Más todavía: muchos guerrilleros subieron al monte y numerosos enlaces decidieron arriesgar su vida por «Roberto», un líder carismático. La defección del dirigente andaluz representó el mayor éxito para las tácticas de la Guardia Civil: todos eran sujetos de traición.

Las autoridades franquistas le prometieron que, a cambio de entregar a sus compañeros, le respetarían la vida. Entonces prepararon la emboscada, que empezó con la comunicación de «Roberto» a sus compañeros de que todo estaba preparado para la escapada al extranjero. La operación se realizó en diciembre de 1951, y significó el final de la guerrilla en Málaga. El plan policial que comunicó Muñoz Lozano a sus compañeros consistía en llegar a la capital, donde los recogerían dos camiones que los llevarían hasta Algeciras, y desde allí embarcarían con destino a África. Les notificó igualmente que en los camiones viajaría una cuadrilla de albañiles. Los restos del maquis en la Axarquía se encontraban en las proximidades del pueblo de Cádiz, en el término de Vélez-Málaga. Un fotógrafo simuló que los retrataba para preparar los salvoconductos. Después de enterrar las armas y la documentación, partieron en tren hacia la capital malagueña. Pero cuando los diez guerrilleros que integraban la expedición subieron a los camiones para dirigirse a Algeciras, comprobaron sorprendidos que los albañiles eran en realidad guardias civiles y que la dirección que llevaba el camión era el cuartel de Sagalerva. Todos fueron detenidos. Interrogados y torturados durante varios meses, en septiembre de 1952 los trasladaron a la cárcel de Granada. Luego, el correspondiente consejo de guerra y las sentencias respectivas. En Granada fueron ejecutados Julio Arrebola Ruiz, Sebastián Martín Vozmediano, José Martín García «Andrés» y los hermanos

Manuel y Antonio Jurado Martín. Los demás recibieron la condena inferior, treinta años de cárcel, y eran: Manuel Martín García «Guillermo», Fernando Romero Calvo «Ignacio», José Martín Navas «Tomás», José Álvarez Mesa «Pascual» y Manuel Martín Rico «Ramón»^[274].

En 1952 todavía quedaba en la sierra un grupo de guerrilleros del 7.º Batallón granadino, bajo la responsabilidad de Manuel Pérez Rubiño «Pablo». Pero la caída de Francisco López Pérez «Polopero», que se transformó en confidente de las fuerzas represivas, permitió la aniquilación de una parte significativa de la red de enlaces. Los guerrilleros quedaron aislados, y con el riesgo de ser eliminados como los diez de la Axarquía malagueña. A los efectivos del 7.º Batallón les salvó la vida el hecho de que estaban desconectados del Grupo de Enlace, ya que las fuerzas de represión preparaban con «Roberto» en Granada una operación similar a la realizada en Málaga. «Pablo» y sus hombres marcharon entonces de la sierra granadina y buscaron refugio en la sierra de Cazorla (Jaén), manteniéndose entre los montes de Granada y Jaén hasta que el 6 de junio de 1952 cayeron en una refriega con la Guardia Civil en la sierra de Lújar dos guerrilleros, Antonio Fajardo Ruiz «Duarte» y José Cecilia Sánchez «Jerónimo». Pero la peor noticia para estos guerrilleros abandonados a su suerte fue que al día siguiente desertó Sebastián Olivares Ruiz «Martín», con lo que se vieron obligados a dejar las bases en toda la zona^[275].

Por lo que respecta a la Agrupación de Guerrilleros Fermín Galán, que había sido fundada en febrero de 1949 y que operaba en el oriente de Cádiz y el occidente de Málaga, con bases en el Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda, pronto entró en crisis, sobre todo cuando en el mes de julio fue detenido «Orejitas» y se produjo el desmantelamiento de los enlaces y la red de evasión del norte de África. A partir de esas caídas, la historia de la AGFG puede resumirse en una sucesión vertiginosa de traiciones y muertes. Seguían, empero, realizando varios secuestros, uno de los cuales, efectuado el 17 de diciembre de 1949 en la persona de un industrial de Arcos de la Frontera, les había reportado 700 000 pesetas. Once días más tarde, uno de los participantes en el secuestro y significado guerrillero de la AGFG, Miguel Pérez Fernández «Polonio», fue herido en una escaramuza pero la fuerza no se enteró de lo ocurrido y el guerrillero murió desangrado. Según testimonios, «Polonio» se dedicó, mientras agonizaba, a cortar en trozos diminutos los billetes de mil pesetas del último secuestro. Una fecha relevante en las bajas de las guerrillas gaditanas fue el 30 de diciembre de 1949, cuando encontró la muerte el jefe de la Fermín Galán, Bernabé López Calle «Comandante Abril», el único libertario que encabezó una de las agrupaciones. López Calle fue abatido por los guardias civiles, junto con Juan Ruiz Huércano «Capitán», en un cortijo de las proximidades de Medina–Sidonia. Un guerrillero, Francisco Fernández Cornejo «Largo Mayo», que había tenido un enfrentamiento con «Capitán» a raíz de un secuestro en agosto de ese año, los

condujo hasta el campamento. Consiguieron huir, pese al cerco, «Darío», hijo de López Calle, y el célebre «Potaje». López Calle, el líder más conocido, había sido guardia civil durante la República y formó parte del Ejército Popular durante la guerra civil, en la que alcanzó el grado de comandante. Más allá de la leyenda parece existir acuerdo sobre el carisma que tenía entre los del monte, el respeto de las fuerzas de represión y la comprensión de sus paisanos. No existen pruebas de que participara en la muerte de persona alguna. El 22 de octubre de 1949 murió en Motejaque (Málaga) Juan Núñez Pérez «Cuchillitas», uno de los fundadores de la Fermín Galán, con fama de experto tirador en las sierras gaditanas y malagueñas, asesinado por un enlace, Aureliano Sánchez Naranjo «Pringue», en connivencia con las fuerzas de represión. El año siguiente no mejoró la situación, y las caídas en combate o consejos de guerra se sucedieron durante 1950: José Rodríguez Rodríguez «Sietévé» (8 de febrero), Cristóbal Ordóñez López «Libertario» (29 de mayo), José Barea Reguera «Bienvenido» (29 de mayo) y José Lobato Floria «Lobato» (noviembre). El 24 de junio de 1951, después del correspondiente consejo de guerra, fue fusilado en Sevilla Antonio Núñez Pérez «Bartolo», detenido el 16 de julio de 1950^[276].

La matanza de Algotocín, pueblo malagueño ubicado en la Serranía de Ronda, clausuró el ciclo de la resistencia antifranquista en Cádiz y sus irradiaciones malagueñas. En un caserón de esa localidad encontrarán la muerte el 18 de diciembre de 1950 los restos de la resistencia armada gaditana y rondeña. Los fallecidos oficiales fueron José Calvo Pena, Juan Toledo Martínez «Caracoles», Juan Virgil de Quiñones «Juanito», Juan Francisco Domínguez Gómez «Pedro el de Alcalá», Francisco Moreno Barragán «Benito» y Pablo Pérez Hidalgo «Manolo el Rubio», que estaban intentando organizar el paso del Estrecho. Los guardias del pueblo habían pactado con los dueños de la casa, donde cenaban todas las noches, que ocho de ellos se esconderían en el techo del caserío y abatirían a los maquis mientras cenaban. Todos fueron muertos en el acto, pero, en el Registro Civil de la localidad, existe un error, ya que entre los seis muertos está inscrito Pablo Pérez Hidalgo «Manolo el Rubio», quien eludió accidentalmente la matanza porque, debido a unos dolores, no pudo bajar aquella noche a cenar. La confusión vino porque bajó en su lugar un guerrillero llegado ese mismo día, Antonio Rincón González «Rincón Perejil», que resultó muerto. Cuando hubo que proceder a la identificación de los cadáveres, nadie en el pueblo lo conocía y se dio por supuesto que era «Manolo el Rubio». El padre de éste fue llamado a identificar el cadáver, y confirmó que era su hijo. Con lo cual «Rincón Perejil» estaba oficialmente vivo y Pérez Hidalgo, muerto. Este último aprovechó la coyuntura para convertirse en «topo». La actitud del padre era lógica, aunque arriesgada. Lógica por cuanto es de suponer que estaría cansado de palizas, citaciones en los cuartelillos y otras humillaciones a las que eran sometidos los

familiares directos de los hombres de la sierra. Arriesgada porque la detención de su hijo habría conducido a su propio arresto e incluso a la muerte. La «ley de fugas» era lo suficientemente barata como para que las fuerzas de represión aceptaran una impostura de esa naturaleza^[277].

Manual para supervivientes: el exilio o la muerte

En un trienio dominado por la muerte, también se llevaron a cabo importantes huidas que mitigaron la catástrofe humana de los últimos años de la resistencia antifranquista. Descartado Portugal, los destinos de las escapadas se reducían a la frontera francesa, la más buscada, y el norte de África —sobre todo, las ciudades de Tánger y Casablanca—, que implicaba la peligrosa travesía del Estrecho de Gibraltar.

Los guerrilleros supervivientes no dispusieron de facilidades para la huida, ya que el PCE se desentendió de ellos y tuvieron que buscar el dinero y los guías, cuando los consiguieron, por sí mismos. Si damos por buena la aseveración de Carrillo a Gallo y Debray —«en la frontera contábamos con decenas de guías que conocían muy bien los Pirineos»—, podemos inferir que los guerrilleros fueron sencillamente abandonados. Casa mal tanto poderío con las penurias y soledades de quienes trataban de alcanzar la frontera francesa. La única excepción conocida tuvo como protagonistas a una treintena de guerrilleros de la AGLA que llegaron a Francia con el auxilio del Partido Comunista, que había ordenado la evacuación en la primavera de 1952. Aunque, en principio, se planificó la salida de dos grupos, uno en tren, con la documentación en regla, y otro caminando a través de las montañas, las circunstancias obligaron a que se utilizara exclusivamente este último procedimiento. La Guardia Civil estaba informada de la operación y atacó el 27 de abril de 1952 el campamento guerrillero situado entre Buñol y Cofrentes con una consecuencia importante: la muerte del guía. Después del asalto, los supervivientes intentaron la evasión por sus propios medios y se encaminaron hacia Francia a través de los montes. Hicieron de prácticos «Chaval», «Radista» y Simón Aparicio Modesto «Zapatero». El hecho de combinar avances con leves retrocesos, despistó a la Guardia Civil, que conocía la ruta pero que no sincronizó los tiempos. Un guía venido de Francia les ayudó a atravesar la frontera después de una caminata de 30 días. O 30 noches. El método utilizado era el mismo que en todas las escapadas numerosas: caminar durante la noche y aplastarse al terreno durante el día^[278].

La evacuación de una parte de los guerrilleros levantinos fue el único éxito del Partido Comunista. Los demás lo hicieron por su cuenta, como los seis miembros de la Agrupación de Granada–Málaga que alcanzaron territorio francés partiendo desde el sur de España y que protagonizaron una de las huidas más épicas de la resistencia.

En junio de 1952, una vez que comprobaron que continuar equivalía a la muerte, decidieron marchar a Francia desde las sierras jienenses. El trayecto que siguieron, reconstruido por José María Azuaga Rico en su historia de la guerrilla nerjense, resultó verdaderamente espectacular, sobre todo teniendo en cuenta una serie de circunstancias: carecían de puntos de apoyo en el recorrido, no llevaban un práctico para que los guiara y era, en definitiva, un viaje improvisado, además de tener que atravesar prácticamente toda la península. Para evitar el hostigamiento de las fuerzas represivas, tuvieron que hacer marchas breves, obligados además porque sólo podían caminar por las noches, que en verano son cortas. Conseguida financiación en el pueblo granadino de Puebla de Don Fadrique, próximo a las provincias de Albacete y Murcia —mediante el secuestro del hijo de un nuevo rico gracias a la guerra civil (que les reportó 150 000 pesetas)—, continuaron su periplo atravesando la provincia de Albacete (Corral Rubio, Bonete, Higuera y Villa de Ves), Valencia (Cofrentes —donde atravesaron el río Júcar—, Millares, Buñol, Requena, Chiva, Liria —aquí cruzaron el río Turia—, Villar del Arzobispo), Castellón (Jérica, Viver, El Toro), Teruel (Puertomingalvo, Canta vieja, Tronchón y Las Cuevas, Castellote, Mas de las Matas —por donde cruzaron el Maestrazgo, uno de los territorios más representativos del maquis español—, Caleceite, Alcañiz), Zaragoza (Maella, Caspe —donde sortearon el Ebro obligando a un barquero a pasarlos, ya que los puentes estaban vigilados: esa decisión les salvó la vida—, Fayón y Mequinenza), Lérida (Albesa, Balaguer), Huesca (Barbastro, Naval, Boltaña, Bielsa) y por el Monte Perdido entraron en Francia por Gavarnie el 14 de octubre de 1952. Los protagonistas de este periplo fueron Manuel Pérez Rubiño «Pablo», que dirigió al grupo, Miguel Salado Cecilia «Gómez», Francisco Martín Alonso «Villena», Ricardo Martín Castillo «Viñas», José Navas Navas «José» y Enrique Urbano Sánchez «Fermín». Habían empleado más de tres meses en atravesar España, se habían guiado por la estrella polar y por toda cartografía se sirvieron de los mapas de un libro escolar. La Guardia Civil les seguía los pasos, y en varias provincias los esperaron en apostaderos que eran considerados de paso obligado en las rutas hacia Francia. Incluso las autoridades policiales granadinas, al comprobar que no se encontraban en la zona, enviaron a Barcelona al capitán Rafael Caballero Ocaña, jefe de la Brigadilla de Información, para que vigilara a los familiares con los que seguramente entrarían en contacto, ya que el jefe del grupo, Pérez Rubiño, tenía familia y a una antigua compañera sentimental en Barcelona. Pero optaron por otra ruta y acertaron. El capitán Caballero los estuvo esperando en Barcelona hasta el 28 de noviembre de 1952.

La provincia de León y el oriente de Orense aportaron un importante número de escapados al extranjero, tanto por parte de los miembros de la antigua guerrilla organizada del oeste provincial como de los huidos de la llamada Montaña leonesa. El desarrollo de la huida, un método que podía universalizarse para el resto del

territorio español —sobre todo, en la banda septentrional—, era siempre el mismo. Contactaban con alguna red de evasión y marchaban en grupos reducidos (dos o tres individuos). Realizaban el trayecto en tren o taxi hasta Pamplona, Bilbao o San Sebastián, y desde esas capitales, enlaces especializados los conducían, previo pago de lo convenido, hasta la frontera francesa. Por lo general, aprovechaban los días que había partido de fútbol en Navarra o las capitales vascas para efectuar la fuga, ya que aumentaba el número de coches foráneos y se relajaba la vigilancia policial. También las fiestas navideñas, por el mismo motivo. Algunos utilizaban documentación falsa y otros llevaban por toda documentación, como decía Mario Morán, «bombas de mano y dos pistolas». Pero las evasiones tenían un precio, y una operación salida tenía un coste entre 5000 y 15 000 pesetas de la época. Por este sistema, sólo de León y la zona oriental de Lugo y Orense, consiguieron escapar en 1948 —aparte de los hermanos Baldomero, Jovino y Abelardo Gutiérrez Alba, que lo hicieron en 1947— Odilo Fernández «Blas», Domingo Rodríguez «Inca», Antonio Fernández Crespo «Fuenteoliva», Dalmiro Alonso García y su mujer, Adoración Campo Cañedo, Manuel Gutiérrez Abella, Andrés Varela Pérez, Joaquín Lage Fernández «Xoqui», así como Eduardo Pérez Vega «Tamairón», que escapó acompañado por la suegra y una cuñada. También lo hicieron dos jefes de la guerrilla leonesa, Abel Ares Pérez y Mario Morán. El primero, acompañado de su novia no huida, Matilde Franco, y del guerrillero Amadeo Ramón Valledor, que regresaría para colaborar con Francisco Sabaté Llopart en la resistencia urbana de Barcelona. El segundo hizo el viaje junto con Benigno González García «Viejo». Por lo que se refiere a los huidos de la montaña leonesa, el 13 de enero de 1948 lograron llegar a Hendaya los hermanos Casimiro y Amable Fernández Arias, jefes de partida, Etelvino Fernández Méndez, Laurentino Álvarez y Aladino Oricheta Pascual. Por otros medios, también lograron huir Calixto López Abad, jefe de partida, Inocencio Diez Ferreras, Senén Rodríguez Arias, Sixto Álvarez y Fermín San Pedro. La mayor parte de los tres grupos de huidos del nordeste leonés lograron escapar. Las traiciones de enlaces y guías, en muchos casos infiltrados por la policía, que conocía las rutas, fueron poco numerosas.

Para los guerrilleros de Extremadura, Centro y Andalucía septentrional, las salidas a Francia resultaban extraordinariamente comprometidas, además de peligrosas y caras, porque era difícil contratar a prácticos de confianza. El cordobés Ricardo García Rodríguez «Caraquemá», por ejemplo, consiguió llegar hasta las proximidades de la frontera francesa, pero como no disponía de redes de enlaces fiables decidió regresar a su tierra. A principios de 1946, Jesús Gómez Recio «Quincoces», acompañado de «Quijote» —su hermano—, «Lenin», «Motorista», «Tarzán» y «Desorejado», atravesaron la raya portuguesa pero, ante la imposibilidad de embarcarse para América, optaron por regresar a las sierras españolas. Lo mismo le había sucedido a los supervivientes de las partidas de «Rubio de Navahermosa» y

«Chato de la Puebla» en 1940. En 1947 y 1948 algunos guerrilleros andaluces y manchegos lograron atravesar la frontera: Anastasio Muñoz Fernández «Romero», Ricardo López Fernández «Granaíno», «Jardinero», «Rosales» y Francisco Expósito Prieto «Gafas». Este último entró en Francia por Canfranc el 22 de septiembre de 1948 y después de 41 jornadas de viaje. Francisco Blancas Pino «Veneno», integrante de la Agrupación de Ciudad Real, se ocultó junto con otros compañeros en el pueblo de Cañamero (Cáceres), haciendo vida de «topos». En la primavera de 1955 lograron alcanzar la frontera francesa. Con «Veneno» marcharon Aurelio Rodríguez «Viriato», Bonifacio García Sánchez «Hijo del Eléctrico» y Lorenzo Toribio Sánchez «Parachuta»^[279].

Precursores de las huidas masivas habían sido los resistentes gallegos. En la madrugada del 13 de diciembre de 1946 partieron del puerto lucense de Vicedo 22 guerrilleros y enlaces, algunos tan relevantes como Vicente Lage «Chicharro», José Antonio Franco «Caudillo» o Ángel Franco «Evaristo», además del leonés Domingo Villar Torres, que había formado parte de la partida de «Santeiro». Esta huida masiva, organizada por Antonio Paleo Saavedra, indicaba que, pese a estar en su apogeo la resistencia en Galicia, algunos guerrilleros y apoyos empezaban a impugnar ya esta vía como la idónea para acabar con el franquismo. Detalle significativo de las relaciones entre los maquis fue el hecho de que los organizadores no comunicaron la decisión a los responsables del comunismo gallego, José Gómez Gayoso y Antonio Seoane: tenían miedo de que trataran de impedirselo. La mayor parte de los guerrilleros eran naturales de la franja costera que va de El Ferrol hasta Viveiro, y el precio colectivo del viaje ascendió a 60 000 pesetas. La expedición resultó tan azarosa que tardaron seis días en alcanzar Bayona^[280].

Un grupo geográfico y político que trató de huir de manera organizada desde el principio fue el de los socialistas asturianos, quienes llevaron a cabo en 1948 la evasión más importante de los guerrilleros por mar. Lo intentaron en enero de 1939 por el puerto de Caravia unos y por la frontera portuguesa y francesa otros, aunque las expediciones habían terminado en fracaso. Después de tres años de dudas, en 1948 retomaron otra vez la idea de la huida colectiva. Como además al responsable del PSOE en el exilio Indalecio Prieto le asustaba la idea de una guerrilla socialista en los montes asturianos, todo conducía a un propósito: marchar al extranjero. El mismo Prieto, auxiliado por los dirigentes asturianos José Barreiro y Amador Fernández, se encargó de organizar el viaje de huida y un amigo suyo, el capitán Lezo de Urreiztieta —«el hombre de los escapularios y de las medallitas religiosas», según los hermanos Llana—, fue el encargado de hacerla posible. El día 21 de octubre de 1948 se hallaban todos los maquis en el lugar elegido para la concentración, donde descansaron por espacio de unas horas. El día 22 de octubre por la noche llegaron sin novedad al puerto de Luanco, donde embarcaron sin problemas en un *bou* de

matrícula francesa y una tripulación de tres marineros franceses al mando del capitán Lezo, militante del PNV. La razón por la que no había vigilancia en el puerto se debió, según algunas versiones, a que los guardias estaban de celebración por la boda de un compañero^[281]. Después de una larga y accidentada travesía —a las seis de la mañana estuvieron a punto de entrar en la bahía de La Concha de San Sebastián—, llegaron al puerto de San Juan de Luz (Francia) a las cuatro de la madrugada del 24 de octubre de 1948. Detenidos por los gendarmes, Amador Fernández, de la ejecutiva socialista en el exilio, consiguió que salieran en libertad. Al día siguiente se harían las célebres fotos con el líder socialista Indalecio Prieto. Los 29 guerrilleros que huyeron en el barco pesquero francés eran los siguientes: José Mata Castro, Marcelino Fernández Villanueva «Gafas», César Ríos Rodríguez, Jesús Martínez Mañete, Luis García Fernández, Aquilino Bayón Gutiérrez, Braulio Fernández González, Robustinián Sánchez Álvarez, Ursino Argüelles Valles, Germán Gutiérrez García, Juan Helguera García, Manuel Fernández Peón, Marcelino Morán Alonso, Aladino Zapico García, Faustino Helguera, Manuel Gil Lozano, Arístides Llana Jove, Óscar Muñiz, Luis García Martínez, Manuel Fernández Casas, Manuel Díaz Gutiérrez, José Lafuente Canga, Marino Montes Ferrero, Isidoro Suárez Álvarez, Antonio Martínez Fernández, Rafael Rodríguez Fernández, Florentino Pérez Rivas, Mario Fernández y Antonia Rodríguez López. Esta última, compañera de Ríos, era enlace de la resistencia en León y hermana de varios guerrilleros muertos en la lucha antifranquista. Todos los pasajeros eran asturianos, excepto la citada enlace, que era de la localidad orensana de Soulecin, y otro enlace de las partidas anarquistas de la ribera leonesa, Aquilino Bayón.

Aunque la operación de Tazones ocasionó la muerte de un enlace, Fermín Lorda Rodríguez, que era primo de César Ríos y falleció a causa de las torturas que le infligió la policía para averiguar el escondite del guerrillero, no cabe duda de que fue un éxito total para la dirección socialista y, sobre todo, para los propios guerrilleros. Pero desde el mismo momento de la marcha en las montañas asturianas se extendió el rumor —que no las pruebas— de que los huidos habían contado con la complicidad de las autoridades franquistas. Como puede suponerse, este tipo de operaciones no solían hacerse con luz y taquígrafos y, por lo tanto, resultan difíciles de contrastar. Pero se combinaron muchas casualidades y coincidencias para que todo marchara conforme a los planes previstos. En consecuencia, se extendió la conjetura de que las autoridades franquistas estaban al corriente del plan de huida y, aunque no hubiera un arreglo previo, no abortaron una operación que favorecía al régimen. Con los guerrilleros infestando los montes asturianos, no resulta lógico pensar, sin embargo, que un puerto de la importancia relativa de Luanco pudiera permanecer sin vigilancia y que 29 hombres embarcaran en él sin problemas. Pero una sospecha no prefigura un indicio y mucho menos una prueba, algo de lo que se adolece hasta ahora.

La tesis de la colaboración policial —que conocemos gracias a las aportaciones de Adolfo Fernández Pérez— tomó cuerpo a raíz de las declaraciones de los Llanaezas, el apellido más ilustre del sindicalismo asturiano, y uno de cuyos hermanos, Arístides, formaba parte de la expedición. Para Antonio y Arístides Llanaeza Jove, la salida de los asturianos estaba preparada y no se realizó además por cuestiones humanitarias sino que fue producto de un cálculo político, ya que Prieto temía que cualquier acción armada importante de los socialistas asturianos perjudicara irreversiblemente su alianza con los monárquicos. Los guerrilleros, por lo tanto, se habían convertido en un estorbo para esa política. Antonio Llanaeza Jove en un libro editado en México en 1957 —*Codos de acero y puños de hierro*— lo resumió de manera contundente: «Sacar a los guerrilleros fue una necesidad política y no un acto de generosidad». En 1979, Arístides Llanaeza, preguntado por un periodista asturiano sobre las dificultades de la huida, respondió lo siguiente: «No tuvo nada de difícil; no tuvo nada de aventura. Aquella escapada fue un camelo. Nos abrieron la puerta, como si dijéramos. Pasamos en lancha, sin que nadie nos molestara. ¿Usted cree que la Guardia Civil no hubiera podido vigilar bien las salidas? Cuando llegué a México y se lo conté a mi hermano Antonio, que tiene mucho olfato político, me dijo: “Ari, eso fue un arreglo”». Pero tampoco los hermanos Llanaeza han aportado pruebas de sus palabras, y la enemistad que profesaban a Prieto y su política pudo haberlos inducido a propalar esa versión. En una carta confidencial fechada el 3 de septiembre de 1957, el secretario de la Comisión Socialista Asturiana (CSA) escribe a José Muñiz, que se encontraba en Orán, que «esa versión —la que difundieron los Llanaeza— es falsa y carece de fundamento. Las gestiones fueron iniciadas por la CSA con el concurso de Amador Fernández. Prieto, entonces presidente del Partido, tomó a su cargo la operación, pero en ella gastamos la CSA más de 200 000 francos y el Partido cerca de un millón». Rufino Montes ha explicado que el propio Prieto le confesó que la versión de los Llanaeza era falsa y la mejor prueba de ello era que desconocía la situación de los guerrilleros hasta que en 1947 se asentó en Francia. Un dato resulta verificable, y era el acuerdo unánime entre los socialistas para marchar al extranjero, aumentado después de la matanza de comunistas en Monte Coya y Santo Emiliano. Su situación en los montes asturianos no tenía sentido alguno. Practicar la pasividad armada y arriesgarse a ser tratados como si fueran guerrilleros activos era un ejercicio excesivo e inútil^[282].

Pero Francia, la tierra de promisión que durante la ocupación nazi se había convertido en un escenario peligroso, volvió a transformarse en un país comprometido para los republicanos españoles cuando, en septiembre de 1950, el PCE fue declarado ilegal (el ministro del Interior era el socialista Jules Moch), lo que motivó la huida de muchos de sus dirigentes y la detención y el destierro de militantes cualificados. Las reacciones de la policía francesa con respecto a los

exiliados comunistas empezaron a resultar impredecibles, al igual que con quienes llegaban a Francia. Algunos comprobaron que después de jugarse la vida en un trayecto extraordinariamente peligroso, alcanzar la frontera francesa tampoco garantizaba una vida normalizada. Los compañeros de Manuel Girón, que habían alcanzado en septiembre de 1951 el pueblo de Alude, en las proximidades de Bayona, fueron testigos, por ejemplo, de que lo que parecía el comienzo de la libertad estuvo a punto convertirse en una disyuntiva poco atractiva: la España franquista o la Legión Extranjera. Advertidas las autoridades francesas de la ideología comunista de los recién llegados, el primer intento de los responsables policiales consistió en trasladarlos a la comisaría de Hendaya para entregarlos a la policía franquista. Ante los problemas derivados de esa decisión —gracias a la mediación del Gobierno republicano en el exilio y de diversas organizaciones—, les ofrecieron una segunda alternativa: ingresar «voluntariamente» en la Legión Extranjera, que en aquellos momentos equivalía a un alistamiento para la guerra de Indochina. Durante varios días los retuvieron en el fuerte San Nicolás de Marsella, e incluso el capitán del fuerte, en su intento de presionar a los guerrilleros, le dijo a uno de ellos, Francisco Martínez López: «Te juro que Franco te va a cortar los cojones». Pero entre las gestiones de los libertarios, los representantes del Gobierno republicano en el exilio y el Servicio de Refugiados Españoles consiguieron finalmente solucionar el problema. Cuando por fin pudieron sentirse seguros en suelo francés, habían pasado tres meses de sobresaltos. Otros tuvieron menos suerte. Conocemos ya los nombres de algunos: Luis González «Barranca» o «Canor», que fueron devueltos a España en 1950. Otro asturiano, José Fernández «Pin de Dimas», que consiguió cruzar la frontera en 1948, fue entregado a la policía franquista el 15 de abril de 1950. En septiembre de 1952, Doroteo Ibáñez Alconchel «Maño», que había abandonado la guerrilla y llevaba un año como peón del campo en Montbriso, fue detenido por la policía francesa y entregado a la Guardia Civil en Port Bou. Un guerrillero santanderino, José Robledo, que había subido al monte debido «a un amor contrariado y celos», cayó abatido en la frontera francesa. También hubo maquis que alcanzaron territorio francés y decidieron volver a los montes españoles. Llevaban en el monte desde 1936, casi veinte años en algunos casos, y su vida parecía no tener sentido alejados de las sierras y del combate antifranquista. El gallego Enrique Yáñez «Chaval de Ricosende», por ejemplo, regresó a tierras galaico-leonesas después de instalarse en Francia^[283].

Pero también se produjo otra manifestación destacada, la de los hombres que, sabiéndose condenados a muerte, prefirieron quedarse en el monte a marchar al extranjero, incluso pudiendo hacerlo. Resulta especialmente comprometido encontrar explicaciones generales y las particulares tampoco aparecen fáciles de determinar, por cuanto la mayoría de ellos perecieron en las sierras. En general, y sin pretender elevar el dato a categoría, los que se quedaron eran guerrilleros «autóctonos», ya que

se movían por comarcas de las que eran naturales, y «autónomos», porque a raíz de la desintegración de las agrupaciones actuaban por libre, bien individualmente o en grupos reducidos. Una de las razones aducidas reiteradamente era que algunos de ellos tenían compañeras en la zona o en el monte, y que no intentaron huir por razones afectivas. «Tanto Girón como Chapa, quienes en la retirada de Casayo me acompañaron hasta El Bierzo, como el resto de compañeros que eran fieles a la Federación, prefirieron aguantar en sus bunkers con sus novias a los riesgos de la salida», testimonia Marcelino Fernández Villanueva «Gafas». Efectivamente, algunos «autóctonos» tenían compañeras que hacían vida en el monte con ellos. Las mismas notas de la Comandancia de León, fechadas en 1949, recogen esa impresión: «Es presumible que los más resistentes al contagio de la marcha sean aquellos que están ligados a una mujer que los ate más a la comarca de donde son naturales». Sin embargo, otros muchos resistentes tenían novias o esposas y huyeron, con ellas (como en el caso de César Ríos o Abel Ares) o en solitario (como hicieron «Chaquetalarga» y «Miguelete»). La correspondencia que hemos mantenido con el guerrillero Victorino Nieto, por ejemplo, refuerza la idea de que permanecieron básicamente por cuestiones políticas, para proseguir una lucha —que reconocían «suicida»— contra el franquismo. Sea cual fuere la causa de su permanencia en el monte, lo constatable fue que, en la mayoría de los casos, su oposición al régimen sólo finalizó con la muerte. Los ejemplos resultan abundantes: Manuel Girón, Enrique Oviedo Blanco «Chapa», Juan Fernández Ayala «Juanín», José Castro Veiga «Piloto», Abelardo Macías Fernández «Liebre» o Francisco Serrano Iranzo.

Algunos guerrilleros, ante la imposibilidad de huir a Francia o al norte de África, intentaron sobrevivir camuflándose como jornaleros. Alejados de las sierras que les hicieron al mismo tiempo temidos y vulnerables, buscaron trabajo fuera de los núcleos más vigilados con la esperanza de que se olvidaran de ellos. Vana esperanza. Dos pequeños grupos lo intentaron. Dionisio Habas Rodríguez «Eugenio del Real» (o «Durruti»), Antonio Serrano Ruiz «Mohíno» y Miguel García Vázquez «Dueñas» lo hicieron en un cortijo de Aznalcóllar (Sevilla) mientras que Hilario Martínez Aranda «Godoy del Pueblo», Manuel Doroteo Durán Gordillo «Ferrera» y Manuel Moreno Hernández «Minero» intentaron pasar inadvertidos en un cortijo situado entre los pueblos pacenses de Monesterio y Calera. La detención de «Eugenio del Real» y sus compañeros, localizados gracias a las informaciones de Florencio Martín Benítez «Vicente del Puerto», llevó al posterior arresto de «Godoy del Pueblo» y sus amigos, que ofrecieron resistencia a las fuerzas de represión. El correspondiente consejo de guerra los condenó a muerte. «Minero» salvó la vida al serle conmutada la pena de muerte. «Godoy del Pueblo», «Eugenio del Real» y «Dueñas» fueron fusilados el 30 de enero de 1953; el 23 de marzo de 1953, «Ferrera» y «Zoilo», y el día 11 de mayo de 1953 ejecutaron a «Vicente del Puerto» y, posiblemente, a «Mohíno»^[284].

La guerrilla como anacronismo: nuevas formas de lucha

En el periodo de tiempo que media entre 1949 y 1952 no se puede hablar con propiedad de guerrilla: la resistencia antifranquista *strictu sensu* había desaparecido. En los montes y sierras sólo permanecían un puñado de hombres acosados, comparables a los huidos de la posguerra. Huidos sin esperanza, además. Para algunos, el premio a más de diez años de lucha contra la dictadura se reducía a dos opciones: malvivir aplastados al terreno hasta que una delación o una bala los enfrentara a la muerte o buscar por su cuenta la salida al extranjero. Acorralados por las fuerzas de represión, abandonados por sus organizaciones y convertidos en un problema para los enlaces, el año de 1949 marcó el fin de la resistencia organizada aunque los coletazos continuaron hasta 1952, fecha que fijó oficialmente el final de la resistencia armada (y también de las cartillas de racionamiento). A mediados de 1952, Santiago Carrillo realizó una autocrítica sobre las guerrillas y apunta que «sobrestimamos la experiencia clandestina de los camaradas enviados desde Francia», para continuar señalando que «no conseguimos nunca que la lucha guerrillera fuese una lucha de masas» e insistir en que «sobrestimamos la importancia de la lucha guerrillera... y no acertamos a retirar a tiempo, por lo menos, a parte de nuestras fuerzas de este sector de la lucha, mientras que se producía su aislamiento creciente de las masas campesinas y se desarrollaban en su seno elementos de descomposición». Un acto de contrición tardío.

La década de los cincuenta excluyó cualquier posibilidad de éxito al movimiento subversivo encabezado por el Partido Comunista y, lo más importante, convirtió a la guerrilla en un anacronismo. Americanos y europeos dieron un paso más en su estrategia respecto a España y pasaron de tolerar el franquismo a apoyarlo con importantes créditos. La autarquía económica, que había favorecido la permanencia de un movimiento armado, daba paso a un desarrollismo que desarmaba una parte de las bases materiales que habían hecho posible esa resistencia: en 1951 España alcanzaba los niveles económicos y demográficos de 1935. Las huelgas que se extendieron a partir de 1951 por las capitales industriales más importantes — Barcelona, Madrid, Pamplona, San Sebastián y Bilbao—, además de evidenciar un perfil político nuevo, convencieron al Partido Comunista de que el tiempo del maquis había pasado. La paulatina incorporación al mercado laboral de jóvenes que no habían hecho la guerra, aunque la habían sufrido, y la pérdida de peso del mundo rural confirmaban la necesidad de una estrategia nueva. Los guerrilleros y sus métodos pertenecían al pasado, desconectados como estaban de los trabajadores de las ciudades, vanguardia de la posible lucha contra el sistema. El modelo a seguir lo

proporcionó la huelga de tranvías en Barcelona.

La llamada «huelga de los tranvías» se había iniciado el 1 de marzo de 1951 en la capital catalana y, aunque el pretexto fue la subida de un 20 por ciento del precio del billete de los trenes urbanos, el componente político era inequívoco: se boicotearon los transportes públicos y se produjo, por vez primera en una ciudad española desde el final de la guerra, la presencia de piquetes, algo verdaderamente revolucionario hasta en la estética de las ciudades. El Gobierno acuarteló las tropas de la región militar, un crucero y tres destructores vigilaban desde el puerto de Barcelona con 2000 marinos a bordo, y de Madrid llegaron tres centenares de policías armados para reforzar el dispositivo represivo de la dictadura en la capital catalana. La huelga fue desactivada, pero las autoridades se vieron obligadas a rebajar el billete a diez céntimos: en un tiempo de símbolos, una lectura inclinaba a certificar el éxito del paro, que se transformó también en huelga general en el País Vasco y Navarra en los días siguientes, y que se desplazó incluso, aunque muy débilmente, a los recintos universitarios madrileños. Relacionadas con la resistencia armada, aparecieron por toda Barcelona octavillas con la siguiente inscripción: «Para arreglar lo de los tranvías / id a buscar a Facerías. / Contra el Requeté ¡Viva Sabaté!». En las elecciones de un año antes, y pese al monopolio sindical de los falangistas, habían sido elegidos enlaces obreros de obediencia comunista y de otras tendencias izquierdistas. La desestalinización de 1956 iniciada por Kruschchev instaló a los comunistas en un discurso nuevo, basado en la reconciliación nacional, y alejado de la ortodoxia a machamartillo iniciada en 1948. Los socialistas, por su parte, llegaron hasta el final con las tácticas de Prieto, que tuvo que confesar en *El Socialista* del 16 de febrero de 1950: «Hice víctima al Partido de una ilusión que me deslumbró. ¿Hasta qué límites me llevará ahora el desengaño?». Y aunque intentó la enésima maniobra para hacerse con el control del partido, el PSOE que dejó Prieto era ya una organización marginal en el interior y en el exilio^[285].

El más favorecido a comienzos de los cincuenta era Franco, ilegalizado el PCE en Francia y con el Buró Político repartido por el mundo, un Partido Socialista testimonial y el apoyo de las potencias europeas y de Estados Unidos, se dispuso a disfrutar de un botín que creía merecer: España. Entendía que la huelga de los tranvías, los movimientos estudiantiles, las «farsas» monárquicas y la renovación sindical del comunismo no ponían en peligro la prolongación de su régimen. La intervención de los países democráticos o la guerrilla (o la conjunción de ambas) habían constituido el único peligro, y eran una amenaza del pasado. Como rezaban las monedas de la época, Franco era el Caudillo de España y, además, por la gracia de Dios. Todo un programa.

La guerrilla urbana y los anarquistas catalanes

La resistencia antifranquista fue esencialmente una guerrilla rural, y la mayor parte de los hombres que se enfrentaron a la dictadura llevaron a cabo su combate en pueblos y aldeas ubicados en los escenarios más recónditos de la geografía española. El medio rural permitía a los guerrilleros una mayor libertad de acción, y no sólo porque los protegía una orografía abrupta propicia para la guerra de guerrillas, sino también porque estaba alejado de los núcleos de población importantes y por tanto escasamente vigilado por las fuerzas de orden. Pero un movimiento subversivo que se desarrollaba en sierras y montañas arrastraba una importante rémora: sólo conocían de su existencia los habitantes de esos pueblos y aldeas. Una férrea censura y la moderada repercusión de las acciones ejecutadas en el medio rural impedían el objetivo principal de la resistencia: que los españoles conocieran las razones de su lucha. Todavía más importante, que conocieran la lucha misma.

Pero también existió una guerrilla urbana, simultánea y posterior, a la resistencia armada rural. Aunque sin la importancia cuantitativa de esta última y, en general, más improvisada que fruto de un cálculo político, la guerrilla urbana se desarrolló en los núcleos de población más importantes, Madrid y Barcelona. Dirigida la primera por los comunistas y la segunda hegemonizada por los libertarios. El intento de extenderla a ciudades como Valencia y Bilbao se saldó como un fracaso sin paliativos, y en otras ciudades, casos de León y Granada, derivó hacia la épica y la anécdota. Por otra parte, la lucha urbana no tuvo continuidad, excepto en Cataluña, ya que en Madrid fue un movimiento tan fulminante como efímero. El descalabro de la resistencia en las ciudades determinará en parte el fracaso de la guerrilla antifranquista en su conjunto.

La resistencia urbana en Madrid

El Partido Comunista también intentó trasladar el movimiento subversivo a las ciudades. Aunque eran conscientes de que no contaban con los hombres adecuados ni, sobre todo, disponían de la intendencia necesaria para hacer factible una guerrilla

urbana operativa, los comunistas no podían descartar un procedimiento armado que maniobraba en las arterias centrales del sistema y prometía una repercusión propagandística importante. Así, desde el invierno de 1944 habían llegado a Madrid, coincidiendo con las operaciones de jalonamiento de las invasiones pirenaicas, los primeros combatientes de la Resistencia francesa. El impulso definitivo se produjo en enero de 1945, cuando llegó a la capital José Vitini Flores, teniente coronel de las FFI y uno de los militares españoles más sobresalientes en la lucha contra los nazis. El destacamento penal de Valdemanco, en las afueras de la capital, permitía a los guerrilleros abastecerse de dinamita y reclutar hombres para la lucha.

Los maquis comunistas llegaron con la intención o el encargo de canalizar la actividad revolucionaria hacia la propaganda y el proselitismo. Además de activar una serie de pequeñas imprentas clandestinas —instalada una en la Embajada de Estados Unidos y manipulada por un empleado de la legación, y otra en un subterráneo de Carabanchel—, fijaron sus trabajos subversivos en los medios de comunicación controlados por los falangistas y en los falangistas mismos. Las primeras acciones de Vitini y de los dos grupos de guerrilleros que constituyó —los «Cazadores de la Ciudad»—, fueron dirigidas contra la Delegación de la Prensa de Madrid y contra el periódico *Informaciones*, una publicación exaltada y filonazi. El 25 de febrero de 1945, Félix Plaza «Francés», José Carmona «Fantasma», Tomás Jiménez, Domingo Martínez Malmierca y Luis del Álamo asaltaron la subdelegación de Falange en Cuatro Caminos. El resultado de la acción se tradujo en la muerte del conserje, David Lara, y del secretario de la delegación, Martín Mora. Aunque el episodio desencadenó un importante movimiento policial, fue la detención accidental de un militante comunista la que ocasionó la habitual cadena de caídas. El arresto el 20 de marzo de 1945 del Policía Municipal Juan Casín, colaborador de los guerrilleros madrileños y en cuya casa encontró la imprenta residenciada en el subterráneo, permitió iniciar la desarticulación del entramado subversivo. Aunque Casín resistió heroicamente las torturas, la vigilancia de la imprenta encriptada en su casa condujo a la detención de Martínez Malmierca y, a partir de ahí, al desmantelamiento casi al completo de los grupos armados. El 18 de abril la mayor parte de ellos estaban en la cárcel. En diez días se llevaron a cabo el juicio, la sentencia y la ejecución de los encartados, que fueron fusilados el día 28 en Campamento: José Vitini Flores, Juan Casín Alonso, Félix Plaza Posada, José Carmona Valdeoliva, Domingo Martínez Malmierca, Dionisio Magdaleno Serrano, Luis del Álamo y Tomás Jiménez Pérez^[286].

Coincidiendo con la caída de Vitini y sus compañeros, llegó a la capital, procedente de Buenos Aires, Sebastián Zapirain, miembro del Comité Central, que traía el encargo de hacerse con el control del partido en Madrid. Como secretario general de los comunistas españoles, Zapirain comenzó con éxito el cometido

asignado por el Buró Político, y fue capaz de vertebrar una Delegación del Comité Central integrada en los puestos más significativos por Santiago Álvarez (Agitación y Propaganda) y Antonio Núñez Balsera (Organización). El nuevo comité tomó una decisión trascendental: desvincular la organización política del movimiento guerrillero (dirigido por Agustín Zoroa y José Isasa «Fermín»). La medida parecía obligada, por cuanto la caída de los guerrilleros acarrearba la detención de los políticos, y viceversa. Resultaba importante aclarar esas relaciones, ya que el Partido Comunista mantenía el empeño de llevar adelante la guerrilla urbana madrileña. La llegada a Madrid de Cristino García Granda, teniente coronel de las FFI y uno de los héroes españoles de la Resistencia francesa, que había dirigido la 158.^a División de la AGE, con sede en Tarbes, se estimaba como providencial. Al parecer, García Granda fue enviado a España con el objetivo de organizar a los grupos de huidos que había en las sierras de Gredos y Guadarrama, pero tuvo dificultades para contactar con ellos y además las noticias procedentes del primer grupo que penetró en la sierra madrileña resultaron desalentadoras. En un combate que tuvo lugar el 13 de junio de 1945 en Las Navas del Marqués, localidad abulense en la frontera con Madrid, los guerrilleros mandados por Manuel Castro Rodríguez perdieron a cinco compañeros, aunque también eliminaron a dos miembros de la Benemérita. Ante una situación comprometida, García Granda y sus hombres se trasladaron a la capital para relanzar la resistencia urbana^[287].

Cuando el dirigente guerrillero se instaló en Madrid, los «cazadores» supervivientes, carentes de liderazgo político y militar, convertían cada acción en un desastre de repercusiones trágicas. El asalto a una sucursal del Banco Español de Crédito, por ejemplo, se había saldado con la muerte de un guerrillero y la detención del otro, que además, y como era habitual tras los «hábilis interrogatorios», denunció a compañeros y enlaces, entre ellos a miembros del Ejército —los sargentos Miguel Bonilla y Emilio García López y el soldado José de la Cruz Peinado— que fueron detenidos y fusilados en Alcalá de Henares el 12 de febrero de 1946. García Granda tampoco fue capaz de invertir la tendencia en la resistencia urbana. Las acciones bajo su mando se sucedieron rápidamente: ataque a una entidad financiera del Paseo de Delicias, voladura de un transformador eléctrico en la calle Mariblanca, asalto a la subdelegación de Falange en Buenavista y sabotaje a las oficinas de ferrocarriles del Paseo Imperial. Pero el grupo de Cristino no solamente tuvo que ocuparse de combatir a los franquistas, sino que también intervino en las luchas por el poder entre los «monzonistas» y el Buró Político en el exilio: recibió el encargo de eliminar a León Trilla, uno de los personajes centrales de la época de Monzón Reparaz. Como García Granda se negara a ello aduciendo su condición de revolucionario, fueron designados dos miembros del grupo para ejecutar al disidente. Según fuentes policiales, los ejecutores de León Trilla —apuñalado en la calle Magallanes el 6 de

septiembre de 1945— fueron Francisco Esteban Carranque Sánchez «Paquito» y «Rubio». Otros autores señalan a Olmedo «Gitano» como el autor de la ejecución. Según esas mismas fuentes, el propio grupo de Carranque ejecutó el 15 de octubre a un compañero de Trilla, Alberto Pérez Ayala (posiblemente no era su verdadera identidad). Acompañaban a Carranque, que mató al disidente con arma blanca, Gonzalo González González y Eduardo González Silván^[288].

El 20 de octubre, cinco días después del asesinato de Pérez de Ayala, fueron detenidos García Granda y sus compañeros, entre ellos Manuel Castro Rodríguez y Antonio Medina Vega, teniente coronel y capitán de las FFI, respectivamente. La secuencia de las caídas llevó a la cárcel a Núñez Balsera, Zapirain y Álvarez. La importante repercusión internacional del juicio y la presión del Gobierno francés, que intercedió por la vida del guerrillero el 9 de febrero de 1946, no evitaron el juicio de los quince militantes comunistas y la ejecución de nueve de ellos el 21 de febrero de 1946. Los fusilados fueron Cristino García Granda, Manuel Castro Rodríguez, Francisco Esteve, Luis Fernández Ávila Núñez, Francisco Esteban Carranque, Gonzalo González, Eduardo González, Antonio Medina Vega, Joaquín Almazán y Eduardo Fuentes^[289]. El coronel Eymar, uno de los instructores más temidos del régimen, había impuesto nuevamente en Alcalá de Henares la línea de la muerte. La ejecución de Granda y sus compañeros malogró definitivamente el discurso armado de los comunistas en Madrid. Aunque continuó la resistencia en la capital durante un año, eran los últimos coletazos de un combate desesperado. Una intensa campaña internacional salvó la vida a Zapirain y Álvarez, que fueron condenados a 20 y 18 años de cárcel, respectivamente.

La detención de la cúpula comunista permitió a Agustín Zoroa, responsable de las guerrillas y uno de los pocos dirigentes que siguieron en libertad, hacerse cargo de la Delegación del Comité Central. Pero apenas tuvo tiempo de consolidarse en el cargo, ya que fue detenido como resultado de las caídas de Talavera de la Reina, que constituyeron otra catástrofe para el Partido Comunista. Con Zoroa fueron arrestados los máximos responsables de la Delegación: Lucas Nuño Bao, José Luis Fernández Albert, Manuel Hernández Leal y Eladio Amador, todos ellos fusilados en la prisión de Ocaña. La situación llegó a ser tan dramática que tuvieron que hacerse cargo del PCE los miembros activos de las JSU, pero un nuevo enviado de Toulouse que empezó a colaborar con la policía después de ser detenido —Tomás Planas «Peque», al que auxiliaron también Luis González «Carlitos» y Antonio Rodríguez «Chato»— desarticuló por completo la infraestructura de los comunistas en Madrid. El policía que dirigía estas operaciones de infiltración era Roberto Conesa^[290].

El único personaje de relieve que consiguió eludir la cadena de arrestos fue Pedro Sanz Prades «Paco el Catalán», que entre finales de 1946 y la primavera de 1947 impulsó el Ejército de la Zona Centro y la guerrilla urbana madrileña, al frente de la

cual se encontraba Juan Sanz Pascual «Félix». Este último fue interceptado, junto con Antonio Barahona «Raúl», en un control rutinario en Cabanillas de la Sierra, cuando conducían un vehículo cargado de explosivos en noviembre de 1946. Aunque los guerrilleros eliminaron a los guardias civiles que les echaron el alto y pudieron escapar, el episodio desencadenó una investigación sistemática entre los restos del maquis madrileño, que todavía en febrero de 1947 seguía con su programa de atentados. En uno de ellos, el realizado contra el Cuartel de la Guardia Civil de Usera, resultó detenido Francisco García Manzanedo «Pelón», lo que permitió completar el rompecabezas subversivo de Madrid. Arrestados más de cincuenta militantes comunistas, en el mes de mayo fueron fusilados en el cementerio de Cuatro Vientos Pedro Sanz Prades, Andrés Núñez Pablo, Fernando Bueno Sabaro, Ángel Blázquez, Antonio Criado Cano y Anacleto Celada. También anotar la baja de «Félix», ametrallado por la policía, que le había tendido una trampa. Pero la gran «matanza legal» se produjo el 26 de agosto de 1947, ya que en el cementerio del Este madrileño las autoridades judiciales de la dictadura impulsaron la ejecución de 21 antifranquistas. Sólo se libraron del cadalso una mujer, Juana Doña, y un menor de edad, Eugenio Moya^[291].

A las bajas en la resistencia urbana, había que añadir la sucesión de caídas y muertes que se producían en el partido, ahora en manos de los jóvenes comunistas. Un golpe económico en las oficinas de Auxilio Social permitió a la policía desmantelar la guerrilla juvenil comunista, y sirvió además para ejecutar al único adulto del grupo, Jerónimo Marchena, fusilado en julio de 1947. El golpe definitivo, empero, se consumó con la ejecución de 12 comunistas (ocho según algunos autores) en julio de 1947 en la cárcel de Ocaña. El pretexto para asesinarlos legalmente fue la acusación de haber volado un polvorín de Alcalá de Henares, suceso que había ocasionado la muerte de 26 personas. El fiscal no aportó pruebas de esa complicidad, y la explosión accidental de polvorines era un hecho habitual durante esos años. Para el franquismo, no obstante, la existencia o no de pruebas era una cuestión secundaria si con ello lograba extirpar del cuerpo social el comunismo, una de sus obsesiones permanentes^[292].

La guerrilla urbana en Barcelona y otras ciudades

A partir del verano de 1944, Cataluña se convirtió en lugar de paso para los maquis que entraban en tareas de jalonamiento como paso previo a las invasiones pirenaicas y aquellos que, un año después, cruzaban territorio catalán para enlazar con las guerrillas del interior. Algunos de estos grupos pretendieron trasladar también el movimiento insurreccional a Cataluña en general y a Barcelona en particular, ciudad

que aparecía en el imaginario de los antifranquistas como emblema del movimiento obrero y a la vanguardia ideológica de España. No resultó sorprendente, por tanto, que empezaran a merodear por toda Cataluña una serie de partidas formadas por veteranos de la Resistencia francesa. Eran grupos reducidos, de entre seis y doce efectivos, que no contaban con puntos de apoyo previamente establecidos y que verificaron sobre el terreno cómo las teorías propagadas por los medios del exilio nada tenían que ver con la realidad española. A su paso no se producían levantamientos populares, sino que, por el contrario, muchos campesinos corrían a avisar al cuartelillo más próximo apenas abandonaban pueblos y masías. Las infiltraciones prosiguieron entre octubre de 1944 y 1945, aunque durante este último año el número de los que penetraron por Cataluña descendió de manera drástica. Un grupo de guerrilleros provenientes de Francia asaltó en el mes de agosto de 1944 la fábrica de cervezas de la empresa Moritz. El 14 de octubre ya estaban todos ante un consejo de guerra, que condenó a varios de ellos a la pena capital: José Perarnau, Leocadio Ruiz Faraco, César Samarriba, José Ramón Álvarez, Vicente Badía y Luis Vitini Flores. Este último era hermano de José, primer dirigente significativo de la guerrilla urbana madrileña, ejecutado en la capital al año siguiente^[293].

Uno de los primeros movimientos orgánicos con respecto a la guerrilla lo llevaron a cabo los jóvenes de la JSUC, que habían lanzado la idea de fomentar la lucha armada en la ciudad de Barcelona mediante la creación de L'Agrupació Guerrillera de Catalunya. En la primavera de 1945, una serie de miembros de las juventudes comunistas catalanas —Eduard Segriá, Joan Arévalo y Francesc Serrat «Cisquet», entre otros— trataron de llevar a la práctica esas teorías, pero a partir de mayo empezaron las caídas y los tres jóvenes guerrilleros citados anteriormente fueron condenados a muerte y ejecutados el 25 de febrero de 1946. No obstante, el primer intento formal de articular una resistencia guerrillera comunista en Barcelona se realizó a partir de abril de 1945, cuando enviaron de Toulouse un grupo dirigente para que agrupara a los guerrilleros que habían conseguido eludir el cerco de Arán. La 1.^a Brigada Guerrillera —también llamada Agrupación Guerrillera de Cataluña— estaba dirigida por Josep Bru, y el mando de las actividades armadas lo asumieron Moisés Hueso, Miguel Núñez González y José Aymerich, teniente coronel de las FFI y con una vasta trayectoria militar en la Resistencia francesa. Pero los responsables de este ejército guerrillero de Cataluña, destinado a practicar la resistencia urbana, fueron arrestados rápidamente. Entre los casi doscientos detenidos destacaban Hueso y Aymerich, Juan Cuadrado, Antonio Hidalgo, Atilano García, Pedro Romeral y Tomasa Cuevas. El comunismo catalán había quedado prácticamente desarticulado^[294].

En 1946, el PSUC efectuó un segundo intento de imponer la lucha armada en la ciudad de Barcelona y puso en funcionamiento una nueva Agrupación Guerrillera de

Cataluña integrada por la 1.ª Brigada Jaime Girabau (mandada por Numen Mestre) y la 2.ª Brigada Guerrillera (al frente de la cual estaba Jaume Valls Sarda). La jefatura efectiva del ejército guerrillero catalán correspondió a Pedro Valverde Fuentes, siendo nombrado comisario Ángel Carrero Sancho. Durante 1946 y parte de 1947 efectuaron una serie de acciones en la ciudad condal, normalmente contra los edificios de Falange, las vías férreas y también atacaron el monumento de la Victoria, además de asaltos a comercios. La acción más significativa tuvo lugar el 29 de noviembre de 1946, cuando una bomba colocada en la sede de *La Prensa y Solidaridad Nacional*, los periódicos falangistas de Barcelona, ocasionó la muerte de dos trabajadores y de una mujer que pasaba por la zona del atentado. Pero la policía cayó contra el PSUC y sus organizaciones armadas y políticas con más intensidad que en 1945. Las detenciones masivas no sólo afectaron a las dos brigadas guerrilleras, sino también a la infraestructura de todo el partido. Entre los días 13 y 14 de octubre de 1948 se llevó a cabo un consejo de guerra contra 78 personas. El resultado fueron ocho condenas de muerte, cuatro de ellas conmutadas y cuatro cumplidas el 17 de febrero de 1949 en el Campo de la Bota: Numen Mestre Ferrando, líder de la Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) en Cataluña, y Joaquín Puig Pidemunt, editor de *Treball* y responsable de la Delegación del CC del PSUC, además de Ángel Carrero y Pedro Valverde^[295].

Pero al mismo tiempo que proseguían las acciones de las guerrillas urbanas y rurales potenciadas por el PSUC, se acentuaban las fricciones entre las direcciones del PCE y el PSUC, tanto en el interior como en el exilio, donde el nacionalista Joan Comorera (que preconizó después de la guerra el impulso de las guerrillas) intentó organizar no solamente una resistencia urbana sino también un maquis rural para conectar con la AGL, y cuyo intento más visible había sido la creación de una partida en la sierra tarraconense del Montsant. El resultado se concretó en la crisis orgánica entre los dos partidos hermanos, y por medio de la cual el PCE, que ni entendía ni aceptaba el modelo nacionalista, pretendió absorber al PSUC. Ese intento no era una decisión original del nuevo Buró Político, controlado por Pasionaria y Carrillo, sino que había comenzado con Monzón quien, a través de Pere Canals —que luego sería «depurado» por los ortodoxos—, había iniciado el intento de asimilación del PSUC en el verano de 1944. Finalmente, el intento de Comorera de independizarse del partido se saldó con su separación del cargo de secretario general, primero, y con su expulsión del partido, después. Tanto el PCF como el Kominform apoyaron al PCE contra las tesis de Comorera. En 1950, el PCE, por mediación de Ignacio Gallego, declaró traidor al líder comunista catalán. Atacado por su hija, esposa del anticomorerista Wenceslao Colomer, y acusado de la caída de López Raimundo cuando aún no había llegado a España, Comorera estuvo a punto de ser ejecutado, según Líster, cuando cruzó la frontera con destino a España en 1951: le salvó el

cambio de itinerario. Repudiado por sus compañeros y sin una red de apoyos, fue detenido en 1954. El propio PSUC le seguía acusando de ser un agente de la policía. Juzgado en 1957, Comorera murió, en 1958, en la cárcel de Burgos^[296].

Pero estas cuestiones políticas trascendían la práctica de la guerrilla urbana comunista en Barcelona, que había desaparecido como tal a partir de 1947. Otros proyectos ideados para Bilbao y Valencia, apenas pasaron de un estado embrionario. En Valencia actuaron hasta 1946 algunos grupos de acción, y entre los hombres que participaron en ellos destacamos a José Corredor «Pepito el Gafas» y Florián García «Grande», que posteriormente ocuparon cargos relevantes en la AGLA. Tampoco les fue mejor a los comunistas el intento de alimentar a partir de 1945 una guerrilla urbana en la ciudad industrial de Bilbao, para lo que enviaron a Victorio Vicuña «Julio Oriá». Lo único que consiguió fue dificultar los intentos de reorganización del PCE de Vizcaya, y el propio Vicuña ha explicado que «eran continuas las caídas de la organización». En 1946 se produjo un segundo intento de estabilizar una resistencia armada vasca. Para ello, Vicuña utilizó a una parte de los miembros de la Brigada Malumbres santanderina —Mateo Obra, Saturnino López, Mateo, Miñón y Carballo—, que se instalaron en una mina abandonada en las proximidades de Basurto (Vizcaya) desde la que efectuaron una serie de sabotajes y golpes económicos. Pero las fuerzas de represión lograron en 1946 identificar a Carballo, muerto en un enfrentamiento en el que también detuvieron a Mateo Obra. La posterior detención de Saturnino López terminó de arruinar el frágil entramado comunista de la zona.

También hubo un intento de guerrilla urbana en la ciudad de Granada, con dos características peculiares: sus integrantes eran anarquistas y la partida principal estaba integrada por cuatro hermanos. En efecto, Antonio, José, Pedro y Francisco Quero Robles «Los Quero» participaron a partir de 1941 en la resistencia armada. Después de una temporada con la cuadrilla de Juan Francisco Medina «Yatero», los hermanos Quero (la partida fue iniciada por Antonio y José, y luego se incorporaron Francisco en 1943 y Pedro en 1945) se independizaron y llevaron a cabo sus numerosas y violentas acciones en la capital granadina y sus alrededores. Tenían sus bases en el barrio del Albaicín y en las cuevas de Sacromonte, y pese al apoyo de familiares, amigos y simpatizantes, los cuatro hermanos —José (1944), Pedro (1945), Francisco (1946) y Antonio (1947)— murieron en la lucha contra la dictadura^[297]. Finalmente, en la ciudad de León se produjo un hecho singular, por cuanto la resistencia urbana la llevó adelante un solo hombre, y ello nos sirve para evaluar la repercusión de esta modalidad de lucha como elemento propagandístico contra el franquismo. Aunque en la provincia funcionó desde 1942 una guerrilla organizada en el oeste y en las montañas al norte de la capital se vertebraron tres partidas de huidos de obediencia libertaria y socialista que adquirieron un importante desarrollo, la prioridad absoluta de las autoridades franquistas en la provincia de León era acabar

con las andanzas de un maquis llamado Manuel Ramos Rueda, que se convirtió en el enemigo público número uno de los aparatos de represión y las autoridades locales. Una tupida red de enlaces lo hacía prácticamente invulnerable, pese a que actuaba con reiteración: atentados con muertos, sabotajes y asaltos a los pueblos de la periferia. Incluso se las arregló para robar una máquina Boston de pedal y luego unos tipos en la imprenta Valderas, con los que pudo editar el periódico *Lucha*. Como escribe Tomás Cossías: «Durante algún tiempo, mantuvo en jaque a las fuerzas armadas, realizando actos audaces que probaban hasta dónde era capaz de llegar un individuo profundamente impregnado de comunismo». A partir de agosto de 1948 se perdió la pista del guerrillero leonés (todos los testimonios coinciden en que huyó a Francia), que a veces parecía sostener un pulso más personal que político contra las fuerzas de represión. De todos modos, Ramos Rueda —comunista que venía del anarquismo— se convirtió en un personaje legendario en la ciudad de León, una especie de contrahéroe que, en plena represión, campaba a sus anchas por la ciudad. A partir de ahí se fue creando la épica de Ramos: se decía que retaba en las afueras de la ciudad a la policía, que comía en los bares y en las mesas dejaba escrito su nombre, que en cierta ocasión había pasado revista a números de la Guardia Civil disfrazado de capitán. En fin, una mitología que se repitió, por lo demás, en todos los territorios de maquis con alguno de ellos. Personaje singular, sin duda. Importante sobre todo para una reflexión retrospectiva: un guerrillero en la ciudad de León era capaz de preocupar más a las autoridades franquistas que cien hombres organizados en los montes de la provincia.

La guerrilla anarquista en Cataluña (1945–1949)

La guerrilla de posguerra estuvo hegemónizada por los comunistas. En Cataluña, no obstante, se desarrolló entre mediados de los cuarenta y los sesenta una resistencia de perfiles singulares, por cuanto quienes la impulsaron fueron los anarquistas y también por su condición de movimiento altamente combativo. El guerrillero Massana proporcionó algunas pistas para entender la determinación de los grupos anarquistas: el «espíritu de rebeldía contra una situación impuesta» y su corolario: «las atrocidades que presencié me obligaban a dar una respuesta»^[298]. Y la réplica la practicaron individualmente o en pequeños grupos, reflejo tal vez de la cultura insurreccional libertaria. Los guerrilleros anarquistas eran conscientes de que sus acciones difícilmente modificarían las relaciones de poder y, pese a que su apuesta se presentaba como anacrónica, decidieron actuar con una mezcla de voluntad de victoria y quimera alucinada. Semejante actitud chocó contra el recelo de la organización confederal en el exilio y después con la hostilidad abierta de los

dirigentes libertarios instalados en un destierro atravesado de pasividad y conformismo, y que tranquilizaban su mala conciencia mediante la crítica a los métodos empleados por sus correligionarios. Era un ejemplo acabado de lo que Téllez Solá, el máximo especialista en la resistencia libertaria, ha denominado la «burocracia comiteril».

Las primeras partidas rurales de obediencia anarquista en Cataluña se acomodaron en el Llobregat alto y medio. La más famosa de los años cuarenta fue la dirigida por Marcelino Massana Bancells «Pancho», mediopensionista en los Hermanos de las Escuelas Cristianas, mecánico de profesión y teniente de infantería del Ejército de la República durante la guerra civil. Como la mayoría de los militares republicanos después de la contienda, Massana se convirtió en visitante asiduo de cárceles, tribunales especiales y cuartelillos de la Benemérita. En estos últimos, los guardias civiles se «distrían» de cuando en cuando apalizándolo. Nada excepcional en el listado de las vejaciones a las que fueron sometidos los derrotados de la guerra. Cansado de un presente de humillaciones que además negaba expectativas al futuro, Massana —quien incluso no ha tenido reparos en autocalificarse como «bandido generoso»— decidió enfrentarse al aparato represivo del franquismo en las comarcas de Bergadà, Solsonès y Vallés. En agosto de 1945, entró en Cataluña con un grupo de siete hombres. Más realista que los maquis procedentes de Francia y que ignoraban lo que ocurría en el interior de España, Massana y sus amigos no se presentaban como libertadores del país sino como *passeurs* y contrabandistas. Sabía que, para unos campesinos atezados por el miedo, los contrabandistas resultaban menos comprometidos que los guerrilleros. El grupo se especializó en sabotajes contra las torretas metálicas de conducción eléctrica, utilizando para ello pastillas de plástico y los correspondientes detonadores que traían de Francia. También inauguró oficialmente una táctica que repetirían después los demás grupos de acción anarquistas, y que consistía en realizar una serie de acciones subversivas y repasar la frontera. Acompañado de Antonio Torres «Gachas», Jorge Pons «Tarántula», Jaime Puig «Tallaventes» y José Pérez Pedrero «Tragapanes», entre otros, realizó numerosos secuestros, atracos y sabotajes durante varios años. Evitaron en todo momento causar bajas a la Guardia Civil, salvo cuando el precio era la propia vida, ya que atentar contra guardias civiles no era operativo: el régimen los sustituía sin dificultad y, además, aumentaba la represión. En el verano de 1950 Massana —que siempre se comportó como un pragmático— efectuó la última incursión en España. En su explicación de por qué abandonó la lucha, ha confesado que lo hizo porque la confederal se desentendió de los maquis y porque había libertarios que no se jugaban la vida desde 1939, pero que iban diciendo «que más que un guerrillero, era un atracador que se estaba haciendo millonario»^[299].

El verdadero impacto de la subversión libertaria en Cataluña, no obstante,

procedió de la resistencia urbana, cuyo desarrollo se centró casi exclusivamente en la ciudad de Barcelona. Pero la fractura que desde 1943 existía en el Movimiento Libertario Español (MLE), entre «colaboracionistas» y «reformistas», y entre el interior y el exilio, afectó negativamente al desarrollo de la resistencia. Así, se producía el contrasentido de que mientras Federica Montseny, ministro durante la República, se exhibía como guardián de las esencias anarquistas, los cenetistas de la ANFD superaban a los propios dinásticos en su profesión de fe monárquica. Ante la presencia de los grupos armados, la actitud del MLE se limitó hasta 1953 a «entregar armas, documentación y explosivos» a los grupos de acción. No existía una cobertura orgánica y tampoco respaldo teórico para las acciones de sus militantes que, en la mejor tradición anarquista, practicaban el libre albedrío armado: grupos como «Los Maños», «Los Anónimos» o «Talión» empezaron a actuar en la ciudad de Barcelona. Según Téllez, los planteamientos de los dirigentes «fueron actividades estériles que consumieron a los mejores hombres del movimiento libertario, derrocharon los escasos medios existentes e imposibilitaron la creación de organismos eficientes capaces de desarrollar la ofensiva a base de objetivos concretos, inmediatos y escalonados». En consecuencia, los combatientes anarquistas no solamente tuvieron que luchar contra las fuerzas de represión de la dictadura, sino también contra su propia organización. A finales de 1947, solamente el Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Cataluña apoyaba la resistencia de inspiración anarquista. El segundo congreso de las organizaciones libertarias, celebrado entre los días 20 y 29 de octubre de 1947 en Toulouse, no sólo se desvinculó todavía más de los movimientos armados sino que, por ejemplo, los delegados enviados por los movimientos de resistencia (José Luis Facerías, Francisco Ballester Orovitg «Explorador» y Manuel Fernández Rodríguez) fueron rechazados como tales por los congresistas. En realidad, eran pretextos para marginar a los libertarios armados y los propios dirigentes del exilio terminaron interiorizando la versión franquista: eran pistoleros que se reclamaban anarquistas. En el mejor de los casos, «blanquistas» o «militaristas» que dificultaban las relaciones de los confederales con la facción moderada del exilio republicano^[300].

A la altura de 1945, se inició en la resistencia urbana el más conocido guerrillero catalán, Francisco Sabaté Llopart «Quico», que trabajaba de fontanero en la localidad francesa de Prades y, al mismo tiempo, hacía de *porteur* de quienes huían de los nazis. Temerario, desconfiado y con una suerte infinita. Había participado en la insurrección anarquista de diciembre de 1933, que proclamó el comunismo libertario en Hospitalet del Llobregat. Durante la guerra mató al responsable político comunista de la brigada, el comisario Ariño, y estuvo preso en una checa, de la que posteriormente se dedicó a rescatar a confederales y poumistas. Pasó por el campo de concentración de Vernet d'Ariège finalizada la guerra, y la primera vez que entró en

España después de la contienda, lo hizo para guiar y proteger a una delegación cenetista. Lo acompañaban Jaime Parés Adán «Abisinio» y Juan Salas Millón «Roget», responsable este último de que Sabaté retomara el camino de la lucha antifranquista. Llegaron hasta Hospitalet, contactaron con los grupos libertarios y efectuaron los primeros golpes económicos. En uno de ellos, dejaron escrito su mensaje: «No somos atracadores, somos resistentes libertarios. Lo que nos llevamos servirá para dar de comer a los hijos de los antifascistas que habéis fusilado y que se encuentran abandonados y sufren hambre. Somos los que no hemos claudicado ni claudicaremos y seguiremos luchando por la libertad del pueblo español mientras tengamos un soplo de vida»^[301]. También se dedicaron a reconstruir puntos de apoyo, tanto en Barcelona como en el campo, y a distribuir depósitos de armas. Alcanzados los objetivos, regresaron a Francia. Otro elemento destacado desde el principio de la resistencia fue José Luis Facerías «Face», quien desde 1939 había sido huésped involuntario de cárceles y campos de concentración, y que fue liberado en 1945. Camarero de profesión, su fama fue comparable a la de «Quico» Sabaté y ocupó la secretaría general del Movimiento Ibérico de Resistencia (MIR), luego transformado en el Movimiento Libertario de Resistencia (MLR), que tenía como objetivo encuadrar a los grupos de acción libertarios y que fue disuelto en febrero de 1948.

La muerte de «Abisinio», acribillado a tiros el 8 de mayo de 1946 cuando entraba en su casa barcelonesa, inició simbólicamente el importante listado de muertos confederales. En las bajas libertarias influyeron sobremanera las actividades de los confidentes policiales al servicio del jefe de la BP-S, el comisario Eduardo Quintela Bóveda, que había conseguido atraerse a dos anarquistas relevantes, Elíseo Melis Díaz y Antonio Seba Amorós. En la posguerra, Melis, auxiliado por Seba, había logrado dominar el comité regional de Cataluña de acuerdo con el comisario Quintela, el máximo responsable de la lucha antiguerrillera en Barcelona junto con Pedro Polo Borreguero, que estaba al frente de la brigada de servicios especiales de la policía. El corolario de esas infiltraciones fueron las detenciones continuadas de militantes anarquistas, incluidos comités en pleno. Como consecuencia de las sucesivas caídas, los confidentes se convirtieron en un objetivo prioritario de los resistentes confederales. El 12 de julio de 1947, un grupo encabezado por José Pareja Pérez, al que acompañaban Antonio Gil Oliver, José Villegas Izquierdo, Pedro Adrover, Ramón González Sanmartí, Barrachina y otro libertario, ejecutó a Melis (aunque, en un descuido, el confidente mató a Pareja). Hasta febrero de 1949 los anarquistas no atentaron contra Antonio Seba Amorós, acción que llevó a cabo el grupo de «Los Maños» (integrado exclusivamente por aragoneses y dirigido por Wenceslao Jiménez Orive «Wences»). El chivato fue tiroteado en un café y, aunque sólo resultó herido, a partir del incidente abandonó Barcelona. Después de matar a Melis y del atentado fallido contra Seba, los libertarios consiguieron ponerse de

acuerdo para eliminar al perseguidor por excelencia de los anarquistas, el comisario Quintela. La fecha quedó fijada para el 2 de marzo de 1949 y participaron en la acción los hermanos Francisco y José Sabaté Llopart, Carlos Vidal, Mariano Aguayo, Wenceslao Jiménez Orive, José López Penedo y Simón Gracia. La fortuna estuvo del lado de Quintela. Aunque su coche fue repetidamente ametrallado, ese día ocupaban el vehículo Manuel Piñol Ballester, secretario del Frente de Juventudes del distrito universitario, y José Tella Bavoy, jefe de deportes del mismo organismo. Murieron Piñol y el chófer, Antonio Norte Juárez, mientras que Tella resultó herido. Por su parte, «Los Maños» se desplazaron a Madrid en abril de 1949 con el propósito de atentar contra Franco^[302].

El año crucial de este periodo para el conjunto de la resistencia libertaria en Cataluña fue 1949. Acciones y caídas proliferaron por igual, ya que coincidieron en Barcelona el máximo número de guerrilleros anarquistas. Los golpes económicos menudearon, y las recaudaciones eran importantes: entre 100 000 y 400 000 pesetas en muchos casos, lo que produjo acusaciones de enriquecimiento, aunque no disponemos de indicios de que libertario alguno efectuara atracos para su propio lucro. Existe un testimonio contundente para demostrar lo contrario, y es que, frente a los que lanzaban insinuaciones desde la pasividad, los resistentes anarquistas terminaron entregando su vida en la lucha contra el franquismo. Abandonados por una CNT administrativista, necesitaban importantes cantidades de dinero para editar periódicos y octavillas, comprar armas y munición, amén de auxiliar a los presos y represaliados libertarios. Pero los grupos de acción anarquistas no descuidaron las operaciones de sabotaje y propagandísticas. El 15 de mayo de 1949, Sabaté explotó pequeños artefactos en los consulados de Brasil, Bolivia y Perú, con el fin de llamar la atención sobre el régimen franquista. El 3 de junio Pedro Adrover colocó una bomba en un altar de la catedral de Barcelona, causando el pavor correspondiente, ya que era a media mañana, y a los pocos días atacaron el Palacio de Justicia. Incluso amenazaron con matar al jefe superior de Policía y volar la Jefatura, situada en la Vía Layetana. Para conmemorar a su modo el 18 de julio, el mismo Adrover siguió colocando artefactos explosivos en la capital catalana aunque fue sorprendido cuando lo intentaba en el Banco Español de Crédito de la Plaza de Cataluña. Obligado a huir y a deshacerse de la bomba, la depositó en una farola y la explosión mató a un transeúnte que pasaba por allí accidentalmente. En agosto de ese año, Facerías atracó dos *meublés* con el fin de conseguir documentación para la lucha y el 12 de julio el mismo Facerías había logrado un botín de 600 000 pesetas mediante el atraco a la joyería Rudolf Bauer y a la fábrica de automóviles Eucort. Para completar la operación, llevaron a cabo diversos tiroteos contra comisarías, policías y todo tipo de objetivos sensibles del franquismo. La intención era «mantener el clima de inseguridad» y Barcelona, en efecto, parecía recuperar una nueva fase del

«pueblo en armas», expresión querida de los anarquistas. Durante varios meses, la capital catalana respiró un clima de intranquilidad motivada por las acciones subversivas de los libertarios. Todos estos incidentes provocaron la destitución del jefe superior de Policía, Manuel Chinchilla, relevado por José María Rodríguez Albert^[303].

Los anarquistas catalanes también pagaron su ofensiva con un importante número de bajas. El 19 de marzo de 1949, por ejemplo, fue herido gravemente y detenido José López Penedo, aunque José Sabaté, que lo acompañaba, consiguió escapar al cerco. López Penedo fue juzgado y condenado el 16 de noviembre de 1949, y fusilado en Barcelona el 4 de febrero de 1950 junto con Carlos Vidal Pasanau, que había participado en el atentado fallido contra Quintela. El 3 de junio se suicidó Francisco Denís Diez «Catalá», uno de los guías anarquistas más experimentados. Después de ser detenido, optó por quitarse la vida para escapar a los interrogatorios y tal vez verse «obligado» a delatar a sus compañeros. En mayo, la policía consiguió detectar al grupo de Facerías y en una emboscada murió uno de sus integrantes, Guillermo Ganuza Navarro. El día 26 de agosto, en una celada de la Guardia Civil en los límites con la frontera francesa, murieron otros dos miembros del grupo de Facerías, Celedonio García Casino «Celes» y Enrique Martínez Marín «Quique». A finales de 1949 los guerrilleros anarquistas llevaron a cabo otra ola de atentados y sabotajes, con la correspondiente psicosis de inseguridad para las autoridades barcelonesas, y el hecho se debió a la coincidencia en Barcelona de varios grupos de acción, entre ellos «Talión», encabezado por Julio Rodríguez «Cubano». Pero el inventario de muertes también aumentaba imparablemente. A primeros de octubre perdieron la vida muy cerca de la frontera Cecilio Galdós García, Carlos Cuevas y Oltra. El día 21 de octubre fue detenido Miguel García García y, días más tarde, Jaime Albama Morell, en el barrio chino de Barcelona. También el día 21 cayó abatido por las balas policiales «Cubano» y ese mismo día la policía cazaba a Víctor Espallargas «Viejo» y a José Luis Barrao «Pepe el Largo», que iban desarmados. Simultáneamente, las fuerzas de represión incrementaron la aplicación de la «ley de fugas» en la propia ciudad condal: el 21 de octubre —jornada fatídica para los confederales— fue ejecutado por ese sistema Francisco Martínez Márquez «Paco». Además de las ejecuciones, menudearon los arrestos de libertarios. El año 1949, y especialmente los meses de octubre y noviembre, pasaron a la historia de la resistencia confederal como una época de devastación y muerte. El juicio por las detenciones de finales de 1949 se celebró el 6 de febrero de 1952, y se dictaron nueve condenas de muerte. Cinco de ellas fueron ejecutadas: el 14 de marzo, a Pedro Adrover Font, José Pérez Pedrero, Santiago Amir Gruañas, Ginés Urrea Piña y Jorge Pons Argilés^[304].

También había malas noticias para «Quico» Sabaté, que, el 23 de noviembre de

1948, fue condenado a tres años de cárcel por un tribunal correccional de Céret (Francia) por «tenencia ilícita de armas y explosivos». Tampoco algunos episodios familiares le resultaban especialmente estimulantes. En el mes de septiembre de 1949, había entrado en España un grupo conducido por Ramón Vila Capdevila «Caraquemada» y en la partida venía Manuel Sabaté Llopart, hermano menor de Francisco y José, que estaba al margen de la resistencia (sus hermanos además no eran partidarios de que participara en la misma). El grupo tuvo un encuentro con fuerzas de la Benemérita y Manuel, un inexperto, resultó detenido en la refriega. Juzgado y condenado a muerte, fue fusilado el 24 de febrero de 1950 en el Campo de la Bota. Acompañó en el cadalso al menor de los Sabaté el libertario Saturnino Culebras Saiz «Primo». Un mes después de la detención de Manuel, «Quico» recibió la noticia de la muerte de su otro hermano, José, abatido el 17 de octubre de 1949 en una emboscada. La desaparición de sus hermanos fue el argumento utilizado por Federica Montseny para descalificar la acción subversiva de «Quico», aduciendo que confundía ideales con venganza. Una explicación similar utilizó años después Marcelino Massana: «Creo que vivió excesivamente obsesionado por la muerte de sus hermanos José y Manuel. Sus muertes le impedían aceptar el sosiego y su destierro en Dijon»^[305].

El final de la resistencia libertaria (1949–1963)

Las sucesivas muertes de compañeros, amigos y familiares no amedrentaron a los libertarios que habían apostado por la lucha armada, aunque la década de los cincuenta se inició de manera trágica con la baja de uno de los guerrilleros más representativos, Wenceslao Jiménez Orive «Wences», cabeza visible de «Los Maños». Herido gravemente por la policía el 9 de enero de 1950, optó por ingerir una dosis de veneno antes que entregarse. Como todos los miembros del grupo, «Wences» llevaba preparados 20 centigramos de veneno en la parte superior de una pluma estilográfica para eludir su detención. Otros dos miembros de la partida de procedencia aragonesa fueron detenidos ese mismo día: Plácido Ortiz y Simón García, así como un tercer hombre que hacía de enlace, Victoriano Muñoz Treserras. «Los Maños» se encontraban en Barcelona con la intención de atentar de nuevo contra Quintela. La policía, sin embargo, conocía sus pasos, y los estaba esperando. El responsable de la confidencia a las fuerzas represivas había sido un compañero, Niceto Pardillo Manzanero^[306].

Desaparecidos en 1949 varios grupos de acción anarquistas y desarticulado el de «Los Maños» en enero de 1950, los anarquistas partidarios de la resistencia iniciaron la década de los cincuenta con dos grupos de acción básicos, los que encabezaban

Facerías y «Quico» Sabaté, además de las «campanas» de Vila Capdevila en la Cataluña rural. Acosados por las fuerzas represivas de España y Francia, reclamados también por la justicia de ambos países y orillados por la organización depositaria de las ideas por las que combatían, decidieron continuar la lucha a pesar de todo. El 19 de marzo de 1950 el grupo de Facerías resultó detectado por la Guardia Civil en Santa María de Montcada después de un golpe económico, y en el enfrentamiento murió Franquesa. En el mes de junio de 1951, Facerías regresó a Barcelona, pese a que los problemas con la organización confederal continuaban acentuándose hasta la ruptura, y el 19 de julio fue eliminado por la policía su compañero Saborit en un trolebús barcelonés. El 21 de octubre de 1951 Facerías asaltó el «*meublé* Pedralbes», donde, después de un forcejeo, mató a un cliente, Antonio Masana Sanjuán, importante hombre de negocios franquista que se encontraba en compañía de una sobrina menor de edad. Los *meublés* constituían lugares excelentes para conseguir dinero, documentación y evitar los chivatazos a la fuerza pública. Nadie denunciaba una extorsión realizada en un casa de citas^[307].

Por su parte, «Quico» Sabaté, una vez cumplida la condena de confinamiento en Francia, decidió que la mejor respuesta a la pasividad confederal consistía en multiplicar las actividades en Barcelona. A principios de 1955, fundó la Federación Ibérica de Grupos Anarcosindicalistas. «Cultura y acción» era el lema: todo un programa. Pero la burocracia confederal —en nombre de «los intereses superiores de la organización»: frase definitiva— le exigió que retirara el nombre de Federación Ibérica, orden que acató pese a la ruptura con la organización. A partir de ese año, resultaba evidente que «Quico» Sabaté, el hombre de acero, había roto cualquier ligazón con unas agrupaciones libertarias que rechazaban sus posiciones y que la lucha contra el régimen sólo finalizaría con su muerte. Poseído por la verdad absoluta, Sabaté caminaba en línea recta hacia un espejismo que mostraba alternativamente imágenes de victoria y de muerte. Aparte de arruinar su vida familiar —una mujer y unas hijas abandonadas en Francia: «la revolución está en marcha»—, Sabaté desplegó una actividad febril contra el régimen franquista, tanto en acciones armadas continuadas como en un bombardeo propagandístico sin precedentes, para el que incluso diseñó un mortero que servía para lanzar octavillas y que utilizó con motivo de la visita de Franco a Barcelona el 28 de septiembre de 1955. El dinero «expropiado» lo empleaba en la causa de la revolución. Austero como libertario intransigente, nadie percibió en Sabaté signos de opulencia, y su compañera, Leonor Castells Martí, sobrevivió en Francia fregando suelos. El solidario Sabaté era dadivoso solamente con los protagonistas de la revolución: nadie podría decir que se había enriquecido en el combate contra el franquismo. También hizo llamamientos para la unión de todas las fuerzas antifranquistas, a excepción de los comunistas. Pero toda una vida dedicada a la causa no le sirvió a Sabaté para

cicatrizan la herida que peor llevaba, como era la indiferencia o la hostilidad de la organización confederal, que lo sancionó una vez más en el pleno de gestión de julio de 1956, cuatro años antes de su muerte, tachándolo de «inmoral»^[308].

En el año 1956, «Quico» consiguió contactar con Facerías, que residía en Italia desde 1952 y permanecía inactivo desde un año antes. Como creyentes excomulgados, los dos heterodoxos se aprestaron a ofrendar sus vidas por lo que definían como ideales libertarios. Facerías, menos radical que Sabaté, efectuó un último intento de asegurarse el respaldo confederal antes de entrar en España pero sólo «encontró mucha gente amante de las frases pulidas y deseosa de prolongar la siesta», según expresión de Téllez Solá. Cuando Sabaté se enteró de esos contactos, ya en la capital catalana, rompió definitivamente con su compañero y lo abandonó a su suerte en Barcelona, una ciudad de la que «Face» llevaba ausente varios años y en la que apenas mantenía enlaces. Impermeable a los sentimientos, «Quico» no admitía medias tintas. Si había sido capaz de romper con la memoria de su hermano porque no soportó las torturas y confesó a la policía, tenía menos motivos para transigir con un compañero. Facerías logró alcanzar la frontera francesa con dificultad, aunque el 17 de agosto de 1957 regresó de nuevo a Barcelona —el último viaje— acompañado del italiano Goliardo Fiaschi y de Luis Agustín Vicente. «A Facerías sus amigos le habían preparado el embarco hacia América, donde contaba con amistades sólidas que ansiaban abrazarlo. Pero no, España era para Facerías —como para Sabaté— una llamada fascinadora», escribe Téllez Solá. Cuando el 30 de agosto Facerías acudió a un encuentro concertado, desconocía que sus dos compañeros habían sido detenidos y la policía lo estaba esperando: José Luis Facerías «Face» murió acibillado a balazos. La colaboración entre las policías española y francesa empezaba a rendir sus frutos. Francisco Sabaté Llopart le sobrevivirá apenas tres años^[309].

En el mes de febrero de 1956, Sabaté había presentado la Alianza Democrática de Resistencia Antifranquista (ADRA), mediante la que se dirigía a todos los antifranquistas, con la excepción habitual de los comunistas, y en la que especificaba el objetivo de la misma: el derrocamiento del régimen. El 21 de marzo de 1956 eliminó a un policía que le iba siguiendo, José Félix Gómez de Lázaro y Hernáiz, y seguidamente volvió a Francia: la frontera francesa constituía la referencia del anarquista barcelonés. En noviembre de 1956 regresó a España con Ángel Marqués Urdí y Amadeo Ramón Valledor, que había luchado en la guerrilla antifranquista en León. El 22 de diciembre realizaron un atraco a la empresa Cubiertas y Tejados y consiguieron cerca de un millón de pesetas. Pero Marqués Urdí resultó detenido. Con muchas dificultades, Sabaté y Ramón Valledor, después de permanecer escondidos durante un mes en un piso de la ciudad, lograron llegar a Francia en febrero de 1957, acompañados de una joven amiga del primero. La policía, irritada porque una vez más se les había escapado Sabaté, practicó una durísima represión contra los

elementos anarquistas. Ángel Marqués empezó a colaborar con la policía, y uno tras otro los enlaces fueron cayendo: 44 detenidos solamente en Barcelona. Pero la información de Marqués no sólo afectaba a España sino también a los puntos de apoyo y enlaces de Francia, el «santuario» de un Sabaté al que se le acumulaban los problemas y que empezaba a sentirse incómodo en el país vecino. En Francia existía una orden de captura contra el guerrillero libertario, el MLE lo acosaba para que dejara la lucha armada y además se consideraba responsable de las últimas caídas producidas en Barcelona, incluida la de Marqués. El dinero que le quedaba del asalto a Cubiertas y Tejados lo envió a la organización para paliar en lo posible la catástrofe. Detenido el 12 de diciembre de 1957 en Francia, los jueces lo condenaron a ocho meses de cárcel y cinco de confinamiento. Pasó por las cárceles de Perpignan y Montpellier, y salió en libertad el 12 de mayo de 1958. Le restaban los cinco años de confinamiento, que empezó a cumplir en la ciudad de Dijon. Pero un auto del 5 de noviembre de 1959 lo requería de nuevo para comparecer ante la justicia francesa. Entre la cárcel en Francia y la lucha en Cataluña, decidió continuar la resistencia en Barcelona y desoír los consejos de quienes le pedían que se marchara a América^[310].

La situación de Sabaté era crítica. Al margen de Vila Capdevila, que hacía la guerra por su cuenta en las montañas catalanas, era el único que permanecía abiertamente en la lucha. Las redes de apoyo ya no eran fiables, y existía la certeza de una colaboración estrecha de las policías francesa y española con el propósito de eliminarlo. El biógrafo de Sabaté, Antonio Téllez Sola, sostiene la hipótesis de que la policía francesa tenía bajo estrecha vigilancia al maquis catalán y que le permitía pasar a España para que fuera liquidado definitivamente por las fuerzas de represión franquistas. Desde 1947, los servicios de información franceses pasaban a los españoles informes sobre los guerrilleros instalados en el país vecino: muchos resistentes comprobaron que los estaban esperando al cruzar la frontera. Además, la sede de la CNT estaba infiltrada por los servicios de información franquistas, sobre todo desde la llegada a París del policía Pedro Polo Borreguero, nombrado adjunto de la Embajada española en París. «Quico» Sabaté entró el 17 de diciembre de 1959 en territorio español, y la Guardia Civil ya estaba avisada. No llegaría a Barcelona. Un formidable dispositivo represivo esperaba al sur de los Pirineos al enemigo público número uno del régimen franquista. El 28 o 29 de diciembre atravesó la línea divisoria entre España y Francia. Venían con «Quico» en este último viaje Antonio Miracle Guitart, Rogelio Madrigal Torres, Francisco Conesa Alcaraz y Martín Ruiz Montoya. Después de distintas peripecias, el 3 de enero fueron detectados en el mas Clara, entre Bañólas y Gerona, y allí fueron cercados. Dirigió el asedio el teniente coronel Rodrigo Gayet Girbal, jefe de la comandancia. En el combate murieron todos los compañeros (otros autores defienden que fueron detenidos vivos y que se les aplicó la «ley de fugas»), pero «Quico» consiguió huir herido porque mientras

reptaba intentando alejarse del cerco se «tropezó» accidentalmente primero con una voz que iba repitiendo «no tiréis, que soy el teniente» y luego con su propietario, el teniente Francisco de Fuentes Castilla–Portugal, al que mató de un tiró. Luego siguió arrastrándose en la oscuridad y repitiendo «no tiréis, que soy el teniente». Así logró atravesar los tres cordones policiales: más de cien hombres. El día 4, la policía perdió la pista del huido y, el día 5, al amanecer, subió al tren en la Estación de Fornells de la Selva, a doce kilómetros de Gerona, y cuando estaba en marcha encañonó a los maquinistas y les conminó a dirigirse sin parar a Barcelona. Le explicaron que en Massanet había que cambiar la maquina de vapor por otra eléctrica y que el tren exigía cumplir necesariamente una serie de requisitos. En Massanet cambió de tren y a las ocho de la mañana llegó a San Celoni, cuando ya la policía conocía su situación. Antes de entrar en el pueblo, se había arrojado en marcha para escapar a un recibimiento que suponía mortal. Malherido en una nalga, una pierna y en el cuello, apenas podía mantenerse en pie debido a la fiebre y la gangrena. En busca de un médico, acabó forcejeando con un vecino, Francisco Berenguer Rosa, que advirtió la metralleta debajo de la ropa. Los somatenistas de San Celoni habían sido puestos en alerta y una patrulla integrada, entre otros, por el cabo del somatén local y secretario de la CNS, Abel Rocha Sanz, oyó las voces de Berenguer y entre Rocha y el guardia civil Antonio Martínez lograron acabar con su vida. Eran las 8 de la mañana del 5 de enero de 1960.

Ya sólo quedaba vivo el tercer superviviente, Vila Capdevila. Minero en Sallent, fue el último guerrillero activo contra la dictadura, ya que cuando «Piloto» cayó abatido en 1965 el antiguo maquis gallego apenas se diferenciaba de los «topos» de la posguerra. Ramón Vila Capdevila, natural de Peguera, en la comarca del Bergadá, era conocido en la Resistencia francesa como «Capitaine Raymond» y los compañeros le llamaban «Pasoslargos» y «Jabalí», homenaje a un físico hercúleo y a sus habilidades como *passeur* en las montañas pirenaicas. La familia, por su parte, reivindicaba el apodo de «Maroto», vinculado a la tradición paterna. Para las autoridades franquistas y la prensa de la época, y también para la historia, Ramón Vila Capdevila será siempre «Caraquemada». Alias que, según la explicación familiar, fue debido a un incendio en la casa de los padres y en el que el fuego marcó su rostro para siempre. Otras versiones señalan que fue un rayo quien le quemó el rostro y mató a la madre. Afiliado a la CNT, fue detenido en la insurrección libertaria de Figols en 1932 y utilizó la cárcel para aprender a leer y escribir, algo habitual en los militantes de izquierdas de la época. Perteneció al SIEP en la guerra civil, infiltrándose en las líneas rebeldes por la parte de Zaragoza. Después de huir del campo de concentración de Argeles en 1940, se incorporó a la Resistencia francesa, donde se ganó el respeto de los antifranquistas y fue condecorado por las autoridades militares del país vecino. Según Marcelino Massana: «Él simbolizó para mí lo que debe ser un militante de la

CNT. Combatió a los nazis con éxito y en Francia fue conocido y querido. Pudo disponer de un muy buen trabajo, al que siempre renunció. Combatió al fascismo hasta su último día. Su actitud fue de combate permanente. Fue el mejor de entre nosotros». Ningún superviviente tiene palabras de reproche para «Caraquemada», un hombre calificado de íntegro y honesto por todos. Individualista por excelencia, todos los veranos se acercaba a las inmediaciones de Manresa para realizar sabotajes contra los tendidos eléctricos. Quería dejar constancia de que todavía continuaba la lucha antifranquista^[311].

Localizado en las montañas de Creu de Perelló, a veinte kilómetros de Manresa, Vila Capdevila fue abatido en el camino de Coll de Frons a Balsareny. Más de 200 guardias civiles de la 231 Comandancia de la Guardia Civil cercaban al guerrillero. Resultó mortalmente alcanzado por dos disparos en la madrugada del 7 de agosto de 1963. Uno «afectándole el paquete vásculo–nervioso del cuello; el otro la arteria femoral a nivel del conducto de Hunter, algo por encima de la rodilla, que a su vez, le fracturó el fémur, astillándolo. Murió, pues, de hemorragia», según su biógrafo, José María Reguant. Estuvo agonizando durante cinco horas sin que nadie se acercara a auxiliarlo. Tenía 56 años, y fue enterrado en el cementerio de Castellnou de Bages, un pueblo que no era el suyo. Cinco días antes había volado unas torretas eléctricas de Falç y la Guardia Civil andaba tras sus pasos. Siguiendo los usos de la época, *Diario de Barcelona* del 8 de agosto de 1963 le dedicó una sentencia ejemplar: «Que Dios le haya dado su perdón». Previamente, lo calificaba de facineroso y otros epítetos por el estilo. Pero lo sorprendente no eran los obituarios de la prensa franquista (había convertido la mentira en una industria), que formaban parte de la lógica de la dictadura, sino la actitud de la burocracia libertaria. Como escribe Téllez Solá: «En Francia, nuevamente, sus compañeros de lucha guardaron prudente pero incalificable silencio. Ni una sola voz se levantó para explicar al mundo quién era el caído. El régimen dictatorial de España segó su vida, pero el MLE hizo el trabajo de sepulturero»^[312].

Los últimos guerrilleros

También por el resto del país sobrevivían a partir de 1952, año que clausuró oficialmente el ciclo del maquis rural de posguerra, algunos resistentes. Eran antiguos guerrilleros que no pudieron o no quisieron salir de España, y que serían eliminados sistemáticamente por la fuerzas de represión. Rehenes de su propia historia personal, los últimos guerrilleros vivieron existencias erráticas hasta que una bala cortó la prolongación de su agonía. Se habían situado voluntaria o involuntariamente fuera del tiempo, y las fuerzas de represión los fijarían definitivamente también en los

márgenes del espacio.

Todavía a la altura de 1952, Francisco Bedoya escapó del Destacamento Penitenciario de Fuencarral, en Madrid, con la intención de unirse a la resistencia. ¿Existe alguna respuesta no retórica que pueda explicar el hecho de que un hombre se eche al monte cuatro años después de que haya desaparecido oficialmente la resistencia armada? Tal vez la justicia o la venganza, que en aquel contexto eran lo mismo. La Guardia Civil, después de inacabables ejercicios de hostigamiento, había quemado las cuadras y las reses de la familia Bedoya: el capital de toda una vida. El preso político de Fuencarral, contra toda lógica, decidió equilibrar el terror en los valles de su infancia, hasta entonces dirigido unilateralmente contra sus indefensos familiares. Así empezaban los expropiadores sociales: negándose a aceptar de manera resignada las injusticias de quienes mandaban. Después de alcanzar tierras santanderinas, Bedoya formará con «Juanín» una pareja de leyenda. Pero no eran los únicos antifranquistas en la provincia de Santander. En la primavera de 1953, una delación permitió a la Guardia Civil preparar una emboscada en el monte de Valdediezma (Tresviso) a Quintiliano Guerrero «Tuerto» y a José Marcos Campillo. El primero cayó muerto, mientras que el segundo, pese a resultar herido, logró escapar y esconderse en Lon-Camaleño. Fue el cabo José García quien consiguió dar muerte a «Tuerto», y ese mismo suboficial sería abatido meses más tarde por «Juanín». Pero no fue una represalia, simplemente le había sorprendido atracando en el bar del pueblo en compañía de Bedoya. El cabo García era además amigo de la infancia de Fernández Ayala, y éste disparó a un guardia civil, ignorante de la identidad del mismo. José Marcos consiguió pasar a Francia en octubre de 1955, en compañía de Pedro Campo Campillo y Santiago Rey^[313].

Pero la muerte violenta también acudió a la cita con Juan Fernández Ayala «Juanín», un episodio que ocurrió el miércoles día 24 de abril de 1957 en las cercanías de un molino de Vega de Liébana próximo al río Quiviesa. Cuando el cabo Leopoldo Rollán Arenales disparó contra un hombre que intentaba huir ante los requerimientos de alto, ignoraba que se trataba del guerrillero santanderino, que presentaba cinco tiros, uno de ellos en la yugular, que fue el que acabó con su vida. Al cabo Rollán lo acompañaba en el servicio el número Ángel Agüero Rodríguez, quien también había dado muerte al guerrillero «Joselón». Entre la población de la zona se extendió el rumor de que el disparo partió de Bedoya, que habría pactado la muerte de su compañero a cambio de su propia huida a Francia. Según uno de sus biógrafos, Pedro Álvarez, la maledicencia surgió porque el guerrillero presentaba dos impactos de bala en la cara. No obstante, esos orificios habían sido causados por un miembro de la brigadilla que, cuando vio el cadáver, le disparó dos veces mientras gritaba: «¡Toma, cabrón!». El cadáver del guerrillero santanderino fue atado y apoyado contra una pared para hacerle la correspondiente foto oficial, y lo visitaron

numerosos lugareños, tanto en el escenario de la muerte como en el cementerio de Potes. Exhibir los cadáveres de los guerrilleros en las plazas públicas lo hicieron en numerosas ocasiones: era exactamente lo mismo que se hacía con los lobos cazados en las batidas que se efectuaban periódicamente en las comunidades campesinas. Así, por ejemplo, el cuerpo de «Chato de la Puebla» fue expuesto en la plaza de Navahermosa después de ser fusilado, y en la misma plaza expusieron durante varios días el cadáver de «Rubio de Navahermosa». El cadáver de Manuel López Cabezas «Parrillero» fue mostrado en la plaza de Villanueva de Córdoba y por delante de sus restos hicieron pasar a las mujeres que tenían maridos en la sierra. También el cuerpo del guerrillero asturiano Ignacio Alonso Fernández «Raxau» (al que se le atribuían 14 muertes) estuvo durante doce horas expuesto en la puerta del cine de Sotondio, así como el de Constantino Zapico «Boger» en Sama de Langreo. La lista de maquis muertos cuyos cadáveres fueron exhibidos al público como curiosidad y advertencia resulta extensa. Además de las armas (pistola Astra y subfusil Sten), Fernández Ayala llevaba en los bolsillos 6000 pesetas^[314].

La semblanza de «Juanín», otro enemigo público número uno de los franquistas, también resulta paradigmática para entender la manipulación de la historia de los hombres del monte. En los relatos franquistas de su vida siempre aparecía la crueldad como aspecto angular, y el ejemplo más reiterado era que en su cueva tenía los 28 tricornios y corrajes de los guardias civiles que había asesinado. Tanto los testimonios de la época como los biógrafos no le daban mayor importancia a un relato que formaba parte de una operación destinada a presentarlo como un «bandolero sanguinario». Sin embargo, todavía en 1999, Victorio Acuña «Julio Oria», importante cargo guerrillero enviado por Toulouse, ha enfatizado sobre la autenticidad de la especie. Incluso, para adornar los recuerdos, confiesa que al tricornio y al corraje añadía la fecha en la que había matado al guardia. Además, describe que al lado de la cabaña, tenía vacas, caballos... Pero estas deposiciones exigen una evaluación seria y ser tomadas con las correspondientes cautelas. Mal podría tener «Juanín» una colección de tricornios de guardias ejecutados cuando, según sus biógrafos, sólo mató a uno. Jesús de Cos Borbolla, que coincidió con Fernández Ayala hasta que marchó a Francia en 1947, certifica que fue un rumor lanzado desde sectores represivos para adjudicarle al guerrillero fama de cruel. Tampoco algunos guardias tenían tan mal concepto del maquis: «Habéis de saber que yo a “Juanín” le respeto mucho. Y si vosotros supierais su historia y su genialidad le respetaríais igual. Yo tengo mucho que agradecerle. Me tuvo a tiro bien de veces, pudo haberme matado y no lo hizo. Sabía que al fin y al cabo yo no era más que un pobre guardia. Las circunstancias le obligaron también a él a ser lo que fue», relata un miembro de la Benemérita. Tampoco se hizo rico. Isidro Cicero ha calculado que Fernández Ayala y Bedoya consiguieron 78 651 pesetas entre 1953 y 1957. Una

sencilla operación aritmética nos permite conocer el «presupuesto» anual de los dos guerrilleros^[315].

Muerto Fernández Ayala, el final de Bedoya era una crónica anunciada. Aislado y perplejo, abandonó el valle de Liébana y, como los guerrilleros autóctonos, se retiró a su lugar de origen, Serdio. Privado del auxilio de su compañero, el único objetivo de Bedoya pasaba por la huida a Francia. Fue en este contexto en el que intervino su cuñado, José San Miguel Álvarez, que le preparó la marcha pero en contacto con la policía. En Monte Corona, Bedoya se subió a la motocicleta que conducía su cuñado y tomaron el camino de Francia. Cuatro coches de la BP-S seguían a los huidos y, en un determinado momento, uno de los vehículos policiales se adelantó a la Derby y disparó contra sus ocupantes. San Miguel murió en el acto —la policía se evitaba de ese modo otro testigo incómodo—, pero Bedoya, aunque gravemente herido, consiguió trepar entre las abruptas rocas que flanqueaban la carretera y esconderse en el monte a unos centenares de metros del lugar del suceso. Ocho horas más tarde, fue descubierto por los perros de la policía y falleció de un tiro en la cabeza. Era el 2 de diciembre de 1957, siete meses después de la muerte de «Juanín». Suceso atravesado de claroscuros, se desconoce si el deceso del huido se produjo a consecuencia de un disparo del cabo Fidel Fernández Iñiguez, quien lo encontró, o en realidad fue un suicidio^[316].

En Galicia, cayeron los últimos maquis de la resistencia española: «Piloto» y «Curuxas». No obstante, antes encontraron la muerte José Arias Fernández «Dapena», abatido por la Guardia Civil en Castro-Paradela (Lugo) el 27 de mayo de 1954, y el coruñés Francisco Martínez Leira «Pancho», muerto el 31 de diciembre de 1955 en las proximidades de Pontedeume. José Castro Veiga «Piloto» acabó su periplo frente el franquismo el 10 de marzo de 1965 en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Bugalla-Sabiñao-Chantada después de una delación: llevaba en la resistencia antifranquista 26 años, aunque desde julio de 1949 su forma de vida se aproximaba más a la de un «topo» (vivía con una mujer, Ramona Curto Candal) que a la de un guerrillero. La prensa acompañó su muerte de los adjetivos habituales: «forajido tristemente famoso, célebre asesino y responsable de una partida de malhechores». Además, le calificaban de «ladrón, atracador, asesino y violador». Ninguna referencia a su condición de luchador comunista. «Piloto» fue el último guerrillero español abatido violentamente, aunque un maquis que compitió en fama con «Foucellas» durante años apareció muerto en 1967, dos años después, abandonado su cuerpo inerme en un camino. Se llamaba Ramón Rodríguez Varela y le apodaban «Curuxas», e incluso «Piloto» había pertenecido a su partida en los comienzos de la resistencia. Rodríguez Varela estuvo en el monte desde el comienzo de la guerra civil, abandonó la guerrilla en 1948 y desapareció sin dejar huella a partir de 1951. La autopsia evidenció que había fallecido de un ataque al corazón.

Posiblemente, las personas que lo escondían, para evitarse problemas, abandonaron el cadáver, junto al que depositaron una pistola Astra de 1921 cargada con munición de 1936. Todo un ensayo sobre la política y el tiempo: la metáfora de una derrota. Un año después de la muerte de «Curuxas», el 19 de agosto de 1968, todavía consiguió alcanzar la frontera francesa un antiguo maquis orensano: Mario Rodríguez Losada «Langullo». Llevaba en el monte desde el estallido de la guerra civil^[317].

El 9 de diciembre de 1976 fue arrestado en la localidad malagueña de Genalguacil Pablo Pérez Hidalgo «Manolo el Rubio», que había sido en los años cuarenta uno de los dirigentes de las guerrillas gaditano–malagueñas, fundador de la Agrupación Stalingrado y miembro sobresaliente de la Agrupación Guerrillera Fermín Galán. Como sabemos, llevaba «oficialmente» muerto desde diciembre de 1950, cuando en el registro inscribieron como suyo el cadáver de un compañero. Veintiséis años después de abandonar la lucha armada y uno tras el fallecimiento del dictador, todavía seguía haciendo vida de «topo» en compañía de Ana Trujillo Herrera «Oveja», viuda de un fusilado en la posguerra y hermana de un fallecido en la Resistencia contra los nazis.

Era una secuela de la guerrilla rural que, entre 1936 y 1952, trató infructuosamente de acabar con el régimen franquista.

Una historia abierta

Vladimir: ¿Qué hacemos?

Estragón: Esperamos.

Vladimir: Sí, ¿pero mientras esperamos?

Estragón: ¿Y si nos ahorcáramos?

Vladimir: Sería un buen medio
para que se nos pusiera tiesa.

SAMUEL BECKETT, *Esperando a Godot*

El día 7 de octubre de 1978, se reunieron en la localidad minera de Sallent, histórico bastión de la organización confederal, unos cientos de libertarios para honrar la memoria de Ramón Vila Capdevila «Caraquemada». El homenaje fue prohibido por orden gubernamental. En una España a punto de entrar en la vía constitucional y que recibía en olor de multitudes a los exiliados más representativos, el recuerdo de los maquis todavía resultaba insoportable. A partir de entonces, un silencio espeso se abatió sobre los guerrilleros antifranquistas. El rechazo político a los hombres que protagonizaron la última batalla de la guerra civil ha condicionado decisivamente nuestra memoria civil y favorecido la amputación de una parte de nuestra historia última.

Las razones de un fracaso

Con los datos disponibles podemos manejar diferentes interpretaciones para fijar las causas que provocaron el descalabro de la guerrilla y que se pueden resumir —pese al esquematismo que conlleva una operación de este tipo— en cuatro: el abandono de las potencias vencedoras de la guerra mundial, la fragmentación de las fuerzas antifranquistas (tanto en el interior como en el exilio), la ausencia de apoyo popular generalizado y, finalmente, los errores de planteamiento. El factor determinante fue, sin duda, que la resistencia antifranquista no era un proyecto autónomo sino que dependía de manera decisiva de factores externos: la evolución de la guerra mundial y la posición de los vencedores frente a la dictadura franquista. El grueso de los combatientes no ignoraba que su éxito o fracaso dependía del sesgo que tomaran las

potencias occidentales en el «problema español». Pero esos países abandonaron a los demócratas españoles. Pese a los boicoteos, amenazas y campañas internacionales, el reparto del mundo en zonas de influencia a partir de 1945 era un hecho y, dado que España era un país menor, para las potencias occidentales resultaba preferible un Estado totalitario que la posibilidad de una República progresista en cuyo gobierno participaran los comunistas. Las medidas de las potencias contra Franco fueron más cosméticas que efectivas, pero provocaron un efecto adicional: los socialistas creyeron en ellas y asumieron un espejismo que los deslumbró. Estados Unidos y Gran Bretaña, a pesar de las declaraciones formales, habían apostado por Franco incluso durante la guerra civil, y la guerra fría* malogró definitivamente cualquier posibilidad de intervención en España. Este hecho motivó el abandono de los guerrilleros de obediencia socialista en Asturias, León, Galicia y Santander. En el caso de la URSS, ni podía ni quería intervenir: entregó España a las potencias occidentales a cambio de reforzar su hegemonía en la parte oriental de Europa.

Existieron otros factores que aceleraron el fracaso, como las divergencias irreconciliables entre la constelación de fuerzas republicanas. Especial responsabilidad recayó sobre un Partido Socialista que se dedicó a contemporizar con casi todos y casi todo: había zonas guerrilleras dirigidas por militantes socialistas, Prieto pactaba con los monárquicos y Negrín apoyaba a los comunistas (o permitía que éstos le apoyaran a él). La división de los socialistas anuló la posibilidad de formar un ejecutivo republicano en el exilio con fuerza moral ante las instancias supranacionales. Tampoco las demás formaciones políticas y sindicales exhibieron un comportamiento ejemplar. Enfrentados y divididos hasta la extenuación, republicanos y libertarios demostraron más interés en dirimir sus querellas internas que en el destino de los españoles. Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio o Federica Montseny pusieron de manifiesto en aquellos momentos excepcionales conductas propias de políticos mezquinos, insolventes y personalistas. Montseny no tuvo mayores problemas para afirmar lo siguiente: «Si la República se restablece en España será señal de que contará con la confianza del capitalismo internacional. Es mejor, pues, que eso no suceda (...). Es preferible ser un movimiento pequeño con tal que conserve la esperanza». Solamente el PCE se mantenía unido y, equivocado o no, parecía tener alguna idea manifiesta: eligió la vía armada. La posición privilegiada de los comunistas en la guerrilla tuvo su fundamento, por tanto, en la inhibición y el desinterés de los demás partidos y sindicatos. Ese hecho repercutió negativamente, ya que el PCE, demonizado en el interior de España y alimentando cautelas entre las potencias democráticas, no era la formación más adecuada para tutelar la lucha armada. Una resistencia apoyada por todas las formaciones republicanas hubiera hecho más obscena la inhibición de los países occidentales.

La propia resistencia armada también reprodujo a escala el sectarismo de los

partidos. Por una parte, las partidas socialistas organizadas en Asturias y León se negaron a unirse a las comunistas, pero también las hegemonizadas por el PCE, que eran la mayoría, se encontraban aisladas unas de otras. Cada Agrupación Guerrillera se situaba al margen de las actuaciones y tácticas puntuales de las demás. No existió, por ejemplo, relación alguna entre Galicia y Levante, pero más grave fue que tampoco se estableció una coordinación mínima entre dos agrupaciones armadas poderosas, la de Levante y la malagueño–granadina, tan próximas. El «feudalismo armado» de la posguerra impidió la unidad de acción que podía haber modificado el rumbo de la lucha en los años inmediatos de la posguerra mundial, aunque resultaba lógico deducir que la clandestinidad no favorecía la comunicación entre los grupos armados. El llamado Consejo Central de la Resistencia fue pura y simple propaganda, retórica de los gerifaltes en el exilio: nunca se intentó articular un poder centralizado de la guerrilla. No obstante, los guerrilleros de base impartieron una lección de sentido común y de solidaridad, ya que socialistas, anarquistas y comunistas colaboraron activamente a título individual.

La falta de un apoyo popular masivo fue otro de los problemas medulares de la resistencia armada de la posguerra. Sólo ante un ejército extranjero está garantizada esa simbiosis activa: el patriotismo es irracional pero efectivo. Los estrategas de la guerrilla dieron por sentada la solidaridad militante del pueblo español, pero ese pueblo, después de una guerra despiadada y de una represión no menos cruel, prefirió comer a luchar por su libertad. Como todas las naciones que tienen atravesada su historia por revueltas pero que han sido incapaces de hacer una revolución, el pueblo español se dispuso después de la guerra a vivir otra época de sometimiento. Una pasividad que se vio «favorecida» a causa de una represión implacable contra familiares, enlaces y colaboradores del maquis. La represión estuvo en la genealogía de la resistencia armada, pero esa misma represión dificultó el apoyo popular: la realidad de un miedo que paralizaba se impuso al deseo de libertad. Después de una guerra civil de exterminio, no resultaba fácil para los ciudadanos antifranquistas apoyar una aventura armada que prolongaba en el tiempo la guerra y la represión. Que se mostraba simultáneamente heroica y suicida.

En realidad, sólo una organización clandestina, poderosa y unitaria hubiera sido capaz de movilizar a las masas en favor de la resistencia armada y de hacer posible que el «pueblo desafecto» se sobrepusiera al miedo. Los guerrilleros contaron con una importante red de enlaces, pero los apoyos populares les servían para sobrevivir y no para ampliar la geografía del maquis, que era una tarea de mediación de las organizaciones políticas de masas. El hecho de que las ciudades estuvieran desconectadas del maquis anunciaba la derrota de antemano, ya que se presentaba como una utopía liquidar el Leviatán franquista sin trasplantar la lucha a las ciudades, verdaderas arterias del país, pese al secular atraso industrial y urbano en España: los

centros de decisión ya no se encontraban en el medio rural. La ausencia de estas organizaciones, sobre todo en las ciudades, convirtió a las partidas guerrilleras en grupúsculos desconectados de los ciudadanos. Salvo excepciones puntuales, sólo el medio rural asistió al combate de los guerrilleros, y era un entorno conservador, generalmente favorable a quien mandaba, ya fueran los franquistas o el maquis, pero poco permeable a una aventura revolucionaria. Otro error fue que los guerrilleros no consiguieron identificarse como españoles y estigmatizar a Franco como invasor (ideológico). Por el contrario, el franquismo logró que los guerrilleros aparecieran como «extranjeros» hasta en el nombre: maquis.

La resistencia armada pudo ser operativa, pero los planteamientos políticos y los errores tácticos influyeron también en la derrota del movimiento guerrillero. «El resultado final no significa que las guerrillas no funcionaran bien. Indica que se las hizo funcionar en un momento inadecuado y sin los apoyos necesarios», apunta Víctor Alba. La falta de coordinación y la ausencia de esos apoyos produjo una disfunción entre los diversos elementos que componían la apuesta revolucionaria hasta 1947; después de esa fecha, el movimiento guerrillero fue un suicidio del que no fueron responsables los combatientes. Los análisis diseñados por los responsables comunistas en Francia resultaron ajenos a lo que sucedía en España y no tuvieron en cuenta la realidad política y socioeconómica de ésta. Ni advirtieron el miedo que recorría toda España, un miedo que paralizaba a la gente y hacía inviable el apoyo militante de quienes incluso rechazaban sinceramente la dictadura. Todo ello provocó la acumulación de errores, y en la guerras los errores se pagan con vidas humanas. Y, sin embargo, la guerrilla significó una posibilidad de cambios profundos en España, dada la inestabilidad del régimen franquista hasta mediados de 1947. El hecho constatado de que unos pocos miles de hombres mantuvieran en jaque al franquismo no muestra la potencia del maquis sino la debilidad del régimen. También ilustra sobre las posibilidades de la resistencia armada en condiciones más favorables.

Otro planteamiento que evidenció la falta de un programa de actuación y motivó importantes costes humanos fue la vinculación entre PCE y la guerrilla de obediencia comunista, incluso a nivel orgánico. Resulta incomprensible que una vez que el PCE asumió el control de la resistencia, partido y guerrilla continuaran solapándose, ya que la caída de algún elemento de la resistencia armada conllevaba automáticamente el arresto de los miembros del partido, y viceversa. La única explicación para esa actitud suicida, además de una clandestinidad que enquistaba distorsiones e ilusiones de todo tipo, tal vez residía en que los mandos políticos no estaban seguros de la fidelidad al partido de los jefes guerrilleros. A todo ello hay que añadir una propaganda deficiente, sin medios y casi sin mensaje —monopolizado por un discurso monocorde y panfletario—, que convirtió a la guerrilla en algo oculto, mítico, extraño al devenir de los propios españoles: el franquismo ganó a la oposición

la batalla de la información en el interior del país. Lo tenía verdaderamente fácil, pero eso no exime al Partido Comunista de su responsabilidad, ya que los comunistas parecían empeñados en pensar que la guerra de la información se producía exclusivamente en Europa, y no obstante el corazón de la lucha estaba en España* Los titulares contra la dictadura de los periódicos y revistas europeos seguramente reconfortaban al sanedrín comunista del exilio, pero no tenían efectos balsámicos para los guerrilleros perdidos en los montes de España. En la mayor parte de los casos, ni se enteraban. La prensa comunista enviada desde Francia resultaba infantil incluso analizándola con los datos de la época. Un lector no avisado habría considerado superfluo movilizarse contra el tirano, ya que las portadas de *Mundo Obrero*, que hablaban de victorias y divisiones guerrilleras, parecían indicar que el avance de la resistencia resultaba incontenible para las fuerzas franquistas.

Tampoco el partido exploró la posibilidad de capacitar técnica y políticamente a los guerrilleros, excepto en Levante, donde funcionó una escuela guerrillera. Y la solución no pasaba por enviar de cuando en cuando algún maquis con experiencia y prestigio en la Resistencia francesa, pero ignorantes de lo que ocurría en el interior. De hecho, algunos jefes de maquis llegados desde Francia no fueron aceptados y otros se encontraron aislados de los guerrilleros, convirtiéndose en presa fácil de las fuerzas de represión. El caso de Pelegrín Pérez resultó emblemático. La ausencia de un poder centralizado permitió, además, que a la cabeza de los grupos de maquis se situaran los sujetos más audaces y temerarios, no los más preparados, y que algunos jefes autóctonos se comportaran como caciques en las comarcas de las que eran naturales. Adelino Pérez Salvat «Teo» confiesa a Fernanda Romeu que las guerrillas se configuraron con hombres que «habían dejado el arado e iban al monte porque eran antifascistas». En realidad, el Partido Comunista como tal sólo se preocupó de la AGLA. Las demás agrupaciones, aunque se declaraban comunistas, se vieron constreñidas a practicar un «autismo armado».

Sin embargo, el movimiento armado de posguerra también aportó aspectos verdaderamente positivos. En primer lugar, sirvió como autodefensa de los huidos de la represión, a los que no les quedaba otra alternativa. No podemos orillar una idea básica: los que se echaron al monte lo hicieron por la imposibilidad de vivir en la sociedad franquista. En segundo lugar, permitió a unos hombres que se encaminaban hacia el bandolerismo convertirse en revolucionarios: eran guerrilleros al servicio de unas ideas. En el contexto de la primera posguerra, ese detalle, aparentemente semántico e infantil, aparecía como elemento cardinal. Sergio Vilar ha escrito que «una de las causas principales por las que Franco decidió no entrar en guerra como aliado de Alemania consistió en la amenaza que suponían las partidas». Efectivamente, los grupos de huidos, primero, y las guerrillas, después, causaron importantes trastornos al régimen franquista y se constituyeron como la única

oposición sólida a la dictadura. Eduardo Munilla Gómez, teniente coronel de la Guardia Civil, testimonia en un trabajo sobre el maquis la incidencia de la guerrilla en la economía y sociedad española. Están documentados los destrozos efectuados en líneas de alta tensión, vías férreas, fábricas de luz, polvorines, etcétera, que produjeron los guerrilleros. Además del coste en vidas humanas. También provocó la guerrilla un importante daño adicional a la imagen de la España de la dictadura, ya que un repaso a una parte de la prensa extranjera, incluida la «independiente», reflejaba una situación próxima a la guerra civil. Tampoco puede catalogarse como simplemente anecdótico el hecho de que, en una época de conculcación de los derechos de la mujer, el maquis permitiera a ésta adquirir un papel en la sociedad política y en la sociedad de los hombres a través de su vinculación directa y, sobre todo, indirecta con la guerrilla.

El problema de las cifras

Como en el apartado de las víctimas de la guerra civil, el argumento cuantitativo termina instalándose en el centro de la polémica sobre el maquis. Pero el debate sobre las cifras deriva en un verdadero campo de minas, y muchos autores que han publicado importantes monografías regionales y locales (Mercedes Yusta Rodrigo, Francisco Espinosa Maestre, Justo Vila Izquierdo, José María Azuaga Rico, Carlos Santullano y José Manuel Pérez, etcétera) no han hecho de los números una cuestión de gabinete. Coincidimos con Espinosa Maestre cuando escribe que es un problema secundario «si se prescinde del prurito de las cifras exactas». Más aún, pensamos que se impone partir de una premisa: resulta técnicamente imposible no sólo conocer las cifras exactas sino incluso establecer aproximaciones rigurosas. Las desviaciones convierten la aritmética en literatura. Valga el siguiente ejemplo para confirmarlo. El único apartado que debiera conocerse con exactitud es el referido a las bajas de la Guardia Civil, ya que parece lógico pensar que existe una relación exacta de las mismas en la dirección general correspondiente. En consecuencia, las magnitudes más aproximadas —exactas, en realidad— debieran ser las que publicó el teniente coronel Francisco Aguado Sánchez, que cifra en 257 los guardias civiles muertos apoyándose en documentación oficial. Sin embargo, ese guarismo ha sido impugnado por un profesional de tanta solvencia como Hartmut Heine, quien afirma que la cifra «no es exacta sino que ha sido manipulada con fines propagandísticos». Analizando las muertes de guardias civiles que publica el *Boletín Oficial de la Guardia Civil* en los años de guerrilla y en los inmediatamente anteriores y posteriores, el historiador alemán concluye que «el tributo que la Guardia Civil pagó en la eliminación de la resistencia armada se sitúa alrededor de las mil bajas».

Las primeras estadísticas para toda España las hizo públicas en 1968 el teniente coronel Eduardo Munilla Gómez. Estaban basadas en la documentación oficial de la Dirección General de la Guardia Civil. Resumidas en sus conceptos más importantes, eran las siguientes: 5548 bajas de guerrilleros (2166 muertos), 624 bajas de la Guardia Civil (256 muertos) y 19 407 enlaces detenidos. En 1975 el citado Francisco Aguado Sánchez publicó su libro *El maquis en España*, texto en el que aparecían listas detalladas por provincias y conceptos. Como las de Munilla, son cifras salidas de la documentación oficial. Los números de Aguado elevaban el número de bajas de guerrilleros hasta 5560, con el siguiente desglose: 2173 muertos, 467 heridos–detenidos, 546 presentados o entregados y 2374 detenidos. Por lo que se refiere a los enlaces, sitúa en 19 444 el número de detenidos (lo que ha llevado a ciertos autores a multiplicar por 4 o 5 el número de enlaces al servicio de la resistencia). La Guardia Civil tuvo 257 muertos y 370 heridos; incluidas las bajas del Ejército, Policía Armada y Cuerpo General de Policía, los muertos de los cuerpos coactivos llegan a 307 y a 448 los heridos. Las diferencias entre las cifras de Munilla y Aguado son anecdóticas, irrelevantes, ya que utilizan la misma fuente de información. Además, y muy importante, los dos aportan datos que abarcan entre 1943 y 1952, excluyendo el periodo de 1939–1943. Tampoco contabilizan las bajas producidas en las invasiones pirenaicas, y así lo hacen constar explícitamente. Distintos autores coinciden en afirmar que fueron aproximadamente 20 000 guardias civiles los que combatieron al maquis —al margen de que en las zonas de huidos las comandancias al completo estaban a disposición de operaciones contrainsurgentes—, además de columnas mixtas, legionarios y regulares, Policía Armada y miembros de «la social».

Pero el hecho de que estas estadísticas estén basadas en fuentes oficiales —en los partes de las respectivas comandancias— no garantizan ni su fiabilidad ni siquiera el rigor mínimo exigible. Los numerosos reparos técnicos que se le pueden objetar invalidan en parte los resultados finales, y desconocemos, además, la metodología utilizada. Si contrastamos varios conceptos con ejemplos concretos en algunas provincias, podemos apreciar las diferencias existentes entre esas estadísticas generales y las realidades particulares. Aguado Sánchez señala que en la provincia de León 83 guerrilleros fueron detenidos o se presentaron a las autoridades. Pues bien, estamos en condiciones de afirmar que en la citada provincia se entregaron 4 huidos, fueron detenidos otros 4 y además 1 guerrillero. Total: 9. Diferencia: 74. Tampoco se produjeron 15 secuestros (sólo tenemos noticias de uno, aunque destacado). Otro ejemplo podemos situarlo en la provincia de Huelva, a la que adjudica 179 bajas de guerrilleros (muertos y detenidos). Si tenemos en cuenta que las estadísticas sólo recogen información desde 1943, los dígitos anteriores resultan sencillamente escandalosos porque en Huelva, a partir de esa fecha, no existió una resistencia armada reseñable. Espinosa Maestre, experto en la guerra civil en Huelva, subraya

que «serían cantidades excesivas ni siquiera refrendadas por las acciones narradas por el autor». Tercer y último ejemplo, aunque anecdótico. Aguado Sánchez escribe en la página 233 de su libro: «El 30 de mayo de 1945, en Porto de Sanabria, siete bandoleros hacen una emboscada a un grupo de Guardia Civil, pertenecientes a aquel destacamento. Los cuatro guardias resultaron muertos». En la página 254, sin embargo, en el recuadro de guardias civiles muertos de la provincia de Zamora, el número asentado es 2. ¿Dónde han ido a parar los otros dos? ¿Excepción o síntoma?

Resultan muy interesantes las cifras dadas por el teniente coronel Eulogio Limia Pérez, el mayor especialista en la persecución de maquis en la España de la posguerra. En un informe de 1957, titulado «Reseña general del problema del bandolerismo en España después de la guerra de liberación», suministró la cifra de 2824 guerrilleros (incluye muertos, detenidos y supervivientes) entre 1939–1952. El mismo militar aporta una explicación sobre las razones de las diferencias existentes entre sus cifras y las oficiales, luego asumidas por Munilla y Aguado: «Comparadas estas cifras de bajas con la de 5548 dada en estado por la Dirección General del Cuerpo a la terminación del problema, se observa una diferencia de 3313 que a mi juicio debe atribuirse a errores de cálculo y de información, pues es sabido que en la primera etapa (huidos) existían multitud de individuos ocultos en el campo y en los pueblos, que no tuvieron actuación bandolera y en la 2.^a etapa (PC) un número elevadísimo de enlaces y colaboradores de los bandoleros (que) fueron en ambos casos considerados como tales en una gran parte, figurando con dicho carácter en los partes y estados transmitidos por Tercios y Comandancia al Centro Directivo, circunstancia que indirectamente hicieron suponer la existencia de un número de bandoleros muy superior al real». La importancia de los números y las explicaciones de Limia Pérez radican en que proceden de un miembro de la Guardia Civil que combatió el maquis, en primer lugar, y en segundo término, porque era un informe interno, no destinado a ser publicado, y por lo tanto marginó consideraciones ajenas a las cifras reales. Además confirman algo que cualquier estudioso atento percibe nada más analizar las cifras oficiales. En el periodo 1939–1942 al apartado de huidos los partes de las comandancias adjuntaban también los «topos» y entre 1943–1952 a los guerrilleros se agregaban una parte de los enlaces.

Como señala Limia Pérez, la mayor parte de las disfunciones numéricas en el guarismo que nos interesa (el número de guerrilleros que combatió en la resistencia antifranquista) proviene de la confusión en torno a los «topos» y, sobre todo, a los enlaces. La primera sospecha se establece a partir de que en las estadísticas oficiales sólo se computa el número de enlaces detenidos y no el de muertos, lo que motiva la sospecha de que muchos de aquellos apoyos a los que se aplicó la «ley de fugas» fueron censados en el concepto de guerrilleros muertos. La tesis de Limia Pérez de que los enlaces muertos se contabilizaban como guerrilleros la suscriben Heine para

España, Chaves para Extremadura, Espinosa Maestre para Huelva, Santullano y Pérez para Asturias. Julián Chaves Palacios, que historió la guerrilla en Cáceres, señala que las estadísticas oficiales, que incluyen casi cuatro años menos, consignan 57 guerrilleros muertos cuando su lista con nombres y apellidos alcanza 45, y dice que obviamente la diferencia se refiere a los enlaces. El general de la Guardia Civil Manuel Prieto López, que combatió al maquis en Andalucía cuando era un joven teniente, refirió a Romero Navas que había elevado un informe al director de la Benemérita, Alonso Vega, en el que, como vimos anteriormente, decía: «Consta que han matado a tantos y eso es mentira, esos no eran bandoleros, sino gente que estaban en un cortijo tranquilamente». Lo mismo ocurrió en los demás territorios de maquis. El factor fundamental para una cifra aproximada de guerrilleros consiste en saber cuántos enlaces fueron eliminados o detenidos y aparecen asentados como huidos o maquis. Autores como Moreno Gómez para Córdoba, Bernardo Máiz para Galicia, Luis Miguel Sánchez Tostao para Jaén o nosotros para León hemos elaborado censos que superan en número a las estadísticas oficiales.

La controversia sobre las cifras del maquis resulta tan comprometida que, por ejemplo, dos de los mayores especialistas en el tema, Hartmut Heine y Francisco Moreno Gómez, llegan a conclusiones diametralmente opuestas. Heine, que ha estudiado la resistencia armada en Galicia y la oposición al franquismo en España, sostiene que «no faltan datos que indican que, de hecho, no excedieron [se refiere al número de guerrilleros] en ningún momento de entre dos mil y dos mil quinientos». El mismo historiador continúa explicando que el error de cálculo deriva de que no tuvieron en cuenta «la impresionante movilidad y agilidad de los grupos guerrilleros que, cubriendo a veces en una sola noche más de cincuenta kilómetros de terreno accidentado, eran capaces de estar presentes en días sucesivos en puntos muy alejados entre sí». Otra razón que aporta para rechazar el elevado número de maquis de la versión oficial, es que se exageró deliberadamente su número en un movimiento de «glorificación de la Guardia Civil». Por el contrario, Francisco Moreno Gómez, confrontando las cifras de su trabajo sobre la provincia de Córdoba con las de Aguado Sánchez y extrapolándolas para todo el país, efectúa una proyección en la que concluye que «si tenemos en cuenta los supervivientes, se puede hablar de unos efectivos generales de la guerrilla en torno a las 7500 personas armadas». En resumen, que el número de guerrilleros antifranquistas sería de 2000–2500 para Heine, 2824 para Limia Pérez, 5560 para Aguado (cifras oficiales) y 7500 para Moreno Gómez. Si tenemos en cuenta que Aguado Sánchez excluye los huidos entre 1939 y 1943, estaríamos ante una cifra próxima a la de Moreno Gómez. Es decir, entre las magnitudes de Heine–Limia y las de Moreno–Aguado la desviación supera en algunos casos el 100 por ciento.

Aunque pensamos que entrar en el «juego de las cifras» resulta problemático y un

punto estéril, debido a las dificultades técnicas de un recuento riguroso, después de recorrer toda la bibliografía publicada sobre la guerrilla antifranquista nos inclinamos a pensar que el número de huidos y guerrilleros que entre 1939 y 1952 (además de los anarquistas catalanes) se enfrentaron a la dictadura osciló entre los 5000–6000 miembros, incluidos muertos, detenidos, presentados y aquellos que lograron huir al extranjero. Excluimos, por supuesto, a los participantes en las invasiones pirenaicas. Existe un argumento muy gráfico para expresar y entender los motivos de esa conclusión. Hubo 8 territorios de guerrilla importantes: Galicia–León, Asturias–Santander, Levante–Aragón, Extremadura–Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Granada–Málaga y Cádiz–Málaga, al margen de pequeñas partidas en diferentes provincias (Huesca, Jaén, Huelva, Ávila y Madrid, además de las guerrillas libertarias catalanas). Si dividimos los 7500 guerrilleros, como cifra máxima, entre los 8 territorios de maquis a cada uno de ellos le corresponden 937 antifranquistas armados. A partir de este cálculo, podemos introducir algunas hipótesis de trabajo. Por ejemplo, pensamos que ninguna agrupación alcanzó los 1000 guerrilleros durante el periodo de las guerrillas (ni siquiera las dos más importantes, Levante y Málaga–Granada) y, desde luego, en la mayor parte de ellas el cómputo global no se acercó, ni mucho menos, a los 300 maquis. En la época de apogeo, la AGLA contaba simultáneamente con un máximo de 200–300 hombres, Granada–Málaga con 150–200 y las demás agrupaciones con unos 100 de media. Esa era la realidad de la que nos informan la mayoría de los estudios conocidos. Y aunque la resistencia se prolongó entre 1936 y 1952 y, por lo tanto, los muertos y detenidos eran sustituidos, entre 1939 y 1945 las bajas de guerrilleros pueden considerarse moderadas, aumentaron de manera exponencial durante 1947–1948 y descendieron radicalmente a partir de la última fecha. Resulta imposible que con medias simultáneas de 100 maquis y con una renovación significativa que no duró más de tres años se puedan superar los 500 guerrilleros por cada territorio de maquis entre 1939 y 1952. Y también se acumula un hecho significativo: la AGLA, que era la más numerosa, sólo empezó a funcionar a partir de 1946, ya que no era una zona de huidos antes de comenzar la guerrilla organizada. No obstante, los recientes estudios de Moreno Gómez sobre el territorio que ocupó el llamado Ejército de la Zona Centro siguen confirmando una tendencia al alza. Hay que sumar también a los antifranquistas de las provincias «irradiadas» (limítrofes con los territorios de maquis). Las aportaciones del futuro nos permitirán conocer, aunque sólo sea por aproximación, el número de españoles que resistieron a la dictadura.

Pero el hecho de que fueran entre 5000–6000 hombres no hace sino agigantar la aventura del maquis, que consiguió con tan pocos miembros tener presencia en la práctica totalidad de la geografía española. Solamente Alicante, Murcia, Segovia, Valladolid y Logroño estuvieron al margen de la resistencia (incluidas las invasiones

pirenaicas), aunque la presencia en Burgos, Álava o Salamanca puede considerarse como anecdótica. Otras provincias fueron irradiadas por los núcleos guerrilleros próximos (Palencia y Zamora) y finalmente las regiones y provincias llamadas de paso (País Vasco, Navarra y las catalanas de Lérida y Gerona). El resto de las provincias del país participaron, en mayor o menor grado, del movimiento guerrillero contra el franquismo.

En unas jornadas sobre la guerrilla, celebradas en Santa Cruz de Moya (Cuenca) en octubre de 2000, le preguntaron a Remedios Montero, antigua enlace de la AGLA, cómo había podido soportar las humillaciones y las torturas propinadas por guardias civiles y policías. Su respuesta sonó en la sala como una deflagración: «Por el odio». La respuesta, no obstante, parece lógica. Más allá de la literatura beatífica, todo ciudadano perseguido a muerte por sus ideas tiene el derecho (y el deber) de protegerse. El franquismo fue un régimen de barbarie frente al que había que defenderse. Con las armas, como hicieron los guerrilleros. Con el odio, como hicieron los enlaces. Ahora que los escasos supervivientes han podido dejar las armas y abandonar el odio, tal vez sea el momento de trasladarlos de la leyenda a la historia.

Una historia necesariamente abierta.

Libros escogidos

- ALBA, VÍCTOR: *Historia de la Resistencia antifranquista (1939–1955)*, Planeta, Barcelona, 1978.
- ALÍA MIRANDA, FRANCISCO: *La guerra civil en retaguardia, Ciudad Real (1936–1939)*, Biblioteca de Autores y Temas Manchegos, Ciudad Real, 1994.
- ALTED VIGIL, ALICIA: *El exilio español de la guerra civil; los niños de la guerra*, Ministerio de Cultura–Fundación Largo Caballero, Madrid, 1995.
- ÁLVAREZ BLANCA, WENCESLAO: *La represión de la postguerra en León. Depuración de la enseñanza, 1936–1943*, Santiago García, editor, León, 1986.
- ARASA, DANIEL: *Años 40: los maquis y el PCE*, Argos Vergara, Barcelona, 1984.
- ARÓSTEGUI, JULIO (ed.): «Violencia y política en España», *Ayer*, núm. 13–Marcial Pons, Madrid, 1994.
- AZCÁRATE, MANUEL: *Derrotas y esperanzas*, Tusquets, Barcelona, 1994.
- AZUAGA RICO, JOSÉ MARÍA: *La guerrilla antifranquista en Nerja*, Izquierda Unida, Nerja, 1996.
- CHAVES PALACIOS, JULIÁN: *Huidos y maquis. La actividad guerrillera en la provincia de Cáceres, 1936–1950*, Diputación Provincial de Cáceres, Cáceres, 1994.
- COBO ROMERO, FRANCISCO: *La guerra civil y la represión en la provincia de Jaén (1936–1950)*, Diputación Provincial de Jaén, Jaén, 1993.
- DÍAZ DÍAZ, BENITO: *La guerrilla antifranquista en Toledo (La 1.ª Agrupación Guerrillera)* (inédito).
- DREYFUS–ARMAND, GENEVIÉVE: *El exilio de los republicanos españoles en Francia*, Crítica, Barcelona, 2000.
- El movimiento guerrillero de los años cuarenta*, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 1990.
- ESPINOSA MAESTRE, FRANCISCO: *La guerra civil en Huelva*, Diputación de Huelva,

- Huelva, 1996.
- ESTRUCH TOBELLA, Joan: *El PCE en la clandestinidad, 1939–1956*, Siglo XXI, Madrid, 1982.
- , *Historia oculta del PCE*, Temas de Hoy, Madrid, 2000.
- FERNÁNDEZ PANCORBO, Paloma: *El maquis al norte del Ebro*, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988.
- FERNÁNDEZ PÉREZ, Adolfo: *Comandante Mata. El socialismo asturiano a través de su biografía*, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1990.
- FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina: *La resistencia interior en la España de Franco*, Istmo, Madrid, 1981.
- GALLO, Max, y DEBRAY, Régis: *Santiago Carrillo: Mañana España*, Editorial Laia, Barcelona, 1977.
- GARCÍA DELGADO, José Luis (coordinador): *El franquismo. El juicio de la historia*, Temas de Hoy, Madrid, 2000.
- GARCÍA PIÑEIRO, Ramón: *Los mineros asturianos bajo el franquismo (1937–1962)*, Fundación Primero de Mayo, Madrid, 1990.
- GENARD Í FÉRON, David: *Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931–1942)*, Documenta Balear, Mallorca–Madrid, 2000.
- GUTIÉRREZ FLORES, Jesús: *Guerra civil en una comarca de Cantabria: Campoo*, Comité Organizador del Festival Cabuérniga–Música de los Pueblos del Norte, Santander, 2000.
- HEINE, Hartmut: *A guerrilla antifranquista en Galicia*, Xerais, Vigo, 1980.
- , *La oposición política al franquismo*, Crítica, Barcelona, 1983.
- HERMET, Guy: *Los comunistas en España*, Ruedo Ibérico, París, 1972.
- HOBBSAWM, Eric: *Bandidos*, Ariel, Barcelona, 1976.
- , *Los campesinos y la política*, Anagrama, Barcelona, 1976.
- , *Rebeldes primitivos*, Ariel, Barcelona, 1968.
- JULÍA, Santos (coord.): *Víctimas de la guerra civil*, Temas de Hoy, Madrid, 1999.
- La oposición libertaria al régimen de Franco, 1936–1975*, Fundación Salvador Seguí, Madrid, 1993.
- LAMELA GARCÍA, Luis V.: *Foucellas. El riguroso relato de una lucha antifranquista (1936–1952)*, Ediciós de Castro, A Coruña, 1992.
- LIMIA PÉREZ, Eulogio: *Reseña general del problema del bandolerismo después de la guerra de liberación*, Dirección General de la Guardia Civil, Madrid, 1957 (texto mecanografiado). Archivo CC del PCE.
- MAESTRE ESPINOSA, Francisco: *La guerra civil en Huelva*, Diputación Provincial de Huelva, 3.^a edición, Huelva, 1996.
- MORÁN, Gregorio: *Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1936–1985*, Planeta, Barcelona, 1986.

- MORENO Gómez, Francisco: *Córdoba en la posguerra (La represión y la guerrilla, 1939–1950)*, Francisco Baena, Córdoba, 1987.
- , *La guerra civil en Córdoba (1936–1939)*, Alpuerto, Madrid, 1985.
- , *Los maquis y la guerrilla. Tragedia de la resistencia armada contra Franco*, Madrid, 2001 (en prensa).
- MORENTE VALERO, Francisco: *La escuela y el Estado Nuevo. La depuración en el Magisterio Nacional (1936–1943)*, Ámbito, Valladolid, 1997.
- ORTEGA VALCÁRCCEL, M. Enriqueta: *La represión franquista en Asturias. Ejecutados y fallecidos en la cárcel del Coto de Gijón*, Ediciones Azucel, Avilés, 1994.
- RAFANEAU–BOJ, Marie–Claude: *Los campos de concentración de los refugiados españoles en Francia (1939–1945)*, Omega, Barcelona, 1995.
- REIG TAPIA, Alberto: *Ideología e Historia (Sobre la represión franquista y la guerra civil)*, Akal, Madrid, 1985.
- Represión, guerrilla y exilio (1937–1952)*, en *Historia General de Asturias*, tomo XI, Silverio Cañada Editor, Gijón, 1978.
- ROMERO NAVAS, José Aurelio: *La guerrilla en 1945 (Proceso a dos jefes guerrilleros: Ramón Vías y Alfredo Cabello Gómez–Acebo)*, Biblioteca Popular Malagueña, Málaga, 1999.
- , *Recuperando la memoria*, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, Málaga, 1997.
- ROMEU ALFARO, Fernanda: *Más allá de la utopía: perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante*, Alfons El Magnànim, Valencia, 1987.
- , *El silencio roto (Mujeres contra el franquismo)*, Edición de la Autora, 1994.
- RUIZ AYÚCAR, Ángel: *El Partido Comunista. 37 años de clandestinidad*, Ed. San Martín, Madrid, 1976.
- SABÍN, José Manuel: *Prisión y muerte en la España de postguerra*, Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1996.
- SACALUGA, Juan Antonio: *La resistencia socialista en Asturias (1937–1962)*, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1986.
- SALAS LARRAZÁBAL, Ramón: *Los datos exactos de la guerra civil*, Edica, Madrid, 1980.
- SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: *De las dos ciudades a la resurrección de España (Magisterio pastoral y pensamiento de Enrique Pía y Deniel)*, Ámbito, Valladolid, 1994.
- SERRANO, Secundino: *La guerrilla antifranquista en León (1936–1951)*, Siglo XXI, Madrid, 1988.
- , *Crónica de los últimos guerrilleros leoneses*, Ámbito, Valladolid, 1989.
- SOLÉ i SABATÉ, Josep M.: *La repressió franquista a Catalunya, 1938–1953*,

- Edicions 62, Barcelona, 1985.
- TCACH, César, y REYES, Carmen: *Clandestinidad y exilio. Reorganización del sindicato socialista, 1939–1953*, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1986.
- TÉLLEZ SOLÁ, Antonio: *Sabaté, guerrilla urbana en España (1945–1960)*, Virus Editorial, Barcelona, 1992.
- , *La guerrilla urbana / 1: Facerías*, Ruedo Ibérico, París, 1974.
- , *La red de evasión del grupo Ponzán*, Virus Editorial, Barcelona, 1996.
- TORBADO, Jesús, y LEGUINECHE, Manuel: *Los topos*, El País–Aguilar, Madrid, 1999.
- VILA IZQUIERDO, Justo: *La guerrilla antifranquista en Extremadura*, Universitas, Badajoz, 1986.
- VILANOVA, Antonio: *Los olvidados: los exiliados españoles en la Segunda Guerra Mundial*, Ruedo Ibérico, París, 1969.
- VILAR, Sergio: *Historia del antifranquismo (1939–1975)*, Plaza & Janés, Barcelona, 1984.
- YUSTA RODRIGO, Mercedes: *La guerra de los vencidos (El maquis en el Maestrazgo turolense, 1940–1950)*, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1999.
- , *La Resistencia armada contra el régimen de Franco en Aragón (1940–1952)*. Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza, 2000, 2 vols.

Otros libros

- AGUADO SÁNCHEZ, Francisco: *El maquis en España*, Madrid, San Martín, 1975.
- , *El maquis en sus documentos*, San Martín, Madrid, 1976.
- ÁLVAREZ, Pedro: *Juanín, el último emboscado de la posguerra*, Manufacturas Jean, Santander, 1988.
- ÁLVAREZ, Santiago: *Memoria da guerrilla*, Xerais, Vigo, 1991.
- ARASANZ, Joaquín: *Los guerrilleros*, Edición del Autor, Huesca, 1994.
- AROCA SARDGAGNA, José María: *Los republicanos que no se exiliaron*, Acervo, Barcelona, 1969.
- BARAGAÑO, Ramón: *La guerra civil y la guerrilla en Asturias (1936–1952)* (separata del vol. 8 de la *Historia general de Asturias*), Ayalga Ediciones, Salinas–Gijón, 1981.
- BAYO, Eliseo: *Los atentados contra Franco*, Plaza & Janés, Barcelona, 1979.
- CARRILLO, Santiago: *Memorias*, Planeta, Barcelona, 1993.
- CATALÁ, Neus: *De la resistencia y la deportación*, Península, Barcelona, 2000.
- CÍCERO GÓMEZ, Isidoro: *Los que se echaron al monte*, Editorial Popular, Madrid,

1977.

CONSTANTE, Mariano: *Los años rojos: españoles en los campos nazis*, Martínez Roca, Barcelona, 1974.

COSTA CLAVELL, Xavier: *Las dos caras del franquismo en Galicia*, Cambio 16, Madrid, 1976.

COOÍAS, Tomás: *La lucha contra el maquis en España*, Editora Nacional, Madrid, 1956.

DAMIANO, Cipriano: *La resistencia libertaria (1939–1970)*, Bruguera, Barcelona, 1978.

EYRE, Pilar: *Quico Sabaté, el último guerrillero*, Península, Barcelona, 2000.

FERNÁNDEZ, Alberto E.: *La España de los maquis*, Era, México, 1971.

FERNÁNDEZ OLMO, Juan: *Episodios del «Maquis» en la Axarquía*, Edición del Autor, Málaga, 1999.

GARCÍA, B.: *Sucedió en Pozoblanco. Retazos de la vida del maquis «Caraqemá»*, Edimestre, Barcelona, 1994.

GIRAL, FRANCISCO, y SANTIDRIÁN, Pedro: *La República en el exilio*, Ediciones 99, Madrid, 1977.

GÓMEZ FOUZ, José R.: *La brigadilla*, Silverio Cañada, Gijón, 1992.

—, *Bernabé (El mito de un bandolero)*, Silverio Cañada, Gijón, 1989.

GÓMEZ PARRA, Rafael: *La guerrilla antifranquista (1945–1949)*, Revolución, Madrid, 1983.

GONZÁLEZ FRESNO, Manuel: *Memoria dun fuxido* (Edic. a cargo de Víctor F. Freixanes), Xerais, Vigo, 1980.

GROS, José: *Abriendo camino. Relatos de un guerrillero comunista español*, ATE, Barcelona, 1977.

Historia del PCE, Éditions Sociales, París, 1960.

IBÁRRURI, Dolores: *Memorias de Pasionaria, 1936–1977*, Planeta, Barcelona, 1984.

JÁUREGUI, Fernando, y VEGA, Pedro: *Crónica del antifranquismo*, Argos–Vergara, Barcelona, 1983, vol. I.

KAISER, Carlos J.: *La guerrilla antifranquista*, Ediciones 99, Madrid, 1976.

LLARCH, Joan: *Batallones de trabajadores*, Editorial Vergi, Barcelona, 1975.

MALLO, Oriol: *La revolta del Quixots: historia d'un maquis*, Biblioteca Universal Empúries, Barcelona, 1997.

MARTORELL, Manuel: *Jesús Monzón, el líder comunista olvidado por la Historia*, Pamiela, Pamplona, 2000.

MAS, David: *Les valls d'Andorra y el maquis antifranquista*, Ed. Andorra, Andorra, 1985.

MIGUEL, Ángel: *Los guerrilleros españoles en Francia, 1940–1945*, Instituto del

- Libro Cubano, La Habana (Cuba), 1971.
- MILLÁN ASTRAY, Manuel: *Síndrome del 36 (La IV Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia)*, Edición do Castro, A Coruña, 1992.
- MOLINA MATEO, Juan Manuel: *El movimiento clandestino en España*, Editores Mexicanos Unidos, México, 1976.
- NEIRA VILAS, Xosé: *Guerrilleiros*, Edicións do Castro, A Coruña, 1991.
- NOYA GIL, Juan: *Fuxidos (Memorias de un republicano gallego perseguido por el franquismo)*, Casuz Editores, Caracas, 1976.
- PÉREZ MATEOS, Juan Antonio: *La España del miedo*, Plaza & Janés, Barcelona, 1978.
- PÉREZ REGORDÁN, Manuel: *El maquis en la provincia de Cádiz*, Edición del Autor, Sevilla, 1987.
- PONS PRADES, Eduardo: *Guerrillas españolas (1936–1960)*, Planeta, Barcelona, 1977.
- , *Morir por la libertad. Españoles en los campos de exterminio alemanes*, Vosa, Madrid, 1995.
- , *Españoles en los maquis. Verano 1944*, Sagitario, Barcelona, 1976.
- PONZÁN, Pilar: *Lucha y muerte por la libertad, 1936–1944*, Tot, Barcelona, 1996.
- REGUANT, José María: *Marcelino Massana, ¿terrorismo o resistencia?*, Dopesa, Barcelona, 1979.
- REGUILÓN GARCÍA, Adolfo–Lucas: *El último guerrillero de España*, ADLAG, Madrid, 1975.
- , *Bajo el terror de las armas (Nuevos datos de una autobiografía histórica)*, Edición del Autor, Madrid, 1982.
- REIGOSA, Carlos G.: *Fuxidos de sona*, Xerais, Vigo, 1989.
- , *El regreso de los maquis*, Júcar, Madrid, 1992.
- , *La agonía del león*, Alianza, Madrid, 1995.
- RÍOS, Isabel: *Testimonio de la guerra civil*, Edición do Castro, A Coruña, 1986.
- RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: *Historia de Falange Española de las JONS*, Alianza, Madrid, 2000.
- ROZADA, Nicanor: *Relatos de una lucha (La guerrilla y la represión en Asturias)*, Edición del Autor, Oviedo, 1993.
- , *¿Por qué sangró la montaña? (Las guerrillas en los montes de Asturias)*, Edición del Autor, Oviedo, 1989.
- SÁNCHEZ AGUSTÍ, Ferran: *Maquis a Catalunya (De la invasió de la vall d’Aran a la mort del Caracremada)*, Pagés Editors, Lleida, 1999.
- SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: *Los maquis en Sierra Mágina*, Ayuntamiento de Albánchez de Úbeda, Jaén, 1977.
- SOREL, Andrés: *Búsqueda, reconstrucción e historia de la guerrilla española del*

- siglo XX a través de sus documentos, relatos y protagonistas*, Éditions Librairie du Globe, París, 1970 (Colección Ebro).
- SOUTO BLANCO, María Jesús: *La represión franquista en la provincia de Lugo (1936–1940)*, Edición do Castro, A Coruña, 1998.
- SUEIRO, Daniel, y DIAZ–NOSTY, Bernardo: *Historia del franquismo. Un imperio en ruinas*, Argos Vergara, Barcelona, 1985.
- SUEIRO, Daniel, y LLAMAS, Roberto: *Crónicas de los Montes de Toledo*, Penthalon, Madrid, 1982.
- VÁZQUEZ–AIZPIRI, Héctor: *Historias de bandoleros*, Ayalga, Salinas–Asturias, 1977.
- VIADIU VENDRELL, Francesc *Andorra: cadena de evasión*, Martínez Roca, Barcelona, 1974.
- VIDAL SALES, José Antonio: *Después del 39: la guerrilla antifranquista*, ATE, Barcelona, 1976.

Artículos

- ALÍA MIRANDA, Francisco: «La guerrilla antifranquista en la provincia de Ciudad Real», *Cuadernos de Estudios Manchegos*, núm. 19, 1990, pp. 59–74.
- BALCELLS, Alberto: «Una represión sistemática y pertinaz», *La Aventura de la Historia*, núm. 2, 1998, pp. 12–19.
- BARCIA MERAYO, Emilio: «Sobre la muerte de Manuel Girón Bazán», *Bierzo* 7, 13–III–1986, pp. 19–20.
- CASAS CARNICERO, Ángel: «La guerrilla republicana en Palencia», en *Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses*, núm. 45. Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1981, pp. 257–262.
- CERVERA GIL, Javier: «Pánico en Madrid», *La Aventura de la Historia*, núm. 3, p. 31.
- , «Mola lo tenía claro», *La Aventura de la Historia*, núm. 3, 1999, p. 13.
- CIERVA, Ricardo de la, y AGUADO SÁNCHEZ, Francisco: «La aventura del maquis en España: Análisis documental de una leyenda», *Nueva Historia* (monográfico), núm. 8, 1977.
- ENGEL, Carlos: «El maquis en España», *Historia y Vida*, núm. 227, 1987, pp. 78–93.
- FERNÁNDEZ PANCORBO, Paloma: «La guerrilla en la provincia de Teruel, 1944–1952», *Teruel. Revista del Instituto de Estudios Turolenses*, núm. 82, 1991, pp. 119–133.
- FERRERONS, Ramón, y GASCÓN, Antonio: «El Esquinazao, un guerrillero aragonés

- del siglo XX», *Nueva Historia*, núm. 16, 1978, pp. 99–106.
- HERNÁNDEZ, Miguel: «Un año de guerrillas en Galicia», *Tiempo de Historia*, núm. 34, 1977, pp. 19–22.
- LÓPEZ CORRAL, Miguel: «Los fusilamientos de Mesas de Ibor», *Historia 16*, núm. 251, 1997, pp. 8–27.
- LLAMAZARES, Julio: «El maqui en la provincia de León», *León, Madrid*, núms. 330 (pp. 19–28) y 331 (pp. 11–24).
- , «Once años escondido como un lobo», *Diario 16* (Suplemento dominical), núm. 44, 18–VII–1982, pp. 13–19.
- , «Eufemiano Díaz, el “topo” de La Mata. Diez años enterrado vivo» (inédito).
- MARTÍN, Eutimio: «Enviados al matadero», *La Aventura de la Historia*, núm. 13, pp. 24–31.
- MARTÍN BARRIO, Adoración, SAMPEDRO TALABÁN, María de los Ángeles, y VELASCO MARCOS, María Jesús: «Dos formas de violencia durante la guerra civil. La represión en Salamanca y la resistencia armada en Zamora», en Julio Aróstegui (coord.), *Historia y Memoria de la Guerra Civil. Encuentro en Castilla y León*, t. II, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988.
- MASSANA VENCELL, Marcelino, y FERRER, David: «El guerrillero Massana», *Historia y Vida*, núm. 129.
- MENDOZA, Jesús: «Gómez Cantos, el exterminador», *La Aventura de la Historia*, núm. 11, 1999, pp. 22–31.
- MORENO GÓMEZ, Francisco: «El terrible secreto del franquismo», *La Aventura de la Historia*, núm. 3, enero de 1999, pp. 12–25.
- , «La represión en la España campesina», en José Luis García Delgado (ed.), *El primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial*, Madrid, Siglo XXI, 1989.
- MULLOR, Antonio: «De las guerrillas a los movimientos de masas», *Historia Internacional*, núm. 13, 1976, pp. 70–72.
- , «La oposición comunista entre 1939–1944. De la clandestinidad a las guerrillas», *Historia Internacional*, núm. 11, 1976, pp. 35–41.
- MUNILLA PÉREZ, Eduardo: «Consecuencias de la lucha de la Guardia Civil contra el bandolerismo en el periodo 1943–1952», *Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil*, 1968, pp. 49–63.
- MUÑOZ, Carmen: «Enriqueta Otero, la guerrillera gallega», *Interviú*, núm. 106, 25–31 de mayo de 1978, pp. 33–34.
- NÚÑEZ BALART, Mirta, y ROJAS, Antonio: «Madrid, la represión insondable», *La Aventura de la Historia*, núm. 3, 1999, p. 14.
- PLAZA, Félix: «1951, huelga casi general en España», *Historia Internacional*, núm. 13, 1976, pp. 66–69.

- PONS, Agustí: «El último viaje de Quico Sabaté», *Nueva Historia*, núm. 20, 1978, pp. 37–52.
- PONS PRADES, Eduardo: «Los que se echaron al monte», *Historia 16*, núm. 62, 1981, pp. 37–52.
- PRADA RODRÍGUEZ, Julio: «Las mujeres y los escapados. Aproximación al papel de la mujer como soporte material de la resistencia antifranquista». *Las mujeres y la guerra civil española*. III Jornadas de estudios monográficos. Salamanca, octubre de 1989. Ministerio de Cultura, Madrid, 1991.
- PRIETO, Indalecio: «Los guerrilleros asturianos. Impresiones de un Arribo», en *Convulsiones en España*, Ediciones Oasis, México, 1968, vol. II, pp. 277–280.
- REÍGOSA, Carlos G.: «El Piloto, el último maquis», *Historia 16*, núm. 171, 1990, pp. 12–16.
- RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Miguel José: «Entrevista. Victorio Acuña, maquis comunista», *Historia 16*, núm. 274, 1999, pp. 76–83.
- ROMEU ALFARO, Fernanda: «Panorámica socio-política de los primeros movimientos guerrilleros en la España del 39 al 46», en José Luis García Delgado (ed.), *El primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial*, Madrid, Siglo XXI, 1989.
- RUIZ GONZÁLEZ, Cándido: «La represión en Toro durante la Guerra Civil», *Studia Zamorensia*, vol. III, UNED, Zamora, 1996, pp. 133–126.
- SAIZ VIADERO, José Ramón: «Los últimos guerrilleros de Cantabria», *Tiempo de Historia*, núm. 34, 1977, pp. 23–38.
- SERRANO, Secundino: «La guerrilla leonesa (1936–1951)», *Historia 16*, núm. 107, pp. 34–42.
- , «El maquis: una historia clandestina», *Diario 16*, 27–8–1984, p. 2.
- , «Teoría y práctica del maquis», *Nuevo Índice*, núm. 15, 1983, pp. 2–5.
- SOLÉ i SABATE, Josep M.: «Los años del miedo», *La Aventura de la Historia*, núm. 2, 1998, pp. 20–23.
- SOREL, Andrés: «A la busca y captura del maquis», *Historia Internacional*, núm. 9, 1975, pp. 34–44.
- TÉLLEZ, Antonio: «Sabaté y la guerrilla anarquista contra el franquismo», *Nueva Historia*, núm. 20, 1978, pp. 73–85.
- TRAPIELLO, Andrés: «Dossier 48, caso abierto», *El País Semanal*, 28–11–1999, pp. 136–147.
- URIARTE OLANO, Carmelo: «Guerrillero o bandolero (Foucellas)», *Historia y Vida*, núm. 48, 1972, p. 8.
- VIDAL SALES, José Antonio: «La guerrilla antifranquista», *Tiempo de Historia*, núm. 34, 1977, pp. 4–16.
- VILLARROYA, Joan: «La vergüenza de la República», *La Aventura de la Historia*,

núm. 3, 1999, pp. 26–33.

YUSTA RODRIGO, Mercedes: «Las paradojas del miedo: los maquis y el refuerzo de las estructuras del poder local», en *La Historia local en la España contemporánea*, Barcelona, L'Aveng, 1999, pp. 512–518.

—, «Un mito de la guerrilla antifranquista en Aragón: La Pastora», *Arenal* (Granada), vol. 5, núm. 2, 1998, pp. 361–377.

—, «El Maestrazgo turolense y la guerrilla antifranquista», *Turia. Revista cultural*, núms. 47–48, 1999, pp. 293–303.

Narrativa

CARNICER, Ramón: *Donde las Hurdes se llaman Cabrera*, Seix–Barral, Barcelona, 1964.

CASTRO, Antón: *El testamento de amor de Patricio Julve*, Destino, Barcelona, 1994.

—, *Los seres imposibles*, Destino, Barcelona, 1998.

CASTRO CAYCEDO, Germán: *El Karina*, Planeta, Barcelona, 1998.

CASTROVIEJO, José María: *La montaña herida*, Espasa Calpe, Madrid, 1981.

CERVERA, Alfons: *Maquis*, Montesinos, Barcelona, 1997.

CIBREIRO, Pilar: *El cinturón traído de Cuba*, Alfaguara, Barcelona, 1985.

FERNÁNDEZ DELGADO, Juan José: *Última página*, Editorial Azacanes, Toledo, 2000.

GAVELA, César: *La raya seca*, San Fundación Social y Cultural Kutxa, Sebastián, 1996.

GIMÉNEZ CORBATÓN, José: *El fragor del agua*, Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1993.

—, *Tampoco esta vez dirían nada*, Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1997.

GONZÁLEZ SEVILLANO, Juan José: *Pasión y muerte de un maquis. Sebastián Eustaquio Moya Moya «El Chichango»*, Ed. del autor, Villarrobledo, 1985.

GUERRA GARRIDO, Raúl: *El año del Wolfram*, Planeta, Barcelona, 1984.

HEMINGWAY, Ernest: *Por quién doblan las campanas*, Planeta, Barcelona, 1966.

HERRERA PETERE, José: *Cumbres de Extremadura: novela de guerrilleros*, Anthropos, Barcelona, 1986.

Historias de maquis en el Pirineo aragonés, Pirineum Editorial, 2.^a edición, Huesca, 2000.

LLAMAZARES, Julio: *Luna de lobos*, Seix–Barral, Barcelona, 1985.

MARTÍNEZ TERRÓN, Luis: *La «partida del alba» y otras historias del maquis*, Graf. Romero, Cáceres, 1994.

MENDOZA, Eduardo: *El año del diluvio*, Seix Barral, Barcelona, 1992.
NEIRA VILAS, Xosé: *O ciclo do neno*, Akal Editores, Madrid, 1978.
PÉREZ LÓPEZ, F: *El mexicano*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1974.
ROMERO, Emilio: *La paz empieza nunca*, Planeta, Barcelona, 1957.
RUIZ AYÚCAR, Ángel: *La sierra en llamas*, Luis de Caralt, Barcelona, 1953.
SALEGI, Mario de: *Operación Carlomagno. Novela de la Resistencia vasca, 1940*, Ediciones Libertarias, Madrid, 1988.
SEVILLA LOZANO, Jesús: *Alhambra y los Tuchas (Una historia del maquis)*, Editorial Certamen, Madrid, 1987.
TORBADO, Jesús: *En el día de hoy*, Planeta, Barcelona, 1976.
TRANCÓN, Santiago: *En un viejo país*, Ollero & Huerga, Madrid, 1997.
VILA, Justo: *La agonía del búho chico*, Del Oeste Ediciones, Badajoz, 1994.
VILLAR RASO, Manuel: *La Pastora: el maqui hermafrodita*, Albia Nova, Bilbao, 1978.

Filmografía

Películas

Dos caminos, Arturo Ruiz–Castillo (1954).
La ciudad perdida, Margarita Alexandre y Rafael Torrecilla (1954).
Torrepartida, Pedro Lazaga (1956).
La paz empieza nunca, León Klimovsky (1960).
Carta a una mujer, Miguel Iglesias (1961).
A tiro Limpio, Francisco Pérez–Dolz (1963).
El espíritu de la colmena, Víctor Erice (1973).
Metralleta Stein, José Antonio de la Loma (1974).
Casa Manchada, José Antonio Nieves Conde (1975).
Pim, pam, pum, fuego, Pedro Olea (1975).
Los días del pasado, Mario Camus (1977).
El corazón del bosque, Manuel Gutiérrez Aragón (1978).
Luna de lobos, Julio Sánchez Valdés (1987).
Huidos, Sancho Gracia (1992).
El portero, Gonzalo Suárez (2000).
Silencio roto, Montxo Armendáriz (2001).

Documentales

Tres octubres, José Luis Rodríguez Puértolas (TVE, 1986).

La guerrilla, José Luis Guarnier (TVE, 1987).

El maquis en el Alto Aragón, Eugenio Monesma (1994).

Death in El Valle, C. M. Hardt (Channel Four Televisión, 1996).

Maquis, el exilio interior, Javier Corcuera (2001).



SECUNDINO SERRANO. (León, 1953). Historiador español, especializado en la Guerra Civil Española, la guerrilla antifranquista, la postguerra y el exilio republicano.

Ha colaborado en importantes obras colectivas como *El movimiento guerrillero en los años cuarenta* (1990) y la reedición de la *Historia de España* (1999) de Julio Valdeón, Manuel Tuñón de Lara y Antonio Domínguez Ortiz. Director de la *Enciclopedia de León* (1996), ha publicado numerosos artículos sobre el maquis en periódicos y revistas como *El País*, *Diario 16*, *Historia 16* o *Índice*.

Notas

[1] Francisco Espinosa Maestre, *La guerra civil en Huelva*, Huelva, 3.^a edición, 1996, p. 281; Secundino Serrano, *La guerrilla antifranquista en León (1936–1951)*, Madrid, pp. 88–92, 99–106, 135–148. <<

[2] Ian Gibson, *Granada en 1936 y el asesinato de Federico García Lorca*, Barcelona, 6.^a edición, 1986, p. 240. <<

[3] Julián Casanova, en Santos Julia (coordinador), *Víctimas de la guerra civil*, Madrid, 1999, p. 110; Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya, en S. Juliá, op., *cit.*, p. 172. <<

[4] *Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional*, 30-7-1936. <<

[5] Ricardo de la Cierva, *Historia de la guerra civil. Tomo I: Perspectivas y antecedentes, 1898–1936*, Madrid, 1969, p. 771. <<

[6] Ian Gibson, *Queipo de Llano, verano de 1936*, Barcelona, 1986, p. 64. <<

[7] Daniel Sueiro y Bernardo Díaz Nosty, «Las penas de muerte a la hora del café», *El País* (Suplemento dominical), 5-3-1978, p. 22. <<

[8] J. Casanova, en S. Juliá, *op. cit.*, p. 65. <<

[9] Franco en entrevista al corresponsal americano Jay Alen, *Chicago Daily Tribune*, 28-7-1936, p. 2, cit. en Alberto Reig Tapia, *Ideología e Historia: sobre la represión franquista y la guerra civil*, Madrid, 1984, p. 142. <<

[¹⁰] Mensaje radiado la noche del 23 de julio de 1936, cit. en A. Reig Tapia, *op. cit.*, p. 131. <<

[¹¹] *El Socialista* (Madrid), 9-8-1936, en A. Reig Tapia, *op. cit.*, pp. 133-134. <<

[12] Ramón Serrano Súñer, *Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue*, Barcelona, 1977, p. 244. <<

[13] J. Casanova, en S. Juliá, *op. cit.*, pp. 64–65. <<

[14] Entrevista con Raimundo Fernández-Cuesta, en la *Historia del franquismo*, 1.^a parte, cap. 2, «La represión de posguerra» (I), *Diario 16* (Suplemento dominical), p. 22. <<

[15] Stanley Payne, *Falange. Historia del fascismo español*, Madrid, 1985, p. 186. <<

[16] Iribarren, cit. por A. Reig Tapia, *op. cit.*, p. 14. <<

[17] Gabriel Jackson, *La República española y la guerra civil*, Barcelona, 1985, p. 144. <<

[18] J. M. Solé i Sabaté y J. Villarroya, en S. Juliá, *op. cit.*, p. 227. <<

[19] Whitaker, cit. A. Reig Tapia, *op. cit.*, p. 148. <<

[20] Francisco Moreno Gómez, «El terrible secreto del franquismo», *La Aventura de la Historia*, núm. 3,1999, p. 24. <<

[21] Benito Díaz Díaz, *La guerrilla antifranquista en Toledo (La 1.ª Agrupación Guerrillera)* (inédito). <<

[22] Francisco Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra (La represión y la guerrilla, 1939–1950)*, Córdoba, 1987, p. 446; Manuel Pérez Regordán, *El maquis en la provincia de Cádiz*, Sevilla, 1978, p. 284; Juan Fernández Olmo, *Episodios del «Maquis» en la Axarquía*, Málaga, 1999, pp. 426–427. <<

[23] *Informe del evadido Ramiro Losada, comunista, presidente de la Casa del Pueblo de Orense*, p. 2 (mecanografiado). Archivo del CC del PCE, sec. Movimiento Guerrillero, carp. 2. <<

[24] S. Serrano, *op. cit.*, pp. 139–140. <<

[25] Ferrándiz Alborz: «Justice, prisons et camps», cit. en Ángel Suárez / Colectivo 36, *Libro blanco sobre las cárceles franquistas*, París, p. 69. <<

[26] José María Azuaga Rico y José Aurelio Romero Navas, «La guerrilla malagueño–granadina de postguerra: estado actual de nuestra investigación», en *El movimiento guerrillero de los años cuarenta*, Madrid, 1990, p. 136; F. Espinosa Maestre, *op. cit.*, pp. 274–275; V. Luis Lamela García, «Foucellas», *el riguroso relato de una lucha antifranquista*, A Coruña, 4.^a edición, 1993, p. 50; José Ramón Gómez Fouz, *La brigadilla*, Gijón, 1992, p. 135. <<

[27] José Antonio Pérez Mateos, *La España del miedo*, Barcelona, 1978, p. 29. <<

[28] Jesús Torbado y Manuel Leguineche, *Los topos*, Madrid, 1999, vv. pp.; Julio Llamazares, «Eufemiano Díaz, el “topo” de La Mata. Diez años enterrado vivo» (artículo inédito); José Calabuig Castelló, «Cuarenta años de miedo. El último alcalde republicano de Cercedilla ha salido de su cárcel voluntaria iniciada en 1939», *Interviú*, núm. 64, 1977, pp. 62–63; Justo Vila, *La guerrilla antifranquista en Extremadura*, Badajoz, 1986, p. 65. <<

[29] Carlos Santullano, en AA.VV., *Represión, guerrilla y exilio (1937–1952)*, en *Historia General de Asturias*, Gijón, p. 82; Hartmut Heine, *A guerrilla antifranquista en Galicia*, Vigo, 1980, p. 36. <<

[30] Andrés Sorel, «A la busca y captura del maquis», *Historia Internacional*, núm. 9, 1975, p. 36. <<

[31] Francisco Aguado Sánchez, *El maquis en España*, Madrid, 1975, p. 25. <<

[32] Andrés Sorel, *Búsqueda, reconstrucción e historia de la guerrilla española del siglo xx a través de sus documentos, relatos y protagonistas*, París, 1970, p. 52. <<

[33] Diego Abad de Santillán, *Por qué perdimos la guerra*, Madrid, 1975, pp. 235,251–252, 349–350. <<

[34] A. Sorel, «A la busca...», cit., p. 36. <<

[35] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., p. 350. <<

[36] Manuel Tuñón de Lara, *Historia de España, IX, La crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra (1923–1939)*, Barcelona, 1992, pp. 405–406. <<

[37] J. M. Solé i Sabaté y J. Villarroya, en S. Juliá, *op. cit.*, p 220. <<

[38] F. Aguado Sánchez, *op. cit.*, p. 69; Eduardo Pons Prades, *Guerrillas españolas (1936–1960)*, Barcelona, 1977, p. 374. <<

[39] H. Heine, *op. cit.*, p. 58 <<

[40] Carlos G. Reigosa, *Fuxidos de sona*, Vigo, 1989, p. 93. <<

[41] H. Heine, *op. cit.*, pp. 65–66 y 131–135. <<

[42] F. Aguado Sánchez, *op. cit.*, p. 663. <<

[43] H. Heine, *op. cit.*, p. 132; S. Serrano, *op. cit.*, pp. 143–144. <<

[44] Juan Antonio Sacaluga, *La resistencia socialista en Asturias (1937–1962)*, Madrid, 1986, p. 32; C. Santullano, *op. cit.*, p. 73. <<

[45] C. Santullano, *op. cit.*, 79; Adolfo Fernández Pérez, *Comandante Mata. El socialismo asturiano a través de su biografía*, Madrid, 1990, p. 93. <<

[46] Ramón García Piñeiro, *Los mineros asturianos bajo el franquismo (1937–1962)*, Madrid, 1990, pp. 228–230. <<

[47] Ramón García Piñeiro, «Estrategias de oposición al franquismo en Asturias durante la primera época», en *El movimiento guerrillero...*, cit., p. 80. <<

[48] A. Fernández Pérez, *op. cit.*, pp. 86 y 90; C. Santullano, *op. cit.*, p. 71. <<

[49] *Asturias Semanal*, 6-10-1976, p. 8. cit. en A. Fernández Pérez, *op. cit.*, p. 97. <<

[50] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., p. 452. <<

[51] J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 69–70. <<

[52] Julián Chaves Palacios, *Huidos y maquis. La actividad guerrillera en la provincia de Cáceres, 1936–1950*, Cáceres, 1994, p. 41. <<

[53] *Ibídem*, pp. 43–44. <<

[54] *ibíd.*, pp. 56–57, 71–72. <<

[55] *Ibíd.*, pp. 58–59, 63–65. <<

[56] J. M. Sojé i Sabaté y J. Villarroya, en S. Juliá, *op. cit.*, pp. 190–193. <<

[57] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, p. 74. <<

[58] F. Espinosa Maestre, *op. cit.*, p. 275. <<

[59] *Ibídem*, p. 275–284. <<

[60] *Ibíd.*, pp. 287–289. <<

[61] *Ibíd.*, pp. 297~303. <<

[62] Francisco Moreno Gómez, *La guerra civil en Córdoba (1936–1939)*, Madrid, 1985, pp. 480–485. <<

[63] José María Azuaga Rico, *La guerrilla antifranquista en Nerja*, Málaga, 1996, pp. 35–38. <<

[64] S. Serrano, *op. cit.*, pp. 81–87. <<

[65] José Manuel Sabín, *Prisión y muerte en la España de postguerra*, Madrid, 1996, p. 237. <<

[66] F. Moreno Gómez, en S. Juliá, *op. cit.*, p. 363; J. M. Sabín, *op. cit.*, pp. 45–46. <<

[67] F. Moreno Gómez, en S. Juliá, *op. cit.*, p. 344. <<

[68] *Ibidem*, p. 306. <<

[69] Francisco Moreno Gómez, «El terrible secreto del franquismo», *La Aventura de la Historia*, núm. 3,1999, pp. 23–24. <<

[70] J. M. Sabín, *op. cit.*, pp. 113–114. <<

[71] J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, p. 68. <<

[72] J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 74–75; F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra*, cit., pp. 360–362, 384 y 395; J. M. Azuaga, *op. cit.*, p. 38; José Aurelio Romero Navas, *La guerrilla en 1945. Proceso a dos jefes guerrilleros: Ramón Vías y Alfredo Cabello Gómez–Acebo*, Málaga, 1999, pp. 120–121. <<

[73] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 97–100. <<

[74] J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 91–92. <<

[75] F. Moreno Gómez, en S. Juliá, *op. cit.*, p. 372. <<

[76] *Boletín Oficial de la Guardia Civil*, septiembre de 1941, cit. Fernando Romeu, *Más allá de la utopía: perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante*, Valencia, 1987, p. 62. <<

[77] Francisco Alia Miranda, *La guerra civil en retaguardia, Ciudad Real (1936–1939)*, Ciudad Real, 1994, p. 410. <<

[78] Mercedes Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada contra el régimen de Franco en Aragón (1940–1952)*. Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Zaragoza, 2000, p. 321. <<

[79] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., p. 385. <<

[80] J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 83–87. <<

[81] Ángel Ruiz Ayúcar, *El Partido Comunista. 37 años de clandestinidad*, Madrid, 1976, p. 156; Daniel Sueiro y Roberto Llamas, *Crónicas de los Montes de Toledo*, Madrid, 1982, pp. 148–149; J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 89–90; B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[82] J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, p. 90; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 135–136; B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[83] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 87–88, 99–100; J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 92–93; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 156–157; F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 407–408; B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[84] F. Alia Miranda, *op. cit.*, 406–407. <<

[85] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., p. 356; J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 93–94. <<

[86] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 358–359, 377, 400–405.

<<

[87] *Ibíd.*, pp. 358–358, 378–382, 384, 409–411 y 414. <<

[88] J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, pp. 53–58. <<

[89] Manuel Pérez Regordán, *El maquis en la provincia de Cádiz*, Sevilla, 1987, p. 28.

<<

[90] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 87–89; F. Espinosa Maestre, *op. cit.*, p. 276; Jesús Mendoza, «Gómez Cantos, el exterminador», *La Aventura de la Historia*, núm. 11, 1999, pp. 22–23. <<

[91] S. Serrano, *op. cit.*, pp. 183–223. <<

[92] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 55–56, 62–72. <<

[93] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 66 y 134–135; C. G. Reigosa, *op. cit.*, p. 63. <<

[94] H. Heine, *op. cit.*, pp. 167–169. <<

[95] H. Heine, *op. cit.*, pp. 68–69 y 168–169; C. G. Reigosa, *op. cit.*, pp. 98–99. <<

[96] A. Fernández Pérez, *op. cit.*, pp. 104–105. <<

[97] A. Fernández Pérez, *op. cit.*, pp. 101–102; R. García Piñeiro, *Estrategia de oposición...*, *op. cit.*, p. 85. <<

[98] C. Santullano, *op. cit.*, p. 87. <<

[99] *Ibíd.*, pp. 91–92. <<

[100] R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., pp. 244–245. <<

[101] R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., p. 252; C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, p. 162. <<

[102] Pedro Álvarez, *Juanín, el último emboscado de la postguerra*, Santander, 1988, p. 31. <<

[103] Hartmut Heine, *La oposición política al franquismo*, Barcelona, 1983, p. 256. <<

[104] H. Heine, *La oposición política...*, cit., p. 202; Joan Estruch Tobella, *El PCE en la clandestinidad, 1939–1956*, Madrid, pp. 77–78. <<

[105] H. Heine, *La oposición política...*, cit., p. 256. <<

[106] Valentina Fernández Vargas, *La resistencia interior en la España de Franco*, Madrid, 1981, pp. 93–94; A. Sorel, *Búsqueda...*, cit., p. 31. <<

[107] H. Heine, *La oposición política...*, cit., 61. <<

[108] H. Heine, *La oposición política...*, *op. cit.*, pp. 74–75; David Ginard i Féron, *Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España*, Mallorca, 2000, pp. 17,50–52, 89, 93. <<

[109] J. Estruch, *op. cit.*, p. 19; D. Ginard i Féron, *op. cit.*, pp. 131, 136, 151–152. <<

[¹¹⁰] *L'Action française*, 7-2-1939, cit. Marie-Claude Rafaneau-Boj, *Los campos de concentración de los refugiados españoles en Francia (1939-1945)*, Barcelona, 1995, p. 111. <<

[111] M. -C. Rafaneau-Boj, *op. cit.*, p. 200; Carlos J. Kaiser, *La guerrilla antifranquista*, Madrid, 1976, pp. 41-45. <<

[112] Andreu Claret Serra, «El reposo del guerrillero», *Cambio 16*, núm. 43, 1977, p. 25. <<

[113] M.-C. Rafaneau-Boj, *op. cit.*, p. 317; V. Fernández Vargas, *op. cit.*, p. 92. <<

[114] H. Heine, *La oposición política...*, cit., p. 207. <<

[115] Manuel Azcárate, *Derrotas y esperanzas*, Barcelona, 1994, pp. 287–288. <<

[116] Daniel Arasa, *Años 40: los maquis y el PCE*, Barcelona, 1984, p. 78. <<

[117] Juan Pablo Chueca Intxusta, «La guerrilla en Navarra», en *El movimiento guerrillero...*, cit., pp. 107–113. <<

[118] M. Yusta Rodrigo, *op. cit.*, p. 141. <<

[119] D. Arasa, *op. cit.*, p. 151; Eutimio Martín, «Enviados al matadero», *La Aventura de la Historia*, núm. 13, 1999, p. 28. <<

[120] D. Arasa, *op. cit.*, p. 134. <<

[121] D. Arasa, *op. cit.*, pp. 97, 171; M. Yusta Rodrigo, *op. cit.*, p. 155. <<

[122] D. Arasa, *op. cit.*, pp. 75,185. <<

[123] D. Arasa, *op. cit.*, pp. 212–213 y 235–238; Ferran Sánchez Agustí, *Maquis a Catalunya (De la invasió de la vall d’Aran a la mort del Caracremada)*, Lleida, 1999, p. 186. <<

[124] M. Azcárate, *op. cit.*, p. 288. <<

[125] D. Arasa, *op. cit.*, pp. 110–111. <<

[126] H. Heine, *La oposición política...*, cit., p. 207. <<

[127] E. Martín, *op. cit.*, p. 29; Miguel José Rodríguez Álvarez, «El PCE mandó liquidar a muchos de los nuestros», *Historia 16*, núm. 274, 1999, p. 77. <<

[128] Eduardo Pons Prades, «Los que se echaron al monte», *Historia 16*, núm. 62, 1981, p. 51. <<

[129] D. Arasa, *op. cit.*, pp. 130,200–201,205, 259–260. <<

[130] *Nuestra Bandera*, enero, 1945, cit., J. Estruch Tobella, *op. cit.*, p. 109. <<

[131] Manuel Martorell, *Jesús Monzón, el líder comunista olvidado por la Historia*, Pamplona, 2000, pp. 240 y 248; H. Heine, *La oposición política...*, cit., p. 226; J. Estruch Tobella, *op. cit.*, p. 111. <<

[132] M. –C. Rafaneau–Boj, *op. cit.*, pp. 343–349; D. Arasa, *op. cit.*, p. 74. <<

[133] M. Martorell, *op. cit.*, p. 165. <<

[134] V. Fernández Vargas *op. cit.*, p. 104; César Tcach y Carmen Reyes, *Clandestinidad y exilio. Reorganización del sindicato socialista, 1939–1953*, Madrid, 1986, p. 90. <<

[135] C. Tcach y C. Reyes, *op. cit.*, p. 90. <<

[136] D. Arasa, *op. cit.*, p. 308: J. Estruch Tobella, *op. cit.*, p. 127. <<

[137] A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 160. <<

[138] J. M. Sabín, *op. cit.*, p. 148. <<

[139] H.Heine, *La oposición al franquismo...*, cit., p. 178. <<

[140] H.Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 144–145, 202. <<

[141] *Ibidem*, pp. 126–129 y 149. <<

[142] *Ibíd.*, pp. 131–135 y 169–171. <<

[143] H. Heine, *A guerrilla*, cit., pp. 140, 141; Xavier Costa Clavell, *La dos caras del franquismo en Galicia*, Madrid, 1976, p. 358. <<

[¹⁴⁴] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 150–151, 158, 186–187; L. V. Lamela García, *op. cit.*, pp. 74, 81–82. <<

[¹⁴⁵] H.Heine, *A guerrilla* cit., 147–153; Manuel Millán Astray, *Síndrome del 36 (La IV Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia)*, A Coruña, 1976, pp. 177–181. <<

[¹⁴⁶] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 154–157, 187–188; Bernardo Máiz, *Galicia na II.ª República e baixo o franquismo*, Vigo, 1988, p. 184. <<

[147] R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., pp. 224–225; B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[148] A. Fernández Pérez, *op. cit.*, pp. 128–131; R. García Piñeiro, «Estrategias de oposición...», *cit.*, p. 82; C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, pp. 155–156; J. A. Sacaluga, *op. cit.*, p. 42. <<

[149] R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., pp. 254–257; C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, p. 168; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 233; P. Álvarez, *op. cit.*, p. 53.

<<

[150] R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., p. 269; C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, p. 169; J. R. Gómez Fouz, *op. cit.*, pp. 55–60. <<

[151] R. García Piñeiro, «Estrategias de oposición...», cit., p. 89; C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, p. 171. <<

[152] P. Álvarez, *op. cit.*, p. 53; Jesús Gutiérrez Flores, *Análisis de la represión republicana y de la represión franquista*, Santander, 2000, pp. 218–219. <<

[153] *Ibídem*, pp. 35–45; I. Cicero Gómez, *op. cit.*, pp. 165–175. <<

[154] J. P. Chueca Intxusta, *op. cit.*, p. 114. <<

[155] A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 163–164; B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[156] F. Alía Miranda, *op. cit.*, pp. 419–424. <<

[157] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, p. 145; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 182–188, 209–210; B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[158] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 150–151; D. Sueiro, *op. cit.*, p. 163. <<

[159] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 144–151; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 204–205; J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 94–96. <<

[160] F. Moreno Gómez, en S. Juliá, *op. cit.*, pp. 376–377; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 212–214; J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 152–153. <<

[¹⁶¹] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 113–115, 138–141, 154–155; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 212–216. <<

[162] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 107–110; J. Mendoza, *op. cit.*, pp. 26–31; J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 88–89; Miguel López Corral, «Los fusilamientos de Mesas de Ibor», *Historia 16*, núm. 251, pp. 16–17. <<

[163] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, pp. 433–434; J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, p. 180. <<

[164] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, pp. 440–441, 436–439, 441–442. <<

[165] J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 189–193; R Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 442–451; R Moreno Gómez, «La guerrilla en Córdoba...», en *El movimiento guerrillero*, cit., p. 147. <<

[166] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 463–469; F. Moreno Gómez, «La guerrilla en Córdoba...», cit., p. 147. <<

[167] J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, p. 64 y 80; J. A. Romero Navas, *La guerrilla en 1945...*, *op. cit.*, pp. 48 y 308. <<

[168] A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 242–243. <<

[169] J. A. Romero Navas, *op. cit.*, pp. 115–117, 246–247. <<

[170] A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 246–247. <<

[171] J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, p. 110; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 247: Eulogio Limia Pérez, *Reseña general del problema del bandolerismo después de la guerra de liberación*, Madrid, 1957, s. p. <<

[172] A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 251–253; J. Torbado y M. Leguineche, *op. cit.*, p. 254. <<

[173] A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 254–256. <<

[174] F. Romeu Alfaro, *op. cit.*, p. 95; M. Yusta Rodrigo, *op. cit.*, p. 176; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 255–257. <<

[175] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., pp. 191–193; F. Romeu Alfaro, *op. cit.*, pp. 95–98; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 255–257. <<

[176] F. Romeu Alfaro, *op. cit.*, p. 110; F. Romeu Alfaro, «La organización guerrillera de Levante», en *El movimiento guerrillero...*, cit., p. 119; Tomás Cossías, *La lucha contra el maquis en España*, Madrid, 1956, pp. 141–142. <<

[177] F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., pp. 107–108 y 149–159. <<

[178] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 74; F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., pp. 151 y 157; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 259; Andrés Sorel, *Búsqueda...*, cit., p. 203. <<

[179] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., pp. 177–179, 207–218; M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos. (El maquis en el Maestrazgo turolense, 1940–1950)*, Zaragoza, 1999, pp. 28, 34; Paloma Fernández Pancorbo, *El maquis al norte del Ebro*, Zaragoza, 1988, pp. 71–82. <<

[180] H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 444–445. <<

[181] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 65–66; J. Torbado y M. Leguineche, *op. cit.*, p. 28; J. Chaves Palacios, *op. cit.*, p. 131; F. Alia Miranda, *op. cit.*, pp. 406–407; J. R. Gómez Fouz, *op. cit.*, p. 155; B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[182] F. Moreno, *Córdoba en la posguerra...*, cit., p. 457; Xosé Neira Vilas, *Guerrilleiros*, A Coruña, 1991, p. 47. <<

[183] J. A. Romero Navas, *op. cit.*, p. 143; J. M. Azuaga, *op. cit.*, p. 111; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 251; B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[184] J. M. Azuaga, *op. cit.*, pp. 101–102; M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos...*, cit., p. 77. <<

[185] F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., p. 108; F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., p. 395. <<

[186] X. Neira Vilas, *op. cit.*, p. 47; J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, p. 209; M. Pérez Regordán, *op. cit.*, p. 98; M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 385; J. L. Izquierdo, «Las mujeres del maquis», cit. en B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[187] X. Neira Vilas, *op. cit.*, p. 52; J. M. Azuaga, *op. cit.*, p. 104. <<

[188] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 451–452; F. Espinosa Maestre, *op. cit.*, p. 279; M. Pérez Regordán, *op. cit.*, p. 175; Neira, *op. cit.*, p. 35; H. Heine, *A guerrilla...*, cit., p. 236; M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos...*, cit., p. 124; M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 333. <<

[189] Cit. M. –C. Raffaneau–Boj, *op. cit.*, p. 3. <<

[190] J. A. Romero Navas, *op. cit.*, p. 176; M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos...*, *cit.*, p. 111; F. Aguado Sánchez, *op. cit.*, p. 104; C. J. Kaiser, *op. cit.*, p. 34; A. Fernández Pérez, *op. cit.*, pp. 113–114; D. Ginard i Féron, *op. cit.*, p. 126. <<

[191] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 144–145, 188, 231, 239; M. Astray Rivas, *op. cit.*, pp. 149–150; J. Torbado y M. Leguineche, *op. cit.*, p. 526; F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, p. 433; F. Alia Miranda, *op. cit.*, p. 423. <<

[192] A. Fernández Pérez, *op. cit.*, p. 113; F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 409–411. <<

[193] M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos...*, cit., p. 31; F. Romeu Alfaro, *Silencio roto (Mujeres contra el franquismo)*, 1994, p. 139; F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., p. 124. <<

[194] F. Aguado Sánchez, *op. cit.*, p. 393; M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 401. <<

[195] H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 397–399. <<

[196] F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., p. 61; J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 141–142; B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[197] F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., p. 68; F. Alia Miranda, *op. cit.*, p. 418. <<

[198] F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., pp. 69–70; F. Moreno Gómez, en S. Juliá, *op. cit.*, p. 389; J. M. Azuaga Rico, *op. cit.* pp. 169–170. <<

[199] F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., p. 66; *El Socialista*, 12-12-1947, cit. en J. A. Sacaluga, *op. cit.*, p. 47; F. Aguado Sánchez, *op. cit.*, p. 251; J. R. Gómez Fouz, *op. cit.*, p. 170. <<

[200] C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, p. 175; F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., p. 61; F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., p. 458. <<

[201] F. Alia Miranda, *op. cit.*, p. 418; F. Moreno Gómez, en S. Juliá, *op. cit.*, p. 389; José Aurelio Romero Navas, *Recuperando la memoria*, Málaga, 1997, p. 22. <<

[202] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., p. 485; H. Heine, *A guerrilla...*, cit., p. 68; Antonio Téllez Solá, *Sabaté, guerrilla urbana en España (1945–1960)*, Barcelona, 1992, p. 327–328; A. Fernández Pérez, *op. cit.*, 117; J. R. Gómez Fouz, *op. cit.*, pp. 15, 77, 119, 209–210; J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, p. 80; J. A. Romero Navas, *La guerrilla en 1945...*, cit., p. 306. <<

[203] F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., pp. 66, 160; M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos...*, cit., pp. 143–153. <<

[204] J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, p. 127; F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 485–486; José María Reguant, *Marcelino Masana, ¿terrorismo o resistencia?*, Barcelona, 1979, pp. 140–141; A. Téllez Sola, *op. cit.*, p. 157. <<

[205] J. A. Romero Navas, *Recuperando la memoria...*, cit..., p. 23; F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 486–487, 510. <<

[206] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 507–508. <<

[207] M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos...*, cit., pp. 109–111; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 260; F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., p. 77; B. Díaz, *op. cit.*, s.p.

<<

[208] J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, pp. 147–150; M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos...*, *cit.*, pp. 79 y 131; P. Fernández Pancorbo, *op. cit.*, p. 66; F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, *cit.*, pp. 159,162. <<

[209] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., p. 186; J. R. Gómez Fouz, *op. cit.*, pp. 72, 118–119, 138–139, 204. <<

[210] S. Serrano, *op. cit.*, pp. 268–273. <<

[211] M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos...*, *op. cit.*, pp. 94–99. <<

[212] M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos...*, *op. cit.*, pp. 100–104; José Gros, *Relatos de un guerrillero comunista español. Abriendo camino*, Barcelona, 1977, p. 253. <<

[213] C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, pp. 186–189. <<

[²¹⁴] C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, pp. 191–192; José Ramón Gómez Fouz, *Bernabé (El mito de un bandolero)*, Barcelona, 1989, pp. 95, 99, 151–155, 153–154, 162. <<

[215] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 190–191, 217, 254. <<

[216] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 221–223; V. L. Lamelas García, *op. cit.*, p. 116.

<<

[217] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 191–196. <<

[218] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 235–236, 239–244; C.G. Reigosa, *op. cit.*, pp. 72–73. <<

[219] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 231–232,239–244. <<

[220] D. Fernández Pérez, *op. cit.*, p. 158; J. R. Gómez Fouz, *op. cit.*, pp. 77–79. <<

[221] R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., pp. 273–276; J. A. Sacaluga, *op. cit.*, p. 49; J. R. Gómez Fouz, *op. cit.*, pp. 103–113; C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, pp. 195–201; Nicanor Rozada, *¿Por qué sangró la montaña? (Las guerrillas en los montes de Asturias)*, 1989, pp. 151–188. <<

[222] R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., pp. 224–226; J. R. Gómez Fouz, *op. cit.*, p. 123; J. A. Sacaluga, *op. cit.*, p. 48. <<

[223] R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., pp. 277–278; J. R. Gómez Fouz, *op. cit.*, pp. 177, 182–184. <<

[224] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 159–161; J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 167–169; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 208. <<

[225] R Alia Miranda, *op. cit.*, pp. 422–424; J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 168, 169 y 201–203. <<

[226] F. Alia Miranda, *op. cit.*, p. 421; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 215. <<

[227] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, p. 152; F. Alia Miranda, *op. cit.*, pp. 421–423. <<

[228] F. Alia Miranda, *op. cit.*, pp. 420 y 426–427. <<

[229] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 469–471, 484, 512. <<

[230] *Ibídem*, pp. 506–510. <<

[231] J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, pp. 108, 151,169. <<

[232] *Ibídem*, pp. 169–170. <<

[233] M. Pérez Regordán, *op. cit.*, pp. 158, 171. <<

[234] *Ibíd.*, pp. 39, 38,157–160. <<

[235] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 234. <<

[236] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., pp. 230–233; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 265–267. <<

[237] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., pp. 280–285; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 266; *Mundo Obrero*, 3–2–1929. <<

[238] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 258; F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., pp. 162–163; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 265. <<

[239] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 271; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 264; Ernest Nabas, «La noche del Cap i Corp», *Repórter* (Madrid), núm. 29 (1977), pp. 34–36. <<

[240] Ferran Sánchez Agustí, *op. cit.*, p. 240; M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 228; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 267. <<

[241] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., pp. 228, 236–248; P. Fernández Pancorbo, *op. cit.*, pp. 78–82. <<

[242] M. Gallo y R. Debray, *op. cit.*, p. 102; M. Azcárate, *op. cit.*, p. 321. <<

[243] H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 468–469. <<

[244] Santiago Álvarez (y otros), «Balance y valoración de la lucha guerrillera», en *El movimiento guerrillero...*, cit., p. 159; M. Gallo y R. Debray, *op. cit.*, p. 105. <<

[245] S. Serrano, *op. cit.*, pp. 295–305. <<

[246] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 280; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 242–246. <<

[247] J. Chaves Palacios, *op. cit.*, pp. 126–128, 145, 148–150; J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, p. 151. <<

[248] A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 249. <<

[249] J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, pp. 99, 190–191; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 250. <<

[250] M. Pérez Regordán, *op. cit.*, pp. 236–239. <<

[251] F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., pp. 104–105. <<

[252] J. M. Azuaga Rico y J. A. Romero Navas, *op. cit.*, p. 136; T. Cossías, *op. cit.*, pp. 125, 210–211; J. Rodríguez Álvarez, *op. cit.*, pp. 78–81; C. G. Reigosa, *op. cit.*, pp. 48–49; M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 203. <<

[253] M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., p. 205; E Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., p. 206. <<

[254] M. Yusta Rodrigo, *La guerra de los vencidos*, cit., p. 150. <<

[255] X. Neira Vilas, *op. cit.*, pp. 131–132, 135, 139–140, 153–157. <<

[256] H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 462–463. <<

[257] J. A. Romero Navas, *La guerrilla en 1945...*, cit., p. 308. <<

[258] R. García Piñeiro, «Estrategias de oposición...», cit., p. 93; R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., pp. 279–280. <<

[259] C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, p. 215; J. R. Gómez Fouz, *La brigadilla...*, *cit.*, p. 147; Nicanor Rozada, *Relatos de una lucha (La guerrilla y la represión en Asturias)*, Oviedo, 1993, p. 147. <<

[260] R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., p, 281. <<

[261] C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, p. 217; N. Rozada, *Relatos de una lucha...*, cit., p. 218; R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., pp. 282–283; J. R. Gómez Fouz, *La brigadilla...*, cit., pp. 200–202; F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., p. 77. <<

[262] R. García Piñeiro, *Los mineros asturianos...*, cit., p. 282; C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, p. 217; J. R. Gómez Fouz, *La brigadilla...*, cit., pp. 222–223. <<

[263] C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, p. 217; N. Rozada, *¿Por qué sangró...?*, *cit.*, p. 469; J. R. Gómez Fouz, *La brigadilla...*, *cit.*, pp. 229–231. <<

[264] I. Cicero Gómez, *op. cit.*, pp. 260–262; P. Álvarez, *op. cit.*, 57–60; J. Gutiérrez Flores, *op. cit.*, pp. 220, 339. <<

[265] F. Romeu, «La organización guerrillera...», cit., p. 123; J. Gros, *op. cit.*, p. 243.

<<

[266] F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., pp. 165, 202. <<

[267] F. Romeu Alfaro, *Más allá...*, cit., pp. 169–170; M. Yusta Rodrigo, *La Resistencia armada...*, cit., pp. 293–294. <<

[268] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., p. 241. <<

[269] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 241–249; L. Lamela García, *op. cit.*, pp. 150–151. <<

[270] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 249–251; V. L. Lamela García, *op. cit.*, pp. 130–135; Sa Terceiro (pseudónimo), «El maquis. Recuerdos de un guardia civil infiltrado», *Interviú*, núm. 511, s.p. <<

[271] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 511, 518–519; F. Moreno Gómez, en S. Juliá, *op. cit.*, p. 388; F. Alia Miranda, *op. cit.*, pp. 426–428.

<<

[272] A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 247–249; J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, pp. 126–128.

<<

[273] J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, pp. 175–176; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 249–250.

<<

[274] J. M. Azuaga Rico, *op. cit.*, pp. 179–190. <<

[275] *Ibíd.*, pp. 193–195. <<

[276] M. Pérez Regordán, *op. cit.*, pp. 65,100,159, 173–174, 218–220, 223. <<

[277] *Ibídem*, pp. 243–250. <<

[278] F. Romeu Alfaro, *Más allá de la utopía...*, cit., pp. 170–172. <<

[279] F. Alia Miranda, *op. cit.*, p. 420; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 209; F. Moreno Gómez, en S. Juliá (coordinador), *op. cit.*, pp. 385–380; B. Díaz, *op. cit.*, s.p. <<

[280] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., pp. 154–157. <<

[281] A. Fernández Pérez, *op. cit.*, p. 177. <<

[282] *Ibíd.*, pp. 143–145,154. La entrevista, en *La Nueva España* (Oviedo), 6–5–1979. <<

[283] P. Fernández Pancorbo, *op. cit.*, p. 110; I. Cicero Gómez, *op. cit.*, p. 227; C. Santullano y J. M. Pérez, *op. cit.*, p. 189. <<

[284] F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 518–519; J. Vila Izquierdo, *op. cit.*, pp. 211, 215–216. <<

[285] H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 406–408; A. Téllez Solá, *op. cit.*, p. 201; Félix Plaza, «1951, huelga general en casi toda España», *Historia Internacional*, núm. 13, 1976, pp. 66–69. <<

[²⁸⁶] Andrés Trapiello: «Dossier 48, caso abierto», *El País Semanal*, 28-11-1999, pp. 136-147; H. Heine, *La oposición política...*, cit., p. 458; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 136. <<

[287] A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 140–141. <<

[288] A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, p. 293; H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 459–460; D. Arasa, *op. cit.*, p. 293; Gregorio Morán, *Grandeza y miseria del Partido Comunista de España*, Barcelona, 1986, p. 107. <<

[289] A. Sorel, *Búsqueda...*, cit., pp. 128–129; G. Morán, *op. cit.*, p. 103. <<

[290] H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 462–464; G. Morán, *op. cit.*, pp. 119–120. <<

[291] H. Heine, *La oposición política...*, cit., p. 464; A. Ruiz Ayúcar, *op. cit.*, pp. 218–220; F. Moreno Gómez, en S. Juliá, *op. cit.*, pp. 402–403. <<

[292] H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 464–465; F. Moreno Gómez, en S. Juliá, *op. cit.*, p. 402. <<

[293] H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 440–441. <<

[294] F. Sánchez Agustí, *op. cit.*, p. 244; H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 440–444; Miguel Núñez, prólogo en José Antonio Vidal Sales, *Después del 39: la guerrilla antifranquista*, Barcelona, 1976, p. 11. <<

[295] H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 442–443; A. Téllez Solá, *op. cit.*, pp. 87–88; F. Sánchez Agustí, *op. cit.*, pp. 249–253. <<

[296] H. Heine, *La oposición política...*, cit., pp. 445, 448–454. <<

[297] E. Pons Prades, *Guerrillas españolas...*, cit., pp. 95–99; F. Aguado Sánchez, *op. cit.*, pp. 567–570; A. Sorel, *Búsqueda...*, cit., pp. 124–125; J. Rodríguez Álvarez, *op. cit.*, pp. 78–81. <<

[298] J. M. Reguant, *op. cit.*, p. 33. <<

[299] J. M. Reguant, *op. cit.*, vv .pp; Joan Liare, «Massana, el último maquis», *Interviú*, núm. 43,1976, pp. 65–66. <<

[300] J. M. Reguant, *op. cit.*, pp. 187–188; A. Téllez Solá, *op. cit.*, pp. 58,102. <<

[301] A. Téllez Solá, *op. cit.*, p. 63. <<

[302] *Ibídem*, pp. 73–74, 83, 87–89, 95–96, 116, 124. <<

[303] *Ibíd.*, pp. 109, 113–114, 125, 137–139, 147. <<

[³⁰⁴] *Ibíd.*, pp. 128–131, 138–139, 135–136, 150, 161–167, 220. <<

[305] J. M. Reguant, *op. cit.*, p. 35; A. Téllez Solá, *op. cit.*, p. 112. <<

[306] A. Téllez Solá, *op. cit.*, pp. 181–185. <<

[307] *Ibíd.*, pp. 188–189, 204–207, 210–213. <<

[308] *Ibíd.*, pp. 225–227, 251. <<

[309] *Ibíd.*, pp. 223, 301–307. <<

[310] *Ibíd.*, pp. 264, 268–269, 279–284. <<

[311] J. M. Reguant, *op. cit.*, pp. 35, 314–317. <<

[312] J. M. Reguant, *op. cit.*, p. 213; A. Téllez Solá, *op. cit.*, p. 345. <<

[313] I. Cicero Gómez, *op. cit.*, p. 256; P. Álvarez, *op. cit.*, pp. 90–93. <<

[314] I. Cicero Gómez, *op. cit.*, pp. 284–285; P. Álvarez, *op. cit.*, pp. 130–141; F. Moreno Gómez, *Córdoba en la posguerra...*, cit., pp. 409–411; B. Díaz, *op. cit.*, s.p.

<<

[315] I. Cicero Gómez, *op. cit.*, pp. 52, 266; J. Rodríguez Álvarez, *op. cit.*, p. 81. <<

[316] I. Cicero Gómez, *op. cit.*, pp. 284–294. <<

[³¹⁷] H. Heine, *A guerrilla...*, cit., p. 251; C. G. Reigosa, *op. cit.*, pp. 73, 89; Ernesto S. Pombo, «El último guerrillero de la contienda civil», *El País*, 10-3-1986, p. 26.

<<